

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Procesal



TESIS DOCTORAL

**La ejecución provisional de resoluciones judiciales en el
proceso civil español**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Günther Andrés Besser Valenzuela

Director

Ignacio José Cubillo López

Madrid, 2018

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Procesal



TESIS DOCTORAL

**La ejecución provisional de resoluciones judiciales en el proceso civil
español**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA
POR**

Günther Andrés Besser Valenzuela

DIRECTOR
Ignacio José Cubillo López

MADRID, 2017

A la memoria de Norma Disselkoen Schwalm

AGRADECIMIENTOS

La presente tesis, a cuya realización dediqué algunos años de esfuerzo e ilusión, no habría sido posible sin el apoyo de personas e instituciones tanto en España como en Chile, a quienes expreso mi sincero agradecimiento.

A mi Director, Prof. Dr. D. Ignacio José Cubillo López, por su paciente consejo y orientación, por sus palabras de ánimo y por su corrección rigurosa y detallada, sin las cuales este trabajo no sería lo que es.

A la Universidad de Concepción y, especialmente, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha casa de estudios, donde tengo el orgullo de trabajar como docente del Departamento de Derecho Procesal, que me becó para realizar los estudios de Máster Oficial de Derecho Público y para iniciar los estudios de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

A mi familia, por su permanente compañía y por entender con cariño mi ausencia a numerosos encuentros a fin de atender las exigencias de este estudio.

Y muy especialmente, a Gabriela, por su amor.

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
RESUMEN	10
ABSTRACT	14
PRINCIPALES ABREVIATURAS	18
INTRODUCCIÓN	19

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. NOTAS FUNDAMENTALES SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN	22
II. APROXIMACIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	28
1. DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	29
2. CONCEPTO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL	32
3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN	34
III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL	38
IV. EL MODELO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL IMPLEMENTADO POR LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL	43
I. DESCRIPCIÓN DE LA REGULACIÓN LEGAL	43
II. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	45
a) Admisibilidad general de la ejecución provisional	47
b) Regulación completa y unitaria de la institución	47
c) Ejecución provisional ope legis	49
d) Inexigibilidad de caución	51
e) Régimen especial de oposición	54
f) Regulación de los efectos de la confirmación o revocación de la resolución provisionalmente ejecutada	55
V. FUNDAMENTO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	56
1. CONSTITUCIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	56
2. LA OPCIÓN DE POLÍTICA LEGISLATIVA POR LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	60
VI. FINALIDAD DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	63
1. LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JUDICIAL DESDE LA PRIMERA INSTANCIA COMO FUNCIÓN PRINCIPAL DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	65
2. LAS FUNCIONES SECUNDARIAS DE LA INSTITUCIÓN	67
a) La reducción de los recursos con ánimo puramente dilatorio	68

b) El cambio de mentalidad en los pleitos y en los juicios	71
VII. VALORACIÓN CRÍTICA DEL MODELO ESPAÑOL DE EJECUCIÓN PROVISIONAL	73
VIII. LA INFLUENCIA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE EJECUCIÓN PROVISIONAL EN LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL CHILENA	78

CAPÍTULO II

EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. INTRODUCCIÓN	81
II. RESOLUCIONES PROVISIONALMENTE EJECUTABLES	83
1. RESOLUCIONES PROVISIONALMENTE EJECUTABLES EN ATENCIÓN A SU CLASE	83
2. RESOLUCIONES PROVISIONALMENTE EJECUTABLES EN ATENCIÓN A SUS CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO	93
a) Sentencias de condena o sentencias que contengan pronunciamientos condenatorios	94
b) Liquidez de la condena dineraria	99
c) Sentencia recurrida	101
3. RECAPITULACIÓN	104
III. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE TUTELAN DERECHOS FUNDAMENTALES	104
1. ALCANCE DEL CARÁCTER PREFERENTE DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES	107
2. LA EXCLUSIÓN DE LOS PRONUNCIAMIENTOS INDEMNIZATORIOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN	108

CAPÍTULO III

RESOLUCIONES EXCLUIDAS DEL ÁMBITO OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. SENTENCIAS NO EJECUTABLES PROVISIONALMENTE	114
1. SENTENCIAS MERO DECLARATIVAS Y SENTENCIAS CONSTITUTIVAS	115
a) Sentencias que contienen pronunciamientos meramente declarativos o constitutivos y pronunciamientos de condena	119
b) Exclusión de la ejecución provisional impropia. Anotación preventiva de sentencias en registros públicos	125
2. SENTENCIAS DICTADAS EN PROCESOS CIVILES NO DISPOSITIVOS Y EN JUICIOS SOBRE DERECHOS HONORÍFICOS; CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS PROCESOS MATRIMONIALES	132
3. SENTENCIAS QUE CONDENAN A EMITIR UNA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD	146
4. SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD O CADUCIDAD DE TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	155
5. SENTENCIAS EXTRANJERAS NO FIRMES	160
II. ALGUNOS SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS	168
1. LA CONTROVERTIDA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA EN COSTAS	169
2. LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES ¿PROVISIONAL O DEFINITIVA?	173
3. LA DISCUTIDA EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LAS SENTENCIAS DE DESAHUCIO	181
4. LOS DECRETOS DEL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO TÍTULOS EJECUTIVOS Y SU POSIBLE EJECUCIÓN PROVISIONAL, EN ESPECIAL EN LOS PROCESOS DE DESAHUCIO	186

CAPÍTULO IV LOS SUJETOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE	191
II. LAS PARTES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL	197
1. LEGITIMACIÓN	198
2. POSTULACIÓN PROCESAL	215
III. LOS TERCEROS EN LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	217

CAPÍTULO V SOLICITUD Y DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. INICIO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL	219
1. FORMA Y CONTENIDO DEL ACTO DE PETICIÓN	221
2. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	228
a) Momento inicial o dies a quo	229
b) Momento final o dies ad quem	245
3. INEXIGIBILIDAD DE CAUCIÓN. REMISIÓN	248
4. FORMACIÓN DE AUTOS O EXPEDIENTE PROPIO	251
II. EL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	251
1. EXAMEN DE LOS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PROCESALES	253
2. DECISIÓN SOBRE EL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	255
3. RESOLUCIÓN QUE DESPACHA LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	263

CAPÍTULO VI OPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	268
1. SOBRE LAS CAUSAS DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	270
a) Clases de oposición a la ejecución provisional	270
b) Viabilidad de fundar la oposición a la ejecución provisional en las causas previstas para la ejecución ordinaria	272
2. ESTUDIO PARTICULAR DE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN	283
a) Oposición por motivos procesales	283
b) Oposición por motivos de fondo	285
c) Oposición a la ejecución provisional de sentencias de condena no dinerarias	288
d) Oposición a actuaciones ejecutivas concretas en la ejecución provisional de sentencias de condena dinerarias	295
3. TRAMITACIÓN DE LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL O A ACTUACIONES EJECUTIVAS CONCRETAS	308
a) Oportunidad para formular oposición	309
b) Forma de la oposición	311
c) Efecto no suspensivo de la oposición	312
d) Traslado al ejecutante. Posibilidad de ofrecer caución en caso de condenas no dinerarias	313
e) Posibilidad de subsanar defectos procesales	315
4. DECISIÓN SOBRE LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	316
II. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	321
1. SUSPENSIÓN POR CAUSAS GENERALES	322
2. SUSPENSIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA DINERARIA	325

CAPÍTULO VII
LOS EFECTOS DE LA CONFIRMACIÓN O REVOCACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA

I.	CONSIDERACIONES PREVIAS	332
II.	CONFIRMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA	334
III.	REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA	339
1.	LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL	344
2.	LA REPARACIÓN DEL EJECUTADO PROVISIONAL	346
a)	Revocación de sentencias de condena dineraria	347
b)	Revocación de sentencias de condena no dineraria	354
3.	EL PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN	360

CAPÍTULO VIII
LAS COSTAS EN LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I.	LAS COSTAS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	366
II.	LAS COSTAS DEL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL	376
III.	LAS COSTAS EN CASO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS DINERARIAS	380

CONCLUSIONES	388
---------------------	------------

JURISPRUDENCIA	406
-----------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	415
---------------------	------------

RESUMEN

La Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 7 de enero de 2000 (LEC), admitió de forma general la ejecución provisional de resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos de condena a favor de una de las partes, y sin necesidad de prestar caución para instar su despacho, excluyendo de forma excepcional y expresamente del ámbito objetivo de esta institución determinadas resoluciones.

Esta opción de política legislativa significó un impulso de la ejecución provisional y una decidida confianza por la administración de justicia de primera instancia sin precedentes en el ordenamiento procesal civil español, y ha sido considerada como una de las principales novedades introducidas por la LEC. Para ello, el legislador partió de la base de que la ejecución de las resoluciones judiciales no depende de su firmeza, y no se opone a la Constitución la regulación legal de un régimen de ejecución provisional.

Así, se implementa un sistema de ejecución provisional –entendida como una modalidad de la ejecución ordinaria o definitiva que confiere efectividad a las resoluciones judiciales no firmes que contienen pronunciamientos de condena y que han sido impugnadas, cuyos efectos se encuentran supeditados al resultado del recurso interpuesto frente a ella– que se caracteriza por realizar una regulación completa y unitaria de la institución, esto es, fijando una misma normativa aplicable tanto a la ejecución provisional de resoluciones de primera como de resoluciones de segunda instancia, que se encarga de establecer no sólo los requisitos y presupuestos para que opere este instituto, sino regulando un específico régimen de oposición como único mecanismo de defensa del ejecutado provisional frente a la ejecución previamente

despachada y regulando los efectos de la confirmación y, especialmente, de la revocación del pronunciamiento provisionalmente ejecutado.

En el modelo implementado por la LEC, pueden ser objeto de ejecución provisional las resoluciones judiciales que, adoptando la forma de sentencia o de auto, contengan un pronunciamiento condenatorio y hayan sido efectivamente recurridas. En consecuencia, no basta con que la resolución no sea firme, pues se precisa de la interposición de un recurso frente a ella para poder instar el despacho de la ejecución provisional. Por otra parte, no se limita esta institución a las sentencias de condena, pues su ámbito objetivo son los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias –o autos– de condena o en sentencias meramente declarativas o constitutivas. Por lo anterior, por su propia naturaleza, se excluyen del ámbito objetivo de la ejecución provisional estas últimas resoluciones –mero declarativas y constitutivas–, salvo que contengan pronunciamientos condenatorios y las sentencias absolutorias o desestimatorias. Del mismo modo, la LEC impide expresamente la ejecución provisional de determinados pronunciamientos, ora porque su naturaleza es incompatible con el carácter provisional de esta institución, ora porque la restauración del ejecutado sería particularmente difícil en caso de revocación de la sentencia; a su vez, existen ciertas hipótesis en que la admisibilidad o inadmisibilidad de la ejecución provisional resulta dudosa, como sucede con las sentencias dictadas en los procesos de desahucio. Ciertamente, por tratarse de situaciones de excepción, la interpretación de estas reglas debe hacerse restrictivamente, con el objeto de no chocar con la admisibilidad general de la ejecución provisional perseguida por el legislador.

Las resoluciones susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente constituyen verdaderos títulos ejecutivos, cuya eficacia concede la ley y no el Tribunal, cuya función –en la etapa inicial del proceso de ejecución provisional– se limita a verificar la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales para despachar tal ejecución, control de admisibilidad que realizará *inaudita parte debitoris*. Así las cosas, el órgano jurisdiccional competente no puede denegar el despacho por apreciar –de oficio o a instancia del ejecutado en este estadio procesal– un motivo de oposición a la ejecución provisional.

La ejecución provisional se alza dentro de la LEC como un mecanismo de tutela judicial del crédito, sobre todo en tanto no se exige la prestación de caución para solicitar el despacho de la misma, lo que supone favorecer la posición del acreedor-ejecutante. No obstante, la ley procesal no se olvida del deudor-ejecutado, a quien le confiere la posibilidad de oponerse a la ejecución provisional a través de un incidente especialmente regulado y que puede fundarse tanto en los motivos de oposición específicamente previstos para esta institución como en las causas de oposición reguladas en sede de ejecución ordinaria y que resulten compatibles con la ejecución provisional. El ejecutado provisional, por tanto, dispone de diversas líneas defensivas frente al despacho de la ejecución provisional, a saber: oposición basada en defectos procesales; oposición basada en motivos de fondo; oposición al conjunto de la ejecución tratándose de la ejecución provisional de condenas no dinerarias; y oposición a actuaciones ejecutivas concretas en el caso de la ejecución provisional de condenas pecuniarias.

Y no sólo eso. La LEC también se ocupa de regular los efectos de la confirmación y revocación de la resolución provisionalmente ejecutada. Así, en los supuestos de confirmación, se evidencia la justificación de esta institución, por lo que se consolidan las actividades ejecutivas que se hubieran realizado y, para el caso de quedar alguna medida pendiente, continúa la ejecución con arreglo a las normas de la ejecución ordinaria. En cambio, las hipótesis de revocación constituyen el mayor riesgo del sistema, particularmente en los casos en que el ejecutante provisional deviene insolvente. El legislador, consciente de este peligro —que se asume—, se encarga de regular la forma en que se restituirá o se compensará económicamente al ejecutado provisional, siendo el criterio inspirador de toda esta normativa el favorecer la *restitutio in integrum* del ejecutado. Para concretar el alcance de este efecto, la LEC distingue entre la revocación de condenas dinerarias y la revocación de condenas no dinerarias, aunque en este último caso no se ocupa de todas las posibles condenas que se pueden imponer al ejecutado. Con el objeto de facilitar la restitución al ejecutado provisional de las partidas a que tiene derecho como consecuencia de la revocación, la LEC dispone que se podrá reclamar la *reversión* dentro del propio proceso de ejecución, sin necesidad de iniciar un proceso declarativo para ello.

En la práctica, ha dado lugar a posiciones doctrinales y jurisprudenciales encontradas la posibilidad de condenar en costas a las partes del proceso de ejecución provisional. Si bien la LEC no regula expresamente esta materia, la remisión en bloque que se hace a las reglas de la ejecución ordinaria o definitiva permite aplicar las normas allí contenidas. Ello conlleva que las costas del proceso de ejecución provisional son de cargo del ejecutado provisional sin necesidad de imposición expresa por el tribunal. Tratándose de las costas del incidente de oposición a la ejecución provisional, sí se necesita de imposición expresa del tribunal, decisión que se acordará de acuerdo con el criterio del vencimiento objetivo. Más controvertida resulta la condena en costas en los supuestos de suspensión de la ejecución provisional de condenas dinerarias en los que el ejecutado provisional pone a disposición del tribunal las cantidades adeudadas. En estos casos, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias entienden que si el abono se produce antes del despacho de la ejecución provisional o dentro del plazo de 20 días contado desde la resolución que acuerda la ejecución provisional, no se debe condenar en costas al ejecutado provisional, criterio que no compartimos, pues parte de la base de que las resoluciones judiciales no firmes sólo son eficaces desde que se despacha su ejecución provisional, lo que nos parece un enfoque desacertado: las resoluciones son eficaces desde que se dictan.

Con independencia de algunos defectos o dudas puntuales que genera la regulación de la ejecución provisional dispuesta por la LEC, creemos que el modelo español constituye una sistematización razonable y adecuada para hacer frente a los riesgos de vinculados con el transcurso del tiempo que requiere todo proceso para una respuesta jurisdiccional de calidad, y representa una respuesta equilibrada a los diversos intereses en juego en el debate entre privilegiar el derecho a la ejecución o el derecho al recurso.

ABSTRACT

Spanish Law of Civil Procedure, of January 7, 2000 (LEC), admitted in general provisional enforcement of judgments containing declarations of condemnations in favor of one of the parties, and without need to provide bail or any other security, excluding exceptional and expressly from the scope of this institution aim certain judgments.

This choice of legislative policy meant a provisional enforcement and a determined confidence boost for the administration of Justice of first instance unprecedented in the Spanish civil procedural law, and has been considered as one of the main innovations introduced by the LEC. Therefore the legislator left base that the enforcement of judgments does not depend on its firmness, and the legal regulation of a regime of provisional enforcement is not contrary to the Constitution.

Thus, a system of provisional enforcement –understood as a form of enforcement giving effectiveness to no firm judgments containing statements of condemnation and which have been challenged, is implemented the effects are subject to the outcome of the appeal lodged against it– which is characterized by making a complete and unified regulation of the institution that is, setting a same legislation both provisional enforcement of first instance judgments and second instance judgments, which is in charge of establishing not only the requirements for operating this institute, but regulating a specific regime of opposition as the only mechanism for the defence of the provisional enforcement against the enforcement previously released and by regulating the effects of confirmation and especially the revocation of the provisionally executed statement.

In the model implemented by the LEC, may be provisional enforcement judgments which, containing a damning pronouncement, and have effectively been appealed. Therefore is not enough with that judgments is not firm, as required of the filing of an appeal in front of it to encourage the entry of the provisional enforcement. On the other hand, this institution is not limited to statements of condemnation, as its objective scope are the pronouncements of conviction contained in statements of condemnation, statements merely declarative or constituent. Therefore, by their very nature, these latest judgments –declarative and constitutive grouper–, are excluded from the objective scope of the provisional enforcement unless they contain pronouncements of conviction; there are also excluded acquittals judgments. Similarly, the LEC expressly prevents the provisional enforcement of certain judgments, because its nature is incompatible with the provisional character of this institution, or because the restoration of the debtor would be particularly difficult in the case of revocation of the judgments; at the same time, there are certain assumptions that the admissibility or inadmissibility of provisional enforcement is questionable, as with judgments handed down in the eviction process. Certainly, the interpretation of these rules must be narrowly, in order to not collide with the general admissibility of the provisional enforcement pursued by the legislator.

A provisionally enforceable judgments constitute real enforcement order, whose effectiveness granted by law and not the court, whose role –in the initial stage of the procedure for the provisional enforcement– was limited to verifying the existence of the requirements to dispatch such execution, control of admissibility that will be *inaudita parte debitoris*. So the things, the competent court may not refuse the dispatch by appreciated –ex officio or at the request of the executed at this stage procedural– a reason for opposition to the provisional enforcement.

The provisional enforcement rises within the LEC as a mechanism of judicial protection of credit, particularly in both does not require the provision of security to request the release of the same, which means promoting the position of the creditor-performer. However, the procedural law does not forget the debtor-executed, who gives the possibility to oppose the provisional enforcement through an incident especially regulated and which can be based as much on the grounds for opposition specifically provided for this institution as well as the causes of opposition regulated in ordinary

enforcement and ensure that they are compatible with the provisional enforcement. The executed provisional, therefore, has various defensive lines in front of the dispatch of the provisional enforcement.

And not only that. The LEC is also responsible for regulating the effects of confirmation and revocation of provisionally executed judgments. Thus, in the case of confirmation, this institution shows its justification, by consolidating the activities executives that have been made and for the case to be some measure pending, continues execution in accordance with the rules for enforcement ordinary. In contrast, the hypothesis of revocation constitute the greatest risk of the system, particularly in cases in which the performer provisional becomes insolvent. The legislator, aware of this danger –which assumes–, is responsible for regulating the way in which shall be returned or will be compensated financially to the executed provisional, being the criterion inspiring all of this legislation favoring the *restitutio in integrum* of the executed. To realize the scale of this effect, the LEC distinguishes between the revocation of convictions in kind and the revocation of convictions of non-cash, although in the latter case is not concerned with all of the possible judgments that can be imposed when executed. With the object of facilitating the restitution to the executed provisional items to which he is entitled as a result of the revocation, the LEC provides that it will be possible to claim the reversal within the process itself of enforcement, without the need to initiate a process declarative to do so.

In practice, it has given rise to positions of doctrine and jurisprudence found the possibility of costs are to be borne by the parties to the process of provisional enforcement. While the LEC did not specifically regulate this matter, the remission in block that is made to the rules of the regular or definitive enforcement allows to apply the standards contained therein. This means that the costs of the process of provisional enforcement are in charge of the executed without need of imposition expressed by the court. In the case of the costs of the incident of opposition to the provisional enforcement, it is required of the imposition expressed by the Court, decision to be agreed in accordance with the criterion of maturity objective. More controversial is the award of costs in the case of suspension of the provisional execution of judgments in kind in which the executed provisional puts at the disposal of the court the amounts owed. In these cases, the doctrine and jurisprudence majority understand that if the

payment occurs before the dispatch of the provisional enforcement or within a period of 20 days counted from the judgments that agrees to the provisional enforcement, should not be condemned in costs to executed provisional, criterion that we do not share, as part of the basis of that judgments not firm are effective only from that is dispatched its provisional enforcement, which seems to us to be an approach inappropriate: judgments are effective since dictate.

With independence of some defects or punctual doubts that there generates the regulation of the provisional enforcement arranged by the LEC, we believe that the Spanish model constitutes a systematization reasonable and adapted to face to the risks of linked with the passing of time that needs any process for a jurisdictional quality answer, and represents an answer balanced to the diverse interests in game in the debate between privileging the right to the enforcement or the right to appeal.

PRINCIPALES ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AC	Base de datos Aranzadi: www.westlaw.es
AJPI	Auto de Juzgado de Primera Instancia
apdo.	apartado
art.	artículo
arts.	artículos
ATC	Auto del Tribunal Constitucional
ATS	Auto del Tribunal Supremo
cap.	capítulo
CC	Código Civil
CE	Constitución Española de 1978
DGRN	Dirección General de los Registros y del Notariado
EM	Exposición de Motivos
f.j.	fundamento jurídico
JUR	Base de datos Aranzadi: www.westlaw.es
LA	Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
LA/1988	Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje
LC	Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
LCJIC	Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil
LEC	Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
LEC/1855	Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
LEC/1881	Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LP	Ley 25/2015, de 24 de julio, de Patentes
RJ	Base de datos Aranzadi: www.westlaw.es
ROJ	Repertorio Oficial de Jurisprudencia, Base de datos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
Secc.	Sección
ss.	Siguientes
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
vLex	Base de datos vLex: www.vlex.com

INTRODUCCIÓN

La ejecución de las resoluciones judiciales firmes forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. Sin embargo, este derecho no se opone a la posibilidad de obtener el cumplimiento de una resolución que no ha alcanzado firmeza. En otros términos, la firmeza de una resolución judicial no es un imperativo constitucional para su ejecución, por lo que el legislador común es libre de configurar, de acuerdo con criterios de política legislativa, un modelo por el que se permita, con mayor o menor amplitud, la ejecución de resoluciones judiciales no firmes.

La posibilidad de ejecutar una resolución judicial no firme, como mecanismo procesal de protección del crédito, se conoce comúnmente como ejecución provisional, toda vez que la permanencia de las actividades ejecutivas que se realicen dependerá de la confirmación o revocación de la resolución provisionalmente ejecutada. Por esta razón, esta institución es también denominada ejecución condicional o ejecución anticipada.

El modelo español de ejecución provisional de resoluciones judiciales, regulado en el Título II del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que la regla general es la ejecución de toda sentencia de condena recurrida, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley, sin que para instar su despacho sea necesario para el ejecutante provisional ofrecer caución para asegurar la restitución de lo obtenido o la compensación económica del ejecutado en caso de revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada.

Solicitada la ejecución provisional de una determinada resolución, el juez sólo debe examinar el cumplimiento de los requisitos y presupuestos procesales necesarios para su despacho, sin poder evaluar la pertinencia de la ejecución. Con otras palabras, el despacho de la ejecución provisional opera *ope legis*, siendo la propia resolución objeto de ejecución provisional el título ejecutivo que sirve de base a esta modalidad de proceso de ejecución, título que viene configurado por el propio legislador.

Se trata, por consiguiente, de un modelo que privilegia ostensiblemente la posición del acreedor, pero que resguarda los intereses del deudor ejecutado mediante la configuración de un incidente de oposición a la ejecución provisional, que sólo puede promoverse una vez despachada la misma.

En el presente trabajo nos proponemos analizar en detalle el sistema de ejecución provisional implementado por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, con el objeto de aprender de la experiencia española de cara a la reforma de la legislación procesal civil que se está desarrollando en Chile y que se basa —en lo que nos interesa—, precisamente, en el modelo español de ejecución provisional.

Para ello, hemos estructurado la investigación de la siguiente forma. En el Capítulo I, abordamos los aspectos generales de la institución. Así, comenzamos por exponer algunas notas fundamentales sobre el proceso de ejecución forzosa, para luego referirnos al concepto, denominación y naturaleza jurídica de nuestra institución. A continuación, pasamos revista a los antecedentes históricos de la ejecución provisional en España, lo que nos permitió comprender el alcance del modelo implementado por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, a la vez que analizamos sus principales características. Asimismo, revisamos el fundamento y la finalidad que persigue este instituto, para concluir con una valoración crítica del sistema.

El objeto del proceso de ejecución provisional fue analizado en dos capítulos distintos. En primer lugar, dedicamos el Capítulo II para analizar los requisitos que debe reunir una resolución para ser susceptible de ejecución provisional. Y luego, en el Capítulo III, revisamos los supuestos expresa y legalmente excluidos del ámbito objetivo de esta institución, así como algunas hipótesis de pronunciamientos de condena

que han suscitado alguna controversia en relación con la admisibilidad de su ejecución provisional.

En el Capítulo IV abordamos las reglas especiales que la ley procesal dedica a los sujetos que intervienen en el proceso de ejecución provisional, normas que se complementan con las dispuestas en sede de ejecución ordinaria o definitiva.

Al estudio del procedimiento de ejecución provisional dedicamos tres capítulos, con el objeto de facilitar la exposición y respetar la regulación que la ley realiza sobre estos aspectos de nuestra institución. De este modo, en el Capítulo V nos ocupamos de la solicitud y del despacho de la ejecución provisional. A su vez, en el Capítulo VI revisamos todo lo relacionado con el especial régimen de oposición que la ley procesal proporciona al ejecutado provisional, incluyendo la posibilidad de suspender el procedimiento previa consignación de las cantidades adeudadas. Por último, destinamos el Capítulo VII al análisis de los efectos que produce la confirmación y, especialmente, la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, así como el mecanismo que la ley prevé para facilitar la reparación del sujeto que soportó un proceso de ejecución en su contra basado en una resolución que no era firme y que resultó finalmente revocada.

Nuestro estudio termina con una revisión del problema de las costas ocasionadas en el proceso de ejecución provisional, tema que ha ocasionado gran cantidad de jurisprudencia, que no siempre es uniforme.

El presente trabajo constituye, como se puede apreciar, una revisión completa del instituto de la ejecución provisional, que sin agotar todas las problemáticas asociadas al mismo, pretende contribuir a su mejor comprensión y coherente aplicación práctica.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. NOTAS FUNDAMENTALES SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN

La actividad jurisdiccional —consistente, conforme a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE), en *juzgar y hacer ejecutar lo juzgado* o, como lo expresa la doctrina, en tutelar y realizar el Derecho objetivo¹—, no se agota con el pronunciamiento de la sentencia que resuelve el objeto del proceso (declarativo), sino que comprende también las actuaciones necesarias para la realización —en los casos en que proceda—, de los pronunciamientos condenatorios contenidos en dicha sentencia. En efecto, el interés de la parte que obtuvo una sentencia judicial a su favor no se satisface por la sola promulgación de tal sentencia: se requiere que la parte obligada a llevar a cabo una determinada conducta cumpla con esa obligación. Por lo tanto, si el condenado no cumple voluntariamente con el deber jurídico impuesto en la sentencia, el acreedor podrá instar la ejecución forzosa de la sentencia, a través de una serie de actos dirigidos a obtener una transformación material de la realidad, que constituyen lo que se conoce como proceso de ejecución o ejecución procesal².

¹ En este sentido, y adscribiendo a la teoría objetiva de la Jurisdicción, *vid.* DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2016, p. 18.

² Como destaca CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 17, para referirse a la actividad ejecutiva se utilizan indistintamente las expresiones «ejecución», «ejecución procesal», «ejecución forzosa», «proceso de ejecución», «procedimiento de ejecución», «proceso ejecutivo», «procedimiento ejecutivo», y otras similares. Durante este trabajo, usaremos estas distintas voces de forma equivalente.

El proceso de ejecución, definido como «aquel en que un órgano jurisdiccional, ante el ejercicio de la acción correspondiente por el legitimado, ejerce su potestad para producir un cambio físico o material en la realidad social con el fin de acomodarla al deber de prestación impuesto por un título ejecutivo, consistente en un pronunciamiento jurisdiccional de condena o en otros hechos o actos que legalmente constaten la existencia de aquel deber»³, es, por tanto, tan jurisdiccional como el proceso de declaración, y así lo ha entendido la doctrina en forma unánime por años⁴.

En consecuencia, la potestad de «hacer ejecutar lo juzgado» sólo puede ser conferida por el legislador a jueces y magistrados, pues dichas autoridades constituyen el personal jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales –por oposición al personal no jurisdiccional– y en ellos reside la potestad jurisdiccional. En términos más categóricos, se ha sostenido que «las funciones de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, por expreso mandato constitucional, corresponden “exclusivamente” a jueces y magistrados, lo que significa que no pueden atribuirse a otros órganos, ni siquiera compartirse con ellos; no cabe fragmentar el proceso y encomendar cada una de sus fases o tramos a órganos diferentes, pues ello supone que una parte de la Administración de justicia no está en manos de jueces independientes, sino de funcionarios dependientes y jerarquizados»⁵.

³ Concepto propuesto por ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, Aranzadi, 10ª edición, Cizur Menor, 2010, p. 687.

⁴ La discusión en torno a la jurisdiccionalidad de la potestad de «hacer ejecutar lo juzgado» es antigua, siendo casi unánime la doctrina de la primera mitad del siglo XX en afirmar que corresponde a la función jurisdiccional la actuación plena e íntegra del derecho, según da cuenta BECEÑA GONZÁLEZ, F., «La ejecución procesal civil. Notas para una sistematización en la materia en el Derecho procesal civil español (1920)», en *Justicia*, núm. 1, 2012, pp. 518-521.

En la actualidad el tema es pacífico, siendo unánime la doctrina en cuanto al carácter jurisdiccional de la actividad ejecutiva. Al respecto, entre la abundante bibliografía, cfr. SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa*, La Ley, Madrid, 2000, p. 20; MORENO CATENA, V., «Algunos problemas de la ejecución forzosa», en *AFDUAM*, núm. 5, 2001, pp. 18-189; LARENA BELDARRAIN, J., «La ejecución forzosa: Consideraciones generales», en GUTIÉRREZ BARRENENGOA, A. y LARENA BELDARRAIN, J. (Directores), *El proceso civil. Recursos, ejecución y procesos especiales*, Dykinson, 3ª edición, Madrid, 2010, p. 97; VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2016, p. 437; y MONTERO AROCA, J., *et al.*, *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*, Tirant Lo Blanch, 20ª edición, Valencia, 2012, p. 530.

En contra, *vid.* HENRÍQUEZ LARRAZÁBAL, R., «Jurisdicción y ejecución», en *Justicia*, núm. 1, 2014, p. 426, para quien la jurisdicción es una función autónoma y distinta de la función ejecutiva.

⁵ En este sentido, *vid.* ORTUÑO NAVALÓN, M., «¿Existe una política judicial? Reflexiones sobre la nueva función jurisdiccional compartida: la reforma de la Oficina Judicial», en *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, núm. 26, 2011, p. 45.

Sin embargo, el carácter jurisdiccional de la potestad de «hacer ejecutar lo juzgado» o, más específicamente, la exclusividad que tienen los órganos jurisdiccionales para realizar esta función ha quedado en entredicho después de la implementación de la denominada Nueva Oficina Judicial, en virtud de la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo, LEC) operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implementación de la nueva Oficina judicial, que atribuyó a los secretarios judiciales –hoy Letrados de la Administración de Justicia⁶– el desarrollo de la actividad ejecutiva⁷. Las críticas de la doctrina respecto de esta reforma han sido numerosas, hasta el extremo de que se ha cuestionado la constitucionalidad de la misma, precisamente porque su texto vulneraría lo dispuesto en el referido artículo 117.3 CE⁸. Con todo, también existen voces que justifican la distribución de funciones entre jueces y secretarios en materia de ejecución, pues entienden que la potestad exclusiva de los órganos jurisdiccionales consiste en «hacer ejecutar» lo juzgado, y no en «ejecutar» lo juzgado⁹.

Más allá de esta polémica –que atendidos los objetivos de esta investigación no podemos profundizar– y aún cuando somos partidarios del eminente carácter jurisdiccional que ostenta la actividad ejecutiva y la estrecha vinculación que existe entre el proceso ejecutivo y el proceso declarativo, huelga recordar que no siempre resulta necesario incoar un proceso de ejecución tras la finalización de un proceso de declaración y, a su vez, no siempre se requiere de un proceso de declaración previo para que exista ejecución. En efecto, y en relación con el primer aspecto aludido, sólo

⁶ Tras la reforma introducida por el artículo único de la Ley 7/2015, de 21 de julio, que modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a partir del 1 de octubre de 2015 el Cuerpo de Secretarios Judiciales se denomina Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, y los funcionarios que forman parte de dicho Cuerpo Superior Jurídico se denominan Letrados de la Administración de Justicia.

⁷ Sobre los alcances de la reforma en las atribuciones de estos funcionarios, cfr. DE PRADA RODRÍGUEZ, M. y MARTÍN MARTÍN, R., «El Secretario Judicial en el proceso de ejecución», en *Actualidad Jurídica*, núm. 1, 2014.

⁸ En este sentido, entre la abundante bibliografía, *vid.* TALÉNS VISCONTI, E., «El papel del secretario judicial con la nueva oficina judicial», en *Diario La Ley*, núm. 7886, 2012; GIMENO SENDRA, V., «Oficina Judicial, tribunales de instancia y agilización procesal (1)», en *Diario La Ley*, núm. 7665, 2011; ORTUÑO NAVALÓN, M., «¿Existe una política judicial? Reflexiones sobre la nueva función jurisdiccional compartida: la reforma de la Oficina Judicial», *op. cit.*; BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B., «Reformas del Libro III sobre proceso de ejecución y medidas cautelares», en BANACLOCHE PALAO, J. (Coordinador), *Guía práctica de la nueva oficina judicial*, La Ley, Madrid, 2010, pp. 309-310; y CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, *op. cit.*, pp. 21-22.

⁹ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 688-689.

respecto de los procesos declarativos que culminan con una sentencia estimatoria de la demanda que imponga un determinado deber de prestación al demandado, esto es, cuando estamos en presencia de una sentencia de condena –o que, en rigor, contenga pronunciamientos condenatorios– que haga necesaria una transformación de la realidad, y siempre que el condenado no cumpla voluntariamente con lo ordenado por la sentencia y, a su vez, el sujeto favorecido por dicha sentencia inste el cumplimiento forzoso de dicha resolución, se hará efectiva la vinculación entre el proceso de declaración y el proceso de ejecución. Por consiguiente, respecto de las sentencias desestimatorias de la demanda, de las sentencias mero declarativas y de las sentencias constitutivas, pronunciadas todas ellas en un proceso de declaración, no es posible ni necesario incoar un proceso ejecutivo.

Del mismo modo, tratándose de sentencias de condena que son cumplidas voluntariamente por el demandado, se torna innecesario un proceso de ejecución, toda vez que dicho mecanismo de tutela tiene por finalidad, precisamente, obtener el cumplimiento de lo ordenado por una sentencia de condena. Y aún cuando el demandado no cumpla voluntariamente, el proceso ejecutivo no se sustanciará si el demandante victorioso no insta su iniciación.

Por otro lado, la vinculación entre el proceso de declaración y el proceso de ejecución se quiebra en aquellos casos en que el legislador permite acceder a la ejecución sin la necesidad de transitar previamente por un proceso declarativo. Como se sabe, para iniciar un proceso de ejecución forzosa, es imprescindible –y suficiente– contar con un título ejecutivo (*nulla executio sine titulo*), esto es, con un «documento del que resulta la existencia de un crédito y al que el ordenamiento jurídico atribuye la eficacia de permitir que, con ese documento, el acreedor pueda solicitar la tutela de su derecho mediante el proceso de ejecución»¹⁰.

¹⁰ Concepto de título ejecutivo propuesto por VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y Díez-Picazo Giménez, I.—, *op. cit.*, p. 440. Según ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 699, «título ejecutivo es un supuesto de hecho legal típico, generalmente consistente en un documento representativo de un acto jurídico que impone o constituye un deber de prestación, supuesto al que la ley vincula el efecto jurídico de la válida realización de la actividad ejecutiva, de la cual determina la medida y alcance, tanto en el aspecto objetivo –qué se debe ejecutar–, como en el subjetivo –a favor de quién y contra quién se debe ejecutar–».

Pues bien, de acuerdo con el artículo 517 de la LEC¹¹, no sólo las sentencias firmes de condena son títulos ejecutivos, sino que, junto a tales resoluciones, tienen mérito ejecutivo otros títulos que se asemejan a las sentencias firmes, denominados tradicionalmente *títulos ejecutivos judiciales*, y otros documentos, denominados, a su vez, *títulos ejecutivos extrajudiciales*¹². De este modo, los títulos ejecutivos judiciales —a saber, las sentencias de condena firme; los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación; las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso; los autos de cuantía máxima; y las demás resoluciones procesales que según la ley lleven aparejada ejecución—, suponen la existencia de un proceso declarativo que ha terminado por sentencia o por algún equivalente jurisdiccional que habilita para exigir el cumplimiento de la prestación contenida en el título ejecutivo por vía de ejecución. En cambio, tratándose de los títulos ejecutivos extrajudiciales, esto es, de las escrituras públicas que cumplan con los requisitos indicados en el artículo 517.2.4º de la LEC; las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga; los títulos al portador o nominativos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones vencidos de dichos títulos, emitidos en la forma indicada en el artículo 517.2.6º de la LEC; los certificados correspondientes a valores representados mediante anotaciones en cuenta, siempre que concurren los requisitos exigidos en el artículo 517.2.7º de la LEC; y los demás documentos que, por disposición de la ley, lleven aparejada ejecución, el acceso a la ejecución forzosa no requiere de la iniciación previa de un proceso de declaración, pues estos títulos permiten instar el despacho de la ejecución directamente en caso de no cumplirse la obligación ordenada en ellos.

En cuanto a su regulación, la LEC prescindió de la clase u origen del título ejecutivo, y optó por un sistema unitario de ejecución¹³, como quedó de manifiesto en

¹¹ Cuyo texto ha sido objeto de numerosas reformas, la última de las cuales fue operada por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

¹² La distinción entre títulos ejecutivos judiciales y títulos ejecutivos extrajudiciales no es exacta, puesto que, como precisa VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* — con DE LA OLIVA SANTOS, A., y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, pp. 440-441, dentro del primer grupo hay títulos que no tiene origen judicial, como los laudos arbitrales, y dentro del segundo grupo hay títulos de origen judicial, como los autos de cuantía máxima.

¹³ El sistema unitario de ejecución en España tiene sus antecedentes en la Ley Toledana de 1480. Sin embargo, la LEC/1855 rompió con esta tradición, estableciendo un sistema de dualidad de ejecuciones, según el título ejecutivo fuese judicial o extrajudicial, modelo que fue consolidado con la

su Exposición de Motivos, donde se expresa que «en cuanto a la ejecución forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de 1881, presenta una regulación unitaria, clara y completa. Se diseña un proceso de ejecución idóneo para cuanto puede considerarse genuino título ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una ejecución forzosa común o de garantía hipotecaria, a la que se dedica una especial atención. Pero esta sustancial unidad de la ejecución forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son enteramente lógicas. Así, en la oposición a la ejecución, las especialidades razonables en función del carácter judicial o no judicial del título o las que resultan necesarias cuando la ejecución se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados»¹⁴.

Por tanto, en este nuevo sistema –destacado por su coherencia sistemática¹⁵–, se establecen algunas especialidades en función de la clase de título ejecutivo de que se trate –particularmente en lo referido al régimen de oposición a la ejecución–, pero en todo lo demás la tutela ejecutiva se alcanza por medio de un mismo cauce procesal.

Como hemos revisado, la sentencia de condena firme tiene fuerza ejecutiva, y habilita al favorecido con ella para iniciar un proceso distinto del proceso declarativo que la origina, con el objeto de obtener una transformación de la realidad material y, en definitiva, satisfacer su derecho de crédito. Ahora bien, no sólo se puede instar el cumplimiento forzoso de una sentencia de condena firme, sino que, cuando el legislador lo permite expresamente, es posible también solicitar dicho cumplimiento aún cuando estamos en presencia de sentencias de condena impugnadas y que, por lo tanto, no han alcanzado firmeza, caso en el cual coexisten en el tiempo el proceso de declaración con el proceso de ejecución¹⁶.

LEC/1881. Para más información sobre la evolución de la ejecución procesal en la legislación española, *vid.* MONTERO AROCA, J., «Problemas actuales de la ejecución forzosa», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 25-83.

¹⁴ Apartado XVII, párrafo 1º.

¹⁵ Cfr. UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», en UREÑA GUTIÉRREZ, P. (Director), *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil: propuestas de mejora*, Manuales de Formación Continuada, 29 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 281-282, para quien la regulación unitaria de la ejecución forzosa superó las tradicionales deficiencias que, sobre el punto, presentaba el ordenamiento jurídico español.

¹⁶ SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa*, *op. cit.*, p. 18.

La posibilidad de obtener el cumplimiento forzoso de una resolución definitiva que no se encuentra firme, y el proceso que surge como consecuencia de la misma, se conoce comúnmente como ejecución provisional, institución sobre la que centraremos nuestro estudio en esta investigación.

II. APROXIMACIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

La tutela ejecutiva implica la realización de actos coercitivos que afectan la esfera jurídica del ejecutado, lo que supone, como acabamos de ver, que existe certeza acerca de lo que es conforme a Derecho, sea que esa certeza haya sido declarada judicialmente –en cuyo caso el acreedor contará con un título ejecutivo judicial–, sea que la misma conste en un documento emanado de la propia voluntad de las partes, en los casos autorizados por la ley –documento que constituye un título ejecutivo extrajudicial–¹⁷. En definitiva, se requiere de un documento que de cuenta de forma indubitada de la existencia de una obligación y al que la ley dota de fuerza ejecutiva, siendo el título ejecutivo básico la sentencia de condena firme¹⁸. Sin embargo, la posibilidad de que se ejecute lo que una sentencia dispone no depende de su firmeza.

Ciertamente, una resolución firme es aquella que no se puede recurrir –bien porque la ley no admite recurso en su contra, bien porque, admitiéndose, no se impugnó– (art. 207.2 LEC), y en virtud de esa calidad, produce cosa juzgada formal, que «es el efecto que, *ad intra*, dentro de un proceso concreto, despliega una resolución judicial cualquiera –ya sea interlocutoria, ya sea definitiva– que ha alcanzado firmeza; y que significa que el tribunal del proceso habrá de estar en todo caso a lo dispuesto en ella (art. 207.3 LEC)»¹⁹. Nada tiene que ver, por tanto, la firmeza de una resolución con la posibilidad de obtener su cumplimiento, pues como lo ha destacado la doctrina, firmeza y ejecutabilidad no son términos equivalentes²⁰. De lo anterior resulta que es

¹⁷ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 683-684.

¹⁸ En el mismo sentido, MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2013, p. 281.

¹⁹ Cfr. TAPIA FERNÁNDEZ, I., *La cosa juzgada (Estudio de jurisprudencia civil)*, Dykinson, Madrid, 2010, p. 24. Sobre la cosa juzga formal, *vid.* DE LA OLIVA SANTOS, A., *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 96-103.

²⁰ En este sentido, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, Iurgium, Madrid, 2001, p. 147; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 281; BOTICARIO GALAVÍS, M.,

perfectamente posible que el ordenamiento jurídico atribuya la condición de título ejecutivo a sentencias que no son firmes, lo que supone permitir su ejecución provisional.

Ahora bien, el término *provisional* como característica o calificativo de una institución procesal no tiene una significación unívoca²¹, por lo que resulta necesario precisar el sentido que se atribuye a la provisionalidad de la ejecución de las resoluciones judiciales no firmes.

Que la ejecución de una resolución judicial que carece de firmeza sea provisional significa que lo ejecutado se confirmará o revocará en función del resultado del recurso interpuesto en contra de la misma. En otras palabras, la ejecución de sentencias de condena no firmes se denomina ejecución provisional, porque sus efectos están condicionados a lo que se decida en el recurso que se haya interpuesto contra la sentencia que se ejecuta²². Por tanto, la transformación de la realidad que se lleve a cabo sólo se mantendrá si se confirma la resolución que se ha ejecutado e impugnado (art. 532 LEC). Por el contrario, si no se cumple esa condición, se revertirán los efectos de lo ejecutado y se indemnizarán los perjuicios ocasionados al ejecutado, según los casos y en la forma prescrita en la ley (arts. 533 y 534 LEC).

1. Denominación de la institución

La provisionalidad de la ejecución, como acabamos de ver, dice relación con su efectividad, pues su permanencia está supeditada al resultado del recurso. Por esta razón, muchos autores señalan que el calificativo *provisional* no es el más adecuado

Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley, Madrid, 2010, p. 13.

²¹ Cfr. CÁMARA RUIZ, J., «Ejecución provisional», en ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 919, quien señala que tratándose de las medidas cautelares, su provisionalidad implica que ellas se extinguen cuando termina el proceso principal, en cambio, en el caso de los procesos sumarios, la provisionalidad se predica de la tutela jurisdiccional dispensada en los mismos.

²² En este sentido, VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* — con DE LA OLIVA SANTOS, A., y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 510.

para referirse a nuestra institución, y proponen un cambio de denominación²³. Entre las denominaciones propuestas por la doctrina²⁴, destacan las de ejecución inmediata, ejecución anticipada²⁵ y, especialmente –por el número de adeptos–, ejecución condicional.

Precisamente, para un importante sector de la doctrina, la ejecución de las resoluciones recurridas no firmes debería calificarse de *ejecución condicional*²⁶. En ese sentido, se ha señalado que «la ejecución provisional es, en realidad, ejecución *condicional*: la ejecución que se despacha y se sustancia –incluso hasta su final– está sometida a la *condición resolutoria* de que el Tribunal Superior no revoque la sentencia que se recurrió –y que se ejecutó o se ejecuta–. La Nueva LEC sigue llamándola “provisional”, a pesar de que es pacífico en la doctrina que la ejecución así despachada de provisional nada tiene; pues: *a)* su contenido, su despacho y su realización se “lleva a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria” (524 2); *b)* ejecutante y ejecutado tienen en ella los mismos derechos que en la ejecución ordinaria (524 3); y *c)* no se

²³ El debate en torno a la denominación de la institución no se ha dado sólo en España. Sobre esta misma cuestión, en Perú, *vid.* CAVANI BRAIN, R., «Ejecución inmediata de la sentencia. Algunas precisiones conceptuales», en *Diálogo con la Jurisprudencia*, núm. 184, 2014, pp. 123-125.

²⁴ Para una revisión de las distintas denominaciones, con referencias al derecho comparado, cfr. PÉREZ GORDO, A., *La ejecución provisional en el proceso civil*, Bosch, Barcelona, 1973, pp. 28-32. Esta obra, prologada por el connotado procesalista español Leonardo Prieto-Castro y Fernández, destaca por ser la primera monografía dedicada al estudio de la ejecución provisional en España.

²⁵ En este sentido, DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, Comares, Granada, 2008, p. 42.

La expresión *ejecución anticipada* nos parece particularmente problemática, toda vez que el adjetivo utilizado para calificar la ejecución es utilizado por la doctrina para referirse a otra institución procesal, lo que podría conducir a errores o confusiones indeseadas. En efecto, dentro del estudio de la tutela cautelar, se ha acuñado la expresión anticipación de tutela o tutela anticipada, que ha sido definida por MITIDIERO, D., *Anticipación de tutela. De la tutela cautelar a la técnica anticipatoria*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 25, «como la técnica direccionada a anticipar de forma provisional, mediante cognición sumaria, la tutela jurisdiccional del derecho para la parte, buscando la distribución isonómica de la carga del tiempo en el proceso».

En similares términos, POZO FERNÁNDEZ, F., *La tutela jurisdiccional anticipada en el proceso civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2013, pp. 63-64, define la anticipación de tutela como «aquella que dejando a resguardo el debido proceso legal, permite brindar oportunamente la protección de los derechos subjetivos que busca el peticionante de la jurisdicción, adelantando el otorgamiento de la pretensión ejercida, en forma total o parcial, con antelación al dictado de la sentencia definitiva, para evitar que el transcurso del proceso vulnere y haga difícil su posterior concesión». Este último autor señala expresamente que la anticipación de tutela es un instituto distinto de la ejecución provisional, opinión que compartimos. Cfr. *Ibidem*.

²⁶ Por todos, *vid.* FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 148; GUASP DELGADO, J. y ARAGONESES ALONSO, P., *Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte especial. Procesos declarativos y de ejecución*, Aranzadi, 6ª edición, Cizur Menor, 2005, p. 673; y BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 14-15.

realiza con carácter temporal, sino con absoluta vocación de permanencia. El uso de “provisional” por “condicional” es técnicamente incorrecto y en la práctica engañoso, pues puede dar a entender que las actuaciones ejecutivas se hacen con una “provisionalidad” que en rigor no tiene»²⁷.

En realidad, los argumentos expuestos para calificar la ejecución de las sentencias de condena no firmes como condicional, parecen estar más bien dirigidos a resolver la naturaleza jurídica de la institución, pronunciándose por el carácter ejecutivo de la misma²⁸ –cuestión que hoy día es pacífica, como veremos en el epígrafe siguiente– e introducen elementos nuevos para definirla que, más que aclarar, plantean nuevos interrogantes.

En efecto, al afirmar los autores que la efectividad de la resolución es condicional, se le atribuyen diferentes caracteres a tal condición. Así, para algunos sería una condición resolutoria de la cual depende la eficacia de la ejecución completa, y no de los distintos actos ejecutivos individualmente considerados²⁹; otros autores, en cambio, señalan que se trata de una condición que no tiene naturaleza civil, ya que no nace de la voluntad de los intervinientes, sino que se trata de una condición legal e impropia³⁰.

En esta misma línea, se ha declarado que la naturaleza ejecutiva de la ejecución provisional «es de tipo condicional, en el sentido de que la eficacia de los actos ejecutivos es plena hasta que no se decida definitivamente la cuestión de fondo, de forma que si se confirma, la ejecución seguirá como si nada hubiese pasado, y si se revoca se abrirá la fase de restitución». La misma resolución agrega que «no se trata de una condición en el sentido de los arts. 1113 y ss. del CC, pues no deriva de la voluntad

²⁷ Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 148.

²⁸ En este sentido, cfr. DÍAZ MARTÍN, F., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, N° 3, 1999, p. 1980, sostiene que la denominación *provisional* es inexacta –por los mismas razones esgrimidas en el cuerpo principal–, pues se trata de una verdadera actividad ejecutiva y no cautelar.

²⁹ En este sentido, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 148.

³⁰ Cfr. QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. et al. (Coordinadores), *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Tomo II: Artículo 281 al 555*, Iurgium, Barcelona, 2000, p. 2544.

contractual de los intervinientes, sino que es condición legal e impropia, que por su falta da lugar a la apertura con carácter retroactivo de la fase de restitución in natura, o por indemnización de daños y perjuicios»³¹.

Por lo demás, la provisionalidad del título en que se funda la ejecución provisional, con la consiguiente posibilidad de que sea revocado por el tribunal superior, justifica las especialidades procedimentales de esta ejecución, pero en ningún caso tales especialidades le confieren un carácter condicionado a la ejecución³².

Por todo lo antes expuesto, creemos que la expresión *ejecución provisional* es suficientemente representativa de la institución que estamos estudiando, y explica su naturaleza y efectos sin necesidad de acudir a términos propios de otras disciplinas jurídicas, por lo que no vemos necesidad de cambiar su denominación³³. Por lo demás, este es el calificativo por el que optó el legislador, de suerte que toda innovación doctrinal en su designación implicaría necesariamente la referencia a la denominación legal. Por estas consideraciones, seguiremos refiriéndonos a la institución objeto de análisis en este trabajo por su nombre tradicional.

2. Concepto de ejecución provisional

Al amparo de la normativa vigente³⁴, la ejecución provisional puede ser definida como «el proceso de ejecución por el que el órgano jurisdiccional realiza una serie de actividades, para acomodar la realidad exterior a lo establecido en el título ejecutivo – una resolución sobre el fondo carente de firmeza– con incidencia en la esfera jurídica y

³¹ AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 28 de junio de 2007 (JUR\2007\276944).

³² Cfr. FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 2-4, 2001, p. 295.

³³ En igual sentido, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 35.

³⁴ De acuerdo con las normas que regulaban la institución bajo la vigencia de la LEC/1881, la ejecución provisional fue definida por PÉREZ GORDO, A., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 17, como «un instituto en virtud del cual, el órgano jurisdiccional ante una sentencia dictada por él, y que está pendiente de alguno de los recursos permitidos por la ley, la dota, con las debidas garantías, de eficacia ejecutiva a través de una resolución que es una excepción a la regla general, en nuestro derecho de que las resoluciones sólo serán ejecutivas, cuando adquieran la firmeza exigida por la ley».

patrimonial de quien venga obligado por el título, quedando supeditada la permanencia de dicha actividad ejecutiva a lo que resulte del recurso interpuesto contra la resolución definitiva»³⁵.

Con otros términos, se puede decir que la ejecución provisional es «aquella actividad jurisdiccional que persigue el fin de dar efectivo cumplimiento al pronunciamiento de condena contenido en una sentencia no firme mientras se resuelve el recurso interpuesto contra dicha resolución definitiva, quedando los efectos obtenidos a expensas de lo que se resuelva en el recurso»³⁶.

Asimismo, con énfasis en su objeto, se ha definido la ejecución provisional como «la realización procesal de sentencias de condena definitivas, dictadas tanto en primera como en segunda instancia, que no habiendo alcanzado el status de cosa juzgada formal, por haber sido recurridas, se han pronunciado sobre el fondo del asunto, generando, sin necesidad de prestación de caución, una ejecución condicionada en su eficacia por la confirmación o revocación de la misma por el Tribunal llamado a conocer del recurso pendiente de resolución»³⁷.

De manera más general, la ejecución provisional se ha definido como «la institución procesal por la que se atribuye eficacia a una resolución definitiva sobre el fondo carente de firmeza, quedando subordinada la permanencia de los efectos producidos a lo que resulte del recurso»³⁸, o como «el conjunto de actos procesales por los que se otorga eficacia a una resolución definitiva sobre el fondo, carente de firmeza y previamente recurrida y, de este modo, se anticipan los efectos de la tutela judicial»³⁹.

³⁵ Vid. CÁMARA RUIZ, J., «Ejecución provisional», en ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, op. cit., p. 920.

³⁶ Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2014, p. 36.

³⁷ Cfr. SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II* —con PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.—, Tórculo Ediciones, Santiago de Compostela, 2006, pp. 307-308.

³⁸ En este sentido, CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, José María Bosch, Barcelona, 1993, p. 47.

³⁹ BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 13.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Barcelona ha afirmado que «la ejecución provisional, según la doctrina mayoritaria, se configura como una institución especial de naturaleza ejecutiva que permite la ejecución de resoluciones judiciales definitivas que no han adquirido firmeza con el fin de evitar las consecuencias de la dilatada duración del proceso o la abusiva utilización de los recursos»⁴⁰.

Las definiciones transcritas parten del supuesto –que compartimos– de que la ejecución provisional tiene naturaleza ejecutiva, y que su diferencia con la ejecución ordinaria o definitiva radica en que los efectos de la actividad ejecutiva, derivados de su provisionalidad, están subordinados al resultado del recurso interpuesto contra la sentencia no firme que se ejecuta. Y es que, ciertamente, la ejecución provisional no es más que eso: una especial ejecución basada en una sentencia de condena no firme, ejecución que se consolidará –o continuará– como definitiva o no según el resultado del recurso interpuesto en contra de la sentencia –título ejecutivo– en que se basa.

En suma, para nosotros la ejecución provisional es una modalidad de la ejecución ordinaria o definitiva por medio de la cual se confiere efectividad a una resolución judicial carente de firmeza, cuyos efectos están supeditados al resultado del recurso interpuesto frente a la resolución que es objeto de ella.

3. Naturaleza jurídica de la institución

Para concluir esta primera aproximación a la ejecución provisional, resulta pertinente que nos pronunciemos sobre su naturaleza jurídica, puesto que, como lo sugiere algún autor, «cada vez que un jurista se enfrenta con un concepto peculiar a la Ciencia que cultiva, se ve obligado, por virtud de una tradición varias veces secular, a tomar posición en ese espinoso problema de la *naturaleza jurídica*»⁴¹.

⁴⁰ AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 28 de enero de 2004 (JUR\2004\63037). En el mismo sentido, *vid.* AAP Granada (Secc. 3ª), de 31 de mayo de 2005 (JUR\2005\155086); AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 13 de junio de 2005 (JUR\2005\176536). En el mismo sentido, GÓMEZ SÁNCHEZ, J., *La ejecución civil. Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 57.

⁴¹ Cfr. LOIS ESTÉVEZ, J., «Sobre el concepto de “naturaleza jurídica”», en *Anuario de filosofía del derecho*, núm. 4, 1956, p. 159.

Por lo demás, analizar la naturaleza jurídica de una institución no es una cuestión meramente teórica, sino que reviste importante utilidad práctica, toda vez que «la identificación de la naturaleza jurídica sirve para dar contenido a las expresiones o conceptos de textura abierta contenidos en la regulación normativa, ayuda a elegir factores de decisión que parecen aludidos únicamente por la intención del legislador de hacer enumeraciones de elementos no taxativas; y, finalmente, resulta útil para conocer y aplicar el derecho supletorio»⁴².

Sentado lo anterior, huelga recordar que el tema de la naturaleza jurídica de la ejecución provisional durante la vigencia de la LEC/1881 fue ampliamente debatido en la doctrina española, situándose la discusión –en lo fundamental– en establecer, como primera cuestión, si las distintas hipótesis de ejecución provisional previstas en la legislación eran susceptibles de un tratamiento unitario y, acto seguido, en determinar si correspondía atribuirle naturaleza cautelar o naturaleza ejecutiva a dichos supuestos⁴³.

En la actualidad, sin embargo, la naturaleza ejecutiva de la ejecución provisional resulta pacífica, y se encuentra despejada toda duda acerca de su posible equiparación con las medidas cautelares⁴⁴.

No obstante, algunos autores han insistido en exponer las diferencias de la institución con las medidas cautelares⁴⁵. Para nosotros, es clara la naturaleza ejecutiva

⁴² Así lo afirma CORRAL TALCIANI, H., «La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial», en *Revista chilena de derecho*, vol. 34, núm. 1, 2007, p. 24. En el mismo sentido, MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional I. Parte General* —con GÓMEZ COLOMER, J., y BARONA VILAR, S.—, Tirant Lo Blanch, 20ª edición, Valencia, 2012, p. 224.

⁴³ Sobre el particular, cfr. el Capítulo II «Naturaleza y función de la ejecución provisional» de PÉREZ GORDO, A., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 35-44, y el Capítulo V «Naturaleza jurídica y distinción de figuras afines» de CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 83-101.

⁴⁴ Un tema distinto es el posible tratamiento unitario que se puede otorgar a las medidas cautelares y las medidas ejecutivas concretas, que obedecen a un mismo fin. Sobre ello, *vid.* el interesante trabajo de ESCALER BASCOMPTE, R., *Medidas cautelares y ejecución. ¿Cómo aplicar con eficacia soluciones homogéneas?*, Atelier, Barcelona, 2013.

⁴⁵ Cfr. VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Dykinson, Madrid, 2003, pp. 27-29; CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», en SOSPEDRA NAVAS, F. (Coordinador), *Práctica del proceso civil. Tomo I. Volumen tercero. La ejecución forzosa. Procesos especiales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 45-47; SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II* —con PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.—, op. cit., pp. 309-310; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 29-37; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 37-39.

de la ejecución provisional, que «la aleja de las medidas cautelares, pues aquí no se trata de *periculum in mora*, ni de *fumus boni iuris* [la cursiva es nuestra], ni de aseguramiento en forma homogénea de la prestación debida, sino pura y simplemente de ejecución anticipada, y en sus propios términos, del pronunciamiento judicial que estima dicha pretensión como debida. En conclusión, la ejecución provisional, no se contempla como método excepcional, sino como mecanismo ordinario de satisfacción del acreedor, en el doble frente de satisfacción económica de su derecho de crédito, y de su derecho de tutela efectiva»⁴⁶.

El carácter ejecutivo de la ejecución provisional es afirmado por la propia LEC, con el claro propósito de superar la vieja polémica existente sobre este punto. Así, en su Exposición de Motivos, al describir el modelo que se adoptó en la materia, se parte de reconocer que la ejecución provisional se asemeja a las medidas cautelares, por cuanto ambas instituciones «entrañan riesgos de error, pero riesgos de error parejos y que pueden y deben asumirse en aras de la efectividad de la tutela judicial y de la necesaria protección del crédito»⁴⁷. Aunque, inmediatamente, y a fin de aclarar el sentido de la expresión anterior, se expresa que «la ejecución forzosa provisional no es, por supuesto, ninguna medida cautelar y supone, de ordinario, efectos de más fuerza e intensidad que los propios de las medidas cautelares». Y luego añade que tratándose de la ejecución provisional, «además de una razonable oposición, existe una sentencia precedida de un proceso con todas las garantías y, en el otro –esto es, en el caso de las medidas cautelares–, sólo el "humo de buen derecho"»⁴⁸.

A nivel doctrinario, la mayoría de los autores comparten⁴⁹ que la ejecución provisional es un verdadero proceso de ejecución, pues así lo señala expresamente la

⁴⁶ AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 28 de junio de 2007 (JUR\2007\276944).

⁴⁷ Apartado XVI, párrafo 12º.

⁴⁸ Apartado XVI, párrafo 12º.

⁴⁹ Sin carácter exhaustivo, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, La Ley, Madrid, 2000, pp. 24-25; QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2544; Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», en DE LA OLIVA SANTOS, A., *et al.*, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Civitas, Madrid, 2001, pp. 904-905; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 153; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», en SUÁREZ ROBLEDANO, J. (Director), *La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cuadernos de Derecho Judicial, XIV – 2001, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003, p. 29; DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 42; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J.,

EM de la LEC, en los términos arriba transcritos, cuyo sentido no es otro que el de zanzar la confusión entre las medidas cautelares y la ejecución provisional⁵⁰. Pero además de la EM –cuyos términos categóricos pudieran no ser suficientes atendido que lo prescrito en ella carece de fuerza de ley–, existen argumentos contenidos en el texto mismo de la LEC, que permiten confirmar esta conclusión.

Así, la naturaleza ejecutiva de la ejecución provisional se desprende, en primer lugar, de la ubicación sistemática de nuestra institución dentro de la LEC, en el Título II del Libro III (entre el Título I «De los títulos ejecutivos» y el Título III «De la ejecución: disposiciones generales»). Pero además, y con mayor fuerza aún, la misma idea se extrae del art. 524 LEC, en cuanto prescribe que la ejecución provisional se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria, y que en ella las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en esta última⁵¹.

Por todo lo anterior, entendemos que resulta suficientemente demostrada la naturaleza ejecutiva de la ejecución provisional. Así las cosas, la utilidad actual de referirnos a la naturaleza jurídica de esta institución, se limita a precisar que el sistema

«Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», en GARBERÍ LLOBREGAT, J. (Director), *Los procesos civiles: Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con formularios y jurisprudencia, Tomo III*, Bosch, 2ª edición, Barcelona, 2010, pp. 2143-2145; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Difusión Jurídica, Madrid, 2009, p. 852; MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», en CORDÓN MORENO, F., *et al.* (Coordinadores), *Comentarios a la Ley de enjuiciamiento civil. Volumen II*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 108-108; MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil. Parte General* —con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.—, Tirant Lo Blanch, 6ª edición, Valencia, 2012, p. 406; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, pp. 292-293; y ASENSIO MELLADO, J. (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2013, pp. 1473-1474.

⁵⁰ No obstante, según GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Aranzadi, 5ª edición, Cizur Menor, 2013, pp. 199-200, la ejecución provisional es un verdadero proceso de ejecución, pero responde a la misma naturaleza jurídica de las medidas cautelares, por cuanto coinciden en sus presupuestos y requisitos, razón por la cual «no parece que deba negarse esta naturaleza cautelar a la ejecución provisional, aunque las medidas que la misma lleve aparejadas no se dirijan a asegurar la futura ejecución sino a proceder a ésta anticipada y provisionalmente».

⁵¹ En este mismo sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona tiene declarado que la regulación contenida en la legislación procesal vigente «justifica la naturaleza que la ejecución provisional tiene en la LEC como una actividad ejecutiva y no simplemente cautelar, como se pone de relieve en el artículo 524.2 cuando dice que la ejecución provisional se desarrollará del mismo modo que la ejecución definitiva por el Juez de Primera Instancia, debiendo alcanzar a las partes los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria». *Vid.* AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 13 de junio de 2005 (JUR\2005\176536).

de ejecución provisional es especial respecto de la ejecución ordinaria o definitiva⁵², por lo que la regulación que de aquella efectúa el legislador debe complementarse con las reglas previstas para la ejecución ordinaria, cuyos preceptos resultan de aplicación subsidiaria para todo aquello no expresamente regulado en las normas de nuestra institución⁵³.

En efecto, la regulación legal de la ejecución provisional contenida en el Título II del Libro III de la LEC se restringe a lo que sigue: *a)* delimita su objeto, precisando cuáles son las resoluciones judiciales susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente, y cuáles no; *b)* fija el régimen de oposición específico contra la resolución que despacha la ejecución provisional; y *c)* regula las consecuencias que se siguen de la confirmación y, particularmente, de la revocación de lo provisionalmente ejecutado, estableciendo con precisión los derechos de la parte que sufrió los efectos de dicha ejecución, así como el procedimiento ordenado para su reclamación. Para todo aquello que no está expresamente normado, el legislador realiza una remisión en bloque a las normas que regulan la ejecución definitiva. Todo lo cual confirma que ambas instituciones comparten la misma naturaleza⁵⁴.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL

La configuración legal de la ejecución provisional en un determinado ordenamiento jurídico debe ser examinada tanto desde sus antecedentes históricos como

⁵² Según DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 904-905, no obstante la insistencia de la LEC, «cabría matizar que esta identidad entre ejecución provisional y ejecución definitiva se circunscribe a la ejecución forzosa *stricto sensu*, esto es, a lo que realmente constituye actividad ejecutiva. Ello no significa, naturalmente, que no haya ninguna diferencia entre una y otra. Las peculiaridades de la ejecución provisional derivan de su calidad de tal, esto es, de la posibilidad de que la sentencia sea revocada».

⁵³ Como afirma QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2544, «las normas del proceso de ejecución no se aplican por analogía, sino en su propio concepto y sentido de normas ejecutivas».

⁵⁴ En el mismo sentido, el AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878) declaró que «la ejecución provisional es una ejecución forzosa (art. 524-2-3) que presenta ciertas especialidades derivadas de la falta de firmeza de la sentencia a la que sirve de título y que por ello tiene su repercusión en el modo de sustanciarla y oponerse a ella, así en tanto que ejecución forzosa, la ejecución provisional se rige por las normas del art. 538 y ss. y queda sujeta a los motivos y cauces de oposición que prevén los arts. 556, 559, 562, 563, y 564 y al mismo tiempo en tanto que ejecución forzosa con especialidades se rige por lo dispuesto en el art. 524 y ss.».

desde la opción de política legislativa que ella supone⁵⁵. Respecto de la primera de estas circunstancias nos ocuparemos en este apartado, dejando para un análisis posterior lo referido a la opción del legislador a favor de la ejecutabilidad de los pronunciamientos de condena no firmes (*infra*, apdo. V.2).

La ejecución provisional, como institución por la que se permite ejecutar una resolución que ha sido impugnada, fue admitida por primera vez en España en el año 1855, al introducirse el recurso de casación en la legislación procesal civil. Sin embargo, atendida la vinculación histórica que ha existido entre la ejecución provisional de las resoluciones y la admisión de los recursos en un solo efecto⁵⁶, los antecedentes remotos de nuestra institución deben buscarse en los orígenes del recurso de apelación⁵⁷.

En efecto, como señala algún autor, «la evolución de la ejecución provisional hasta 1855 coincide o, cuando menos, es paralela a la historia del efecto suspensivo del recurso de apelación y concretamente al intento de erradicar sus consecuencias perniciosas»⁵⁸. Por lo demás, la vinculación entre ambas instituciones sigue presente en la ley procesal vigente, como se desprende de la lectura del apartado tercero del artículo 456 LEC, disposición que, al regular el efecto que produce la interposición de un recurso de apelación en contra de una sentencia estimatoria de la demanda, en vez de prescribir si se produce o no la suspensión de la eficacia de dicha resolución, se remite a las normas sobre ejecución ordinaria y provisional [*infra*, cap. II, apdo. II.2.c)].

No obstante, atendido que el objeto de nuestra investigación es la regulación actual de la ejecución provisional en el proceso civil, nos limitaremos a exponer brevemente los antecedentes próximos de la misma⁵⁹.

⁵⁵ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 12.

⁵⁶ Como indica CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 103, «históricamente ambas figuras han funcionado como instituciones paralelas, llegando a identificarse completamente en determinados períodos».

⁵⁷ Sobre el recurso de apelación, desde una perspectiva histórica, vid. AIKIN ARALUCE, S., *El recurso de apelación en el derecho castellano*, Reus, Madrid, 1982.

⁵⁸ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 104.

⁵⁹ Para una exposición ordenada de los antecedentes remotos de la ejecución provisional, cfr. CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 104-110.

Como adelantamos, la ejecución provisional de sentencias recurridas en casación fue admitida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (en adelante, LEC/1855). Por tanto, la ejecución provisional estaba limitada a las sentencias de segunda instancia⁶⁰, exigiéndose para su procedencia la concurrencia de dos requisitos copulativos: *a)* que la sentencia de primera instancia y la sentencia de apelación fueran conformes⁶¹; y *b)* que se prestara caución para responder de los eventuales perjuicios en caso de revocación de la resolución provisionalmente ejecutada. Esta regulación se explica porque la casación española, a diferencia del modelo francés e italiano, se concibió como un recurso jurisdiccional con efecto suspensivo⁶².

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en lo sucesivo, LEC/1881), en su texto original, admitió la ejecución provisional de resoluciones de segunda instancia impugnadas en casación, siempre que se rindiera fianza bastante (caución), para responder de los eventuales perjuicios en caso de admitirse el recurso de casación⁶³. Por otro lado, si bien la regla general era la admisión del recurso de apelación en ambos efectos, procedía la ejecución provisional en los supuestos en que dicho recurso se admitía en el solo efecto devolutivo, y en algunas hipótesis excepcionales en que el citado recurso se admitía en ambos efectos (devolutivo y suspensivo)⁶⁴.

⁶⁰ Como señala CABALLO ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 110-111, también puede considerarse que la LEC/1855 admitía la ejecución provisional en los supuestos en que el recurso de apelación contra sentencias que ponen término al proceso de declaración se admitía en un solo efecto.

⁶¹ El requisito de conformidad no fue exigido en la Ley de 22 de abril de 1878 de recurso de casación civil, conservando en lo demás similar regulación que la ejecución provisional prevista en la LEC/1855.

⁶² En relación con la historia de este recurso, DELGADO CASTRO, J., «La historia de la casación civil española: una experiencia que aconseja no avanzar en el modelo de unificación de la doctrina», en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile*, núm. 33, 2009, p. 350, sostiene que «la tradicional casación española dista mucho desde su origen a la casación francesa. La casación española destaca por una conformación histórica que la hace demostrar una acusada personalidad propia, hasta el extremo de que parte de la mejor doctrina española la llega a calificar de “casación nacional”. La principal nota característica propia de la tradicional casación española es que, desde su origen, nace como un recurso jurisdiccional».

⁶³ Para una completa visión de la regulación original de la ejecución provisional en la LEC/1881, vid. PÉREZ GORDO, A., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., especialmente los Capítulos III a IX.

⁶⁴ Como destaca CACHÓN CADENAS, M., «Un estudio pionero sobre la ejecución procesal civil», en *Justicia*, núm. 1, 2012, p. 510, durante la vigencia de la LEC/1881, hubo voces que manifestaron interesantes y originales reflexiones sobre la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia. Cfr. BECENA GONZÁLEZ, F., «La ejecución procesal civil. Notas para una sistematización en la materia en el Derecho procesal civil español (1920)», op. cit., pp. 536-548.

Como se observa, la posibilidad de ejecutar provisionalmente una resolución que no haya adquirido firmeza era excepcional, pues históricamente se admitió la ejecución provisional de forma muy restrictiva⁶⁵. Por esta razón, se llegó a afirmar que la tradición procesal española ha sido contraria a esta institución⁶⁶.

El panorama descrito sufrió un cambio de gran calado con la reforma urgente y parcial de la LEC, operada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que amplió el ámbito de aplicación de la ejecución provisional al recurso de apelación, con lo que la eficacia inmediata de los pronunciamientos de condena que no eran firmes pasó de ser una posibilidad excepcional a constituir la regla general en el ordenamiento procesal civil⁶⁷. No obstante, la propia Ley 34/1984 limitó el alcance de la reforma al exigir la prestación de caución para obtener la ejecución provisional de una resolución. En resumen, la regulación de la ejecución provisional tras la reforma de 1984 era la siguiente: *a)* se mantuvo la ejecución provisional de las sentencias de segunda instancia recurridas en casación, previa prestación de caución (arts. 1722 y 1723 LEC/1881); *b)* se mantuvieron los supuestos especiales de ejecución provisional de sentencias de primera instancia⁶⁸; y *c)* se introdujo la posibilidad de obtener la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia recurridas en apelación, exigiéndose la constitución de fianza (art. 385 LEC/1881)⁶⁹.

⁶⁵ Como apunta ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 14, antes de la Reforma de 1984, los casos generales en que se permitía la ejecución provisional «operaban con carácter excepcional, al entender que las sentencias son ejecutables una vez la resolución ha adquirido firmeza».

⁶⁶ En este sentido, vid. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 147.

⁶⁷ La reforma fue celebrada de forma prácticamente unánime por la doctrina, tal como describe ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 15.

⁶⁸ Entre estos supuestos, hay que distinguir, como lo realiza MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., pp. 282-283, entre aquellos en que se admite excepcionalmente el recurso de apelación en un sólo efecto (alimentos provisionales, art. 1615; interdictos de obra nueva, arts. 1668 y 1669; incidentes, art. 758.II, todos de la LEC/1881), de aquellos en que procede la ejecución inmediata de determinadas actuaciones precautorias (interdicto de obra ruinosa, art. 1685 LEC/1881) o de reposición en la posesión (interdictos de retener o recobrar, art. 1659 LEC/1881).

⁶⁹ Tras la citada reforma de 1984, el artículo 385 de la LEC/1881 expresaba:

«Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior que hubiesen sido objeto de recurso de apelación, podrán no obstante ser ejecutadas provisionalmente cuando condenen al pago de una cantidad líquida o cuya liquidación pueda efectuarse por simples operaciones numéricas a tenor de lo dispuesto en el fallo.

Las sentencias de objeto o naturaleza diferente serán susceptibles de la misma medida únicamente si el Juez estima que el perjuicio que pudiera irrogarse con su ejecución no sería irreparable.

Pese al cambio en la tendencia restrictiva hacia la ejecución provisional imperante antes de la reforma, no se consiguió la aplicación generalizada que se perseguía. Las causas que explican esta situación pueden encontrarse en la deficiente regulación del art. 385 LEC/1881⁷⁰, en la exigencia de caución que se requería al que pretendía obtener la ejecución provisional de una resolución que le favoreciera, y en lo que se ha calificado como inercia judicial a la hora de denegar la ejecución provisional.

Por todo ello, y sin perjuicio de la admisibilidad ordinaria de la ejecución provisional tras la reforma de 1984, su aplicación práctica quedó reducida a la ejecución de sentencias de condena líquida, siempre que el solicitante tuviera liquidez o crédito suficiente para afianzar el principal, intereses y costas de aquello que pretendía ejecutarse⁷¹.

Habida cuenta de la escasa utilización práctica de la ejecución provisional durante la vigencia de la LEC/1881 como consecuencia de las deficiencias recién apuntadas, la LEC de 2000 apostó decididamente por la mayor amplitud de la ejecución provisional

En ningún caso serán ejecutables provisionalmente las sentencias recaídas en juicios que versen sobre paternidad, maternidad, filiación, divorcio, capacidad, estado civil o derechos honoríficos.

Para que proceda la ejecución provisional habrá de instarla la parte apelada dentro del plazo de seis días contado a partir de la notificación de la resolución admitiendo el recurso de apelación, dentro de cuyo plazo habrá de ofrecer la constitución de fianza, con exclusión de la personal, o aval bancario suficientes para responder de lo que perciba y de los daños, perjuicios y costas que ocasionare a la otra parte. El Juez habrá de resolver sobre la ejecución provisional y la suficiencia de la garantía en los seis días siguientes, y la fianza o el aval habrán de constituirse dentro del tercer día a partir de la notificación de la resolución, incluso cuando el Juez exija que se complementa la garantía ofrecida.

Los recursos de apelación a que se refieren los artículos anteriores deberán interponerse en el plazo de cinco días, salvo que en el Ley se fijase otro plazo distinto».

⁷⁰ Como señala GARCÍA PÉREZ, J., «Problemas prácticos derivados de la ejecución provisional de autos y sentencias objeto de recurso de apelación», en *Cuadernos abulenses*, núm. 20, 1993, pp. 59-60, «el análisis de la norma cuestionada –artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– por la doctrina es profuso en los últimos años, ofreciendo un cuerpo de afirmaciones disperso y no coincidente, que se refleja en el propio ámbito de la Jurisprudencia, que tampoco ha consolidado criterios uniformes, indiscutibles y servibles para colmar las deficiencias y lagunas que la norma presenta. Tal es así, que pese a los años transcurridos desde su entrada en vigor –casi diez– entendemos honestamente que siguen vivos hoy día la mayor parte de los problemas interpretativos que planteó desde su promulgación y que ello ha conllevado un desapego hacia ella de los juristas, deviniendo su uso cada vez menos frecuente y mostrándose su aplicación más pobre y con resultados más discretos que los que el legislador planificó al darle vida».

En el mismo sentido, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «Contribución a la interpretación del régimen general de ejecución provisional de sentencias contenido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. (Director), *Estudios sobre Derecho Procesal*, Sopec, Madrid, 1996, p. 1085.

⁷¹ En este sentido, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 17.

de prácticamente todas las sentencias de condena, comenzando por la eliminación de la exigencia de prestar caución, como veremos a continuación.

IV. EL MODELO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL IMPLEMENTADO POR LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

I. Descripción de la regulación legal

La ejecución provisional está regulada en el Título II del Libro III de la LEC (arts. 524 a 537), que lleva por rúbrica «De la ejecución provisional de las resoluciones judiciales». De acuerdo con esta normativa, se permite la ejecución de las sentencias de condena no firmes –tanto de primera como de segunda instancia– con carácter general, y sin necesidad de prestar caución para responder de eventuales perjuicios en caso de revocación de la sentencia (art. 526 LEC), limitándose su admisibilidad sólo en los casos expresamente previstos en la ley, supuestos que están contenidos de modo general en el artículo 525 de la LEC.

La regulación que hace la LEC de la ejecución provisional supuso un cambio radical respecto de la legislación derogada, resultando ya casi un tópico señalar que la misma constituye, probablemente, una de sus mayores innovaciones⁷², lo que denota la importancia de esta institución y justifica el interés que ha concitado en la doctrina científica⁷³.

⁷² Cfr. DELGADO CRUCES, J., «El despacho de la ejecución provisional: su ámbito según la doctrina de los tribunales», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 718.

⁷³ Como muestra de este interés, sólo durante el año 2000, que corresponde al año de entrada en vigor de la LEC, se publicaron numerosos trabajos dedicados al estudio de la ejecución provisional, sin considerar las obras generales sobre la nueva legislación procesal civil. Entre dichos trabajos, y sin carácter exhaustivo, cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit.; MUERZA ESPARZA, J., «Algunas consideraciones sobre la ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Aranzadi civil: revista doctrinal*, núm. 3, 2000; AGUILERA MORALES, M., «Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 7, 2000, pp. 789-826; HERNÁNDEZ VERGARA, A., «La ejecución provisional en la LEC 1/2000», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 405-450; GARCÍA-MIGUEL GARCÍA-ROSADO, M., «La ejecución provisional de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 451-478; GONZÁLEZ VELASCO, J., «La ejecución provisional en la LEC de 7 de enero de 2000», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 479-504; CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», en *Revista Xurídica Galega*, núm. 26, 2000, pp.

El cambio en la orientación legislativa viene siendo resaltado por la doctrina desde los trabajos preparatorios de la nueva LEC⁷⁴, y en palabras de su propia Exposición de Motivos, «la regulación de la ejecución provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil representa una decidida opción por la confianza en la Administración de Justicia y por la importancia de su impartición en primera instancia y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razonables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional»⁷⁵.

Cabe destacar que las normas que rigen el sistema de ejecución provisional han sufrido algunas modificaciones desde su entrada en vigor, pero ninguna de estas reformas ha tenido la virtualidad de alterar el modelo original. Así, la primera reforma fue operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, de Poder Judicial, que junto con introducir una serie de modificaciones en el citado cuerpo legal, añadió un nuevo apartado en el artículo 525 de la LEC, incorporando una nueva hipótesis de excepción al régimen de ejecución provisional (*infra*, cap. II, apdo. III.2).

Por su parte, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, modificó la redacción de los artículos 524, 527, 528, 531 y 533 de la LEC, a fin de ajustar la normativa a las nuevas funciones otorgadas a los secretarios judiciales, así como a las resoluciones que pueden

295-325; y SAN CRISTOBAL REALES, S., «La ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Anuario jurídico y económico escurialense*, núm. 33, 2000, pp. 79-111.

⁷⁴ Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., «El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 26 de diciembre de 1997, y la protección del crédito», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 8-9, 1998, p. 827; y del mismo autor, «El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 30 de octubre de 1998, y la protección del crédito: ejecución provisional y proceso monitorio», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 1999, p. 1643; y VÁZQUEZ SOTELO, J., «Ejecución provisional y medidas cautelares», en MARTÍN ESPINO, J. (Coordinador), *El proceso civil y su reforma*, Colex, Madrid, 1998, pp. 488-489.

Como apunta críticamente CABALLOL, la afirmación contenida en la Exposición de Motivos contrasta con el hecho de que la regulación de la ejecución provisional fue la que sufrió mayores modificaciones en el tránsito entre el borrador y el anteproyecto de LEC. Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», en PICÓ I JUNOY, J. (Coordinador), *Presente y futuro del proceso civil*, José María Bosch, Barcelona, 1998, pp. 589-590. Vid. del mismo autor, «La ejecución provisional», en MARTÍN ESPINO, J. (Coordinador), *El proceso civil y su reforma*, Colex, Madrid, 1998, p. 180.

⁷⁵ Apartado XVI, párrafo 1º.

dictar estos funcionarios. Sin embargo, se aprovechó la reforma para otros fines: cambiar la forma en que se insta el despacho de la ejecución provisional (art. 524.1 LEC) (*infra*, cap. V, apdo. I.1); corregir la redacción del apartado final del artículo 524 de la LEC; e introducir un nuevo apartado en el artículo 528 de la LEC, para aclarar un punto discutido del régimen de oposición a la ejecución provisional [*infra*, cap. VI, apdo. I.1.b)].

Con la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, se modificaron los artículos 527 y 535 de la LEC, para adecuar tales disposiciones a la supresión del trámite de la preparación de los recursos [*infra*, cap. V, apdo. I.2.a)].

Finalmente, el numeral 1ª del apartado 1 del artículo 525 fue modificado en tres ocasiones durante el año 2015. Primero, por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Luego, por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Y por último, por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que le confirió su redacción final (*infra*, cap. III, apdo. I.2).

En definitiva, la LEC introduce un modelo de ejecución provisional de resoluciones de condena no firmes, sin necesidad de prestar caución, cuyo régimen es regulado de forma completa y unitaria, convirtiéndose en el sistema ordinario de satisfacción del acreedor⁷⁶.

II. Características principales

De acuerdo con las Audiencias Provinciales⁷⁷, la nueva regulación de la ejecución provisional contenida en la LEC se asienta en determinados principios. Lo cierto es que,

⁷⁶ DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 25.

⁷⁷ Al respecto, el AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (AC\2003\393) señala que «una de las principales innovaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, la constituye la ejecución provisional de las resoluciones judiciales (Libro Tercero, Título II, Capítulo I, II y III), la cual se asienta en los siguientes principios:

a) El criterio general es el de la ejecución provisional de todas las sentencias no firmes (artículo 535), con la sola excepción de aquellas a las que la ley expresamente priva de tal efecto, la cual sólo

más que principios, se trata de verdaderas notas descriptivas que individualizan el modelo de ejecución provisional de resoluciones en el proceso civil español, pues, como enseña DE LA OLIVA SANTOS, «cuando todo son principios, nada es principio», de manera que sólo son principios del proceso o principios procesales «las ideas y reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el muy preciso sentido de poseer una virtualidad originaria (de ahí que el término “principio” resulte apropiado), determinando que los procesos sean sustancialmente lo que son»⁷⁸.

En concreto, las principales características del modelo de ejecución provisional de sentencias implantado por la LEC son las siguientes:

queda subordinada a la rogación de la parte (artículo 524) y sometida a la condición resolutoria de que el Tribunal Superior no revoque o case la sentencia recurrida.

b) El despacho de la ejecución provisional, una vez solicitada por la parte favorecida por la sentencia, no es potestativo para el tribunal sino obligado, salvo que concurra alguno de los supuestos de exclusión legal o que aquélla no contenga pronunciamiento de condena –artículos 526 y 527-3–.

c) La ejecución provisional puede pedirse en cualquier momento desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación o desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, hasta que la sentencia gane firmeza –artículo 524.2, 527-1 y 535–.

d) El Tribunal competente ante el que se debe solicitar es el que conoció del asunto en primera instancia –artículos 524-2 y 535-2–.

e) No son susceptibles de ejecución las sentencias meramente declarativas ni las constitutivas –artículo 521-1–, las comprendidas en el artículo 525 y las dictadas en rebeldía mientras no transcurran los plazos indicados por la ley para ejercitar la acción de rescisión, respecto de las que sólo procede la anotación preventiva cuando dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos –artículo 524-4–.

f) No es necesario prestar fianza ni ofrecer caución alguna por el solicitante, aunque al ejecutado le cabe oponerse a la ejecución en los casos previstos en la ley. Esta se despacha bajo la responsabilidad del actor ejecutante.

g) La oposición a la ejecución provisional, fuera del supuesto en que se hubiera infringido cuanto dispone el artículo 527 LEC, presenta caracteres y contenido diverso según fuese la sentencia de condena no dineraria, que sólo prosperará cuando resultase imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado, o de condena dineraria, en cuyo caso, sin que el legislador distinga entre liquidez o iliquidez de la condena, al ejecutado no le está permitido oponerse a la ejecución provisional en su conjunto, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas siempre que éstas provocasen una situación absolutamente imposible de restaurar o compensar económicamente y, al mismo tiempo, indicase medios o actuaciones ejecutivas viables y ofreciese caución suficiente para responder de la demora en la ejecución. Asimismo, dada la remisión del artículo 524-2 a la ejecución ordinaria, también deben admitirse aquellos motivos de oposición sustantivos fundados en el artículo 556 (pago, cumplimiento, caducidad de la acción y transacción) o procesales en el artículo 559.

Y, h) La ejecución provisional se llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria, gozando las partes de los mismos derechos y facultades procesales que en ésta, que, por tanto, es de aplicación subsidiaria –artículo 524.2 y 3–. En el mismo sentido, AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2006\12881); AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

⁷⁸ Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., *El papel del juez en el proceso civil. Frente a ideología, prudentia iuris*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 17-18.

a) Admisibilidad general de la ejecución provisional

Según el artículo 524.2 de la LEC, todas las sentencias de condena que no sean firmes —se excluyen, por tanto, las sentencias mero declarativas y las sentencias constitutivas—son provisionalmente ejecutables, salvo aquellas que han sido legal y expresamente exceptuadas (art. 525 LEC), por lo que la ejecución provisional ha pasado de ser una situación excepcional a constituir la regla general en el proceso civil.

Si bien el Título II del Libro III de la LEC habla de la ejecución provisional de «resoluciones» judiciales, sus distintas disposiciones están referidas a la ejecución provisional de sentencias, por lo que se ha discutido a qué clases de resoluciones se aplica en definitiva este especial régimen de ejecución. El problema de las clases de resoluciones que pueden ser provisionalmente ejecutadas, así como los requisitos que deben cumplir y las excepciones a este régimen general, serán estudiados con detalle en el Capítulo II de este trabajo, dedicado al objeto de la ejecución provisional.

No obstante la amplitud con que se admite la ejecución provisional de una resolución, dicha ejecución no opera de forma automática, sino que debe ser solicitada por la parte interesada. Por consiguiente, no puede ser despachada de oficio por el Tribunal (art. 524.1 LEC). Al efecto la LEC confiere legitimación para instar esta ejecución a «quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor» en la sentencia que se pretende ejecutar (art. 526 LEC), con independencia de si la ha recurrido o no⁷⁹ (*infra*, cap. IV, apdo. 2.1).

b) Regulación completa y unitaria de la institución

Para que la ejecución provisional con carácter general se hiciera realidad, resultaba necesario que el ordenamiento jurídico dispusiera una regulación que superara

⁷⁹ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2005, p. 366.

las deficiencias y lagunas del modelo anterior, lo que explica que la LEC haya adoptado un régimen completo y unitario de la institución⁸⁰.

La regulación de la LEC es completa por cuanto aborda todos los extremos de la ejecución provisional: el objeto, el despacho, la oposición y, especialmente, los efectos de la confirmación o revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada⁸¹; remitiéndose en los aspectos no regulados a las reglas generales de la ejecución ordinaria o definitiva (*supra*, apdo. II.3).

Por otro lado, el régimen de ejecución provisional contenido en la LEC es unitario en cuanto las reglas contenidas en el Título II de su Libro III son las mismas para todas las resoluciones que son provisionalmente ejecutables⁸², aún cuando el Capítulo II está dedicado a la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia y el Capítulo III está dirigido a la ordenación de la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en segunda instancia⁸³. Así, las tres disposiciones contempladas en este último capítulo (arts. 535 a 537 LEC) no hacen más que remitirse a las reglas del capítulo anterior, lo que confirma que el régimen de la ejecución provisional es el mismo tanto para las sentencias impugnadas por medio de un recurso de apelación como para las sentencias recurridas mediante un recurso de casación o de un recurso extraordinario por infracción procesal⁸⁴.

Desde esta perspectiva, es criticable la regulación de la LEC, toda vez que resulta superfluo dedicar un capítulo especial para la ejecución provisional de las sentencias

⁸⁰ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 107.

⁸¹ Vid. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 295.

⁸² En igual sentido, BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 15-16.

⁸³ Al respecto, REVERÓN PALENZUELA, B., «La ejecución provisional de sentencias recurridas en casación civil», en BONET NAVARRO, J. (Director) y MARTÍN PASTOR, J. (Coordinador), *El recurso de casación civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, p. 302, señala que «la regulación sobre la ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia, pendientes de recurso de casación o de recurso extraordinario por infracción procesal, contenida en la LECiv, forma parte del régimen jurídico dedicado en la misma al proceso de ejecución civil, dejando, en consecuencia, de ser una regulación parcial contenida dentro de las normas configuradores del recurso de casación civil».

⁸⁴ Cfr. VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 73; CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 299.

dictadas en segunda instancia si, en definitiva, no contiene ese capítulo ninguna regla especial para tales resoluciones que justifique una reglamentación distinta de la general, sobre todo cuando, como hemos dicho, la nueva LEC pretendía superar la regulación diferenciada de la ejecución provisional según el grado jurisdiccional en que se hubiere pronunciado la resolución, como otrora lo hiciera la LEC/1881. En rigor, la única genuina especialidad es la contenida en el párrafo 2º del apartado 2º del artículo 535 de la LEC, que aclara que la competencia funcional para conocer de la ejecución provisional de estas sentencias se otorga al tribunal que hubiere conocido del proceso en primera instancia⁸⁵. Por esta razón, no existía necesidad de dedicar un capítulo especial para las sentencias de segunda instancia, ya que no habría sido difícil integrar estas especialidades dentro del régimen general de la ejecución provisional⁸⁶.

Siendo el régimen de la ejecución provisional el mismo para todas las resoluciones que son provisionalmente ejecutables, no dedicaremos en este trabajo un Capítulo especial para abordar la ejecución provisional de sentencias dictadas en segunda instancia, sino que realizaremos una revisión completa del sistema de ejecución provisional implantado por la LEC, haciendo referencia expresa a las especialidades de la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia cuando sea estrictamente necesario, entendiéndose que todo lo que diremos sobre nuestra institución rige de igual forma para toda clase de resolución susceptible de ejecutarse provisionalmente.

c) Ejecución provisional ope legis

La ejecución provisional, según su configuración legal en los distintos ordenamientos, puede ser *ope legis* u *ope iudicis*, según el papel que se confiere al juez al momento de decidir sobre su concesión⁸⁷. Así, un sistema de ejecución provisional es

⁸⁵ Vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 926. En similar sentido, TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, p. 2218, sostiene que la regulación de la ejecución provisional de la sentencia de apelación es la misma que la prevista para la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia, «especificándose sólo el tiempo en que puede solicitarse, el tribunal competente al que solicitarla, y la documentación a aportar con esa solicitud».

⁸⁶ En el mismo sentido, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 367.

⁸⁷ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 53.

ope legis cuando la propia ley confiere eficacia a la resolución judicial que no se encuentra firme, por lo que el juez debe despacharla en todos los casos autorizados por la ley. Por el contrario, la ejecución provisional es *ope iudicis* cuando es el juez, por medio de una resolución judicial, el que confiere eficacia ejecutiva a la sentencia que aún no ha adquirido firmeza, lo que hará de acuerdo con los criterios que hayan sido fijados previamente por el legislador, o según lo que su prudencia le dictare.

En el actual modelo de ejecución provisional previsto en la legislación procesal civil española, es la LEC la que concede en términos muy amplios la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena, por lo que se puede calificar de un sistema *ope legis*. Lo anterior se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 527.3 de la LEC, según el cual «solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará», sin que pueda el juez denegar la ejecución por un motivo que no constituya una hipótesis de excepción expresamente reglada.

Por otro lado, el artículo 524.3 de la LEC dispone que «la ejecución provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria». Por su parte, la ejecución ordinaria o definitiva se despachará por el Tribunal siempre que concurren todos los requisitos establecidos en el artículo 551 de la LEC, por lo que el Tribunal sólo debe examinar el cumplimiento de tales circunstancias, sin que le sea dado entrar en ningún otro aspecto⁸⁸.

De esta forma, si en la ejecución ordinaria el Tribunal debe despachar la ejecución porque la ley confiere fuerza ejecutiva al título, del mismo modo, en la ejecución provisional es la propia ley la que concede la ejecución provisional de las sentencias de condena no firmes, resoluciones que, según analizaremos en el Capítulo V de este trabajo, entendemos que constituyen verdaderos títulos ejecutivos.

⁸⁸ Vid. MORENO CATENA, V., *Tomo IV. La ejecución forzosa*, de CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V. (Coordinadores), *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 82-83.

d) Inexigibilidad de caución

Probablemente uno de los aspectos más novedosos del actual modelo de ejecución provisional de resoluciones judiciales –y también de los que ha encontrado más resistencia por alguna doctrina⁸⁹– es que se ha eliminado toda exigencia de caución por parte del ejecutante para solicitar el despacho de la ejecución provisional (art. 526 LEC)⁹⁰. Se trata, según algunos autores, de la característica más importante del sistema contemplado en la LEC⁹¹, e incluso sería una de las más importantes novedades de toda la LEC⁹².

En un modelo de ejecución provisional con caución exigida para su obtención, sólo pueden acceder a la misma quienes cuenten con la capacidad económica suficiente para cubrir el monto de la caución. Por el contrario, en un sistema en que no se exige caución, se corre el riesgo de que, en caso de revocarse la sentencia provisionalmente ejecutada, quien obtuvo la ejecución no pueda hacer frente a la restitución. La opción por uno u otro sistema es una cuestión de política legislativa⁹³ (*infra*, apdo. V.2) que

⁸⁹ Por todos, cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 153, para quien la supresión de la caución implica que «el Estado arroja sobre sí (o lo que es peor, sobre el ejecutado) las consecuencias de una ejecución provisional indebidamente despachada e ignora de forma absoluta [sic] la posibilidad de que el provisional ejecutante resulte insolvente si, como consecuencia de la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada debe restituir lo que obtuvo, pagar las costas de la ejecución e indemnizar los daños y perjuicios producidos». El mismo autor concluye, sobre este punto, que «se ha venido a privar al ejecutado de la forma de protección más eficaz y cualificada que se le ofrecía frente a la “agresión” sobre su patrimonio que supone siempre la ejecución provisional».

⁹⁰ VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 854, llega al extremo de calificar esta supresión como aberración jurídica.

⁹¹ En este sentido, ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Boletín del Ministerio de Justicia*, núm. 1895, 2001, p. 2030; CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», op. cit., p. 53; DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 366; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 295; y CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, op. cit., p. 318.

⁹² Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 120.

⁹³ Sobre esta opción del legislador procesal civil, la Exposición de Motivos de la LEC dice que «la ejecución provisional será viable sin necesidad de prestar fianza ni caución, aunque se establecen, de una parte, un régimen de oposición a dicha ejecución, y, de otra, reglas claras para los distintos casos de revocación de las resoluciones provisionalmente ejecutadas, que no se limitan a proclamar retóricamente la responsabilidad por daños y perjuicios, remitiendo al proceso ordinario correspondiente, sino que permiten su exacción por la vía de apremio».

Y agrega luego, teniendo presentes los riesgos que esta opción supone, que «es innegable que establecer, como regla, tal ejecución provisional de condenas dinerarias entraña el peligro de que quien se haya beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo que haya percibido, si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada. Con el sistema de la Ley de 1881 y sus reformas, la caución exigida al

gira en torno a dos alternativas⁹⁴: favorecer la ejecución provisional y, por tanto, beneficiar al pequeño acreedor; o limitar la ejecución provisional, privilegiando a las grandes entidades⁹⁵. En esta tesitura, la LEC optó por favorecer la ejecución provisional, eliminando la caución como requisito para el despacho de la misma⁹⁶.

Si la caución exigida al ejecutante por la LEC anterior, al momento de solicitar la ejecución provisional de una resolución, tenía por finalidad garantizar la efectividad de la restitución –al menos por equivalencia–, así como de los daños y perjuicios ocasionados al ejecutado, en caso de revocación de la resolución provisionalmente ejecutada⁹⁷, podría pensarse que con la supresión de la caución el peligro de que no pueda hacerse efectiva la revocación es mayor. Sin embargo, esta opción legislativa no representa, por sí sola, la asunción de un riesgo adicional. Para llegar a tal conclusión resulta indispensable revisar toda la normativa aplicable a la ejecución provisional, y no

solicitante eliminaba ese peligro, pero a costa de cerrar en exceso la ejecución provisional, dejándola sólo en manos de quienes dispusieran de recursos económicos líquidos. Y a costa de otros diversos y no pequeños riesgos: el riesgo de la demora del acreedor en ver satisfecho su crédito y el riesgo de que el deudor condenado dispusiera del tiempo de la segunda instancia y de un eventual recurso extraordinario para prepararse a eludir su responsabilidad. Con el sistema de esta Ley, existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y después haya pasado a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser mínimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable. Y, por otro lado, como ya se ha dicho, la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo órgano que ha tramitado o está tramitando la ejecución forzosa provisional».

⁹⁴ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 296.

⁹⁵ En contra, *vid.* VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 854-855, para quien el argumento del legislador expresado en la EM de la LEC para justificar la supresión de la caución «es demagógico y cínico porque basta acudir a las estadísticas para advertir que la inmensa mayoría de los procesos se llevan a cabo entre personas de recursos modestos y que pocos son los pleitos de cuantías colosales. Así, pues, se despoja a un modesto o pobre, para ahorrarle tiempo y mejorar a otro de igual condición».

⁹⁶ Como anota CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, *op. cit.*, p. 318, en este punto, «la LEC vigente ha desechado soluciones intermedias, tales como la siguiente: no exigir caución para obtener la ejecución provisional, pero admitiendo la posibilidad de que el ejecutado pueda evitar, en todo caso, dicha ejecución si presta caución suficiente para asegurar la ejecución de la sentencia».

⁹⁷ A propósito de la ejecución provisional en la LEC anterior y su falta de operatividad, VÁZQUEZ SOTELO, J., «Ejecución provisional y medidas cautelares», *op. cit.*, pp. 488-489, nos recuerda que «el problema radica en la fianza que es preciso constituir como garantía frente al riesgo de que se revoque después la sentencia que provisionalmente se ejecuta. La vía de la ejecución provisional es magnífica para los Bancos y entidades con gran capacidad financiera, pero no siempre es así para el ciudadano común. El padre de familia que obtiene una indemnización y que acaso tenga prisa por recibirla, probablemente no podrá depositar una fianza no ya equivalente, sino superior (y a veces notablemente superior) a la cantidad que le ha reconocido la sentencia. Y sin fianza que asegure el riesgo de devolución del importe de la condena los Juzgados no se arriesgan a conceder la ejecución provisional».

solamente aquella relativa al momento de su iniciación, para determinar si, en definitiva, existe un desequilibrio insalvable entre la posición del ejecutante y la del ejecutado.

En efecto, como ha apuntado la doctrina, el actual modelo de ejecución provisional desplaza el centro de gravedad de la institución desde su momento inicial al de la oposición a la misma, por lo que los mayores o menores riesgos del sistema se apreciarán al momento de estudiar el régimen de oposición⁹⁸ (*infra*, cap. VI, apdo. I). Y no sólo hay que revisar la regulación de la oposición para evaluar el modelo, sino que también el mecanismo previsto para la reversión de la sentencia provisionalmente ejecutada (*infra*, cap. VII, apdo. III).

Con todo, como veremos más adelante dentro de este mismo Capítulo (*infra*, apdo. VII), para un sector de la doctrina el régimen de oposición a la ejecución provisional que ha sido acordada, así como la regulación de los distintos supuestos de revocación de lo provisionalmente ejecutado, no evitan el riesgo de insolvencia del ejecutante, sino que solamente lo atenúan, lo que puede generar situaciones de verdadera injusticia, particularmente cuando los efectos de la ejecución sean irreversibles⁹⁹.

Por último, cabe advertir que nos permitiremos la licencia de no exponer los problemas que originó la supresión operada por la LEC respecto de la ejecución provisional de las resoluciones judiciales obtenidas bajo el amparo de la LEC/1881, toda vez que han transcurrido más de 15 años desde la entrada en vigor de la LEC, por lo que la situación de transitoriedad que originó las dudas sobre la eliminación o el mantenimiento de la caución prestada se encuentra absolutamente superada¹⁰⁰.

⁹⁸ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 300.

⁹⁹ Cfr. CORDÓN MORENO, F., *El proceso de ejecución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 66-67.

¹⁰⁰ Sobre esta situación, *vid.* CARRERAS MARAÑA, J., «El régimen transitorio en materia de ejecución: el primer problema práctico de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *LEC Forum*, núm. 4, 2001, pp. 30-46; REVILLA, F., «Sobre la devolución de la fianza prestada para la ejecución provisional de sentencia», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 3, 2001, pp. 2165-2167; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, pp. 164-165; UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de

e) Régimen especial de oposición

Eliminada la exigencia de prestar caución para solicitar el despacho de la ejecución provisional, la LEC impone al ejecutado la carga de oponerse a la misma, pues, como ha dicho algún autor, «no es el ejecutante el que tiene que conseguir la ejecución provisional, sino el ejecutado el que tiene que evitarla»¹⁰¹.

Así las cosas, la regulación de la LEC contiene un régimen especial de oposición, conforme al cual, el ejecutado sólo puede oponerse una vez que ha sido despachada la ejecución en su contra (art. 528.1 LEC), variando el fundamento y finalidad de la oposición en función de que la condena sea dineraria o no dineraria.

En efecto, según tendremos oportunidad de revisar en el Capítulo VI de este estudio, tratándose de la ejecución provisional de sentencias de condena no dineraria, el ejecutado puede oponerse a tal ejecución en su totalidad (art. 528.2 LEC); en cambio, para el caso de las sentencias de condena dineraria, el ejecutado sólo puede oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, quedándole vedado oponerse a la ejecución provisional en su conjunto (art. 528.3 LEC)¹⁰². En este último caso, el ejecutado debe indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución (art. 528.3.II LEC)¹⁰³.

La caución, como se observa, no ha desaparecido del todo de la regulación de la ejecución provisional, y si bien ya no se exige como requisito para el despacho de la

ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», *op. cit.*, pp. 284-285; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, pp. 297-301.

¹⁰¹ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 367.

¹⁰² Salvo que la oposición se funde, claro está, en motivos procesales, siguiendo las reglas de la ejecución definitiva (*vid.* art. 559 LEC), en cuyo caso la oposición se efectúa frente a la completa ejecución, sea ésta por condenas dinerarias o no dinerarias.

¹⁰³ La exigencia de caución al ejecutado, quien puede ser tan pobre como el ejecutante, ha sido calificada de injusta por VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 855,

ejecución provisional, sigue teniendo un papel relevante en otros momentos de su desarrollo¹⁰⁴, según veremos con más amplitud.

En resumen, el trámite de la oposición es el único mecanismo que tiene el ejecutado en contra de la resolución que despacha la ejecución provisional, y un auténtico contrapunto o sistema compensador frente a la eliminación de la exigencia de prestar caución al ejecutante provisional¹⁰⁵.

f) Regulación de los efectos de la confirmación o revocación de la resolución provisionalmente ejecutada

Como dijimos, la regulación que realiza la LEC de la ejecución provisional es completa, porque se ocupa de todos los extremos relativos a la misma. En este orden de cosas, la ley procesal regula expresamente –y por vez primera en la legislación procesal española¹⁰⁶– la continuación de la ejecución si no hubiera terminado –ejecución que ya no será provisional sino definitiva– en caso de confirmación de la resolución provisionalmente ejecutada (art. 532 LEC); y regula especialmente los efectos de la revocación de dicha resolución, distinguiendo según se trate de una sentencia que condena al pago de una suma de dinero (art. 533 LEC) o de una sentencia de condena no dineraria (art. 534 LEC).

La virtud principal del actual modelo no radica tanto en contener una regulación expresa de los efectos de la confirmación o revocación de la resolución provisionalmente ejecutiva, sino en que, como analizaremos en el Capítulo VII de este trabajo, la LEC protege de forma equilibrada los intereses en juego también en este punto, estableciendo que las devoluciones, reintegraciones o indemnizaciones que correspondan al ejecutado se harán por vía de apremio y ante el mismo Tribunal que

¹⁰⁴ Vid. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 300.

¹⁰⁵ Cfr. ARMENTA DEU, T., *Lecciones de Derecho Procesal Civil. Proceso de Declaración, Proceso de Ejecución y Procesos Especiales*, Marcial Pons, 7ª edición, Madrid, 2013, p. 374.

¹⁰⁶ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», en ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (Coordinador), *Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, Volumen III*, Difusión Jurídica, Barcelona, 2000, p. 54.

conoció de la ejecución provisional, por lo que no se deberá acudir a un proceso diverso para tal fin¹⁰⁷.

V. FUNDAMENTO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Abordar el fundamento jurídico de la ejecución provisional supone indagar sobre la constitucionalidad de la misma, es decir, sobre la compatibilidad entre un régimen de ejecución de resoluciones judiciales definitivas no firmes y las normas que sobre la materia están contenidas en la Constitución. Pero, al mismo tiempo, implica inquirir – admitida que sea su constitucionalidad – sobre las razones que tuvo en vista el legislador para inclinarse por esta institución procesal, y la función o finalidad que ésta cumple dentro del ordenamiento procesal civil, cuestión última que abordaremos en el apartado siguiente.

1. Constitucionalidad de la ejecución provisional

Una primera aproximación a la constitucionalidad de nuestro instituto la encontraremos en el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales firmes como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva.

Como se sabe, el artículo 24.1 CE establece que «todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e interés legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». A este derecho fundamental se le conoce como derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo contenido, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC), se caracteriza por ser complejo, toda vez que el mismo se refiere a varios aspectos¹⁰⁸. En otras palabras, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye el título

¹⁰⁷ Como expresa QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2543, «a diferencia de la legislación derogada, la restitución de lo percibido en ejecución provisional, es mucho más simple. Ya no es preciso un proceso nuevo en el que se persiga la restitución, daños y perjuicios. Basta con la vía de apremio, que se abrirá incluso en caso de revocación parcial, ante el tribunal de la ejecución provisional».

¹⁰⁸ Para un estudio jurisprudencial completo del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, cfr. PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, 2ª edición, Barcelona, 2012.

de un conjunto de derechos que han sido elevados a la categoría de derechos fundamentales¹⁰⁹.

En esta línea, dentro del contenido complejo que el TC atribuye al derecho a la tutela judicial efectiva encontramos el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales¹¹⁰, derecho que comprende tres bloques de materias (o derechos): la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales, las medidas cautelares y la ejecución de las resoluciones judiciales firmes¹¹¹.

El derecho a obtener la ejecución de las sentencias de condena que se encuentren firmes tiene su fundamento constitucional en el derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, tiene el rango de un derecho fundamental. Tal es la relevancia del derecho a la ejecución de las sentencias firmes que algún autor ha señalado que constituye una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho¹¹².

Como se observa, de acuerdo con lo prescrito en el art. 24.1 CE, los justiciables no sólo tienen derecho a una sentencia sobre el fondo del asunto discutido que sea motivada, sino que, además, tienen el derecho fundamental a perseguir el cumplimiento forzoso de dicha sentencia. Este derecho se ve complementado y reforzado con lo dispuesto en el art. 118 de la Carta Fundamental, en cuanto establece que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales», y por lo prescrito en el art. 117.3 CE, al fijar que a los Juzgados y Tribunales les corresponde, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, «hacer ejecutar lo juzgado».

No sucede lo mismo, en cambio, tratándose de la ejecución de resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos de condena que no se encuentren firmes.

¹⁰⁹ Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 157.

¹¹⁰ La reciente STC 38/2016, de 3 de marzo (f.j. 7º), nos recuerda que «una de las proyecciones del derecho reconocido en el art. 24.1 CE es que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el Ordenamiento, lo que implica, de un lado, el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas declaradas en ellas». En el mismo sentido, *vid.* SSTC 83/2001, de 26 de marzo (f.j. 4º); 197/2000, de 24 de julio (f.j. 2º); 198/1994, de 4 de julio (f.j. 3º); 171/1991, de 16 de septiembre (f.j. 3º).

¹¹¹ Cfr. PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, *op. cit.*, p. 85.

¹¹² En este sentido, MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional I. Parte General* —con GÓMEZ COLOMER, J., y BARONA VILAR, S.—, *op. cit.*, p. 213.

Como ha precisado el propio TC, tratándose de la ejecución provisional de las sentencias, «no estamos ante un derecho fundamental directamente comprendido en el art. 24.1 CE, sino ante un derecho de configuración legal, que el legislador puede establecer en los diferentes órdenes jurisdiccionales sometiénolo a determinados requisitos y garantías, dictados tanto en interés de la buena administración de justicia como en orden a la adecuada protección de los intereses de las partes en el proceso»¹¹³.

Por lo tanto, la ejecución provisional de las resoluciones judiciales no forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, correspondiendo al legislador determinar si se admite o no la misma y, en su caso, bajo qué requisitos. El derecho a la ejecución provisional, en consecuencia, es un derecho de configuración legal –del mismo modo que el derecho al recurso en materia procesal civil¹¹⁴– o, si se prefiere, una cuestión de política legislativa que la Constitución no ha previsto, pero que tampoco ha prohibido, entregando al legislador procesal la opción de configurar el marco normativo que la regule¹¹⁵.

En este punto cabe advertir que el deber general de cumplir las resoluciones judiciales establecido en el citado art. 118 CE no puede considerarse como un obstáculo para que el legislador admita, con mayor o menor amplitud, la ejecución provisional de las resoluciones judiciales, toda vez que de acuerdo con la correcta interpretación de dicha disposición, lo que la Constitución ordena es que toda sentencia que haya alcanzado firmeza debe ejecutarse –y en lo posible, en sus propios términos–, pero no establece la prohibición de ejecutar sentencias que no sean firmes¹¹⁶.

Sobre esta idea, el TC tiene declarado que del «derecho fundamental a la ejecución de las sentencias, no puede en término generales y con esa misma naturaleza constitucional, deducirse el derecho a la no ejecución de las sentencias cuya posibilidad

¹¹³ Cfr. SSTC 312/2006, de 8 de noviembre (f.j. 4º); 5/2003, de 20 de enero (f.j. 5º); 266/2000, de 13 de noviembre (f.j. 4º); 191/2000, de 13 de julio (f.j. 8º); 105/1997, de 2 de junio (f.j. 2º); 87/1996, de 21 de mayo (f.j. 3º); 80/1990, de 26 de abril (f.j. 2º).

¹¹⁴ PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, op. cit., pp. 97-98.

¹¹⁵ *Ídem*, p. 94.

¹¹⁶ Por todos, vid. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 287; CÁMARA RUIZ, J., «Ejecución provisional», en ORTELLS RAMOS, M., et al., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., p. 921; y MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., pp. 105-106.

esté permitida en términos de legalidad ordinaria por las normas procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales»¹¹⁷, por lo que, «en definitiva, son perfectamente compatibles la efectividad de la tutela judicial y la eficacia ejecutiva de las sentencias no firmes por haber sido impugnadas, a reserva del resultado final de la impugnación»¹¹⁸.

Por su parte, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (en lo que sigue, LOPJ), presupone la constitucionalidad de la ejecución provisional de resoluciones judiciales, al establecer, en su art. 17.2, que «las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes».

De acuerdo con todo lo expuesto, se puede concluir, como lo hace la doctrina más autorizada¹¹⁹, que la ejecución provisional de las sentencias en el proceso civil no sólo no está prohibida en la Constitución, sino que, por el contrario, encuentra en ella –específicamente, en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva–, su fundamento y sus límites, por lo que, en definitiva, será el legislador ordinario el encargado de regularla y fijar sus requisitos y límites, de acuerdo con criterios de política legislativa¹²⁰.

¹¹⁷ Cfr. STC 80/1990, de 26 de abril (f.j. 2º).

¹¹⁸ STC 69/1996, de 18 de abril (f.j. 6º); y AATC 418/1987, de 1 de abril (f.j. 2º); 767/1986, de 8 de octubre (f.j. 2º).

¹¹⁹ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», en PICÓ I JUNOY, J. (Coordinador), *Presente y futuro del proceso civil*, op. cit., p. 586; CÁMARA RUIZ, J., «Ejecución provisional», en ORTELLS RAMOS, M., et al., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pp. 920-921; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 292; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 29; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 40-41.

¹²⁰ En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid, tiene declarado, tras recordar que firmeza y ejecución no son términos indisociablemente vinculados, que «es una legítima opción de política legislativa decidir si, como regla, la operatividad jurídico sustancial de todos los efectos típicos de todas –o sólo de algunas– las resoluciones de fondo dictadas por los órganos jurisdiccionales deben producirse únicamente desde el momento en que alcancen firmeza las resoluciones que los contienen o si, por el contrario, todas éstas o sólo algunas de ellas pueden gozar de verdadero vigor y llevarse a efecto en la realidad material con anterioridad a aquél momento. Esto es, se permite actuar de modo inmediato la tutela reconocida en favor de un sujeto mientras aún es controvertible y se decide si el derecho material a la tutela existe, tiene el alcance y extensión con que ha sido previamente fijado y pertenece efectivamente a aquél a quien ha sido reconocido como su titular». Cfr. SAP Madrid (Secc. 10ª), de 16 de noviembre de 2004 (JUR/2005/46525).

Así, la Exposición de Motivos de la LEC fue clara al fijar que el factor fundamental para optar por el modelo implantado «es la efectividad de las sentencias de primera instancia»¹²¹, sentencia que constituye «un acto jurisdiccional completo con vocación de permanencia, que por haber sido emitido por un tercero imparcial y legitimado para ello permite comprometer el poder de coerción del Estado»¹²².

En conclusión, la opción del legislador por facilitar la ejecución provisional, implica su configuración como un instrumento para lograr la tutela judicial efectiva desde la primera instancia¹²³.

2. La opción de política legislativa por la ejecución provisional

Como acabamos de anotar, la ejecución provisional no es contraria a la Constitución, y se trata de un derecho de configuración legal en definitiva, que el legislador es libre de regular –con mayor o menor amplitud–, conforme a criterios de política legislativa, debiendo resguardar adecuadamente los derechos de las partes.

Al respecto, en la ejecución provisional los derechos de las partes que pueden estar en conflicto son el derecho al recurso y el derecho a la ejecución: «el primero garantiza que toda sentencia pueda ser revisada por un tribunal superior, por lo que mientras no se produzca este segundo grado de enjuiciamiento no debería procederse a la ejecución de la sentencia de primera instancia; y el segundo ampara que toda resolución judicial, en caso de incumplirse, pueda ejecutarse, por lo que al objeto de asegurar la máxima eficacia de este derecho, dicha ejecución no debería retrasarse por el hecho de interponerse un recurso contra la sentencia de primera instancia»¹²⁴.

¹²¹ Apartado XVI, párrafo 8º.

¹²² CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 76.

¹²³ Vid. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., pp. 27-28; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 286.

¹²⁴ Cfr. PICÓ I JUNOY, J., «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», en *Justicia*, núm. 2, 2014, p. 146; «La ejecución provisional de sentencias de primera instancia. Estudio del conflicto entre los derechos al recurso y a la ejecución», en *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*, núm. 39, 2013, p. 64; y «Conflicto entre garantías constitucionales del proceso. La tensión de los derechos al recurso y a la ejecución en el caso de la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia», en PICÓ I JUNOY, J. (Director), *Principios y garantías procesales. Liber Amicorum en homenaje a la profesora M^a. Victoria Berzosa Francos*, Bosch, Barcelona, 2013, p. 42. En estos estudios, el autor realiza un

Ante el conflicto entre el derecho al recurso y el derecho a la ejecución, o si se prefiere, en la lucha entre garantía y eficacia¹²⁵, un ordenamiento jurídico puede adoptar diversas soluciones, que van desde las más radicales —donde prevalece un derecho sobre el otro—, hasta varias soluciones intermedias, que suponen una regulación más o menos amplia de la ejecución provisional¹²⁶.

En este contexto, el legislador español ponderó los intereses en juego y optó por la eficacia, impulsando decididamente la ejecución provisional, concebida bajo el principio *favor creditoris*¹²⁷, buscando la efectividad de las sentencias de primera instancia, de modo que, con el nuevo régimen, los tribunales «habrán de dictar sentencias en principio inmediatamente efectivas por la vía de la ejecución provisional; no sentencias en principio platónicas, en principio inefectivas, en las que siempre gravite, neutralizando lo resuelto, una apelación y una segunda instancia como acontecimientos que se dan por sentados»¹²⁸.

Según ya hemos indicado (*supra*, apdo. IV.1), esta opción de política legislativa implicó un cambio radical respecto de la regulación contenida en la LEC/1881, que si bien admitía la ejecución provisional desde su texto original, lo hizo de forma muy restrictiva, puesto que se inspiraba en las siguientes ideas: *a)* la ejecución sólo era posible, en principio, respecto de las sentencias firmes; y *b)* la ejecución provisional sólo era admisible en los supuestos en que el recurso deducido contra la resolución que no había alcanzado firmeza no produjera efecto suspensivo¹²⁹.

Estas ideas comenzaron a abandonarse con la reforma de 1984, que significó un importante giro hacia la admisibilidad general de la ejecución provisional. Sin embargo —como ya vimos (*supra*, apdo. III)—, esta reforma no logró alcanzar los fines

análisis de las distintas soluciones existen frente al conflicto entre el derecho al recurso y el derecho a la ejecución, con referencia a los modelos adoptados por diferentes ordenamientos jurídicos.

¹²⁵ GUASP DELGADO, J. y ARAGONESES ALONSO, P., *Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte especial. Procesos declarativos y de ejecución*, *op. cit.*, p. 673.

¹²⁶ Para una referencia a las diversas alternativas adoptadas por distintos ordenamientos jurídicos, *vid.* PICÓ I JUNOY, J., «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», *op. cit.*, pp. 158-162.

¹²⁷ Cfr. Díez-Picazo Giménez, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 366.

¹²⁸ Apartado XVI, párrafo 9º, EM de la LEC.

¹²⁹ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, p. 284.

perseguidos. No obstante lo cual, las Audiencias Provinciales recogieron las ideas que inspiraron la citada reforma —principalmente, que la ejecución y la firmeza de las resoluciones no son cuestiones equivalentes—, concepción que luego fue consolidada por la doctrina del Tribunal Constitucional¹³⁰.

Junto con las ideas expresadas, la radical opción de la LEC por el derecho de ejecución tuvo en cuenta la real situación de los tribunales civiles españoles, para lo cual se realizaron completos estudios estadísticos que arrojaron como datos incontestables: primero, que la gran mayoría de las sentencias de primera instancia son totalmente estimatorias de la demanda y, segundo, que la gran mayoría de los recursos de apelación son desestimados¹³¹. Estos datos permiten justificar —estadísticamente hablando— que se favorezca la ejecución provisional de las sentencias, a fin de trasladar al demandado los efectos de la pendencia del proceso una vez dictada la sentencia¹³².

En definitiva, los postulados de política jurídica en que se basa el modelo de ejecución provisional implantado por la LEC están contenidos en su propia Exposición de Motivos, que podemos resumir en los siguientes:

- a) Favorecer la efectividad de las sentencias de primera instancia, admitiendo su ejecución provisional sin necesidad de prestar caución¹³³;
- b) Apostar por la confianza en la Administración de Justicia y por la importancia de su impartición en primera instancia¹³⁴;
- c) Evitar el uso del sistema de recursos con ánimo exclusivamente dilatorio¹³⁵;

¹³⁰ Vid., por todos, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., pp. 20-21; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», op. cit., pp. 21-23; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 284-286.

¹³¹ De acuerdo con el «Libro Blanco de la Justicia Civil», publicado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997, el 73% de las sentencias de primera instancia eran totalmente estimatorias; sólo el 11% eran totalmente desestimatorias; y aproximadamente el 70% de los recursos de apelación eran desestimados. Cfr. PICÓ I JUNOY, J., «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», op. cit., p. 163.

¹³² En similar sentido, vid. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, op. cit., p. 511, quien enseña que «la ejecución provisional es el instrumento que permite que el bien o bienes litigiosos pasen a poder del demandante tras vencer en la primera instancia del proceso. Si el demandado recurre la sentencia de primera instancia, el proceso continúa y los bienes a que se refiera seguirán siendo litigiosos, si bien la ejecución provisional permite que durante el tiempo que dure la tramitación del recurso dichos bienes sean disfrutados por el demandante, igual que durante la tramitación de la primera instancia los disfrutó el demandado».

¹³³ Apartado XVI, párrafos 1º, 2º y 8º.

¹³⁴ Apartado XVI, párrafos 1º, 9º y 10º.

- d) Resguardar suficientemente los intereses del ejecutado, quien puede oponerse a la ejecución y, además, en caso de revocación, podrá buscar la reintegración por la vía de apremio¹³⁶; y
- e) Aspirar a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos¹³⁷.

Los criterios de política legislativa recién citados ostentan un doble carácter de justificación y metas del modelo, por cuanto explican, de un lado, las razones que llevaron al legislador a impulsar la institución de la ejecución provisional, y revelan, de otro, los objetivos que se persiguen con el cambio de régimen, tema este último que analizaremos en el apartado siguiente.

En resumen, ante el conflicto entre el derecho a la ejecución y el derecho al recurso que supone la regulación de la ejecución provisional, con base en la alta tasa de estimación de las demandas y la escasa prosperabilidad de los recursos de apelación¹³⁸, el legislador optó por favorecer la posición del acreedor ejecutante, sin descuidar los intereses de la parte que soportará la ejecución; y si bien el modelo supone riesgos, el legislador los asume «en aras de la efectividad de la tutela judicial y la debida protección del crédito»¹³⁹.

VI. FINALIDAD DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

¹³⁵ Apartado XVI, párrafos 6º y 13º.

¹³⁶ Apartado XVI, párrafos 2º y 7º.

¹³⁷ Apartado XVI, párrafo 14º.

¹³⁸ Cfr. PICÓ I JUNOY, J., «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», *op. cit.*, p. 165.

¹³⁹ Apartado XVI, párrafo 12º, EM de la LEC.

Tradicionalmente, la doctrina ha atribuido diversas funciones a la ejecución provisional, como instituto procesal, en el conjunto del sistema de Administración de Justicia¹⁴⁰.

Justamente, se afirma que autorizar la ejecución de resoluciones que no han adquirido firmeza tiene un impacto en el número de recursos que se interponen en contra de sentencias estimatorias de la demanda, por cuanto pierde sentido impugnar dicha decisión si el recurso no se concede con efecto suspensivo, cuando el único propósito del recurso era conservar la posesión de los bienes litigiosos o demorar el cumplimiento de la condena impuesta por la sentencia. Desde esta perspectiva, la ejecución provisional cumple con *evitar la interposición de recursos con un ánimo meramente dilatorio*.

Por otra parte, se sostiene que, como consecuencia de la disminución en el número de recursos, la ejecución provisional produce una *reducción en el número global de causas* que se tramitan en Juzgados y Tribunales, lo que contribuye a descongestionar el sistema.

Por último, la ejecución provisional cumple la función de *dar efectividad a las resoluciones impugnadas*, lo que reduce el horizonte temporal de la respuesta jurisdiccional que se proporciona al demandante, cumpliendo con las exigencias del derecho a la tutela judicial.

De acuerdo a lo declarado por su Exposición de Motivos, como acabamos de apuntar, con la regulación de esta institución, la LEC ha buscado revalorizar la justicia de primera instancia, declarando provisionalmente ejecutables, con algunas excepciones, las sentencias de condena de ese grado jurisdiccional. Se concibe el sistema, por tanto, con una finalidad centrada en la efectividad de las sentencias condenatorias o, si se prefiere –y con lenguaje clásico–, se le imprime a la institución un carácter «satisfactivo»¹⁴¹.

¹⁴⁰ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 77-82, quien denomina estas funciones como finalidad preventiva (reducción de recursos), finalidad agilizadora (reducción de causas en general) y finalidad satisfactiva (efectividad de las sentencias).

¹⁴¹ Con todo, algunos autores ponen el acento en la denominada finalidad preventiva como la función principal, y hasta exclusiva, de la institución. En este sentido, *vid.* CORDÓN MORENO, F., *El*

Mas, la LEC también persigue otras finalidades con la admisibilidad general de la ejecución provisional –reducir los recursos con ánimo dilatorio; cambiar la mentalidad de pactos y pleitos–. Se trata, sin embargo, de funciones secundarias o reflejas de la principal función recién anotada, que han sido calificadas como objetivos de «política procesal»¹⁴².

1. La efectividad de la tutela judicial desde la primera instancia como función principal de la ejecución provisional

Como venimos exponiendo, la propia Exposición de Motivos de la LEC declara que el factor fundamental que tuvo en cuenta el legislador para optar por favorecer la ejecución provisional es la efectividad de las sentencias de primera instancia¹⁴³, aunque ello implique ciertos riesgos –particularmente, la insolvencia del ejecutante en caso de revocación de la resolución provisionalmente ejecutada por el tribunal que resuelve el recurso–, peligros que se asumen en aras de la efectividad de la tutela judicial y de la necesaria protección del crédito¹⁴⁴.

Hemos indicado que el fundamento de la institución está en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), garantía fundamental que incluye el derecho a la ejecución de las resoluciones firmes, pero que no se opone a la ejecución de las resoluciones que aún no adquieren firmeza. Como contrapartida, en el mismo precepto constitucional se encuentran los límites de la ejecución provisional, pues su regulación no puede restar virtualidad al derecho al recurso del ejecutado¹⁴⁵.

La facilitación de la ejecución provisional implica acercar en el tiempo la satisfacción de los créditos y reducir el riesgo de ejecuciones inefectivas¹⁴⁶. No cabe

proceso de ejecución, op. cit., p. 65; SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II* —con PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.—, *op. cit.*, pp. 308-309.

¹⁴² Cfr. VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit.*, p. 23.

¹⁴³ Apartado XVI, párrafo 8º.

¹⁴⁴ Apartado XVI, párrafo 12º.

¹⁴⁵ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 292.

¹⁴⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 903-904.

dudar, por tanto, que la opción del legislador favorece la posición de la parte que obtuvo en el pleito una sentencia a su favor¹⁴⁷, y así se ha hecho, precisamente, para satisfacer las exigencias del derecho a la tutela judicial. Por lo tanto, la finalidad principal de la institución no puede ser otra que la efectividad inmediata de las resoluciones judiciales¹⁴⁸.

Permitir la ejecución de las sentencias de primera instancia, aunque hayan sido impugnadas, supone una apuesta por la confianza en la justicia impartida en ese grado jurisdiccional. Pues bien, esta fue expresamente la postura asumida por la LEC, que decide revalorizar la justicia civil de primera instancia, bajo el entendido de que una nueva ley procesal civil «debe elaborarse sobre la base de un serio quehacer judicial, en todas las instancias y en los recursos extraordinarios y de ninguna manera puede sustentarse aceptando como punto de partida una supuesta o real falta de calidad en dicho quehacer, defecto que, en todo caso, ninguna ley podría remediar»¹⁴⁹.

Tanto la apuesta por la justicia de primera instancia como la opción por la posición de ejecutante y, en definitiva, la protección de su derecho de crédito —que se basa en un título judicial que aún no está firme—, no representan aspiraciones aisladas ni específicas de la ejecución provisional. Por el contrario, se incardinan dentro de los grandes criterios inspiradores de la ordenanza procesal española¹⁵⁰, de los que la institución que estudiamos es, precisamente, un fiel reflejo. En efecto, la doctrina ha subrayado que tanto la revalorización de la primera instancia y la necesaria confianza en

¹⁴⁷ MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil. Parte General* —con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.—, *op. cit.*, p. 405.

¹⁴⁸ CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 29-30; PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», en *Diario La Ley*, núm. 6215, 2005.

¹⁴⁹ Apartado XVI, párrafo 14, EM de la LEC.

¹⁵⁰ Los principales criterios inspiradores de la LEC, según DE LA OLIVA SANTOS, A., «La ley española 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Orientación para una justicia más eficaz», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, pp. 14-16, son: la atribución de absoluta primacía al interés del justiciable; el propósito de acortar el horizonte temporal de una respuesta eficaz a las demandas de tutela jurisdiccional; el cuidado de no instaurar ni fomentar ninguna clase de sumariidad excesiva; el convencimiento de que no cabía una tutela jurisdiccional en verdad efectiva sin un sustancial incremento de la eficacia de la primera instancia; la decisión de proteger más eficazmente el crédito; y el propósito de lograr que la doctrina jurisprudencial volviese a tener una seria fuerza directiva y ejemplar en la vida jurídica.

sus protagonistas¹⁵¹, como la protección judicial del crédito¹⁵², fueron dos de los criterios en que se basó la elaboración de la LEC, y que cristalizaron en una serie de concretas disposiciones legales e instituciones procesales, siendo una de ellas la ejecución provisional de las sentencias¹⁵³.

Por tanto, resulta del todo coherente con la filosofía de la LEC atribuirle a la ejecución provisional, como finalidad principal, la efectividad de la tutela judicial desde la primera instancia, con la consecuente confianza por la justicia impartida en este grado jurisdiccional.

2. Las funciones secundarias de la institución

Para el legislador procesal civil, la ejecución provisional no sólo constituye un instrumento para lograr la tutela judicial efectiva desde la primera instancia. La institución es transversal en tanto satisface o puede contribuir a satisfacer otros criterios inspiradores de la LEC, de ahí que el legislador espera que con la nueva regulación de esta institución se alcancen fines más amplios, en aras de una justicia civil más eficaz. Se trata, a nuestro juicio, de funciones secundarias o reflejas de la institución.

En este sentido, hemos adelantado que la Exposición de Motivos de la LEC es clara en cuanto señala que el sistema de ejecución provisional operado por la misma tendrá un efecto disuasorio respecto del condenado que sólo ve en el uso de los recursos

¹⁵¹ Sobre la relación entre este criterio inspirador de la LEC y la ejecución provisional de sentencias, *vid.*, por todos, HINOJOSA SEGOVIA, R. y PALOMO VÉLEZ, D., «La apuesta de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española por la revalorización de la importancia del enjuiciamiento de primer grado: la nueva regulación de la ejecución provisional de las sentencias», en *Revista Ius et Praxis*, núm. 2, 2006, pp. 123-162.

¹⁵² Sobre la relación entre el criterio de la protección del crédito y la ejecución provisional, cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A., «El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 26 de diciembre de 1997, y la protección del crédito», *op. cit.*, p. 828; y del mismo autor, «El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 30 de octubre de 1998, y la protección del crédito: ejecución provisional y proceso monitorio», *op. cit.*, p. 1643; UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», *op. cit.*, pp. 283-284; VEGAS TORRES, J., «La reforma procesal civil española. Criterios inspiradores y principales innovaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 613.

¹⁵³ DE LA OLIVA SANTOS, A., «La ley española 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Orientación para una justicia más eficaz», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, *op. cit.*, p. 17.

procesales mecanismos para dilatar el cumplimiento de la prestación a que ha sido condenado. Al mismo tiempo, se espera que la nueva regulación produzca un cambio en la cultura jurídica, que se traduciría en un cambio de mentalidad en los pleitos y en los pactos.

a) *La reducción de los recursos con ánimo puramente dilatorio*

Al regularse la ejecución provisional, se dota al sistema procesal de un mecanismo que evita el uso de los medios de impugnación con meros fines dilatorios por la parte que ha sido condenada por una resolución judicial¹⁵⁴, es decir, que ante el resultado adverso a sus intereses, la parte se valga del efecto suspensivo del recurso para evitar o retrasar el cumplimiento de la prestación a que ha sido condenada.

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la LEC, el legislador atendió a esta finalidad preventiva en el momento de diseñar el actual modelo de ejecución provisional, al señalar que «este nuevo régimen de la ejecución provisional deparará, a buen seguro, muchos más beneficios directos que perjuicios o casos injustos y serán muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovación radical proyectada, *como la disminución de recursos con ánimo exclusivamente dilatorio*» [la cursiva es nuestra]¹⁵⁵.

La sola regulación en la ley procesal de la ejecución provisional opera preventivamente, como una suerte de valladar frente a las impugnaciones infundadas¹⁵⁶. Entendida correctamente, empero, esta función opera no como un obstáculo en la interposición de recursos, sino en cuanto exige de la parte vencida que se replantee la estrategia procesal a seguir, en orden a reservar la vía de los recursos a aquellos casos en que tenga una legítima expectativa de obtener un resultado favorable con la impugnación, sobre todo en aquellos sistemas en que la ejecución provisional se concede *ex lege*, como sucede en el ordenamiento procesal español¹⁵⁷.

¹⁵⁴ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 903.

¹⁵⁵ Apartado XVI, párrafo 13º.

¹⁵⁶ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 198.

¹⁵⁷ En este sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 78-79.

Para justificar esta finalidad de la ejecución provisional, la LEC supone que es frecuente el comportamiento estratégico de recurrir para dilatar el procedimiento por parte del condenado, fenómeno cuya existencia es reconocida por la gran mayoría de los operadores jurídicos. Sin embargo, no existe en la literatura procesal o socio-jurídica un estudio empírico serio de cuán frecuente es este comportamiento en la realidad¹⁵⁸. La ausencia de un estudio de esta naturaleza se debe, probablemente, a que se trata de un comportamiento muy difícil o imposible de medir.

E íntimamente vinculada al carácter disuasorio de la ejecución provisional, en relación a la interposición de recursos meramente dilatorios de la efectividad de una resolución («función preventiva»), se atribuye tradicionalmente a la institución una función «agilizadora», por cuanto la reducción del número de recursos impactaría positivamente en el número total de asuntos de que conocen los tribunales, lo que contribuiría a una disminución de la carga de trabajo de los mismos y a la consecuente descongestión del sistema¹⁵⁹.

No obstante lo que se viene diciendo, algunos autores reconocen que, pese a las intenciones del legislador, no parece claro que la aplicación práctica de la regulación de la ejecución provisional conlleve la reducción de los recursos¹⁶⁰, por lo que la teoría que sugiere un efecto disuasorio a la ejecución provisional —en cualquiera de sus versiones—, es dudosa, por cuanto los casos en que la institución se convierte en un instrumento para reducir los recursos son infrecuentes¹⁶¹.

¹⁵⁸ Cfr. RAMOS ROMEU, F., «¿Reduce realmente la ejecución provisional la interposición de recursos injustificados?», *op. cit.*, p. 4.

¹⁵⁹ Alguna doctrina ha señalado que esta rebaja en la carga de trabajo de las Audiencias Provinciales se haría a costa de sobrecargar las funciones de los Juzgados de Primera Instancia, puesto que si efectivamente se evita el uso abusivo de los recursos, el número de ejecuciones ordinarias aumentaría considerablemente, lo que podría ensombrecer la función de descongestión del sistema. En este sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 80; FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 297; y VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 22.

¹⁶⁰ *Vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 30.

¹⁶¹ RAMOS ROMEU, F., «¿Reduce realmente la ejecución provisional la interposición de recursos injustificados?», *op. cit.*, p. 10.

En efecto, de acuerdo con las estadísticas oficiales, desde la entrada en vigor de la LEC las tasa de interposición de recursos ha tenido una muy leve disminución, y la tasa de confirmación de recursos por parte de las Audiencias Provinciales ha sufrido un leve incremento, comparadas con las cifradas existentes durante la vigencia de la LEC/1881. Por tanto, los datos empíricos parecen confirmar que, contrariamente a las expectativas del legislador y a lo afirmado por la doctrina, la facilitación de la ejecución provisional no tiene ningún efecto, o ninguno que sea importante, sobre el incentivo o desincentivo para interponer un recurso por el demandado que ha perdido el pleito en primera instancia¹⁶².

Atendido que la propia Exposición de Motivos de la LEC reconoce que la finalidad de evitar el uso fraudulento del sistema de recursos atribuida a la reglamentación de la ejecución provisional es un efecto colateral de la misma, y no su finalidad principal, el escaso impacto real en la disminución de los recursos que ha tenido (o está teniendo) la reforma no puede considerarse como un fracaso del sistema. Por el contrario, las cifras permiten confirmar que la gran utilidad práctica de la ejecución provisional está en la disminución del horizonte temporal en la respuesta jurisdiccional que recibe quien demanda la tutela judicial de sus derechos o intereses legítimos. Es en esta dimensión en donde debe ser evaluado el impacto del actual modelo de ejecución provisional de sentencias.

Con el tiempo, el legislador ha comprendido que existen otros mecanismos procesales que resultan más idóneos que la ejecución provisional para reducir el número de recursos que absorbe el sistema y para disuadir a los justiciables de un uso abusivo y sin fundamentos de su derecho a recurrir, como lo demuestran algunas reformas operadas en los últimos años, dirigidas precisamente a evitar el uso desmedido de los medios de impugnación. Entre estas reformas, destaca en primer lugar la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que añadió una Disposición Adicional Decimoquinta a esta norma, por la que se establece la exigencia de consignar

¹⁶² *Ídem*, pp. 26-27.

un *depósito* con carácter previo a la interposición de los recursos que deban tramitarse por escrito, so pena de no admitirse a trámite.

Y en segundo término, cabe mencionar la polémica¹⁶³ Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que establece, en lo que nos interesa en este punto, que constituye un hecho imponible de *tasa* el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por la interposición de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación, en el ámbito civil [art. 2º d) y e)]. Se debe advertir, sin embargo, que el Tribunal Constitucional ha declarado recientemente¹⁶⁴ la inconstitucionalidad y la nulidad, entre otras, de las tasas previstas en el orden civil para la interposición de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y casación, exigidas por el artículo 7.1 de la citada ley. El TC entiende que resulta constitucionalmente legítimo que el legislador limite el derecho de acceso tanto a la jurisdicción como al recurso, con la finalidad de prevenir o disuadir comportamientos abusivos en su ejercicio; no obstante, el importe mismo de la tasa debe ser proporcional a los fines que se persiguen para que se ajuste al artículo 24.1 CE, lo que, en definitiva, no ocurre respecto de las tasas y cuotas variables exigidas por los preceptos cuya inconstitucionalidad y nulidad ha sido declarada.

b) El cambio de mentalidad en los pleitos y en los juicios

De acuerdo con la Exposición de Motivos de la LEC, con el novedoso sistema de ejecución provisional se «aspira a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos. En los pactos, para acordarlos con ánimo de cumplirlos; en los pleitos, para afrontarlos con la perspectiva de asumir seriamente sus resultados en un horizonte

¹⁶³ Sobre la cuestionada ley de tasas judiciales, cfr. el estudio introductorio a cargo de DE LA OLIVA SANTOS, A., en BENTHAM, J., *Una protesta contra las tasas judiciales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013. Asimismo, desde una óptica constitucional, vid. GONZÁLEZ ALONSO, A., «Las tasas judiciales (o sobre la aflicción) desde la perspectiva constitucional», en *RJUAM. Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 27, 2013, pp. 157-182; y ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, F., «Tasas judiciales: entre principio de proporcionalidad y política de derechos fundamentales», en *Revista española de derecho constitucional*, núm. 100, 2014, pp. 221-242.

¹⁶⁴ STC 140/2016, de 21 de julio.

mucho más próximo que el que es hoy habitual. Se manifiesta así, en suma, un propósito no meramente verbal de dar seriedad a la Justicia»¹⁶⁵.

Esta función que se pretende de la institución ha sido criticada por algún autor, por cuanto «parece frívolo pretender convertir la ejecución provisional, por mucho que se reforme su régimen jurídico, en la institución clave de todo sistema jurídico», a lo que se suma que «la obligación de cumplir los pactos y las sentencias está en la esencia misma del Derecho y de todo ordenamiento jurídico»¹⁶⁶. Sin embargo, más que una finalidad, constituye una verdadera aspiración del legislador¹⁶⁷, que se entiende si se hace una mirada de conjunto a la gran reforma del sistema de justicia civil que significó la LEC, y a la apuesta que se hace por la justicia del primer grado jurisdiccional, según vimos en el apartado anterior. Ciertamente, la posibilidad de obtener la ejecución provisional de una sentencia puede conllevar un mayor grado de cumplimiento de los contratos privados, puesto que cualquier mejora en la efectividad de la justicia aumenta la capacidad disuasoria de dicha institución lo que incentiva el cumplimiento¹⁶⁸.

Con todo, resulta difícil evaluar si este cambio de mentalidad o de cultura jurídica se ha producido o no, para lo cual se precisaría de un estudio serio de sociología jurídica, cuestión que escapa con creces de los fines de esta investigación¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Apartado XVI, párrafo 14º.

¹⁶⁶ CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», en PICÓ I JUNOY, J. (Coordinador), *Presente y futuro del proceso civil*, op. cit., p. 589.

¹⁶⁷ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 287.

¹⁶⁸ SHAVELL, S., *Foundations of economics analysis of law*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2004, p. 415, citado por RAMOS ROMEU, F., «¿Reduce realmente la ejecución provisional la interposición de recursos injustificados?», en *INDRET*, *Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2006, disponible en www.indret.com/pdf/385_es.pdf, p. 5.

¹⁶⁹ Para una completa referencia a la relación existente entre cultura y proceso, cfr. CHASE, O., *Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de controversias en un contexto intercultural*, Marcial Pons, Madrid, 2011.

VII. VALORACIÓN CRÍTICA DEL MODELO ESPAÑOL DE EJECUCIÓN PROVISIONAL

El sistema de ejecución provisional que hemos descrito constituye un cambio radical respecto del modelo anterior, y obedece a una política legislativa con una clara orientación hacia la protección judicial del crédito, así como una apuesta por la administración de justicia civil de primera instancia.

El fundamento –y sus límites– de la ejecución provisional lo encontramos en el derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello, en un determinado ordenamiento jurídico es correcta la regulación legal de la institución que, junto con facilitar la ejecución de una resolución que no es firme, privilegiando la posición del acreedor, no produce una situación de indefensión en el ejecutado, en caso de revocación¹⁷⁰.

El sistema de ejecución provisional implementado por la LEC no impide –ningún sistema podría– el riesgo de insolvencia, como lo reconoce su propia Exposición de Motivos, por lo que resulta posible que se den situaciones injustas en la práctica. Sin embargo, la ley procesal civil realiza una equilibrada ponderación de los intereses en juego –derecho a la ejecución y derecho al recurso–, y apuesta decididamente por impulsar esta institución, estableciendo herramientas concretas para evitar injusticias, todo ello con la convicción de que «este nuevo régimen de la ejecución provisional deparará, a buen seguro, muchos más beneficios directos que perjuicios o casos injustos y serán muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovación radical proyectada, como la disminución de recursos con ánimo exclusivamente dilatorio»¹⁷¹.

La amplia mayoría de la doctrina científica¹⁷², se mostró favorable al nuevo régimen de la institución, y compartió, en términos generales, los criterios de política

¹⁷⁰ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 47.

¹⁷¹ Apartado XVI, párrafo 13º.

¹⁷² Sin rigor exhaustivo, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, pp. 31-33; GÓMEZ SÁNCHEZ, J., *La ejecución civil. Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 59; Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 903-904; CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 53; DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 41-42; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, p. 2143; CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias de primera instancia en el proceso civil

legislativa que tuvo en cuenta el legislador para impulsar la ejecución provisional. Del mismo modo, se valoró positivamente que se hiciera una regulación completa y unitaria de la misma, superando los vacíos de la LEC anterior. Finalmente, si bien existe el riesgo de insolvencia del ejecutante, la nueva reglamentación proporciona adecuadas herramientas para evitar –no impedir– que ello ocurra.

No obstante, el modelo de ejecución provisional implementado no estuvo exento de críticas, transformándose en una de las innovaciones más polémicas de toda la LEC. Las aprensiones de la doctrina apuntaron tanto a algunos aspectos concretos de la regulación contenida en la LEC¹⁷³, como a los argumentos utilizados en la Exposición de Motivos para justificar la opción de política legislativa a favor de la ejecución provisional¹⁷⁴. Pero, sin duda, lo más cuestionado del modelo fue la excesiva amplitud con que la LEC concede efectividad a los pronunciamientos que no han adquirido firmeza¹⁷⁵, especialmente desde que se suprimió la exigencia de caución al ejecutante para obtener el despacho de la ejecución [*supra*, apdo. IV.1.d)].

español», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, pp. 424-425; ASENCIO MELLADO, J., *Derecho Procesal Civil*, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2012, pp. 351-352; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 292; y GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 197-198.

¹⁷³ En este último sentido, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 297, expresa que «la ejecución provisional de la LEC suscita sensaciones contrapuestas. Por un lado supone un impulso significativo para esta figura, pero, por otro, bastantes aspectos concretos de su regulación aún precisan de una sustancial mejora».

Al respecto, hay que tener presente que algunas cuestiones puntuales de la reglamentación de nuestra institución han sido objeto de reformas legales (*supra*, apdo. IV.1), de manera que determinados aspectos que generaron controversia doctrinal y jurisprudencial se han visto superados, como tendremos oportunidad de exponer a lo largo de este trabajo.

¹⁷⁴ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», *op. cit.*, p. 589; SERRA DOMÍNGUEZ, M., *La Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2000, p. 75.

¹⁷⁵ Vid. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 150, quien afirma que «no puede excluirse la posibilidad de que el Legislador se haya ido de uno al otro extremo. La ejecución provisional rápida, indiscriminada, otorgada con sólo pedirla, no sometida a plazo, sin previo requerimiento de pago, impune, que no prevé el riesgo de insolvencia del que injustamente ejecutó, es, probablemente, una ejecución que rompe el principio de igualdad de las partes y aboca con facilidad a la indefensión del ejecutado. Como con tanta frecuencia ha sucedido, solo la prudencia de los jueces moderará la extremosa regulación legal y conformará con sus sentencias lo que en definitiva resulte».

En similares términos, VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 854, sostiene que «el legislador ha encontrado la manera de dar una solución rápida al problema del atasco judicial suprimiendo las garantías de los ciudadanos al acceso de una revisión del primer pronunciamiento, antes de ver ejecutados sus bienes, conculcando con ello la presunción de inocencia».

Entre los autores que se mostraron abiertamente contrarios al nuevo modelo de ejecución provisional, se afirmó que la LEC, guiada por una idea «casi obsesiva»¹⁷⁶ de protección del crédito, privilegió de forma desmedida la posición del actor, sin contemplar medidas eficaces para hacer frente a la posible situación de insolvencia del ejecutante que haga imposible retornar al estado anterior a la realización de las actividades ejecutivas sufridas por el ejecutado, en caso de revocación de la resolución provisionalmente ejecutada¹⁷⁷, desaprovechando la oportunidad para haber adoptado una solución intermedia entre una ejecución provisional muy restrictiva –como la regulada en la LEC/1881–, y una demasiado arriesgada –como la establecida por la LEC vigente–¹⁷⁸.

Con un enfoque más templado, algunos autores, sin oponerse al nuevo modelo, pero atendida la eliminación de la exigencia de prestar caución para solicitar que se acuerde la ejecución provisional, cuestionaron la falta de una norma de cierre del sistema que garantizara de forma efectiva la restitución de lo ejecutado en caso de revocación –como podría ser la responsabilidad directa del Estado, como se contempla en la legislación laboral¹⁷⁹, o la declaración expresa de responsabilidad de Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia¹⁸⁰, o la creación de un fondo estatal de garantía que asegure la indemnidad de todos los provisionalmente

¹⁷⁶ Cfr. VÁZQUEZ SOTELO, J., «Ejecución provisional y medidas cautelares», *op. cit.*, pp. 488-489, quien expresa que «esta facilitación de la ejecución de casi todas las sentencias de primer grado ha sido presentada ante la opinión pública como un maravilloso talismán que va a evitar la morosidad de los deudores y va a hacer realidad que la tutela dispensada por los Jueces sea real y efectiva y además pronta», para concluir que no es cierto que la ejecución provisional «vaya a ser en todo caso una magnífica panacea al servicio de la rapidez y eficacia de la tutela judicial».

¹⁷⁷ MORENO CATENA, V., «Algunos problemas de la ejecución forzosa», *op. cit.*, p. 200.

¹⁷⁸ Según SERRA DOMÍNGUEZ, M., *La Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 77, «entre el inadecuado sistema de ejecución provisional previsto en los arts. 385 y 1.722 LEC, que obligan a afianzar unas sumas que pueden no percibirse, y el nuevo sistema en el que se permite ejecutar sin afianzamiento alguno, se sitúa el más perfecto sistema de los arts. 787 y 943 LEC 1.881 que permite la ejecución, pero sólo obligaba a afianzar cuando de esta se hubiera obtenido un resultado positivo».

El autor no sólo cuestiona el modelo de ejecución provisional, sino que fue muy contrario al texto general y a la oportunidad en que se aprobó la LEC. Cfr. *Ídem*, pp. 5-6.

¹⁷⁹ Cfr. ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», en LÓPEZ LÓPEZ, E. y ALEGRET BURGUÉS, M. (Directores), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia*, Estudios de Derecho Judicial, 44 – 2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 723.

¹⁸⁰ QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. *et al.* (Coordinadores), *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Tomo II: Artículo 281 al 555*, *op. cit.*, p. 2543.

ejecutados¹⁸¹–; pues por mucho que el riesgo de insolvencia fuera mínimo, es un riesgo que el legislador asume, pero que no tendría por qué asumir la persona o empresa que soportó la ejecución de una sentencia que no era firme.

Por las razones anteriores, algún autor ha llegado a afirmar que la reglamentación legal de la institución sería inconstitucional¹⁸², o, cuanto menos, supondría un notorio desequilibrio en la situación del ejecutado por el riesgo de insolvencia del que injustamente obtuvo la ejecución, en caso de revocación de la resolución recurrida¹⁸³.

No se puede negar, por lo visto, que la regulación de la ejecución provisional implantada por la LEC fue polémica y que la opción por favorecer la institución entraña ciertos riesgos. Se trata de una institución que no genera un entusiasmo intenso ni generalizado, puesto que se presta a críticas desde diversos puntos de vista por algunos problemas que puede conllevar, aunque a veces se trata de una crítica superficial¹⁸⁴. Sin embargo, habida consideración de que no existe ningún modelo de ejecución provisional de sentencias que no tenga ventajas e inconvenientes¹⁸⁵, la institución se ha terminado aceptando –por algunos a regañadientes¹⁸⁶–, y se ha consolidado con el tiempo.

¹⁸¹ GONZÁLEZ VELASCO, J., «La ejecución provisional en la LEC de 7 de enero de 2000», *op. cit.*, p. 498.

¹⁸² En este sentido, ALEGRET BURGÚÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, pp. 719-720, plantea que el régimen de la ejecución provisional puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no exige prestación de fianza ni hace responsable directamente al Estado de los perjuicios que se puedan ocasionar en caso de insolvencia del ejecutante provisional.

¹⁸³ Cfr. GUASP DELGADO, J. y ARAGONESES ALONSO, P., *Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte especial. Procesos declarativos y de ejecución*, *op. cit.*, p. 674.

¹⁸⁴ Cfr. RAMOS ROMEU, F., «¿Es deseable favorecer la ejecución provisional?», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 1-2, 2008, p. 217.

¹⁸⁵ PICÓ I JUNOY, J., «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», *op. cit.*, p. 168.

¹⁸⁶ Como expresa VÁZQUEZ SOTELO, J., «De la “*iurisdictio in sola notione consistit*” a la prevalencia de la ejecución», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 38, «la ejecución provisional sin tener que constituir el afianzamiento y sin socializar los riesgos (vg. constituyendo un fondo como se ha hecho en otros ámbitos, vg. para la garantía de los salarios pendientes o para recibir indemnización en los casos de accidentes de circulación) a muchos nos pareció que podría resultar una temeridad por parte del legislador. Sin embargo, han transcurrido suficientes años desde la entrada en vigor de la LEC y apenas se alzan voces solicitando se derogue esta importante novedad que simultáneamente también ha sido recibida en otras legislaciones (vg. en Italia). ¡Ha cambiado la sensibilidad social y también la de los juristas!».

Se trata, por lo demás, de un diseño normativo que es equivalente al de otros países del entorno –por lo que cuenta con un soporte teórico innegable¹⁸⁷–, y se ha demostrado, en definitiva, que favorecer la ejecución provisional puede entrañar mayor bienestar social que no preverla en relación a parámetros como la calidad de la justicia, la rentabilidad del dinero para las partes, el tipo de interés legal, y los costos de la apelación y de la ejecución¹⁸⁸.

En definitiva, estimamos que la regulación que hizo la ley procesal de la ejecución provisional –sin perjuicio de algunas dudas interpretativas a que ha dado lugar su aplicación práctica, y que desarrollaremos a lo largo de este trabajo–, representa una respuesta audaz y proporcionada para hacer frente a los riesgos vinculados con el transcurso del tiempo que precisa todo proceso para una tutela judicial de calidad, y constituye una sistematización ejemplar de la institución.

Finalmente, no debe perderse de vista que el éxito práctico de la ejecución provisional no depende exclusivamente de la regulación que haga de ella el legislador, sino que se encuentra indisolublemente vinculado a la mayor o menor cuota de eficacia que representa el sistema de ejecución forzosa.

En efecto, según mantenemos en este trabajo, la ejecución provisional tiene naturaleza ejecutiva, por lo que una vez despachada, las medidas que se adopten serán las propias de la ejecución ordinaria o definitiva, de suerte que, si la adopción de tales medidas no es eficiente a los fines de obtener de forma rápida y completa el cumplimiento de la prestación impuesta al condenado por la sentencia que provisionalmente se ejecuta, de nada sirve adelantar en el tiempo el momento en que se acordará la ejecución de esa sentencia.

Se trata de una cuestión crítica que no debe olvidarse, sobre todo si se considera que la eficacia del sistema de ejecución de resoluciones no sólo tiene incidencias jurídicas, sino que también económicas y sociales¹⁸⁹.

¹⁸⁷ ASECIO MELLADO, J., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., p. 352.

¹⁸⁸ RAMOS ROMEU, F., «¿Es deseable favorecer la ejecución provisional?», op. cit., p. 256.

¹⁸⁹ Como señala PEÑALOZA FIGUEROA, J. y VÁRGAS PÉREZ, C., «¿Qué costes económicos y sociales comporta la ejecución de sentencias judiciales?», en *Cuadernos de Estudios Empresariales*,

Lamentablemente, pese a los esfuerzos de unificación y simplificación¹⁹⁰ del sistema de ejecución procesal llevado adelante por la LEC, «el difícil éxito –o dicho en otros términos, el fracaso– de nuestra ejecución procesal civil es una realidad que nos encontramos en la práctica diaria de nuestros tribunales»¹⁹¹, problema que ciertamente resta virtualidad a los beneficios que pueda significar la ejecución provisional en la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva.

VIII. LA INFLUENCIA DEL SISTEMA ESPAÑOL DE EJECUCIÓN PROVISIONAL EN LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL CHILENA

En el epígrafe anterior indicamos que la regulación que hace la LEC de la ejecución provisional es ejemplar. Con ello, queremos expresar que el sistema diseñado por el legislador español es considerado como ejemplo o modelo a seguir por el legislador chileno, que en el contexto del proceso reformador de la justicia civil que se lleva a cabo en Chile, ha tomado en consideración expresamente la realidad normativa española.

Justamente, se encuentra en plena discusión parlamentaria en el Congreso Nacional de dicho país el Proyecto de Ley que establece un nuevo Código Procesal Civil, iniciado por Mensaje N° 004-360, de 12 de marzo de 2012, que busca implementar por primera vez en Chile la institución de nuestro estudio, basándose, precisamente, en la experiencia española y en la regulación contenida en la LEC sobre ejecución provisional, y usando similares argumentaciones a las contenidas en la EM de la LEC para la justificación de esta innovación.

núm. 14, 2004, p. 267, las deficiencias en el proceso de ejecución no sólo afectan al derecho a una tutela judicial efectiva y sin dilaciones indebidas, también afecta a la economía de un país –dados los incentivos perversos que generan en los agentes económicos la imprevisibilidad e incertidumbre en la satisfacción de los créditos–, y a la sociedad en su conjunto, pues afecta a la imagen del sistema de Administración de Justicia.

¹⁹⁰ Cfr. NIEVA FENOLL, J., «La simplificación de la ejecución», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.

¹⁹¹ PICÓ I JUNOY, J., «La ejecución procesal civil: ¿existe todavía alguna medida posible que permita mejorar su eficacia?», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 145.

De ello da cuenta textualmente el apartado VI del Mensaje, que bajo la rúbrica «Fortalecimiento de la sentencia y rol del juez de primer grado jurisdiccional. La ejecución provisional», dice:

«A diferencia de lo que ocurre hoy, el proyecto consagra como principio y regla general, la posibilidad de solicitar, sin necesidad de rendir caución, el cumplimiento y ejecución inmediata de las sentencias de condena, aun cuando existan recursos pendientes en su contra. Los recursos, por su parte y como regla de principio, no tienen efecto suspensivo.

A esta modalidad de ejecución, *tomada de la legislación española*, se le denomina “ejecución provisional” y ella viene a reemplazar el actual procedimiento de cumplimiento incidental de las sentencias. Se justifica en la particularidad que presenta la sentencia como título ejecutivo que surge como consecuencia de un debate anterior entre las partes, en el seno de un procedimiento declarativo previo, llevado a cabo con todas las garantías procesales.

Junto con fortalecer el rol del juez de primer grado, la opción por este procedimiento se sustenta en recientes datos estadísticos conforme a los cuales una gran mayoría de las sentencias que se dictan no son impugnadas y, de las que a su turno lo son, también una elevada mayoría son confirmadas por las Cortes.

La consagración de esta institución no viene sino a reconocer lo que ocurre en la actualidad, por cuanto, no obstante que el Código de Procedimiento Civil establece como regla general el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas y la apelación en ambos efectos, la cantidad de excepciones a dicho principio ha importado, en la práctica, una aplicación inversa de esta regla. Esto es, predominan hoy las sentencias que causan ejecutoria y que como tales, pueden cumplirse antes de encontrarse firmes o ejecutoriadas.

De esta manera, *la regla general será que las sentencias de condena puedan ejecutarse inmediatamente en un procedimiento ejecutivo autónomo*. Sin embargo, en dicho procedimiento las posibilidades de oposición del ejecutado, son aún más restringidas que respecto de otros títulos ejecutivos no jurisdiccionales y la demanda de oposición no suspenderá en caso alguno el curso de la ejecución.

Ahora bien, como contrapartida de lo anterior, el procedimiento de ejecución provisional regula en detalle causales de *oposición tanto al procedimiento de ejecución provisional mismo, como a actuaciones específicas de ejecución*, así como la posibilidad de solicitar *indemnización de perjuicios en caso que se haya ejecutado una sentencia que posteriormente resulte revocada por la Corte*. Junto a lo anterior, se mantiene la

posibilidad de solicitar ante las Cortes orden de no innovar en términos similares a los actualmente vigentes [el destacado es nuestro]».

Como se observa, el modelo de ejecución provisional de resoluciones judiciales en el proceso civil español ha sido favorablemente acogido por el legislador chileno, lo que constituye, a nuestro juicio, una clara señal de confianza hacia el sistema implementado por la LEC.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo se centrará en analizar la normativa vigente en España y su operatividad práctica, pero esperar contribuir, a partir de la experiencia recogida en este país, al perfeccionamiento e implementación de un correcto y eficiente sistema de ejecución provisional en Chile, pues servirá de punto de partida para futuras investigaciones.

CAPÍTULO II

EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de la ejecución provisional está configurado por las resoluciones judiciales que son susceptibles de ejecutarse provisionalmente¹⁹². Si bien la LEC admite con gran amplitud este instituto, su normativa excluye expresamente la posibilidad de obtener la ejecución de determinadas resoluciones, de ahí la necesidad de delimitar con precisión el ámbito objetivo de aplicación de la misma.

En la búsqueda por la demarcación del ámbito exacto de esta institución no sólo hay que atender a la forma que adopta una determinada resolución para saber si es o no susceptible de ser ejecutada provisionalmente, sino que, con más rigor, debemos analizar su contenido. Como se sabe, no son las resoluciones judiciales las que se ejecutan, sea ordinaria sea provisionalmente, sino que, más bien, son determinados pronunciamientos contenidos en ellas los que pueden ser objeto de ejecución.

¹⁹² Por su propia naturaleza, se excluyen del ámbito objetivo de la ejecución provisional los títulos ejecutivos extrajudiciales, ya que los mismos no son susceptibles de adquirir firmeza, de ahí que en adelante nos referiremos exclusivamente a los títulos ejecutivos judiciales y, especialmente, a las sentencias.

En el mismo sentido, *vid.* MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil. Parte General* — con CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.—, *op. cit.*, p. 407.

De esta forma, para fijar con exactitud el objeto de la ejecución provisional, es menester revisar esta materia desde una doble óptica: las resoluciones y los pronunciamientos provisionalmente ejecutables¹⁹³.

Será el juez del tribunal competente, en definitiva, quien deba realizar este examen al momento de revisar la demanda o solicitud de ejecución provisional a fin de acordar o denegar su despacho, labor en la que existe un limitado margen de discrecionalidad, puesto que, según veremos más adelante (*infra*, cap. V, apdo. II.1), sólo se puede denegar el despacho de la ejecución provisional si se trata de una sentencia comprendida en el artículo 525 de la LEC, o de una sentencia que no contiene un pronunciamiento condenatorio a favor del solicitante (art. 527.3 LEC).

La concesión inicial de la ejecución provisional ha sido calificada por algún autor como automática¹⁹⁴, en tanto que el Tribunal debe limitarse exclusivamente a verificar que concurren los requisitos para que proceda la ejecución provisional para despacharla; pero, en realidad, se trata de una tarea que ha producido ciertas dificultades en la aplicación práctica de la institución, pues son muchos los supuestos en que no resulta sencillo dilucidar si procede o no despachar la ejecución provisional¹⁹⁵.

En este sentido, se ha discutido, en primer término, si se pueden ejecutar provisionalmente sólo las sentencias, o si también son susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente otra clase de resoluciones judiciales. Asimismo, se ha polemizado acerca de la exclusión del ámbito de aplicación de la institución de algunos pronunciamientos cuya ejecución provisional no ha sido expresamente vedada. Por otra parte, el alcance de las excepciones legales previstas en el artículo 525 de la LEC también ha generado dudas interpretativas. Finalmente, se ha llegado a discutir acerca

¹⁹³ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 136.

¹⁹⁴ En este sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 153.

¹⁹⁵ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, Atelier, Barcelona, 2008, p. 64.

Este trabajo constituye una versión revisada y actualizada del artículo del mismo autor «Resoluciones provisionalmente ejecutables y despacho de la ejecución provisional», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.

de si es efectiva la supresión del efecto suspensivo del recurso de apelación con carácter general.

En los apartados siguientes abordaremos los distintos extremos que definen el objeto de la ejecución provisional, e intentaremos ofrecer una respuesta a las dudas interpretativas que han surgido sobre la materia, reservando para el capítulo siguiente de este trabajo el análisis de aquellos supuestos legal y expresamente excluidos del ámbito objetivo de nuestra institución, así como el de aquellas hipótesis en que no existe claridad sobre la posibilidad o imposibilidad de ejecutarlas provisionalmente.

II. RESOLUCIONES PROVISIONALMENTE EJECUTABLES

Como adelantamos, a fin de establecer si una determinada resolución judicial es susceptible o no de ser ejecutada provisionalmente, debemos atender tanto a la forma que adopta la resolución como a su contenido y demás requisitos o condiciones que debe reunir según la regulación legal de la institución. Por esta razón, para fines expositivos, vamos a revisar por separado cada uno de estos aspectos, sin perder de vista que nos estamos refiriendo a una misma cuestión que no pierde por ello su unidad: el objeto de la ejecución provisional.

1. Resoluciones provisionalmente ejecutables en atención a su clase

La LEC regula la ejecución provisional en el Título II de su Libro III, bajo la rúbrica «De la ejecución provisional de las resoluciones judiciales», de manera que, en principio, esta forma especial de ejecución sería aplicable, siguiendo el tenor del artículo 206.1 de la LEC, tanto a las sentencias, los autos y las providencias¹⁹⁶. Sin embargo, en el articulado del citado Título, la LEC hace referencia sólo a una clase de resolución judicial, la sentencia, sin contener referencia alguna al resto de las resoluciones judiciales.

En efecto, al tratar de los aspectos generales de la institución, el artículo 524 se refiere a la ejecución provisional de las «sentencias» –de condena, que no sean firme–, y

¹⁹⁶ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 112.

el artículo 525 señala las «sentencias» que no son susceptibles de ejecución provisional. Acto seguido, la LEC divide la regulación de la institución en dos Capítulos distintos según se trate de «sentencias» dictadas en primera instancia o de «sentencias» dictadas en segunda instancia –Capítulos II y III, respectivamente–. En el articulado de tales capítulos, la LEC sólo se refiere a la ejecución provisional de sentencias.

Atendida la antinomia existente entre la rúbrica del Título que regula la institución que estudiamos y el contenido específico de su articulado, en los términos recién descritos, se ha discutido en la doctrina y en la jurisprudencia qué clases de resoluciones judiciales son susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente.

Al respecto, no cabe duda que procede la ejecución provisional de las resoluciones judiciales que adoptan la forma de *sentencia* –siempre que se cumplan las condiciones que analizaremos en el apartado siguiente–, pues precisamente a estas resoluciones se refiere la LEC al regular esta institución. Con todo, la propia ley procesal excluye la ejecución provisional de determinadas sentencias, cuestión que abordaremos más adelante.

Ninguna duda existe, a su vez, sobre la improcedencia de la ejecución provisional de las resoluciones judiciales que adoptan la forma de *providencia*, puesto que estas resoluciones se refieren sólo a cuestiones procesales (art. 206.1.1ª LEC), y según veremos más adelante, la ejecución provisional procede respecto de resoluciones judiciales que resuelven sobre el fondo del asunto¹⁹⁷. De este modo, las providencias no son susceptibles de ejecución ordinaria ni de ejecución provisional¹⁹⁸.

La incertidumbre surge, por tanto, a propósito de la posible ejecución provisional de los *autos*, puesto que si bien se trata de resoluciones judiciales que resuelven cuestiones de importancia, no deciden la cuestión principal o de fondo¹⁹⁹, por lo que, en principio, cabría excluirlas del ámbito de la ejecución provisional. Sin

¹⁹⁷ En el mismo sentido, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 60.

¹⁹⁸ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 46.

¹⁹⁹ Vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 289.

embargo, existen determinadas resoluciones que adoptan la forma de auto y que contienen pronunciamientos de condena, por lo que cabe preguntarse sobre la posible ejecución provisional de tales resoluciones. Se trata de una polémica que no es nueva, pues esta cuestión también fue discutida al amparo de la regulación de la ejecución provisional de la LEC/1881, que permitía la ejecución de los autos que pusieran término al pleito haciendo imposible su continuación²⁰⁰.

Sobre este punto, la doctrina se encuentra dividida, aunque se advierte que un sector mayoritario de la misma se muestra favorable a la ejecución provisional de los autos²⁰¹. Esta discusión también se ha dado en el terreno de la jurisprudencia, existiendo pronunciamientos a favor y en contra de la ejecución provisional de los autos definitivos²⁰².

Los partidarios de la ejecución provisional de los autos justifican su postura basándose en diversos argumentos. Así, MONTERO AROCA junto a FLORS MATÍES afirman que «no cabe ignorar que en determinados casos se dictan resoluciones con forma de auto que entrañan, si no una decisión, sí una solución respecto del fondo del

²⁰⁰ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 50; y MUERZA ESPARZA, J., «Algunas consideraciones sobre la ejecución provisional y las medidas cautelares en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil de 1998», en *Anuario jurídico de La Rioja*, N° 5, 1999, p. 146.

²⁰¹ Entre los partidarios de la ejecución provisional de los autos, además de los autores a los que nos referiremos en el texto principal, se encuentran AGUILERA MORALES, M., «Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», op. cit. p. 794; CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 31; CEDEÑO HERNÁN, M., «Consultas: Ejecución provisional de autos», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 3, 2002, pp. 53-54; GÓMEZ SÁNCHEZ, J., *La ejecución civil. Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 60; VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 32-34; UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», op. cit., pp. 286-291; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», op. cit., pp. 2148-2149; MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., pp. 112-113; FONTESTAD PORTALÉS, L., «La ejecución provisional», en ROBLES GARZÓN, J. (Director-Coordinador), *Conceptos básicos de derecho procesal civil*, Tecnos, 5ª edición, Madrid, 2013, p. 568; GARCÍA CASAS, J., «La ejecución provisional y la seriedad de la Justicia», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 2-4, 2001, p. 36; y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», en GUTIÉRREZ BERLINCHES, A. (Coordinador), *El proceso de ejecución forzosa. Problemas actuales y soluciones jurisprudenciales*, La Ley, Madrid, 2015, pp. 1066-1067.

²⁰² Sobre la dispersión de criterios jurisprudenciales relativos a este punto, cabe mencionar que en el seminario sobre la ejecución provisional celebrado en Madrid, entre los días 28 y 30 de mayo de 2008, en el que intervinieron diversos jueces de Tribunales de Primera Instancia para discutir sobre distintos aspectos relacionados con la materia, no se alcanzó acuerdo sobre la extensión de la institución a los autos. Cfr. GIBERT FERRAGUT, J., «La ejecución provisional», en *Conclusiones de Seminarios*, núm. 5, 2008, p. 5.

asunto, y que esa solución implica la existencia de una obligación a cargo del demandado de realizar una determinada actividad que, si no se cumple voluntariamente, puede ser objeto de ejecución forzosa de modo definitivo. Y siendo ello así nada obsta a que haya de ser posible también su ejecución provisional»²⁰³.

En el mismo sentido, MORENO CATENA enseña que atendido que el tratamiento legal de la ejecutoriedad de los autos condenatorios y de las sentencias es idéntico, partiendo de la propia rúbrica del título y de la escasez de impugnaciones, no existen dificultades para defender, de *lege ferenda*, que estas resoluciones se pueden ejecutar provisionalmente²⁰⁴.

Por su parte, señala DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ que en virtud de una interpretación lógica y teleológica de las distintas disposiciones de la LEC, no hay ningún obstáculo para sostener que ciertas resoluciones que adoptan la forma de auto y que contienen pronunciamientos de condena son susceptibles de ejecución provisional²⁰⁵.

Con base en similares argumentos, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a propósito de un auto de determinación de daños y perjuicios, declaró que «es posible acordar la ejecución provisional de resoluciones distintas de sentencias, pues este término ha de ser entendido en sentido amplio y no sólo referido a sentencias en sentido estricto, y ello no sólo por una interpretación teleológica de las normas, sino por

²⁰³ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 329. Señalan los autores como ejemplos de estas resoluciones, el auto que homologa la transacción judicial; y los autos que concretan o determinan el pronunciamiento condenatorio de una sentencia conforme a las bases fijadas en ella.

²⁰⁴ Cfr. MORENO CATENA, V., *Tomo IV. La ejecución forzosa*, de CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V. (Coordinadores), *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 112-113.

²⁰⁵ En este sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 905, quien agrega como ejemplos el auto que resuelve el incidente de liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas, aunque sea apelado (art. 716 LEC); o los acuerdos judicialmente homologados a que lleguen las partes durante la audiencia previa del juicio ordinario, aunque sean impugnados (arts. 415.2 y 428.2 LEC). El autor mantiene esta opinión en obras posteriores. Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 368.

la propia redacción de este Título II “De la ejecución provisional de resoluciones judiciales”»²⁰⁶.

En términos análogos, la Audiencia Provincial de Castellón resolvió que «si bien es cierto que los artículos 524 y siguientes de la ley procesal solamente mencionan las sentencias como resoluciones susceptibles de ejecución provisional, también lo es que es más amplio y genérico el epígrafe del Título II del Libro III en que se contiene dicha disciplina legal, que de manera más amplia habla de resoluciones judiciales (“De la ejecución provisional de resoluciones judiciales”). En el mismo sentido, la ley trata de la ejecución provisional de sentencias “de condena” y el auto que constituye título ejecutivo en el presente caso, aun no siendo sentencia, es resolución de condena, y así lo dice expresamente en su parte dispositiva, al condenar al ejecutado al pago de la cantidad en que fija los daños y perjuicios»²⁰⁷.

Desde otra perspectiva, CÁMARA RUIZ señala que si determinados autos firmes son títulos ejecutivos y llevan aparejada ejecución, no hay razón para excluirlos del acceso a la ejecución provisional²⁰⁸. A lo anterior, el autor agrega que el artículo 456.2 de la LEC excluye expresamente el efecto suspensivo de la apelación contra los autos que pongan fin al proceso, lo que supone la posibilidad de solicitar su ejecución provisional²⁰⁹.

Contrariamente a lo que venimos exponiendo, existen autores²¹⁰ que, basándose en la literalidad de los preceptos contenidos dentro del Título de la ley procesal referido

²⁰⁶ AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 15 de abril de 2008 (JUR\2008\188381). A favor de la ejecución provisional de los autos, *vid.* AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380).

²⁰⁷ AAP Castellón (Secc. 3ª), de 17 de abril de 2015 (vLex-578463214).

²⁰⁸ Cfr. CÁMARA RUIZ, J., «Ejecución provisional», en ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 923.

²⁰⁹ También justifica la ejecución provisional de los autos a partir de la regulación del recurso de apelación MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 112-113.

En similar sentido, el AAP Granada (Secc. 3ª), de 31 de mayo de 2005 (JUR\2005\155086), señala que la ejecución provisional de los autos encuentra su fundamento en el artículo 527.3 en relación con el artículo 455.1, ambos de la LEC.

²¹⁰ Son contrarios a la ejecución provisional de los autos, sin ánimo exhaustivo, ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 2033-235; ALEGRET BURGÚÉS, M., «La ejecución provisional en la LEC 1/2000 desde el punto de vista de su ámbito

a la ejecución provisional de las sentencias, y en lo dispuesto en el artículo 456.2 de la LEC antes aludido, concluyen que no es posible la ejecución provisional de los autos definitivos.

En relación con el primero de estos argumentos, la Audiencia Provincial de La Coruña declaró que «en ningún supuesto la Ley procesal permite la ejecución provisional de resoluciones judiciales que no revistan la forma de sentencias, lo que se desprende claramente de su articulado, sólo las sentencias son provisionalmente ejecutables aún cuando se aluda genéricamente en el encabezamiento del Título II la posibilidad de ejecución provisional de cualquier resolución judicial»²¹¹.

Desde otra perspectiva, partiendo de la idea de que el recurso de apelación produce efectos suspensivos, afirma ASECIO MELLADO que la ejecución provisional sólo es aplicable en aquellos casos en que dicho recurso produzca tal efecto, y no cuando la regla sea la no suspensión de la decisión judicial²¹². En consecuencia, no son provisionalmente ejecutables los autos que ponen fin al proceso, atendido que el artículo 456.2 de la LEC excluye el efecto suspensivo del recurso que frente a los mismos se interponga²¹³. Idea que complementa BOTICARIO GALAVÍS, para quien el régimen de ejecución provisional de la LEC sólo es aplicable a las resoluciones definitivas recurridas mediante un recurso que produzca efectos suspensivos, lo que ocurre únicamente con las sentencias estimatorias²¹⁴.

objetivo y de la oposición», en *Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana*, núm. 9, 2004, p. 16; SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II* —con PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.—, *op. cit.*, p. 308; DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 47; LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 99-100, 2014, pp. 1839-1840; RIFÁ SOLER, J., «Disposiciones generales de la ejecución. La ejecución provisional», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 2, 2002, pp. 44-45.

²¹¹ SAP La Coruña (Secc. 4ª), de 5 de noviembre de 2007 (JUR\2008\67765). En el mismo sentido, al describir la regulación legal de la institución, AAP Madrid (Secc. 25ª), de 16 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16980/2012).

²¹² Vid. ASECIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1474.

²¹³ En igual sentido, CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 43.

²¹⁴ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 50.

Como se observa, según estos autores la clásica distinción entre la admisión del recurso de apelación en uno o en ambos efectos sigue vigente en la LEC, pues si bien la actual ley procesal no hace referencia expresa al denominado doble efecto, ello no permitiría concluir que se haya eliminado el efecto suspensivo. En efecto, según explica ORTELLS RAMOS, el efecto suspensivo es un efecto de ciertas resoluciones judiciales, según el cual se suspenden los efectos propios de la resolución impugnada, lo que comprende tanto los efectos ejecutivos de una resolución de condena, como los efectos no ejecutivos de las resoluciones que no tienen eficacia ejecutiva propiamente dicha²¹⁵. Y luego agrega, a propósito del recurso de apelación, que no se produce el efecto suspensivo cuando se recurren sentencias desestimatorias o autos definitivos, *ex* artículo 456.2 de la LEC, pero que sí se produce este efecto cuando se impugnan sentencias estimatorias de la demanda²¹⁶.

De acuerdo con este sector doctrinal, al decir el artículo 456.2 de la LEC que el recurso de apelación deducido contra sentencias desestimatorias de la demanda o contra autos que ponen fin al proceso «carecerá de efectos suspensivos, sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto», se concluye claramente que no suspende la efectividad de tales resoluciones en caso de ser impugnada, de suerte que si alguna de estas resoluciones llegara a contener un pronunciamiento susceptible de ser ejecutado, tal ejecución no sería provisional –por ser incompatible con la ausencia de efecto suspensivo–, sino que se trataría de una ejecución ordinaria o definitiva²¹⁷.

²¹⁵ ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 501-502.

²¹⁶ Si bien en este último caso el artículo 456.3 de la LEC no lo dice expresamente, sino que se remite a las normas sobre ejecución provisional, el autor concluye que el efecto suspensivo del recurso de apelación igualmente se produce tratándose de las sentencias que no son susceptibles de ejecución provisional, y respecto de aquellas en que dicha institución sí procede, el efecto suspensivo implica que los efectos de la sentencia de condena recurrida en apelación son específicos, y no los efectos ejecutivos ordinarios. Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 520-521.

²¹⁷ En el mismo sentido, cfr. QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2545; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 34-35; HERNÁNDEZ VERGARA, A., «Comentarios al Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», en XIOL RÍOS, J. (Coordinador), *Enjuiciamiento Civil: comentarios y jurisprudencia. Tomo III*, Sepin, Madrid, 2008, pp. 3526-3527; y FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 309-310.

Con todo, ORTELLS reconoce que esta conclusión puede considerarse dudosa. *Vid.* ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 520.

Se trata, no obstante, de una interpretación que no compartimos, puesto que, como ha destacado la doctrina, una de las mejoras incorporadas a la LEC es la completa eliminación de la admisión del recurso de apelación en uno o en dos efectos, y con ello todas las dificultades que tal distinción había originado²¹⁸. En otras palabras, la LEC pone fin a la secular distinción entre «apelación en ambos efectos» y «apelación en un solo efecto»²¹⁹, y aclara el «efecto suspensivo» del recurso de apelación, al establecer que la resolución impugnada tendrá o no eficacia ejecutiva en tanto proceda o no su ejecución provisional (art. 456.3 LEC).

Siendo ello así, cuando el artículo 456.2 de la LEC señala que la apelación contra las resoluciones allí mencionadas «carecerá de efectos suspensivos» incurre en una impropiedad, ya que tales resoluciones, por regla general, no contienen pronunciamientos condenatorios, por lo que carece de sentido técnico hablar de efecto suspensivo²²⁰. Y aún cuando estemos en presencia de autos que contengan pronunciamientos condenatorios, el citado precepto no es concluyente a la hora de excluir estas resoluciones de la ejecución provisional, puesto que la finalidad del artículo 456.2 de la LEC no guarda relación directa con la posible ejecución de las resoluciones a que hace referencia, sino que sólo destaca la imposibilidad legal de proveer contra ciertas resoluciones por el hecho de haber sido apeladas, pero en modo alguno determina el régimen de ejecución —provisional o definitiva— de los autos definitivos²²¹.

A su vez, al remitirse el artículo 456.3 de la LEC a la normas sobre ejecución provisional para determinar los efectos del recurso de apelación interpuesto contra sentencias estimatorias de la demanda, lo que está diciendo el legislador es que tal resolución no puede ejecutarse mientras no se resuelva el respectivo recurso de apelación, salvo que contuviera un pronunciamiento favorable de condena, en cuyo caso

²¹⁸ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 48.

²¹⁹ Así lo afirma DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 304, quien agrega que se abandona esta terminología porque desaparece su razón de ser.

²²⁰ Cfr. MONTERO AROCA, J., et al., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*, op. cit., pp. 456-457.

²²¹ En igual sentido, UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», op. cit., pp. 288-289.

se podrá pedir y obtener su ejecución provisional conforme a las reglas del Título II del Libro III de la LEC²²².

Precisado el sentido del efecto suspensivo del recurso de apelación, el único argumento valedero para excluir del ámbito de la ejecución provisional a los autos que contienen pronunciamientos condenatorios sería el tenor literal de los preceptos que regulan la institución. Sin embargo, según ya vimos, existen diferentes criterios que permiten justificar que se permita la ejecución provisional de estas resoluciones aunque no sean sentencias: el Título II del Libro III de la LEC lleva por rúbrica «De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», sin especificar a qué resoluciones se refiere o, lo que es lo mismo, sin limitarlo a una determinada clase de resoluciones; una interpretación teleológica y sistemática de diversas disposiciones de la LEC torna injustificado excluir del ámbito de la institución a resoluciones que, como los autos que contienen pronunciamientos de condena, son susceptibles de ejecución ordinaria; estos autos se equiparan a las sentencias para efectos de su ejecución, de suerte que, procediendo su ejecución definitiva, también pueden ser ejecutados provisionalmente en caso de interponerse recursos en su contra. Por todo ello, compartimos la tesis que afirma la procedencia de la ejecución provisional de los autos definitivos, por ser más ajustada al régimen general de la LEC en cuanto facilita y favorece ostensiblemente este instituto.

Con todo, más allá de lo discutible que resulta extender el ámbito objetivo de la ejecución provisional a los autos definitivos, algunos autores restan importancia práctica a esta polémica, toda vez que, prescindiendo del obstáculo formal que supone que LEC se refiera exclusivamente a la ejecución provisional de las sentencias, se podría admitir la ejecución provisional de aquellos autos en cuya parte dispositiva se imponga una condena u obligación material a alguna de las partes, y que son, por tal motivo, susceptibles de ejecución definitiva. Sin embargo, según estos autores, si se analizan con detención los distintos supuestos previstos en la LEC de autos susceptibles de ejecución ordinaria, ninguno de ellos puede ser objeto de ejecución provisional²²³.

²²² Como acertadamente explican MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 291.

²²³ Entre otros, *vid.* GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 201-203; ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 2035.

Desde esta perspectiva, se afirma que no tiene sentido preguntarse sobre la operatividad o no de la ejecución provisional del *auto por el que se aprueba u homologa una transacción o convenio*, atendido que dicha resolución implica que las partes han alcanzado, precisamente, un acuerdo sobre el objeto del pleito, por lo que ninguna de ellas tendrá interés en impugnarla –pues carecerían de gravamen o legitimación para hacerlo–²²⁴.

Del mismo modo, se sostiene que el *auto que aprueba el allanamiento parcial* del demandado no es susceptible de recurso alguno²²⁵, o que al menos cabe presumir la conformidad de las partes con el contenido del mismo, por lo que parece poco probable su impugnación²²⁶. Por lo tanto, este auto tampoco sería susceptible de ejecución provisional.

Por último, respecto del denominado *auto de cuantía máxima* (art. 517.2.9º LEC²²⁷), se afirma que no procede la ejecución provisional, sino que su ejecución será conforme a las normas de la ejecución ordinaria²²⁸. Ello es así porque contra dicho auto no procede recurso alguno *ex* artículo 13 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor²²⁹, de manera que tal resolución

²²⁴ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 201-202. En el mismo sentido, vid. DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, op. cit., p. 48; y BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 55, quien agrega que si se llegara a recurrir este auto, al carecer el recurso de efecto suspensivo, su ejecución no sería provisional, sino definitiva.

²²⁵ En este sentido, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 202-203; y DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, op. cit., p. 48, quien sostiene que las partes no tendrían legitimación para impugnar el auto.

²²⁶ Así lo expresa BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 56.

²²⁷ Este precepto fue modificado por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que fija su texto actual.

²²⁸ BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 56.

²²⁹ Cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

alcanzará firmeza en el mismo momento en que sea dictado, lo que excluye todo margen de operatividad al instituto de la ejecución provisional²³⁰.

No compartimos lo expresado por estos últimos autores, salvo en lo referido a la improcedencia de la ejecución provisional del *auto de cuantía máxima*, toda vez que no siendo susceptible de recurso alguno tal resolución, ninguna duda cabe de que no puede hablarse de ejecución provisional en este caso²³¹. Respecto de los otros autos que contienen pronunciamientos condenatorios en favor de alguna de las partes, somos partidarios de la admisibilidad de la ejecución provisional, aun cuando esta situación pueda darse con poca frecuencia en la práctica²³². Por lo demás, una cosa es que sea poco probable la impugnación del auto que aprueba u homologa una transacción o convenio o el auto que aprueba el allanamiento parcial del demandado –en los términos que señala la doctrina arriba citada–, y otra muy distinta es que se encuentra prohibida tal impugnación, de manera que en los casos en que ello ocurra –como podría suceder si un auto no recoge enteramente el alcance de lo pactado, o si el demandado que se allana toma conocimiento de datos que antes desconocía dentro del plazo para impugnar–, entendemos que resulta perfectamente viable su ejecución provisional.

En suma, si atendemos a la naturaleza o clase de resolución judicial, la ejecución provisional opera, por regla general, respecto de sentencias, pero también procede respecto de ciertos autos que, a efectos de su ejecución, son equiparables a las sentencias.

2. Resoluciones provisionalmente ejecutables en atención a sus características y contenido

²³⁰ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 202.

²³¹ Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 63; y QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», op. cit., p. 2545.

²³² En el mismo sentido, vid. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 61-63, quien llega a la misma conclusión luego de revisar los distintos autos que cumplen con los requisitos indicados.

En la regulación que hace la LEC de la ejecución provisional, como vimos en el apartado anterior, la ley procesal se refiere exclusivamente a las sentencias que reúnan determinadas condiciones o características. Sin embargo, ya hemos aclarado que institución que estudiamos también opera, aunque con menor incidencia en la práctica, respecto de ciertos autos, siempre que cumplan con los mismos requisitos que se exigen a las sentencias. De este modo, para evitar la permanente referencia a las sentencias y a los autos, en este apartado hablaremos de los requisitos que deben cumplir las sentencias para que puedan ser provisionalmente ejecutadas, referencia que hacemos extensiva a los autos que cumplan con iguales requisitos.

Sentado lo anterior, a fin de delimitar el ámbito objetivo de la ejecución provisional, debemos precisar si, atendiendo al contenido de las resoluciones judiciales, todas las sentencias son provisionalmente ejecutables o si, por el contrario, y no obstante la amplitud con que ha sido recogida esta institución en la LEC, hay que matizar en alguna medida la afirmación anterior. Al efecto, si revisamos las normas que regulan la ejecución provisional, la misma se predica respecto de las sentencias de condena (arts. 524.2 y 3, 526, 527.3, 528.2.2º, 528.3, 530.2 y 3, 531, 533 y 534 LEC) que no sean firmes (arts. 524.2, 527.1 y 535 LEC). Por lo tanto, no se puede instar la ejecución provisional de cualquier sentencia, sino que para que ello sea admisible, tal resolución debe ser condenatoria y, además, debe encontrarse impugnada. A estos dos requisitos que se desprenden de la sola lectura de la LEC –y que revisaremos por separado a continuación–, debemos agregar que, para el caso de las sentencias que imponen una condena dineraria, la deuda debe ser líquida.

a) Sentencias de condena o sentencias que contengan pronunciamientos condenatorios

La sentencia, *ex* artículo 206.1.3ª de la LEC, es una resolución judicial que pone fin al proceso propiciando una respuesta sobre el fondo del asunto, o como la define algún autor, es «el acto del juzgador en el que éste emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión procesal con el Derecho, y, en consecuencia, decide estimarla o desestimarla, poniendo fin al proceso»²³³.

²³³ ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 432.

Ahora bien, según la forma en que el órgano dice o tutela el Derecho en el caso concreto a través de un proceso de declaración²³⁴, las sentencias pueden ser meramente declarativas, constitutivas o de condena: mediante la *sentencia meramente declarativa*, el tribunal se limita a declarar lo que se ajusta o no a las normas jurídicas; por medio de la *sentencia constitutiva*, el tribunal dice el Derecho creando, modificando o extinguiendo un estado, relación o situación jurídica; finalmente, mediante la *sentencia de condena*, el tribunal, junto con hacer una declaración, dirige un mandato a una de las partes a fin de que haga, omita o soporte algo²³⁵.

De las distintas clases de sentencias recién apuntadas, sólo las sentencias de condena pueden ser título de ejecución, pues las sentencias constitutivas y las sentencias mero declarativas satisfacen el derecho o interés del demandante desde que se acoge la demanda, sin que sea necesaria actividad ejecutiva alguna. Por lo tanto, siendo la ejecución provisional una especie dentro del género proceso de ejecución, resulta absolutamente coherente con su naturaleza jurídica que la LEC permita únicamente la ejecución provisional de las sentencias de condena (arts. 524.2 y 3 y 526 LEC), pues sólo estas sentencias son susceptibles de ser ejecutadas ordinaria o definitivamente (art. 517.2.1º LEC).

La regla anterior, sin embargo, debe ser matizada. En efecto, no sólo son susceptibles de ejecución ordinaria las sentencias de condena, sino que también lo son los pronunciamientos de condena contenidos en una sentencia meramente declarativa o en una sentencia constitutiva (art. 521.3 LEC). Por lo tanto, para definir el ámbito objetivo de la ejecución provisional, constituye un elemento determinante la naturaleza de los pronunciamientos contenidos en una sentencia²³⁶.

²³⁴ Si abordamos este tema desde la perspectiva del justiciable, las sentencias se clasifican en función del tipo de tutela jurisdiccional que se solicita. Al efecto, las acciones pueden ser meramente declarativas, constitutivas o de condena, y darán lugar, para el caso de ser estimadas, a sentencias mero declarativas, sentencias constitutivas o sentencias de condena. En este último caso, cabe precisar que la sentencia condenatoria lleva implícita una declaración previa. Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 356.

²³⁵ *Ídem.*, p. 181.

²³⁶ En similares términos, BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 79.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la regla general que se extrae de las normas que regulan la institución objeto de nuestro análisis es que cualquier pronunciamiento condenatorio²³⁷ –sea de condena dineraria o de condena no dineraria– contenido en una sentencia²³⁸ –sea que se trate de una sentencia de condena (art. 524.2 y 3 LEC) o de una sentencia meramente declarativa o constitutiva (arts. 521.3 y 525.1.1ª *in fine* LEC) [*infra*, cap. III, apdo. I.1.a)]–, es susceptible de ser ejecutado provisionalmente, salvo aquellos que han sido expresamente excluidos por la ley procesal, y que se encuentran recogidos fundamentalmente en el artículo 525 de la LEC²³⁹. Mención aparte merece el pronunciamiento sobre las costas, del que trataremos más adelante (*infra*, cap. III, apdo. II.1).

Con todo, esta regla admite aún alguna precisión. Toda sentencia de condena supone que ha existido una decisión judicial final que se pronuncia sobre el fondo del asunto y que, al mismo tiempo, ha estimado –al menos parcialmente– la acción del demandante principal o la demanda reconvencional del demandado. Por esta razón, algunos autores afirman que la ejecución provisional procede respecto de sentencias que, pronunciándose sobre el fondo del asunto, estiman al menos parcialmente la demanda –principal o reconvencional–, e imponen una condena a alguna de las partes²⁴⁰.

²³⁷ Sobre este punto, el AAP Madrid (Secc. 10ª), de 14 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48999) señala que «con notable exceso semántico, la LECiv 1/2000 refiere la ejecución provisional de las “sentencias” y no, como acaso hubiera sido más correcto, a los “pronunciamientos” contenidos en las resoluciones de aquella especie, habida cuenta que en las mismas pueden concurrir disposiciones de diversa índole».

²³⁸ Como expresa CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 31, este régimen se aplica incluso si se trata de un pronunciamiento de condena en materia de responsabilidad civil contenido en una sentencia penal impugnada, de acuerdo con el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre este último tema, cfr. GISBERT GISBERT, A., «La ejecución provisional de la sentencia penal», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2006, pp. 1386-1393.

²³⁹ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 64.

²⁴⁰ Por todos, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 291. En la misma línea se pronuncia el AAP Granada (Secc. 4ª), de 6 de mayo de 2003 (JUR\2003\222619), según el cual «de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 524 y 526 de LEC, se requiere no sólo que la parte que la solicita haya obtenido un pronunciamiento a su favor, sino que dicho pronunciamiento lo sea en una sentencia de condena; esto es, que contenga pronunciamiento sobre el fondo del asunto y que sea estimatoria, al menos en parte, de las pretensiones de la demanda o de la reconvención». No obstante, esta resolución parece indicar que lo relevante es que se trate de una sentencia de condena, y no de un pronunciamiento de condena, lo que claramente no compartimos.

Por lo tanto, si la sentencia no cumple con estos requisitos no procede su ejecución provisional, con independencia de que pueda resultar discutible la naturaleza mero declarativa o constitutiva que haya de atribuirse a los pronunciamientos contenidos en ella²⁴¹. Confirma esta conclusión lo dispuesto en el artículo 527.3 de la LEC, según el cual el tribunal no despachará la ejecución provisional de una resolución si la misma «no contuviere pronunciamiento de condena a favor del solicitante».

Por no cumplir con los requisitos arriba mencionados, quedan excluidas del ámbito objetivo de esta institución las denominadas *sentencias absolutorias de la instancia*²⁴², pues estas resoluciones –que adoptan siempre la forma de auto²⁴³– no se pronuncian sobre el fondo del asunto, razón por la cual no pueden ordenar a las partes la realización de prestación alguna. De este modo, respecto de estas resoluciones nada habrá de ejecutarse, ni provisional ni definitivamente²⁴⁴.

Del mismo modo, y por obvio que parezca, no son provisionalmente ejecutables las *sentencias absolutorias o desestimatorias*, esto es, aquellas que rechazan la demanda del actor, desestimando la acción deducida en el juicio, por cuanto tales sentencias no contienen pronunciamiento de condena alguno que pueda ser ejecutado²⁴⁵.

Por esta razón, se ha declarado que «las normas procesales son de orden público y su aplicación no puede dejarse al arbitrio e interés de las partes y en el caso de autos,

²⁴¹ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 79.

²⁴² Según DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, — con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 290, las sentencias absolutorias de la instancia son aquellas que ponen fin al proceso por falta de algún presupuesto procesal, dejando imprejuizado su objeto.

²⁴³ Como expresa ORTELLS RAMOS, M., et al., *Derecho Procesal Civil*, op. cit., pp. 433-434, las sentencias absolutorias de la instancia o sentencias meramente procesales ponen término al juicio por razones de tipo procesal, por lo que, de acuerdo con el artículo 206 de la LEC, estas resoluciones deberán adoptar la forma de auto. De ahí que, de acuerdo con la regulación contenida en la LEC, constituye una clasificación teórica la que distingue entre sentencias sobre el fondo y sentencias absolutorias de la instancia, pues las sentencias siempre se refieren al fondo del asunto debatido.

²⁴⁴ En el mismo sentido, vid. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 64.

²⁴⁵ Al respecto, VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, op. cit., p. 439, advierte que en los casos en que el demandante haya obtenido provisionalmente lo que pedía en el proceso antes del término del mismo por sentencia firme —lo que puede ocurrir si se hubiese adoptado una *medida cautelar anticipatoria* o se hubiese producido la *ejecución provisional* de la sentencia—, si la sentencia firme que pone fin al proceso es, en definitiva, desestimatoria de la demanda, el demandado absuelto podrá instar una actividad jurisdiccional ejecutiva para recuperar lo que hubiese entregado provisionalmente al actor.

se pretende una ejecución provisional de una sentencia absolutoria lo que debe ser rechazado de plano de conformidad con lo establecido en el art. 247.2 de la LEC, pues sólo cabe la ejecución provisional de sentencias de condena, tal y como lo establecen los arts. 524.2 y 526 de la LEC»²⁴⁶. Con todo, la falta de eficacia ejecutiva de las sentencias absolutorias debe entenderse sin perjuicio de los efectos propios de estas resoluciones, entre los que se encuentran la función positiva o prejudicial²⁴⁷ y la función negativa o excluyente de la cosa juzgada material.

Nótese que estas sentencias –las absolutorias– no pueden ejecutarse provisionalmente ni siquiera en el caso de que condenen en costas al actor como consecuencia del rechazo total de su pretensión *ex* artículo 394.1 de la LEC²⁴⁸, toda vez que, según mantenemos en este trabajo, tales pronunciamientos condenatorios sólo son ejecutables cuando la resolución que los contiene ha adquirido firmeza (art. 242 LEC), y la actividad ejecutiva a que den lugar se regirá por las reglas de la ejecución ordinaria o definitiva (*infra*, cap. III, apdo. II.1). Así lo ha entendido también la jurisprudencia²⁴⁹.

Recapitulando, la ejecución provisional sólo procede respecto de sentencias –o autos– que contengan algún pronunciamiento condenatorio. Sin embargo, para la aplicación práctica de las reglas que venimos comentando, no siempre resulta sencillo determinar si en un caso concreto estamos en presencia o no de un pronunciamiento condenatorio. En efecto, para saber si procede o la ejecución provisional –y también la ordinaria– no es necesario que la sentencia utilice expresamente el término «condenar»²⁵⁰, de ahí que no haya que limitarse al tenor literal de la resolución²⁵¹.

²⁴⁶ AAP Granada (Secc. 3ª), de 28 de octubre de 2011 (ROJ AAP GR 552/2011). En la misma línea, el AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 14 de junio de 2011 (ROJ AAP TF 635/2011) tiene resuelto que carece de viabilidad la ejecución provisional de una sentencia que declaró la nulidad de las Juntas Generales Universales y Extraordinarias de una empresa, desde que se estimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, desestimando en consecuencia la demanda inicial y absolviendo de todos sus pedimentos a las entidades demandadas, toda vez que no cabe la ejecución de las sentencias absolutorias.

²⁴⁷ Sobre la función positiva de la cosa juzgada de las sentencias absolutorias, *vid.* AAP Lleida (Secc. 2ª), de 2 de febrero de 2006 (JUR\2006\138068).

²⁴⁸ Cfr., ASENSIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1474.

²⁴⁹ En este sentido, AAP Granada (Secc. 4ª), de 6 de mayo de 2003 (JUR\2003\222619); AAP Madrid (Secc. 10ª), de 14 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48999).

²⁵⁰ Así lo enseñan MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 302.

Ciertamente, lo que realmente importa a estos efectos es que la sentencia imponga al demandado el deber de llevar a cabo una determinada prestación a favor del demandante, o de un tercero, que consista en la entrega de dinero o de otros bienes, o en realizar o en abstenerse de realizar una conducta concreta²⁵².

Para finalizar este epígrafe, valga la siguiente aclaración. Como hemos revisado, la ejecución provisional sólo procede respecto de los pronunciamientos condenatorios contenidos en una sentencia. Por esta razón, quedan excluidos de su ámbito objetivo los denominados actos de ejecución impropia de las sentencias meramente declarativas y de las sentencias constitutivas, no así los pronunciamientos condenatorios contenidos en ellas (art. 521.3 LEC)²⁵³. Por lo demás, estas sentencias tampoco son susceptibles de ejecución ordinaria o definitiva, conforme a lo dispuesto expresamente por el artículo 521.1 de la LEC, por lo que ninguna duda cabe de que la posible *ejecución provisional impropia* de una sentencia no es admisible²⁵⁴. Más adelante volveremos con detalle sobre este tema [*infra*, cap. III, apdo. I.1.b)].

b) Liquidez de la condena dineraria

La ley procesal exige para que pueda desarrollarse la actividad ejecutiva que la prestación esté perfectamente determinada en el título ejecutivo, pues de no ser así, no

²⁵¹ En este sentido, se ha resuelto que «no cabe duda que la declaración de nulidad de un determinado procedimiento y la consiguiente restitución, por una parte, de la finca obtenida, y por la otra, del precio logrado a cambio de aquella, supone una condena a volver las cosas al lugar que ocupaban antes de producirse». Por esta razón, «si bien cuando en una sentencia constitutiva o meramente declarativa, se incorporan frase como “se condena a estar y pasar por la declaración”, no se altera la dimensión de la propia resolución, y en consecuencia no procede la demanda ejecutiva, ni la provisional ni la definitiva, no presenta la misma la que además de la nulidad, incluye la restitución de la cosa y el precio, puesto que, sea cual sea la fórmula empleada, es decir “condena”, “debiendo”, “con la obligación de”, etcétera, lo que se incluye es, conforme señala el artículo 1303 del Código Civil un deber de dejar las cosas como se encontraban con anterioridad a la obligación que se declara nula, lo que arrastra una condena concreta». Cfr. AAP Asturias (Secc. 1ª), de 20 de abril de 2006 (JUR\2006\139930).

²⁵² Vid. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 65.

²⁵³ Cfr. ASENSIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, pp. 1474-1475, quien afirma que la jurisprudencia está actuando en forma restrictiva y poco favorable a la ejecución provisional de estos pronunciamientos condenatorios.

²⁵⁴ En igual sentido, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 368.

se podría cumplir la función de ser la medida de aquella actividad en el aspecto objetivo²⁵⁵.

Para la ejecución de las sentencias que imponen condenas dinerarias —en coherencia con lo dispuesto en el artículo 219 de la LEC²⁵⁶—, esta regla implica que en el título ejecutivo debe constar una deuda líquida, esto es, una cantidad determinada o determinable de dinero, en los términos de los artículos 572 y siguientes de la LEC, sin perjuicio de los supuestos excepcionales en que la ley autoriza la ejecución dineraria a partir de un título que no expresa una deuda de dinero líquida, en cuyo caso la determinación del importe de la deuda se produce por medio de una liquidación que se lleva a cabo dentro de la ejecución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 712 a 720 de la LEC²⁵⁷.

Las reglas anteriores sobre la liquidez y liquidación, en su caso, de las prestaciones dinerarias como presupuesto para su ejecución, si bien están establecidas para la actividad de ejecución definitiva, son también aplicables para la ejecución provisional de tales pronunciamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 524.2 de la LEC, según el cual la ejecución provisional «se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria» (*supra*, cap. I, apdo. II.3)²⁵⁸.

De este modo, cuando la sentencia condenatoria —o el pronunciamiento condenatorio— que se pretende ejecutar provisionalmente impone un deber consistente en entregar una suma de dinero, tal cantidad debe ser líquida, es decir, determinada o determinable a partir del título mediante simples operaciones aritméticas. Con otros términos, se ha resuelto que «en los supuestos de sentencia de condena al pago de cantidad dineraria indeterminada no puede accederse a su ejecución provisional hasta tanto dicha liquidación se realice en el procedimiento correspondiente»²⁵⁹.

²⁵⁵ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 778.

²⁵⁶ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 203.

²⁵⁷ Por todos, *vid.* VEGAS TORRES, J., *Derecho Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 464.

²⁵⁸ En igual sentido, BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 88-89.

²⁵⁹ Así lo resolvió el AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 10 de diciembre de 2003 (JUR\2004\51326), según el cual «tal modo de entender la cuestión litigiosa aparece avalado por el propio

De acuerdo con lo anterior, las sentencias que condenan a una cantidad ilíquida – entre las cuales se cuentan las *sentencias con reserva de liquidación*²⁶⁰ – no son ejecutables provisionalmente²⁶¹, sino que precisan de un nuevo juicio declarativo²⁶²; pero si la cantidad no es determinada, y la propia sentencia fija claramente las bases con arreglo a las cuales deba efectuarse la liquidación, procede su ejecución provisional²⁶³. En estos últimos supuestos, es decir, cuando la cantidad no es determinada pero sí determinable, se despachará la ejecución provisional sin necesidad de liquidación previa, lo cual se entiende sin perjuicio de la oposición que pueda promover el ejecutado²⁶⁴.

c) Sentencia recurrida

La ejecución provisional procede respecto de sentencias de condena –o que contengan pronunciamientos condenatorios– que no sean firmes (art. 524.2 LEC), lo que resulta una obviedad, puesto que si no existiera la pendencia del recurso, sólo procedería la definitiva una vez transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la

contenido del artículo 531 de la LEC, al prever la posibilidad del ejecutado de suspender la ejecución provisional de condenas dinerarias, cuya liquidez se exige como presupuesto tanto para el despacho de ejecución provisional, como para el ejercicio de tal facultad de suspensión».

²⁶⁰ Como indica DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 54, la exclusión del ámbito objetivo de la ejecución provisional de las sentencias con reserva de liquidación no resulta de lo dispuesto en el artículo 524 de la LEC, sino de la aplicación del artículo 519.3 de la ley rituaría.

²⁶¹ En contra, *vid.* QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, pp. 2544-2545, para quien «son ejecutables provisionalmente las sentencias definitivas de condena al pago de prestaciones pecuniarias ya sean líquidas o ilíquidas». En igual sentido, cfr. CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 45.

²⁶² AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 18 de septiembre de 2003 (JUR\2003\230027). De igual forma, se ha declarado que no es provisionalmente ejecutable la sentencia de condena en caso de operaciones liquidatorias incompletas. Cfr. AAP Madrid (Secc. 22ª), de 10 de junio de 2003 (JUR\2003\190071).

²⁶³ En este sentido, se ha resuelto que procede ejecutar provisionalmente la sentencia que declara la nulidad de un contrato de confirmación de permuta financiera o Swap de inflación, pues no es necesario esperar a que dicha sentencia sea firme para realizar la «liquidación global previa», ya que ésta puede verificarse con simples operaciones de suma y resta. Cfr. AAP Vitoria (Secc. 1ª), de 30 de mayo de 2013 (ROJ AAP VI 1/2013).

²⁶⁴ AAP Madrid (Secc. 25ª), de 20 de julio de 2004 (JUR\2004\243676). En el mismo sentido, se ha resuelto que el carácter transitoriamente ilíquido de la condena al pago de una indemnización no es obstáculo para la ejecución provisional, por no ser la liquidez un presupuesto para el despacho de la misma, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse. Cfr. AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (JUR\2003\393).

LEC²⁶⁵. Por ello, uno de los presupuestos para que pueda llevarse a cabo la ejecución provisional de una sentencia es que se trate de una resolución que no ha alcanzado firmeza²⁶⁶.

En relación con este requisito, debe tenerse presente que desde un punto de vista teórico, la ejecución provisional puede referirse tanto a sentencias recurribles –que no han sido aún impugnadas– como a sentencias ya recurridas²⁶⁷. En efecto, de acuerdo con el artículo 207.2 de la LEC, una resolución firme es aquella contra la que no cabe recurso alguno. A *sensu contrario*, una resolución no es firme porque contra la misma procede legalmente algún recurso y no ha vencido el plazo para interponerlo, o porque la resolución ya ha sido impugnada mediante la interposición del respectivo recurso, y el recurso no ha sido resuelto. De ahí que, de una primera lectura de los artículos 524.2 y 535.1 de la LEC, pareciera desprenderse que la ejecución provisional de una resolución podría solicitarse en cualquiera de estas dos hipótesis, porque en ninguno de tales supuestos la sentencia ha adquirido firmeza.

Sin embargo, de acuerdo con las normas que regulan la institución contenidas en la LEC, no basta con que la sentencia no haya alcanzado firmeza para que pueda solicitarse su ejecución provisional, sino que se requiere, además, que la misma haya sido efectivamente recurrida²⁶⁸. Precisamente, de conformidad con los artículos 527.1 y 535.2 de la LEC, referidos a las resoluciones pronunciadas en primera y en segunda instancia, respectivamente, la ejecución provisional de una sentencia puede solicitarse desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto²⁶⁹ el recurso de

²⁶⁵ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 302. En el mismo sentido, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 52, para quien esta exigencia confirma que los conceptos de firmeza y ejecución no son términos incompatibles, ni aquella es presupuesto de la última.

²⁶⁶ AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 11 de marzo de 2008 (JUR\2008\164631).

²⁶⁷ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 291.

²⁶⁸ En contra, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 40, para quien no es necesario que el pronunciamiento esté directamente impugnado para que proceda despachar su ejecución provisional, ya que, a su juicio, lo relevante a estos efectos es que la resolución no sea firme.

²⁶⁹ Antes de la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, se requería para poder solicitar la ejecución provisional de una sentencia que se hubiese preparado el recurso correspondiente en contra de la misma. La citada ley suprimió el trámite de la preparación de los recursos, por lo que en la actualidad el recurso se interpone directamente, y a partir de la notificación de la resolución que tiene por interpuesto el recurso, se puede instar el despacho de la ejecución provisional.

apelación, el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, según los casos²⁷⁰.

Todo lo cual permite concluir que es requisito indispensable para el despacho de la ejecución provisional de una resolución que contenga un pronunciamiento condenatorio que la misma haya sido previamente recurrida mediante la interposición del recurso previsto por la ley, razón por la cual puede afirmarse que la institución que estudiamos tiene carácter instrumental, toda vez que si el legislador decidiera no prever la posibilidad de impugnar una resolución definitiva, no se justificaría la existencia de la ejecución provisional²⁷¹.

En relación con este requisito, cabe preguntarse si se considera firme o no una resolución en los casos en que se interpone un recurso en contra de ella, cuando tiene por objeto la impugnación de determinados pronunciamientos de la misma, *ex* artículo 458.2 *in fine* de la LEC. La misma pregunta puede hacerse respecto de las sentencias en los casos de pluralidad de partes en que sólo uno o algunos de los litisconsortes deciden recurrir, sin que el resultado, para el caso de estimarse el recurso, pueda afectar al resto de los litisconsortes que ocupan igual posición procesal –activa o pasiva–. En otros términos, lo que se plantea es si es posible que una sentencia genere firmeza parcial, esto es, que parte de sus pronunciamientos sean firmes y otros o no, o que la firmeza se predique respecto de algunas de las partes y de otras no, por el hecho de haber recurrido.

Frente a estos interrogantes, la respuesta negativa es categórica: una resolución es firme o no lo es, e impide esta firmeza la interposición de un recurso en contra de la misma, sea que dicho recurso tenga por objeto impugnar la totalidad de la resolución o sólo algunos de los pronunciamientos contenidos en ellas, sea que sólo algunas de las partes litigantes interpongan los recursos que les permite la ley, manifestando las demás su aquiescencia con el resultado del proceso²⁷².

²⁷⁰ En igual sentido, cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 52.

²⁷¹ Vid. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 66-68.

²⁷² En igual sentido, cfr. MARTÍ MARTÍ, J., «Ejecución de sentencia recurrida por uno solo de los codemandados. ¿Provisional o definitiva?», en *Diario La Ley*, núm. 7308, 2009; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 69.

En consecuencia, en cualquiera de las hipótesis descritas, la sentencia no es firme, por lo que podrá instarse su ejecución provisional. Y si durante la tramitación de los recursos respectivos la resolución adquiere firmeza –y es confirmada–, la ejecución continuará como definitiva si al tiempo en que se produzca esta circunstancia aún no han terminado las actuaciones ejecutivas destinadas a satisfacer el crédito del ejecutante.

3. Recapitulación

Luego de revisar las resoluciones judiciales desde diversos puntos de vista, podemos concluir que el objeto de la ejecución provisional en la LEC son las sentencias, y también algunos autos, que contengan pronunciamientos de condena, sea que la prestación que imponen consista en dar –en cuyo caso se exige que si lo que se debe dar es una cantidad de dinero, la misma sea determinada o determinable, esto es, que la condena sea líquida–, hacer o no hacer algo, y que tal resolución haya sido impugnada a través de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, según corresponda, de manera que la interposición del mismo impida que la resolución alcance la firmeza necesaria para acceder a la ejecución ordinaria o definitiva²⁷³.

En consecuencia, quedan excluidas de la ejecución provisional tanto las sentencias desestimatorias de la demanda, como las sentencias estimatorias de la demanda que contienen exclusivamente pronunciamientos mero declarativos o constitutivos. Asimismo, se encuentra vedado el acceso a esta institución respecto de determinados pronunciamientos que el legislador excluye expresamente de la ejecución provisional, y que examinaremos en el próximo Capítulo.

III. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE TUTELAN DERECHOS FUNDAMENTALES

²⁷³ En el mismo sentido, la Audiencia Provincial de Lleida recuerda que «son requisitos necesarios para que pueda accederse a la ejecución provisional de una sentencia por el Juzgado de Primera Instancia que la dictó: a) Que no sea firme (artículo 524 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil–LEC); b) Que no esté comprendida en algunos de los supuestos exceptuados de ejecución provisional (artículo 525 de la LEC); c) Que contuviera un pronunciamiento de condena a favor del solicitante (artículo 527.3 de la LEC). Cfr. AAP Lleida (Secc. 2ª), de 2 de febrero de 2006 (JUR\2006\138068).

La regulación de la ejecución provisional contenida en la LEC dedica especial atención a las sentencias que tutelan derechos fundamentales, cuya ejecución provisional no sólo se admite de forma general, sino que le imprime un carácter preferente (art. 524.5 LEC).

Como se sabe, el artículo 53.2 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de recabar la tutela de las libertades y derechos fundamentales reconocidos por la misma ante los tribunales ordinarios mediante procesos basados en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, perfilando con ello un sistema mixto de jurisdicción constitucional que se rige por el principio básico de la subsidiariedad, según el cual, en esta materia, la primera palabra la tienen los Juzgados y Tribunales ordinarios, y la última el Tribunal Constitucional²⁷⁴.

En relación con la tutela civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen²⁷⁵ y, en general, para la tutela de cualquier derecho fundamental, la LEC supuso una simplificación respecto del sistema anterior²⁷⁶, pues realiza un tratamiento unitario de una materia *per se* plural, como destaca su propia Exposición de Motivos²⁷⁷. En efecto, la LEC establece que las pretensiones de amparo ordinario se sustanciarán por las reglas del juicio ordinario, salvo las que se refieran al derecho de rectificación, que se tramitan con arreglo a las normas del juicio verbal (arts. 249.1.2º y 250.1.9º LEC). En

²⁷⁴ Cfr. ROVIRA SUEIRO, M., «La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva LEC», en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 6, 2002, p. 643.

²⁷⁵ Como enseña GÓMEZ COLOMER, J., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil* —con MONTERO AROCA, J., *et al.*—, *op. cit.*, pp. 738-739, la LEC no derogó la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que sus normas procesales siguen vigentes. Con todo, su artículo 9.1 ha quedado vacío de contenido, pues el mismo prescribe que la tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere dicha ley puede alcanzarse por la vía ordinaria o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, al haberse derogado la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, la única vía existente en la actualidad es el juicio ordinario de la LEC.

²⁷⁶ En este sentido, ROVIRA SUEIRO, M., «La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva LEC», *op. cit.*, p. 645.

²⁷⁷ Apartado X, párrafo 2º.

todo caso, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 53.2 de la CE, la tramitación de estos procesos tiene carácter preferente²⁷⁸.

En consecuencia, por aplicación del principio de subsidiariedad, las pretensiones dirigidas a obtener la tutela judicial civil de derechos fundamentales deberán dirigirse a los tribunales ordinarios, que las sustanciarán de acuerdo con las reglas del juicio ordinario o del juicio verbal, según corresponda. Sólo después de transitar por los cauces de la justicia civil ordinaria, y para el caso de no resultar satisfecho el interés del ciudadano que estimó vulnerado alguno de sus derechos fundamentales, podrá acudir al Tribunal Constitucional por medio del correspondiente recurso de amparo. Con todo, lo anterior no impide que se intente, con carácter previo y ante el mismo tribunal ordinario que pronunció una resolución que adquirió firmeza en la que se vulneró un derecho fundamental de las partes, el respectivo incidente de nulidad de actuaciones²⁷⁹, pero este mecanismo excepcional está dirigido a impugnar vulneraciones a los derechos fundamentales de las partes de carácter procesal, cualquiera que sea el objeto del proceso, es decir, con independencia de que se trate de un proceso para la tutela de un derecho fundamental de carácter civil o de un proceso que tenga por objeto cualquier otra pretensión.

De acuerdo con lo explicado, la regla del carácter preferente de la ejecución provisional de sentencias que tutelan derechos fundamentales ha sido entendida por la doctrina como el cumplimiento por parte del legislador procesal del mandato contenido

²⁷⁸ Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A., Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*, op. cit., p. 571.

En contra, *vid.* MAJANO CAÑO, M., «La tutela de los derechos fundamentales en la jurisdicción civil: el procedimiento preferente y sumario», en *Beresit: Revista Interdisciplinar científico-humanista*, núm. 5, 2003, p. 292, para quien, con la regulación de la LEC, desaparece en el ámbito civil el procedimiento preferente y sumario para la protección de derechos fundamentales, pues se regula como un procedimiento más, que por razón de la materia, corresponde tramitar como procedimiento ordinario. Por ello, según la autora, no se cumplen los requisitos constitucionales exigidos en la materia.

²⁷⁹ Según CARRASCO DURÁN, M., «La tutela de los derechos fundamentales a través del incidente de nulidad de actuaciones», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 95, 2012, p. 67, «el incidente de nulidad de actuaciones es un instrumento que permite a las partes en un proceso, o a quienes hubieran debido ser partes, solicitar la declaración de nulidad de las actuaciones procesales al órgano judicial que las hubiera acordado o practicado, cuando se den las siguientes circunstancias: a) que se derive de aquellas la lesión de alguno de los derechos fundamentales enunciados en el artículo 53.2 CE; b) que la normativa procesal no ponga a disposición de la parte afectada ningún otro instrumento al que acudir para solicitar la reparación de la vulneración del derecho fundamental que se le haya conculcado, y c) que no haya sido posible a las partes alegar la vulneración de tales derechos antes de recaer la sentencia o resolución que haya puesto fin al proceso».

en el artículo 53.2 de la CE, exigencia constitucional que resulta aplicable a la tutela civil de los derechos fundamentales y, dentro de ella, a la tutela ejecutiva²⁸⁰.

1. Alcance del carácter preferente de la ejecución provisional de sentencias sobre derechos fundamentales

Las sentencias condenatorias que se dicten en los procesos en que se tutelan derechos fundamentales pueden ser provisionalmente ejecutadas, y la tramitación de estas ejecuciones, como acabamos de ver, tendrá carácter preferente, lo que exige que en su configuración concreta se respete la doctrina constitucional sobre las garantías procesales del artículo 53.2 de la CE, según la cual la admisión y sustanciación del trámite procesal de que se trate –en este caso, la ejecución–, deberán interpretarse de forma compatible con la finalidad de garantía reforzada que la sumariedad y preferencia significan²⁸¹.

En esta línea, el tratamiento preferente de la ejecución provisional de sentencias que tutelan derechos fundamentales supone, como destacan algunos autores, que cada tribunal deberá observar la mayor celeridad posible, tanto en la ordenación procedimental como en el señalamiento y decisión del asunto, sin atender para ello al orden de su conclusión²⁸². Con ello, se busca evitar que el volumen de trabajo de los tribunales sea un obstáculo a la rápida efectividad de los pronunciamientos en cuestión²⁸³.

Con similares términos, se ha explicado que este mandato de preferencia debe ser observado no sólo en el despacho de la ejecución y en la tramitación, en su caso, de la oposición, sino también en todas y cada una de las actuaciones ejecutivas²⁸⁴. Por ello, desde el punto de vista de su aplicación práctica, el carácter preferente debe ser

²⁸⁰ Por todos, cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 56; y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 906.

²⁸¹ En este sentido, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 57.

²⁸² MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 307.

²⁸³ CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 44.

²⁸⁴ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 906.

considerado no sólo como una de las excepciones legalmente establecidas que justifican la alteración del orden cronológico, prevista en el artículo 182 de la LEC, para la realización de los actos procesales²⁸⁵, sino incluso una preferencia con respecto al resto de las ejecuciones, sean provisionales o definitivas²⁸⁶.

Con todo, el carácter preferente de estas ejecuciones no impide que las mismas se suspendan, bien por estimarse una causa de oposición en caso de condena no dineraria (art. 530.2 LEC), bien por aplicación de lo dispuesto en el artículo 531 de la LEC, tratándose de condenas dinerarias²⁸⁷.

2. La exclusión de los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias que declaran la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

La aplicación práctica del carácter preferente de la ejecución provisional de sentencias que tutelan derechos fundamentales se vio reducida por la reforma operada por la Disposición Adicional 12.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial²⁸⁸, que añadió un nuevo apartado 3 al artículo 525 de la LEC, en virtud del cual «no procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Esta precipitada reforma de la LEC tuvo por objeto responder a la virulenta reacción de algunos medios de comunicación social contra el régimen de ejecución

²⁸⁵ En similares términos, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 58.

²⁸⁶ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 175.

²⁸⁷ En igual sentido, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 44, para quien esta posibilidad «representa un retroceso en relación con aquellos procesos especiales que, teniendo como objeto derechos fundamentales, establecían la apelación en un efecto de las sentencias estimatorias de la demanda, ya que la efectividad de estos pronunciamientos no se podía suspender».

²⁸⁸ Sobre los alcances de esta reforma, *vid.* DAMIÁN MORENO, J., «Aspectos procesales de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ», en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 13, 2005, pp. 27-46.

provisional regulado en la legislación procesal civil²⁸⁹, originada por una demanda de un grupo de jugadores de fútbol profesional contra dos medios de comunicación social por la supuesta vulneración del derecho al honor y a la intimidad de los deportistas, situación que llevó incluso a que el Defensor del Pueblo recomendara la reforma de la LEC, por considerar que la ejecución provisional de las sentencias pronunciadas contra medios de comunicación podía, de un lado, limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información, y de otro, provocar la desaparición de aquellos medios que no pudieran hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones asociadas a las condenas por vulneración al derecho fundamental al honor y a la intimidad.

Con estos antecedentes, durante la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 19/2003, antes citada, se introdujo por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda en el Senado con el objeto de modificar la LEC en el sentido que venimos comentando, reforma que se justificó en la recomendación del Defensor del Pueblo ya referida; en que la ejecución provisional de las sentencias indemnizatorias por vulneración de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen genera indefensión; y en que no es procedente que se ejecuten provisionalmente sentencias que provoquen un daño irreversible, especialmente en relación con el ejercicio de un derecho fundamental como el previsto en el artículo 20.1.b) de la Constitución²⁹⁰.

En definitiva, con el aparente propósito de asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la información, se introdujo una nueva excepción al catálogo de pronunciamientos que no son provisionalmente ejecutables del artículo 525 de la LEC, que impide la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, limitación que resulta aplicable, de

²⁸⁹ Para un completo análisis del caso que originó esta reforma, de la sentencia que condenó a los medios de comunicación, de la reacción de la prensa y de las razones que se entregaron para justificar la enmienda por la que se introdujo la modificación de la LEC, *vid.* CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», en *Revista del Poder Judicial*, núm. 73, 2004, pp. 101-138.

²⁹⁰ Cfr. CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», *op. cit.*, p. 128.

conformidad con lo dispuesto en el artículo 989 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los procesos penales en que se ventilan este tipo de cuestiones²⁹¹.

La doctrina científica ha reclamado en forma prácticamente unánime la falta de justificación de la reforma introducida a la LEC por la Ley 19/2003, al mismo tiempo que ha criticado desde diversos puntos de vista su contenido, al extremo que ha sido calificada como el mejor ejemplo de cesión política al chantaje de los medios de comunicación, aunque con ello se sacrifique algún derecho fundamental de los ciudadanos²⁹².

Más allá de las consideraciones políticas e ideológicas involucradas –de las que no podemos hacernos cargo ahora, atendidos los fines de este trabajo–, las críticas de orden jurídico-procesal dirigidas contra la reforma apuntan a varias direcciones. Así, se sostiene que la enmienda que originó la reforma se habría justificado en una supuesta doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, de acuerdo con la cual, en caso de conflicto entre los derechos fundamentales involucrados en esta problemática, debe prevalecer siempre el derecho a la libertad de expresión e información. Sin embargo, como ha destacado la doctrina, no existe tal doctrina jurisprudencial²⁹³.

En efecto, según el TC, para que exista verdadera colisión entre los derechos fundamentales al honor y a la libertad de expresión, debe existir un derecho a comunicar una «información veraz», de manera que si lo que se informa es falso –como de hecho sucedió en el «caso Hesperia», el cual dio origen a la reforma de la LEC que comentamos–, no existe derecho a comunicarla, y toda intromisión en el honor y en la intimidad de una persona es, *per se*, ilegítima²⁹⁴. De ahí que, como sostienen

²⁹¹ En este sentido, DAMIÁN MORENO, J., «Aspectos procesales de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ», *op. cit.*, p. 35; y SALVADOR CODERCH, P., RAMOS GONZALEZ, S., y LUNA YERGA, A., «Poder de la prensa y derecho al honor. Comentario a la reforma del artículo 525 LEC», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 2, 2004, disponible en www.indret.com/pdf/214_es.pdf.

²⁹² Así lo expresan MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 325.

²⁹³ Para una revisión completa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, *vid.* CALAZA LÓPEZ, S., «Delimitación de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen», en *Revista de Derecho UNED*, núm. 9, 2011, pp. 43-59.

²⁹⁴ Cfr. CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», *op. cit.*, pp. 129-132.

críticamente algunos autores, de la justificación de la enmienda para introducir la reforma a la LEC, se desprende que la misma estuvo destinada claramente a proteger a los medios de comunicación condenados por intromisión ilegítima en los citados derechos fundamentales (honor, intimidad y propia imagen)²⁹⁵.

Desde otra perspectiva, se ha criticado la reforma por cuanto supone una quiebra del diseño original de la regulación de la ejecución provisional ideado por el legislador, según el cual se favorece ampliamente la institución y se confiere, como vimos en el epígrafe anterior, carácter preferente a la misma cuando se trata de sentencias que tutelan derechos fundamentales. De este modo, la reforma del artículo 525 de la LEC no sólo limitó este carácter preferente respecto de determinados pronunciamientos condenatorios, sino que excluyó derechamente de la ejecución provisional los pronunciamientos indemnizatorios de determinadas sentencias referidas a ciertos derechos fundamentales, consumando, en definitiva, una evidente discriminación que atenta, a su vez, contra el derecho fundamental a la igualdad ante la ley proclamado por el artículo 14.1 de la Constitución²⁹⁶. Por ello, la reforma ha sido tachada de inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad ante la ley²⁹⁷.

Además de constituir un privilegio injustificable²⁹⁸, la reforma resulta censurable por cuanto tiene todos los defectos propios de las normas creadas para el caso concreto. En efecto, su carácter fragmentario es indudable, ya que sólo excluye del ámbito de la ejecución provisional los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias que declaran la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, en circunstancias que la tutela de estos derechos fundamentales puede ser muy amplia y

²⁹⁵ En este sentido, *vid.* SALVADOR CODERCH, P., RAMOS GONZALEZ, S., y LUNA YERGA, A., «Poder de la prensa y derecho al honor. Comentario a la reforma del artículo 525 LEC», *op. cit.*

²⁹⁶ Como expresa CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», *op. cit.*, p. 132. En igual sentido, *vid.* BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 186; MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 117; y CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 50.

²⁹⁷ Así lo afirma CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 92.

²⁹⁸ Cfr. DAMIÁN MORENO, J., «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 19, 2009, p. 118; y del mismo autor «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», en *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 1, 2009.

variada, y comprender pronunciamientos condenatorios que no son estrictamente indemnizatorios, consistentes, por ejemplo, en deberes de hacer, que pueden ser difíciles de «deshacer» en caso de revocación. Así, estos pronunciamientos, que eventualmente pueden afectar tanto o más al titular de un medio de comunicación como los pronunciamientos indemnizatorios, no quedarían al margen de la ejecución provisional²⁹⁹.

Por otro lado, la reforma tiene un alcance mayor que el presupuestado, toda vez que si bien el legislador tuvo a la vista la protección de los medios de prensa, resulta perfectamente posible que el demandado por una supuesta vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen sea un particular, y en este caso tampoco serán provisionalmente ejecutables los pronunciamientos indemnizatorios que pudieran obtenerse. En este último supuesto, la justificación de la exclusión pierde toda base³⁰⁰ – si es que de verdad existe alguna razón tratándose de los medios de comunicación–.

Por las razones antes expuestas, compartimos lo expresado por la doctrina más autorizada en cuanto a que la reforma del artículo 525 de la LEC operada por la Ley Orgánica 19/2003 fue muy desafortunada, tanto en la forma como el fondo³⁰¹. Pese a ello, lo cierto es que tras la entrada en vigor de la citada reforma³⁰², la ejecución provisional de las sentencias que tutelan derechos fundamentales sigue teniendo carácter preferente, salvo los pronunciamientos indemnizatorios contenidos en sentencias que declaran la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, en cuyo caso, no obstante tratarse de sentencias que tutelan derechos fundamentales, su ejecución provisional se encuentra vedada.

²⁹⁹ Con este énfasis, *vid.* TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, pp. 2153-2154.

³⁰⁰ Cfr. SALVADOR CODERCH, P., RAMOS GONZALEZ, S., y LUNA YERGA, A., «Poder de la prensa y derecho al honor. Comentario a la reforma del artículo 525 LEC», *op. cit.*

³⁰¹ Por todos, *vid.* CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», *op. cit.*, pp. 135-138.

³⁰² Como estableció la Audiencia Provincial de Madrid, se ajustó a derecho la inadmisión de una demanda de ejecución provisional de pronunciamientos de carácter indemnizatorios contenidos en una sentencia que declaró la vulneración del derecho al honor presentada con posterioridad a la entrada en vigencia del apartado 3 del artículo 525 de la LEC, añadido por la Ley 19/2003, con independencia de que antes de esa fecha se hubiese intentado tal ejecución por medio de una solicitud que fue rechazada por no revestir la forma de demanda con carácter autónomo o independiente. Cfr. AAP Madrid (Secc. 9ª), de 28 de abril de 2005 (JUR\2005\157476).

Con todo, a nuestro juicio la exclusión de la ejecución provisional de los pronunciamientos indemnizatorios no impide que la parte condenada al pago de los mismos cumpla voluntariamente con la sentencia, aun cuando la misma haya sido impugnada en apelación, situación que si bien puede ser poco probable que se de en la práctica, no se encuentra prohibida³⁰³.

Por último, en cuanto al alcance de la reforma, entendemos que la interpretación de la misma debe ser restrictiva³⁰⁴, de manera que si las sentencias que declaran la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión contienen pronunciamientos de condena que no sean dinerarios –como sería la publicación del fallo de la sentencia en periódicos de difusión nacional–, no resulta aplicable la regla de excepción que analizamos –cuya interpretación debe ser restrictiva–, y volvemos a la regla general³⁰⁵. Por ello, la ejecución provisional de tales pronunciamientos resulta plenamente admisible³⁰⁶, y su tramitación tendrá carácter preferente.

³⁰³ Al respecto, se ha declarado que si la parte condenada abona voluntariamente el importe de la indemnización, no obstante lo dispuesto en el artículo 525.3 de la LEC, dicha consignación y entrega supone un cumplimiento no obligatorio que es equiparable a la ejecución provisional de las sentencias, «por lo que si una de dichas sentencias es revocada parcialmente, surge en la persona a cuyo favor se ha efectuado la entrega de la cantidad establecida en la sentencia la obligación de devolver el exceso percibido, no existiendo ningún error por el Juzgado, cuando señala que es aplicable lo establecido en el art. 533.2 LEC». Cfr. AAP Castellón (Secc. 1ª), de 15 de octubre de 2012 (vLex-374102010).

³⁰⁴ Sobre las excepciones al régimen general disciplinado en la LEC para la ejecución provisional de las sentencias, se ha declarado –con acierto– que «toda excepción a esta regla (de posibilidad amplia de ejecución) ha de ser interpretada restrictivamente, tratando de favorecer la ejecución provisional (en otro caso, se opondría a la finalidad de la Ley)». Cfr. AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de octubre de 2007 (JUR\2008\13162).

³⁰⁵ En igual sentido, *vid.* CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 92.

³⁰⁶ Por esta razón, no compartimos lo resuelto en el AAP Sevilla (Secc. 2ª), de 16 de octubre de 2009 (vLex-234174730), que confirmó la decisión del Juzgador de instancia que declaró no haber lugar a la ejecución provisional de una sentencia que condenó a la empresa Antena 3 Televisión S.A. y a un profesional de la misma a la publicación del fallo de la sentencia en los periódicos de difusión nacional, Telediarios de Antena 3 y programa «Dónde estás Corazón», por considerar que de acceder al despacho de la ejecución provisional de tales pronunciamientos no dinerarios «difícilmente podría restaurarse la respetabilidad periodística y solvencia profesional de los condenados si la sentencia fuese revocada».

Lo que procedía en este caso era, contrariamente a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla, el despacho de la ejecución provisional de esta condena no dineraria, sin perjuicio del derecho de los condenados a oponerse a tal ejecución, *ex* artículo 528.2.2º de la LEC.

CAPÍTULO III

RESOLUCIONES EXCLUIDAS DEL ÁMBITO OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. SENTENCIAS NO EJECUTABLES PROVISIONALMENTE

El modelo de ejecución provisional por el que optó el legislador procesal de 2000 fue abiertamente favorable a nuestra institución, fijando como regla general la posibilidad de ejecutar provisionalmente todos los pronunciamientos condenatorios contenidos en resoluciones judiciales –que normalmente serán sentencias, pero que también pueden ser autos–, siempre que las mismas hayan sido efectivamente impugnadas a través de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, según corresponda.

Por lo tanto, si sólo pueden ejecutarse provisionalmente los pronunciamientos de condena, quedan excluidas del ámbito objetivo de esta institución, por su propia naturaleza³⁰⁷, las sentencias mero declarativas y las sentencias constitutivas. Pero, además, el artículo 525 de la LEC se encargó de regular diversos casos de sentencias cuya ejecución provisional se encuentra claramente vedada, al afirmar categóricamente que las mismas «no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional». La LEC, en definitiva, optó por realizar una enumeración negativa de las resoluciones que no son susceptibles de ejecución provisional, de forma coherente con la generalidad con que se regula este instituto, a diferencia de lo que ocurrió bajo la vigencia de la

³⁰⁷ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 312.

legislación procesal anterior, en que la técnica utilizada fue la descripción de los supuestos en que la ejecución provisional era admisible³⁰⁸.

En los epígrafes siguientes pasaremos revista a los distintos casos que se encuentran expresamente exceptuados del ámbito objetivo de la ejecución provisional, principiando por las sentencias mero declarativas y constitutivas, cuya exclusión se desprende de lo preceptuado en el artículo 524 de la LEC, que limita el ámbito de aplicación de la ejecución provisional a las sentencias de condena, continuando luego por la revisión de las diversas hipótesis reguladas en el artículo 525 de la LEC, manteniendo el mismo orden seguido por el legislador, con la salvedad de que no trataremos ahora el supuesto previsto en el apartado tercero de esta última disposición, al cual nos referimos con anterioridad (*supra*, cap. II, apdo. II.2).

1. Sentencias mero declarativas y sentencias constitutivas

La ejecución provisional, al igual que la ejecución ordinaria o definitiva, sólo procede respecto de sentencias condenatorias o que contengan pronunciamientos condenatorios [*supra*, cap. II, apdo. II.2.a)], razón por la cual no procede la ejecución provisional —y tampoco la ejecución definitiva (art. 521.1 LEC)—, de las sentencias meramente declarativas ni de las sentencias constitutivas, regla que confirma el artículo 524 de la LEC que, al regular el ámbito de la ejecución provisional, se refiere únicamente a las sentencias de condena³⁰⁹. Igual conclusión se desprende del artículo 526 de la LEC, *a sensu contrario*, pues este precepto exige la existencia de un pronunciamiento de condena para que pueda instarse la ejecución provisional³¹⁰.

³⁰⁸ VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 31.

³⁰⁹ Por todos, vid. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 367; ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., pp. 54-55.

³¹⁰ HERRANZ GONZÁLEZ, A., «La ejecución provisional», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2002, p. 1949.

En opinión de algún autor³¹¹, la LEC recoge una concepción estricta de la ejecución provisional, porque limita su ámbito de aplicación a la efectividad de los pronunciamientos de condena impugnados³¹². Sin embargo, al margen de esta postura doctrinal aislada, lo cierto es que las sentencias mero declarativas y las constitutivas no precisan de actividad ejecutiva alguna, por cuanto esos pronunciamientos satisfacen por sí solos el interés del actor, sin necesidad de que el demandado realice acto alguno para dar efectividad al derecho reconocido al demandante³¹³. Siendo ello así, no resulta restrictivo el régimen de ejecución provisional previsto en la LEC al excluir de su ámbito objetivo a las sentencias meramente declarativas y a las sentencias constitutivas. Antes al contrario, es del todo coherente con su naturaleza que tales sentencias no puedan ejecutarse, ni ordinaria ni provisionalmente, pues tal ejecución resulta innecesaria³¹⁴.

En la jurisprudencia encontramos varios ejemplos de sentencias mero declarativas y constitutivas cuya ejecución provisional ha sido intentada y, con razón, se ha denegado el despacho de las mismas. Así, se ha declarado que, tratándose de las *sentencias meramente declarativas*, que son aquellas «que se limitan a la declaración de una situación jurídica preexistente, dotándola de firmeza jurídica»³¹⁵, «no cabe duda que el artículo 521.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil veda el acceso a la ejecución

³¹¹ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», en ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (Coordinador), *Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, Volumen III*, op. cit., p. 24.

³¹² Profundizando en su postura, CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 49-50, sostiene que si mediante la ejecución provisional se consigue la eficacia de una resolución, esta institución es, desde un punto de vista dogmático, aplicable tanto a las sentencias de condena como a las declarativas y constitutivas, puesto que, en principio, no pueden producir efectos hasta que hayan adquirido firmeza. Ello sería así por cuanto, en su concepto, los efectos de estas últimas sentencias trascenderían la propia resolución, puesto que llevarían implícita la atribución, negación o delimitación de una determinada posición jurídica que conlleva una serie de facultades que puede ser preciso ejercitar durante la pendencia del recurso.

³¹³ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 313.

³¹⁴ En esta línea, se ha declarado que «no son ejecutables las sentencias declarativas ni las constitutivas (art. 521.1). Las primeras, porque no incluyen la declaración de un deber incumplido ni de la responsabilidad inherente a la infracción. Las segundas, porque su firmeza produce plenos efectos jurídicos —o al menos los más importantes— de modo inmediato». Cfr. AAP Madrid (Secc. 10ª), de 26 de enero de 2002 (JUR\2003\40542). En igual sentido, *vid.* AAP Lleida (Secc. 2ª), de 2 de febrero de 2006 (JUR\2006\138068); AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (JUR\2003\393); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48978).

³¹⁵ AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380).

provisional»³¹⁶. Por ello, los tribunales han resuelto que no procede la ejecución provisional de la sentencia que determina la renta, con la fecha y cuantía de la actualización, sin condenar al pago de aquellas rentas ya actualizadas³¹⁷; de la sentencia que se limita a interpretar el sentido de una disposición testamentaria³¹⁸; del pronunciamiento de una sentencia que declara la existencia de una relación arrendaticia³¹⁹; o de la sentencia que resuelve la oposición a las operaciones particionales del contador dirimente, ratificando la validez del cuaderno particional impugnado³²⁰. A *contrario sensu*, se ha declarado que sí procede la ejecución provisional del pronunciamiento por el que se ordena rehacer un cuaderno particional, fijando su nuevo contenido, por no tener carácter mero declarativo³²¹.

Lo propio puede decirse respecto de las *sentencias constitutivas*, es decir, de aquellas que declaran un cambio jurídico³²², o más precisamente, de aquellas sentencias por las que se crea, modifica o extingue un estado, relación o situación jurídica³²³, respecto de las cuales se ha declarado, a modo ilustrativo, que no procede la ejecución provisional de la sentencia que estima la acción rescisoria o paulina, pues la misma tiene naturaleza constitutiva³²⁴.

En relación con esta materia, la doctrina ha destacado que existen pronunciamientos cuya naturaleza mero declarativa, constitutiva o de condena resulta controvertida, lo que ha originado criterios discrepantes a nivel jurisprudencial, como

³¹⁶ AAP Valladolid (Secc. 1ª), de 22 de abril de 2002 (JUR\2002\155898).

³¹⁷ AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380).

³¹⁸ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 26 de enero de 2002 (JUR\2003\40542).

³¹⁹ AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 18 de noviembre de 2003 (JUR\2003\277696).

³²⁰ AAP Castellón (Secc. 2ª), de 3 de junio de 2002 (JUR\2002\209536).

³²¹ AAP Albacete (Secc. 1ª), de 17 de octubre de 2002 (JUR\2002\284400).

³²² Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 438.

³²³ Como explica DE LA OLIVA SANTOS, A. *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 196.

³²⁴ AAP Barcelona (Secc. 12ª), de 13 de septiembre de 2004 (JUR\2004\292967).

sucede con los pronunciamientos dictados en los procedimientos de tercerías de dominio y en las tercerías de mejor derecho³²⁵.

En efecto, a los pronunciamientos por los que se resuelven las *tercerías de dominio* se les ha atribuido tanto naturaleza constitutivo-procesal³²⁶, como naturaleza meramente declarativa³²⁷. Sin embargo, cualquiera que sea su calificativo, es claro que el objeto que se persigue por medio de esta especial tutela judicial es, exclusivamente, el alzamiento del embargo sobre el bien erróneamente trabado y de las garantías de la afección adoptadas (arts. 601 y 604 LEC)³²⁸. Por lo tanto, el auto³²⁹ que resuelve la tercería de dominio (art. 603 LEC) tiene eficacia por sí mismo, no contiene pronunciamiento de condena alguno y, en definitiva, no procede su ejecución provisional ni ordinaria.

Para el caso de las *tercerías de mejor derecho*, siguiendo a CACHÓN CADENAS, lo que hace la sentencia que acoge estas pretensiones es fijar el destino que se debe dar al dinero que se obtendrá de la realización de los bienes embargados, pero no contiene ningún mandato dirigido al ejecutado, por lo que no procede su ejecución provisional³³⁰. Por su parte, la sentencia que desestima la tercería de mejor de derecho

³²⁵ Por todos, *vid.* CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, *op. cit.*, pp. 68-70.

³²⁶ En este sentido, se ha resuelto que «como quiera que obtener el alzamiento del embargo es su finalidad esencial y única, no existe en la acción de tercería ningún deudor ni ningún obligado a una cierta prestación, razón por la cual ningún sujeto de derecho privado puede por sí satisfacer el derecho o interés del tercerista solo una resolución jurisdiccional, de contenido contrario a la que decretó la traba puede satisfacer el interés del tercerista y desafectar un bien determinado de una concreta ejecución. A la vista de anteriores elementos, ha de calificarse la tercería de dominio como una acción constitutiva procesal, constitutiva porque la sentencia que estima la tercería de dominio hace ilícita e imposible la ejecución respecto del bien a que se refiere y en esa medida modifica una situación jurídica anterior perfectamente lícita, la creada con el embargo, y procesal porque la modificación que produce se refiere fundamentalmente al proceso de ejecución». Cfr. AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48978).

³²⁷ AJPI de Valencia (núm. 5), de 4 de octubre de 2000 (JUR\2001\273375).

³²⁸ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 803.

³²⁹ Para quienes niegan eficacia provisional a los autos, les basta con esta circunstancia para justificar que no procede la ejecución provisional del auto que resuelve la tercería de dominio. Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 80.

³³⁰ Al respecto, CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, *op. cit.*, pp. 69-70, señala que «cuando la sentencia acoge la tercería de mejor derecho, no impone al sujeto o, en su caso, a los sujetos que hayan sido demandados en la

se limita a negar el derecho del tercerista, por lo que resulta más claro aún que no contiene pronunciamiento de condena alguno susceptible de ser ejecutado provisionalmente.

En resumen, las sentencias mero declarativas y las sentencias constitutivas no pueden ser provisionalmente ejecutadas, y respecto de los supuestos en que no es posible determinar la naturaleza de un pronunciamiento, basta con acreditar que el mismo no es condenatorio para que no proceda su ejecución provisional. Sin embargo, la exclusión del campo de aplicación de nuestra institución de estos pronunciamientos precisa de dos matices, que abordaremos separadamente a continuación.

a) Sentencias que contienen pronunciamientos meramente declarativos o constitutivos y pronunciamientos de condena

Como acabamos de ver, las sentencias mero declarativas y las sentencias constitutivas no pueden –y no requieren– ser ejecutadas, ni provisional ni ordinariamente (art. 521.1 LEC). No obstante, en los casos en que se acumule una acción de condena a una acción constitutiva o a una acción meramente declarativa, para el evento de estimarse la acción de condena, la *sentencia mixta* es ejecutable respecto del pronunciamiento condenatorio.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 521.3 de la LEC, «cuando una sentencia constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en esta Ley». Pues bien, en materia de ejecución provisional los artículos 526 y 527.3 de la LEC autorizan esta institución –acertadamente, a nuestro juicio–, respecto de los *pronunciamientos de condena*. Por lo tanto, estas disposiciones se encuentran en armonía con la regla que comentamos, de lo que resulta que son provisionalmente ejecutables los pronunciamientos de condena

tercería el deber o mandato de llevar a cabo una determinada prestación o actividad. Lo que hace esa sentencia es modificar la situación jurídica procesal creada con el embargo. Desde este punto de vista, puede calificarse como sentencia de carácter constitutivo. Al otorgar al tercerista prioridad para el cobro de su crédito con el dinero que se obtenga en la realización forzosa de los bienes embargados, la sentencia estimatoria de la tercería excluye la preferencia que el embargo había creado a favor del ejecutante (art. 613.2 LEC). En suma, la sentencia estimatoria de la tercería de mejor derecho viene a establecer el destino que el tribunal debe dar a la suma dineraria que se obtenga en la realización de los bienes embargados, pero no contiene propiamente un mandato dirigido al demandado o a los demandados a fin de que éstos lleven a cabo una determinada actuación».

contenidos en las sentencias mero declarativas y en las sentencias constitutivas³³¹. Con otras palabras, cuando la sentencia constitutiva o declarativa contiene también pronunciamientos de condena, sucede que tan sólo tiene dicha naturaleza parcialmente, por ello procede la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena, y se excluyen los de naturaleza constitutiva o declarativa³³².

Adviértase que esta no es la única interpretación posible del artículo 521.3 de la LEC, toda vez que la citada disposición hace referencia exclusivamente a las sentencias constitutivas. De este modo, siguiendo una interpretación literal del mismo, se tendría que concluir que no cabe ejecución, ordinaria ni provisional, de los pronunciamientos de condena que derivados de las sentencias mero declarativas. Sin embargo, entendemos que la interpretación que ofrecemos resulta más coherente con la reglamentación que hizo la LEC de esta institución, que evidencia una opción de política legislativa muy favorable a la misma³³³.

De ahí que, a nuestro entender, resulta perfectamente posible la ejecución provisional de los pronunciamientos condenatorios contenidos en sentencias constitutivas y mero declarativas, y así lo ha entendido también la jurisprudencia. En efecto, sobre esta materia se tiene resuelto que las sentencias mero declarativas y las constitutivas no son susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente, «a no ser, claro está, que la sentencia constitutiva o declarativa contenga, además, algún pronunciamiento de condena. Cuando así ocurra, los pronunciamientos que correspondan a las acciones de condena deben ser ejecutados como si hubiesen sido deducidos de modo independiente, porque son, en realidad, acciones independientes, susceptibles de “diverso” cumplimiento o de diversa ejecución forzosa (art. 521.3). Y lo mismo sucede con los pronunciamientos de condena que contengan las acciones constitutivas “típicas”, siempre que además de constituir un estado jurídico nuevo,

³³¹ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 314; ASECIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1475.

³³² Cfr. DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», en SUÁREZ ROBLADANO, J. (Director), *La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 36.

³³³ En igual sentido, *vid.* CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, *op. cit.*, p. 67.

efectivamente condenen a la parte demandada a una prestación patrimonial; no las de otra clase, que se disciplinan por normas diferentes»³³⁴. En definitiva, con independencia de los términos utilizados por la resolución, si la sentencia mero declarativa o constitutiva impone ciertos comportamientos a una de las partes, tales pronunciamientos pueden ser provisionalmente ejecutados³³⁵.

Contrariamente a lo expresado por algún autor, según el cual la jurisprudencia está actuando en esta materia en forma restrictiva y poco favorable a la ejecución provisional³³⁶, lo cierto es que existen abundantes ejemplos de situaciones en que los tribunales han despachado la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena derivados tanto de sentencias constitutivas como de sentencias mero declarativas. Así, se ha resuelto que procede la ejecución provisional de la sentencia que declara la nulidad de un determinado procedimiento, en la parte que condena a una de las partes a la restitución de la finca, y a la otra, a que restituya el precio logrado a cambio de ella³³⁷.

De forma análoga, se ha fallado que la ejecución provisional procede respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un contrato e imponen al demandado un determinado deber de prestación, como la sentencia en la que se acuerda la condena de entregar a la actora la posesión de un bien, previa declaración de nulidad contractual de la escritura pública de compraventa recaída sobre el mismo³³⁸.

Asimismo, los tribunales aceptan que procede la ejecución provisional de las sentencias que determinan la resolución de un contrato y, al mismo tiempo, imponen a una de las partes un determinado comportamiento, como la sentencia que condena a dejar libre y a disposición de la actora una estación de servicio, previa declaración de resolución del contrato de arrendamiento sobre la misma³³⁹; o la sentencia por la que se

³³⁴ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 26 de enero de 2002 (JUR\2003\40542). En igual sentido, *vid.* AAP Castellón (Secc. 1ª), de 17 de octubre de 2005 (JUR\2005\273523).

³³⁵ AAP Asturias (Secc. 1ª), de 20 de abril de 2006 (JUR\2006\139930).

³³⁶ Cfr. ASENSIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1475.

³³⁷ AAP Asturias (Secc. 1ª), de 20 de abril de 2006 (JUR\2006\139930).

³³⁸ AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 11 de abril de 2016 (vLex-651489257).

³³⁹ AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (JUR\2003\393).

resuelve un contrato y se condena a una de las partes a indemnizar y pagar ciertas cantidades a la otra³⁴⁰.

En otro orden de ideas, se ha declarado que es provisionalmente ejecutable la sentencia que declara determinados derechos sobre una finca y dispone la efectividad de los mismos mediante una condena a la entrega de un bien inmueble concreto³⁴¹. Y, en similares términos, se ha resuelto que procede la ejecución provisional de las sentencias que condenan a desalojar una vivienda, previa declaración de desahucio por precario³⁴².

Más controvertida, desde la perspectiva que estamos analizando, ha resultado la posible ejecución provisional de las sentencias que estiman la acción de división de la cosa común. Precisamente, existen resoluciones que no cuestionan el contenido mixto de estas sentencias, por cuanto de una parte declaran la extinción del régimen de comunidad sobre los bienes de que se trata, y de otra, condenan a los demandados a vender tales bienes en pública subasta, reconociendo la naturaleza mero declarativa del primer pronunciamiento, en tanto que el segundo pronunciamiento debe calificarse de condena no dineraria y, por tanto, susceptible de ejecución provisional³⁴³. Sin embargo, para otro grupo de resoluciones, estas sentencias –las estimatorias de la acción de división de la cosa común– no contienen deber de prestación alguno ni el mandato para cumplirlo, por lo que no procede abrir el despacho de ejecución alguna³⁴⁴.

En relación con esta polémica, entendemos que las sentencias que estiman la acción de división de la cosa común son efectivamente *sentencias mixtas*, por cuanto la tutela solicitada no consiste únicamente en que se declare el derecho a la división del bien común, sino también que se ordenen los actos necesarios para la efectiva división, lo que implica, para el caso de que algún copropietario se resista, que la venta del bien se realizará en pública subasta. Este segundo pronunciamiento tiene, a nuestro juicio,

³⁴⁰ AAP Madrid (Secc. 25ª), de 2 de noviembre de 2010 (JUR\2011\37140).

³⁴¹ AAP Madrid (Secc. 13ª), de 8 de septiembre de 2006 (JUR\2007\167484).

³⁴² AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de octubre de 2007 (JUR\2008\13162); y AAP Málaga (Secc. 5ª), de 5 de mayo de 2003 (JUR\2003\232120).

³⁴³ En este sentido, *vid.* AAP Tarragona (no Barcelona, como señala la base de datos utilizada) (Secc. 2ª), de 9 de enero de 2002 (JUR\2002\70708).

³⁴⁴ Entre otras, *vid.* AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 1 de noviembre de 2002 (JUR\2003\81048).

naturaleza condenatoria, y es por tanto susceptible de ser ejecutado provisionalmente³⁴⁵. Lo anterior, prescindiendo de la dificultad de retrotraer estos actos en caso de una eventual revocación de la sentencia. Esta circunstancia podrá servir al demandado para fundar su oposición a la ejecución provisional y lograr la suspensión de la misma (arts. 528.2.2º y 530. 2 LEC), pero no impide que proceda la ejecución provisional, que podrá despacharse, sin perjuicio de que, en el caso concreto, se logre su paralización.

Como se ha expuesto, son varias las situaciones en que un pronunciamiento condenatorio deriva de un pronunciamiento mero declarativo o constitutivo, en cuyo caso, procede la ejecución de aquel, de forma provisional o definitiva³⁴⁶, sin que sea motivo para inadmitir a trámite una demanda de ejecución provisional la circunstancia de encontrarse intrínsecamente vinculados los pronunciamientos condenatorios a los pronunciamientos constitutivos o mero declarativos de la sentencia³⁴⁷.

Con todo, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias ha fijado una interesante distinción en relación con este punto, entre aquellos pronunciamientos accesorios que se encuentran unidos por vínculos de reciprocidad con el pronunciamiento principal y aquellos pronunciamientos que, no obstante ser accesorios, no tienen vínculos de reciprocidad. Al respecto, determinó que si un pronunciamiento no es susceptible de ejecución provisional –como sucede en el caso de las sentencias

³⁴⁵ En contra de lo aquí expresado, *vid.* CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 71, para quien «las sentencias que acuerdan la división de la cosa común no son susceptibles de ejecución provisional, ni siquiera en el supuesto en que declaren, utilizando o no la fórmula de “condena”, el deber del demandado (copropietario) de realizar los actos necesarios para dividir la cosa común o, en el caso de indivisibilidad de ésta, establezcan que debe procederse a la venta de la misma mediante la correspondiente subasta pública. En estos casos, no estamos ante auténticos pronunciamientos de condena. Las actuaciones que deben efectuarse para dar efectividad a la sentencia que decreta la división de la cosa común constituyen actos de ejecución impropia. Con independencia de los términos formales que utilice la sentencia que estime la acción de división de cosa común, dicha sentencia no impone al demandado (copropietario) el deber de realizar una determinada prestación a favor del demandante. Lo que hace esa sentencia es declarar el derecho del demandante (copropietario) a que se efectúe la división de la cosa común (estableciendo, en su caso, la forma de realizar esa división), o, en el supuesto de indivisibilidad del bien, el derecho del demandante a que se proceda a la venta de la cosa común y al consiguiente reparto del precio. Ahora bien, ese derecho declarado en la sentencia es extensible al demandado, precisamente porque también éste tiene la condición de copropietario (*arg. art.* 400 CCiv)».

³⁴⁶ Sin constituir casos de acumulación de acciones, se debe recordar que las sentencias condenatorias llevan implícita una declaración previa, de ahí que el AAP Málaga (Secc. 5ª), de 5 de mayo de 2003 (JUR\2003\232120) haya resuelto que toda sentencia condenatoria se basa en una situación de derechos en litigio que exigen necesariamente un pronunciamiento previo.

³⁴⁷ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 28 de septiembre de 2011 (ROJ AAP M 13512/2011)

mero declarativas o constitutivas, o tratándose de sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad—, los pronunciamientos no patrimoniales consecuentes o derivados del mismo que estén unidos al principal por vínculos de reciprocidad, tampoco son susceptibles de ejecución provisional³⁴⁸.

Si bien este criterio jurisprudencial pudo resultar atendible en el caso concreto, no puede inferirse del mismo una regla general aplicable a todos los supuestos de sentencias mixtas que, por lo demás, carecería de base legal. En nuestra opinión, toda excepción a la admisibilidad general de la ejecución provisional debe ser interpretada restrictivamente, y no vemos razón para cambiar de parecer respecto de los pronunciamientos de condena derivados de sentencias constitutivas o mero declarativas. A mayor abundamiento, la exclusión de la ejecución provisional realizada por el auto que comentamos, de un determinado pronunciamiento de condena de hacer, tuvo más que ver con la circunstancia de consistir el pronunciamiento principal en la orden dirigida a los demandados de otorgar a favor del actor escritura pública de compraventa, mandato que se traduce en una especial condena de no hacer que conlleva, a la postre, una específica manifestación de voluntad. Por tanto, el citado auto optó por no admitir la ejecución provisional del pronunciamiento de condena de hacer en cuestión, por ser accesorio de otro pronunciamiento de hacer, cuya ejecución provisional se encuentra expresamente prohibida por el artículo 525.1.2ª de la LEC.

En consecuencia, la distinción que plantea la referida Audiencia Provincial, más que una regla general para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad de la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena para el caso de las sentencias mixtas,

³⁴⁸ Se trató de una sentencia cuya ejecución provisional fue inadmitida por el tribunal *a quo*, que contenía cuatro pronunciamientos: el primero, que declaró al actor propietario de una vivienda; el segundo, que condenó a los demandados a otorgar a favor del actor escritura pública de compraventa; el tercero, que condenó a la entrega de la vivienda terminada y de la documentación necesaria para su habitabilidad; y el cuarto, que condenó al pago de una determinada cantidad diaria por concepto de penalización por mora. Al respecto, la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canarias resolvió que los primeros dos pronunciamientos no eran susceptibles de ejecución provisional, el primero, por su naturaleza mero declarativa, y el segundo, porque impone emitir una declaración de voluntad, modalidad de condena que se encuentra vedada expresamente de la ejecución provisional *ex* artículo 525.1.2ª de la LEC. Respecto del tercer pronunciamiento, no obstante su condición condenatoria, declaró que tampoco procedía su ejecución provisional, por su carácter no patrimonial y derivado de pronunciamientos principales no provisionalmente ejecutables, con los cuales se encuentra unido por vínculos de reciprocidad. En cambio, respecto del último pronunciamiento, acordó la procedencia de su ejecución provisional, pues se trata de un pronunciamiento de carácter patrimonial que si bien es accesorio del principal, no se encuentra unido al mismo por vínculos de reciprocidad. Cfr. AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 4ª), de 3 de mayo de 2006 (AC\2006\1236)

representa un criterio de interpretación del alcance que debe darse a la exclusión del ámbito de nuestra institución disciplinada en el artículo 525.1.2ª de la LEC, referido a las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad, tema que analizaremos más adelante (*infra*, apdo. I.3). No nos parece que deba atribuírsele otro sentido que el anterior al auto antes aludido.

b) Exclusión de la ejecución provisional impropia. Anotación preventiva de sentencias en registros públicos

Como se sabe, las sentencias constitutivas –y algunas mero declarativas– pueden requerir para su plena efectividad de ciertas actuaciones complementarias, como la inscripción en registros públicos, siendo extendida la expresión *ejecución impropia*³⁴⁹ para hacer referencia a estas actuaciones, puesto que no tienen la entidad suficiente para ser consideradas propiamente como actividad jurisdiccional ejecutiva³⁵⁰.

Pues bien, la LEC regula por primera vez en el ordenamiento jurídico español las sentencias constitutivas y las sentencias mero declarativas y su ejecución impropia³⁵¹. Precisamente, luego de negarles el carácter de título ejecutivo a estas sentencias (art. 517.2.1º LEC *a sensu contrario*), señala expresamente que no se despachará ejecución de las mismas (art. 521.1 LEC), y que bastará con su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, para proceder a las inscripciones y modificaciones en los registros públicos que sean necesarias para su plena efectividad, sin necesidad de despachar ejecución (art. 521.2 LEC). Complementa lo anterior lo dispuesto en el artículo 522 de la LEC, que establece el deber de todas las personas y

³⁴⁹ Sobre el particular, se ha declarado que «ocasionalmente las sentencias mero-declarativas y constitutivas pueden precisar de actuaciones complementarias destinadas a reforzar su efectividad práctica. En tales casos acostumbra a hablarse de ejecución impropia, que puede dar lugar a una plural variedad de actividades –v. gr., asientos en registros públicos, etc.–, en ocasiones muy complejas, pero en todo caso diferentes de las que integran la ejecución ordinaria de las sentencias de condena (STS, de 18 de noviembre de 1992; Rep. Jur. Ar. 9237). Y lo mismo es predicable de las sentencias constitutivas, las cuales, *ex deffinitione*, producen los efectos que les son peculiares en el momento mismo en que pasen en autoridad de cosa juzgada, pero es posible que precisen de algunos actos complementarios de cumplimiento o ejecución impropia». Cfr. AAP Madrid (Secc. 10ª), de 26 de enero de 2002 (JUR/2003/40542).

³⁵⁰ Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*, op. cit. —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, pp. 438-439.

³⁵¹ Así lo destaca ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 55.

autoridades de acatar y cumplir las sentencias constitutivas, y regula la legitimación para solicitar las medidas necesarias para la eficacia de tales sentencias.

Los actos de ejecución impropia son, en definitiva, actuaciones materiales, normalmente de carácter registral, tendentes a dar publicidad a la declaración (en las sentencias meramente declarativas) o al cambio jurídico producido (en las sentencias constitutivas)³⁵², a fin de dotar a las referidas sentencias de plena efectividad. Con todo, nótese que estas actuaciones están autorizadas exclusivamente para las sentencias constitutivas que se encuentren firmes (art. 521.2 LEC).

Por lo anterior, como ha destacado la doctrina³⁵³, no cabe, con arreglo a la LEC, la *ejecución provisional impropia*, puesto que los pronunciamientos mero declarativos y, especialmente, los constitutivos, cuya eficacia requiera de algún tipo de inscripción en un registro público, está condicionada a la firmeza de la sentencia que los contenga³⁵⁴. En otros términos, la inscripción o cancelación de asientos en registros públicos sólo puede practicarse en virtud de sentencias que tengan la calidad de firmes, pues solamente estas sentencias permiten que las inscripciones en tales asientos produzcan los efectos de publicidad material que les son propios³⁵⁵.

Ahora bien, la prohibición de inscribir en los registros públicos las sentencias constitutivas y las mero-declarativas que no sean firmes, no significa que tales sentencias tengan cerrado el acceso a dichos registros de forma absoluta. En efecto, la ley permite la anotación preventiva de los pronunciamientos que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos, mientras las sentencias que los contienen no sean firmes (art. 524.4 LEC), regla que viene a confirmar que no

³⁵² MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 113.

³⁵³ Cfr. Díez-Picazo Giménez, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 368; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, pp. 2146-2147; y GÓMEZ SÁNCHEZ, J., *La ejecución civil. Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 59-60.

³⁵⁴ En contra, *vid.* CADARSO PALAU, J., «Notas sobre la ejecución provisional de sentencias en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil», en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 3, 2002, p. 30, para quien lo dispuesto por el artículo 524.4 de la LEC puesto en relación con el artículo 521 del mismo cuerpo normativo, permite hablar de ejecución provisional impropia.

³⁵⁵ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 321.

es posible la ejecución provisional impropia³⁵⁶, puesto que las sentencias que precisen para su efectividad de una inscripción o cancelación en un registro público solamente podrán anotarse preventivamente en él, y únicamente podrá materializarse el asiento de inscripción o de cancelación en caso que la sentencia devenga firme³⁵⁷.

Cabe advertir, sin embargo, que el citado apartado 4 del artículo 524 de la LEC, con una redacción que se ha criticado por ser algo alambicada³⁵⁸, confusa³⁵⁹, imprecisa y ambigua³⁶⁰, se refiere a dos tipos de sentencias, a saber: *a)* aquellas que, no siendo firmes, disponen o permiten la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos; y *b)* aquellas que, aun siendo firmes, han sido dictadas en rebeldía y, al igual que las anteriores, disponen o permiten la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos, sin que hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde. En ambos supuestos, la solución del legislador es la misma, sólo cabe la anotación preventiva de tales sentencias³⁶¹.

En relación al primero de los supuestos contemplados por la norma que nos ocupa, esto es, la *anotación preventiva de sentencias no firmes*, la doctrina ha destacado

³⁵⁶ Según MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 110, el apartado 4 del artículo 524 de la LEC, «podría estar ubicado sistemática en el siguiente artículo, puesto que prevé un supuesto en que no cabe la ejecución provisional». En igual sentido, cfr. QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2546; y AGUILERA MORALES, M., «Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 793-794.

Sin embargo, como acabamos de señalar en el cuerpo de este trabajo, entendemos que la regla que comentamos no contempla propiamente un caso de exclusión de la ejecución provisional, sino que, partiendo de la base de que las sentencias que disponen o permiten la inscripción o cancelación de asientos en registros son de naturaleza mero declarativa o constitutiva y, por tanto, no son ejecutables –ni ordinaria ni definitivamente–, confirma que no se permite el acceso a un registro público sino mediante una sentencia firme, y regula la forma en que se puede proteger el interés de la parte que obtuvo en el pleito para el caso de que se impugne la decisión.

³⁵⁷ Cfr. PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», *op. cit.*

³⁵⁸ ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 59.

³⁵⁹ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 321.

³⁶⁰ CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 93.

³⁶¹ En similares términos, *vid.* BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 191.

que la solución legal respeta la legislación registral³⁶² y recoge la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) que, durante la vigencia de la LEC/1881 fue contraria a la inscripción y cancelación de asientos registrales con fundamento en una sentencia ejecutada provisionalmente, exigiendo al efecto la firmeza de la resolución correspondiente³⁶³. Precisamente, reafirmando la correspondencia de la disposición que analizamos con la legislación registral, se ha resuelto que para la correcta interpretación del artículo 524.4 de la LEC «ha de tenerse presente que, conforme al artículo 42.3º de la Ley Hipotecaria, podrá pedir anotación preventiva “el que en cualquier juicio obtuviese sentencia ejecutoria condenando al demandado”, por lo que al establecer la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, como regla general, la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena –con las excepciones legalmente establecidas–, aquella previsión legal no tiene más sentido que restringir la posibilidad de anotar preventivamente las sentencias no firmes, o las firmes dictadas en rebeldía del demandado mientras no hayan transcurrido los plazos legales de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión (artículo 502 de la Ley Procesal), a las que dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos, exclusivamente»³⁶⁴.

La anotación preventiva de estas sentencias no firmes, por tanto, es plenamente coherente con su naturaleza meramente declarativa o constitutiva, y por ello, la ley exige la firmeza de estas sentencias para su inscripción. En definitiva, el artículo 524 de la LEC «admite exclusivamente la ejecución provisional de sentencias de condena, dinerarias o no, vetando la posibilidad de llevar a cabo ejecuciones provisionales que conlleven inscripciones o cancelaciones registrales hasta que la sentencia alcance firmeza»³⁶⁵, sin perjuicio de admitirse la ejecución provisional de los pronunciamientos condenatorios contenidos en la sentencia³⁶⁶, tema que abordamos en el epígrafe anterior.

³⁶² Para una completa revisión del sistema registral y su relación con el proceso de ejecución, *vid.* RIFÁ SOLER, J., *Proceso de ejecución y registro de la propiedad*, La Ley, Madrid, 2013.

³⁶³ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 60; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 36; y MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 110-111.

³⁶⁴ AAP Madrid (Secc. 25ª), de 2 de noviembre de 2010 (JUR\2011\37140).

³⁶⁵ AAP Málaga (Secc. 6ª), de 31 de diciembre de 2002 (AC\2003\1293). En el mismo sentido, *vid.* AAP Valencia (Secc. 7ª), de 11 de septiembre de 2009 (JUR\2009\498772).

³⁶⁶ En igual sentido, CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 94.

Pero, como adelantamos, el artículo 524.4 de la LEC no sólo se refiere a la anotación preventiva de sentencias no firmes, sino que contempla una segunda hipótesis relativa a la *anotación preventiva de sentencias dictadas en rebeldía*. En efecto, según el precepto que analizamos, las sentencias dictadas en rebeldía que precisen de alguna inscripción en un registro público sólo podrán anotarse preventivamente en ellos, aunque sean firmes, mientras no hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión de sentencia firme a instancias del rebelde, esto es, veinte días, a partir de la notificación de la sentencia firme, si la notificación fue personal, o cuatro meses, a partir de la notificación de la sentencia firme en forma edictal, *ex* artículo 502 de la LEC.

Antes de referirnos a la anotación preventiva propiamente tal de estas sentencias, debe quedar claro que la disposición que comentamos no excluye de la ejecución provisional a las sentencias dictadas en rebeldía que contengan pronunciamientos condenatorios³⁶⁷, ni tampoco la ejecución definitiva de dichos pronunciamientos cuando la sentencia alcance firmeza, incluso si no han transcurrido los plazos para instar su rescisión³⁶⁸. Lo único que quiere decir el citado precepto respecto de las sentencias dictadas en rebeldía de una de las partes, es que mientras no hayan transcurridos los plazos para deducir la acción de audiencia al rebelde, procede su ejecución –provisional o definitiva– según las reglas generales³⁶⁹, pero si la sentencia permite la inscripción o cancelación de algún asiento de un registro público, tal inscripción podrá materializarse una vez transcurridos los plazos previstos para el ejercicio del mecanismo excepcional

³⁶⁷ Como explica DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 906, «ni hay norma que expresamente excluya este tipo de sentencias de la ejecución provisional, ni en otro caso tendría sentido el art. 566, que prevé la posibilidad de que la ejecución se suspenda cuando se presenta una demanda de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía». En igual sentido, cfr. SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II* —con PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.—, *op. cit.*, pp. 312-313.

³⁶⁸ En contra, *vid.* LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», *op. cit.*, p. 1840, quien entiende que la regla que comentamos implica, precisamente, que no son susceptibles de ejecución provisional las sentencias dictadas en rebeldía.

³⁶⁹ Por estos motivos, no compartimos lo resuelto por el AAP Barcelona (Secc. 12ª), de 13 de septiembre de 2004 (JUR\2004\292967), que niega lugar a la ejecución provisional de una sentencia no firme que afecta a un codemandado rebelde, justificando la decisión en que «si la ejecución afecta a una Sociedad no comparecida y rebelde, y si además existe complejidad de las actuaciones ejecutivas, con la finalidad de llevar a cabo determinadas actuaciones, es claro que, en el espíritu de la nueva ordenación procesal, no cabe dar lugar a la ejecución provisional solicitada».

de rescisión de sentencias antes aludido³⁷⁰. Por lo tanto, no siendo posible la inscripción de la sentencia, el artículo 524.4 de la LEC autoriza su anotación preventiva como expediente para tutelar los derechos del acreedor.

La anotación preventiva de las sentencias dictadas en rebeldía, aunque sean firmes, es coherente con la doctrina de la DGRN, que exige para que sea procedente la inscripción de una sentencia en el Registro correspondiente, bien la firmeza de la resolución, bien el transcurso de los plazos previstos en la LEC para ejercitar la acción de rescisión³⁷¹. Sin embargo, la referencia a la efectividad de las sentencias firmes dictadas en rebeldía resulta completamente asistemática³⁷², precisamente porque la ejecución provisional supone, para que proceda, que se trate de sentencias no firmes.

Desde otra óptica, se ha afirmado que la previsión que comentamos sería anómala, por cuanto permite al litigante estratégico obstaculizar los derechos del demandante, al impedir la plena efectividad del derecho obtenido en la sentencia y mantener su interinidad aunque la sentencia no haya sido efectivamente impugnada, mientras no transcurran los plazos para ejercitar la acción de rescisión³⁷³.

No obstante, entendemos que la crítica recién apuntada es un poco excesiva, pues si bien la norma que comentamos resulta censurable desde un punto de vista de ubicación sistemática, no vemos en ella un incentivo para que, desde un punto de vista de estrategia procesal, un litigante decida permanecer en rebeldía con la finalidad de restarle eficacia a un posible pronunciamiento judicial en su contra. Ello, por cuanto debemos partir de la base de que, como señalamos con anterioridad, el artículo 524.4 de la LEC no impide la ejecución forzosa de las sentencias dictadas en rebeldía. Por lo tanto, la parte interesada podrá solicitar la ejecución provisional de la sentencia dictada en rebeldía que ha sido impugnada por medio de algún recurso ordinario, siempre que

³⁷⁰ El transcurso del plazo para el ejercicio de la acción de rescisión sólo es aplicable al caso de las sentencias dictadas en rebeldía, no a todas las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en registros públicos, como erróneamente da a entender el AAP Alicante (Secc. 5ª), de 6 de junio de 2007 (JUR\2007\259509).

³⁷¹ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 209.

³⁷² En este sentido, vid. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 32.

³⁷³ *Ibidem*.

tal sentencia contenga algún pronunciamiento condenatorio. De este modo, en nada obsta a la efectividad de la resolución el que el demandado haya optado voluntariamente por permanecer en rebeldía. Y si la sentencia dictada en rebeldía no fuera de condena, no se podría acceder a su ejecución provisional ni definitiva *ex* artículo 521.1 de la LEC, aunque la ley procesal nada hubiese dicho en el Título correspondiente a la ejecución provisional.

Lo propio puede decirse respecto de la ejecución ordinaria de la sentencia dictada en rebeldía. Sólo en los supuestos en que se trate de una acción constitutiva o mero declarativa a la que no se acumule pretensión de condena alguna, la previsión del artículo 524.4 de la LEC puede significar un retraso en la efectividad del pronunciamiento estimatorio, por cuanto no se admitirá su inscripción definitiva en el registro público correspondiente, ni siquiera en los casos en que la sentencia haya adquirido firmeza, hasta que no transcurran los plazos para instar la llamada *audiencia al rebelde*. Con todo, no se trata de una dilación injustificada. Al contrario, partiendo del hecho cierto de haberse seguido el juicio en rebeldía del demandado, es perfectamente posible que se ejercite en contra de la decisión judicial que le afecta la acción de rescisión, de manera que si se llegase a revocar la sentencia se produciría una situación análoga a la que ocurre en los supuestos de revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente. Por todo ello, resulta razonable que sólo se permita la anotación preventiva de la sentencia pronunciada en rebeldía mientras no hayan transcurrido los plazos para que el rebelde pueda impugnar dicha resolución, pues la potencial revocación de la sentencia no se aviene con el carácter definitivo de las inscripciones registrales.

Fijado el alcance de los dos tipos de sentencias incluidos en el artículo 524.4 de la LEC, cabe plantearse, como hizo CACHÓN CADENAS, si el régimen jurídico aplicable a la anotación preventiva de sentencias es el previsto para la ejecución provisional, en razón de su ubicación sistemática, o si, por el contrario, la anotación preventiva está sujeta a la normativa aplicable a las medidas cautelares, en atención a su naturaleza³⁷⁴.

³⁷⁴ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 93-94.

De acuerdo con lo que venimos sosteniendo en este apartado, no resulta posible la ejecución provisional impropia de las sentencias meramente declarativas y constitutivas, de manera que las actuaciones que precisen dichas sentencias para su plena efectiva sólo pueden llevarse a cabo una vez que las mismas han alcanzado firmeza. Por lo tanto, mientras estén pendientes de resolución los recursos que se hayan ejercido en contra de estas sentencias –o en tanto no hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión a instancia del rebelde, o la misma no se haya resuelto para el caso de haber sido interpuesta–, las referidas actuaciones de ejecución impropia no pueden realizarse. Siendo ello así, la anotación preventiva que autoriza la ley no puede ser calificada de actividad ejecutiva, ni siquiera como un acto de ejecución impropia, pues con ella el pronunciamiento mero-declarativo o constitutivo no alcanza la eficacia propia de la inscripción definitiva. Al contrario, tal anotación tiene por finalidad anunciar la existencia de un proceso a fin de servir como mecanismo de publicidad para terceras personas. Por consiguiente, entendemos que se corresponde con los caracteres propios de las medidas cautelares³⁷⁵, y serán las normas que regulan tales medidas las que deban aplicarse a la anotación preventiva de sentencia³⁷⁶.

2. Sentencias dictadas en procesos civiles no dispositivos y en juicios sobre derechos honoríficos; con especial referencia a las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales

La primera excepción expresa al régimen de ejecución provisional se encuentra establecida en el artículo 525.1.1ª de la LEC que, en su texto original, excluía de esta institución a las «las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos».

³⁷⁵ Le atribuyen naturaleza cautelar a esta medida, entre otros, MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 321; CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 93-94; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley, op. cit.*, pp. 202-206; y FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares, op. cit.*, p. 154.

³⁷⁶ En contra, cfr. TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, p. 2147, quien sostiene que la anotación preventiva no está sometida a los condicionantes que para las medidas cautelares se imponen, especialmente en lo referido a los requisitos temporales o a la solicitud de caución.

Por lo tanto, junto a las sentencias dictadas en los juicios ordinarios sobre derechos honoríficos³⁷⁷, quedan fuera del ámbito objetivo de la ejecución provisional las sentencias dictadas en procesos civiles no dispositivos³⁷⁸, exclusión que encuentra su antecedente directo en el artículo 385.3 de la LEC/1881, que tras la reforma operada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto de 1984, establecía que «en ningún caso serán ejecutables provisionalmente las sentencias recaídas en los juicios que versen sobre paternidad, maternidad, filiación, divorcio, capacidad, estado civil y derechos honoríficos»³⁷⁹.

Tras una serie de modificaciones legales a la LEC durante el año 2015³⁸⁰ –tres de las cuales afectaron a la regla de exclusión que estamos estudiando–, se ha ampliado su ámbito de aplicación a otras materias de carácter no dispositivo. En efecto, la primera modificación que afectó al numeral 1ª del apartado 1 del artículo 525 de la LEC fue operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria³⁸¹, a través de la cual se introdujo la referencia a las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional. Con menos de un mes de diferencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia³⁸², volvió a reformar el mismo precepto, para incluir dentro de la exclusión que comentamos las sentencias sobre oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, pero omitió la referencia a las

³⁷⁷ Como aclara el AAP Palma de Mallorca (Secc. 3ª), de 30 de octubre de 2002 (JUR\2003\71055), la exclusión se refiere a los derechos honoríficos de las personas, esto es, los honores que se otorgan graciosamente, como una merced o título nobiliario, pero no a los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

³⁷⁸ Los procesos civiles no dispositivos están regulados en el Libro IV de la LEC, referido a los procesos especiales, específicamente en su Título I, que lleva por rúbrica «De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores».

³⁷⁹ En relación al alcance de esta disposición y los problemas de interpretación que originó, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 185-189.

³⁸⁰ Para una revisión panorámica de estas modificaciones, *vid.* TRIGO SIERRA, E. y PÉREZ-PUJAZÓN MILLÁN, M., «Las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2015», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, núm. 42, 2016, pp. 31-44.

³⁸¹ Sobre el nuevo régimen de la jurisdicción voluntaria, entre la ya abundante bibliografía, *vid.* GÁZQUEZ SERRANO, L., «Comentario a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria», en *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, núm. 12, 2016; y FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. (Coordinador), *La jurisdicción voluntaria. Una apuesta por la eficacia*, Dykinson, Madrid, 2016.

³⁸² Sobre el alcance general de esta reforma, *vid.* GÓMEZ MEGÍAS, A., «Aspectos básicos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia», en *Diario La Ley*, núm. 8593, 2015; y CALVO SAN JOSÉ, M., «La reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de junio y Ley 26/2015, de 28 de julio)», en *Arx Juris Salmanticencis*, núm. 4, 2016, pp. 29-39.

medidas de relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional, que acababa de ser introducida. Por ello, hizo falta una tercera reforma para otorgarle la redacción definitiva –por ahora– al artículo 525.1.1ª de la LEC. Nos referimos a la modificación operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que concilió las dos reformas anteriores –en lo que a nosotros nos interesa en este punto–, incluyendo en la prohibición de ejecutar provisionalmente a las sentencias sobre «oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, así como sobre las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional».

En definitiva, a las ya tradicionales materias excluidas de la ejecución provisional –paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación³⁸³ y divorcio, capacidad y estado civil, y derechos honoríficos–, se suman otras materias también relativas al derecho de familia y que dicen relación con la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y con las medidas de restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional³⁸⁴. Todos los casos contemplados en la regla de exclusión del artículo 525.1.1ª de la LEC tienen como denominador común el carácter no dispositivo de los derechos en cuestión.

Sentado el alcance de esta regla de excepción, huelga señalar que esta exclusión es lógica, pues una determinación provisional del estado y condición de las personas carecería de sentido³⁸⁵. Precisamente, la norma que comentamos se justifica tanto porque los pronunciamientos principales contenidos en estas sentencias no son

³⁸³ La LEC mejora la redacción de la regla de exclusión al contemplar expresamente, a diferencia del artículo 385.3 de la LEC/1881, las sentencias de nulidad de matrimonio y de separación. Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 33.

³⁸⁴ En relación con las sentencias sobre sustracción de menores, entendemos que la prohibición sólo rige cuando se trata de sentencias pronunciadas por tribunales españoles. Tratándose de sentencias extranjeras pronunciadas sobre estas materias, la exclusión de la ejecución provisional deriva del apartado 2 del artículo 525, salvo que se trate de una resolución pronunciada por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, porque en ese caso se aplica el Reglamento (CE) N° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, según el cual procede la ejecución provisional, entre otras, de las sentencias sobre restitución de menores (*infra*, apdo. I.5).

³⁸⁵ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 114.

compatibles con regímenes de interinidad³⁸⁶, como por la naturaleza constitutiva o mero declarativa de los pronunciamientos a que hace referencia³⁸⁷. Sin embargo, en atención a esta última circunstancia, podría pensarse que la inclusión de estas sentencias dentro de las excepciones al régimen de ejecución provisional era innecesaria, pues a igual conclusión se habría llegado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 521.1 de la LEC³⁸⁸.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha señalado que la razón de ser de la disposición que comentamos la encontramos en la mención expresa a los pronunciamientos patrimoniales que puedan contener estas sentencias, que quedaron fuera de la exclusión de la ejecución provisional³⁸⁹. En efecto, la gran novedad de la LEC en este punto fue la mención expresa a los pronunciamientos relativos a cuestiones patrimoniales relacionados con el objeto principal del pleito, los que sí podrán ejecutarse provisionalmente, superando así una de las dudas interpretativas a que dio lugar la legislación anterior³⁹⁰.

De este modo, en los procesos sobre cuestiones no dispositivas o sobre derechos honoríficos, el pronunciamiento principal contenido en la sentencia no será susceptible de ejecución, ni provisional ni definitiva, atendida su propia naturaleza. Pero el pronunciamiento sobre las acciones de contenido patrimonial que se hayan acumulado a la acción principal, habida cuenta de su naturaleza condenatoria, es susceptible de ejecución provisional en caso de ser impugnada la sentencia. Por lo demás, se trata de una regla que es plenamente coherente con lo prescrito en el artículo 521.3 de la LEC, disposición que, como sabemos, es aplicable al régimen de ejecución provisional [*supra*, apdo. I.1.a)]. En este ámbito, destacan singularmente los pronunciamientos de condena de las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales, y a ellos nos vamos a referir a continuación.

³⁸⁶ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 33; y DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 37.

³⁸⁷ Cfr. DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 51.

³⁸⁸ Cfr. GARCÍA CASAS, J., «La ejecución provisional y la seriedad de la Justicia», *op. cit.*, p. 42; y GARCÍA-MIGUEL GARCÍA-ROSADO, M., «La ejecución provisional de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 462-463.

³⁸⁹ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 907.

³⁹⁰ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 69.

Así, bajo la vigencia de la LEC/1881, la posibilidad de ejecutar provisionalmente los pronunciamientos sobre cuestiones accesorias de contenido patrimonial y moral que suelen incluirse en las sentencias pronunciadas en los procesos matrimoniales fue un tema particularmente controvertido ³⁹¹. En efecto, eran básicamente dos las posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre el punto: de un lado, la que consideraba que la sentencia era un todo indivisible, de suerte que no siendo susceptible de ejecución provisional el pronunciamiento principal, tampoco lo eran los pronunciamientos accesorios y dependientes de aquel; y de otro lado, la que entendía que los pronunciamientos accesorios de contenido económico eran perfectamente escindibles, por lo que se asimilaban a los pronunciamientos de condena de cara a su posible ejecución provisional.

La previsión del artículo 525.1.1ª de la LEC, que deja a salvo de la exclusión de la ejecución provisional a los pronunciamientos de contenido patrimonial relacionados con el objeto principal del pleito, evidencia la clara intención del legislador de zanjar la polémica existente con la regulación anterior³⁹², de ahí que resulte especialmente relevante en relación con los procesos matrimoniales.

Con todo, debe tenerse en cuenta que la ley procesal no sólo se ocupó de regular la efectividad de las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales en el Título relativo a la ejecución provisional, sino que hizo lo propio en la regulación específica de estos procesos especiales. Justamente, es sabido que en las sentencias pronunciadas en los procesos matrimoniales deben adoptarse una serie de medidas definitivas que guardan «relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas», de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 774 de la LEC –en concordancia con lo establecido en el artículo 91 del Código Civil–, con independencia de que se hayan adoptado con anterioridad medidas provisionales sobre estas mismas cuestiones³⁹³ o de

³⁹¹ Para una exposición resumida de esta problemática, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, pp. 330-333; y BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit.*, pp. 96-104.

³⁹² Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 114.

³⁹³ Recuérdesse que las medidas provisionales quedan sin efecto desde que son sustituidas por las definitivas, establecidas en la sentencia, o desde que termina el procedimiento por otra causa (art. 773.5

que exista acuerdo de los cónyuges. Pues bien, la ley procesal regula de forma expresa la eficacia de estas medidas definitivas en los casos en que las sentencias que las contienen han sido impugnadas (arts. 774.5 y 777.8 LEC), y prevé que las mismas no se suspenderán por la interposición de recursos en contra de las referidas sentencias. En otros términos, los recursos que se interpongan en contra de las sentencias definitivas pronunciadas en los procesos matrimoniales no producen efectos suspensivos respecto de las medidas definitivas acordadas en ellas, lo que les permite desplegar una eficacia sin precedentes en el ordenamiento procesal español³⁹⁴.

De este modo, no obstante el propósito del legislador de superar los problemas interpretativos a que dio lugar la legislación anterior, la ejecución de las medidas definitivas acordadas en las sentencias matrimoniales, lejos de ser una cuestión pacífica, ha suscitado opiniones doctrinales encontradas y criterios jurisprudenciales discrepantes, atendida la aparente antinomia entre lo dispuesto en los artículos 525.1.1ª y 774.5 de la LEC. En efecto, de acuerdo con esta última disposición, las medidas definitivas adoptadas por las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales tendrán eficacia inmediata aunque sea impugnada la sentencia, sin distinguir si se trata de medidas de carácter patrimonial o moral. En cambio, el artículo 525.1.1ª de la LEC limita la posibilidad de ejecutar provisionalmente a los pronunciamientos de contenido patrimonial incluidos en la sentencia, sin hacer referencia a las medidas sobre cuestiones indisponibles³⁹⁵.

Esta aparente contradicción entre las citadas disposiciones no sólo ha originado soluciones doctrinales contrapuestas, sino que también ha dado lugar a una diversidad de problemas prácticos, surgiendo disparidad de criterios jurisprudenciales sobre la correcta interpretación y aplicación de las mismas³⁹⁶, fundamentalmente en lo referente

LEC). Al respecto, se ha resuelto que las medidas provisionales tan sólo son eficaces mientras no se dicte sentencia, pues las medidas definitivas adoptadas en ella sustituyen *ipso iure* a las provisionales. Cfr. AAP Ciudad Real (Secc. 1ª), de 23 de junio de 2004 (JUR\2004\279058); AAP Burgos (Secc. 2ª), de 26 de abril de 2002 (ROJ AAP BU 171/2002).

³⁹⁴ Según afirma CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 34.

³⁹⁵ En similares términos, cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 74-75.

³⁹⁶ Como destacan, entre otros, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 74; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 113-114; y MUERZA ESPARZA, J.,

al alcance que debe darse al artículo 525.1.1^a en relación con el artículo 774.5 de la LEC, y sobre el régimen al que debe sujetarse la ejecución de las medidas adoptadas en estos procesos³⁹⁷.

A nivel doctrinal, algunos autores se manifestaron contrarios a la ejecución provisional de las medidas acordadas en las sentencias matrimoniales de orden personal o moral, pues entendieron que esta interpretación se ajusta más a la naturaleza de estas medidas, que, al igual que los pronunciamientos que constituyen el objeto principal del proceso, versan sobre cuestiones indisponibles no susceptibles de ser provisionalmente ejecutadas³⁹⁸.

En sentido diametralmente opuesto, parte de la doctrina afirma que las medidas sobre cuestiones no patrimoniales son provisionalmente ejecutables, del mismo modo que las medidas de contenido económico, todo ello de acuerdo con una interpretación lógica, sistemática y teleológica del ordenamiento procesal civil³⁹⁹. A igual conclusión llega un número importante de resoluciones, partiendo de la base de que, ante la aparente contradicción entre las disposiciones que comentamos, debe prevalecer el artículo 774.5 de la LEC, por razones sistemáticas y de especialidad⁴⁰⁰.

«Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 114-115.

³⁹⁷ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 75.

³⁹⁸ En este particular sentido, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 70; y VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 36.

³⁹⁹ En este sentido, *vid.* GUERRERO PALOMARES, S., «La ejecución provisional del pronunciamiento relativo a la guarda y custodia de menores contenido en sentencia definitiva», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 5, 2002, pp. 1478-1480, para quien el artículo 774.5 de la LEC evidencia la intención del legislador de que se lleven a cabo todas las medidas definitivas acordadas en la sentencia, sin distinguir entre aquellas que tengan contenido patrimonial y las que no, aun cuando se hayan interpuesto recursos en contra de la sentencia. De este modo, afirma el autor, si la sentencia no es firme, pero se quiere dotar de eficacia a todas las medidas definitivas, procede la ejecución provisional de las mismas. Por su parte, ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 2033, entiende que la limitación del artículo 525 de la LEC a los pronunciamientos patrimoniales no parece del todo correcta a la vista de lo dispuesto en el artículo 774, según el cual también procede la ejecución provisional de las medidas definitivas acordadas en las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales. En igual sentido, *vid.* LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», *op. cit.*, pp. 1841-1842; y DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 51-52.

⁴⁰⁰ Ilustrando esta doctrina jurisprudencial, el AAP Cádiz (Secc. 5ª), de 9 de mayo de 2007 (AC\2007\2185) tiene declarado que «lo dispuesto en el artículo 774.5 debe prevalecer sobre la norma del artículo 525.1.1º, por dos razones: 1ª) Por un principio sistemático, ya que el artículo 525 se ubica dentro

En efecto, según esta corriente jurisprudencial⁴⁰¹, la aplicación preferente antes referida implica que, al no distinguir el artículo 774.5 de la LEC entre medidas de contenido patrimonial y medidas de contenido no patrimonial, todas las medidas que se adopten en las sentencias sobre procesos matrimoniales son provisionalmente ejecutables, dejando fuera de la ejecución provisional únicamente al pronunciamiento principal relativo a la nulidad, la separación o el divorcio –cuyo carácter constitutivo o mero declarativo los hace inejecutables–. Por esta razón, se han declarado provisionalmente ejecutables las medidas relativas a la guarda y custodia de los hijos de los litigantes⁴⁰²; el requerimiento a la esposa para que abandone el domicilio familiar en favor del esposo e hijos que con él conviven⁴⁰³; las medidas que determinan el régimen de visitas paterno-filiales⁴⁰⁴ o el régimen de visitas a favor de los abuelos⁴⁰⁵; y las medidas relativas a la atribución del domicilio conyugal⁴⁰⁶.

En definitiva, sea por razones lógicas y sistemáticas, sea por razones de especialidad, de acuerdo con esta interpretación de los artículos 525.1.1ª y 774.5 de la LEC, en los casos en que sea impugnada la sentencia pronunciada en un proceso matrimonial, incluso en aquellos supuestos en que el recurso se refiera específicamente al pronunciamiento sobre la medida definitiva –quedando firme el pronunciamiento principal–, procede la ejecución provisional de todas las medidas acordadas, sean de

de las disposiciones generales de la ejecución provisional, en tanto que el 774 está situado dentro de la regulación completa de los procesos matrimoniales, la cual recoge como uno de sus principios inspiradores (superando problemas de interpretación de la normativa anterior) que las últimas medidas acordadas sustituyan a las anteriores, como refleja con claridad el artículo 773.5: "Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo". 2ª) Por la mayor especialidad de su contenido, puesto que el artículo 774 es aplicable exclusivamente a procesos matrimoniales, y el artículo 525.1.1ª se refiere también a procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, en los que pueden establecerse "pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso" distintos de los específicos de los procesos de separación y divorcio». En el mismo sentido, *vid.* AAP Girona (Secc. 2ª), de 27 de septiembre de 2006 (JUR\2007\184310); AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 16 de mayo de 2003 (JUR\2003\240154).

⁴⁰¹ A modo ejemplar, con referencia a otras resoluciones, *vid.* AAP Granada (Secc. 5ª), de 7 de julio de 2006 (AC\2006\2074).

⁴⁰² AAP Girona (Secc. 2ª), de 27 de septiembre de 2006 (JUR\2007\184310); AAP Asturias (Secc. 6ª), de 26 de julio de 2002 (AC\2002\2306).

⁴⁰³ AAP Cádiz (Secc. 5ª), de 9 de mayo de 2007 (AC\2007\2185).

⁴⁰⁴ AAP Huelva (Secc. 2ª), de 2 de abril de 2002 (AC\2002\759); AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 16 de mayo de 2003 (JUR\2003\240154).

⁴⁰⁵ AAP Madrid (Secc. 22ª), de 5 de julio de 2002 (JUR\2002\260809).

⁴⁰⁶ AAP Madrid (Secc. 22ª), de 26 de abril de 2002 (JUR\2002\221824).

carácter patrimonial o no patrimonial o moral. Consecuentemente, por tratarse de una hipótesis de ejecución provisional, la efectividad de las medidas definitivas se rige por las normas sobre despacho, oposición y revocación previstas en el Título II del Libro III de la LEC⁴⁰⁷.

Una forma distinta de interpretar las reglas sobre la efectividad de las medidas definitivas, que también se basa en la aplicación preferente del artículo 774.5 de la LEC sobre lo dispuesto en el artículo 525.1.1ª del código procesal, se encuentra en algunas resoluciones que han declarado que todas las medidas adoptadas en los procesos matrimoniales y de menores, tengan o no contenido patrimonial, tienen eficacia inmediata, aunque la sentencia que las contiene no haya adquirido firmeza, tesis que también comparte algún autor⁴⁰⁸. De acuerdo con esta postura, la ejecución de estas medidas no se rige por los cauces de la ejecución provisional, sino por las normas sobre ejecución ordinaria o definitiva, razón por la cual se ha resuelto que son eficaces desde el momento del dictado de la sentencia, y por tanto, son directamente ejecutables –no provisionalmente– las medidas adoptadas sobre la guarda y custodia de los hijos menores del matrimonio⁴⁰⁹.

Otra explicación a la aparente contradicción entre las normas sobre eficacia de las medidas definitivas y la regla de excepción establecida en sede de ejecución provisional que ocupa nuestra atención, comienza por descartar que estemos en presencia de una antinomia normativa. En efecto, parte de la doctrina entiende que los artículos 525.1.1ª y 774.5 de la LEC, en rigor, no son antagónicos, toda vez que regulan supuestos diferentes. Se trata, por tanto, de normas que tienen un ámbito de aplicación distinto, lo que permite interpretarlas de forma complementaria. De ahí que, en definitiva, el citado artículo 774 de la LEC no constituye propiamente una regla especial o de excepción respecto de lo dispuesto en el artículo 525 de la LEC. Según estos

⁴⁰⁷ AAP Asturias (Secc. 6ª), de 26 de julio de 2002 (AC\2002\2306).

⁴⁰⁸ Cfr. SANTOS MARTÍNEZ, A., «La ejecución de las medidas acordadas en los procesos matrimoniales. Algunas propuestas de mejora», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 33, 2014; HERNÁNDEZ VERGARA, A., «La ejecución provisional en la LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 419. Nótese que este último autor cambia de opinión en una obra posterior, y asume la última de las tesis que veremos sobre la materia en el cuerpo principal de este trabajo.

⁴⁰⁹ AAP Málaga (Secc. 6ª), de 9 de octubre de 2002 (JUR\2002\283638); AAP Tarragona (Secc. 1ª), de 12 de junio de 2003 (JUR\2004\40422).

autores⁴¹⁰, el artículo 774.5 de la LEC sólo se refiere a las medidas definitivas adoptadas en la sentencia, es decir, a aquellas medidas relativas a las cuestiones que regula el apartado 4 del mismo precepto, todas las cuales tienen carácter indisponible. Pues bien, atendida la eficacia inmediata de estas medidas, procede su ejecución forzosa desde el momento en que se pronuncia la sentencia –de forma análoga a lo que sucede con las medidas previas a la demanda y con las medidas provisionales–, con independencia de la interposición de recursos en su contra.

Ahora bien, la actividad ejecutiva a que dan lugar las medidas referidas se rige por lo dispuesto en los artículos 538 y siguientes de la LEC, esto es, por las normas previstas para la ejecución ordinaria o definitiva⁴¹¹. Por esta razón, como han expresado algunos autores, en las causas matrimoniales no puede hablarse en sentido estricto de ejecución provisional⁴¹².

Y no ocurre lo mismo con los pronunciamientos de carácter disponible o de contenido patrimonial que sean acordados en la sentencia pronunciada en un proceso matrimonial, pues ellos no se rigen por lo dispuesto en el artículo 774.5 de la LEC, toda vez que el ámbito de aplicación de esta disposición se limita a regular la eficacia inmediata de las medidas definitivas de contenido no patrimonial. Tales pronunciamientos, por tanto, no gozan de eficacia inmediata, pero ello no impide que se puedan ejecutar para el caso de que se impugne la sentencia que los contiene, pues en estos supuestos rige lo dispuesto en el artículo 525.1.1ª de la LEC. Por lo tanto, estos pronunciamientos son provisionalmente ejecutables, y se les aplica el régimen jurídico previsto en el Título II del Libro III de la LEC.

⁴¹⁰ Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 74-78; MORALES MORENO, A., *Ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos de familia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 24-25; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., pp. 334-339; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 117-118; CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», op. cit., pp. 80-81; y HERNÁNDEZ VERGARA, A., «Comentarios al Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., pp. 3534-3536.

⁴¹¹ A igual conclusión llegan, entre otros, FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», op. cit., p. 314; GARCÍA CASAS, J., «La ejecución provisional y la seriedad de la Justicia», op. cit., p. 45; y ALEGRET BURGÚÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», op. cit., p. 728.

⁴¹² Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Algunas consideraciones sobre la ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», op. cit.; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», op. cit., p. 38; y GARCÍA CASAS, J., «La ejecución provisional y la seriedad de la Justicia», op. cit., p. 45.

Los tribunales se han hecho eco de esta interpretación, existiendo resoluciones que han declarado que la contradicción entre lo dispuesto en los artículos 525.1.1ª y 774.5 de la LEC es más aparente que real, porque si bien procede aplicar de forma preferente esta última disposición –de acuerdo con una interpretación sistemática y de especialidad–, la misma tiene un ámbito de aplicación determinado, por lo que el resto de situaciones no contempladas en ellas se rigen por lo disciplinado en el artículo 525.1.1ª de la LEC⁴¹³.

En definitiva, la jurisprudencia ha reconocido que las medidas acordadas en las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales sobre las materias reguladas en el

⁴¹³ En esta línea, el AAP Madrid (Secc. 22ª), de 18 de enero de 2013 (ROJ AAP M 1316/2013) declaró que «no cabe a esta Sala duda alguna sobre la aplicación preferente del artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien hay que destacar que no estamos en presencia de un problema de ejecución provisional de una sentencia sino de ejecutividad inmediata de las medidas adoptadas en un proceso matrimonial, lo que hace perder parte de la contradicción señalada. En tal sentido las normas no deben ser aplicadas de una manera aislada, sino en relación con aquellas otras conforman el proceso. El artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la adopción de las medidas definitivas en los procesos matrimoniales que vienen a sustituir a las medidas provisionales del artículo 773 del texto procesal. En este último artículo, en su apartado 5, se fija el momento final de las medidas provisionales, estableciendo tajantemente que quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que definitivamente se establezcan en sentencia. Obsérvese que no se hace referencia alguna a medidas firmes, sino que el texto procesal se refiere en exclusiva a medidas definitivas, que no son otras que las adoptadas al amparo del artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es evidente que no es posible dejar una situación de crisis familiar sin medidas aplicables a las relaciones paterno filiales o de contenido económico o patrimonial, por lo que si las medidas provisionales cesan por expresa previsión legal cuando se fijan las definitivas, sería contrario a la propia finalidad del derecho de familia pensar que la interposición del recurso de apelación contra la sentencia definitiva implicaba igualmente la suspensión de las medidas definitivas que han de sustituir a las provisionales cuya eficacia acaba con la propia sentencia. No existe ninguna previsión legal que permita extender los efectos de las medidas provisionales hasta la firmeza de la sentencia en la que se adoptan las medidas definitivas. Éstas son ejecutables y exigibles desde el mismo momento en el que se dicta la sentencia que las adopta, y lo son con independencia de que tal sentencia se recurra o no, o en su caso con independencia de las materias objeto de recurso. Por ello, y ante esta realidad incuestionable, se establece la previsión del artículo 774.5, que no hace sino reconocer la eficacia inmediata de las medidas definitivas que se hayan adoptado en la sentencia recurrida y su vigencia en las relaciones derivadas del proceso de familia en sustitución de las anteriormente acordadas. Como se desprende del anterior razonamiento, no estamos en presencia de un problema de infracción del artículo 525.1.1º sino de vigencia y ejecutoriedad inmediata por imperativo del artículo 774.5 de las nuevas medidas acordadas en la sentencia, lo que priva de argumentos a la tesis que sostiene que no cabe la ejecución provisional de las medidas definitivas.

Aparte de lo anterior, tampoco puede olvidarse que las medidas definitivas de eficacia inmediata no son todas las que se establezcan en la sentencia, sino fundamentalmente aquellas a las que se refiere el apartado 4 del artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, las que guarden relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la disolución del régimen económico y las garantías a establecer entre los cónyuges. Estas son medidas que el juez está obligado a adoptar imperativamente a falta de acuerdo entre los cónyuges o cuando los acuerdos no abarquen alguna de estas cuestiones». En idéntico sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 22ª), de 17 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11506/2012).

artículo 774.4 de la LEC son inmediatamente ejecutables, y esta ejecución no es provisional, sino definitiva⁴¹⁴.

Por nuestra parte, creemos que esta última tesis es la que mejor se ajusta al régimen procesal y sustantivo que regula las sentencias pronunciadas en los procesos matrimoniales, y permite interpretar sistemáticamente todas las disposiciones legales en juego. Ciertamente, en el caso de las medidas definitivas acordadas en las sentencias pronunciadas en los procesos matrimoniales se trata de la ejecución de una resolución que ha sido impugnada y que, por lo tanto, no ha alcanzado firmeza, lo que puede conducir a pensar que se trata de un supuesto de ejecución provisional, siendo esa la vía para alcanzar la eficacia inmediata de estos efectos de las sentencias matrimoniales regulada en el artículo 774 de la LEC⁴¹⁵. Sin embargo, entendemos que el régimen de la ejecución provisional no encaja bien con la predicada eficacia inmediata de las medidas de los procesos matrimoniales.

En efecto, las normas sobre oposición a la ejecución provisional, particularmente las relativas a la ejecución de condenas no dinerarias, como es el caso de las medidas no dispositivas, tienen por finalidad que el ejecutado pueda demostrar al juez que de llevarse a efecto la sentencia resultará imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior o indemnizar los perjuicios en caso de revocarse la sentencia. Pero el artículo 774.5 de la LEC lo que busca es, precisamente, que no se suspenda por ningún motivo la medida acordada, ni siquiera en los casos en que sea impugnada mediante la interposición de recursos en contra de la sentencia, máxime cuando las medidas definitivas reemplazan las medidas provisionales que se hayan podido decretar, pues si se paralizara la eficacia de la medida definitiva, podría pensarse que conservan su eficacia las medidas previas, lo que sería absurdo.

⁴¹⁴ En este sentido, además de las ya señaladas, *vid.* SAP Asturias (Secc. 6ª), de 13 de octubre de 2015 (vLex-587291198); SAP Lleida (Secc. 2ª), de 13 de febrero de 2015 (vLex-568455482); AAP Pontevedra (Secc. 1ª), de 10 de febrero de 2012 (AC\2012\1762); AAP Huelva (Secc. 3ª), de 5 de febrero de 2008 (JUR\2008\227825); AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 24 de enero de 2007 (JUR\2007\219961); AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 19 de junio de 2006 (JUR\2006\230058); SAP Zamora (Secc. Única), de 22 de enero de 2003 (JUR\2003\67268).

⁴¹⁵ Sobre las dificultades para conciliar lo dispuesto en los artículos 525 y 774 de la LEC, y las consecuencias de apostar por la ejecución ordinaria o provisional, *vid.* OCHOA MONZÓ, V., «La ejecución de las medidas dictadas en las sentencias de separación matrimonial, nulidad y divorcio al amparo del 774.5 LEC cuando se interpone recurso de apelación. ¿Ejecución provisional o ejecución forzosa?», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 12, 2005, pp. 19-27.

Por otro lado, el régimen jurídico de la ejecución provisional regula la forma en que se debe volver al estado anterior a la ejecución en caso de revocación de la sentencia. Sin embargo, que en caso de las medidas matrimoniales, nada hay deshacer ni indemnizar, porque nada se ha ejecutado indebidamente. Como se sabe, las medidas que se adoptan en los procesos matrimoniales «permiten al Tribunal la posibilidad de ir dando respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se pueden ir creando a lo largo de una relación personal, fundamentalmente de tipo paterno-filial, a lo largo de un proceso matrimonial, sin que la adopción de esas medidas quede mediatizado por el hecho de que haya de esperarse a la firmeza de la resolución que se adopta»⁴¹⁶. Por consiguiente, atendida la finalidad que persiguen estas medidas, no corresponde que se persiga ningún tipo de reparación para el caso de que ellas sean dejadas sin efecto o modificadas por una resolución posterior.

Por todo ello, a nuestro juicio las medidas matrimoniales, al estar dotadas de eficacia inmediata *ex* artículo 774.5 de la LEC, no son provisionalmente ejecutables, sino directamente ejecutables con arreglo a los cauces de la ejecución ordinaria, con las modificaciones introducidas por el artículo 776 de la ley procesal.

De este modo, siguiendo a un importante sector de la doctrina científica⁴¹⁷, entendemos que para conciliar las reglas sobre ejecución dispuestas para las sentencias dictadas en procesos matrimoniales contempladas en sede de ejecución provisional y en materia de juicios especiales, se debe distinguir entre el pronunciamiento principal, los pronunciamientos de contenido patrimonial y las medidas de tipo no dispositivo o personal.

⁴¹⁶ AAP Burgos (Secc. 2ª), de 26 de abril de 2002 (ROJ AAP BU 171/2002).

⁴¹⁷ Son partidarios de esta interpretación, sin ánimo exhaustivo, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 74-78; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, pp. 334-339; CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1083; MORALES MORENO, A., «Guía sobre la ejecución en los procesos de familia», en *Iuris: Actualidad y práctica del derecho*, núm. 168, 2012, pp. 34-35; MORENO VELASCO, V., «La ejecución de las sentencias de nulidad, separación, divorcio y modificaciones de medidas. Una interpretación de los artículos 525.1.1, 774.5 y 777.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, núm. 7483, 2010; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 117-118; GIBERT FERRAGUT, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 3-4; y CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 80-81.

Así, respecto de las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales que han sido impugnadas, el pronunciamiento principal relativo a la nulidad del matrimonio, a la separación o al divorcio, no es ejecutable ni provisional ni definitivamente *ex* artículo 521.1 de la LEC. Tampoco procede la inscripción de estas sentencias en registros públicos, pues dicha actuación está reservada para las sentencias firmes, sin perjuicio de la posibilidad de anotar preventivamente estas resoluciones, según lo dispuesto en el artículo 524.4 de la LEC. Con todo, procederá la inscripción de estas sentencias cuando la impugnación afecte únicamente a las medidas, pues en tal caso se declarará la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, separación o divorcio (art. 774.5 *in fine* LEC).

Si la sentencia contiene pronunciamientos de condena de contenido patrimonial –como la pensión compensatoria, la indemnización al contrayente de buena fe o los alimentos–, procede la ejecución provisional de los mismos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 525.1.1ª de la LEC, ejecución que se sujeta al régimen jurídico regulado en el Título II del Libro III de la ley procesal.

Finalmente, las medidas definitivas adoptadas en estas sentencias de carácter indisponible, que dicen relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas (art. 774.4 LEC), sea que se hayan adoptado o no medidas provisionales sobre estas mismas materias con anterioridad al dictado de la sentencia, son inmediatamente eficaces *ex* artículo 774.5 de la LEC, con independencia de los recursos que se hayan interpuesto en contra de la sentencia que las adopta, lo que significa que son directa ejecutables, actividad ejecutiva que se regirá por las normas sobre ejecución ordinaria o definitiva⁴¹⁸.

⁴¹⁸ Igual interpretación puede observarse en resoluciones recientes. En efecto, se ha resuelto que «en definitiva, y a los efectos de ejecución en el ámbito del derecho matrimonial se pueden distinguir los siguientes supuestos, de acuerdo con una interpretación sistemática de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1.- Es inejecutable provisionalmente la declaración de nulidad, separación o divorcio de conformidad con los artículos 524.2, 525.1.1º y 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no contener un pronunciamiento de condena.

2.- Las medidas definitivas de carácter indisponible a las que se refiere el artículo 774.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no son ejecutables provisionalmente, sino que de conformidad con el artículo 774.5 tienen eficacia directa tras su adopción en la sentencia, sustituyendo por imperativo legal a las medidas provisionales o las medidas definitivas anteriores que son sustituidas en un procedimiento de modificación de medidas, por lo que son directamente ejecutables con independencia de que sea o no recurrida en apelación la sentencia dictada.

3.- El resto de las medidas que se adopten, será posible su ejecución provisional al amparo del

3. Sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad

La ley procesal ha excluido también de la ejecución provisional a las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad (art. 525.1.2ª LEC), supuesto que, a diferencia de los comentados con anterioridad, constituye un caso de pronunciamiento de condena que, de no existir la prohibición que comentamos, sería susceptible de ser ejecutado provisionalmente de acuerdo con la regla general sobre la materia, que admite la ejecución provisional de todos los pronunciamientos condenatorios, sea que impongan una prestación dineraria o una prestación no dineraria.

Precisamente, el artículo 708 de la LEC regula especialmente la ejecución de condenas no dinerarias que imponen el deber de emitir una declaración de voluntad junto al resto de las ejecuciones por deberes de hacer –respecto de las cuales distingue entre deberes de hacer no personalísimos o fungibles (art. 706 LEC) y deberes de hacer personalísimos o infungibles (art. 709 LEC)⁴¹⁹–. Por tanto, las sentencias que imponen la emisión de una declaración de voluntad son sentencias de condena, que pese a contener un deber de prestación personalísimo, están regulados especialmente⁴²⁰ y, si no fuera por la regla de excepción del artículo 525.1.2ª de la LEC, su ejecución provisional habría sido viable.

Un sector de la doctrina científica ha encontrado la razón de ser la exclusión de estas sentencias del ámbito de la ejecución provisional en la propia esencia del pronunciamiento condenatorio⁴²¹. Sin embargo, siendo discutido que la condena a emitir

artículo 525.1.1º si tienen contenido patrimonial (pensión por alimentos, pensión compensatoria, liquidación de la sociedad de gananciales) y solo para el caso de que la sentencia contenga alguna medida de carácter disponible y sin contenido patrimonial, será aplicable la prohibición de ejecución provisional que contiene el artículo 525.1.1º». Cfr. AAP Madrid (Secc. 22ª), de 18 de enero de 2013 (ROJ AAP M 1316/2013); y AAP Madrid (Secc. 22ª), de 17 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11506/2012).

⁴¹⁹ Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y Díez-Picazo Giménez, I.—, *op. cit.*, p. 500.

⁴²⁰ ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, La Ley, Madrid, 2005, p. 329.

⁴²¹ En este sentido, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 115; GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 206; QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2550; y DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 52.

una declaración de voluntad constituya un hacer personalísimo⁴²², fundamentalmente por la ubicación sistemática del artículo 708 de la LEC –circunstancia que ha llevado a algunos autores a criticar la exclusión que comentamos, por estimar que no existirían razones prácticas ni técnicas que la justifiquen⁴²³–, el fundamento de esta norma de excepción reside en la considerable inseguridad jurídica que podría originar su ejecución provisional⁴²⁴, pues la realización forzosa de estos pronunciamientos supondría un cambio en la realidad jurídica difícilmente reparable en caso de revocación de la sentencia⁴²⁵, especialmente de cara a los terceros de buena fe que hayan podido actuar en consideración a esta voluntad manifestada.

Por lo demás, deben considerarse las consecuencias inmediatas de la sustitución judicial de esta actividad, pues normalmente el fin último que persigue quien solicita el cumplimiento del deber de emitir una declaración de voluntad es proceder a la inscripción de la misma en algún Registro público, gestión que, como analizamos

⁴²² Cuestionando el carácter personalísimo de esta obligación, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 315; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 78-79.

A favor del carácter infungible de la misma, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 49, 2008; ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 331-334; ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 72.

⁴²³ En este sentido, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 34-35, expresa que «el argumento de que esta obligación es de carácter personalísimo no debería tener ninguna incidencia sobre este particular. Precisamente esta condición determina que sólo pueda realizarse forzosamente este tipo de pronunciamientos cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art. 708. Ahora bien, una vez cumplidas estas exigencias nada debería impedir la posibilidad de que realizarlos provisionalmente. Nótese que si el carácter personalísimo fuera realmente el argumento decisivo, tampoco podría procederse a la ejecución definitiva de este tipo de pronunciamientos. Y ello no es así».

Con iguales argumentos, cfr. PUIGSERVER ASOR, C., «1654. Sentencia de 14 de noviembre de 2002: Ejecución provisional de la condena a emitir una declaración de voluntad», en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, núm. 61, 2003, pp. 280-282.

⁴²⁴ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 907.

En similares términos, DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 39, expresa que una situación de provisionalidad se concilia mal con la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas que, de ordinario, comporta la emisión de una declaración de voluntad, lo que justifica su exclusión del ámbito de la ejecución provisional.

⁴²⁵ Con énfasis en la dificultad para reparar los perjuicios en caso de revocación, *vid.* SILVOSA TALLÓN, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero», en *Revista internauta de práctica jurídica*, núm. 20, 2007.

anteriormente [*supra*, apdo. I.1.b)], sólo procede respecto de resoluciones firmes⁴²⁶. De ahí que la opción por la ejecución de las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad una vez que han adquirido firmeza es coherente con el sistema de ejecución provisional previsto en la LEC, especialmente con la regla de su artículo 524.4⁴²⁷.

De forma minoritaria, un sector de la doctrina ha defendido una tesis contraria a la exclusión de las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad, por considerar insuficiente el argumento de la inseguridad jurídica que produciría la ejecución provisional de las mismas para justificar este régimen de excepción. En este orden de ideas, se ha manifestado que la circunstancia de que a consecuencia de su efectividad se genere *ex novo* un vínculo jurídico inexistente antes de iniciar el proceso no es razón suficiente para excluirlo de la posibilidad de desplegar efectos provisionalmente, bajo el entendido de que ese vínculo quedaría sometido a la condición resolutoria de que se revocara la sentencia⁴²⁸. Por lo demás, no es ajeno en la práctica la existencia de negocios sujetos a condición resolutoria, y lejos de restarles eficacia, el ordenamiento jurídico les permite desplegarla en su totalidad⁴²⁹.

A lo anterior, se agrega que, si lo que en último término se quería evitar con esta norma de excepción era la inscripción en registros públicos de sentencias que aun no adquirieran firmeza, habría bastado con prescribir que las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad sólo podrán anotarse preventivamente, de forma equivalente a lo dispuesto en el artículo 524.4 de la LEC. Esta solución habría sido

⁴²⁶ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 315.

⁴²⁷ En la misma línea, CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 83. En igual sentido, se ha declarado que no procede la ejecución provisional de la sentencia que declara el derecho de retracto sobre determinada finca, primeramente, porque dicha prestación se encuadra dentro de la prohibición del artículo 525.1.2ª de la LEC, referida a las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad y, en segundo lugar, porque tampoco son provisionalmente ejecutables las sentencias que disponen o permite la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos *ex* artículo 524.4 de la LEC. Cfr. AAP Alicante (Secc. 5ª), de 6 de junio de 2007 (JUR\2007\259509).

⁴²⁸ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 35.

⁴²⁹ PUIGCERVER ASOR, C., «1654. Sentencia de 14 de noviembre de 2002: Ejecución provisional de la condena a emitir una declaración de voluntad», *op. cit.*, p. 280.

menos drástica que la prohibición de la ejecución provisional de estos pronunciamientos⁴³⁰.

En nuestra opinión, resulta excesiva la opción del legislador de excluir de la ejecución provisional las sentencias que imponen el deber de emitir una declaración de voluntad, por las razones antes expuestas, y porque no parece coherente con el propósito del legislador procesal de impulsar decididamente la institución que estudiamos. Por lo demás, la ejecución provisional de cualquier pronunciamiento de condena, pecuniario o no, lleva siempre aparejada algún tipo de riesgo, pero entendemos que el mecanismo de la oposición a la ejecución garantiza de forma adecuada el respeto de los derechos de la parte ejecutada, que podrá provocar la suspensión de la misma previa estimación de su oposición, pero la ejecución provisional continuaría siendo viable. Y en relación con los terceros que obran de buena fe, no vemos cómo la ejecución provisional de estas sentencias podría implicar mayores riesgos que la ejecución provisional de cualquier otro pronunciamiento. Antes al contrario, el mecanismo de la anotación preventiva de la sentencia, mientras está pendiente el recurso, operaría como mecanismo de advertencia suficiente sobre la situación de provisionalidad existente para el tercero diligente, quien podría decidir si le conviene o no vincularse jurídicamente en el asunto de que se trate.

Con todo, lo cierto es que las sentencias de condena a emitir una declaración de voluntad no son provisionalmente ejecutables, excepción que debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 708 de la LEC, que regula el régimen especial de ejecución definitiva de estos pronunciamientos⁴³¹.

En efecto, la ley procesal ha dispensado un régimen especial para la ejecución de las sentencias que imponen la emisión de una declaración de voluntad, atendido que estas condenas constituyen una prestación de hacer que si bien es naturalmente infungible, es jurídicamente fungible. Ello, por cuanto el ordenamiento jurídico establece que los efectos jurídicos que aspira alcanzar el ejecutante mediante la

⁴³⁰ En el mismo sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 82. En similares términos, PUIGCERVER ASOR, C., «1654. Sentencia de 14 de noviembre de 2002: Ejecución provisional de la condena a emitir una declaración de voluntad», *op. cit.*, p. 281.

⁴³¹ Por todos, *vid.* BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 126.

declaración de voluntad del condenado, pueden ser logrados sin necesidad de que el ejecutado exprese su voluntad de cumplir con el deber impuesto en el título, pues la misma puede ser suplida por el tribunal⁴³².

En consecuencia, a diferencia de lo que sucede con las condenas de hacer personalísimo, en que el interés del ejecutante sólo se satisface si la prestación la realiza precisamente la persona del ejecutado, tratándose de las condenas a emitir una declaración de voluntad, procede la ejecución por medio de la sustitución de la voluntad del ejecutado que hace el tribunal. El fundamento de esta fungibilidad jurídica de la declaración de voluntad radica en que el ordenamiento jurídico considera que esa voluntad ha sido suficientemente emitida por el demandado con anterioridad y consta así en el título, de forma tal que el tribunal puede añadir los actos que falten para completar esa voluntad ya declarada y que sean necesarios para su efectividad⁴³³.

Así las cosas, la mayoría de las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad están dirigidas al establecimiento de una relación contractual entre el demandante y el demandado, cuando este último ha incumplido un precontrato o contrato de promesa⁴³⁴; aunque la regla que comentamos se refiere a toda declaración de voluntad que sea debida, cualquiera que sea la causa jurídica que conste en el título y que impone emitirla⁴³⁵.

Un ejemplo frecuente es el caso de las sentencias que condenan a otorgar una escritura pública, en los cuales se ha dado lugar a una disparidad de criterios

⁴³² Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 331-332; y ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 72.

⁴³³ Cfr. MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», op. cit.; ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 332-334, quien, asumiendo que esta explicación sitúa la ejecución de títulos que imponen la emisión de una declaración de voluntad en un terreno muy próximo al de la tutela constitutiva, se encarga de diferenciar claramente ambas clases de tutelas.

⁴³⁴ Cfr. MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», op. cit.

⁴³⁵ Por todos, ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 329.

jurisprudenciales⁴³⁶, que de alguna forma se alinearon tras un pronunciamiento del Tribunal Supremo (en adelante, TS) del año 2002, que declaró la existencia de error judicial, a efectos de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, por haberse acordado el despacho de la ejecución provisional de una sentencia que condenaba a la emisión de una declaración de voluntad⁴³⁷.

En efecto, antes del pronunciamiento del TS sobre esta cuestión, el asunto no era claro, y según algunas Audiencias Provinciales la condena consistente en elevar a escritura pública un acuerdo no implicaba la imposición del deber a emitir una declaración de voluntad, por lo que procedía la ejecución de estas sentencias⁴³⁸. Sin

⁴³⁶ Sobre el particular, *vid.* CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 82-86; y MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», *op. cit.*

⁴³⁷ Nos referimos a la STS (Sala de lo Civil), de 14 de noviembre de 2002 (RJ\2002\9923), que declaró que «la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, de la que se ha obtenido su ejecución provisional, acredita que la misma condena a emitir una declaración de voluntad, plasmada en la concurrencia al otorgamiento de escritura pública de compraventa. Al ser esto así es de todo punto evidente que la sentencia no podía ser ejecutada provisionalmente, por disponerlo así el artículo 525.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La comprensión de esta prohibición se aclara si se relaciona este precepto con el artículo 708 de la misma Ley, que se refiere a la resolución judicial o arbitral firme que condene a emitir una declaración de voluntad, bajo la denominación literal siguiente: “condena a la emisión de una declaración de voluntad”. Esta denominación coincide con la prohibitiva del artículo 525.2ª. En definitiva, el artículo 708 establece un régimen especial de ejecución de sentencias que condenen a la emisión de una declaración de voluntad, las cuales, por incorporar un hacer personalísimo, sólo son susceptibles de integración por el Juez, en caso de ausencia del hacer del sujeto obligado, si se dan los requisitos que el propio precepto exige».

⁴³⁸ A modo de ejemplo, *vid.* AAP Burgos (Secc. 3ª), de 30 de julio de 2002 (JUR\2002\233803), que sobre el particular declaró que «se trata de una condena a hacer, transmitir el dominio de unas fincas otorgando la correspondiente escritura pública, lo que conlleva un acto de voluntad, la de formalizar el instrumento público por el que se cede el dominio de las cosas objeto de la venta. Pero esta obligación de hacer es jurídicamente fungible.

Cierto que, todo acto de voluntad, es naturalmente infungible y personalísimo, y como cualquier acto humano incoercible, pero no el resultado práctico que del mismo deriva.

En realidad, lo que se pretende es la producción de los efectos que debían haberse producido con la declaración del condenado a hacerla, en aquellos casos en los que no existe obstáculo para que la voluntad en la que la obligación consista no pueda conseguirse de otra manera, como la doctrina señala, porque la infungibilidad que caracteriza a este tipo de prestaciones en ningún caso es jurídica, que sería la razón determinante.

En el presente caso, nada impide que, si las personas obligadas a otorgar la escritura pública no lo hacen voluntariamente, sea sustituida por la actuación del Tribunal, que viene a significar el mandar ejecutar a su costa que declara la sentencia, produciéndose, de esta manera, los mismos efectos jurídicos. Abunda esta argumentación el hecho de que la voluntad transmisora, como aduce la parte recurrente, ya se ha manifestado, exteriorizándola en el contrato suscrito, mediante la firma del contrato privado de compraventa de 13 de enero de 2000, extendiéndose a los elementos esenciales del negocio jurídico, de las que el otorgamiento de la escritura pública no es mas que la formalización del mismo, como obligación inherente a lo convenido, todo lo cual es posible sustituir por el Tribunal, porque la parte ya se ha obligado a transmitir, consintiendo en ello.

No se aprecia que exista alguna indeterminación o falta de algún elemento negocial que requiera

embargo, con posterioridad a la sentencia del TS, la mayoría de las resoluciones que se han pronunciado sobre la materia han declarado que las sentencias que condenan al otorgamiento de escritura pública se ubican en el supuesto recogido en el artículo 525.1.2ª de la LEC, de emitir una declaración de voluntad, cuya ejecución provisional se encuentra expresamente prohibida⁴³⁹, con cita expresa de la referida sentencia del Alto Tribunal⁴⁴⁰.

Con todo, aun después del aludido fallo del TS, se encuentra alguna resolución en la que se insiste en que la condena a otorgar una escritura pública no es una imposición de emitir una declaración de voluntad y, por lo tanto, no estaría incluida dentro de la prohibición del artículo 525.1.2ª de la LEC, siendo viable su ejecución provisional⁴⁴¹. Por sostener esta postura, se afirma que el otorgamiento de una escritura pública en los casos en que se condena al cumplimiento de un precontrato, no precisaría de un nuevo consentimiento por parte del condenado, pues el mismo ya existiría y sólo hace falta formalizarlo en un documento público. Por ello, se concluye, la sentencia no condena a emitir una declaración de voluntad, sino a elevar a escritura pública la declaración ya existente, por lo que procede la ejecución provisional de estas sentencias. Esta tesis, sin embargo, contrasta con la doctrina del TS y con lo resuelto por otras Audiencias Provinciales en relación con la condena a cumplir un contrato de promesa, que han declarado que no procede la ejecución provisional de estas sentencias por cuanto «en el pronunciamiento estimatorio mediante el que se otorga eficacia a la promesa de venta, está implícita la necesidad de emisión de una nueva declaración de

una declaración de voluntad insustituible, porque afectara, por ejemplo, al precio o cosa vendida, sobre lo que hay acuerdo de voluntades y han consentido las partes, obligándose a entregar la cosa vendida y el precio».

⁴³⁹ En este sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 25ª), de 27 de septiembre de 2005 (JUR\2005\239804); AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 4ª), de 3 de mayo de 2006 (AC\2006\1236); AAP Valencia (Secc. 7ª), de 4 de abril de 2007 (AC\2007\1188); AAP Alicante (Secc. 5ª), de 6 de junio de 2007 (JUR\2007\259509); AAP La Rioja (Secc. 1ª), de 6 de mayo de 2011 (JUR\2011\281312); AAP Almería (Secc. 2ª), de 29 de marzo de 2012 (vLex-381639146).

⁴⁴⁰ Cabe advertir que el TS, con base en su propia doctrina sobre el procedimiento de declaración de error judicial, ha desestimado nuevas demandas por error judicial referidas a la calificación de la condena a elevar a escritura pública un determinado acuerdo como una condena a emitir una declaración de voluntad y su consecuente exclusión de la ejecución provisional. Sin embargo, este cambio de criterio sobre la pertinencia del procedimiento para la declaración de error judicial no ha implicado que el TS haya cambiado su interpretación de la regla del artículo 525.1.2ª de la LEC en el sentido expuesto en el texto principal. Cfr. STS (Sala de lo Civil), de 24 de octubre de 2013 (ROJ STS 5068/2013).

⁴⁴¹ Así lo entiende el AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 17 de noviembre de 2003 (JUR\2004\27498).

voluntad, en su caso, por sustitución judicial, ante la falta de voluntario cumplimiento por el obligado»⁴⁴².

Por nuestra parte, creemos que para obtener el establecimiento de una relación contractual entre ejecutante y ejecutado derivada de un precontrato, ante la negativa de una de las partes a cumplir con lo que debe, no se precisa del consentimiento del obligado –como acertadamente se sostiene por la jurisprudencia minoritaria antes aludida–, pero de dicha circunstancia no se puede inferir –y aquí rechazamos esta doctrina jurisprudencial– que en estos casos no se requiera de una declaración de voluntad. Precisamente, el mecanismo previsto por la LEC para la ejecución forzosa de las condenas a emitir una declaración de voluntad parte del supuesto de que esa voluntad ha sido previamente manifestada, y ante la negativa del obligado a emitir la declaración que le corresponde, dicha declaración será suplida por el Tribunal, siempre que estén predeterminados todos los elementos esenciales del negocio, aunque exista indeterminación sobre algún elemento no esencial (art. 708 LEC). Por lo tanto, si lo que se persigue por el ejecutante es obtener un determinado efecto jurídico como consecuencia de la condena a cumplir un contrato de promesa, dicho efecto puede alcanzarse aunque el obligado no preste su consentimiento, pues el mismo ya se manifestó, y aunque no emita la declaración de voluntad necesaria para el perfeccionamiento del negocio. Como esta declaración final no ha tenido lugar, la ley autoriza al juez para hacerla en nombre del ejecutado. Y si dicha declaración supone el otorgamiento de una escritura pública, deberá el juez suscribir dicho documento público.

De acuerdo con lo anterior, compartimos la interpretación que hace la jurisprudencia mayoritaria en orden a que la condena a otorgar una escritura pública implica una declaración de voluntad cuya ejecución está disciplinada en el artículo 708 de la LEC y, por tanto, queda comprendida dentro de la regla de excepción del artículo 525.1.2ª de la LEC, por lo que no procede la ejecución provisional de estos pronunciamientos⁴⁴³.

⁴⁴² AAP La Rioja, de 31 de julio de 2002 (JUR\2002\254117).

⁴⁴³ En igual sentido, cfr. CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 83.

Fuera de la hipótesis anterior, que es la de mayor relevancia en la práctica, existen otros casos de sentencias de condena que no son susceptibles de ejecución provisional en tanto que imponen la emisión de una declaración de voluntad. Así sucede con la sentencia que condena a la adjudicación de determinados bienes a una de las partes, por cuanto supone una declaración de voluntad de ambas partes, expresamente emitida o tenida judicialmente por emitida⁴⁴⁴.

Por idéntica razón, los tribunales han establecido que no es provisionalmente ejecutable la sentencia que condena a «aportar» a una de las partes los derechos audiovisuales que la contraria adquirió de los titulares originarios, pues esta obligación comporta una prestación del consentimiento a otorgar mediante un nuevo negocio, lo que implica una declaración de voluntad⁴⁴⁵.

De igual manera, se ha resuelto que no cabe la ejecución provisional de la sentencia estimatoria de la demanda en el juicio de retracto de comuneros⁴⁴⁶, ni de la sentencia que condena a la demandada a cumplir lo pactado dejando sin efecto la servidumbre de uso y disfrute de una piscina⁴⁴⁷, pues ambos supuestos implican la condena a emitir una declaración de voluntad.

Delimitado que sea el campo de aplicación de la excepción regulada por el artículo 525.1.2ª de la LEC, nótese que la misma no se extiende a los demás pronunciamientos de condena que pueda contener la misma resolución, distintos del pronunciamiento que condena a emitir una declaración de voluntad. Respecto de estos otros pronunciamientos condenatorios, entendemos que es viable la ejecución provisional, incluso en el caso de que tengan por objeto los mismos bienes a los que se refiera la declaración de voluntad⁴⁴⁸.

⁴⁴⁴ AAP Madrid (Secc. 13ª), de 27 de julio de 2004 (JUR\2005\19849).

⁴⁴⁵ SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 3 de julio de 2013 (JUR\2013\341482); y SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 18 de septiembre de 2013 (JUR\2013\341653).

⁴⁴⁶ AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 28 de enero de 2004 (JUR\2004\63037).

⁴⁴⁷ AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 19 de octubre de 2006 (JUR\2007\195906).

⁴⁴⁸ En el mismo sentido, *vid.* CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 83.

En contra de esta postura, sin embargo, se ha señalado que los pronunciamientos condenatorios que derivan de la condena a emitir una declaración de voluntad, no pueden ser provisionalmente ejecutados si son accesorios de un pronunciamiento respecto del cual está vedada tal institución⁴⁴⁹. En similares términos, algún autor admite la ejecución provisional de los pronunciamientos accesorios de contenido patrimonial que puedan contener estas resoluciones, únicamente si no están ligados por vínculos de reciprocidad con el pronunciamiento principal⁴⁵⁰, argumento que ha sido recogido por alguna resolución⁴⁵¹.

4. Sentencias que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial

El artículo 525.1.3ª de la LEC también excluye de la ejecución provisional a las sentencias que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, disposición que debe ponerse en relación con las leyes especiales que regulan la materia, esto es, con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), que contiene normas sobre nulidad y caducidad de las marcas (arts. 51 y ss. LM), y con la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP)⁴⁵², que reglamenta la nulidad, revocación y caducidad de las patentes (arts. 102 y ss. LP).

La razón de esta exclusión podría encontrarse en los irreparables e irreversibles perjuicios que se podrían ocasionar al ejecutado en caso de que, con posterioridad, se

⁴⁴⁹ En este sentido, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», *op. cit.*; VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁵⁰ ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 729.

⁴⁵¹ AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 4ª), de 3 de mayo de 2006 (AC\2006\1236).

⁴⁵² Este cuerpo normativo, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, vino a reemplazar a la anterior Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que queda derogada, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias.

Sobre las novedades de la nueva Ley de Patentes, cfr. DE ROMÁN PÉREZ, S., «La nueva Ley de Patentes o la actualización de regulación española de las invenciones: en busca de la internacionalización y de la garantía de la seguridad jurídica», en *Diario La Ley*, núm. 8687, 2016; DE CASTRO ARAGONÉS, J. y FÁBREGAS SABATÉ, X., «Nueva Ley de patentes», en *Diario La Ley*, núm. 8675, 2016; y MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Principales novedades legislativas introducidas con motivo de la promulgación de la nueva Ley de Patentes española», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 2, 2015, pp. 19-32.

revoque alguno de estos pronunciamientos⁴⁵³. En efecto, atendidos los efectos *erga omnes* que producen las sentencias de nulidad o caducidad, una vez producida la pérdida de vigencia temporal o definitiva de los derechos de propiedad industrial, cualquier persona podría iniciar su explotación legítima, lo que difuminaría la responsabilidad en caso de revocación de estos pronunciamientos, resultando inviable la reversión⁴⁵⁴.

Sin embargo, lo cierto es que las sentencias que declaran la nulidad o la caducidad de títulos de propiedad industrial no son sentencias de condena. Por lo tanto, con independencia de la naturaleza que se les atribuya (mero declarativa o constitutiva)⁴⁵⁵, estos pronunciamientos no requieren para su efectividad de ninguna actividad judicial, por lo que propiamente no cabe hablar de ejecución, ni provisional ni definitiva⁴⁵⁶.

De este modo, si no procede la ejecución forzosa de los pronunciamientos que ocupan nuestra atención, resulta innecesaria la regla de excepción del artículo 525.1.3^a de la LEC, pues por aplicación de las reglas generales sobre la materia se habría concluido de todas formas que las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial no son provisionalmente ejecutables⁴⁵⁷. En efecto, para que proceda la ejecución provisional de una sentencia es imprescindible que la misma contenga algún pronunciamiento de condena (arts. 524.2 y 526 LEC), no siendo posible la ejecución ordinaria de las sentencias mero declarativas ni de las constitutivas –como las

⁴⁵³ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 115. En el mismo sentido, *vid.* VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 36-37; y QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2550.

⁴⁵⁴ En este sentido, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 35.

⁴⁵⁵ Como señala ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 75, si bien respecto de la sentencia que resuelve la nulidad o la caducidad de estos títulos «el acuerdo es total a la hora de negar el carácter de acción de condena, no existe la misma unanimidad cuando se trata de sentencias mero declarativas o constitutivas».

⁴⁵⁶ En este sentido, MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 317; y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 907.

⁴⁵⁷ Por todos, *vid.* BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 143-144; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 85.

que declaran la nulidad o la caducidad de un título de propiedad industrial— por aplicación de lo dispuesto en el artículo 521.1 de la LEC, regla que también se aplica en sede de ejecución provisional (*supra*, apdo. I.1).

Por ello, en definitiva, el artículo 525.1.3ª de la LEC viene a confirmar expresamente la exclusión de la ejecución provisional impropia en relación con unos supuestos específicos⁴⁵⁸, lo que se explicaría por la discusión doctrinal acerca de la naturaleza mero declarativa o constitutiva de los pronunciamientos sobre nulidad y caducidad de títulos de propiedad industrial⁴⁵⁹.

Una interpretación diferente del precepto que analizamos sugiere que la razón de su inclusión en el listado de excepciones al régimen de ejecución provisional obedece al propósito del legislador de proscribir esta institución respecto de todos los pronunciamientos que puedan contener las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, incluidos los de naturaleza condenatoria. Precisamente, que no procede la ejecución provisional de los citados pronunciamientos resulta obvio —como se acaba de señalar—, de manera que lo realmente problemático de esta disposición es saber si con ella se ha querido excluir o no de la ejecución provisional a los pronunciamientos de condena que puedan contener las sentencias sobre nulidad o caducidad que estamos estudiando⁴⁶⁰.

Ante este interrogante, un sector de la doctrina⁴⁶¹ entiende que sí deben incluirse dentro de la prohibición que comentamos los pronunciamientos de contenido

⁴⁵⁸ Cfr. CACHÓN CADENAS, M. «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 87.

⁴⁵⁹ Al respecto, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 75, afirma que «es precisamente el hecho de la discusión sobre su naturaleza lo que justifica en buena medida la citada y expresa interdicción. Hubiera generado una notable discusión doctrinal —y, por tanto, inseguridad jurídica— limitarse a considerarlas entre las meramente declarativas ignorando tal polémica. De hecho, es dudoso que las sentencias que declaran la nulidad sean siempre meramente declarativas, al menos en el obvio sentido a que se refiere el art. 521 LEC: aquellas que no comportan ejecución propia y, a veces, ni siquiera impropia».

⁴⁶⁰ La legislación especial que regula los derechos de propiedad industrial contempla acciones para la protección de tales derechos que son de naturaleza condenatoria, y que se pueden ejercitar de forma autónoma o conjuntamente con las acciones de nulidad o caducidad, tales como la acción de cesación o la acción de indemnización de perjuicios (art. 41 LM y art. 71 LP, fundamentalmente).

⁴⁶¹ En este sentido, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 318, para quienes «la exclusión de la ejecución provisional de las sentencias en cuanto a los extremos concernientes a la nulidad o caducidad de marcas, comprende la de

económico, por cuanto tales pronunciamientos dependen de la declaración sobre nulidad o caducidad del título de propiedad industrial, que es el principal, y porque la ley no hace la salvedad sobre estos pronunciamientos de condena, como sí ocurre a propósito de las sentencias sobre estado civil⁴⁶² (*supra*, apdo. I.2).

En la misma línea argumentativa, se ha resuelto que «el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara que no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional, entre otras, las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, habiendo de entenderse que tampoco pueden ejecutarse provisionalmente los pronunciamientos de condena que tienen su lógico antecedente y sustento en la declaración de nulidad aducida de títulos de propiedad industrial»⁴⁶³.

No obstante lo anterior, otros autores entienden que la regla del artículo 525.1.3^a de la LEC se debe poner en relación con lo dispuesto en el artículo 521.3 de la LEC, precepto que autoriza la ejecución de los pronunciamientos condenatorios contenidos en sentencias mero declarativas y constitutivas. De este modo, según una interpretación sistemática de estas normas, nada impide que se ejecuten provisionalmente los pronunciamientos de condena que puedan contener las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, ni siquiera en los supuestos en que dichos pronunciamientos condenatorios estén vinculados o sean dependientes del pronunciamiento que declara la nulidad o la caducidad⁴⁶⁴.

En este sentido, se ha fallado que el artículo 525.1.3^o de la LEC «debe ser interpretado en el sentido de impedir la ejecución provisional únicamente de la

aquellos otros pronunciamientos de condena no dineraria que dimanen concreta y directamente de aquéllos».

⁴⁶² Con estos argumentos, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 907-908. Sin embargo, el mismo autor matiza su postura con posterioridad, al reconocer que se trata de una cuestión dudosa. Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 369.

Son igualmente contrarios a la ejecución provisional de los pronunciamientos condenatorios contenidos en estas sentencias, entre otros, ALEGRET BURGUEÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 729; y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 1087-1088.

⁴⁶³ AAP Palma de Mallorca (Secc. 5^a), de 20 de enero de 2003 (AC\2003\2305).

⁴⁶⁴ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 90; y DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 40.

declaración de nulidad o caducidad del título de propiedad industrial –lo cual por su parte es congruente con el artículo 521 LECiv que indica que las sentencias meramente declarativas no serán ejecutables– o tal vez sería más acertado indicar que no precisan ser ejecutadas –y sobre todo del artículo 524.4 LECiv que establece que la inscripción o cancelación de asientos registrales sólo puede realizarse mediante sentencia firme– pero no es extensible tal exclusión de la ejecución provisional a las condenas derivadas de tal declaración, ya que para ello debería existir una indicación expresa de que tal tipo de condenas queda excluido del ámbito de la ejecución provisional ya que, debe recordarse que el artículo 526 LECiv indica que en principio toda sentencia de condena es ejecutable, y por su parte el artículo 525.1.3º LECiv no se refiere a pronunciamientos de condena, sino a las sentencias que “declaren la nulidad o caducidad”»⁴⁶⁵.

Por nuestra parte, nos adherimos a la segunda de las tesis señaladas, por los mismos argumentos que hemos expuesto, y porque entendemos que esta interpretación resulta más coherente con la voluntad del legislador procesal de impulsar la ejecución provisional de todas las sentencias condenatorias no firmes, salvo aquellas que estén expresamente exceptuadas. De este modo, extender el alcance de la regla de excepción del artículo 525.1.3ª de la LEC a los pronunciamientos condenatorios que puedan contener las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial nos parece contradictorio con respecto a la clara potenciación de la ejecución provisional operada por la LEC⁴⁶⁶.

Así, en definitiva, entendemos que las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial no pueden ejecutarse provisionalmente, porque no lo necesitan para su efectividad, ni podrán acceder a inscribirse en Registro públicos, sin perjuicio de la posibilidad de anotarse preventivamente en dichos registros *ex* artículo 524.4 de la LEC⁴⁶⁷. Pero si la misma sentencia contiene pronunciamientos de contenido económico, ellos son susceptibles de ejecución provisional, aunque dependan o sean

⁴⁶⁵ AAP Madrid (Secc. 12ª), de 1 de junio de 2005 (AC\2005\1242).

⁴⁶⁶ Cfr. BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 150.

⁴⁶⁷ En contra, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 36, para quien el carácter absoluto del inciso inicial del apartado primero del artículo 525, según el cual «no serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional», permite concluir que no es posible la anotación preventiva regulada en el artículo 524.4 de la LEC.

accesorios del pronunciamiento principal referido a la nulidad a caducidad. Por lo demás, esta solución deja a salvo el interés del ejecutado, quien podrá oponerse a la ejecución provisionalmente previamente acordada e intentar su paralización, en caso de que el pronunciamiento que se ejecuta imponga una prestación de hacer –como sería, por ejemplo, la sentencia que estima la acción de cesación o que condena a la publicación de la sentencia a costa del condenado–, u oponerse a actuaciones ejecutivas concretas de la ejecución provisional en caso de condena dineraria –como la que acoge la acción de indemnización de perjuicios–, todo ello con arreglo a las normas generales (art. 528 LEC).

Para concluir, queremos insistir en que, a nuestro juicio, las sentencias sobre nulidad o caducidad de títulos de propiedad pueden anotarse preventivamente en los registros públicos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 524.4 de la LEC, regla de carácter general dentro del sistema de ejecución provisional que autoriza dicha anotación respecto de todas las sentencias mero declarativas o constitutivas que disponen o permiten la inscripción o cancelación de asientos registrales [*supra*, apdo. I.1.b)].

5. Sentencias extranjeras no firmes

Clásicamente, la atribución de eficacia por parte de un Estado a las resoluciones judiciales pronunciadas por los tribunales de otro ha estado supeditada a un procedimiento de *homologación* que le permita desplegar sus efectos. Al respecto, la doctrina y las leyes de varios países vienen distinguiendo hace tiempo dos modalidades diferentes de homologación: el *reconocimiento*, que consiste en la homologación de sentencias extranjeras que le permite desplegar todos los efectos que le sean propios, salvo el ejecutivo; y el *exequátur*, que es la homologación de sentencias extranjeras que le permite desplegar eficacia ejecutiva⁴⁶⁸.

Sin embargo, la LEC no recogió en su normativa la distinción entre reconocimiento y exequátur. Es más, ni siquiera reguló la materia relativa a la ejecución

⁴⁶⁸ Cfr. GASCÓN INCHAUSTI, F., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 2, 2015, p. 160.

de resoluciones judiciales extranjeras en España, sino que se limitó a ordenar, a través de su Disposición Final Vigésima, que «en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil», al tiempo que mantuvo vigentes las normas de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, relativas a la eficacia en España de las sentencias extranjeras, mientras no se promulgara la citada ley (Disposición derogatoria única.1.3ª LEC)⁴⁶⁹.

Pues bien, según las reglas de la LEC/1881, sólo podían ejecutarse en España las sentencias extranjeras firmes que reunieran una serie de condiciones, previstas en su artículo 954⁴⁷⁰, cuyo cumplimiento se verificaba por medio del procedimiento de exequátur⁴⁷¹. La exigencia de firmeza para obtener el exequátur de la sentencia extranjera, así como la falta de previsión expresa sobre la posibilidad de ejecutar provisionalmente en España una sentencia que no fuera firme, llevó a la doctrina a concluir, de forma unánime, que las sentencias extranjeras que no son firmes, esto es, que han sido impugnadas, no pueden ejecutarse provisionalmente⁴⁷².

⁴⁶⁹ De acuerdo con esta disposición, «se deroga la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, con las excepciones siguientes: 3ª. Los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, que estarán en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil».

⁴⁷⁰ El artículo 954 de la LEC/1881, en su texto original, disponía: «Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes:

1ª. Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia del ejercicio de una acción personal.

2ª. Que no haya sido dictada en rebeldía.

3ª. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.

4ª. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fé en España».

⁴⁷¹ Como explica BANACLOCHE PALAO, J. *Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil* —con CUBILLO LÓPEZ, I.—, La Ley, Madrid, 2012, pp. 409-410, «los arts. 952 y 953 de la LEC de 1881 establecen que se puede ejecutar una sentencia extranjera si se acredita que en el país de origen de dicha sentencia se ejecutan efectivamente las sentencias españolas (el denominado principio de reciprocidad), y ello sin necesidad de comprobar que se cumplen las condiciones fijadas en el art. 954 de la LEC de 1881. Sin embargo, el Tribunal Supremo español exige que, con independencia de que haya o no reciprocidad, para conocer una sentencia foránea, esta debe respetar lo dispuesto en el art. 954, por lo que en definitiva todo el sistema se reconduce a dicho precepto».

⁴⁷² Por todos, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 116; y BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 159.

De forma coherente con las reglas sobre reconocimiento y exequátur de sentencias extranjeras contenidas en la LEC/1881, el apartado segundo del artículo 525 de la LEC, en sede de ejecución provisional, prescribe que «tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España», prohibición que se funda, precisamente, en la necesidad de homologación de los títulos judiciales extranjeros, expediente que precisa de la previa firmeza de la resolución⁴⁷³.

La prohibición de ejecutar provisionalmente las sentencias extranjeras o, si se prefiere, la ejecutividad provisional de las mismas sujetas a lo que determinen los Tratados internacionales⁴⁷⁴, no obedece a la naturaleza de la acción ejercitada⁴⁷⁵, y ha sido justificada por razones de seguridad jurídica, puramente coyunturales en función de cuál sea el país extranjero al que pertenece el tribunal autor de la sentencia de que se trate, y de si España tiene o no con dicho país algún convenio bilateral o multilateral de cooperación jurídica en la materia⁴⁷⁶, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 523 de la LEC⁴⁷⁷.

Además, la exclusión del artículo 525.2 de la LEC, referida a las sentencias extranjeras que hayan sido recurridas⁴⁷⁸ no sufrió modificación alguna con la aprobación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en

⁴⁷³ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 79; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 908; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 323.

⁴⁷⁴ Con este enfoque, cfr. QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», op. cit., p. 2551.

⁴⁷⁵ Cfr. DAMIÁN MORENO, J., «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», op. cit., p. 117.

⁴⁷⁶ En este sentido, vid. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 204.

⁴⁷⁷ Criticando esta regla de exclusión, se ha indicado que «la opción es desacertada, pues no parece coherente favorecer más allá de lo razonable la ejecución de sentencias españolas y excluir por completo, sin atender a las causas del caso concreto, la ejecución provisional de una sentencia extranjera». Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 163, nota 48.

⁴⁷⁸ Regla que no comprende a las sentencias dictadas por tribunales españoles en contra de empresas extranjeras, como precisó –con acierto– el AAP Zaragoza (Secc. 2ª), de 14 de junio de 2005 (JUR/2005/176417).

materia civil (en adelante, LCJIC)⁴⁷⁹, que vino a cumplir, con quince años de retraso, el mandato establecido en la Disposición Final Vigésima de la LEC antes citada, colmando así, en palabras de su Preámbulo, «la imperiosa necesidad de dotar a España de una regulación moderna sobre cooperación jurídica internacional en materia civil»⁴⁸⁰.

En efecto, la LCJIC regula una serie de materias que, aunque exceden de una noción estricta de cooperación judicial internacional, estaban todas ellas necesitadas de una regulación completa y moderna, y convenientemente agrupadas ahora en un solo texto normativo⁴⁸¹, estableciendo un sistema que se caracteriza por los siguientes rasgos principales: por recoger un concepto amplio de cooperación jurídica internacional, lo que se ve reflejado tanto en la finalidad de la Ley como en sus destinatarios (las autoridades) y su ámbito de aplicación; por gozar de carácter subsidiario respecto del elenco de textos normativos de orden supranacional y nacional que integran el sistema español de Derecho internacional privado; por ser eminentemente favorable a la cooperación, elevando a la categoría de principio el *favor cooperationis* (art. 4º LCJIC); y por el favorecimiento y generalización de las comunicaciones judiciales directas⁴⁸².

En cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, la LCJIC aborda de forma específica esta materia en su Título V, bajo la rúbrica «Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos», régimen que supone la derogación de la LEC/1881 que aún estaba vigente⁴⁸³. El nuevo sistema, sin embargo, mantiene la exigencia de firmeza de las resoluciones judiciales como requisito previo para obtener su reconocimiento y ejecución en España (art. 41.1

⁴⁷⁹ Para una revisión completa de esta nueva normativa y sus alcances, tema que excede a los fines de este trabajo, *vid.* GASCÓN INCHAUSTI, F., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», *op. cit.*, pp. 158-187; y RODRÍGUEZ BENOT, A., «La Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2016, pp. 234-259.

⁴⁸⁰ Apartado I, párrafo 1º.

⁴⁸¹ GASCÓN INCHAUSTI, F., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», *op. cit.*, p. 159.

⁴⁸² Cfr. RODRÍGUEZ BENOT, A., «La Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», *op. cit.*, pp. 235-239; y, del mismo autor, «Caracteres generales de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 4, 2016, pp. 289-292.

⁴⁸³ La disposición derogatoria única de la LCJIC se encargó expresamente de derogar los artículos 951 a 958 de la LEC/1881, así como cuantas disposiciones se opongán a la nueva normativa.

LCJIC), por lo que no ha supuesto innovación en este punto respecto de las derogadas reglas de inspiración decimonónica. De ahí que no haya resultado necesaria modificación alguna del apartado segundo del artículo 525 de la LEC, pues, como indicamos, tal regla era perfectamente coherente con las exigencias de la normativa anterior para la declaración del exequátur, y se alinea ahora sin problemas con el nuevo procedimiento para la homologación de sentencias extranjeras previsto en la LCJIC.

Por tanto, no procede la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, precisamente porque sólo son susceptibles de reconocimiento y exequátur las sentencias pronunciadas en otro país que sean firmes, entendiéndose por tales, de acuerdo con el artículo 43 b) de la LCJIC, aquellas contra las que no cabe recurso en el Estado de origen (de forma equivalente a lo dispuesto en el art. 207 LEC). Y pensamos que la expresión «recurso» excluye a los medios excepcionales de rescisión de sentencias, por lo que una sentencia extranjera no será firme y, consecuentemente, no procederá su ejecución provisional en España, si la misma ha sido recurrida por medio de un recurso de apelación, casación o algún recurso análogo, o no han transcurrido los plazos para la interposición de dichos recursos, prescindiendo de la posibilidad de que la legislación interna del Estado de origen de la sentencia contemple algún mecanismo extraordinario para la invalidación de la misma⁴⁸⁴.

En cualquier caso, la exclusión del ámbito de la ejecución provisional de las sentencias extranjeras recurridas no es absoluta, pues el propio artículo 525.2 de la LEC se encarga de abrir la puerta a nuestra institución, al prescribir que la prohibición opera en defecto de lo que puedan establecer los Tratados internacionales que se encuentren vigentes. Con otras palabras, la regla general en esta materia es la no ejecución provisional de las resoluciones extranjeras, regla que, no obstante, puede ceder y gozar de múltiples excepciones en normas contenidas en tratados internacionales vigentes en España⁴⁸⁵. En relación con esta vía de excepción, valgan las siguientes precisiones. De una parte, debe entenderse que la referencia a los tratados internacionales comprende tanto a los convenios internacionales *stricto sensu* –sean bilaterales o multilaterales– en

⁴⁸⁴ En igual sentido, cfr. GASCÓN INCHAUSTI, F., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», *op. cit.*, p. 162.

⁴⁸⁵ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 80.

los que España es parte, como a los reglamentos comunitarios⁴⁸⁶. Y de otra, que no es necesario que el tratado disponga *expresamente* que se admite la ejecución provisional de sentencias extranjeras, sino que basta con que se pueda interpretar de sus disposiciones que no se exige la firmeza de la sentencia para proceder a su ejecución en España⁴⁸⁷.

Con independencia de algún tratado internacional en que España sea parte que admita la ejecución provisional de sentencias extranjeras, las excepciones más importantes a la regla de exclusión que analizamos se encuentran en el ámbito de la Unión Europea, habida cuenta que desde los inicios del proceso de integración europea se tuvo presente la importancia de facilitar entre los Estados miembros la eficacia de las decisiones judiciales⁴⁸⁸.

En este contexto, cabe citar el Reglamento (CE) N° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) N° 1347/2000, y que permite la ejecución provisional de las sentencias extranjeras referidas al derecho de visitas (art. 41) y a la restitución de menores (art. 42)⁴⁸⁹. En efecto, respecto de aquellas sentencias, procede su ejecución en otros Estados miembros aunque se formulen recursos en su contra y, lo más importante, sin necesidad de declaración de ejecutividad, lo que supuso la supresión del exequátur respecto de estas sentencias⁴⁹⁰. Nótese que la existencia de este procedimiento privilegiado no impide que los titulares de la responsabilidad parental puedan solicitar el

⁴⁸⁶ Por todos, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 908.

⁴⁸⁷ En similares términos, cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 45.

⁴⁸⁸ Cfr. DE MIGUEL ASENSIO, P., «Espacio europeo de justicia: evolución y perspectivas en el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones», en *Anuario Español de Derecho internacional privado*, núm. 6, 2006, p. 441.

⁴⁸⁹ En relación a las sentencias sobre restitución de menores, la normativa española es más restrictiva que la regulación europea, por cuanto el artículo 525.1.1ª de la LEC, en su redacción actual, impide la ejecución provisional de las medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional (*supra*, apdo. I.2).

⁴⁹⁰ Cfr. QUIÑONEZ ESCAMES, A., «Nuevas normas comunitarias en materia de responsabilidad parental (Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27.11.2003), en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2004, disponible en http://www.indret.com/pdf/250_es.pdf.

reconocimiento y ejecución de alguna de estas resoluciones mediante exequátur, según las reglas generales del Reglamento (art. 40.2)⁴⁹¹.

La solución adoptada por el Reglamento 2201/2003, que estuvo justificada fundamentalmente en la protección del interés menor, fue considerada por la doctrina como el primer paso en el proceso de supresión del exequátur de todas las decisiones⁴⁹². Así, si bien el procedimiento de exequátur se ha ido simplificando progresivamente en el ámbito europeo, una de las prioridades marcadas en el Consejo Europeo de Tampere fue la eliminación de todas las medidas que obstaculizasen la eficacia de las decisiones judiciales extranjeras, proclamándose el *principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*⁴⁹³.

En esta línea, cobra relevancia el Reglamento (CE) N° 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos, que en referencia a la homologación de resoluciones extranjeras, distingue según se trate de resoluciones dictadas en Estados miembros vinculados por el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias, y resoluciones dictadas en Estados miembros no vinculados por tal Protocolo (art. 16)⁴⁹⁴. Respecto de las primeras, el Reglamento 4/2009 suprime el exequátur tanto para el reconocimiento como para la ejecución (art. 17). En cambio, las resoluciones dictadas en Estados no vinculados por el Protocolo de la Haya serán reconocidas en otro Estado miembro sin necesidad de procedimiento alguno (art. 23), pero para que tengan fuerza ejecutiva, se precisa de su declaración de ejecutividad (art. 26).

⁴⁹¹ En este sentido, ARANGÜEN FANEGO, C., «Ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 512-513.

⁴⁹² Como expresa CAAMIÑA DOMÍNGEZ, C., «La “supresión” del exequátur en el R 2201/2003», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2001, p. 64.

⁴⁹³ Cfr. RODRÍGUEZ, VÁZQUEZ, M., «Una nueva fórmula para la supresión del exequátur en la reforma del Reglamento Bruselas I», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2014, p. 334.

⁴⁹⁴ Sobre esta materia, *vid.* RUIZ MORENO, J., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de alimentos», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

Sea como fuere, esto es, con o sin exequátur, el Reglamento no exige que las sentencias extranjeras sean firmes para que tengan fuerza ejecutiva en otro Estado miembro, por lo que entendemos que las sentencias extranjeras pronunciadas en materia de alimentos pueden ejecutarse provisionalmente en España⁴⁹⁵.

Sin restar importancia a los Reglamentos ya referidos, el instrumento de cooperación judicial más importante en materia civil y mercantil es el actual Reglamento (UE) 1215/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que vino a eliminar del ámbito europeo todo mecanismo de homologación de las sentencias dictadas en los distintos Estados miembros, estableciendo, por una parte, que las resoluciones judiciales de un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno (art. 36), y por otra, que las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva gozarán de ella en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración de ejecutividad, y sin importar si se trata de sentencias firmes o no (art. 39). En relación con esto último, establece el Reglamento que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán ejecutadas en el Estado miembro requerido en las mismas condiciones que si se hubiera dictado en dicho país, de acuerdo con el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido (art. 41). En consecuencia, cualquier resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido⁴⁹⁶, sin perjuicio de la posibilidad que tiene cualquier parte interesada de solicitar a los tribunales del Estado requerido que se deniegue el reconocimiento o la ejecución de una sentencia extranjera, de conformidad con los motivos expresamente previstos en el propio Reglamento (arts. 45 y 46)⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ En igual sentido, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 47.

⁴⁹⁶ Como concluye MAESTRE CASAS, P., «Reforma del sistema de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 1, 2013, p. 195.

⁴⁹⁷ Solución que ha sido calificada como «más realista y más respetuosa con el justo equilibrio exigible entre la confianza recíproca en la justicia en el seno de la Unión y el respeto del derecho de defensa». Cfr. MAESTRE CASAS, P., «Reforma del sistema de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil», op. cit., p. 196.

De acuerdo con las reglas del Reglamento 1215/2012 –cuyas normas son aplicables desde el 10 de enero de 2015 (art. 81)–, las sentencias extranjeras que tengan fuerza ejecutiva son ejecutables en España sin necesidad de procedimiento alguno, y las sentencias no firmes dictadas por un Estado miembro son provisionalmente ejecutables en España, en los mismos términos que lo sería si se hubiera pronunciado por un tribunal español, ejecución que se sujetará en cuanto a su tramitación a las reglas sobre ejecución provisional previstas en la LEC.

Para finalizar con las excepciones a las reglas de exclusión del artículo 525.2 de la LEC, resulta forzoso señalar que el Reglamento 1215/2012 derogó y sustituyó al Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁴⁹⁸, cuyas reglas sobre ejecución de sentencias extranjeras tampoco exigían la firmeza de las mismas –al igual que en la actual normativa europea sobre la materia–, por lo que procedía su ejecución provisional en España. Sin embargo –a diferencia del Reglamento 1215/2012–, era necesario obtener previamente su declaración de ejecutividad, lo que suponía un control de carácter formal de los presupuestos del exequátur por parte del tribunal del Estado requerido⁴⁹⁹.

II. ALGUNOS SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS

Fuera de los casos expresamente excluidos de la ejecución provisional, analizados en el apartado anterior, la doctrina ha identificado una serie de supuestos en que resulta dudoso pronunciarse a favor o en contra de su inclusión en el ámbito objetivo de la institución que estudiamos, a lo que se suma que en varias de estas hipótesis existe jurisprudencia contradictoria. Por ello, abordaremos ahora estos casos controvertidos, e intentaremos ofrecer respuesta a los interrogantes que los mismos plantean.

⁴⁹⁸ Sobre este Reglamento, entre la abundante bibliografía, *vid.* DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

⁴⁹⁹ Cfr. BACHMAIER WINTER, L. y BANACLOCHE PALAO, J., «Reconocimiento y ejecución (I). Cuestiones generales. Procedimiento para la obtención del reconocimiento y el *exequatur*», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, *op. cit.*, p. 344.

1. La controvertida ejecución provisional de la condena en costas

La posibilidad de ejecutar provisionalmente la condena en costas fue un tema controvertido durante la vigencia de la legislación procesal anterior, existiendo posturas doctrinales y jurisprudenciales a favor y en contra de esta alternativa⁵⁰⁰. Pese a ello, la LEC no se pronunció de forma expresa sobre la condena en costas al regular la ejecución provisional de resoluciones judiciales, dejando abierta la puerta para la reproducción de esta polémica⁵⁰¹.

En efecto, existe algún autor a favor de la ejecución provisional de la condena en costas, por cuanto se trata de un pronunciamiento de condena y la LEC no impide expresamente su eficacia provisional⁵⁰². Sin embargo, la gran mayoría de la doctrina científica es partidaria de negar la posibilidad de ejecutar provisionalmente el pronunciamiento sobre las costas; y, del mismo modo, al margen de alguna resolución aislada, los tribunales han negado de forma prácticamente unánime las solicitudes de ejecución provisional respecto de las condenas en costas.

El principal argumento para sostener que no son provisionalmente ejecutables las condenas en costas que se produzcan a lo largo del proceso se encuentra en lo dispuesto en el artículo 242.1 de la LEC, según el cual la tasación de las costas sólo se llevará a cabo una vez que la sentencia se encuentre firme⁵⁰³, estado que resulta incompatible con la ejecución provisional [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)].

⁵⁰⁰ Para una exposición resumida de esta polémica, cfr. VALLINES GARCÍA, E., «Ejecución provisional de condena en costas», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 1, 1999, pp. 49-51.

⁵⁰¹ Con este enfoque, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, La Ley, *op. cit.*, p. 81; y GUASCH FERNÁNDEZ, S., «La ejecución provisional de las costas de primera instancia», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 3-4, 2007, p. 191.

⁵⁰² Cfr. CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 37.

En la misma línea, el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 20 de noviembre de 2002 (AC\2002\2357) realiza un resumen de la polémica en torno de la ejecución provisional de la condena en costas, para concluir que «este tribunal, sopesando razones a favor y en contra, así como consecuencias próximas y remotas de la decisión a adoptar, considera que no existen elementos interpretativos suficientes para entender que la nueva Ley ha pretendido modificar la precedente situación vigente al amparo de la LECiv/1881».

⁵⁰³ En este sentido, sin ánimo exhaustivo, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 908; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, p. 325; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 94; GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de*

Junto con lo anterior, debe considerarse que la condena en costas es un supuesto arquetípico de condena dineraria ilíquida⁵⁰⁴, respecto de la cual no procede la ejecución provisional [*supra*, cap. II, apdo. II.2.b)]. Precisamente, la tasación de las costas – función que corresponde a los secretarios judiciales (art. 243 LEC) y que una vez practicada puede ser impugnada *ex* artículo 245 de la LEC, lo que puede dar origen a más de una dificultad práctica⁵⁰⁵ – tiene por finalidad determinar la cantidad exacta de lo que debe pagarse por este concepto, y si no puede practicarse este especial procedimiento de liquidación mientras la sentencia –absolutoria o condenatoria– no haya adquirido firmeza, no es admisible despachar ejecución alguna.

Por otro lado, se debe aclarar que si bien de una lectura inicial de lo dispuesto en el artículo 533.1 de la LEC se podría concluir que la propia ley prevé la posibilidad de ejecutar provisionalmente las costas, al contemplar expresamente la reintegración de las costas en caso de que se revoque la sentencia de condena dineraria que se ha ejecutado provisionalmente, lo cierto es que tal precepto se refiere a las costas causadas en sede de ejecución provisional⁵⁰⁶, y no a las costas del proceso declarativo previo, como explicaremos con detalle más adelante (*infra*, cap. VIII, apdo. I).

Por idéntica razón entendemos que tampoco se puede invocar como argumento a favor de la ejecución provisional de las costas lo dispuesto en el artículo 531 de la LEC,

ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit., pp. 204-205; TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», op. cit., p. 2150; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 215-221; ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 82; GUASCH FERNÁNDEZ, S., «La ejecución provisional de las costas de primera instancia», op. cit., p. 193; MAGRO SERVET, V., «¿Es posible la ejecución provisional de la condena en costas?», en *LEC Forum*, núm. 33, 2003, pp. 32-34; DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, op. cit., p. 54; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», op. cit., p. 44; CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», op. cit., pp. 44-45; VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 35; y RIFÁ SOLER, J., «Disposiciones generales de la ejecución. La ejecución provisional», op. cit., pp. 45-46.

⁵⁰⁴ Según expresa GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 205. Se valen también de este argumento, entre otros, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 82; y PUGA GÓMEZ, S., «La ejecución provisional de las costas», en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, núm. 16, 2006, p. 209.

⁵⁰⁵ Por todos, cfr., ACHÓN BRUÑÉN, M., «La impugnación de la tasación de costas: soluciones a problemas que la Ley silencia», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 2007, pp. 1924-1941.

⁵⁰⁶ En igual sentido, *vid.* ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», op. cit., pp. 730-731; MAGRO SERVET, V., «¿Es posible la ejecución provisional de la condena en costas?», op. cit., p. 28; y PUGA GÓMEZ, S., «La ejecución provisional de las costas», op. cit., p. 208.

el cual, al regular la suspensión de la ejecución provisional en caso de condena dineraria –tema que abordaremos en otro Capítulo (*infra*, cap. VI, apdo. II.2)–, establece que el ejecutado a quien interese esta alternativa deberá poner a disposición del Tribunal «la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó la ejecución». A nuestro juicio, la ley vuelve aquí a referirse a las costas de la propia ejecución, y no a las del proceso declarativo que le antecede⁵⁰⁷, lo que quita valor a esta disposición como argumento a favor de la ejecutabilidad provisional de las costas.

Con base en los mismos argumentos que venimos comentando, la jurisprudencia mayoritaria se ha decantado por la improcedencia de la ejecución provisional de la condena en costas⁵⁰⁸. Precisamente, se ha resuelto que no es provisionalmente ejecutable la condena en costas «porque así lo proclama categóricamente el número 1 y 3 del artículo 242 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al proscribir que se haga la tasación de costas hasta que la resolución judicial que contenga la condena en costas no sea “firme”»⁵⁰⁹. Con otras palabras, se tiene declarado que «la exacción de las costas precisa de su previa tasación y esta especial actividad de concreción –o, si se prefiere, de “liquidación”–, aparece ineluctablemente subordinada por la norma positiva a la previa firmeza del pronunciamiento condenatorio a su pago por el art. 242, apdo. 3 LECiv 1/2000»⁵¹⁰. De este modo, «es obvio que la sentencia que condena en costas no contiene una condena líquida, y que tal liquidez sólo podrá efectuarse tras la correspondiente tasación, que a su vez sólo podrá practicarse tras la firmeza de la sentencia»⁵¹¹.

⁵⁰⁷ En el mismo sentido, cfr. MAGRO SERVET, V., «¿Es posible la ejecución provisional de la condena en costas?», *op. cit.*, pp. 28-31.

⁵⁰⁸ Cfr. GIBERT FERRAGUT, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 6.

⁵⁰⁹ SAP Málaga (Secc. 5ª), de 2 de diciembre de 2004 (JUR\2005\147482). En igual sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 25ª), de 20 de julio de 2004 (JUR\2004\243676); AAP Asturias (Secc. 7ª), de 16 de octubre de 2003 (JUR\2004\48807); AAP Madrid (Secc. 9ª), de 17 de mayo de 2002 (JUR\2003\47084); SAP Murcia (Secc. 2ª), de 22 de diciembre de 2001 (JUR\2002\46981).

⁵¹⁰ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 14 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48999).

⁵¹¹ AAP Cádiz (Secc. 7ª), de 21 de mayo de 2002 (JUR\2002\222934).

Asimismo, se ha resuelto que la referencia del artículo 531 de la LEC a las costas alude a las costas de la propia ejecución provisional, y no a las costas del proceso declarativo previo⁵¹².

Por todas estas razones, y porque «solamente son ejecutables provisionalmente las pretensiones de las partes, y las costas no lo son, ya que son simplemente consecuencia del proceso»⁵¹³, es posible concluir que no es viable su ejecución provisional.

No obstante lo anterior, un sector minoritario de la doctrina se ha manifestado a favor de la ejecución provisional de la condena en costas, fundamentalmente por no compartir la interpretación que se hace del citado artículo 242.1 de la LEC. Justamente, según estos autores, dicha disposición puede entenderse como una regla general prescrita para la ejecución forzosa —en forma análoga a lo establecido en el artículo 517.2.1º de la LEC, que sólo se refiere a la sentencia firme como título ejecutivo—, encontrando una excepción en el régimen de la ejecución provisional⁵¹⁴. De este modo, al ser la condena en costas un pronunciamiento condenatorio resultaría plenamente viable su ejecución provisional⁵¹⁵, debiendo la parte interesada solicitar la tasación de las costas aún cuando la sentencia no se encuentre firme, a los efectos de proceder a su exacción por vía de ejecución provisional.

Por nuestra parte, no nos resultan convincentes estos últimos argumentos, y compartimos las razones arriba expuestas que justifican la exclusión del ámbito objetivo de la ejecución provisional de las condenas en costas. Si bien entendemos que desde un punto de vista práctico puede parecer atendible que se acepte la posibilidad de ejecutar provisionalmente las costas, particularmente en aquellos casos en que la sentencia es desestimatoria de la demanda e impone las costas del juicio al actor, debiendo esperar el

⁵¹² AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 20 de noviembre de 2002 (AC\2002\2357); AAP Madrid (Secc. 25ª), de 20 de julio de 2004 (JUR\2004\243676).

⁵¹³ AAP Asturias (Secc. 7ª), de 16 de octubre de 2003 (JUR\2004\48807).

⁵¹⁴ En este sentido, CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 97; ARÉVALO NIETO, P., «La ejecución provisional de la condena en costas», en *Actualidad Civil*, núm. 14, 2006, pp. 1653-1669; y CORTÉS BENDICHO, A. y AMORÓS MARTÍNEZ, A., «La ejecución provisional de las costas», en *El Legajo: Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia*, s/núm., 2004, pp. 14-15.

⁵¹⁵ CORDÓN MORENO, F., *El proceso de ejecución*, *op. cit.*, p. 66.

demandado victorioso hasta la firmeza de la sentencia para obtener el pago de lo que haya tenido que desembolsar para costear su defensa en el juicio, lo cierto es que la solución que defendemos es la más respetuosa de la legalidad, toda vez que el legislador ha dispuesto categóricamente que para la exacción de las costas, previa tasación de las mismas, se requiere que la sentencia haya adquirido firmeza (art. 242.1 LEC).

Y no se trata sólo de excluir la posibilidad de ejecutar provisionalmente las costas por un respeto acrítico de la ley, sino también porque la previsión normativa cuyo tenor literal estamos siguiendo se encuentra plenamente justificada en razones de estricto sentido procesal. En efecto, la obligación de pagar las costas que se impone a la parte vencida en un proceso declarativo tiene un marcado carácter resarcitorio, pues con ello se pretende que el litigante a quien los tribunales han dado la razón al final del proceso pueda recuperar los gastos en que ha incurrido para defender en juicio su derecho⁵¹⁶, de ahí que sea necesario esperar hasta la firmeza de la resolución para proceder a la exacción de las costas⁵¹⁷. En consecuencia, la naturaleza del crédito representado por la condena en costas es distinta del objeto principal del proceso, y tiene su razón de ser en la actividad procesal desplegada para la tutela del derecho subjetivo de las partes, lo que explica que no sea posible obtener compulsivamente el pago de dicho crédito mientras el proceso que le sirve de fundamento no ha concluido de forma definitiva.

2. La ejecución de los laudos arbitrales ¿provisional o definitiva?

El arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos se encuentra regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA), cuyo Título VIII regula la ejecución forzosa de los laudos arbitrales, para lo cual se remite a las normas sobre ejecución contenidas en la LEC, complementadas con las

⁵¹⁶ Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 423.

⁵¹⁷ En similares términos, UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», *op. cit.*, pp. 294-295; y HERNÁNDEZ VERGARA, A., «Comentarios al Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 3543.

particularidades previstas en su artículo 45⁵¹⁸ (art. 44 LA). Por lo tanto, los laudos arbitrales son títulos de ejecución, y así lo señala expresamente el artículo 517.2.2⁵¹⁹ de la LEC⁵²⁰.

Ahora bien, el laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación (art. 45.1 LA). En este punto, la duda fundamental que surge es si la ejecución del laudo arbitral sometido a acción de anulación debe ser considerada como una ejecución provisional –porque el laudo estaría impugnado–, o una ejecución ordinaria –porque no obstante el ejercicio de la acción de anulación su contra, el laudo ya sería firme–. Para responder a este interrogante y, en definitiva, determinar si procede o no la ejecución provisional de los laudos arbitrales, debemos pronunciarnos sobre el régimen de impugnación de los mismos y la forma en que tal regulación impacta en el momento en que los laudos adquieren firmeza.

Con todo, antes de abordar dicha cuestión conviene revisar, aunque sea de forma muy breve, la forma en que estaba regulada esta materia en la anterior Ley de Arbitraje y los cambios que, al respecto, supuso la entrada en vigor de la LEC y la reforma en materia de arbitraje operada luego por la LA, todo lo cual ayudará a comprender mejor las normas actualmente vigentes.

Así, antes de la actual LA, el arbitraje estaba regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA/1988), cuyo Título VIII se refería a la ejecución forzosa de los laudos arbitrales. De acuerdo con su artículo 53, esta ejecución se regía por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes, con las especialidades previstas en los artículos 54 y 55 de la LA/1988. Por su parte, la

⁵¹⁸ Esta disposición fue modificada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, con el objeto de adecuar la normativa a las nuevas funciones de los Secretarios Judiciales, pero sin alterar sustancialmente su contenido.

⁵¹⁹ El texto actual de este precepto fue fijado por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, antes de esta reforma, el artículo 517.2.2º de la LEC fue modificado por la LA, según veremos más adelante en el texto principal.

⁵²⁰ Como expresa LORCA NAVARRETE, A., «La ejecución del laudo arbitral en los supuestos en que se ha ejercitado acción de anulación ¿es definitiva o provisional?», en *Diario La Ley*, núm. 6220, 2005, la inclusión en una ley procesal civil –como la LEC– del laudo o resolución arbitral como título ejecutivo es totalmente inédita y no posee antecedentes en las leyes procesales civiles que le precedieron.

LEC/1881 no hacía referencia alguna a la ejecución de los laudos, por lo que ninguna contradicción existía entre ambos cuerpos normativos⁵²¹.

En lo que nos interesa, cabe recordar que bajo la vigencia de LA/1988, el laudo arbitral podía impugnarse mediante el denominado *recurso de anulación* (arts. 45 y siguientes LA/1988). La naturaleza jurídica de la anulación del laudo fue discutida por la doctrina sobre: para algunos autores, la anulación era un proceso autónomo de rescisión, pese a su denominación; en cambio, otros autores entendieron que se trataba de un recurso judicial de modo que su interposición impedía la firmeza de aquel⁵²². Por otra parte, de acuerdo con el artículo 53 de la LA/1988, la ejecución del laudo sólo podía instarse una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso de anulación, o una vez resuelto el mismo, en caso de haberse interpuesto. Por consiguiente, de conformidad con los preceptos citados, con la LA/1988 no se permitía la ejecución provisional de los laudos, razón por la cual esta regulación fue objeto de críticas, por cuanto significó un retroceso respecto de la legislación anterior –Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 22 de diciembre de 1953–, que autorizaba la ejecución provisional de los laudos⁵²³. En su lugar, el artículo 50 de la LA/1988 permitía la adopción de medidas cautelares para asegurar la plena efectividad del laudo una vez que hubiera adquirido firmeza, esto es, hasta la resolución del eventual recurso de anulación interpuesto en su contra.

Si con la LA/1988 el laudo arbitral firme era un título ejecutivo susceptible de ser ejecutado, quedando vedada la posibilidad de su ejecución provisional, con la entrada en vigor de la LEC esta regla se mantuvo, como lo confirma su artículo 517.2.º que, en su texto original, que prescribía que los laudos o resoluciones arbitrales firmes eran títulos que llevaban aparejada ejecución. Por ello, y contrario al claro propósito de

⁵²¹ Como destaca FRANCO ARIAS, J., «La ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional, según la nueva Ley de Arbitraje del 2003», en *Anuario de justicia alternativa*, núm. 5, 2004, p. 176.

⁵²² Según ARTACHO MARTÍN-LAGOS, M., «La controvertida firmeza del laudo», en *Diario La Ley*, núm. 6673, 2007, fue mayoritaria esta última postura.

⁵²³ Como explica PARDO IRANZO, V., «¿Ejecución provisional del laudo?», en VV.AA., *Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset. Volumen II*, Universitat de València, Valencia, 2007, pp. 370-371, la legislación española ha sido históricamente favorable a la ejecución provisional de los laudos, y los antecedentes de esta opción legislativa pueden remontarse a la conocida *Ley de Madrid*, que incluye las ordenanzas de Madrid de 1502 y ciertas disposiciones de Toledo de 1529.

la LEC de impulsar la ejecución de las resoluciones judiciales no firmes, se mantuvo la prohibición de ejecutar provisionalmente los laudos arbitrales⁵²⁴.

No obstante lo anterior, algún autor entendió que la regulación de la LEC no podría considerarse un obstáculo a la ejecución provisional de los laudos impugnados en anulación, pues la propia LA/1988 admitía la adopción de medidas cautelares para garantizar la efectividad de los pronunciamientos arbitrales, y si se considera que algunas de esas medidas pueden llegar a producir la efectividad del laudo, ello equivaldría a permitir su ejecución provisional⁵²⁵.

Por nuestra parte, rechazamos la tesis anterior, por cuanto las medidas cautelares y la ejecución provisional de las sentencias son instituciones distintas (*supra*, cap. I, apdo. II.3) y persiguen finalidades diferentes. En efecto, siendo la finalidad principal de la ejecución provisional la efectividad de la tutela judicial desde la primera instancia (*supra*, cap. I, apdo. VI.1), las medidas cautelares que se pudieran adoptar no permiten la efectividad inmediata del laudo. De ahí que no resulten equiparables ambas instituciones y que, en definitiva, compartamos la tesis según la cual la LA/1988 era contraria a la ejecución provisional del laudo⁵²⁶.

Así, como acabamos de ver, antes de la actual LA, la ejecución provisional de los laudos arbitrales no era admisible, pues sólo los laudos firmes eran susceptibles de ejecución, la cual se regía, en todo caso, por las normas sobre ejecución ordinaria o definitiva. Sin embargo, la LA de 2003 supuso una importante modificación en el régimen de ejecución de los laudos, pues, a diferencia de lo que sucedía en la regulación anterior, y según anunciamos al inicio de este apartado, los laudos son ejecutables aun cuando contra ellos se haya ejercitado la acción de anulación⁵²⁷. En otras palabras, la

⁵²⁴ Cfr. FRANCO ARIAS, J., «La ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional, según la nueva Ley de Arbitraje del 2003», *op. cit.*, p. 187.

⁵²⁵ En este sentido, CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 30-31.

⁵²⁶ En similar sentido, FRANCO ARIAS, J., «La ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional, según la nueva Ley de Arbitraje del 2003», *op. cit.*, p. 187; y BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 62.

⁵²⁷ Cfr. HINOJOSA SEGOVIA, R. y CUBILLO LÓPEZ, I., «El arbitraje», en HINOJOSA SEGOVIA, R. (Coordinador), *Sistemas de solución extrajudicial de conflictos*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2006, p. 160.

ejecución del laudo arbitral ya no depende de su firmeza, idea que fue reforzada por la modificación del artículo 517.2.2º de la LEC, operada por la Disposición Final 1.1 de la LA, que eliminó la exigencia de firmeza de los laudos o resoluciones arbitrales como requisito para que sean considerados títulos ejecutivos.

Al respecto, la Exposición de Motivos de la LA señala que «la ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la ejecución. Se trata de una regulación que trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado»⁵²⁸.

Como se aprecia, según la Ley de Arbitraje de 2003 los conceptos de firmeza y ejecución son términos distintos y escindibles, idea que también recoge la LEC –en los términos revisados oportunamente (*supra*, cap. I, apdo. V.1)–, de manera que la firmeza del laudo no es requisito para instar su ejecución. Por tanto, no siendo necesaria la firmeza del laudo para poder solicitar su ejecución, y en atención a que la propia LA autoriza la ejecución de los laudos impugnados en anulación, resulta legítimo preguntarse si la ejecución del laudo sometido a acción de anulación es provisional o definitiva, sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 45 de la LA, al referirse a los efectos de la acción de anulación en la ejecución del laudo, se remite a disposiciones de la LEC propias de la ejecución provisional (arts. 529, 533 y 534 LEC). Precisamente, desde la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje de 2003, la doctrina discrepa si la ejecución del laudo arbitral contra el que se ha ejercitado la acción de anulación es provisional o definitiva⁵²⁹.

Sobre el particular, un sector de la doctrina sostiene la tesis de que la nueva Ley de Arbitraje vino a cambiar el criterio restrictivo establecido en la legislación anterior, permitiendo la ejecución provisional de los laudos. En este sentido, se ha afirmado que

⁵²⁸ Apartado IX, párrafo 3º.

⁵²⁹ Según expresa LORCA NAVARRETE, A., «La ejecución del laudo arbitral en los supuestos en que se ha ejercitado acción de anulación ¿es definitiva o provisional?», *op. cit.*

la LA apuesta decididamente por la ejecución provisional del laudo sometido a la acción de anulación, lo que da idea de la equiparación de tal forma de solución del conflicto con la que proporciona la sentencia judicial, como señala expresamente su Exposición de Motivos⁵³⁰. Por lo tanto, carece de sentido esperar a la firmeza del laudo cuando el ordenamiento procesal civil permite ampliamente la ejecución provisional de las sentencias, tesis que resulta avalada por lo dispuesto en el artículo 45 de la LA⁵³¹.

En la misma línea, se ha entendido que las reglas aplicables a la ejecución de los laudos son las previstas en la LEC, con la única salvedad de la ejecución provisional del laudo, que tiene un régimen propio, regulado en el artículo 45 de la LA⁵³². Así las cosas, no resultarían aplicables a la ejecución provisional de los laudos las reglas de los artículos 524 y siguientes de la LEC, salvo en aquellos aspectos en que hay una remisión específica por parte del artículo 45 de la LA, o para cubrir las lagunas normativas que se puedan presentar. Por último, la gran diferencia entre la ejecución de un laudo firme y la de un laudo impugnado en anulación, sería que, en este último caso, el ejecutado puede paralizar la ejecución prestando caución suficiente para responder de los perjuicios por la demora en la ejecución⁵³³.

Según otros autores, en cambio, pese a los términos algo confusos de la propia LA, en relación con la supresión de la exigencia de firmeza de los laudos para ser considerados como títulos ejecutivos conforme a la LEC, todo indica que la ejecución de los laudos que han sido impugnados por medio del ejercicio de la acción de anulación es ordinaria, no provisional. En este sentido, para rechazar la posible ejecución provisional de los laudos, se ha propuesto una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Ley de Arbitraje, escapando de su sentido puramente literal. Así, y pese a que tal cuerpo normativo pareciera distinguir entre laudos definitivos (art. 40 LA) y laudos firmes (art. 43), lo cierto es que el laudo arbitral es firme desde que se

⁵³⁰ Cfr. TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, pp. 2154-2155. En el mismo sentido, ASENSIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1475.

⁵³¹ Vid. RIVES SEVA, J., «Ejecución provisional de laudos arbitrales», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 21, 2005, pp. 46-47.

⁵³² En este sentido, FRANCO ARIAS, J., «La ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional, según la nueva Ley de Arbitraje del 2003», *op. cit.*, p. 177.

⁵³³ *Ídem*, p. 189. En el mismo sentido, BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 71.

pronuncia, toda vez que el mismo no es susceptible de recurso alguno⁵³⁴, presupuesto indispensable para que no se produzca la firmeza de una resolución, por lo que no cabe hablar de laudos definitivos (no firmes)⁵³⁵.

En efecto, el laudo arbitral sólo es susceptible de ser impugnado por medio de la acción de anulación y de la acción de revisión, mecanismos ambos que no participan de la naturaleza propia de los recursos, sino que son medios de rescisión de sentencias –en este caso, laudos– firmes⁵³⁶. Por lo tanto, si el laudo contiene un pronunciamiento condenatorio y el condenado no lo cumple voluntariamente, se podrá instar el despacho de la ejecución ordinaria de ese laudo, con arreglo a las normas contenidas en la LEC. En esta tesitura, lo que verdaderamente regula el artículo 45 de la LA son ciertas especialidades de la ejecución definitiva del laudo, referidas a la posibilidad de solicitar la suspensión en caso de ejercitar el condenado la acción de anulación, pero en ningún caso estaría admitiendo la ejecución provisional del laudo arbitral.

⁵³⁴ Para una visión crítica sobre la irrecurribilidad de los laudos arbitrales, *vid.* NIEVA FENOLL, J., «Ampliación de las posibilidades de anulación del laudo arbitral», en *Actualidad civil*, núm. 16, 2008.

⁵³⁵ Cfr. PARDO IRANZO, V., «¿Ejecución provisional del laudo?», *op. cit.*, p. 375. En el mismo sentido, *vid.* LORCA NAVARRETE, A., «La ejecución del laudo arbitral en los supuestos en que se ha ejercitado acción de anulación ¿es definitiva o provisional?», *op. cit.*, quien destaca que la firmeza del laudo arbitral tiene una justificación negocial distinta de la firmeza de las resoluciones judiciales; MARCOS FRANCISCO, D., «Las nuevas reformas proyectadas en materia de anulación y ejecución del laudo arbitral», en *Diario La Ley*, núm. 7546, 2011; BERMEJO REALEZ, L., «La eficacia de las decisiones arbitrales: la impugnación y ejecución de laudos», en *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 29, 2013, p. 3; RIPOL CARULLA, I., «La suspensión de la ejecución del laudo: Estudio del art. 45 LA», en *Justicia*, núm. 1, 2013, pp. 381-382; y CABRERO LÓPEZ, J., «La ejecución del laudo arbitral», en *Práctica de Tribunales*, núm. 107, 2014.

En contra, *vid.* ARTACHO MARTÍN-LAGOS, M., «La controvertida firmeza del laudo», *op. cit.*, para quien el laudo arbitral alcanza firmeza: a) cuando las partes no ejercitan la acción de anulación dentro de plazo (art. 41.4 LA); o b) cuando el recurrente desiste del recurso (art. 450 LEC) o el recurso es desestimado (art. 42.2 LA).

⁵³⁶ A favor del carácter de acción de la anulación del laudo arbitral, además de los autores ya citados, cfr. CERVANTES BRAVO, I., «Comentarios a la Ley de Arbitraje española (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)», en *Vniversitas*, núm. 115, 2008, pp. 23-24; y REMÓN PEÑALVER, J., «Sobre la anulación del laudo: el marco general y algunos problemas», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2007, disponible en www.indret.com/pdf/444_es.pdf.

En contra, *vid.* MAGRO SERVET, V., «Casuística práctica de la acción de anulación del laudo arbitral en la Ley 60/2003», en *Diario La Ley*, núm. 6576, 2006, para quien la denominada acción de anulación es un verdadero recurso, ya que con ella se pretende impugnar una resolución, y buena prueba de ello es que tal recurso se interpone ante la Audiencia Provincial –aunque desde 2011 conoce de esta acción el Tribunal Superior de Justicia (art. 8.5 LA)– y no ante el Juzgado de Primera Instancia. En igual sentido, ARTACHO MARTÍN-LAGOS, M., «La controvertida firmeza del laudo», *op. cit.*, para quien la anulación del laudo es un recurso especial con motivos tasados.

Abona a esta tesis la modificación del artículo 43 de la LA operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, que mejora las deficiencias del texto original del citado precepto, en cuanto suprime la referencia a la firmeza del laudo –lo que originó dudas sobre la supuesta diferencia entre laudos definitivos y laudos firmes–, e incluye la acción de anulación junto a la revisión como mecanismos para impugnar el efecto de cosa juzgada vinculado al laudo arbitral⁵³⁷.

Si bien la declaración del artículo 43 de la LA relativa a la fuerza de cosa juzgada del laudo arbitral nada tiene que ver con el régimen de ejecución forzosa y la incidencia que en el devenir del procedimiento revista el uso de la acción de anulación⁵³⁸, tras la reforma operada por la Ley 11/2011, la LA alcanzó la coherencia interna que le faltaba, pues desde su texto original ya se establecía el carácter de *acción* que presenta la anulación del laudo, por oposición a la naturaleza de recurso que ostentaba bajo la vigencia de la LA/1988⁵³⁹, despejando toda duda sobre la firmeza del laudo y poniendo fin a una arraigada controversia, derivada fundamentalmente de su literal dicción en su redacción anterior⁵⁴⁰.

En definitiva, de acuerdo con la normativa vigente, el laudo arbitral no es susceptible de recurso alguno, por lo que adquiere firmeza desde que se dicta. Por lo anterior, participamos de la tesis que niega lugar a la ejecución provisional de los laudos arbitrales, toda vez que, según revisamos en el Capítulo anterior [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)], para que proceda la ejecución provisional es necesario –entre otras exigencias– que se trate de resoluciones que no sean firmes, lo que no sucede en el caso que

⁵³⁷ En su nueva redacción, el artículo 43 de la LA dispone: « El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes».

⁵³⁸ Cfr. CABRERO LÓPEZ, J., «La ejecución del laudo arbitral», *op. cit.*

⁵³⁹ En igual sentido, MARCOS FRANCISCO, D., «Las nuevas reformas proyectadas en materia de anulación y ejecución del laudo arbitral», *op. cit.*

⁵⁴⁰ Cfr. BERMEJO REALEZ, L., «La eficacia de las decisiones arbitrales: la impugnación y ejecución de laudos», *op. cit.*, p. 3. En igual sentido, RIPOL CARULLA, I., «La suspensión de la ejecución del laudo: Estudio del art. 45 LA», *op. cit.*, p. 381, sostiene que «la nueva redacción del artículo 43 LA no deja lugar a dudas en cuanto a la voluntad del legislador de dotar de firmeza al laudo desde el momento de su emisión o, para ser más precisos, desde su notificación a las partes, zanjando viejos conflictos en relación con la naturaleza del laudo».

analizamos⁵⁴¹. Así las cosas, la ejecución del laudo es siempre ordinaria, ejecución que se regirá por las reglas de la ejecución definitiva contenidas en la LEC, y por ciertas normas de la ejecución provisional a las que se remite el artículo 45 de la LA, en caso de que se ejercite por el ejecutado la acción de anulación del laudo.

Finalmente, nótese que tratándose de la ejecución del laudo pendiente de anulación, su efectividad se ve reducida por la posibilidad de que el ejecutado obtenga la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución⁵⁴². En efecto, teniendo la acción de anulación el carácter de un proceso autónomo de revisión, guarda cierta analogía con la interposición de los mecanismos de rescisión de sentencias firmes en sede jurisdiccional, pero una diferencia importante es la posibilidad de suspender la ejecución del laudo impugnado en anulación configurada como un derecho del ejecutado, lo que no ocurre con los mecanismos mencionados, situación que puede atentar contra la celeridad del arbitraje⁵⁴³. Desde esta óptica, la regulación contenida en la LA respecto a la recogida en la LEC difiere en aspectos sustanciales, que sitúan al arbitraje en una situación de desventaja frente a la ejecución de las sentencias, lo que puede significar, en definitiva, un deterioro de la institución del arbitraje⁵⁴⁴.

3. La discutida ejecución provisional de las sentencias de desahucio

Durante los primeros años de vigencia de la LEC, fue objeto de debate doctrinal y jurisprudencial la posibilidad de ejecutar provisionalmente las sentencias de desahucio que condenan al desalojo de un inmueble, aunque en la actualidad la jurisprudencia mayoritaria se inclina por no excluir del ámbito objetivo de nuestra institución a las

⁵⁴¹ En igual sentido, advirtiendo sobre las imprecisiones contenidas en la Ley de Arbitraje de 2003, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, pp. 339-341. Del mismo modo, pero con énfasis en el carácter no jurisdiccional del laudo para excluirlo del ámbito objetivo de la ejecución provisional, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit.*, p. 59.

⁵⁴² Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial, op. cit.* —con DE LA OLIVA SANTOS, A., y VEGAS TORRES, J.—, p. 605.

⁵⁴³ Según previene GIMÉNEZ OLAVARRIAGA, R., «La suspensión de la ejecución del laudo; el artículo 45 de la Ley de Arbitraje (LA)», en *Newsletter Pérez-Llorca*, núm. 1, 2010, pp. 9-11.

⁵⁴⁴ Cfr. RIPOL CARULLA, I., «La suspensión de la ejecución del laudo: Estudio del art. 45 LA», *op. cit.*, p. 388. Para un estudio completo del tema, *vid.*, del mismo autor, *La ejecución del laudo y su anulación. Estudio del artículo 45 LA*, Bosch, Barcelona, 2013; y PARDO IRANZO, V., «Valoración crítica de la reforma del proceso de ejecución del laudo arbitral», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 26, 2012, pp. 1-30.

sentencias que lleven aparejado el lanzamiento, como veremos a continuación. De todos modos, nos parece relevante exponer, al menos sucintamente, las causas de esta polémica⁵⁴⁵.

Antes de revisar las diversas posiciones en relación con esta problemática, conviene dejar claro que la controversia se suscita únicamente respecto de las sentencias de desahucio que se derivan de una relación arrendaticia, quedando al margen de las misma las sentencias de desahucio originadas en una situación de precario, toda vez que respecto de estas últimas resoluciones no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 449.1 y 2 de la LEC, precepto cuya interpretación se encuentra en el centro del debate que ahora nos ocupa⁵⁴⁶, y ninguna duda cabe acerca de que dichas sentencias son provisionalmente ejecutables⁵⁴⁷.

Respecto de las sentencias de desahucio originadas en una situación arrendaticia existente entre las partes, cualquiera que sea el procedimiento con arreglo al cual se haya tramitado el asunto y con independencia de la causa en que se funde la acción de desahucio⁵⁴⁸, es claro que la obligación de desalojar el inmueble impuesta al demandado constituye una condena no dineraria, sobre la cual no hay norma expresa que la excluya de la ejecución provisional, por lo que, aplicando las disposiciones generales que disciplinan esta institución, no habría inconveniente en concluir que tal pronunciamiento es susceptible de ser provisionalmente ejecutado.

Sin embargo, la duda sobre la ejecución provisional de las sentencias de desahucio obedece, como decimos, a la regla especial prevista para la interposición de

⁵⁴⁵ Para una exposición detallada del tema, además de los autores que iremos citando en este apartado, *vid.* BONET NAVARRO, J., *Los juicios de desahucio. Especialidades procesales para la recuperación de la posesión de finca arrendada o en situación de precario*, Aranzadi, 4ª edición, Cizur Menor, 2013, pp. 426-435; BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 233-273; BERNARDO SAN JOSÉ, A., *El juicio verbal de desahucio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp. 305-311; CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 97-106; y ESCALER BASCOMPTE, R., *El desahucio por falta de pago*, Atelier, Barcelona, 2006, pp. 165-174.

⁵⁴⁶ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 97. En igual sentido, *vid.* QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, p. 2554.

⁵⁴⁷ AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de octubre de 2007 (JUR\2008\13162).

⁵⁴⁸ Para una referencia a los diversos procedimientos y causas por los que se puede tramitar y/o fundar la acción de desahucio, entre la abundante bibliografía, puede consultarse nuestro trabajo BESSER VALENZUELA, G., *El proceso de desahucio por falta de pago*, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 35-40.

recursos en los procesos que llevan aparejado el lanzamiento, ya que en estos procesos la LEC ha limitado el derecho del demandado a interponer los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, condicionando la admisibilidad de los mismos a la satisfacción de las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado, circunstancia que deberá acreditar por escrito en el momento de interponer estos recursos (art. 449.1 LEC)⁵⁴⁹.

Se trata, como se comprenderá, de una exigencia que tiene por finalidad evitar que el condenado al desalojo continúe ocupando la finca sin abonar al arrendador renta alguna. Sin embargo, es precisamente la existencia de esta obligación de pagar las rentas durante la sustanciación de los recursos lo que hace difícil admitir la ejecución provisional del lanzamiento⁵⁵⁰, por cuanto de admitirse, por un lado, la ejecución provisional del pronunciamiento que ordena al demandado desalojar la finca arrendada, con la consecuente privación de la ocupación material de la misma que ello significara, y exigirle el pago de la renta de un inmueble que ya no ocupa, por el otro, para que pueda hacer uso de su derecho a recurrir, parece una solución excesiva e injusta. Por esta razón, algunos autores⁵⁵¹ se han manifestado contrarios a la ejecución provisional de las sentencias de desahucio en los casos en que el arrendatario impugne el lanzamiento, debiendo, claro está, pagar la renta y las sumas que correspondan mientras dure el recurso, so pena de declararse su deserción *ex* artículo 449.2 de la LEC; criterio que también ha sido recogido por alguna resolución⁵⁵².

⁵⁴⁹ Cfr. BESSER VALENZUELA, G., *El proceso de desahucio por falta de pago*, *op. cit.*, p. 164.

⁵⁵⁰ Cfr. DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 48.

⁵⁵¹ En este sentido, *vid.* CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 102-106; CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 1096-1099; CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 37; y QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», *op. cit.*, pp. 2553-2554.

⁵⁵² El AAP Madrid (Secc. 9ª), de 5 de octubre de 2006 (JUR\2006\268031) recoge la no ejecución provisional de las sentencias dictadas en procesos arrendaticios que lleven aparejado el lanzamiento tras realizar una interesante interpretación de los diversos supuestos regulados en el artículo 449 de la LEC. Al efecto, señala que «entre estos tres supuestos existe una importante diferencia en su regulación, pues mientras que en los procesos que llevan aparejado lanzamiento el legislador se limita a establecer ese requisito, en los supuestos contemplados en los núm. 3 y 4 del art. 449 de la LEC se establece de forma expresa que la consignación de la cantidad que haya sido objeto de condena en primera instancia no impedirá la ejecución provisional de la sentencia, prevención que no se contempla para los procesos de arrendamiento que conlleven el lanzamiento de la finca, por lo que debe entenderse a sensu contrario que en los supuestos de proceso arrendaticios el pago o consignación de las rentas excluye la posibilidad de la ejecución provisional de dichas sentencias, dado que el art. 525 de la LEC señala que no serán susceptibles de ejecución provisional en ningún caso las sentencias que cita dicho precepto, no

Sin embargo, como indicamos al inicio de este epígrafe, la jurisprudencia mayoritaria ha entendido que las sentencias de desahucio no se encuentran excluidas de la ejecución provisional, de manera que corresponde que se acuerde la misma si se ha solicitado, sin perjuicio del derecho del ejecutado de oponerse a la ejecución por estimar que resultará imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional en caso de revocación de la condena *ex* artículo 528.2.2º de la LEC⁵⁵³.

Ciertamente, admitido que procede la ejecución provisional de la sentencia de desahucio, debe realizarse una interpretación restringida de lo dispuesto en el artículo 449.1 de la LEC, de suerte que no sea exigible al arrendatario ejecutado el pago de la renta mientras se sustancian los recursos que haya interpuesto⁵⁵⁴. Efectivamente, en

impide que el legislador en otra norma pueda establecer o deducirse de la misma la voluntad del legislador, de que otro tipo de sentencias aunque contengan pronunciamientos de condena, tampoco puedan ser ejecutadas de forma provisional, puesto que tal conclusión a que debe llegarse respecto a las sentencias recaídas en procesos arrendaticios en los que existe la obligación de pago o consignación de las rentas, puesto que el legislador no exonera en ningún caso al arrendatario del pago de las rentas durante la tramitación del correspondiente recurso, es decir se haya procedido o no a la ejecución provisional de la sentencia, por lo que la ejecución provisional supondría por un lado privar al demandado ejecutado del uso de la vivienda, y a la vez el proceder al pago de la renta y consignación, debiendo por lo tanto entenderse incompatible, con la ejecución provisional de la sentencia el hecho de que se obligue al demandado a seguir pagando la renta».

⁵⁵³ De forma ilustrativa, el AAP Vizcaya (Secc. 5ª), de 10 de octubre de 2002 (JUR\2003\23447) tiene declarado que «aun cuando la Sala coincide con la parte apelante en que la finalidad del artículo 449 de la LEC. no es otra que evitar, en los procesos que llevan aparejado el lanzamiento, el mantenimiento de recursos con animo dilatorio por parte de los arrendatarios morosos y no cabe por lo tanto aceptar la postura sustentada en la resolución recurrida en orden a que conceder la ejecución provisional en este supuesto, en el que se declaró la resolución de un contrato de arrendamiento de local de negocio, chocaría con la obligación de consignar o estar al corriente del abono de las rentas, porque esa obligación de estar al corriente en el pago de las rentas es una consecuencia directa de que se está disfrutando de la finca arrendada, pero no excluye en principio la posibilidad de ejecución provisional en este tipo de procedimientos, pues nada se establece al respecto en el artículo 525 de la LEC, que como es sabido, enumera los supuestos en que no cabe conceder la ejecución provisional, sino que la cuestión debe resolverse atendiendo a lo preceptuado en el artículo 528.2, causa segunda.

En efecto, cuando en este precepto se señala que la oposición a la ejecución provisional únicamente podrá fundarse, si la sentencia fuese de condena no dineraria, en resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada", se encuentra la clave para la resolución del problema planteado, toda vez que existe el riesgo de que una eventual estimación del recurso de casación interpuesto por uno de los codemandados, habiéndose producido el desalojo ya del local en fase de ejecución provisional, ocasione la imposibilidad de restaurar el perjuicio real causado a los arrendatarios como consecuencia del desalojo del local, especialmente teniendo en cuenta que nos encontramos ante la existencia de un negocio en marcha, sin que en la actual regulación de la ejecución provisional esté prevista la prestación de fianza por parte de la ejecutante».

En igual sentido, *vid.* AAP Valencia (Secc. 6ª), de 17 de mayo de 2003 (JUR\2003\172050).

⁵⁵⁴ Con similares términos, cfr. ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 736.

estos supuestos debe entenderse que no puede obligarse al arrendatario a seguir abonando la renta una vez que pierde la posesión del inmueble, pues la exigencia del citado artículo 449.1 de la LEC pierde su sentido⁵⁵⁵. Dado que no hay norma expresa que regule esta materia, sería conveniente que el tribunal *a quo* advirtiera de esta exención al instarse la ejecución provisional, para evitar conflictos ulteriores⁵⁵⁶.

Nos parece que la interpretación que vienen realizando las Audiencias Provinciales en orden a admitir la ejecución provisional de las sentencias de desahucio es acertada, pues deja a salvo el derecho del ejecutado de oponerse a la ejecución provisional. Por lo demás, como expresa CACHÓN CADENAS, se aprecia una especial sensibilidad por parte de los tribunales a la hora de estimar la oposición a la ejecución provisional cuando el ejecutado alega en el incidente de oposición la imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior a la ejecución o de compensarle económicamente, en caso de revocación⁵⁵⁷.

Pero, además, esta solución considera también el interés del ejecutante, quien podrá manifestar lo que estime pertinente en el incidente de oposición, e incluso podrá ofrecer caución suficiente para garantizar que restaurará la situación anterior o resarcirá los perjuicios en caso de revocación (art. 529.3 LEC), supuesto este último en que la determinación de la caución puede servir para modelar los efectos de la ejecución provisional⁵⁵⁸.

Por todo ello, entendemos que resulta más adecuado que sea el juez competente para conocer de la ejecución provisional quien pondere los argumentos expuestos por las partes en el momento de decidir sobre la oposición a la misma y, en definitiva, determine si en el caso concreto se verifica el motivo de oposición invocado, en cuyo caso acordará la suspensión de la ejecución, o si, por el contrario, no se acredita que de

⁵⁵⁵ Cfr. HERNÁNDEZ VERGARA, A., «Comentarios al Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 3544-3545.

⁵⁵⁶ Tal como sugiere GIBERT FERRAGUT, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 6.

⁵⁵⁷ CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 102.

⁵⁵⁸ Cfr. FERNÁNDEZ SEIJO, J., «La ejecución de títulos judiciales que llevan aparejado lanzamiento», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 930.

seguir adelante con el lanzamiento será imposible o de extrema dificultad proceder a la restitución *in natura* o por equivalente, en cuyo caso continuará con la ejecución⁵⁵⁹. Creemos que este criterio es suficientemente respetuoso de todos los intereses en juego, y por ello descartamos que se niegue indiscriminadamente el acceso a la ejecución provisional en todos los casos de sentencias de desahucio por el riesgo que puede significar su materialización antes de que la sentencia adquiera firmeza, precisamente porque no siempre se tratará del arrendamiento de un inmueble que sirva como vivienda principal de una familia o como local para un negocio o empresa que pueda ocasionar perjuicios de la entidad suficientes para proceder a la suspensión de la ejecución.

4. Los decretos del Letrado de la Administración de Justicia como títulos ejecutivos y su posible ejecución provisional, en especial en los procesos de desahucio

De acuerdo con la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, los Letrados de la Administración de Justicia –antes llamados Secretarios Judiciales–, pueden dictar ciertas resoluciones que se denominan diligencias y decretos, *ex* artículo 206.2 de la LEC⁵⁶⁰.

En principio, estas resoluciones no debieran ser objeto de ejecución provisional, toda vez que quedan excluidos del ámbito de esta institución todos aquellos títulos

⁵⁵⁹ En similares términos, *vid.* SILVOSA TALLÓN, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero», *op. cit.*; LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», *op. cit.*, p. 1841; y MARTÍ MARTÍ, J., «La ejecución provisional de sentencias en los juicios de desahucio», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2002, p. 1940.

⁵⁶⁰ La citada disposición prescribe: «Las resoluciones de los Secretarios Judiciales se denominarán diligencias y decretos.

Cuando la ley no exprese la clase de resolución que haya de emplearse, se observarán las siguientes reglas:

1.^a Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca.

2.^a Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.

3.^a Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal».

ejecutivos que no revistan la condición de *resoluciones judiciales*⁵⁶¹, y según tiene resuelto el Tribunal Supremo⁵⁶², las diligencias y decretos de los Letrados de la Administración de Justicia no son resoluciones judiciales. A lo anterior se suma que, como ha declarado el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, estas resoluciones no son actos jurisdiccionales, que el artículo 117.3 de la Constitución reserva exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, cuyo «ejercicio no se reparte entre todos sus componentes, sino que se residencia en los jueces y magistrados que ostentan su titularidad»⁵⁶³.

Sin embargo, y pese a que estimamos que la reforma por la que se implementó la nueva Oficina Judicial resulta criticable y que su constitucionalidad es dudosa, lo cierto es que la misma entregó competencia a los secretarios judiciales para pronunciar resoluciones que pueden contener pronunciamientos de condena susceptibles de ser ejecutados. En efecto, tras la entrada en vigor de la mencionada Ley 13/2009, aun cuando con esta ley no se reformó el listado de títulos ejecutivos contenidos en el artículo 517 de la LEC, ciertas resoluciones de estos funcionarios pasaron a tener eficacia ejecutiva por sí mismas, sin necesidad de aprobación del Tribunal, por lo que tales resoluciones pasaron a tener la calidad de títulos ejecutivos⁵⁶⁴.

Y si la conclusión anterior no resultaba plenamente convincente, la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, modificó el ordinal 9º del apartado segundo del artículo 517 de la LEC, según el cual, en su texto actual, son títulos ejecutivos las «*resoluciones procesales* y documentos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución». Esta modificación tuvo por finalidad, precisamente, adecuar la redacción de la citada norma a las reformas que, en sede de ejecución, introdujo la Ley 13/2009, posibilitando así que el decreto del secretario judicial se alzara en título ejecutivo⁵⁶⁵. De este modo, en la actualidad no cabe

⁵⁶¹ Con este énfasis, *vid.* GARBÉRÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 201.

⁵⁶² ATS (Sala 1ª, de lo Civil), de 15 de abril de 2015 (vLex-594181746).

⁵⁶³ STS (Sala Especial Art. 61 LOPJ), de 28 de septiembre de 2011 (vLex-327822635).

⁵⁶⁴ Cfr. BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B., «Reformas del Libro III sobre proceso de ejecución y medidas cautelares», *op. cit.*, pp. 310-311.

⁵⁶⁵ *Vid.* SÁNCHEZ GIMENO, S., «La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal», en *Actualidad jurídica Uría Méndez*, núm. 31, 2012, pp. 39-52.

duda de que el legislador confiere fuerza ejecutiva a determinados decretos del secretario judicial⁵⁶⁶.

Si existen decretos de los secretarios judiciales que tienen fuerza ejecutiva y que documentan un determinado crédito o, si se prefiere, contienen un pronunciamiento de condena o al menos dan cuenta de un determinado deber de prestación que debe cumplir un sujeto determinado, resulta válido preguntarse si tales resoluciones procesales pueden ser ejecutadas provisionalmente.

Al respecto, podría pensarse que para la solución de este interrogante, se reproduciría la discusión sobre la posibilidad de ejecutar provisionalmente los autos definitivos que contengan pronunciamientos condenatorios –cuestión sobre la que ya nos referimos (*supra*, cap. II, apdo. II.1)– toda vez que nos enfrentamos a una situación más o menos análoga: se trata de resoluciones que, no adoptando la forma de sentencia, contienen pronunciamientos condenatorios. Sin embargo, y pese al interés teórico que pudiera despertar esta cuestión, lo cierto es que se trata de un tema que no ha merecido la atención de la doctrina, al menos entre los autores que hemos consultado para esta investigación. En todo caso, podemos constatar que los comentaristas que han abordado aunque sea superficialmente el asunto, coinciden en negar la posibilidad de ejecutar provisionalmente los decretos de los secretarios judiciales, sea porque los mismos no constituyen resoluciones judiciales⁵⁶⁷, sea porque el régimen de recursos que la ley prevé respecto de estas resoluciones procesales resulta incompatible con la regulación de la ejecución provisional⁵⁶⁸.

No obstante lo anterior, con base en este último argumento, esto es, en la regulación de los recursos que caben contra las resoluciones procesales⁵⁶⁹, podría afirmarse la tesis contraria, toda vez que tratándose del recurso directo de revisión, la

⁵⁶⁶ En este sentido, cfr. CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, op. cit., p. 25; y MONTERO AROCA, J., et al., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*, op. cit., p. 553.

⁵⁶⁷ Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 59-60.

⁵⁶⁸ Cfr. TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», op. cit., p. 2149.

⁵⁶⁹ Sobre este tema, entre la abundante bibliografía, vid. PÉREZ DAUDÍ, V., «La revisión de los Decretos del Secretario Judicial por el Tribunal», en *Diario La Ley*, núm. 7511, 2010.

ley contempla expresamente que dicho recurso carecerá de efectos suspensivos (art. 454 bis LEC), cuestión que ha sido entendida, al menos respecto del recurso de apelación, como sinónimo de admisibilidad de la ejecución provisional (*supra*, cap. II, apdo. II.1).

Sin embargo, sostener que es posible ejecutar provisionalmente los decretos de los secretarios judiciales parece una alternativa un tanto forzada, pues claramente el régimen de la ejecución provisional fue pensado como un sistema para facilitar la efectividad de las resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza por razón de haber sido impugnadas por vía de apelación, infracción procesal o casación, y no para resoluciones procesales. Pero, además, con independencia de la mayor o menor fuerza persuasiva de los argumentos a favor de esta tesis, se trata más bien de una disquisición teórica sin mayor impacto en la realidad, toda vez que, aun para el caso de que se admita esta posibilidad, no será posible que la misma tenga operatividad en la práctica.

Es pacífico que ciertos decretos de los secretarios judiciales son considerados como títulos ejecutivos. Sin embargo, la LEC no contiene un catálogo de las resoluciones ejecutivas del secretario judicial, razón por la cual hay que revisar todo el articulado de la ley procesal a fin de detectar tales resoluciones. Y realizado este examen, resulta que no son muchas las resoluciones procesales que pueden alzarse como título ejecutivo, y las que lo hacen, no parecen ser compatibles con la institución de la ejecución provisional.

En efecto, se puede considerar que lleva aparejado ejecución el decreto por el que se aprueba la tasación de las costas en caso de que no hayan sido impugnadas (art. 244.3 LEC), o el decreto que decide sobre la impugnación de las costas por excesivas o indebidas (art. 246.3 y 4 LEC). Sin embargo, como analizamos oportunamente, la condena en costas y todo el procedimiento relativo a su tasación se encuentra excluido del ámbito de la ejecución provisional (*supra*, apdo. II.1), por lo que en estos supuestos ni siquiera llega a plantearse el interrogante que formulamos.

Otro tanto sucede con el decreto que da por terminado el proceso monitorio en los casos en que el deudor no atiende el requerimiento de pago (art. 816 LEC). Como se sabe, el *monitorio* es un proceso a través del cual se crea un título ejecutivo a favor de quien afirma ser acreedor si, requerido por el tribunal el deudor, éste no cumple la

obligación ni formula oposición a ella dentro del plazo concedido⁵⁷⁰. Por lo tanto, si el demandado no atiende el requerimiento, termina el proceso por decreto del secretario judicial, resolución contra la que no cabe recurso alguno, de manera que nuevamente resulta incompatible esta hipótesis con la ejecución provisional.

Probablemente el único supuesto en que esta cuestión podría llegar a plantearse es el relativo al decreto que pone término al proceso de desahucio por falta de pago, en los casos en que el demandado no atienda el requerimiento que se le dirige *ex* artículo 440.3 de la LEC, ya que dicha resolución procesal lleva implícita la estimación de la acción del actor y, consecuentemente, envuelve una tácita condena al demandado para que desaloje el inmueble arrendado⁵⁷¹. En este caso, si admitimos la ejecución provisional de las sentencias que llevan aparejado el lanzamiento (*supra*, apdo. II.3), no parece justificado negar esta posibilidad al actor por la sola circunstancia de que el demandado no atendió el requerimiento de naturaleza monitoria que se le dirige una vez admitida la demanda. Al contrario, dicha opción sería abiertamente contraria al propósito pretendido por el legislador de facilitar la recuperación de la vivienda e impulsar con ello el alicaído mercado del alquiler, objetivos que han impulsado las numerosas reformas legales de que ha sido objeto el proceso de desahucio por falta de pago.

Por esta razón, aunque resulte dudoso, creemos que en los casos en que el juicio de desahucio por falta de pago termine por decreto del secretario judicial por no haber atendido el demandado el requerimiento que se le ha realizado, no obstante la procedencia de recursos en contra de dicha resolución y la especial regulación de los mismos, ello no será obstáculo para que se acuerde la ejecución provisional del decreto de terminación y se lleve a cabo el lanzamiento.

⁵⁷⁰ DE LA OLIVA SANTOS, A., DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*, op. cit., p. 558.

⁵⁷¹ Sobre este tema, *vid.* BESSER VALENZUELA, G., *El proceso de desahucio por falta de pago*, op. cit., pp. 159-161.

CAPÍTULO IV

LOS SUJETOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE

De forma general, en sede de competencia funcional la ley procesal le atribuye competencia para la ejecución de las sentencias al tribunal que conoció del asunto en primera instancia (art. 61 LEC), regla que se reitera luego en la regulación de la ejecución ordinaria (art. 545 LEC). Se trata de una norma de competencia funcional que resulta tradicional en el ordenamiento jurídico español⁵⁷².

De acuerdo con estas disposiciones, se puede concluir fácilmente que el tribunal competente para la ejecución provisional de las resoluciones judiciales es también el tribunal de primera instancia, sin que hubiese sido necesario destinar un precepto específico dentro de la regulación de nuestra institución para determinar el órgano jurisdiccional competente. Sin embargo, con el propósito de realizar una regulación completa de la ejecución provisional⁵⁷³, el legislador procesal señala expresamente qué tribunal debe intervenir en la misma, confirmando la regla de competencia funcional antes aludida y despejando cualquier duda que pudiera existir al respecto⁵⁷⁴.

⁵⁷² CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, op. cit., p. 28.

⁵⁷³ Así lo explica MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 110.

⁵⁷⁴ En este sentido, vid. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 83; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 47.

De este modo, el órgano jurisdiccional competente para acordar la ejecución provisional es en todo caso el tribunal que conoció el proceso en primera instancia, tanto para las sentencias de primera instancia (art. 524.2 LEC) como para las sentencias de segunda instancia (art. 535.2.II LEC). En otros términos, resulta indiferente que la resolución judicial que se pretende ejecutar provisionalmente la haya pronunciado el tribunal de primera instancia o el tribunal de apelación, pues siempre será competente para dicha ejecución el primero de los órganos mencionados, toda vez que el legislador presume que este tribunal es el que se encuentra en mejores condiciones para acometer las labores procesales propias de la actividad ejecutiva⁵⁷⁵. Por lo demás, esta norma de competencia funcional facilita la gestión congruente del asunto⁵⁷⁶, pues de acuerdo con la jurisprudencia el propio tribunal encargado de la ejecución tiene la facultad de fijar el verdadero sentido y alcance del fallo⁵⁷⁷.

Así las cosas, no se altera la regla de competencia funcional que comentamos en atención al órgano jurisdiccional que pronuncia la sentencia cuya ejecución provisional se solicita. Tampoco cabe distinguir entre competencia para crear el título ejecutivo y competencia para despachar la ejecución provisional⁵⁷⁸, pues la LEC parte de la base de que la propia resolución que se intenta ejecutar provisionalmente tiene fuerza ejecutiva –cuestión sobre la que volveremos más adelante (*infra*, cap. V, apdo. II)–. En definitiva, la competencia del tribunal que conoció del asunto en primera instancia se extiende a todo lo relativo con la ejecución provisional, lo que incluye el despacho de la misma, la oposición, las actuaciones ejecutivas y la eventual revocación⁵⁷⁹.

En este punto, conviene precisar que la atribución de competencia funcional al tribunal que se pronunció en primera instancia sobre la cuestión litigiosa no choca con la privación de competencia que afecta al tribunal que dictó una sentencia respecto de la

⁵⁷⁵ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 209.

⁵⁷⁶ Así lo entiende CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 37.

⁵⁷⁷ En este sentido, con referencia a la doctrina del Tribunal Supremo, *vid.* AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 28 de julio de 2005 (JUR\2006\38128).

⁵⁷⁸ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 342.

⁵⁷⁹ Por todos, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 905.

cual se interpuso un recurso devolutivo, toda vez que el legislador excepciona expresamente de esta pérdida de competencia las actuaciones relativas a la ejecución provisional de la resolución apelada (art. 462 LEC)⁵⁸⁰. Y aún cuando nada dice la ley procesal respecto de las sentencias que han sido impugnadas por infracción procesal o por vía de casación, entendemos que igual excepción rige, por analogía, respecto de la ellas⁵⁸¹, de lo contrario, no se podría aplicar la norma de competencia funcional que estudiamos.

Como se sabe, la ley otorga la competencia funcional a partir de la competencia objetiva⁵⁸². Por lo tanto, para determinar concretamente qué órganos jurisdiccionales tienen competencia para despachar y llevar a cabo la ejecución provisional, se deben observar las previsiones contenidas tanto en la LOPJ como en la LEC que establecen los criterios de atribución de competencia objetiva en el orden civil.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 45 de la LEC, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales, regla que coincide con lo prescrito en el artículo 85.1 de la LOPJ. Por lo tanto, ninguna duda cabe de que a estos tribunales les corresponde la competencia funcional para acordar la ejecución provisional de las sentencias pronunciadas por ellos mismos que han sido recurridas en apelación, así como de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que han sido impugnadas por medio de algún recurso extraordinario⁵⁸³.

⁵⁸⁰ En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, pp. 341-342.

⁵⁸¹ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 370.

⁵⁸² DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 392.

⁵⁸³ A modo de ejemplo, el AAP Zaragoza (Secc. 2ª), de 14 de junio de 2005 (JUR\2005\176417) declara que el artículo 524 de la LEC «dispone que “La ejecución provisional de las sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria [sic] por el tribunal competente para la primera instancia”, esto es, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 13 de los de Zaragoza, cuya competencia tiene aceptada la ejecutada, que además se sometió en su día a los Juzgados de esa ciudad para cualquier conflicto o controversia que surgiera con la contraparte».

Sin embargo, la ley también atribuye competencia objetiva para el conocimiento de determinados asuntos civiles a otros órganos jurisdiccionales distintos de los Juzgados de Primera Instancia —y lo hace por razón de la materia, de la cuantía y del aforamiento—, por lo que la competencia funcional para la ejecución provisional puede corresponder a estos tribunales.

De acuerdo con el primero de estos criterios, esto es, *ratione materiae*, los Juzgados de lo Mercantil tienen competencia objetiva para el conocimiento de los asuntos descritos en el artículo 86 *ter* de la LOPJ, supuestos que comprenden dos grandes grupos de materia, a saber: los procesos concursales (art. 86 *ter*.1 LOPJ); y, en primera instancia, los procesos declarativos sobre diversas cuestiones de naturaleza comercial (art. 86 *ter*.2 LOPJ).

Tratándose del primer grupo de asuntos, atendido el carácter universal⁵⁸⁴ y complejo que presentan los procesos concursales, cuya regulación básica se encuentra establecida en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), y teniendo en cuenta que en los que tienen lugar actividades no jurisdiccionales y jurisdiccionales, las últimas de las cuales pueden, a su vez, tener naturaleza declarativa, cautelar o ejecutiva⁵⁸⁵, es posible que los Juzgados de lo Mercantil tengan competencia funcional para conocer de las solicitudes de ejecución provisional que se formulen en el seno de estos procesos, respecto de los pronunciamientos condenatorios contenidos en las sentencias que pronuncien y que hallan sido impugnadas, como puede ocurrir, por ejemplo, con los pronunciamientos de condena de la sentencia que califique como culpable el concurso⁵⁸⁶. Pero, además, a estos tribunales corresponde la decisión respecto de las actuaciones ejecutivas a que de lugar la ejecución provisional de los pronunciamientos que ordenan la entrega de bienes o derechos que se integran en la

⁵⁸⁴ Como explican DE LA OLIVA SANTOS, A., Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*, *op. cit.*, p. 567, los procesos universales son aquellos procesos en que la actividad jurisdiccional se proyecta sobre un patrimonio, considerado globalmente, y no sobre bienes o derechos patrimoniales concretos.

⁵⁸⁵ Cfr. MASCARELL NAVARRO, M., *Derecho Procesal Civil* —con ORTELLS RAMOS, M., *et al.*—, *op. cit.*, p. 1054.

⁵⁸⁶ A favor de esta posibilidad, *vid.* DÍAZ MARTÍNEZ, M., «Ejecución provisional de la sentencia de calificación culpable del concurso», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 437-449; y, del mismo autor, «Ejecución provisional de la sentencia de calificación culpable del concurso», en *Anuario de derecho concursal*, núm. 15, 2008, pp. 187-201.

masa activa de un concurso de acreedores, aún cuando este proceso de ejecución provisional se haya incoado ante otro órgano jurisdiccional.

En efecto, una vez despachada la ejecución provisional de una sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 568 de la LEC el tribunal que se encuentre conociendo de la misma –de ordinario, un Juzgado de Primera Instancia– suspenderá tal ejecución en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso –tema sobre el que volveremos más adelante (*infra*, cap. VI, apdo. II.1)–, operando en tal supuesto la competencia exclusiva y excluyente del juez del concurso para conocer y dar el tratamiento que corresponda a «toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera sea el órgano que la hubiera ordenado», dispuesta en el artículo 8.3 de la LC⁵⁸⁷.

Junto con la competencia objetiva para el conocimiento de los procesos concursales, los Juzgados de lo Mercantil conocen de una gran variedad de asuntos comerciales, supuestos en los cuales también tienen la competencia funcional para la ejecución provisional de los pronunciamientos de condena contenidos en las sentencias que pronuncien. Con todo, se debe recordar que las sentencias que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial se encuentran expresamente vedadas de la ejecución provisional *ex* artículo 525.1.3ª de la LEC (*supra*, cap. III, apdo. I.4), exclusión que se mantiene cuando es un Juzgado de lo Mercantil el que conoce del proceso sobre la propiedad industrial de conformidad con el artículo 86 ter.2.a) de la LOPJ.

También por razón de la materia los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen competencia objetiva para el conocimiento de determinados asuntos civiles enunciados en el artículo 87 ter.2 de la LOPJ –cuyo texto actual fue fijado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio–, siempre que concurren los requisitos del número tres de la

⁵⁸⁷ Así lo declaró la SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 3 de julio de 2013 (JUR\2013\341482), que concluye señalando que «corresponde, por tanto, al juez del concurso, decidir el tratamiento concursal que corresponde dar a un pronunciamiento judicial que ordena entregar a un tercero bienes o derechos que se han integrado en la masa activa, y cuya ejecución provisional, acordada con anterioridad a la declaración de concurso, fue inmediatamente suspendida por mandato del art. 568 LEC, que, en consonancia con el art. 8.3 y art. 55.2 LC, traslada la competencia al juez del concurso». En igual sentido, *vid.*, SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 18 de septiembre de 2013 (JUR\2013\341653).

misma disposición⁵⁸⁸. Dado que los procesos que son de conocimiento de estos tribunales se refieren al Derecho de familia, las sentencias que por ellos se pronuncien tendrán por regla general naturaleza mero declarativa o constitutiva, las cuales no son susceptibles de ejecución provisional. Por ello, en principio, estos tribunales carecen de la competencia funcional para acordar la efectividad de estas sentencias. Sin embargo, si junto a los pronunciamientos declarativos o constitutivos las sentencias de los Juzgados de Violencia contra la Mujer contienen también pronunciamientos de condenas, es viable la ejecución provisional de estos últimos *ex* artículo 525.1.1ª *in fine* de la LEC [*supra*, cap. III, apdo. I.1.a)], correspondiendo a estos tribunales intervenir en el respectivo proceso de ejecución provisional.

Por otra parte, las leyes procesales confieren competencia objetiva en el orden civil a los Juzgados de Paz, ya no atendiendo a la materia, como en los casos anteriores, sino que por razón de la cuantía. Justamente, precisando el mandato contenido en el artículo 100 de la LOPJ, el artículo 47 de la LEC establece que los Juzgados de Paz conocerán, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que, por razón de la materia, no deban sustanciarse con arreglo al juicio verbal.

No obstante tratarse de una competencia objetiva muy reducida —y que no es exclusiva ni excluyente—⁵⁸⁹, la competencia funcional para despachar la ejecución provisional de las sentencias que pronuncien los Juzgados de Paz era originalmente posible. Sin embargo, tras la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que modificó el artículo 455.1 de la LEC en el sentido

⁵⁸⁸ El artículo 87 ter.3 de la LOPJ prescribe: «Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurren simultáneamente los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo.
- b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.
- c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
- d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género».

⁵⁸⁹ Cfr. DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 389.

de restringir la procedencia del recurso de apelación, declarando inapelables las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros. Puesta esta disposición en relación con el citado artículo 47 de la LEC que precisa la competencia objetiva de estos tribunales, se concluye que las sentencias por ellos pronunciadas son inapelables, razón por la cual no es posible hablar de ejecución provisional de las mismas. De ahí entonces que los Juzgados de Paz carezcan de la competencia funcional que venimos estudiando⁵⁹⁰.

Del mismo modo, carecen de competencia funcional para acordar la ejecución provisional las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, como Salas de lo Civil [art. 73.2 a) y b) LOPJ]; y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (art. 56.2º y 3º LOPJ), toda vez que dichos tribunales actúan por razón del aforamiento como tribunales de única instancia, por lo que no cabe hablar de ejecución provisional de las sentencias pronunciadas por ellos.

II. LAS PARTES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL

En relación con los presupuestos procesales relativos a las partes que intervienen en la ejecución provisional, la LEC sólo se ocupa de la legitimación activa, pues señala expresamente quién puede solicitar el despacho de la misma, sin decir nada sobre la legitimación pasiva o sobre la postulación procesal. Sin embargo, la falta de previsión normativa respecto de tales presupuestos se suple fácilmente con las normas que regulan la ejecución definitiva, toda vez que tales disposiciones se aplican subsidiariamente en sede de ejecución provisional (art. 524.2 LEC).

De este modo, siguiendo lo dispuesto en el artículo 538 de la LEC, las partes de la ejecución provisional son la persona o personas que piden y obtienen el despacho de la misma —que denominaremos indistintamente ejecutante provisional, ejecutante o acreedor—, y la persona o personas frente a las que ésta se despacha —a la que nos referiremos como ejecutado provisional, ejecutado o deudor—.

⁵⁹⁰ En igual sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 48.

En el epígrafe siguiente analizaremos el presupuesto de la legitimación, esto es, quién puede pedir el despacho de la ejecución provisional y contra quien se puede solicitar, pues es en este punto donde la LEC innovó –con acierto– respecto de la legislación anterior, sin perjuicio de referirnos brevemente a la intervención de abogado y procurador en la ejecución provisional, con el objeto de ofrecer una visión completa sobre esta materia.

No abordaremos en este trabajo, sin embargo, la capacidad de las partes en la ejecución provisional, pues no existen especialidades sobre este presupuesto en sede de ejecución ordinaria, ni en lo relativo a la atribución o reconocimiento de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal, ni en lo relativo a su tratamiento procesal⁵⁹¹, de manera que rigen las disposiciones generales contenidas en los artículos 6 y siguientes de la LEC.

1. Legitimación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 526 de la LEC, podrá pedir y obtener el despacho de la ejecución provisional quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en una sentencia de condena.

Se trata de una regla de *legitimación activa* que coincide en términos generales con lo dispuesto en el artículo 538.2 de la LEC para la ejecución ordinaria, por lo que, considerada fuera de contexto, parece una reiteración innecesaria⁵⁹². Sin embargo, si la disposición se analiza teniendo en cuenta tanto la regulación procesal anterior a la vigencia de la LEC, como el desarrollo de la tramitación parlamentaria del proyecto de reforma de la legislación procesal civil, la norma que estudiamos supone un cambio significativo que merece ser destacado.

Según el artículo 385 de la LEC/1881, sólo podía instar el despacho de la ejecución provisional la parte apelada, de manera que la legitimación activa estaba indisolublemente vinculada a la posición de las partes en relación con los recursos

⁵⁹¹ Como enseña ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 728.

⁵⁹² Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 38.

deducidos en contra de la sentencia cuya ejecución provisional se solicitaba. Se trataba, ciertamente, de una regla de legitimación bastante restringida, puesto que operaba únicamente en el supuesto de estimación total de la demanda por la sentencia apelada, quedando fuera del ámbito de esta institución los supuestos de estimación parcial de la demanda o de adhesión a la apelación. Este aspecto de la regulación de la ejecución provisional del régimen anterior a la LEC fue muy criticado por la doctrina⁵⁹³, y generó no pocas dificultades en la práctica⁵⁹⁴.

Por su parte, el texto original del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil presentado al Congreso mantuvo un criterio restrictivo en relación con la legitimación activa⁵⁹⁵, puesto que si bien su artículo 528.2 permitía que la ejecución provisional fuera instada tanto por la parte apelada como por la parte apelante, en este último caso era necesaria la adhesión al recurso por la apelada⁵⁹⁶, lo que evidencia que la legitimación estaba asociada a la posición de las partes en relación con el recurso.

Fue durante la tramitación parlamentaria que prosperó una enmienda al proyecto que terminó con las referencias a la parte apelada, a la parte apelante y a la adhesión a la apelación, fijándose el texto definitivo de la norma sobre legitimación que establece el artículo 526 de la LEC, y que reconoce que puede solicitar el despacho de la ejecución provisional aquella de las partes que haya obtenido un pronunciamiento de condena a su favor, lo que supone un criterio de legitimación activa coherente con su naturaleza

⁵⁹³ Por todos, cfr. Díez-Picazo Giménez, I., «Contribución a la interpretación del régimen general de ejecución provisional de sentencias contenido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 1089-1093.

⁵⁹⁴ Situación de la que dan cuenta, entre otros, Montero Aroca, J. y Flors Matíes, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, pp. 343-344; y Muerza Esparza, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 118-119.

⁵⁹⁵ Ya en el Anteproyecto de LEC se había optado por este criterio, siendo objeto de críticas por parte de la doctrina. Al respecto, *vid.* Caballol Angelats, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», *op. cit.*, pp. 592-593; y, del mismo autor, «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 482-483.

⁵⁹⁶ El artículo 528.2 del proyecto de LEC disponía que «La ejecución provisional podrá solicitarse, en todo caso, por la parte apelada, y también por la apelante, respecto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida que le sean favorables, cuando la parte apelada se haya adherido al recurso impugnando dichos pronunciamientos».

ejecutiva⁵⁹⁷, abandonando la cuestionada relación con la posición procesal de las partes respecto de la impugnación de la sentencia que se quiere ejecutar provisionalmente.

Con estos antecedentes a la vista, la regla contenida en el artículo 526 de la LEC cobra sentido, pues corrige de una de las disfunciones más reiteradas y criticadas del régimen anterior⁵⁹⁸, al permitirse, en definitiva, que pueda solicitar el despacho de la ejecución provisional la parte que ha obtenido un pronunciamiento a su favor en la sentencia, con independencia del lugar que ocupen en la relación jurídico procesal⁵⁹⁹. En consecuencia, la legitimación activa puede ostentarla tanto el actor principal como el demandante reconvenicional, sea que la sentencia estime totalmente la demanda o la reconvenición, en su caso, o que las pretensiones de las partes se estimen parcialmente, y en cualquier caso, sin importar si han recurrido o no la sentencia⁶⁰⁰.

La conclusión anterior no se contrapone a lo dispuesto por el artículo 527.1 de la LEC, que conserva una referencia a la adhesión a la apelación, toda vez que dicho precepto no contiene norma de legitimación alguna, sino que regula la oportunidad para solicitar el despacho de la ejecución provisional de una sentencia⁶⁰¹, como explicaremos más adelante [*infra*, cap. V, apdo. I.2.a)].

Ahora bien, no obstante el acierto que supuso la regulación de la LEC en materia de legitimación activa, la regla del artículo 526 ha sido criticada desde un punto de vista de su ubicación sistemática, toda vez que la referencia a la legitimación debió incluirse en el capítulo relativo a las disposiciones generales que regulan la institución, y no en el capítulo que se refiere a la ejecución provisional de las sentencias de condena dictadas

⁵⁹⁷ En similares términos, cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 38-39.

⁵⁹⁸ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 84.

⁵⁹⁹ MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 120. En el mismo sentido, cfr. AGUILERA MORALES, M., «Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 795.

⁶⁰⁰ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 909.

⁶⁰¹ En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 345; CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 39.

en primera instancia, donde ese encuentra⁶⁰². En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 535 de la LEC esta misma regla resulta aplicable para la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en segunda instancia, previsión que, a nuestro juicio, no resta validez a la tacha antes expuesta.

De lo que se viene explicando, se desprende que lo que determina la legitimación para pedir el despacho de la ejecución provisional no es la actitud de las partes en relación con la impugnación de la sentencia que se quiere ejecutar, esto es, si recurren o no dicha resolución, sino que la legitimación activa viene determinada por el contenido de esa resolución, pues el sujeto que obtiene un pronunciamiento de condena a su favor —de aquellos que son ejecutables provisionalmente—, podrá pedir y obtener la ejecución provisional del mismo⁶⁰³, cualquiera que sea la posición procesal que ocupe en el recurso.

La clave en esta materia, por tanto, la encontramos en la existencia de un pronunciamiento a favor de alguna de las partes⁶⁰⁴, razón por la cual se ha afirmado que «la legitimación para ejecutar provisionalmente una sentencia se le reconoce sin limitaciones a todo aquel que haya obtenido a su favor un pronunciamiento de condena, siendo irrelevante si ha recurrido o no la sentencia»⁶⁰⁵.

Consecuentemente, si la sentencia acoge íntegramente la demanda —principal o reconvenicional— imponiendo un deber de prestación, el actor —nuevamente, principal o reconvenicional— podrá pedir su ejecución provisional. Pero, al mismo tiempo, si la

⁶⁰² En este sentido, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, pp. 87-88; MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 119.

⁶⁰³ Tratándose de la sentencia penal que se pronuncia sobre la responsabilidad civil derivada de un delito, es posible que dicho pronunciamiento beneficie a quien no ha intervenido en el proceso, pues el Ministerio Fiscal tiene legitimación para ejercitar la acción civil *ex delicto* a favor del perjudicado por el mismo. Sin embargo, sólo el beneficiario por el pronunciamiento condenatorio tiene legitimación para instar la ejecución del mismo, sea ordinaria o provisional, y en ningún caso puede el Ministerio Fiscal solicitar el despacho de la ejecución, pues carece de legitimación para ello. Al respecto, *cfr.* RIVES SEVA, J., «Legitimación en la ejecución provisional de la sentencia penal en orden a la responsabilidad civil», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 30, 2006, p. 57.

⁶⁰⁴ Como expresa ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 88, «la legitimación para la ejecución provisional no se condiciona por la posición de la parte que ocupa en el recurso, sino por el hecho de no tener el sujeto ningún pronunciamiento a su favor en la sentencia recurrida».

⁶⁰⁵ AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 3ª), de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\132336).

sentencia sólo estima parcialmente la pretensión y contiene pronunciamientos favorables y contrarios a una o a ambas partes, cualquiera de ellas podrá instar el despacho de la ejecución provisional del pronunciamiento que le favorece, aunque haya recurrido la sentencia en la parte que le perjudica. De ahí que la legitimación pueda corresponder tanto al recurrente como al recurrido⁶⁰⁶.

En este sentido, se ha resuelto que nada impide que la parte que interpuso recurso de apelación contra la sentencia que concede a su favor una pensión de alimentos por una suma inferior a la solicitada, pueda al mismo tiempo instar la ejecución provisional de la misma, «pues no puede sostenerse la argumentación de que el instante de la ejecución no goce a su favor de una resolución favorable y, por ende ejecutable, por cuanto objetivamente lo es en comparación con la sentencia anterior que se ha modificado en este litigio, aun cuando el instante sea a la vez recurrente por sostener que debiera haber sido otra, mucho más favorable»⁶⁰⁷. Y es que «la ejecución provisional no solo compete a la parte que por primera vez ve reconocido un derecho, ni se limita al litigante no recurrente, pues no hay una norma expresa al respecto»⁶⁰⁸. En efecto, como enseña DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «la LEC no pone ninguna cortapisa a que, en casos de vencimiento parcial, se recurra la sentencia respecto de los pronunciamientos desfavorables y, a la vez, se inste su ejecución provisional respecto de los pronunciamientos favorables»⁶⁰⁹.

Respecto de este último supuesto, cabe tener presente que cuando se pide la ejecución de un pronunciamiento que no ha sido impugnado por la contraparte, no estamos en presencia de pronunciamiento firme, pues, según mantenemos en este trabajo [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)], no se admite en el ordenamiento jurídico español

⁶⁰⁶ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 344.

⁶⁰⁷ AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 17 de noviembre de 2004 (JUR\2005\25843).

⁶⁰⁸ *Ibidem*.

⁶⁰⁹ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 370. En igual sentido, *vid.* GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 208; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 344.

la firmeza parcial de una resolución judicial⁶¹⁰. Por lo tanto, impugnado que sea uno solo de los múltiples pronunciamientos que puede contener una sentencia, o por uno sólo de los varios sujetos que pueden intervenir en un determinado proceso –como podría darse en una hipótesis de litisconsorcio–, la sentencia no se encuentra firme, por lo que la efectividad de la misma puede lograrse por los cauces de la ejecución provisional y no de la ejecución ordinaria o definitiva⁶¹¹.

Lo dicho hasta ahora es válido para las sentencias que contienen uno o más pronunciamientos condenatorios. Sin embargo, no sucede lo mismo tratándose de sentencias que no contienen pronunciamiento de condena alguno –presupuesto imprescindible para que pueda ser despachada la ejecución⁶¹²–, pues en estos supuestos ninguna de las partes del proceso podrá demandar la ejecución provisional de la misma, por carecer de legitimación para ello. Y si de todos modos se insta esta ejecución, el tribunal deberá denegar el despacho de la misma *ex* artículo 527.3 de la LEC –como veremos más adelante (*infra*, cap. V, apdo. II.2)–.

Sobre este punto, existen numerosas decisiones judiciales en las que se niega lugar a la solicitud de ejecución provisional por no existir un pronunciamiento de condena favorable al solicitante. Así, por ejemplo, se ha resuelto que la parte demandada condenada carece de legitimación para pedir la ejecución provisional de la sentencia frente a otros codemandados, pues no ha obtenido ningún pronunciamiento de condena a su favor, y ello aunque tenga interés en el cumplimiento del fallo, toda vez

⁶¹⁰ En contra, cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 155, nota 26, para quien «obvio resulta que, aunque la sentencia en su totalidad no sea firme, si lo que se pide es la ejecución de un pronunciamiento que no ha sido recurrido por ninguna de las partes, la ejecución tendrá lugar como “definitiva” y no como “provisional”».

⁶¹¹ En similares términos, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 39.

⁶¹² Así lo expresa el AAP Barcelona (Secc. 12ª), de 12 de junio de 2006 (JUR\2007\10953), confirmando la resolución del tribunal *a quo* que denegó la ejecución provisional de una sentencia de divorcio que no contenía obligación alguna exigible a la parte demandada. Entre otros argumentos, se afirma en este auto que «confunde el recurrente el concepto técnico jurídico procesal de “pronunciamiento a favor”, a efectos de ejecución, con el concepto vulgar de “pronunciamiento favorable”. Y añade luego que «es, ciertamente, absurdo solicitar la ejecución (sea o no provisional), de obligaciones propias, en una especie de autoejecución tautológica, puesto que la recurrente, le basta con cumplir lo que la sentencia apelada ha dispuesto».

que ese posible interés extraprocesal no fue objeto del procedimiento declarativo ni de la sentencia a ejecutar⁶¹³.

Del mismo modo, por no contener pronunciamiento favorable al solicitante, y a título meramente ejemplar, se ha denegado la ejecución provisional de la sentencia que decide la tutela sumaria de obra nueva⁶¹⁴. Por idéntica razón no se ha despachado la ejecución provisional solicitada por la actora reconvenzional respecto de la sentencia que, con estimación de la demanda y rechazo de la reconvencción, declara la vigencia de determinados contratos de compraventa⁶¹⁵.

En resumen, si atendemos a la posición procesal que ocuparon las partes en el proceso declarativo del que trae causa el proceso de ejecución provisional, sólo podrá instar el despacho de esta última el actor o el demandante reconvenzional, pues respecto de ellos la sentencia puede contener un pronunciamiento favorable, y carece en todo caso de legitimación activa el demandado que no reconviene, incluso en los casos en que la sentencia desestime totalmente la demanda y condene en costas al actor. Ello es así, en primer lugar, porque no es lo mismo desde un punto de vista técnico jurídico obtener un resultado favorable que un pronunciamiento de condena a favor⁶¹⁶ y, en

⁶¹³ Como se afirma en el AAP Madrid (Secc. 14ª), de 11 de mayo de 2007 (JUR\2007\210588), «el interés que pudiera albergar la demandada y condenada Autocares Herranz, SL en la ejecución de la sentencia obtenida a su favor por Lidl Supermercados, SA, no fue objeto del procedimiento ni de la sentencia, y no legitiman a la parte condenada a instar la ejecución de lo resuelto, compeliendo a Lidl Supermercados, SA, a ejercitar, contra su voluntad, lo que constituye un derecho de esta entidad».

⁶¹⁴ En el AAP Valencia (Secc. 11ª), de 28 de mayo de 2007 (JUR\2007\260279), se declara que la sentencia que se pronuncia en el proceso de suspensión de obra nueva, no contiene un pronunciamiento de condena a favor del solicitante, «puesto que en sentido estricto la sentencia dictada (folio 72 de la pieza de ejecución provisional), ratifica la decisión inicialmente adoptada al admitir a trámite la demanda de la suspensión de la obra nueva, aún implicando una orden de no hacer, pero no la decide por si misma. Siendo particularidad del juicio verbal de suspensión de la obra nueva el que se adopta la inmediata tutela sumaria de esta clase cuando se admite a trámite la demanda (artículo 441-2º de la LEC), resultando ejecutiva y pudiendo quebrantarse desde ese mismo momento la orden judicial, y siendo factible que se insten las medidas oportunas para salvar esta situación dentro del mismo trámite declarativo que se sigue, correspondiendo actuar en este caso, de forma equivalente a lo que dispone el artículo 710 de la LEC, y sin necesidad, por tanto, de demanda de ejecución provisional de la sentencia, puesto que lo que se debe decidir es si se ha quebrantado la orden comprendida en el auto inicial tal y como se ha ejecutado, y no la sentencia que eventualmente la ratifica».

⁶¹⁵ AAP Valencia (Secc. 7ª), de 11 de septiembre de 2009 (JUR\2009\498772).

⁶¹⁶ En igual sentido, cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 52.

segundo termino, porque los pronunciamientos sobre las costas del proceso no son provisionalmente ejecutables (*supra*, cap. III, apdo. II.1)⁶¹⁷.

No obstante que, como acabamos de ver, la regla general es que la legitimación activa para instar el despacho de la ejecución provisional corresponde a aquel que ha obtenido un pronunciamiento a su favor en la sentencia que se busca ejecutar, existen algunos *supuestos especiales de legitimación activa* en que un sujeto distinto del señalado en la sentencia se encuentra habilitado para solicitar y obtener la ejecución provisional de la misma.

El primer supuesto lo entramos en el artículo 540.1 de la LEC en sede de ejecución definitiva –cuyas normas son aplicables a la ejecución provisional según el tantas veces citado artículo 524.2 de la LEC–, según el cual, tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se encuentra habilitado para solicitar el despacho de la ejecución o para continuar con la ejecución ya iniciada «quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo»⁶¹⁸. Sin embargo, como señalan algunos autores, es difícil que en la práctica tenga aplicación esta hipótesis de legitimación derivativa en un proceso de ejecución provisional, pues este último supone la pendencia de un recurso, por lo que el proceso declarativo del que trae causa la sentencia que se ejecuta, no ha concluido aún⁶¹⁹. De todos modos, si ocurriera algún supuesto de sucesión procesal por muerte (art. 16 LEC) o por transmisión del objeto litigioso (art. 17 LEC) mientras se sustancia el recurso, el sucesor tiene legitimación para instar el despacho de la ejecución provisional de la sentencia de primera o segunda instancia, o para continuar

⁶¹⁷ Como expresa DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 909, el demandado no reconviniendo carece en todo caso de legitimación activa porque no puede tener a su favor pronunciamientos susceptibles de ejecución provisional.

⁶¹⁸ Antes de la reforma, el artículo 540 de la LEC sólo se ocupaba de los supuestos en que la sucesión se producía antes de iniciarse la ejecución. Cfr. CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, *op. cit.*, p. 31.

Esta situación, como explica MARTÍNEZ DE SANTOS, A., «Un proceso de ejecución civil necesitado de reforma», en *Diario La Ley*, núm. 7149, 2009, generó no pocas dificultades prácticas, de las que da cuenta, entre muchos otros, el AAP Valencia (Secc. 6ª), de 20 de mayo de 2014 (ROJ AAP V 138/2014).

⁶¹⁹ En este sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 346.

con la ejecución ya despachada, debiendo acreditar para ello la sucesión (art. 540.2 y 3 LEC).

Otro caso particular de legitimación activa que, a diferencia del anterior, puede tener y tiene mayor incidencia práctica, dice relación con los procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios para la tutela colectiva de sus derechos. Como se sabe, estas asociaciones tienen legitimación extraordinaria –también llamada legitimación indirecta⁶²⁰– para demandar en juicio tanto la defensa de los intereses colectivos que afectan a un grupo determinado o determinables de consumidores o usuarios (art. 11.2 LEC) como la tutela de los intereses difusos⁶²¹, esto es, aquellos intereses que afectan a una pluralidad indeterminada de consumidores o usuarios o de difícil determinación (art. 11.3 LEC)⁶²². En este último supuesto, en caso de estimarse la demanda, la sentencia no podrá contener la determinación individual de los consumidores o usuarios beneficiados por ella, por lo que deberá establecer los datos, características y requisitos necesarios que deben concurrir para que un consumidor pueda instar la ejecución o intervenir en ella si la ha iniciado la respectiva asociación (art. 221.1.1ª.II LEC).

⁶²⁰ Así lo enseña DE LA OLIVA SANTOS, A., *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General* —con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, pp. 447-452.

⁶²¹ La LEC utiliza las voces *interés colectivo* e *interés difuso*, según se encuentren o no determinados los individuos cuyos intereses individuales han sido lesionados. Sin embargo, no son éstas las únicas denominaciones para referirse a este fenómeno, ni tampoco el único criterio para clasificar las diversas clases de tutelas jurídicas que puedan surgir en torno al mismo. Sobre esta cuestión terminológica, entre la abundante bibliografía, cfr. ARMENTA DEU, T., *Acciones colectivas: Reconocimiento, cosa juzgada y ejecución*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 32-34; GONZÁLEZ PILLADO, E., «Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Arts. 6 a 11», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2004, disponible en http://www.indret.com/pdf/232_es.pdf; GIDI, A., *Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2004, pp. 31-33.

⁶²² Tras la reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que modificó el apartado 4 y agregó un apartado 5 al artículo 11 de la LEC, también tienen legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios las entidades habilitadas conforme a la normativa europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de consumidores y usuarios, y el Ministerio Fiscal, para el ejercicio de cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios. Por lo tanto, la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios para la defensa del interés difuso de los mismos no es exclusiva, como sigue diciendo el apartado 3 del artículo 11 de la LEC. Sobre esta reforma, por todos, *vid.* MARCOS FRANCISCO, D., «Nuevas medidas de defensa de los consumidores en materia de acciones colectivas, asistencia jurídica gratuita, costas y tasas judiciales», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2015, disponible en http://www.indret.com/pdf/1181_es.pdf.

De acuerdo con el artículo 519 de la LEC, sólo aquellos consumidores o usuarios a quienes se les ha reconocido la calidad de beneficiarios por la sentencia que acogió la demanda interpuesta para la tutela del interés difuso *ex* artículo 221.1.1ª de la LEC podrán instar su ejecución o intervenir en la ejecución despacha a instancia de la respectiva asociación de consumidores o usuarios. De este modo, los consumidores o usuarios que crean cumplir con los requisitos contenidos tal sentencia deberán solicitar al tribunal competente para la ejecución que, con audiencia del condenado, se les reconozca como beneficiarios de la condena.

En consecuencia, la legitimación de tales consumidores o usuarios para instar la ejecución de la aludida sentencia no viene establecida directamente en el título ejecutivo que se invoca –la sentencia de condena– sino que dicha resolución debe ser complementada por la resolución del tribunal de la ejecución que, en definitiva, reconoce la calidad de beneficiario y habilita para solicitar el despacho de la ejecución o para intervenir en la ejecución previamente iniciada⁶²³. Una vez reconocida esta calidad, los consumidores y usuarios podrán intervenir en la fase de ejecución para proceder a la liquidación de sus daños y perjuicios.

Las reglas que se vienen comentado pueden resultar problemáticas a la hora de aplicarlas en sede de ejecución provisional, existiendo dificultades interpretativas fundamentalmente en torno a dos cuestiones relacionadas con las mismas.

El primer aspecto que resulta controvertido en relación con la ejecución de las sentencias que se dictan en los procesos para la tutela del interés difuso que no determinan individualmente a los beneficiarios de la misma, es si es necesario o no que tal sentencia condenatoria sea firme para que los consumidores o usuarios puedan solicitar que se les reconozca su calidad de beneficiarios *ex* artículo 519 de la LEC. La respuesta a este interrogante es de relevancia para nuestro trabajo, pues de entenderse

⁶²³ En este sentido, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 346.

En contra, *vid.* ARMENTA DEU, T., *Acciones colectivas: Reconocimiento, cosa juzgada y ejecución*, *op. cit.*, p. 103, para quien «la Ley de Enjuiciamiento Civil no legitima en estos casos a los perjudicados individuales para instar el despacho de la ejecución: sólo les legitima para plantear el incidente en el que se les reconozca su condición de posibles beneficiarios de la condena, y ello en el seno de la ejecución ya despachada a instancias bien de la asociación o grupo litigante, bien del Ministerio Fiscal (arts. 221.1.º.II en relación con el art. 519, ambos de la LEC)».

que es necesaria la firmeza de la referida sentencia, no se puede sino concluir que no cabe la ejecución provisional de las sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios.

En relación con el reconocimiento de la calidad de beneficiario regulada en el artículo 519 de la LEC, la Audiencia Provincial de Madrid tiene reiteradamente resuelto que «no puede olvidarse que éste ha sido anudado por el legislador al ejercicio de la acción ejecutiva que dimana de la existencia de un título de tal naturaleza, que, por imperativo legal –artículo 517.2.1º– y su propia esencia, exige el carácter firme de la sentencia de condena. Prueba de ello es que con el testimonio del auto dictado –que tiene carácter de título ejecutivo, se insiste–, los sujetos reconocidos pueden instar la ejecución, de acuerdo con el último inciso del artículo 519»⁶²⁴.

Por esta razón –continúan estas resoluciones–, «no puede deslindarse el reconocimiento de los efectos que con él se relacionan, en concreto, la acción ejecutiva constituida, ya que si el legislador hubiera querido circunscribir esa acción a los efectos del reconocimiento de beneficiario, habría bastado con ubicarla en distinto lugar, esto es, en cualquiera de las fases procesales previas a la sentencia o incluso con posterioridad a la misma, pero no dentro del régimen jurídico de la ejecución forzosa. Tampoco puede servir como argumento el carácter facultativo del término empleado “podrán” instar la ejecución, por ser evidente que, de instarla estando pendiente la firmeza de la sentencia, vulneraría el citado artículo 517, afectando por ende a la más elemental seguridad jurídica precisamente por la complejidad subjetiva y objetiva de estos litigios».

A mayor abundamiento, se afirma que «no escapa a la Sala que el problema por resolver es el momento procesal en el que puede reconocerse la condición de beneficiarios directos de la sentencia, en los supuestos de indeterminación de afectados que no han sido traídos inicialmente a juicio o no se han personado cuando fueron

⁶²⁴ Así lo declara el AAP Madrid (Secc. 11ª), de 11 de marzo de 2004 (AC\2004\531). En el mismo sentido, con referencia al auto que transcribimos, *vid.* AAP Madrid (Secc. 11ª), de 6 de junio de 2005 (JUR\2005\168767); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 16 de junio de 2005 (JUR\2005\173138); AAP Madrid (Secc. 14ª), de 29 de septiembre de 2005 (AC\2005\1849); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de enero de 2006 (JUR\2006\61264); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de enero de 2006 (AC\2006\187); AAP Madrid (Secc. 12ª), de 17 de mayo de 2006 (JUR\2006\187882); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 18 de diciembre de 2006 (AC\2007\876).

llamados. Descartado el trámite del artículo 519 por los anteriores fundamentos, efectivamente, como ya se dijo, el artículo 15.2 permite la intervención en el proceso en cualquier momento, de cualquier consumidor o usuario –per se o representado por la asociación correspondiente–, pero si estamos en el supuesto de haberse ya dictado sentencia, no se le pueden reconocer los efectos en ella determinados, sino sólo su carácter de parte personada o interviniente, con fundamento igualmente en la previsión general del artículo 13». Y a reglón seguido, se agrega que «podría considerarse que existe una laguna legal concerniente al exclusivo reconocimiento de esos efectos, independientemente de la firmeza de esa sentencia, esto es, en el transcurso de tiempo que media desde que fue dictada hasta que adquiere firmeza, en los supuestos de recurso, pero es razonable la falta de regulación de ese mecanismo procesal, ante la incertidumbre jurídica de la confirmación o no, tanto de la acción ejercitada como de los requisitos, datos y características exigibles a los beneficiarios que se acojan a ella, de acuerdo con el artículo 221, lo que haría superflua e inútil una cualitativa y cuantitativa tramitación previa de reconocimientos a título individual o colectivo, caso de modificarse total o parcialmente los pronunciamientos de la sentencia, con una sobrecarga procesal e inseguridad jurídica que no precisan de mayor consideración».

Como se lee, de acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, el procedimiento previsto en el artículo 519 de la LEC exige como presupuesto que la sentencia de condena cuya ejecución se va a interesar haya adquirido firmeza, negando lugar a la ejecución provisional de la misma. Lo anterior no quiere decir que los consumidores o usuarios no pueden intervenir en los procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usurarios para la tutela del interés difuso. Al contrario, dichos sujetos pueden intervenir, pero deben hacerlo en los términos del artículo 15 de la LEC, esto es, sólo mientras se encuentre suspendido el proceso de conformidad con la citada disposición. De este modo, una vez dictada la sentencia en los términos del artículo 221.1.1ª.II de la LEC, el procedimiento previsto en el artículo 519 de la LEC para la extensión de beneficios a terceros que no fueron parte del proceso declarativo exige la firmeza de la sentencia, por lo que sólo podrán solicitar el referido reconocimiento terminada que sea la tramitación de los recursos que se hayan interpuesto en contra de la sentencia que se quiere ejecutar.

Un sector de la doctrina, comparte esta tesis, y entiende que el artículo 519 de la LEC exige la firmeza de la sentencia. En este sentido, algunos autores han expresado que «la especial protección que la ley confiere a los consumidores y usuarios les faculta a mostrarse parte y a obtener individual o colectivamente el reconocimiento de su derecho en la sentencia que se dicte, pero una vez dictada, para obtener la condición de beneficiarios, es necesario que esta adquiera firmeza, instando su reconocimiento y ejecución al amparo de los artículos 517, 519 y 538 de la Ley de Enjuiciamiento Civil»⁶²⁵, esto es, por los cauces de la ejecución ordinaria o definitiva.

No obstante, un importante sector de la doctrina científica participa de la tesis contraria, al entender que el procedimiento previsto en el artículo 519 de la LEC no exige la firmeza de la sentencia dictada en un proceso para la defensa del interés difuso de los consumidores, por lo que nada impide la ejecución provisional de la misma⁶²⁶. En efecto, como señala alguna autora el incidente especial del artículo 519 de la LEC es aplicable «a la eventual ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en materia de protección a los consumidores y usuarios, al no figurar entre las resoluciones no provisionalmente ejecutables enumeradas en el artículo 525 LEC»⁶²⁷.

Por nuestra parte, la pretendida exigencia de firmeza de la sentencia dictada en un proceso promovido por una asociación de consumidores o usuarios no nos parece atendible. Ciertamente, el artículo 519 de la LEC se ubica en sede de ejecución forzosa y está pensado para la ejecución ordinaria, del mismo modo que todos los preceptos del Título I del Libro III del código del ramo, pero ello no puede significar que tales disposiciones no puedan ser compatibles con la ejecución provisional. De ahí que el argumento de la ubicación sistemática del aludido artículo 519 no nos parece suficiente para justificar la exigencia de firmeza de la sentencia que no determina individualmente a los beneficiarios.

⁶²⁵ Así lo entienden MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 348.

⁶²⁶ En este sentido, *vid.* SAN CRISTOBAL REALES, S., «La protección jurisdiccional de los consumidores y usuarios en la ley de enjuiciamiento civil tras las modificaciones introducidas por la ley 39/2002», en *Anuario jurídico y económico escorialense*, núm. 38, 2005, p. 91; ACHÓN BRUNÉN, M., «Despacho de ejecución a favor o contra quien no figura en el título ejecutivo», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 3-4, 2004.

⁶²⁷ LADRÓN TABUENCA, M., «La sentencia y sus efectos en los procesos sobre consumidores y usuarios (y condiciones generales de la contratación)», en *Estudios sobre consumo*, núm. 71, 2004, nota 29.

Por otra parte, las sentencias condenatorias dictadas en los procesos colectivos no están comprendidas en ninguno de los supuestos excluidos del ámbito objetivo de nuestra institución contenidos en el artículo 525 de la LEC, ni siquiera en los casos en que impongan una prestación de hacer. Ciertamente, en este último supuesto la ejecución provisional del pronunciamiento de condena puede generar problemas a la hora de reponer la situación anterior en caso de revocación de la sentencia. Sin embargo, se trata de un riesgo que se encuentra presente en toda ejecución provisional, pero el ordenamiento jurídico establece un mecanismo especial para conjurar este peligro: la oposición a la ejecución provisional.

Por lo anterior, somos del parecer que el consumidor que reúna las características exigidas por la sentencia *ex* artículo 221.1.1ª.II de la LEC no debe esperar a que dicha resolución adquiera firmeza para solicitar el reconocimiento de su calidad de beneficiario, siendo perfectamente posible que promueva el incidente especial del artículo 519 de la LEC mientras se sustancia el recurso interpuesto contra la sentencia. Y reconocida que sea dicha calidad, podrá instar la ejecución provisional de la sentencia⁶²⁸.

Otro interrogante que se plantea es si la legitimación extraordinaria de las asociaciones de consumidores y usuarios para la tutela de los intereses difusos les habilita también para instar la ejecución –provisional o definitiva– de la sentencia que estima la demanda⁶²⁹, o si, por el contrario, sólo los consumidores o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones fijadas en la misma podrán solicitar el despacho de la ejecución, previo reconocimiento de su condición de beneficiarios por la sentencia, sin perjuicio de la legitimación que reconoce expresamente la ley al Ministerio Fiscal (art. 519 *in fine* LEC).

⁶²⁸ A igual conclusión arriba BUJOSA VADELL, L., «Ejecución procesal y derechos difusos y colectivos: Problemas actuales», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 334, quien afirma que «los derechos afectados en estos supuestos merecen la misma protección que los ordinarios por eso no encontramos ninguna razón de peso para evitar el inicio de los trámites de la ejecución antes de la sentencia firme. De hecho, así se prevé en textos relevantes como el artículo 19 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica».

⁶²⁹ Tratándose de sentencias pronunciadas en procesos promovidos por estas asociaciones en defensa del interés colectivo de consumidores y usuarios, resulta pacífico que su ejecución puede ser instadas por la propia ejecución, como da cuenta el AAP Madrid (Secc. 28ª), de 11 de mayo de 2012 (vLex-400884602), en que no fue cuestionada la legitimación de la asociación ejecutante.

En otros términos, cabe preguntarse si el artículo 519 de la LEC sólo confiere legitimación activa para demandar la ejecución de las sentencias en los casos del artículo 221.1.1ª de la LEC a los consumidores o usuarios que han obtenido el reconocimiento de su calidad de beneficiarios de acuerdo al procedimiento disciplinado en la misma norma o, más bien, se trata de un mecanismo por el cual se garantiza que los consumidores o usuarios puedan intervenir en la ejecución que los favorece, pero que no excluye que la propia asociación que promovió el proceso declarativo previo pueda también instar el despacho de la ejecución de la sentencia que acogió la demanda interpuesta por ella para la defensa del interés difuso, precisamente, al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo *in fine* de la regla primera del apartado 1 del artículo 221 de la LEC.

Ciertamente, se trata de un tema que excede con creces el objeto de nuestro trabajo y respecto del cual no hay respuestas unánimes ni menos concluyentes. Como vimos, el artículo 221.1.1ª.II de la LEC confiere expresamente legitimación a las asociaciones de consumidores o usuarios para instar la ejecución de la sentencia de condena dictada en el proceso declarativo cuando la determinación individual de los beneficiarios no haya sido posible –regla que ha sido calificada de anómala⁶³⁰–, lo que ocurrirá indefectiblemente en los casos en que se tutelen intereses difusos de consumidores o usuarios –dada la naturaleza de los mismos–, pero que puede ocurrir también en un proceso en que se tutelan intereses colectivos. Sin embargo, atendido que no siempre puede considerarse a la asociación misma como beneficiaria de la sentencia, se puede cuestionar su legitimación para instar el despacho de la misma⁶³¹.

En efecto, un auto del Juzgado de Primera Instancia de Madrid⁶³², resolviendo el trámite de la oposición a la ejecución provisional acordada respecto de una sentencia dictada en un procedimiento declarativo promovido a instancia de una asociación de

⁶³⁰ En opinión de MARÍN LÓPEZ, J., «Las acciones de clase en el derecho español», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2001, disponible en http://www.indret.com/pdf/057_es.pdf, la actividad ejecutiva referida a las acciones de clase debería haberse reservado exclusivamente a los perjudicados.

⁶³¹ Cfr. BACHMAIER WINTER, L., «La tutela de los derechos e intereses colectivos de consumidores y usuarios en el proceso civil español», en AVILA ORDÓÑEZ, M. y CORREDORES LEDESMA, M. (Editoras), *Los derechos colectivos. Hacia su efectiva comprensión y protección*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2009, p. 348.

⁶³² AJPI Madrid (núm. 50), de 20 de diciembre de 2001 (AC\2002\109).

consumidores y usuarios, estableció que dicha asociación–ejecutante carecía de legitimación activa para instar la ejecución provisional de la citada sentencia respecto del pronunciamiento que condenó a la ejecutada a eliminar una condición general de la contratación, pues dicho pronunciamiento no favorece a la asociación, sino que favorece a cada uno de los consumidores que pactó con la demandada y cuyos contratos contienen la condición general de contratación cuya nulidad fue declarada. Sin embargo, el mismo auto declaró que la asociación sí tiene legitimación activa para solicitar el despacho de la ejecución provisional de la sentencia en cuestión en la parte que condena a la entidad ejecutada a abstenerse de utilizar la condición general de la contratación cuya nulidad fue declarada.

En similares términos, la Audiencia Provincial de Barcelona⁶³³ tiene declarado que las asociaciones de consumidores y usuarios no tienen legitimación para instar la ejecución provisional de una sentencia respecto del pronunciamiento que condena a una entidad bancaria a devolver a los afectados por una condición general de la contratación cuya nulidad ha sido declarada, por que dicho pronunciamiento no les favorece y, además, porque son los consumidores afectados quienes deben promover esa ejecución, pero reconocimiento de su calidad de beneficiarios, *ex* artículo 519 de la LEC. Sin embargo, según la misma resolución que comentamos, se establece que las asociaciones se encuentran habilitadas para solicitar el despacho de la ejecución provisional del pronunciamiento que condena a la demandada a abstenerse de usar la condición general de la contratación declarada nula, pues esa legitimación es una consecuencia necesaria de la acción de cesación.

Las resoluciones comentadas –expresivas de la falta de claridad que ofrece la LEC sobre el interrogante que planteamos– resuelven el asunto haciendo una distinción que carece de base legal, y que no podemos compartir, pues el artículo 221 se refiere a toda clase de condenas, dinerarias y no dinerarias, sin limitar la referencia a la legitimación de las asociaciones de consumidores o usuarios a las condenas de no hacer.

Admitiendo que la cuestión es discutible, entendemos que en los procesos promovidos para la tutela de los intereses difusos, debe reconocerse la legitimación para

⁶³³ AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 23 de junio de 2005 (JUR\2006\233021).

instar la ejecución a la asociación de consumidores y usuarios demandante⁶³⁴, sea que se trate de una condena al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por los consumidores, sea que se trate de una condena de no hacer —como sucede cuando se estima la acción de cesación—⁶³⁵, pues la regla contenida en el artículo 527.3 de la LEC que exige como presupuesto para el despacho de la ejecución provisional que la sentencia contenga un pronunciamiento favorable al solicitante, debe ser interpretada de forma coherente con las normas sobre legitimación indirecta prescritas en la legislación procesal civil⁶³⁶.

Y encontrándose las asociaciones de consumidores y usuarios habilitadas para instar la ejecución ordinaria de la sentencia dictada en estos procesos, nada impide que puedan también solicitar el despacho de la ejecución provisional de la misma, lo cual se entiende sin perjuicio del derecho de la parte ejecutada a oponerse a la ejecución ya iniciada.

Analizadas las distintas reglas sobre legitimación activa que están en juego en la ejecución provisional, resta por revisar ahora la *legitimación pasiva* en nuestra institución, vale decir, contra quien debe despacharse válidamente la ejecución provisional de una sentencia.

Al respecto, conviene comenzar por advertir que el legislador no hace referencia alguna a esta materia dentro del capítulo relativo a la ejecución provisional, por lo que se ha entendido que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 524.2 de la LEC, rigen las normas de la ejecución ordinaria. Por lo tanto, siguiendo la regla general en materia de legitimación pasiva para los procesos de ejecución, la ejecución provisional deberá

⁶³⁴ Según BELLIDO PENADÉS, R., «La protección de los consumidores en el proceso civil», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 23, 2011, las asociaciones de consumidores y usuarios tienen legitimación para instar la ejecución, pero es necesario que previamente se haya reconocido a los consumidores que son beneficiarios de la sentencia que se quiere ejecutar, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 519 de la LEC.

⁶³⁵ Con este alcance, cfr. BUJOSA VADELL, L., «Ejecución procesal y derechos difusos y colectivos: Problemas actuales», *op. cit.*, p. 330.

⁶³⁶ En igual sentido, *vid.* BACHMAIER WINTER, L., «Ejecución provisional de sentencia que anula y ordena eliminar una condición general de la contratación», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 2, 2003, pp. 82-83.

despacharse frente a quien aparezca como deudor en el título (art. 538.2.1º LEC), esto, la persona que resulte condenada por la resolución judicial⁶³⁷.

Sin embargo, la ejecución también puede dirigirse frente a sujetos que no están nominalmente designados en el título. Se trata de *supuestos especiales de legitimación pasiva* regulados para la ejecución ordinaria en los numerales 2º y 3º del apartado 2 del artículo 538, y en los artículos 540 a 544, todos de la LEC⁶³⁸.

Con todo, tales supuestos no son del todo coincidentes con los que puedan darse en la ejecución provisional⁶³⁹, y pueden originar alguna dificultad práctica⁶⁴⁰. Precisamente por tratarse de una ejecución con base en un título judicial que supone la pendencia de un recurso en contra de la sentencia, difícilmente podrán darse casos en que la ejecución provisional se despache frente a un sujeto que no haya intervenido como parte en el proceso declarativo del que trae causa, salvo hipótesis de sucesión procesal.

En cualquier caso, si se llega a despachar la ejecución provisional frente a un sujeto que no es el condenado por la sentencia cuya eficacia se persigue, tal sujeto tendrá la calidad de parte ejecutada en el proceso de ejecución (art. 538.1 LEC), y dispondrá de los mismos mecanismos de defensa que la ley otorga al sujeto pasivo de la actividad ejecutiva, quedando a salvo su derecho a alegar su propia falta de legitimación al oponerse a la ejecución provisional, según analizaremos más adelante.

2. Postulación procesal

Como adelantamos, la LEC no contempla ninguna disposición sobre la postulación procesal en el Título relativo a la ejecución provisional, omisión que puede

⁶³⁷ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 208.

⁶³⁸ Según GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 55-56, el apartado 2 del artículo 529 de la LEC se refiere a estos supuestos al decir que del escrito de oposición a la ejecución se dará traslado «a quienes estuvieren personados en la ejecución provisional».

⁶³⁹ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 350.

⁶⁴⁰ ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 89.

ser colmada, de conformidad con lo previsto en el artículo 524.2 de la LEC, aplicando supletoriamente el primer párrafo del apartado 1 del artículo 539 de la LEC relativo a la representación y defensa de las partes en la ejecución definitiva⁶⁴¹.

Así, de acuerdo con la citada disposición, el ejecutante y el ejecutado provisionales deberán ser defendidas por abogado y representadas por procurador, salvo que se trate de la ejecución provisional de una resolución dictada en un proceso en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales, esto es, cuando se pretende ejecutar provisionalmente una sentencia pronunciada en un juicio verbal cuya determinación se haya hecho por razón de la cuantía y la misma no exceda de 2.000 euros (arts. 23.2 y 31.2 LEC).

Al respecto, conviene precisar que «el criterio legal determinante para la obligatoriedad de la postulación y defensa no es, por tanto, la cuantía por la que finalmente se tenga despachar ejecución sino la naturaleza preceptiva o no de la intervención de letrado y procurador en fase declarativa»⁶⁴².

Por último, no está demás señalar que, atendido que nuestra institución supone la existencia de un proceso declarativo que se encuentra en tramitación –precisamente porque se ha impugnado la sentencia que contiene un pronunciamiento de condena en contra de alguna de las partes del juicio–, lo normal será que los mismos profesionales que intervienen tanto en dicho juicio como en el correspondiente recurso sean los que defiendan y representen a las partes, respectivamente, en las actuaciones relativas a la ejecución provisional.

⁶⁴¹ En el mismo sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 55; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 351; GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 208.

⁶⁴² Así lo declara el AAP Palma de Mallorca (Secc.3ª), de 17 de febrero de 2009 (vLex-57277433), con base a lo cual establece que «la presente ejecución proviene de un juicio ordinario en el que, por aplicación de lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es obligatoria la representación por procurador y la asistencia técnica de letrado. En consecuencia, deberá considerarse igualmente preceptiva su intervención en fase de ejecución aunque la cantidad por la que ésta se despache, en virtud de los avatares antes narrados, sea inferior a los 900 € que harían superflua la representación y dirección técnicas solo en el caso de que se iniciase un juicio declarativo, pero no cuando ya nos hallamos en un proceso de ejecución».

III. LOS TERCEROS EN LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

En un proceso de ejecución es posible que existan sujetos distintos de las partes principales, cuyos derechos o intereses pueden verse amenazados por el mismo, y a los que la ley permite intervenir en defensa de tales derechos o intereses⁶⁴³, sin perjuicio de la intervención de sujetos que no tienen otro interés que el de adquirir los bienes embargados⁶⁴⁴. Estos sujetos se conocen genéricamente como terceros.

Como ha destacado la doctrina, no resulta sencillo ofrecer un concepto de tercero para el proceso de ejecución⁶⁴⁵. Al contrario, se trata más bien de un tema polémico, que en parte obedece a que en la LC no existe precepto alguno que señale qué debe entender por tercero en sede de ejecución, en términos similares a lo prescrito en su artículo 13 para el proceso de declaración.

En términos generales, se puede definir al tercero como aquel sujeto que no ha pretendido el despacho de ejecución, ni se halla sujeto a la ejecución⁶⁴⁶. Con mayor precisión, se ha conceptualizado al tercero en el proceso de ejecución como «el sujeto ajeno a dicho proceso, que tiene interés en participar en el mismo, al afectarle las actuaciones que se llevan a cabo en él»⁶⁴⁷.

La LEC se refiere a distintos supuestos en que el proceso de ejecución puede afectar a un tercero, y dispone de diversos procedimientos o mecanismos para que tales terceros pueda intervenir a fin de defender sus derechos o intereses amenazados o conculcados. En términos generales, los terceros cuyos bienes se vean afectados por una ejecución que no ha sido despachada frente a ellos, podrán utilizar los mismos medios de defensa que la ley confiere al ejecutado (art. 538.3 LEC).

⁶⁴³ Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y Díez-Picazo Giménez, I.—, *op. cit.*, p. 449.

⁶⁴⁴ Como precisa MORENO CATENA, V., *Tomo IV. La ejecución forzosa*, *op. cit.*, p. 55, refiriéndose a los licitadores o postores de la subasta.

⁶⁴⁵ Por todos, *vid.* MORAL MORO, M., «Intervención de los terceros en el proceso de ejecución», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 41, 2017.

⁶⁴⁶ ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 726.

⁶⁴⁷ CANO FERNÁNDEZ, S., *Los terceros en el proceso de ejecución*, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 83.

Si bien no encontramos ninguna referencia a los terceros en sede de ejecución provisional, es claro que los terceros cuyos derechos o intereses se vean afectados por la actividad ejecutiva que se desarrolla, podrán intervenir del mismo modo y a través de idénticos mecanismos de protección contemplados para la ejecución ordinaria de una sentencia (art. 524.2 LEC)⁶⁴⁸, aun cuando los concretos actos ejecutivos que le afecten estén sujetos a la confirmación de la resolución provisionalmente ejecutada.

De este modo, no existiendo reglas particulares para la defensa de los derechos e intereses de los terceros que pueden intervenir durante la ejecución provisional de una sentencia de condena, resulta innecesario desarrollar las reglas generales aplicables al efecto.

⁶⁴⁸ En el mismo sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 43-44.

CAPÍTULO V

SOLICITUD Y DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. INICIO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PROVISIONAL

La ejecución provisional, al igual que la ejecución definitiva, se inicia a instancia de parte, y nunca de oficio por el juez, pues, como toda ejecución forzosa, se rige por el principio dispositivo.

Como vimos en el apartado anterior, los sujetos legitimados para instar la ejecución provisional son aquellos que hayan obtenido un pronunciamiento a su favor por la sentencia que será objeto de la actividad ejecutiva. Sin embargo, no es obligatorio para la parte habilitada para ello ejercitar la acción ejecutiva para que se despache la ejecución provisional de una resolución judicial. En efecto, el instar o no la ejecución provisional de una sentencia condenatoria constituye un derecho potestativo del litigante en cuyo favor se dictó la sentencia recurrida⁶⁴⁹.

Ahora bien, si se opta por la ejecución provisional, el ejecutante puede instar el despacho de todos los pronunciamientos de condena que le favorezcan, o limitarse a solicitar la ejecución de alguno o algunos de tales pronunciamientos, dejando fuera de su petición pronunciamientos que también le favorecen⁶⁵⁰. No exige la ley procesal, por

⁶⁴⁹ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 208.

⁶⁵⁰ Como acertadamente precisa CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 41.

tanto, que se promueva la ejecución provisional de la sentencia de condena en su integridad.

En suma, la presentación de la demanda de ejecución provisional es una decisión que corresponde en exclusiva a la parte legitimada para ello, y el ejercicio de este derecho en un caso concreto dependerá de una decisión estratégica del litigante favorecido por la ejecución, que pueda estar condicionada, entre otros factores, por la naturaleza de la prestación impuesta al demandado, y por su propia capacidad económica para hacer frente a una eventual ejecución dirigida contra el propio solicitante en caso de revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada⁶⁵¹.

En este punto, y sin perjuicio de lo que diremos en el apartado siguiente, conviene dejar en claro que el título ejecutivo que sirve de base a la ejecución provisional es la resolución –sentencia o auto– que contiene un pronunciamiento de condena a favor del solicitante y que ha sido recurrida. En el modelo español de ejecución provisional es la propia ley la que confiere mérito ejecutivo a la resolución objeto de esta actividad ejecutiva, sin que sea necesario que el juez emita una resolución judicial en tal sentido⁶⁵². Como veremos en el apartado siguiente, interpuesta la demanda de ejecución provisional, el tribunal tiene el deber de despacharla, salvo que se trate de una resolución excluida del ámbito objetivo de nuestra institución o que la misma no contuviere pronunciamiento de condena alguno en favor del solicitante (art. 527.3 LEC), de ahí que no sea necesario pedir primero que se confiera fuerza ejecutiva a la resolución, para posteriormente instar el despacho de la misma⁶⁵³. En la demanda ejecutiva se insta directamente la ejecución provisional⁶⁵⁴.

⁶⁵¹ Como explican MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 355, la presentación de la demanda «dependerá, en definitiva, de la voluntad del favorecido por el pronunciamiento condenatorio, quien habrá de decidir en cada caso, conforme a su interés y a los principios de oportunidad y dispositivo, si insta o no la ejecución provisional».

⁶⁵² Por todos, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 109, quien explica que «dictada por el órgano jurisdiccional una sentencia de condena de primera instancia, ésta constituye un título, en virtud del cual, por una parte, quien obtuvo un pronunciamiento a su favor (art. 526) tiene derecho a instar la ejecución y a que ésta se ponga en marcha (art. 527); por otro, el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia (art. 524.2) tiene el deber de despachar la ejecución y realizar, con carácter general, los actos propios de esta». Ciertamente, lo dicho respecto de la sentencia de primera instancia es válido también para las sentencias de segunda instancia.

⁶⁵³ En contra de esta explicación, y de forma absolutamente aislada, se ha afirmado que la sentencia no firme no es por sí sola título ejecutivo, y que al momento de despacharse la ejecución

Aclarado que la ejecución provisional se sustanciará siempre a instancia de parte, revisaremos en los apartados siguientes las especialidades dispuestas en la LEC respecto de esta petición, tanto de sentencias de primera como de segunda instancia.

1. Forma y contenido del acto de petición

De acuerdo con el artículo 524.1 de la LEC, la ejecución provisional se instará por demanda o simple solicitud, remitiéndose al artículo 549 de la LEC, que se refiere a la forma de iniciar el proceso de ejecución ordinaria o definitiva.

Según el texto original del artículo 524.1 de la LEC, la solicitud de ejecución provisional debía adoptar necesariamente la forma de demanda ejecutiva, por lo que tenía que reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 549 de la LEC⁶⁵⁵. Sin embargo, la propia disposición se remitía al artículo 549 de la LEC, norma que en su apartado 2 establecía, en su redacción original, que «cuando el título ejecutivo sea una sentencia o resolución dictada por el tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda». Pues bien, atendida la naturaleza judicial del título ejecutivo en que se basa la petición de ejecución provisional –sentencia o auto que contiene un pronunciamiento de condena–, se podía entender que el citado artículo 549.2 de la LEC era aplicable también en sede de ejecución provisional, y así lo hizo alguna resolución⁶⁵⁶.

provisional, se emiten dos pronunciamientos por parte del tribunal: uno que declara que una determinada sentencia es provisionalmente ejecutable, convirtiéndola en título ejecutivo; y otro que ordena el despacho de la ejecución. Sobre este razonamiento, que no podemos compartir, cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., pp. 150-151.

⁶⁵⁴ Cfr. CÁMARA RUIZ, J., *Derecho Procesal Civil* —con ORTELLS RAMOS, M., et al.—, op. cit., p. 924.

⁶⁵⁵ Por todos, cfr. Díez-Picazo Giménez, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 904; Armenta Deu, T., *La ejecución provisional*, op. cit., pp. 102-103.

⁶⁵⁶ Según el AAP Valencia (Secc. 6ª), de 17 de mayo de 2003 (JUR\2003\172050), «el inicio de la ejecución provisional se verifica por demanda cuyo contenido podrá limitarse a solicitar, conforme al apartado 2 del artículo 549 de la LEC, que se despache la ejecución identificando la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda».

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación civil para la implantación de la nueva Oficina judicial⁶⁵⁷, modificó el artículo 524.1 de la LEC, otorgándole su redacción actual, según la cual, como enunciamos al principio de este epígrafe, la ejecución provisional puede instarse por demanda o por simple solicitud, por lo que ya no cabe duda de que el apartado 2 del artículo 549 de la LEC es aplicable al acto de iniciación de nuestra institución.

Adviértase que lo anterior no quiere decir que para la ejecución de resoluciones procesales o judiciales pueda instarse la ejecución por un medio distinto de la demanda ejecutiva, como sugiere el tenor literal del artículo 524.1 de la LEC, toda ejecución –provisional o definitiva–, debe comenzar por demanda del ejecutante. En efecto, la referencia a la «simple solicitud» contenida en la disposición que comentamos, lo que hace es simplificar los requisitos de la demanda ejecutiva en los casos en que tiene aplicación, en los mismos términos que la regla del artículo 549.2 de la LEC lo hace para la ejecución ordinaria⁶⁵⁸. Con todo, se ha entendido también que, en realidad, la única especialidad de la denominada «solicitud» de ejecución consiste en que no será necesario acompañar el título en que se basa, pues el mismo –la resolución procesal o judicial– ya obrará en las actuaciones o constará en el libro de sentencias, pero la demanda ejecutiva deberá reunir siempre los requisitos del artículo 549.1 de la LEC⁶⁵⁹.

En cualquier caso, lo que importa destacar ahora es que la decisión entre formalizar la petición de ejecución provisional por medio de demanda completa o mediante demanda simplificada queda entregada enteramente al ejecutante, y que la opción por la forma simplificada de la demanda sólo le será útil si, para determinar el alcance subjetivo y objetivo de su pretensión, le basta con hacer una remisión al deber

⁶⁵⁷ Para una revisión ordena del impacto de la reforma de 2009 en la regulación de la ejecución provisional, *vid.* BOTICARIO GALAVÍS, M., «La ejecución provisional civil tras la reforma operada por la Ley 13/2009», en *Práctica de Tribunales*, núm. 81, 2011.

⁶⁵⁸ Como explica VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* — con DE LA OLIVA SANTOS, A. y Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 452, el contenido de la demanda ejecutiva en caso de ejecución de resoluciones judiciales se simplifica, «pues basta que se incluya: (i) la solicitud del despacho de la ejecución y (ii) la identificación de la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda (art. 549.2 LEC)».

⁶⁵⁹ En este sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 358; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 101-102.

de prestación que impone la sentencia⁶⁶⁰. Aunque en la práctica, como indica algún autor, viene siendo habitual que la petición del ejecutante adopte la forma de demanda en sentido estricto, pues ello le permite incluir las peticiones complementarias del artículo 549.1 de la LEC, que son de incuestionable utilidad para el desarrollo de la actividad ejecutiva⁶⁶¹.

En suma, al no existir reglas especiales en sede de ejecución provisional sobre el contenido de la demanda ejecutiva, la misma deberá contener los requisitos específicos del artículo 549.1 de la LEC, complementados por los requisitos contenidos en el artículo 399 de la LEC para la demanda en el juicio ordinario, de aplicación supletoria en el proceso de ejecución. De este modo, la demanda hará referencia a los siguientes extremos: *a)* la designación del tribunal competente, con arreglo al criterio de competencia funcional del artículo 524.2 de la LEC; *b)* la individualización de las partes y la identificación del procurador y abogado del ejecutante (art. 399.2 y 3 LEC), la individualización de la parte ejecutada se hará según lo dispuesto en el artículo 549.1.5º de la LEC; *c)* fundamentos de hecho y de derecho en que se basa (art. 399.3 y 4 LEC); *d)* título ejecutivo en que se funda (art. 549.1.1º LEC), que no es otro que la resolución objeto de la ejecución provisional; *e)* la tutela ejecutiva que se pretende (art. 549.1.2º LEC); *f)* los bienes del ejecutado susceptible de embargo de los que tuviere conocimiento en el ejecutante (art. 546.1.3º LEC); y *g)* en su caso, las medidas de localización en investigación que interese (art. 546.1.4º LEC).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 524.2 de la LEC, que se remite a las reglas generales previstas para la ejecución ordinaria o definitiva, en la demanda de ejecución provisional deberán acompañarse los documentos señalados en el artículo 550 de la LEC. La aplicación de tal disposición en sede de ejecución provisional merece dos comentarios. En primer lugar, no es necesario acompañar el título ejecutivo, pues el mismo está constituido por la sentencia o el auto que se pretende ejecutar, y tal resolución consta en los autos (art. 550.1.1º.I LEC).

⁶⁶⁰ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, op. cit., p. 743.

⁶⁶¹ CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, op. cit., p. 51.

En segundo término, debe tenerse presente que, en principio, no será necesario acompañar el poder otorgado al procurador, pues el mismo constará en los autos (art. 550.1.2º LEC). Sin embargo, hay supuestos en que será necesario acreditar la representación procesal, precisamente, porque la misma no consta en las actuaciones, a saber: cuando se solicita la ejecución provisional de una sentencia de primera instancia después de remitidos los antecedentes al órgano que conocerá del recurso de apelación; cuando se solicita la ejecución provisional de una sentencia dictada en segunda instancia; cuando quien pide la ejecución provisional no intervino en el proceso declarativo que le trae causa, como ocurre en los casos de sucesión procesal; y, obviamente, en caso de que exista cambio de procurador⁶⁶².

En estrecha relación con la oportunidad en que se insta el despacho de la ejecución provisional –tema que analizaremos en el epígrafe siguiente– el ejecutante puede tener la carga de acompañar ciertos *testimonios* en su demanda ejecutiva. En efecto, cuando se trate de la ejecución provisional de resoluciones de primera instancia, el ejecutante deberá obtener testimonio de lo que sea necesario para la ejecución, y adjuntar tal testimonio a su solicitud, siempre que la misma se presente después de remitirse los autos al órgano que conocerá del recurso de apelación⁶⁶³. En cambio, si se insta el despacho de la ejecución provisional antes de la remisión de los autos, corresponde al secretario judicial expedir el testimonio antes de efectuar la remisión (art. 527.2 LEC)⁶⁶⁴, sin que recaiga sobre el solicitante carga procesal alguna. Como se observa, la LEC traslada el contenido de su artículo 463, relativo a la remisión de los autos en el recurso de apelación, al artículo 527.2 en términos prácticamente idénticos, previendo las posibles incidencias que con motivo de la tramitación del recurso de apelación podrían producirse sobre la ejecución provisional⁶⁶⁵.

⁶⁶² Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 361.

⁶⁶³ Sobre la exigencia de este testimonio, se tiene declarado que si el ejecutante acompaña junto a su demanda de ejecución el testimonio expedido por el propio juzgado de la demanda que constituía el título ejecutivo, «en modo alguno es exigible que solicite otro al tribunal competente para resolver la apelación». Cfr. AAP Orense (Secc. 1ª), de 12 de febrero de 2015 (vLex-583698678).

⁶⁶⁴ La Ley 13/2009 atribuyó esta función al secretario judicial. En su redacción original, el artículo 527.2.II de la LEC disponía que el mismo tribunal expediría el testimonio.

⁶⁶⁵ En este sentido, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 126-127.

Por su parte, si lo que se pretende ejecutar es una resolución dictada en segunda instancia, el ejecutante provisional tiene siempre la carga de acompañar un certificado de la sentencia cuya ejecución se pretende y testimonio de cuanto sea necesario para la ejecución, exigencia que se justifica porque los autos no obran en poder del tribunal que conocerá de la ejecución provisional⁶⁶⁶. Tanto el certificado como el testimonio se obtendrán del tribunal que pronunció la sentencia de segunda instancia o, en su caso, del órgano que conocerá del recurso de casación o extraordinario por infracción procesal (art. 535.2.II LEC), lo que dependerá, una vez más, del momento en que se formula la solicitud de ejecución provisional: antes o después de que se hayan remitido los autos al Tribunal Supremo.

En ambos casos, la falta de aportación de los testimonios y certificados, en su caso, han de entenderse como defectos subsanables de demanda ejecutiva.

Finalmente, la doctrina científica ha discutido si la excepción al sistema de traslado de copias prevista en el apartado 4 del artículo 276 de la LEC⁶⁶⁷ comprende o no a la demanda de ejecución provisional, polémica de innegable impacto en la práctica. Al respecto, algunos autores sostienen que si bien la ejecución provisional se inicia por demanda *ex* artículo 524.1 de la LEC, lo que podría llevar a pensar que cabe dentro de la excepción que comentamos, no puede olvidarse que esta institución supone la pendencia de un recurso que incide sobre una sentencia pronunciada en un proceso declarativo en el que las partes están representadas por apoderado y defendidas por letrado, por lo que el sistema de traslado de copias previsto en los apartados 1 a 3 del artículo 276 de la LEC es plenamente aplicable a la ejecución provisional⁶⁶⁸. Por lo demás, lo que verdaderamente hace el artículo 276 de la LEC a la hora de determinar el régimen de traslado aplicable es distinguir entre partes que actúan representadas por procurador de aquellos que no lo hacen. Así, en el primer supuesto, el traslado se hace

⁶⁶⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 926-927.

⁶⁶⁷ Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que confiere la redacción actual del artículo 276, el antiguo apartado 3 pasó a ser el apartado 4, sin sufrir alteración en cuanto a su contenido, por lo que las opiniones expresadas con anterioridad a la modificación del precepto mantienen su vigencia.

⁶⁶⁸ Comparte esta interpretación, entre otros, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 209.

entre procuradores; y en el segundo, el traslado lo hace el tribunal⁶⁶⁹. De ahí que en la ejecución provisional, donde la intervención de procurador y abogado es preceptiva (*supra*, cap. IV, apdo. II.2), rige el sistema de traslado entre procuradores⁶⁷⁰.

Otros autores, en cambio, sostienen que la petición inicial de ejecución provisional es una verdadera demanda, por lo que no será necesario que el procurador del ejecutante de traslado de la demanda al procurador de la parte ejecutada, por aplicación del citado apartado 4 del artículo 276 de al LEC. En esta línea, como expresa algún autor⁶⁷¹, abona a la tesis de la inaplicabilidad del sistema de traslado previsto en el artículo 276 de la LEC lo dispuesto con carácter general en el artículo 553 del código del ramo, esto es, tanto para la ejecución de títulos judiciales como de títulos extrajudiciales, que prescribe que la resolución que despache la ejecución será notificada al ejecutado y, en su caso, al procurador que le represente. Pues bien, si el traslado entre procurador fuera exigible a la demanda ejecutiva, expresa este autor que no se observa ninguna utilidad a esta notificación.

Expuesto sucintamente el problema y las posturas doctrinales existentes que, como se ve, se proyectan tanto a la ejecución ordinaria como a la ejecución provisional, nos parece que debe prevalecer la segunda de las tesis expuestas, por varias razones. En primer lugar, el artículo 276 de la LEC, que tiene aplicación cuando las partes están representadas por procurador, se refiere al traslado de copias y escritos en general, y su apartado 4 exceptúa expresamente de su ámbito de aplicación «el traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda originar la primera comparecencia en

⁶⁶⁹ En este sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, pp. 362-364.

⁶⁷⁰ Este mismo criterio recoge el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 24 de febrero de 2003 (AC\2003\524), en el que se declara la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el tribunal *a quo*. En el mismo, se comienza por considerar –en lo que ahora interesa–, que «el proceso de ejecución de títulos jurisdiccionales no se concibe como un compartimiento estanco en relación a la fase declarativa del proceso. Antes al contrario en la LECiv el mencionado proceso se concibe como una continuación de la fase declarativa, y así se le exime al ejecutante de prácticamente toda formalidad en la demanda ejecutiva, hasta el extremo de que se puede limitar a la petición de despacho de ejecución con la mera identificación de la misma», para concluir más adelante que «la demanda ejecutiva derivada de una sentencia, de forma inexcusable, debe llevar el traslado de copias. Sin que, a estos efectos, quepa hacer una distinción entre ejecución provisional y ordinaria o definitiva, que resultaría no sólo artificiosa sino carente de todo sustento legal».

⁶⁷¹ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 109-111. En igual sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit.*, pp. 104-106.

juicio». Pues bien, el proceso de ejecución provisional es un verdadero proceso ejecutivo, supeditado en sus resultados a la suerte que corra el recurso interpuesto en contra de la sentencia cuya ejecución se pretende, pero no por eso deja de ser un proceso autónomo del proceso declarativo que le antecede. Prueba de ello es que la ejecución provisional se inicia por demanda, acto procesal que, como se sabe, tiene por finalidad dar inicio a todo proceso jurisdiccional —al menos en el orden civil—; se tramita con independencia del recurso a través del cual se impugnó la resolución que se ejecuta, aunque la conservación de las actividades ejecutivas que se realizan dependen del resultado de dicho recurso; y genera un expediente distinto de aquel que sirve de registro de las actuaciones del proceso declarativo. Por lo tanto, aun cuando las partes estén representadas por procurador en el proceso de declaración, la demanda de ejecución provisional da inicio a un proceso independiente, por lo que tiene aplicación sin reservas la excepción del artículo 276.4 de la LEC.

Por otro lado, una característica de todo proceso de ejecución forzosa —provisional o definitiva—, es la vigencia limitada del principio de contradicción⁶⁷², que se manifiesta, en lo que ahora nos interesa, en que el inicio de la ejecución se adopta por el tribunal sin dar traslado al ejecutado de la demanda. En otros términos, el tribunal resuelve sobre el despacho de la ejecución sólo con los antecedentes aportados por el ejecutante, *inaudita parte debitoris*⁶⁷³. Por esta razón el artículo 553 de la LEC prescribe que al ejecutado debe notificársele el auto que autorice y despache la ejecución, sin que sea necesario que se le entregue traslado de la demanda con anterioridad a la dictación de la referida resolución.

Desde esta perspectiva, entender que se debe entregar copia de la demanda de ejecución provisional por parte del procurador del ejecutante al procurador del ejecutado antes de la emisión del despacho de la ejecución, por provisional que sea, rompe con uno de los principios que regulan este proceso, dejando de paso vacío de contenido al artículo 553 de la LEC en sede de ejecución provisional, como acertadamente afirman los autores arriba citados.

⁶⁷² Por todos, *vid.* ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 694-695.

⁶⁷³ Cfr. VEGAS TORRES, J., *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I.—, *op. cit.*, p. 452.

Pero no sólo eso, tal interpretación pone en el peligro la eficacia de actividad ejecutiva que se pretende desplegar, pues si el ejecutado toma conocimiento de la demanda ejecutiva antes siquiera del despacho de la ejecución en su contra, es posible que realice actuaciones dirigidas a evitar la adopción de las medidas ejecutivas solicitadas por el acreedor en su demanda, o a frustrar la eficacia de las mismas⁶⁷⁴.

Además, el traslado de la demanda ejecutiva al procurador del ejecutado desde el momento de su interposición ante el tribunal de la ejecución puede ser la causa que explica la práctica consistente en oponerse a la ejecución provisional antes de haberse emitido el despacho de la misma –cuestión sobre la que volveremos más adelante (*infra*, apdo. II.2)–, trámite que no está autorizado por la ley y que puede generar distorsiones indeseadas en la tramitación de nuestra institución.

Por todo ello, nos parece más acertado y coherente con la naturaleza ejecutiva del proceso de ejecución provisional, que el ejecutante, al momento de la interponer su demanda ejecutiva, se limite a acompañar copia de la misma, sin necesidad de conferir traslado al procurador del ejecutado, copia que será notificada al ejecutado simultáneamente con el auto que despacha la ejecución *ex* artículo 553 de la LEC⁶⁷⁵.

2. Oportunidad para solicitar la ejecución provisional

La LEC regula de forma especial el momento procesal para solicitar la ejecución provisional, para lo cual distingue según se trate de sentencias de primera instancia (art. 527.1 LEC) o de sentencias de segunda instancia (art. 535.2 LEC), aun cuando la regla es prácticamente la misma, salvo porque en el primero de los supuestos mencionados cabe la adhesión al recurso de apelación, especialidad que fue considerada por el legislador a estos efectos, como veremos en seguida.

⁶⁷⁴ Con este enfoque, *vid.* CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 111.

⁶⁷⁵ En el mismo sentido, *cfr.*, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 104, quien sostiene que «el auto que despacha la ejecución provisional, con copia de la demanda ejecutiva, debe ser notificado al ejecutado, quien podrá oponerse en cinco días, desde dicha notificación o de las actuaciones concretas a las que se oponga (art. 533 LEC en relación con el artículo 529 LEC)», aunque lo hace sin hacer referencia a la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 276 de la LEC en se de ejecución provisional.

En resumidas palabras, la ejecución provisional puede instarse en cualquier momento desde la interposición⁶⁷⁶ del recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación deducido contra la sentencia que se pretende ejecutar, y siempre antes de que haya recaído sentencia en tal recurso. No existe, como se observa, una oportunidad preclusiva preestablecida, sino que la ley autoriza la interposición de la demanda de ejecución provisional dentro de un espacio de tiempo amplio que viene determinado por un momento inicial y un momento final, extremos a los que nos referiremos a continuación.

a) *Momento inicial o dies a quo*

La ejecución provisional de sentencias de primera instancia puede instarse «desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso⁶⁷⁷» (art. 527.1 LEC). La misma regla rige para la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia (art. 535.2.I LEC), salvo por que en este último caso no se hace referencia a la adhesión al recurso, pues dicha posibilidad no se contempla respecto del recurso extraordinario por infracción procesal y ni del recurso de casación.

Antes de revisar los alcances del *dies a quo* que establece la LEC, conviene abordar las dificultades interpretativas que han surgido en torno al mismo, fundamentalmente en lo referido a dos extremos: a) el sentido de la referencia a la

⁶⁷⁶ En su redacción original, los artículos 527.1 y 535.2.I de la LEC fijaban el *dies a quo* a partir de la notificación de la resolución que tuviera por preparado el recurso respectivo. Sin embargo, dicho trámite fue suprimido por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, produciéndose la modificación de los preceptos que comentamos, pasando a ser la interposición del recurso contra la resolución cuya ejecución se pretende el momento a partir del cual puede solicitarse el despacho de la ejecución provisional.

⁶⁷⁷ Respecto de la redacción del artículo 527.1 de la LEC, caben los siguientes comentarios. En primer lugar, en su redacción original, el precepto aludía la notificación de la «providencia» que tiene por «preparado» el recurso. Luego de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se cambió la voz «providencia» por el término más genérico «resolución», con el objeto de dar cabida a las nuevas resoluciones procesales que puede dictar el secretario judicial durante la tramitación del recurso de apelación.

En segundo lugar, nótese que el artículo 526 de la LEC habla de la adhesión al recurso de apelación, a diferencia de lo que hace el artículo 461 de la LEC –dentro del capítulo que regula dicho recurso–, que se refiere a la impugnación de la sentencia por la parte apelada.

adhesión al recurso, respecto de la ejecución provisional de sentencias de primera instancia; y b) la discutida vigencia en sede de ejecución provisional del plazo de espera establecido en el artículo 548 de la LEC, para la ejecución ordinaria o definitiva.

La cuestión relativa a la correcta interpretación del artículo 526.1 de la LEC sólo afecta a la ejecución provisional de sentencias recurridas en apelación, pues es a propósito del citado recurso que la ley contempla la posibilidad de adherirse al recurso o de impugnar la sentencia apelada –que viene a ser lo mismo– (art. 461 LEC). Pues bien, el precepto que comentamos distingue dos oportunidades distintas a la hora de fijar el *dies a quo* para instar la ejecución provisional de las sentencias dictadas en primera instancia: en primer lugar, desde la notificación de la resolución que tiene por interpuesto el recurso de apelación; y, en segundo término, desde el traslado a la parte apelante del escrito de adhesión al recurso (o impugnación de la sentencia). Es la existencia de esta segunda regla la que ha dado origen a debate entre los autores.

En efecto, si se puede instar la ejecución provisional de estas resoluciones desde la interposición del recurso de apelación, parece un contrasentido la previsión de este segundo momento. Ante ello, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ afirma que caben dos posibles respuestas: o se trata de un *lapsus* del legislador, o algún sentido tiene esta regla⁶⁷⁸. Y en esta tesitura, el autor responde que el *dies a quo* que comentamos se aplica a los casos de vencimiento parcial en los que ambas partes tienen gravamen para apelar, pero inicialmente sólo una de ellas apela. Según explica, en estos casos el apelante inicial no sabe si el apelado se va a adherir o no a la apelación sino hasta que sea evacuado el trámite de contestación al escrito de oposición a la apelación, por lo que debe esperar para instar la ejecución de los pronunciamientos que le favorecen hasta el traslado del escrito del apelado. Lo anterior obedecería a que si no existe adhesión o impugnación por parte del apelado, los pronunciamientos se encuentran consentidos, y aunque no sean firmes, deben concluirse que corresponde la ejecución ordinaria de los mismos, en cambio, si hay adhesión, procede la ejecución provisional. Con todo, el propio autor reconoce que la explicación puede ser algo rebuscada, y además tiene el inconveniente de restringir sin mucho fundamento la facultad del apelante de solicitar la ejecución provisional desde el momento mismo en que se tenga por preparado el recurso –

⁶⁷⁸ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 910-910.

referencia que ahora debe entenderse a la interposición del recurso—. Por lo anterior, en la búsqueda de una explicación al doble *dies a quo*, el autor termina por concluir que se trata de un *lapsus* del legislador, y que la ejecución provisional puede instarse desde que se tenga por preparado —ahora interpuesto— el recurso de apelación⁶⁷⁹.

Más allá del intento por justificar el doble *dies a quo* cuando se trata de la ejecución provisional de sentencias de primera instancia, lo cierto es que la previsión del segundo momento para instar la ejecución provisional constituye un olvido del legislador, pues el mismo guardaba relación con la regulación contemplada tanto en el Anteproyecto (art. 528.2) como en el Proyecto de LEC (art. 528.2), en relación con la legitimación para solicitar el despacho de la ejecución provisional, regla que fue modificada durante la tramitación parlamentaria (*supra*, cap. IV, apdo. II.1). Tales disposiciones regulaban los casos en que el inicialmente apelante pasaba a ostentar la calidad de apelado, en virtud de la adhesión a la apelación, hoy impugnación de la sentencia *ex* artículo 461 de la LEC. De este modo, suprimida la referencia a la posición de las partes respecto del recurso de apelación para conferir la legitimación para instar la ejecución provisional, el *dies a quo* del traslado del escrito del apelado adhiriéndose al recurso carece de sentido⁶⁸⁰.

La segunda problemática relacionada con el momento inicial para instar la ejecución provisional, cuya solución se proyecta sobre toda demanda de ejecución

⁶⁷⁹ Sin embargo, en una nueva aproximación al tema, el citado autor mantiene su explicación, pero sin los matices antes mencionados, afirmando categóricamente que el *dies a quo* del traslado del escrito de adhesión a la apelación está concebido para un supuesto muy específico (los casos de vencimiento parcial, en los mismos términos que ya se expuso), en los que debe esperarse al traslado del escrito del apelado para solicitar la ejecución, de manera que si el apelado se adhiere, habrá que pedir la ejecución provisional; pero si no se adhiere, lo que corresponde es instar la ejecución definitiva, pues nos encontraríamos ante pronunciamientos que si bien no son firme, se encuentran consentidos. En este sentido, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 371. En igual sentido, *cfr.* CORDÓN MORENO, F., *El proceso de ejecución*, *op. cit.*, p. 68; y VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 40.

⁶⁸⁰ En el mismo sentido, *cfr.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 39; ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 2037-2038; FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 319; MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 125-126; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, p. 356; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 107.

provisional, cualquiera que sea su objeto –sentencias o autos de primera o de segunda instancia–, surge a partir del plazo de espera para solicitar el despacho de la ejecución ordinaria previsto en el artículo 548 de la LEC y su posible aplicación en sede de ejecución provisional. Como se sabe, nuestra institución es un auténtico proceso de ejecución, y se encuentra regulado por disposiciones especiales contenidas en el Título II del Libro III de la LEC, las que deben ser complementadas por las normas previstas para la ejecución definitiva, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 524.2 de la LEC. Pues bien, dentro de tal normativa, la ley procesal contempla un plazo de espera para la ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediación (art. 548 LEC), y siendo el objeto de la ejecución provisional una resolución judicial –sentencia o auto de condena–, sin que exista una excepción expresa al artículo 548 de la LEC dentro de las reglas que disciplinan la ejecución provisional, resulta válido preguntarse sobre la procedencia o no del mencionado plazo de espera en esta institución.

La respuesta a este interrogante no ha sido pacífica, y ha dado origen a posturas discrepantes. Sin embargo, antes de aventurarnos con una posible solución, debemos advertir que la misma no puede desatender la finalidad perseguida por el plazo de gracia del tantas veces citado artículo 548 de la LEC.

Como se sabe, el aludido plazo de espera no persigue otra cosa que conceder al condenado un tiempo prudente –20 días– para cumplir voluntariamente la prestación que se ha impuesto a favor del litigante vencedor, pues toda la actividad ejecutiva se justifica en la medida que el deudor no cumple con la obligación que figura en el título ejecutivo. Como consecuencia de ello, si el condenado permanece inactivo, el acreedor podrá instar la ejecución forzosa. En cambio, si el deudor cumple con su obligación dentro del plazo antes indicado, no será necesario iniciar un proceso de ejecución en su contra, sin que se generen costas, precisamente, por la ausencia de actividad jurisdiccional de tipo ejecutiva.

Es a propósito de esta última circunstancia que se ha discutido la aplicación del artículo 548 de la LEC a la ejecución provisional: si no se concede un plazo al condenado para cumplir voluntariamente la prestación que debe satisfacer, el cumplimiento de una sentencia que no es firme se estaría exigiendo con mayor rigor que

el de una sentencia firme, pues el ejecutado en nuestro proceso carecería de una facultad que sí ostenta el deudor en la ejecución ordinaria, cuestión que vulneraría lo dispuesto en el artículo 524.2 de la LEC, además de producir un resultado inicuo.

Teniendo en cuenta, entonces, que la polémica por la aplicabilidad del plazo de espera en la ejecución provisional está relacionado con un tema que abordaremos más adelante en este trabajo (*infra*, cap. VIII, apdo. 3), nos limitaremos a exponer las posiciones doctrinales y jurisprudenciales existentes sobre uno de los extremos de esta discusión, cual es si es necesario esperar el transcurso de los 20 días contados desde la notificación de la sentencia que se pretenda ejecutar provisionalmente para poder instar la ejecución provisional de la misma, reservando el tema de la imposición de las costas en los supuestos de cumplimiento voluntario para el apartado de esta investigación relativo a las costas de la ejecución provisional.

Pues bien, en relación con lo que venimos comentando, existe un grupo reducido de resoluciones judiciales favorables a la aplicación del plazo de espera del artículo 548 de la LEC en sede de ejecución provisional, basándose para ello fundamentalmente en la remisión contenida en el artículo 524.2 de la LEC a las normas que regulan la ejecución ordinaria o definitiva. Así, por ejemplo, se ha declarado que «la ejecución provisional contiene en su regulación, y en lo que aquí interesa, una contradicción entre lo dispuesto en el art. 527.4, que ordena, con la mera solicitud de ejecución provisional, el despacho de la misma por parte del Tribunal, mientras que el art. 524.3 LECiv otorga a las partes, como ya se ha anticipado, los mismos derechos en la ejecución provisional que en la definitiva, por lo que resulta inexcusable el respeto del plazo de espera de 20 días prevenido en el art. 548 LECiv»⁶⁸¹.

De acuerdo con este criterio jurisprudencial, por tanto, la ejecución provisional no puede despacharse sino transcurridos que sean 20 días contados desde que se dicta la resolución cuya ejecución se pretende.

No obstante, la jurisprudencia mayoritaria se pronuncia –acertadamente a nuestro juicio–, por la inaplicabilidad del plazo de espera del artículo 548 de la LEC

⁶⁸¹ AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 24 de febrero de 2003 (AC\2003\524).

para solicitar y acordar el despacho de la ejecución provisional. En este sentido –antes de la reforma de 2011–, la Audiencia Provincial de Barcelona⁶⁸² tiene resuelto que «en cuanto al tiempo para la solicitud de la ejecución provisional, el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es norma especial, de aplicación preferente, en relación con el artículo 548 del mismo texto legal, en que se funda la resolución recurrida, de modo que la ejecución provisional puede pedirse en cualquier momento, desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste. Por lo tanto, para solicitar la ejecución provisional no es preciso esperar el plazo de veinte días del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contados desde que la resolución de condena hubiere sido notificada al ejecutado, ya que la finalidad del mencionado precepto es la de permitir al condenado el cumplimiento voluntario de la sentencia condenatoria, sin necesidad de entrar en la ejecución forzosa»⁶⁸³. Y a reglón seguido, añade la resolución que «es absurdo que se pretenda la concesión de un plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia condenatoria a quien ha presentado recurso de apelación contra la sentencia, con el consiguiente efecto suspensivo de la apelación, manifestando el apelante con el recurso no tener intención inmediata de cumplir voluntariamente una sentencia con la que no está conforme, y por eso la apela, apelación que constituye el presupuesto para que, a su vez, el demandante pueda solicitar la ejecución provisional, ya que si no hubiera apelación lo procedente sería la ejecución definitiva».

En relación con este último argumento, cabe advertir que muchas de las resoluciones que señalan que no cabe aplicar el citado artículo 548 de la LEC, declaran, al mismo tiempo, que no procede imponer las costas al ejecutado si cumple voluntariamente la sentencia dentro del plazo de 20 días contado desde el despacho de la ejecución provisional –aspecto sobre el que volveremos más adelante, como fuera anunciado–⁶⁸⁴.

⁶⁸² AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 25 de abril de 2008 (ROJ AAP B 2418/2008).

⁶⁸³ En igual sentido, cfr. SAP Córdoba (Secc. 2ª), de 12 de junio de 2001 (JUR\2001\237543); AAP Madrid (Secc. 19ª), de 31 de enero de 2012 (ROJ AAP M 3887/2012); AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 11 de marzo de 2008 (JUR\2008\164631).

⁶⁸⁴ En este sentido, además de las resoluciones que citamos en el texto principal, *vid.* AAP Madrid (Secc. 13ª), de 7 de junio de 2006 (JUR\2006\270576); AAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 19 de enero de 2007 (JUR\2007\236136).

Así lo expresa, de forma ilustrativa, la Audiencia Provincial de Madrid⁶⁸⁵ que, sobre la aplicación del artículo 548 de la LEC en la ejecución provisional de sentencias, tiene declarado que «el tenor de los arts. 526 y 527 LEC nos podía hacer pensar que no es posible en cuanto dichos preceptos pueden tener la consideración de Ley Especial respecto del citado art. 548 LEC. En contra de esta postura está el hecho de que la propia LEC, art. 524, nos dice que la ejecución provisional se rige por las mismas normas que la definitiva, y que el ejecutante y ejecutado tienen la misma posición que si estuvieran ante la ejecución definitiva. Para solucionar la antinomia expuesta acudiremos a los acuerdos de unificación de criterios de esta Audiencia de 28-9-2006 en la que llegamos a la conclusión de que la ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación, al ser la norma del art. 527 Ley Especial frente al art. 548 LEC, añadiendo que si el ejecutado paga o consigna voluntariamente para pago al ejecutante el importe de la condena, –dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto despachando ejecución– sin formular oposición, no procede imponerle el pago de las costas de la ejecución. De acuerdo con esa idea, que aunque no compartimos plenamente, aplicamos por razones de seguridad jurídica, procede la confirmación del auto de instancia, ya que el demandado pago antes de que se le notificara el auto despachando ejecución»⁶⁸⁶.

⁶⁸⁵ AAP Madrid (Secc. 14ª), de 15 de marzo de 2012 (ROJ AAP M 5607/2012).

⁶⁸⁶ En el mismo sentido, entre muchas otras, el AAP Granada (Secc. 3ª), de 27 de febrero de 2008 (JUR\2008\332894) tiene declarado en relación con este tema que «la cuestión aquí planteada ha de resolverse bajo el prisma de lo que dispone el art 524.3 LEC, pues de acuerdo con su redacción en la ejecución provisional no se prevé la necesidad de observar el plazo de espera que el art 548 establece para la ejecución definitiva, dado que el art 527.1, en sede de ejecución provisional, prevé que se pueda solicitar "en cualquier momento, desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado al apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso", sin necesidad, por tanto, de plazo de espera alguno, plazo de espera que el art 548 impone solo en sede de ejecución definitiva. Pero esta regulación lleva a la paradoja de situar en mejor situación al condenado por sentencia firme (que en los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia la puede cumplir voluntariamente, sin que contra él se pueda despachar ejecución en base a esa sentencia) que el condenado por sentencia recurrida, contra el que puede despacharse ejecución provisional sin darle oportunidad de cumplimiento voluntario, lo que infringe abiertamente la previsión del art 524.3 LEC cuando prevé que las partes dispongan en la ejecución provisional de los mismos derechos y facultades procesales que tienen en la ejecución ordinaria. Por ello, la solución para evitar efectos contrarios al citado art 524.3 solo puede ser la de que, habiéndose despachado ejecución provisional sin plazo de espera, no se condene en costas al ejecutado provisional que de cumplimiento a la condena en el plazo de veinte días desde que tiene conocimiento de que el litigante vencedor quiere que se ejecute provisionalmente la sentencia».

Los acuerdos de unificación de criterios a los que se hace referencia en la resolución transcrita, son los Acuerdos de la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia de Madrid, de 28 de septiembre de 2006⁶⁸⁷. En ellos, se acordó por la unanimidad de los jueces, que en la ejecución provisional no debe respetarse el plazo de espera de 20 días del artículo 548 de la LEC, pues la misma puede pedirse en cualquier momento desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación –referencia que hoy se entiende hecha a la interposición del recurso–, al ser la norma del artículo 527 especial frente al artículo 548, ambos de la LEC. Al mismo tiempo, aunque no por unanimidad, se acordó que si el ejecutado paga o consigna voluntariamente el importe de la condena dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto despachando la ejecución provisional de una sentencia, sin formular oposición, no procede imponerle el pago de las costas de la misma.

Como se observa, la jurisprudencia se ha decantado por la inaplicabilidad del plazo de espera para la interposición de la demanda de ejecución provisional, pero mantienen la vigencia de dicho plazo para considerar si corresponde o no condenar en costas al ejecutado provisional. El principal argumento para arribar a esta última conclusión –sobre el que nos explayaremos con detalle más adelante en este mismo capítulo– descansa sobre la base de que la condena impuesta en una sentencia que no ha adquirido firmeza –y que es objeto de la ejecución provisional–, no es exigible al condenado desde el momento de su dictación, como sucede con la sentencia firme, sino que sólo se hace exigible desde que se despacha la ejecución provisional de la misma. Por esta razón, debe concederse al ejecutado la oportunidad para cumplir voluntariamente tal sentencia, y esa posibilidad no es otra que el plazo de espera del artículo 548 de la LEC, término que no se computa desde la notificación de la sentencia –como ocurre en la ejecución definitiva–, sino que desde la notificación del auto que despacha la ejecución provisional.

⁶⁸⁷ Cfr. VV.AA., «Conclusiones de las jornadas de los jueces de la AP de Madrid sobre unificación de criterios de aplicación de la LEC y especialmente sobre ejecución provisional», en *Diario La Ley*, núm. 6417, 2006.

A nivel doctrinario, la tesis contraria a la aplicación del plazo de 20 días del artículo 548 de la LEC a la ejecución provisional es unánime⁶⁸⁸, coincidiendo con la jurisprudencia mayoritaria antes expuesta en las razones para adoptar esta postura, lo que vuelve a conectar el tema con la imposición de las costas de la ejecución provisional en los casos de cumplimiento voluntario.

En efecto, CABALLOL ANGELATS afirma que los efectos de las sentencias firmes son exigibles desde que se dicta, en cambio, los efectos de las sentencias no firmes sólo son exigibles desde que se despacha la ejecución provisional de las mismas, lo que hace inaplicable la exigencia del artículo 548 de la LEC⁶⁸⁹.

En la misma línea, sostiene alguna autora que si bien en la ejecución provisional las partes tendrán los mismo derechos y facultades que en la ordinaria, *ex* artículo 524.2, el artículo 548 no se cohonestaba con el artículo 527.1 –todos de la LEC–, pues conforme con este último precepto la ejecución provisional se puede instar en cualquier momento desde la interposición del recurso respectivo. Además –agrega–, el condenado por una resolución que no es firme no se encuentra obligado a su cumplimiento, por lo que no se comprende que se le confiera un plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia para que pueda cumplirla, en circunstancias que ha interpuesto un recurso contra la sentencia, manifestando su disconformidad con la misma. Por esta razón, señala la autora, no debe aplicarse el plazo de cortesía a la ejecución provisional, o al menos no es los mismos términos del artículo 548 de LEC, ya que puede tener vigencia para efectos del pronunciamiento sobre las costas de la ejecución provisional⁶⁹⁰.

⁶⁸⁸ Participan de esta posición doctrinal, además de los autores cuyos argumentos expondremos en el texto principal y sin ánimo exhaustivo, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 155; DAMIÁN MORENO, J., «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», *op. cit.*, p. 119; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, p. 356; GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 211-212; y ASECIO MELLADO, J., (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, *op. cit.*, p. 1480.

⁶⁸⁹ CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 42. No obstante, el mismo autor, en un trabajo anterior, señalaba que «en toda ejecución provisional cabe distinguir dos momentos: el de la exigibilidad de los pronunciamientos y el de ejecución forzosa de los mismos». Y agregaba que en los modelos de ejecución provisional en que la efectividad de las resoluciones recurridas es concedida *ex lege*, «ambos estadios se aprecian más fácilmente: los pronunciamientos son exigibles desde el momento en que se dictan y el despacho de la ejecución sólo tiene lugar si la parte interesada lo insta». Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», *op. cit.*, pp. 586-586.

⁶⁹⁰ Así lo explica ACHÓN BRUÑÉN, M., «Problemas que plantea la aplicación del plazo de espera para despachar ejecución: interpretación práctica del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento

Revisadas las corrientes jurisprudenciales y la posición de la doctrina frente a la polémica en torno a la aplicación del artículo 548 de la LEC en la ejecución provisional, nos adherimos a la tesis que niega lugar a la aplicación del plazo de espera para la ejecución de títulos judiciales en nuestra institución, pues entendemos que los artículos 527.1 y 535.2 de la LEC son, efectivamente, reglas especiales respecto de la norma general prevista en sede de ejecución ordinaria. En consecuencia, somos partidarios de que debe primar el *dies a quo* regulado específicamente para la ejecución provisional, sin que deba esperar el ejecutante para instar la ejecución, ni el tribunal para acordarla, el transcurso del plazo de 20 días contados desde la notificación de la resolución que se pretende ejecutar.

Desde esta perspectiva, y considerando que todavía es posible encontrar resoluciones judiciales que aplican el artículo 548 de la LEC en sede de ejecución provisional, nos parecen atendibles los llamados de la doctrina que reclaman por una reforma legal –no sería la primera que sufre la LEC– que excluya expresamente la vigencia del plazo de espera en nuestra institución⁶⁹¹.

Hechas las consideraciones anteriores sobre algunas dificultades interpretativas que ha originado el *dies a quo* para instar la ejecución provisional, podemos concluir que la misma se puede solicitar en cualquier momento⁶⁹² y sin plazo de espera alguno, desde que se notifica la resolución que tiene por interpuesto el recurso contra la resolución cuya ejecución se pretende (arts. 527.1 y 535.2.I LEC).

Civil», en *Diario La Ley*, núm. 7223, 2009. En similares términos, cfr. MAGRO SERVET, V., «El plazo de espera en la ejecución de resoluciones judiciales (art. 548 LEC)», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 57, 2009, pp. 47-54; y RIVES SEVA, J., «¿Cuál es el momento inicial y final para la solicitud de ejecución provisional de una sentencia?», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 66, 2009, pp. 59-60.

⁶⁹¹ En tal sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», *op. cit.*, p. 590; y ACHÓN BRUÑÉN, M., «Problemas que plantea la aplicación del plazo de espera para despachar ejecución: interpretación práctica del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*.

⁶⁹² Como apunta PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», *op. cit.*, «esta práctica ausencia de sujeción a plazo constituye una prueba más de que el legislador actúa en pro de la aplicación del principio del *favor creditoris*, que puede utilizar la existencia de una sentencia favorable, aunque apelada, para solicitar su ejecución en cualquier momento como una efectiva medida de presión frente al litigante vencido y recurrente, sobre el que siempre pesará, como penosa espada de Damocles, la amenaza de que se le obligue, en cualquier momento, a cumplir la resolución condenatoria recurrida».

Al respecto, cabe recordar que el recurso de apelación, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación deben interponerse ante el mismo tribunal que dictó la sentencia que se recurre, dentro del plazo de 20 días contados desde el día siguiente a su notificación, y si se cumplen los requisitos de admisión, el secretario judicial o el tribunal, en su caso, tendrán por interpuesto el recurso (arts. 458.3, 470.2. y 479.2 LEC, respectivamente).

En consecuencia, el sujeto favorecido por una sentencia de condena puede instar la ejecución provisional de la misma notificada que sea la resolución que tiene por interpuesto el recurso, sin importar si fue el propio ejecutante quien impugnó la resolución –en caso de estimación parcial de la demanda–, o si el recurrente fue el ejecutado, pues nada tiene que ver la legitimación para instar la ejecución provisional con la oportunidad para realizar la solicitud respectiva. Con todo, podría pensarse que, a estos efectos, el hecho relevante es la emisión de la resolución que tiene por interpuesto el recurso, sin que la falta de notificación de tal resolución pueda impedir que el tribunal se pronuncie sobre la demanda de ejecución provisional que se le formule⁶⁹³. Sin embargo, la ley ha fijado el *dies a quo* a partir de la notificación respectiva⁶⁹⁴.

En cualquier caso, la aplicación de esta regla temporal importa que no puede instarse la ejecución provisional antes de la interposición del recurso, pues, como vimos oportunamente [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)], sólo son objeto de ejecución provisional las sentencias de condena que, sin ser firmes, se encuentran previamente recurridas. De este modo, mientras no se impugne la resolución que se pretende ejecutar, no puede instarse la ejecución provisional, y si de hecho se pide, el tribunal deberá denegar el despacho de la misma.

Nótese, no obstante, que la denegación del despacho de la ejecución provisional por haberse solicitado antes del momento procesal oportuno, no impide que se acuerde

⁶⁹³ En tal sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 40. Si bien la referencia estaba hecha, antes de la reforma de 2011, a la resolución que tiene por preparado el respectivo recurso, puede entenderse perfectamente respecto de la resolución que lo tiene por interpuesto.

⁶⁹⁴ Otra alternativa es que, instada al ejecución provisional una vez dictada la resolución que tiene por interpuesto el recurso, el tribunal espera para despacharla que se verifique la notificación de tal resolución, resolviéndose el asunto de forma análoga a lo que se hace cuando la demanda ejecutiva se interpone antes del vencimiento del plazo de espera del artículo 548 de la LEC.

si se insta con posterioridad⁶⁹⁵. En este sentido, se ha resuelto que procede denegar el despacho de la ejecución provisional si se pide con infracción de lo dispuesto en el artículo 527.1 de la LEC, «sin que pueda considerarse que la subsanación posterior (escrito de la parte ejecutante del día 17 de abril de 2009 subsanando la petición de ejecución provisional) remedie la infracción primitivamente cometida [sic]; obviamente sin perjuicio de instarla posteriormente como se permite por el art. 527 antes citado y hasta el “dies ad quem” que se contempla en el mismo»⁶⁹⁶.

Con ello no se quiere decir que el litigante favorecido por un pronunciamiento de condena pueda instar la ejecución provisional del mismo varias veces y en forma sucesiva⁶⁹⁷. El único caso en que resulta posible promover la ejecución provisional de una sentencia cuyo despacho ya ha sido denegado es el comentado en el párrafo precedente, esto es, cuando la no emisión del despacho se debe a la infracción del momento inicial para solicitar la ejecución provisional. Pero si se pide tal ejecución en tiempo y forma, y el tribunal no da lugar a la misma por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 527.3 de la LEC, el solicitante no puede insistir en su petición, y sólo le cabe apelar contra la decisión que deniega el despacho, *ex* artículo 527.4 de la LEC. Es más, sobre el particular se tiene resuelto que la nueva presentación de una demanda de ejecución provisional respecto de determinados pronunciamientos que ya fue rechazada oportunamente, entraña un fraude procesal, por lo que su despacho debe ser denegado⁶⁹⁸.

⁶⁹⁵ En igual sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 108.

⁶⁹⁶ AAP León (Secc. 1ª), de 4 de marzo de 2010 (JUR\2010\165696).

⁶⁹⁷ En contra, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 159, afirma que no pedida la ejecución provisional de una sentencia de primera instancia, e incluso si se instó y se denegó el despacho de tal ejecución, el actor puede solicitar la ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia que ha sido impugnada.

⁶⁹⁸ En este sentido, en el AAP Vizcaya (Secc. 5ª), de 10 de octubre de 2002 (JUR\2003\23447) se declara que «concorre otro motivo para denegar la ejecución provisional y es que dicha petición ya fue denegada por auto dictado el día 7 de diciembre de 2001, resolviendo la oposición a la petición de ejecución provisional que había sido originalmente despachada por auto dictado el día 6 de noviembre de 2001, estimándose en dicho auto de fecha 7 de diciembre de 2001 que no podía darse lugar a la ejecución provisional al amparo de lo establecido en el artículo 528.2.2ª, que además consideró insuficiente por su cuantía económica la caución que ofrecía la parte ejecutante, desprendiéndose de todo lo expuesto que la actuación de la parte arrendadora ejecutante no se ha ajustado a las exigencias del artículo 247 de la LEC, que impone a los litigantes en todo tipo de procesos ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe e impone a los Tribunales la obligación de rechazar fundadamente las peticiones e incidentes que se formulan con manifiesto abuso de derecho a entrañar fraude de ley o procesal, considerándose a estos efectos por la Sala que la nueva petición de ejecución provisional, que ya fue rechazada en su momento debe rechazarse, junto con las demás razones apuntadas, porque dicha petición entraña un fraude

Del mismo modo, existiendo una previa solicitud de ejecución provisional de un pronunciamiento de condena no dineraria y habiendo sido acordada la ejecución, a la que el ejecutado se opuso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528.2.2º de la LEC, y sin que el ejecutante ofreciera caución en los términos del apartado 3 del artículo 529 de la ley rituarial, quedando en suspenso el proceso *ex* artículo 530.2 de la LEC, no puede «intentarse lo mismo nuevamente subsanando las omisiones acontecidas y sin que sea de recibo la argumentación de que se prescinda del requisito de la caución con carácter general en la ejecución provisional lo que es aplicable para la ejecución de condena dineraria, pero no como hemos expuesto para la no dineraria, sin que tampoco pueda apoyarse el recurrente en la posibilidad de plantear la ejecución en cualquier momento para pedirla varias veces sucesivas y en relación a los mismos pronunciamientos, tratando en definitiva de intentar subsanar lo omitido en su momento, cuando ya se le puso de manifiesto la necesidad de caución que ahora ofrece»⁶⁹⁹.

Para finalizar con la revisión al *dies a quo*, resulta pertinente referirse a un problema que se presenta fundamentalmente en relación con las sentencias de segunda instancia, atendida la rigurosidad con que se interpretan los criterios de admisión de los recursos extraordinarios, de conformidad con el *Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal*, aprobado el 30 de diciembre de 2011 por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo⁷⁰⁰.

Como hemos visto a lo largo de este epígrafe, la ejecución provisional puede solicitarse desde la notificación de la resolución que tiene por interpuesto el recurso contra la sentencia que se quiere ejecutar. Pues bien, si en concepto del tribunal *a quo* no se cumplen los requisitos de admisibilidad, se dictará auto declarando la inadmisión del recurso, resolución contra la que sólo cabe recurso de queja (arts. 458.3, 470.2. y

procesal, porque aun cuando la primera denegación, tras resolverse la oposición a la ejecución provisional, se produjo cuando todavía esta Sección Quinta no había dictado la sentencia resolviendo el recurso de apelación, al dictar la sentencia de fecha 18 de enero de 2002 la Sala no hizo sino confirmar la sentencia de primera instancia».

⁶⁹⁹ AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2006\12881).

⁷⁰⁰ Este Acuerdo fue recientemente reemplazado por un nuevo *Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal*, aprobado el 8 de febrero de 2017 por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a fin de adaptar su contenido a la modificación de las causas de inadmisión del recurso de casación, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que otorgó una nueva redacción al artículo 483.2 de la LEC.

479.2 LEC), cuestión que ocurre con bastante más frecuencia a propósito de los recursos extraordinarios, por aplicación por parte de las Audiencias Provinciales del citado acuerdo del Tribunal Supremo.

En estos supuestos, cable plantearse si es posible instar la ejecución de estas sentencias antes de que el TS se pronuncie sobre el recurso de queja y, en caso que la respuesta sea afirmativa, si la ejecución que se inicia tiene el carácter de provisional o de definitiva, temas que ya han sido abordados por la doctrina, existiendo diversas soluciones ofrecidas por parte de los autores.

En un extremo, CACHÓN CADENAS sostiene que en estos casos no es necesario esperar a que se resuelva el recurso de queja para que se pueda solicitar y despachar la ejecución de las sentencias de segunda instancia, pues de no ser así, se estaría privando de eficacia a la resolución de la Audiencia que declara que no cabe el recurso de casación o el recurso extraordinario por infracción, lo que supone, implícitamente, reconocer el carácter de firme de la sentencia contra la que se ha intentado la preparación –hoy interposición– de tales recursos, susceptible de ejecución definitiva y no provisional⁷⁰¹. Y agrega el autor que para el caso eventual de que el TS estime el recurso de queja y acuerde la admisión del recurso extraordinario antes denegado, la ejecución iniciada como definitiva continuaría como provisional. Sin embargo, el propio autor reconoce que esta transformación puede producir inconvenientes, que considera como «mal menor» frente a la solución alternativa, que consistiría en impedir que quien ha obtenido un pronunciamiento de condena a su favor pueda solicitar la ejecución ordinaria o provisional del mismo⁷⁰².

En la misma línea, ORRIOLS GARCIA afirma que abordar el tema desde la perspectiva de si es posible o no la ejecución provisional es errado, descartando de plano esta alternativa⁷⁰³. Al efecto, sostiene que la ejecución provisional no cabe porque el artículo 535.2 de la LEC sólo la autoriza cuando el recurso de casación o

⁷⁰¹ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 117.

⁷⁰² *Ídem*, p. 118.

⁷⁰³ ORRIOLS GARCIA, S., «La ejecución de la sentencia durante la pendencia del recurso de queja interpuesto contra la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 3-4, 2010, pp. 251-252.

extraordinario por infracción procesal se ha tenido por preparado –léase, por interpuesto–, y si el tribunal no admite dichos recursos, razón por la cual se interpone el recurso de queja, tales recursos no han sido interpuestos. De este modo –continúa–, relacionando lo dispuesto en el artículo 535.2 con el artículo 207.2 de la LEC, en los supuestos en que no cabe recurso contra la sentencia de segunda instancia no se puede sino concluir que estamos ante una resolución judicial firme que se puede ejecutar de forma definitiva⁷⁰⁴.

En la vereda opuesta, ACHÓN BRUÑÉN señala que si bien del tenor literal del artículo 535.2 de la LEC se deriva que la notificación de la resolución que tiene por interpuesto –en el texto se alude a la preparación– el recurso es el *dies a quo* para solicitar la ejecución provisional, no parece acertado iniciar la ejecución definitiva de una resolución que no es firme, al poder ser admitida la queja. Por esta razón, estima la autora que en estos casos lo más oportuno es esperar a la resolución del recurso de queja para instar la ejecución ora provisional ora definitiva⁷⁰⁵.

Una tercera alternativa es propuesta por GONZÁLEZ NAVARRO, quien comienza por afirmar que la sentencia de segunda instancia respecto de la cual se declaró mediante auto la inadmisión de un recurso extraordinario, es una sentencia firme, aunque se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de inadmisión⁷⁰⁶. Pese ello, continúa la autora, parece artificioso que, en caso de admitirse la queja –por excepcional que sea esta posibilidad–, la ejecución despachada como definitiva se convierta en provisional, transformación que, por lo demás, no se encuentra autorizada en la LEC. Por ello –concluye–, en estos casos no cabe instar ejecución provisional ni ejecución definitiva, por lo que la única posibilidad que tiene la parte favorecida por la sentencia de condena es solicitar, si es que aún no lo ha hecho, la adopción de alguna medida cautelar⁷⁰⁷.

⁷⁰⁴ *Ídem*, p. 255.

⁷⁰⁵ ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (I)», en *Diario La Ley*, núm. 6825, 2007.

⁷⁰⁶ GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 114.

⁷⁰⁷ *Ídem*, p. 115.

Según se ha visto, se trata de un tema discutido, y existen buenos argumentos para acoger cualquier de las tesis expuestas. Por nuestra parte, nos parece que, atendiendo al tenor literal del artículo 535.2 de la LEC, si el recurso de casación o el recurso extraordinario por infracción intentado contra una sentencia de segunda instancia no se tiene por interpuesto, no procede instar la ejecución provisional de la misma. Y si no cabe recurso alguno contra dicha sentencia, en los términos del artículo 207.3 de la LEC, forzoso es concluir que la resolución es firme y, por tanto, susceptible de ejecución ordinaria o definitiva, pues la eventual admisión del recurso de queja por el TS no resta firmeza a la sentencia de segunda instancia, del mismo modo que no le resta la posible rescisión de sentencia instada por el demandado rebelde⁷⁰⁸.

Así lo reconoce, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Girona⁷⁰⁹, que al efecto tiene declarado que «el recurso de queja es un recurso extraordinario, subsidiario del recurso de reposición, no suspensivo y de tramitación preferente, por lo que, mientras no se resuelva que estuvo mal inadmitido el recurso de casación, a todos los efectos, la sentencia es firme, pudiendo procederse a su ejecución. Así lo entiende la doctrina procesalista cuando mantiene que la presentación de la queja no origina la suspensión de las resoluciones judiciales, pues en realidad, el recurso de queja no impugna la resolución que se pretende ejecutar, sino las resoluciones que deniegan la preparación del recurso de casación e infracción procesal, o el recurso de apelación. Si algún acto procesal ocasiona la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones recurridas mediante algún recurso devolutivo ese es el constituido por la providencia que acuerda la admisión a trámite del escrito de preparación del recurso de que se trate. Y dado que la razón del recurso de queja se encuentra en la ausencia de ese acto de admisión a trámite, no cabe sostener, ante el silencio legal existente al respecto, que la interposición de dicho recurso ocasione efecto suspensivo alguno. Por ello, el artículo 494 de la LEC establece que se tramitará el recurso de queja de una forma preferente a fin de evitar que en el caso de ser admitida se haya ejecutado la sentencia. Pero, no habría inconveniente el entender que si la ejecución se hubiera iniciado o terminado, en considerarla como

⁷⁰⁸ Cfr. ORRIOLS GARCIA, S., «La ejecución de la sentencia durante la pendencia del recurso de queja interpuesto contra la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal», *op. cit.*, p. 253.

⁷⁰⁹ SAP Girona (Secc. 1ª), de 14 de diciembre de 2005 (JUR\2006\56488).

ejecución provisional, si era ejecutable provisionalmente y si no lo era, habría que dejar sin efecto todos los actos ejecutivos realizados».

Ciertamente, asumir esta tesis implica aceptar que, ante la eventual –y excepcional– estimación del recurso de queja por el TS y posterior admisión del recurso de casación o del recurso extraordinario por infracción, la ejecución que se ha iniciado como ordinaria se transformaría y continuaría –para el caso que no haya concluido– como ejecución provisional, alternativa que carece de cobertura legal y que ha sido rechazada por alguna resolución⁷¹⁰. No obstante, se trata de un riesgo menor, atendida la baja tasa de estimación de los recursos de queja, que parece más razonable de asumir que negar el acceso a la ejecución –derecho comprendido dentro del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva– a quien se ha visto favorecido por una sentencia de condena de segunda instancia. Por lo demás, la alternativa contraria abre la puerta para que el condenado por una sentencia de segunda instancia, con el sólo propósito de retrasar o impedir la ejecución, intente un recurso de queja contra el auto de inadmisión de un recurso extraordinario, solución que no parece ajustarse a la idea rectora de la legislación procesal civil de la eficiente tutela judicial del crédito.

b) Momento final o dies ad quem

La determinación del momento final hasta el cual puede pedirse la ejecución provisional o *dies ad quem* no plantea los problemas del *dies a quo*, existiendo una misma oportunidad a partir de la cual ya no cabe instar la ejecución provisional de cualquier resolución, con independencia del recurso del que haya sido objeto. En efecto, tanto la ejecución provisional de sentencias de primera instancia (art. 527.1 LEC) como de sentencias de segunda instancia (art. 535.2.I LEC), puede instarse «siempre antes de que haya recaído sentencia» en el recurso respectivo.

⁷¹⁰ En tal sentido, el AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 27 de enero de 2003 (JUR\2003\109630) tiene resuelto que «no cabe convertir un procedimiento de ejecución "definitiva" en una ejecución provisional, por lo que el ejecutante deberá necesariamente replantear su demanda por el cauce procesal adecuado, lo que en definitiva comporta, la desestimación del presente recurso y la consiguiente confirmación del auto impugnado».

Como se observa, la regulación del *dies ad quem* recogida en la LEC constituye un cambio radical respecto del sistema anterior⁷¹¹, pues se suprime el criticado y breve plazo preclusivo de seis días contados desde la notificación de la resolución admitiendo el recurso de apelación establecido en el artículo 385 de la LEC/1881⁷¹², extremo del actual modelo de ejecución provisional que ha sido positivamente valorado por la doctrina⁷¹³.

Ahora bien, las normas que regulan el *dies ad quem* se refieren al momento en que haya recaído sentencia en el recurso respectivo, por lo que debe entenderse, a falta de mayor precisión legal, que la ejecución provisional puede solicitarse hasta el día anterior al de la dictación de la sentencia que decide el recurso⁷¹⁴.

Con todo, cabe tener presente que, pese al olvido del legislador, los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación no sólo pueden terminar por sentencia, sino que cabe la posibilidad de que lo hagan por una resolución que adopte la forma de auto o de providencia⁷¹⁵. En estos casos, entendemos que el *dies ad*

⁷¹¹ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 97.

⁷¹² Sobre las críticas a la regulación de la legislación anterior y los problemas a que daba lugar en la práctica, por todo, vid. Díez-Picazo Giménez, I., «Contribución a la interpretación del régimen general de ejecución provisional de sentencias contenido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», op. cit., pp. 1086-1089.

⁷¹³ En este sentido, entre la abundante bibliografía, vid. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., pp. 40-41; ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», op. cit., pp. 2036-2037; ACHÓN BRUÑÉN, M., «Cuestiones prácticas sobre la ejecución ordinaria o provisional de sentencias de condena no dineraria», en *Boletín del Colegio de Registradores de España*, núm. 115, 2005, p. 1193; y MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., pp. 123-124.

⁷¹⁴ En tal sentido, cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 210; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 109.

En contra, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 155, nota 27, afirma que la ejecución provisional puede solicitarse hasta el día de la notificación de la sentencia, pues las resoluciones judiciales surten efectos entre las partes a partir de ese momento.

⁷¹⁵ En efecto, el recurso de apelación puede terminar por providencia ex artículo 456.4.1 de la LEC. Asimismo, el recurso de apelación terminará por medio de auto, cuando la resolución apelada sea un auto (art. 465.1 LEC), regla que se aplica en aquellos casos en que —según sostenemos en este trabajo (*supra*, cap. II, apdo. II.1)—, la ejecución provisional tiene por objeto un auto.

Además, estos recursos pueden terminar por algún medio anormal. Así, en caso de desistimiento del recurso (art. 20.3.II LEC), de caducidad de la instancia (art. 237.2 LEC), o de desaparición del interés legítimo por satisfacción extraprocesal o por cualquier otra causa, se decretará por el secretario la terminación del recurso.

quem para instar la ejecución provisional será el día anterior al de la emisión de la resolución que pone término al recurso⁷¹⁶.

De este modo, si lo que se pretende ejecutar es una sentencia de primera instancia, la demanda de ejecución provisional puede interponerse antes de que se dicte la resolución que pone término al recurso de apelación. A partir de ese momento, ya no cabe instar la ejecución provisional de tal sentencia, sin perjuicio de poder solicitar la ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia⁷¹⁷, siempre que se haya interpuesto algún recurso en su contra y que la sentencia del órgano de apelación contenga algún pronunciamiento de condena a favor de alguno de los litigantes, pues si la resolución no se impugna y la misma deviene firme, cabe instar su ejecución ordinaria⁷¹⁸.

Por esta razón, se ha resuelto que una vez dictada la sentencia en la apelación principal, carece de utilidad pronunciarse sobre el recurso de queja deducido contra la resolución que inadmitió el recurso de apelación contra la resolución que denegó el

⁷¹⁶ En igual sentido, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (I)», *op. cit.* Asimismo, respecto del supuesto regulado en el artículo 465.4.1 de la LEC, *cfr.* GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 210; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 109.

⁷¹⁷ *Cfr.* REVERÓN PALENZUELA, B., «La ejecución provisional de sentencias recurridas en casación civil», *op. cit.*, p. 303.

⁷¹⁸ En relación con este punto, podemos distinguir varias situaciones que facilitarán la comprensión del tema:

- a) Si la sentencia de primera instancia que estima la demanda (principal o reconvencional), es confirmada por la sentencia de segunda instancia, y el actor no solicitó la ejecución provisional de la sentencia del tribunal *a quo*, podrá instar la ejecución provisional de la sentencia del tribunal *ad quem* una vez que se notifique la resolución que tiene por interpuesto un recurso extraordinario en su contra, y hasta la emisión de la resolución que pone término a dicho recurso. En cambio, si ya se había solicitado y acordado la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia, tal ejecución continuará (art. 532 LEC);
- b) Si la sentencia de primera instancia desestima la demanda (principal o reconvencional) y la sentencia de segunda instancia la revoca, el actor podrá instar la ejecución provisional de la sentencia de segundo grado desde que se notifica la resolución que tiene por interpuesto un recurso contra ella, y hasta que se pronuncie la resolución que ponga término a dicho recurso. Si la sentencia de segunda instancia no se impugna, procede solicitar el despacho de la ejecución definitiva;
- c) Si la sentencia de primera instancia que estima la demanda (principal o reconvencional), cuya ejecución provisional fue instada y acordada, es revocada por la sentencia de segunda instancia, nos encontramos ante un supuesto distinto del descrito en la letra anterior, y aquí surge el derecho del ejecutado provisional para obtener la reversión de lo provisionalmente ejecutado, de conformidad con lo establecido en los artículos 533, 534 y 537 de la LEC.

despacho de la ejecución provisional solicitada por el recurrente, pues siendo firme la sentencia de condena, lo que procede es instar su ejecución definitiva⁷¹⁹.

A su vez, la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia sólo puede instarse hasta antes de la emisión de la resolución que pone término al recurso de casación o al recurso extraordinario por infracción procesal. Dictada tal resolución, puede obtenerse el cumplimiento de lo resuelto –en la medida que exista algún pronunciamiento condenatorio a favor de alguna de las partes– a través de la ejecución ordinaria o definitiva, pero para ello, claro está, habrá que esperar el transcurso del plazo de gracia del artículo 548 de la LEC.

Nótese, finalmente, que el despacho de la ejecución provisional puede pedirse durante toda la tramitación del recurso correspondiente, de forma tal que la demanda ejecutiva puede interponerse antes o después de la remisión de los antecedentes por parte del tribunal *a quo* al órgano que conocerá el recurso, cuestión que sólo importa para saber si pesa o no sobre el ejecutante la carga de obtener testimonios de los mismos y certificación de la sentencia, en su caso, como vimos en el epígrafe anterior.

3. Inexigibilidad de caución. Remisión

Una de las características más novedades del modelo de ejecución provisional implementado por la LEC –y también una de las más cuestionados– es la falta de exigencia de caución al solicitante para instar el despacho de la misma (arts. 526 y 535 LEC).

En el primer capítulo de este trabajo nos referimos latamente a los alcances de esta opción legislativa, y a su importancia para favorecer e impulsar la ejecución provisional. Para no reiterar las opiniones expresadas en su oportunidad, y salvo por lo que señalaremos a continuación, nos remitimos a lo allí indicado [*supra*, cap. I, apdo. IV.2.d)].

⁷¹⁹ AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 10 de junio de 2004 (JUR\2004\198071). En similares, términos, *vid.* AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 24 de febrero de 2005 (JUR\2005\91058).

Los tribunales españoles han reconocido que toda la institución de la ejecución provisional resulta muy novedosa en la LEC, y se han ocupado de sintetizar sus principales características –que denominan principios–, entre los que destaca que «no es necesario prestar fianza ni ofrecer caución por el solicitante, aunque al ejecutado le cabe oponerse a la ejecución en los casos previstos en la Ley. Esta se despacha bajo la responsabilidad del actor ejecutante»⁷²⁰.

No obstante la claridad de lo dispuesto en el artículo 526 de la LEC, sumado a las declaraciones contenidas en la Exposición de Motivos de la LEC, alguna resolución de todos modos ha exigido al ejecutante que preste caución para responder de los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar al ejecutado, como requisito para despachar la ejecución provisional de una sentencia.

A nuestro juicio, tal exigencia carece absolutamente de apoyo legal, y no se justifica ni siquiera en supuestos en que previsiblemente la ejecución provisional de un concreto pronunciamiento de condena pueda hacer imposible o muy difícil la reparación del ejecutado en caso de revocación de la sentencia, pues para que el tribunal pueda apreciar dicha circunstancia el ejecutado debe promover el incidente de oposición a la ejecución, en los términos de los artículos 528 y 529 de la LEC. De este modo, si un Juzgado exige al ejecutante la constitución de una caución no prevista por el legislador, decide abiertamente contra el texto y el espíritu de ley, y su decisión supone una indiscutible vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los particulares, del que forma parte el derecho a la ejecución de las sentencias⁷²¹, por lo que cabe apelar esa resolución a la espera de que la Audiencia Provincial respectiva revoque la decisión del tribunal *a quo* y restablezca el imperio del derecho.

Así lo hizo, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid, conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra un auto de un Juzgado de Primera Instancia que

⁷²⁰ En este sentido, entre muchas otras, *vid.* AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (AC\2003\393); AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2006\12881); AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878);

⁷²¹ En el mismo sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 25ª), de 16 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16980/2012), que aprovecha de recordar «la obligación que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a todos los Jueces y Tribunales, de no desconocer, restringir, menoscabar o inaplicar el contenido de un Derecho Fundamental, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión garantizados por el mencionado artículo 24 de la Constitución».

acordó, con carácter previo al despacho de la ejecución provisional solicitada, requerir al ejecutante para que constituyese fianza, en la forma, oportunidad y por la suma por el tribunal indicada, bajo apercibimiento de procederse al archivo del procedimiento.

Resolviendo el citado recurso, el tribunal de alzada afirmó, después de repasar las normas que regulan nuestro instituto, que es improcedente «hacer depender la admisión de la ejecución provisional de una sentencia de condena a cantidad dineraria a que se preste fianza previamente por el beneficiario del título, porque si bien es cierto que no existe una prohibición expresa al tribunal de poder exigir una caución o garantía, ello no es razón para establecer la exigencia previa o simultánea a la solicitud de la fianza, a fin de garantizar los efectos que podrían producirse en el caso de que la sentencia fuera revocada, y ello porque se ha de estar por un lado a la literalidad del artículo 526 LEC y por otro acudir a la Exposición de Motivos»⁷²².

El mismo auto añade «que no puede exigírsele a la parte que solicita la ejecución provisional si el título es ejecutivo, y procede, una fianza como garantía de las consecuencias futuras de una probable revocación de la sentencia, se deriva de que la Ley vigente que innova la regulación anterior, y así se indica expresamente en la Exposición de Motivos, conforme con lo regulado en los preceptos contenidos en la misma, artículos 526 y siguientes, que lo que se ha tratado es de modificar el sistema anterior, en el que sí era exigencia previa la prestación de caución para garantizar ese posible resarcimiento ulterior derivado de una posible o probable revocación de sentencia, por muy lejana que fuera esa posibilidad».

Tras exponer los argumentos transcritos, a los que nos adherimos plenamente, la resolución termina por concluir que «lo exigido por el tribunal de instancia no se ajusta a la regulación vigente, cuestión distinta es que en trámite de oposición se pueda entender necesaria la misma, pero nunca como requisito previo para admitir la ejecución».

⁷²² AAP Madrid (Secc. 21ª), de 14 de marzo de 2011 (ROJ AAP M 3432/2011).

4. Formación de autos o expediente propio

Durante la pendencia de un recurso devolutivo, los antecedentes originales no se encuentran a disposición del tribunal competente para la ejecución provisional, sino que estarán a disposición del al tribunal competente para conocer del mismo. En efecto, una vez interpuesto el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, los deben ser remitidos a la Audiencia Provisional que corresponda (art. 463 LEC). Del mismo modo, interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación contra una sentencia de segunda instancia, los autos serán remitidos al TS (arts. 472, 482 y Disposición Final 16ª LEC).

La circunstancia anterior implica que las actuaciones relativas a la ejecución provisional de una resolución deberán registrarse en un expediente propio que al efecto se formará⁷²³, cuya custodia corresponderá al secretario judicial (art. 148 LEC).

La LEC nada dice sobre el particular, pero conforme con la Instrucción 3/2001, de 20 de junio, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre anotación de los procesos civiles de ejecución en los libros de los Juzgados y Tribunales, «se asignará a los procesos civiles de ejecución, sea provisional o definitiva y cualquiera que sea el título que le haya dado origen, un número correlativo, distinto y separado del que se haya asignado al proceso declarativo del que traiga causa, en su caso, la ejecución, indicando en la anotación de la ejecución el número correspondiente a dicho proceso declarativo»⁷²⁴.

II. EL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

En el modelo español de ejecución provisional, es la propia ley la que concede efectividad de las sentencias que no son firmes, característica que permite calificarlo como un sistema de ejecución provisional *ope legis*, por oposición a los sistemas *ope*

⁷²³ Como afirma FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 155, «parece inevitable que el juez forme pieza separada para sustanciar lo que se refiere a la ejecución provisional».

⁷²⁴ En igual sentido, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., pp. 365-366; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 115.

iudicis, en que la ley entrega al tribunal la facultad de conceder o no, a través de una resolución judicial distinta de cuya eficacia se trata, la ejecución provisional [*supra*, cap. I, apdo. IV.2.c)].

De esta forma, solicitada la ejecución provisional de una resolución judicial, al igual que en la ejecución ordinaria o definitiva, el tribunal examinará si concurren los presupuestos y requisitos procesales para acordarla, de lo que puede resultar que el tribunal despache o deniegue la ejecución provisional.

La LEC, en consecuencia, regula esta materia partiendo de la base que ya existe un título ejecutivo, que no es otro que la sentencia –o el auto– de condena cuya ejecución provisional se solicita, sin que sea necesario que medie resolución judicial alguna para crear, completar o confirmar la existencia de dicho título⁷²⁵.

Como se sabe, el artículo 517.2.1º de la LEC confiere expresa y claramente mérito ejecutivo a la sentencia de condena firme, sin hacer mención a la sentencia no firme y recurrida, susceptible de ejecución provisional. Por otro lado, no encontramos norma alguna en título que regula nuestra institución que prescriba categóricamente que la sentencia ejecutable provisionalmente es un título ejecutivo.

No obstante, a falta de mención expresa, lo dispuesto en los artículos 517.2.9º – en tanto señala que son títulos ejecutivos las resoluciones que, según la ley, lleven aparejada ejecución– en relación con los artículos 524 y 525 de la LEC, otorgan base legal para que se considere a las sentencias de condena no firmes susceptibles de ejecución provisional como verdaderos títulos ejecutivos⁷²⁶. No se trata, por tanto, de un título ejecutivo complejo, formado por la unión de la sentencia de condena no firme y la

⁷²⁵ En similares términos, MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 301, explican que «la ejecución provisional se regula en la LEC partiendo de que el título ejecutivo es la sentencia definitiva de condena, de modo que el tribunal competente se limita a despachar la ejecución sin que sea él el que crea el título ejecutivo».

⁷²⁶ En el mismo sentido, ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 705-706, sostiene que la condición de título ejecutivo de la sentencia de condena no firme «deriva de lo dispuesto por el artículo 517.2.9º en relación con los artículos 524 y 525 LECiv, que establecen que las sentencias de condena recurribles o recurridas –con excepción de algunas– permiten obtener el despacho de ejecución».

resolución que despacha la ejecución provisional: la sentencia de condena no firme, susceptible de ejecución provisional, es *per se* un título ejecutivo⁷²⁷.

En consecuencia, si no es el juez quien otorga eficacia ejecutiva a las sentencias de condena no firmes, las facultades discrecionales del tribunal se reducen, en la etapa inicial del procedimiento de ejecución provisional, a comprobar que se cumplan los presupuestos y requisitos procesales para el despacho de la ejecución, de manera que, concurriendo tales presupuestos y requisitos, debe necesariamente acordar la ejecución provisional, como veremos a continuación.

1. Examen de los presupuestos y requisitos procesales

De acuerdo con el artículo 527.3 de la LEC, solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará salvo que se trate de una comprendida en el artículo 525 o que no contuviere pronunciamiento de condena a favor del solicitante.

Parece indicar con ello la ley procesal que los únicos elementos que debe considerar el tribunal a la hora de examinar la demanda de ejecución provisional son los que acabamos de indicar⁷²⁸. Sin embargo, ello no es así, porque los supuestos considerados por el artículo 527.3 de la LEC para denegar el despacho ni siquiera comprenden todos los requisitos y presupuestos propios de la ejecución provisional, de un lado, y porque la ejecución provisional se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria (art. 524.2 LEC), por otro, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 551.1 de la LEC en sede de ejecución ordinaria, según el cual, el tribunal despachará la ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título no adolezca de irregularidades formales, y los actos de ejecución solicitados sean conformes con la naturaleza y contenido del

⁷²⁷ Con este enfoque, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, pp. 372-373.

⁷²⁸ Así lo entiende el AAP Burgos (Secc. 2ª), de 13 de noviembre de 2001 (AC\2002\114), en el que se declara que «el artículo 527.3 establece el principio general de que, solicitada la ejecución provisional, el Tribunal debe acceder a ella, salvo en los supuestos expresamente tasados por el legislador, cuales son el de que se trate de sentencias no provisionalmente ejecutables o que el título judicial no tuviere pronunciamiento de condena a favor del solicitante de la ejecución provisional».

título⁷²⁹. De lo anterior, resulta que la regla del artículo 527.3 de la LEC debe ser complementada con diversas disposiciones legales que regulan los presupuestos y requisitos procesales para el despacho de la ejecución⁷³⁰.

En esta línea, resulta muy clarificador lo declarado por la Audiencia Provincial de Vizcaya, según la cual «el núm. 3 del art. 527 en coherencia con la naturaleza jurídica “ope legis” de la institución ordena al Juez despachar la ejecución una vez solicitada. El despacho de ejecución se adopta sin intervención del ejecutado. Para denegar o despachar ejecución provisional instada el juez debe vigilar, incluso de oficio, la confluencia de las exigencias que condicionan el despacho, así debe comprobar además de las formalidades de la propia demanda que se han aportado los documentos que deben acompañarla y que concurren los requisitos procesales generales, debiendo vigilar también que el título no adolezca de irregularidad formal y que los actos de ejecución pedidos son acordes con la naturaleza y contenido del título. Asimismo debe comprobar los requisitos específicos del despacho de ejecución provisional, esto es que la resolución o el pronunciamiento cuya ejecución provisional se pide no esté excluido de la misma por el art. 525 LECiv y que exista pronunciamiento a favor del solicitante adoptado en sentencia de condena (art. 527/3)»⁷³¹.

Como se observa, el examen de los presupuestos y requisitos que debe realizar el tribunal es bastante más amplio que la sola verificación de que se trata de una sentencia susceptible de ser ejecutada provisionalmente y que el solicitante tiene legitimación activa, esto es, que la sentencia contiene un pronunciamiento a su favor, como se desprende del tenor literal del apartado 3 del artículo 527 de la LEC.

⁷²⁹ En igual sentido, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., pp. 155-156, expresa que el artículo 527.3 de la LEC dispone que el juez despachará la ejecución con la sola concurrencia de las circunstancias que la misma norma indica, sin embargo, ello no es cierto, porque «para despachar ejecución provisional, además de a los requisitos específicos del art. 527 3, el Juez debe atender a la concurrencia de todos los requisitos que condicionan el despacho de la ejecución (y tanto los que están en el art. 551 1 como aquellos que no están)».

⁷³⁰ Como enseña ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, op. cit., p. 747, a propósito del examen de la demanda de ejecución ordinaria, pero que resulta plenamente aplicable a control que realiza el tribunal de la solicitud de ejecución provisional, «las reglas de juicio que ha de aplicar el tribunal y los aspectos del caso que ha de tomar en consideración para resolver sobre el despacho de la ejecución se deducen de diversas disposiciones de la ley (arts. 551.1, 552.2.1, 559.1 LECiv), cuya interconexión sistemática debe ser resaltada».

⁷³¹ AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

En definitiva, el control de oficio por el tribunal comprende todos los presupuestos y requisitos procesales⁷³², a saber: *a) presupuestos*: relativos al tribunal, especialmente su propia competencia funcional (*supra*, cap. IV, apdo. I); y relativos a las partes, sobre todo en lo relativo a la legitimación (art. 526 y 527.3 *in fine* LEC) (*supra*, cap. IV, apdo. II.1) y a la postulación procesal (*supra*, cap. IV, apdo. II.2); y *b) requisitos*: de la demanda, tanto en sus aspectos formales (*supra*, apdo. I.1) como en el temporal (*supra*, apdo. I.2); del título, esto es, verificar que se trata de sentencia de condena que no se encuentre legalmente excluida de ejecución provisional (art. 527.3 LEC) (*supra*, cap. III); y de la actividad ejecutiva, en los términos del artículo 551.1 de la LEC.

Sin embargo, esta apertura de las facultades del juez para controlar requisitos y presupuestos regulados en diversos preceptos legales, tanto en sede de ejecución provisional como en sede de ejecución definitiva, no habilita al tribunal para pronunciarse en este estadio del procedimiento, y de oficio, sobre la posible concurrencia de un motivo de oposición, o sobre la oposición formulada extemporáneamente por el ejecutado provisional, como veremos en seguida.

2. Decisión sobre el despacho de la ejecución provisional

Según lo visto en el epígrafe anterior, solicitada la ejecución provisional de una sentencia el tribunal debe examinar si concurren o no los requisitos y presupuestos procesales —en términos amplios, no sólo los enunciados en el artículo 527.3 de la LEC— para despachar la ejecución, de manera que si se cumple con tales exigencias, el tribunal debe inexorablemente acordar la ejecución, automáticamente⁷³³, pues no es potestativo para el juez el despacho de la ejecución en estas circunstancias, sino obligatorio.

Sobre esta idea, se tiene resuelto que «conforme a lo prevenido en el artículo 527.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitada la ejecución provisional, el tribunal

⁷³² Por todos, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 367; y GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 212-213.

⁷³³ Como afirma GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 117, «solicitada la ejecución provisional, si concurren los presupuestos y requisitos procesales, el despacho de la misma debe tener lugar *ex lege* o de forma automática».

viene obligado a despacharla, salvo que se tratara de sentencia no susceptible [de] ejecución provisional o que no contuviera pronunciamiento de condena a favor del solicitante»⁷³⁴. Con otras palabras, se ha declarado que «la ejecutabilidad provisional de una sentencia se da ex lege y no tiene que ser concedida por el tribunal por lo que el Tribunal debe en todo caso despachar la ejecución provisional si concurren los requisitos previstos por la ley»⁷³⁵.

Con otras palabras, el tribunal sólo puede denegar el despacho de la ejecución provisional si observa la falta algún presupuesto o requisito procesal para ello. Con todo, si se trata de un *defecto subsanable*, el tribunal debe permitir la subsanación antes de denegar el despacho⁷³⁶, para lo cual puede conceder el mismo procedimiento previsto para cuando el defecto es denunciado por el ejecutado⁷³⁷, esto es, conceder por providencia al ejecutante un plazo de 10 días para subsanar el defecto (art. 559.2.I LEC)⁷³⁸.

En estos casos, si el ejecutante subsana el defecto –por ejemplo, la falta de firma del abogado o del procurador en la solicitud de ejecución provisional; o la falta de aportación del testimonio de la sentencia, en su caso–, el tribunal está en condiciones de despachar la ejecución provisional. Pero si el defecto no se subsana dentro del plazo concedido al efecto, el tribunal denegará la emisión del despacho de ejecución, por aplicación, *mutatis mutandi*, de artículo 559.2.II de la LEC.

Recapitulando, si concurren los presupuestos y requisitos procesales, el título no adolece de irregularidades formales y las actividades ejecutivas solicitadas por el

⁷³⁴ AAP Madrid (Secc. 25ª), de 16 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16980/2012). En igual sentido, *vid.* AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2006\12881); AAP Burgos (Secc. 2ª), de 13 de noviembre de 2001 (AC\2002\114).

⁷³⁵ AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 3ª), de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\132336).

⁷³⁶ Por todos, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 911; y PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», *op. cit.*

⁷³⁷ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 751. En igual sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 42; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 116.

⁷³⁸ En contra, ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 101, sostiene que en estos casos debe concederse un plazo corto pero razonable para la subsanación, pero no llega a aplicar el plazo de 10 días dispuesto en el artículo 559.2 de la LEC.

ejecutante se ajustan al título ejecutivo, el tribunal *despachará la ejecución* (art. 527.3 en relación con el artículo 551.1 de la LEC), sin oír previamente al ejecutado (*inaudita parte debitoris*). La resolución por la que se acuerda el despacho de la ejecución provisional adopta la forma de auto, y contra ella no procede recurso alguno⁷³⁹, sin perjuicio del derecho del ejecutado de oponerse a la ejecución provisional (art. 527.4 *in fine* LEC)⁷⁴⁰.

Ciertamente, la ausencia de recursos contra el auto que despacha la ejecución provisional es una pieza clave para alcanzar la pretendida efectividad de las sentencias de condena recurridas⁷⁴¹, pues evita dilaciones innecesarias que atenten contra dicho objetivo, sin menoscabar el interés del ejecutado, pues queda a salvo la posibilidad de oponerse a la ejecución, de acuerdo con un procedimiento y motivos especialmente regulados⁷⁴². Con todo, si la misma resolución que despacha la ejecución provisional contiene otros pronunciamientos, cabe el recurso de apelación respecto de los mismos⁷⁴³. Asimismo, procede el recurso de apelación contra la resolución que accede parcialmente al despacho, en la parte que lo deniega⁷⁴⁴.

De este modo, emitido el auto por el que se despacha la ejecución provisional, el ejecutado no puede impugnar esa resolución, sino que sólo puede oponerse a la misma invocando alguno de los motivos tasados previstos en la ley, entre los que cabe –en

⁷³⁹ Por esta razón, el AAP Valladolid (Secc. 3ª), de 26 de noviembre de 2001 (JUR\2002\22389) rechazó un recurso de queja intentado contra la resolución que inadmitió un recurso de apelación contra el auto que despachó la ejecución provisional.

⁷⁴⁰ En esta parte, la tramitación de la ejecución provisional coincide plenamente con la sustanciación de la ejecución definitiva, pues contra el auto que despacha tal ejecución no procede recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el demandado (art. 551.4 LEC).

⁷⁴¹ En similares términos, cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 101.

⁷⁴² Como recuerda el AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878), «el modelo de ejecución provisional introducido por la nueva LECiv comporta la existencia de un riesgo asumido por el legislador cuya moderación se articula a través de la oposición o del recurso a la vía de apremio en caso de ser necesario.

⁷⁴³ En tal sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 370.

⁷⁴⁴ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 911.

relación con lo que estamos analizando—, el despacho de la ejecución provisional con infracción de lo dispuesto en el artículo 527 de la LEC (art. 528.2.1º LEC)⁷⁴⁵.

En cambio, si no concurren todos los presupuestos y requisitos procesales, o si existiendo defectos subsanables el ejecutante no los subsana dentro de plazo, el tribunal *denegará el despacho* de la ejecución provisional. Esta resolución también debe adoptar la forma de auto⁷⁴⁶, pero a diferencia del supuesto anterior, contra ella cabe recurso de apelación, sin necesidad de reposición previa⁷⁴⁷—a diferencia de lo que sucede en la ejecución ordinaria contra el auto que deniega el despacho (art. 552.2 LEC)—, el que se tramitará y resolverá con carácter preferente (art. 527.4 LEC).

En consecuencia, las facultades discrecionales del tribunal en la fase inicial del proceso de ejecución provisional se encuentran bien delimitadas, reduciéndose básicamente a la comprobación de la concurrencia de todas las exigencias necesarias para el despacho de la ejecución, y nada más⁷⁴⁸.

Desde esta perspectiva, no resulta acertado que el tribunal deje en suspenso la decisión sobre el despacho de la ejecución provisional a la espera de lo que se resuelva por el tribunal competente para conocer del recurso de queja intentado contra la resolución que declara no tener por interpuesto el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal, o de casación que se interpuso contra la resolución que se pretende ejecutar provisionalmente⁷⁴⁹. Por lo demás, según sostenemos en este trabajo,

⁷⁴⁵ Según el AAP Castellón (Secc. 3ª), de 17 de abril de 2015 (vLex-578463214), procede la declaración de nulidad de oficio del auto que despacha la ejecución provisional de una resolución no susceptible de tal ejecución, al amparo del artículo 227.2 de la LEC.

⁷⁴⁶ Como tuvo ocasión de recordar el AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 10 de junio de 2004 (JUR\2004\198071), al declarar que «solicitada la ejecución provisional, se denegó esta petición por medio de providencia de fecha 19 de febrero de 2004, siendo ésta la primera irregularidad formal pues la denegación debió adoptar forma de auto».

⁷⁴⁷ En el mismo sentido, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 369; y MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 127.

⁷⁴⁸ En similares términos, cfr. SAN CRISTOBAL REALES, S., «La ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, pp. 93-94.

⁷⁴⁹ Al respecto, el AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 24 de febrero de 2005 (JUR\2005\91058) tiene resuelto que «por lo que atañe a la posibilidad de dejar en suspenso la solicitud de ejecución, asiste la razón a la apelante cuando impugna dicha decisión, al ser lo cierto que el juzgador tiene la obligación de despacharla o, en su caso, de denegarla si concurre alguno de los supuestos en los que se excluye la

en estos supuestos nos encontramos ante una resolución firme, por lo que el tribunal debe despachar la ejecución, la que se sustanciará de acuerdo con el cauce de la ejecución ordinaria o definitiva [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)].

En la misma línea, carece de fundamento legal la denegación del despacho de la ejecución provisional por apreciar de oficio el tribunal que concurre alguno de los motivos de oposición que puede alegar el ejecutado, o por considerar que con ello se evitan las gravosas consecuencias que se podrían derivar para el ejecutado de una eventual estimación del recursos interpuesto contra la sentencia cuya ejecución se pretende.

En efecto, no debe estudiarse en este momento la concurrencia de causas de oposición a la continuación de la ejecución provisional, pues estas cuestiones sólo pueden analizarse en un momento posterior –al decidir sobre la oposición a la ejecución provisional (art. 530 LEC)– y previa solicitud de parte (art. 528 LEC) ⁷⁵⁰.

No obstante, han existido casos en la práctica en que los tribunales aprecian de oficio, al momento de decidir sobre el despacho de la ejecución provisional, la concurrencia de un motivo de oposición –imposibilidad de restaurar la situación anterior o de compensar económicamente al ejecutado en caso de revocación–, denegando el despacho de la misma.

Al respecto, somos del parecer que el tribunal que deniega anticipadamente el despacho de la ejecución provisional por apreciar de oficio un motivo de oposición, no sólo infringe abiertamente lo dispuesto en el artículo 527.3 de la LEC, sino que, además, vulnera el principio dispositivo o de justicia rogada, en tanto el tribunal sólo puede apreciar tales circunstancias si el ejecutado se opone a la oposición *ex* artículo 528 de la LEC. Al mismo tiempo, esta práctica lesiona las garantías procesales de contradicción y defensa del solicitante de la ejecución provisional, en la medida que impide al

posibilidad de acordarla, tal y como se infiere de lo dispuesto en el artículo 527 LECiv, citado en el recurso».

⁷⁵⁰ Como expresa CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 42. En igual sentido, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «Cuestiones prácticas sobre la ejecución ordinaria o provisional de sentencias de condena no dineraria», *op. cit.*, p. 1194.

ejecutante alegar cuanto estime conveniente para acreditar la inexistencia de un perjuicio irreparable, como lo autoriza el artículo 529.2 de la LEC⁷⁵¹.

Afortunadamente⁷⁵², las Audiencias Provinciales que conocen de los recursos de apelación intentados contra los autos que deniegan el despacho de la ejecución provisional en los supuestos que comentamos, en su mayoría vienen revocando tales resoluciones, aplicando correctamente las normas de la LEC que regula el sistema de despacho *ope legis*, al entender que no corresponde al juez «adelantar a la fase de admisión los motivos de oposición dependientes de la iniciativa del ejecutado»⁷⁵³.

Así, por ejemplo, se tiene resuelto que «la interpretación conjunta de los arts. 525 a 528 de la LECiv de 2000, y el texto expreso del núm. 3 de su art. 527 no dejan lugar a dudas. El Juez sólo podrá denegar "ex officio" la ejecución provisional "cuando se trate de sentencia comprendida en el art. 525 o que no contuviere pronunciamiento de condena a favor del ejecutante". En los demás casos la "despachará". De manera que cualquier otro argumento que se oponga a esa ejecución queda reservado al ámbito del derecho dispositivo del ejecutado, y sometido al principio de rogación, en virtud del cual, y haciendo uso de las facultades que le reconoce el art. 528, puede él oponerse a la ejecución provisional una vez que ésta haya sido despachada, cuya oposición habrá de basarla, en alguna de estas causas: "1ª En todo caso, haberse despachado la ejecución provisional con infracción del artículo anterior. 2ª Si la sentencia fuese de condena no dineraria, resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquella sentencia fuese revocada". Sin embargo, no puede el juez legítimamente, sustrayendo esa facultad del ejecutado, eliminar el debate

⁷⁵¹ En este punto, seguimos a CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 114-115.

⁷⁵² Siguiendo las palabras de GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 118.

⁷⁵³ AAP Tarragona (Secc. 2ª), de 4 de diciembre de 2002 (JUR\66826).

entre las partes, y anticipar su juicio a una cuestión no formulada por la única parte que puede plantearla»⁷⁵⁴.

En el mismo sentido, se ha declarado que «si concurren los presupuestos necesarios y se han cumplido las exigencias procesales el Tribunal debe despachar la ejecución. No cabe en este momento valorar la conveniencia o inconveniencia de despachar la ejecución provisional, ni tampoco la solvencia u otras circunstancias que puedan concurrir en el ejecutante, insolvencia, desaparición, en orden a la eventual devolución de lo percibido, ni tampoco cabe plantear en este momento circunstancias que, en su caso, han de alegarse en la oposición»⁷⁵⁵.

En forma aislada, sin embargo, la Audiencia Provincial de Murcia confirmó la resolución recurrida que denegó la ejecución provisional de una sentencia de condena de hacer, atendidas las consecuencias que se pudieran derivar de una eventual estimación del recurso de apelación principal⁷⁵⁶.

No podemos compartir este razonamiento, pues, como hemos expuesto, esta solución carece de respaldo normativo y supone una grave infracción de reglas que regulan el despacho de la ejecución provisional, e implica, además, una vulneración tanto del principio dispositivo o de justicia rogada como de las garantías de contradicción y defensa del ejecutante.

⁷⁵⁴ AAP Valencia (Secc. 6ª), de 16 de octubre de 2001 (AC\2002\506). En igual sentido, con reproducción del auto transcrito, *vid.* AAP Valencia (Secc. 6ª), de 17 de mayo de 2003 (JUR\2003\172050).

⁷⁵⁵ AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878). En similares términos, el AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 30 de noviembre de 2004 (JUR\2005\5739) estableció que «el recurso ha de ser estimado dado el propio contenido del auto recurrido, ya que, en dicha resolución se afirma, y ello es jurídicamente correcto, que la Sentencia que se trata de ejecutar provisionalmente reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art. 524 de la LECiv, siendo una sentencia no incluida entre las inejecutables provisionalmente señaladas en el art. 525, y cuando, a continuación se razona que no obstante lo cual “siendo la sentencia de condena no dineraria y estimando que resultaría de extrema dificultad, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o en su caso, compensar económicamente al ejecutado” lo que está enunciando la Juzgadora de Instancia es el contenido del apartado 2 núm. 2 del art. 528 de la L. E. Civil y que no es otra cosa que “un motivo de oposición que puede oponer el ejecutado” pero no, un motivo que pueda apreciar de “oficio” la Juzgadora sin que se haya cumplido dicho trámite de oposición, para denegar “ab initio” un despacho de ejecución legalmente previsto».

⁷⁵⁶ AAP Murcia (Secc. 3ª), de 8 de noviembre de 2007 (JUR\2008\77653).

Finalmente, y por las mismas razones comentadas más arriba, el tribunal no puede denegar el despacho de la ejecución provisional atendiendo a los motivos de oposición que alegue extemporáneamente el ejecutado. Como adelantamos, el ejecutado puede oponerse a la ejecución provisional sólo una vez despachada la ejecución (art. 528.1 LEC).

Sin embargo, se han dado casos en la práctica en que el ejecutado presenta su escrito de oposición a la ejecución provisional antes del despacho de la misma, con el objeto de evitar que se adopten medidas ejecutivas en su contra.

Ante esta situación, debe recordarse que el tribunal decidirá sobre el despacho de la ejecución provisional *inaudita parte debitoris*, esto es, sin oír previamente al ejecutado. Por lo tanto, el juez despachará o denegará el despacho únicamente con base a los antecedentes proporcionados por el acreedor en su demanda ejecutiva, y si de hecho se formulara oposición o interviniera el ejecutado alegando razones para que no se despache la ejecución en su contra, el tribunal no tiene el deber de considerarlas.

Si, no obstante lo anterior, el tribunal aprecia los motivos de oposición invocados por el ejecutado, incurre en una flagrante vulneración del procedimiento establecido en la ley para la sustanciación de la ejecución provisional, tanto en lo relativo al despacho de la misma (art. 527.3 LEC), como a la oportunidad para presentar la oposición (art. 529.1 LEC), todo lo cual desnaturaliza el modelo de ejecución provisional introducido por la LEC.

Además, esta denegación lesionaría las garantías procesales de defensa y contradicción del ejecutante, pues lo privaría de la posibilidad de impugnar los motivos de oposición alegados por el ejecutado que le reconoce el artículo 529.2 de la LEC, o de ofrecer en caso de que la oposición se fundara en la causa segunda del apartado 2 del artículo 528 de la LEC, para el caso de ejecutarse una sentencia que contenga un pronunciamiento de condena no dineraria (art. 529.3 LEC)⁷⁵⁷.

⁷⁵⁷ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 112-113.

De acuerdo con lo que indicamos, se ha resuelto que la regla del artículo 527.3 de la LEC «se complementa con el hecho de que la solicitud de ejecución se dirige por quien la promueve al Tribunal, sin que se contemple la posibilidad de hacer alegaciones por parte de la persona contra quien se dictó título ejecutivo judicial, quien, de acuerdo con el artículo 528.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sólo puede hacer alegaciones una vez haya sido la misma despachada; criterio que, por otra parte, se corresponde con el principio de irrecurribilidad de los autos despachando ejecución a que se refiere el artículo 551.2 de la citada nueva Ley Procesal Civil»⁷⁵⁸.

En suma, la denegación del despacho de la ejecución provisional sólo puede estar fundada en la falta de algún presupuesto o requisito procesal. En ningún caso puede el tribunal, de oficio o a instancia del ejecutado, denegar el despacho por apreciar la concurrencia de un motivo de oposición, para evitar las consecuencias de la eventual revocación de la sentencia que se ejecuta, por carecer el ejecutante de los medios para responder de los daños y perjuicios causados al ejecutado en caso de revocación, ni por ninguna otra circunstancia que no sean las indicadas precedentemente.

3. Resolución que despacha la ejecución provisional

La LEC no contiene previsión alguna sobre el contenido del auto que despacha la ejecución provisional, por lo que rigen las reglas establecidas para el auto que despacha la ejecución ordinaria o definitiva, de acuerdo con la remisión a dichas normas contenida en el artículo 524.2 de la LEC.

De este modo, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 551 de la LEC, el auto por el que se despacha la ejecución contendrá la *orden general de ejecución*, en la que se expresará (art. 551.2 LEC): «1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas contra quien se despacha ésta. 2.º Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria. 3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los conceptos. 4.º Las precisiones que resulte necesario

⁷⁵⁸ Así lo declara el AAP Burgos (Secc. 2ª), de 13 de noviembre de 2001 (AC\2002\114), que concluye afirmando que «sólo cuando ésta (la ejecución provisional) se despache, si la parte ejecutada se opone a dicha ejecución podrá darse lugar a su consideración, pero no antes, pues, como se vio, sólo cuando se despacha la ejecución es factible expresar la oposición por el condenado provisional; no antes».

realizar respecto de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución, según lo establecido en el artículo 538 de esta ley».

Tras la reforma operada por la tantas veces citada Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que distribuye las funciones entre el juez y el secretario judicial, lo que se aprecia con mayor nitidez en el proceso de ejecución⁷⁵⁹, el auto por el que se despacha la ejecución –ordinaria o provisional– se limita a reconocer el derecho del ejecutante a la ejecución y a determinar su alcance objetivo y subjetivo, correspondiendo al el secretario judicial decretar (o preparar) las medidas ejecutivas necesarias para la ejecución (art. 551.3 LEC)⁷⁶⁰.

En efecto, el mismo día o al día siguiente hábil a aquel en que el tribunal haya dictado el auto despachando la ejecución provisional, el secretario judicial responsable de la ejecución dictará decreto en el que se contendrán: «1.º Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes. 2.º Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590» (art. 551.3.I LEC).

Nótese que según el numeral 3º del apartado 3 del artículo 551 de la LEC, el decreto del secretario judicial debe expresar el contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos que la ley establezca tal requerimiento⁷⁶¹. Pues bien, de acuerdo con el artículo 580 de la LEC, no es necesario requerir de pago en las ejecuciones dinerarias basadas en título ejecutivos judiciales. De ahí que el decreto que dicte el secretario judicial tras el despacho de la ejecución provisional no debe incluir

⁷⁵⁹ Como expresan BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B., «Reformas del Libro III sobre proceso de ejecución y medidas cautelares», *op. cit.*, p. 309, «es precisamente en el proceso de ejecución donde se desarrolla con mayor plenitud la separación de funciones entre el Tribunal y el Secretario Judicial y la potenciación de este último, recogiendo y desarrollando el espíritu del art. 456.3.a) LOPJ. La LINOJ, sin embargo, ha incurrido en el exceso de dotar al Secretario Judicial de un papel que invade las tareas propiamente jurisdiccionales que la Constitución reserva a los Jueces y Magistrados».

⁷⁶⁰ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 753.

⁷⁶¹ El tenor actual de este numeral fue fijado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

esta mención⁷⁶². Por idéntica razón, las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado se realizarán inmediatamente, sin necesidad de oír al ejecutado ni de esperar la notificación del auto que acuerda la ejecución provisional (art. 554.1 LEC).

Fuera de lo anterior, y atendido que la ejecución provisional también procede respecto de las condenas no dinerarias –salvo que consistan en la emisión de una declaración de voluntad *ex* artículo 525.1.2ª de la LEC (*supra*, cap. III, apdo. I.3)–, el propio auto por el que se despacha la ejecución provisional contendrá en estos casos el requerimiento al ejecutado para que cumpla la sentencia en sus propios términos, dentro del plazo que fije el tribunal (art. 699 LEC).

Pasando a otro punto, cabe tener presente que tras la reforma operada por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil⁷⁶³, despacha la ejecución –ordinaria o provisional–, que agregó un párrafo segundo al numeral 3º del artículo 551.3 de la LEC, el secretario judicial debe poner en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del auto por el que se despacha la ejecución, individualizando a la persona

⁷⁶² En igual sentido, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 120; y GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 214.

En contra, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 42, sostiene que el artículo 580 de la LEC no se aplica en sede de ejecución provisional, por lo que, en su opinión, despachada la ejecución debe requerirse de cumplimiento al ejecutado. En el mismo sentido, *vid.* ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, pp. 744-745; y LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», *op. cit.*, p. 1845, para quien el requerimiento de pago se exige sólo tratándose de condenas no dinerarias, *ex* artículo 699 de la LEC.

Por su parte, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 156, nota 32, afirma que si bien no procede el requerimiento de pago, su introducción en la ejecución provisional sería deseable.

⁷⁶³ Esta reforma introdujo importantes modificaciones que afectaron al proceso de ejecución civil. Sobre el particular, sin rigor exhaustivo, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «Comentario crítico de las modificaciones introducidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria por la Ley 19/2015, de 13 de julio», en *Diario La Ley*, núm. 8619, 2015; CORVO LÓPEZ, F., «Subastas electrónicas y tramitación electrónica de las inscripciones de nacimiento y defunción», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 4, pp. 237-241; ACHÓN BRUÑÉN, M., «La reforma de las subastas judiciales por las Leyes 19/2015, de 13 de julio y 42/2015, de 5 de octubre: problemas que se solventan y nuevos que se generan», en *Diario La Ley*, núm. 8644, 2015; LÓPEZ CHOCARRO, I., y DAVÍ NAVARRO, R., «La nueva subasta electrónica: crónica de un vía crucis inexplicable», en *Diario La Ley*, núm. 8711, 2016; y GARCÍA SOLER, E., «La notificación de la subasta judicial al ejecutado no personado», en *Diario La Ley*, núm. 8774, 2016.

física o jurídica frente a la que se despacha, regla que persigue facilitar una serie de efectos propios de la legislación concursal.

Como indicamos más arriba, la ejecución –ordinaria y provisional– se autoriza y acuerda sin oír previamente al ejecutado, por lo que una vez despachada, la actividad ejecutiva que se dirige en su contra le debe ser comunicada. Para ello, de acuerdo con el artículo 553 de la LEC, el auto que despacha la ejecución provisional, con copia de la demanda ejecutiva, y el decreto que dicte el secretario judicial, se notifican al simultáneamente al ejecutado, o al procurador que lo represente, sin emplazamiento ni citación, para que pueda personarse en cualquier momento, y eventualmente, oponerse a la ejecución (art. 528 LEC).

Recuérdese que, a estos efectos, y no obstante que las partes normalmente obrarán representadas por procurador en el proceso declarativo del que trae causa la ejecución provisional, somos de la opinión de que no se aplica el sistema de traslado de copias del artículo 276 de la LEC (*supra*, apdo. I.1).

Notificadas las resoluciones anteriores, la ejecución provisional se desarrollará de conformidad con las reglas de la ejecución ordinaria (art. 524.2 LEC), para lo que habrá que distinguir según se trate de una condena dineraria o de una condena no dineraria. En el primer caso, se aplican las normas del Título IV del Libro III de la LEC (arts. 571 a 680 LEC); en el segundo, rige lo previsto en el Título V del Libro III de la LEC (arts. 699 a 720 LEC).

El ejecutado provisional, una vez que se le notifica la resolución que autoriza el despacho de la ejecución provisional en su contra, puede asumir alguna de las siguientes actitudes: permanece inactivo, oponerse a la ejecución o cumplir lo ordenado en la sentencia.

En el primer caso, la ejecución provisional continuará su curso, como ya dijimos, según las reglas de la ejecución ordinaria (art. 524.2 LEC). Esta ejecución terminará cuando se dé completa satisfacción a lo solicitado por el ejecutante, lo que se

acordará por decreto del secretario judicial (art. 570 LEC)⁷⁶⁴. No obstante, atendida la naturaleza provisional de la actividad ejecutiva desplegada, la consolidación de lo realizado, la continuación del proceso de ejecución con carácter de definitivo, o la reversión de lo ejecutado dependerá de la confirmación o revocación, respectivamente, de la resolución provisionalmente ejecutada, como veremos en el próximo capítulo de este trabajo.

En segundo lugar, el ejecutado puede oponerse a la ejecución provisional a través de un procedimiento y unos motivos de oposición especialmente regulados en la ley rituarial (arts. 528 a 530 LEC), a los que nos referiremos en el apartado siguiente.

Finalmente, el ejecutado puede cumplir voluntariamente lo ordenado por la sentencia de condena, alternativa que puede interesarle a fin de evitar las gravosas consecuencias de la ejecución despachada en su contra. La LEC no contempla esta opción dentro de las normas que regulan la ejecución provisional, por lo que serán de aplicación las reglas generales. Con todo, en el artículo 530 de la LEC se prevé la posibilidad de suspender la ejecución provisional de condenas dinerarias si el ejecutado poner a disposición del tribunal, para su entrega al ejecutante, la cantidad a que hubiere sido condenado, lo que viene a identificarse con el cumplimiento de la sentencia de condena, como tendremos oportunidad de analizar más adelante (*infra*, cap. VI, apdo. II.2).

⁷⁶⁴ En relación al término del proceso de ejecución, en general, la formal normal será la entera satisfacción del ejecutante. Sin embargo, es posible que la situación patrimonial del ejecutado impida, total o parcialmente, alcanzar dicho fin. En estos casos, atendido que en el proceso ejecutivo no tiene lugar la caducidad de la instancia una vez despacha la ejecución (art. 239 LEC), el ejecutante podrá instar actos ejecutivos cuando lo estime pertinente, todo ello, claro está, sujeto al resultado del recurso que se intentó contra la resolución que se ejecuta provisionalmente. Además, la ejecución puede terminar por alguno de los medios anormales tradicionales (renuncia o desistimiento). Sobre este tema, con carácter general, cfr. MARTÍNEZ DE SANTOS, A., «Formas de terminación del proceso de ejecución civil», en *Diario La Ley*, núm. 6405, 2006.

CAPÍTULO VI

OPOSICIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Hasta el momento hemos visto que la ejecución provisional de una resolución judicial se despacha sin oír previamente al ejecutado y se desarrollará de acuerdo con las reglas de la ejecución ordinaria, según la remisión genérica a tales reglas contenida en el artículo 524.2 de la LEC, sin perjuicio de las especialidades prevista en el título dedicado a nuestra institución.

Entre tales especialidades encontramos el trámite de la oposición a la ejecución provisional⁷⁶⁵, que se introduce «como contrapeso al despacho de la ejecución provisional sin necesidad de prestar caución y de la irrecurribilidad del auto por la que ésta se despacha»⁷⁶⁶. En efecto, la oposición es el único mecanismo que tiene el ejecutado contra el auto que acuerda la ejecución provisional⁷⁶⁷, de ahí que sea una pieza clave de todo el sistema⁷⁶⁸.

⁷⁶⁵ Según expresa DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 374, la única especialidad, en lo que a ejecución forzosa *strictu sensu* se refiere, consiste en que el ejecutado puede formular oposición a la ejecución o a actividades ejecutivas concretas.

⁷⁶⁶ AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

⁷⁶⁷ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 105.

⁷⁶⁸ Por todos, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 25.

De este modo, a diferencia de lo acontecido en la legislación procesal anterior, la LEC contempla y regula la posibilidad del deudor de oponerse a la ejecución provisional como un adecuado contrapunto frente a la posibilidad del favorecido por una sentencia de condena para obtener el despacho de la ejecución provisional de la misma sin necesidad de prestar caución⁷⁶⁹.

En definitiva, por medio del trámite de la oposición a la ejecución provisional el ejecutado podrá discutir de forma contradictoria la legalidad del despacho de la misma o la adecuación de las medidas ejecutivas concretas que se adoptan en su contra⁷⁷⁰.

Acordada la ejecución provisional, por tanto, el ejecutado tiene la carga de oponerse a su continuación a la realización de determinados actos ejecutivos –como veremos a continuación–, pues si nada hace, el proceso ejecutivo seguirá adelante hasta la completa satisfacción del ejecutante, supeditado dicho resultado, claro está, a la confirmación o revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente. Con otras palabras, la LEC invierte la iniciativa del contradictorio, pues si en la LEC/1881 era el juez quien debía determinar caso a caso si se podía producir un perjuicio irreparable para el demandado con la ejecución provisional, ahora es el propio ejecutado quien tiene la iniciativa a este respecto⁷⁷¹.

Por último, conviene aclarar que el régimen de la oposición a la ejecución provisional y a actuaciones ejecutivas concretas es uno mismo sea que se trate de la ejecución de sentencias de primera o de segunda instancia, atendida la remisión interna contenida en el artículo 535.3 de la LEC.

⁷⁶⁹ Tal como destacan, entre otros, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 214; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 120.

⁷⁷⁰ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 373.

⁷⁷¹ ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», op. cit., p. 747.

1. Sobre las causas de oposición a la ejecución provisional

a) Clases de oposición a la ejecución provisional

La oposición es el mecanismo de defensa que tiene el ejecutado frente a la ejecución provisional previamente despachada en su contra. Sin embargo, esta defensa se encuentra limitada a las causas de oposición expresamente señaladas por el legislador, idea que debe ser matizada en tanto el carácter taxativo de los motivos de oposición que prevé el artículo 528 de la LEC ha sido discutida, como veremos en el párrafo siguiente.

De acuerdo con el texto original del artículo 528 de la LEC, las líneas de defensa que tenía el ejecutado frente a la oposición provisional ya despacha eran dos, a saber: oponerse por motivos procesales, comunes a toda ejecución; y oponerse por motivos de fondo específicos, distintos según se trate de la ejecución provisional de condenas no dinerarias o de condenas dinerarias. Tras la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que modificó –en lo que ahora importa– el apartado 2 y agregó un apartado 4 al artículo 528 de la LEC, se debe sumar a las anteriores una tercera vía defensiva, fundada en otros motivos de fondo comunes a toda ejecución provisional. Existen, por tanto, motivos comunes y motivos específicos.

Los motivos comunes son aquellos que se pueden invocar como causas de oposición en todo proceso de ejecución provisional, con independencia del carácter pecuniario o no dinerario de la prestación. Entre los motivos comunes, encontramos causas de oposición que se basan en cuestiones procesales, por las que se impugna la infracción de algún requisito o presupuestos procesal para el despacho de la ejecución (art. 528.2.1º LEC); y causas que se basan en cuestiones de fondo o sustantiva, que coinciden parcialmente con las causas de oposición a la ejecución forzosa del artículo 556 del código procesal (art. 528.4 LEC).

Por su parte, los motivos específicos son distintos según se trate de condenas no dinerarias (art. 528.2.2º LEC) o de condenas dinerarias (art. 528.3 LEC), no sólo en cuanto al contenido mismo de la causa de oposición –imposibilidad o extrema dificultad

para restaurar o resarcir los daños y perjuicios, y absoluta imposibilidad de restaurar o de compensar económicamente, respectivamente—, sino que también en cuanto al alcance de la oposición: en el primer caso, la oposición es al conjunto de la ejecución provisional, o si se quiere, el ejecutado puede oponerse a la continuación de la ejecución ya despachada; en el segundo supuesto, en cambio, el ejecutado no puede oponerse a la ejecución globalmente considerada, sino que solamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio.

Hasta ahora, hemos agrupado las casusas de oposición en comunes y específicas. Sin embargo, este no constituye el único criterio de clasificación, ni tampoco el más importante. En efecto, los distintos motivos de oposición a la ejecución provisional que prevé la LEC pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista⁷⁷². Así, atendiendo a su ámbito de aplicación, ya vimos que las causas de oposición pueden ser comunes a toda ejecución o específicas para la ejecución provisional de condenas dinerarias o de condenas no dinerarias.

A su vez, las causas comunes, pueden clasificarse en motivos procesales (art. 528.2.1º LEC) y en motivos de fondo (art. 528.4 LEC).

Finalmente, según la finalidad perseguida por la oposición o, si se prefiere, atendiendo a los efectos que puede producir la estimación de la misma, el ejecutado se puede oponer al conjunto de la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas. En el primer grupo se incluyen la oposición por motivos procesales, la oposición por motivos de fondo y la oposición en caso de condenas no dinerarias, y su finalidad es obtener la suspensión de la ejecución provisional ya acordada. En el segundo grupo se encuentra la oposición en caso de condenas pecuniarias, en cuyo caso el ejecutado no puede oponerse a la ejecución provisional globalmente considerada, sino

⁷⁷² Existen, ciertamente, otras formas de agrupar las causas de oposición a la ejecución provisional distintas de las que exponemos en el texto principal. Por ejemplo, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 216, sostiene que «la oposición a la ejecución provisional bascula entre dos grandes bloques temáticos, a saber: la *infracción legal de sus presupuestos condicionantes* y la *irreversibilidad fáctica de las situaciones jurídicas* a las que conduzca la ejecución globalmente considerada o las medidas ejecutivas concretas» (énfasis del autor). Desde otra perspectiva, CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 4, 2001, pp. 225-226, agrupa las líneas de oposición a la ejecución provisional en oposición al despacho de la ejecución y oposición a la continuación a la oposición.

que únicamente a concretas actividades del procedimiento de apremio, con la finalidad de que se sustituya la medida por otra menos gravosa, o de que se suspenda, debiendo ofrecer en este último caso caución suficiente para responder de la demora en la ejecución.

Distinguir entre los diversas clases de oposición, junto con determinar las posibilidades defensivas del ejecutado según la naturaleza de la prestación a la que ha sido condenado, tiene importancia en cuanto a la tramitación de las mismas, pues la LEC contempla algunas especialidades durante la sustanciación del incidente de oposición para los motivos de oposición específicos, como veremos más adelante.

b) Viabilidad de fundar la oposición a la ejecución provisional en las causas previstas para la ejecución ordinaria

La LEC estructura un sistema especial de oposición a la ejecución provisional, conforme al cual la defensa del ejecutado que puede basarse, como acabamos de ver, en causas comunes –procesales y sustantivas–, y en causas específicas dirigidas contra el conjunto de la ejecución provisional –para el caso de las condenas no dinerarias– o contra actuaciones ejecutivas concretas –tratándose de condenas pecuniarias–.

Sin embargo, la ley procesal no señala la forma en que se articula la oposición a la ejecución provisional con la causas de oposición e impugnación a la ejecución ordinaria, por lo que cabe plantearse si es posible que la que la oposición a la ejecución provisional pueda fundarse en los motivos de oposición previstos para la ejecución ordinaria –distintos de los ya contemplados en el artículo 528 de la LEC–, o si, por el contrario, las causas de oposición a la ejecución provisional tienen carácter tasado, lo que excluye toda posibilidad de oposición basada en motivos no contemplados expresamente en el artículo 528 de la ley rituaría⁷⁷³.

Un primera alternativa frente a este interrogante consiste en entender que la oposición a la ejecución provisional se encuentra especialmente regulada por la LEC en

⁷⁷³ Para una completa revisión de este tema, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», en *Revista del Poder Judicial*, núm. 88, 2009, pp. 177-240.

el título dedicado a nuestra institución, sin remitirse a las causas que la ley contempla para la oposición a la ejecución definitiva. En efecto, según el artículo 527.4 *in fine* de la LEC, la oposición del ejecutado se puede formular conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. A su vez, artículo 528.2 de la ley procesal prescribe que la oposición a la ejecución provisional puede fundarse únicamente en las causas que a continuación el mismo precepto indica.

De este modo, realizando una interpretación literal de las normas que regulan la oposición a la ejecución provisional, se puede concluir que el ejecutado no puede oponerse por causas no contempladas en el artículo 528 de la LEC, pues los motivos de oposición allí señalados tienen carácter taxativo⁷⁷⁴.

Por lo demás, el sistema cerrado o de *númerus clausus* de causas de oposición a la ejecución provisional que establece la LEC se ve reforzado por la historia de la ley. En efecto, durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil se introdujo una enmienda para permitir que la oposición se base en los motivos de oposición de la ejecución ordinaria, indicación que no prosperó⁷⁷⁵.

Finalmente, entre los principales argumentos en apoyo de esta postura, se afirma que se deben descartar los motivos o causas de oposición propios de la ejecución ordinaria porque tales motivos pueden ser las razones que fundamentan el recurso del ejecutado contra la sentencia que se ejecuta provisionalmente, lo que supondría trasladar indebidamente el debate sobre dichas cuestiones al juez de la ejecución⁷⁷⁶.

En la jurisprudencia se encuentran varios ejemplos de resoluciones que realizan una interpretación literal de las normas sobre oposición a la ejecución provisional, en los términos que se vienen exponiendo⁷⁷⁷. Así, de forma ilustrativa, la Audiencia

⁷⁷⁴ Participan de esta tesis, entre otros, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 215; y MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., pp. 25-28.

⁷⁷⁵ MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 26.

⁷⁷⁶ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 215

⁷⁷⁷ Para una importante selección de fallos que se pronuncian en el sentido indicado, vid. MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la

Provincial de Madrid ha declarado que «en cuanto a la infracción del art.524.2 y 3 por no admitirse a trámite la oposición a la ejecución que se formuló en su día: pluspetición recogida en el art.558 y nulidad del despacho de ejecución (art.559.3 en relación con el art.575.3, todos LEC), esta alegación incide en la misma situación antes apuntada porque también extiende motivos de oposición de la ejecución forzosa a la provisional y ello en base a una equiparación de derechos y facultades procesales que no es sinónimo de motivo de oposición (nº3) o de igualdad del modo de despachar la ejecución (nº2 del art. 524) referencia que hace la Ley pero al "tribunal competente". En la ejecución provisional la oposición (art. 528) se podrá fundar "únicamente" (ap.2) en las causas que indica tal precepto, lo que excluye cualquier otra, razones por las que procede desestimar el recurso de apelación con imposición de las costas de esta alzada al apelante de conformidad con el art. 398 de la LEC»⁷⁷⁸.

En la misma línea, se tiene resuelto que «la aplicación especial de las normas relativas de la ejecución provisional, que contemplan específicamente un elenco de motivos de oposición propios y distintos de los de la ejecución ordinaria o general, así como una regulación particular del régimen de los recursos contra las resoluciones que el Juez adopte en su curso. Si fuesen aplicables a la ejecución provisional las reglas de la ejecución ordinaria en la materia examinada, tal como sostiene el recurrente, carecería de sentido que el legislador hubiese regulado de manera separada y en Título aparte la ejecución provisional, sus motivos de oposición, y los recursos procedentes en su desarrollo»⁷⁷⁹.

En suma, según un sector de la doctrina, respaldado por una restrictiva aplicación por parte de algunos tribunales de las normas que regulan la oposición a la ejecución provisional, el ejecutado sólo puede fundar su oposición en los motivos tasados que expresamente autoriza el artículo 528 de la LEC.

misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, pp. 185-191; y JIMENO BULNES, M., «¿Cabe incorporar como causas de oposición a la ejecución provisional las contempladas de forma general para la ejecución ordinaria (arts. 556 y ss. LEC) además de las previstas de forma expresa en el art. 528 LEC?», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 3-4, 2007, pp. 194-196.

⁷⁷⁸ AAP Madrid (Secc. 25ª), de 23 de febrero de 2006 (JUR\2006\127507).

⁷⁷⁹ AAP Valladolid (Secc. 3ª), de 26 de noviembre de 2001 (JUR\2002\22389).

Una aproximación distinta a este problema parte por considerar que la LEC realiza una regulación de determinados motivos específicos para oponerse a la ejecución provisional –atendido el carácter condicionado de sus efectos–, que se complementa con las normas generales sobre oposición a la ejecución previstas en sede de ejecución ordinaria. Así, realizando una interpretación sistemática de las reglas que rigen nuestra institución, comenzando por el artículo 524.3 de la LEC –que establece que en la ejecución provisional las partes tendrán los mismos derechos y facultades que en la ejecución definitiva– y por artículo 524.2 de la LEC –que se remite a las reglas de la ejecución ordinaria en cuanto al despacho y a la sustanciación de la ejecución provisiona–, se puede concluir que el ejecutado podrá oponerse a la ejecución provisional por los motivos indicados en el artículo 528 de la LEC, y también por las causas de oposición a la ejecución ordinaria previstos en los artículo 556 y siguientes de la misma ley⁷⁸⁰.

Los tribunales han hecho eco de esta interpretación, admitiendo que el ejecutado se pueda oponer a la ejecución provisional con base en las causas previstas para la ejecución ordinaria⁷⁸¹. En este sentido, se ha declarado que «la ejecución provisional es una ejecución forzosa (art. 524-2-3) que presenta ciertas especialidades derivadas de la falta de firmeza de la sentencia a la que sirve de título y que por ello tiene su repercusión en el modo de sustanciarla y oponerse a ella, así en tanto que ejecución forzosa, la ejecución provisional se rige por las normas del art. 538 y ss. y queda sujeta

⁷⁸⁰ En este sentido, entre muchos otros, *vid.* SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La oposición a medidas ejecutivas concretas», en LÓPEZ LÓPEZ, E., y ALEGRET BURGUÉS, M. (Directores), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia*, Estudios de Derecho Judicial, 44 – 2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 782-783; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 375; DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 59; MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, p. 191; JIMENO BULNES, M., «¿Cabe incorporar como causas de oposición a la ejecución provisional las contempladas de forma general para la ejecución ordinaria (arts. 556 y ss. LEC) además de las previstas de forma expresa en el art. 528 LEC?», *op. cit.*, p. 196; ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», en *Diario La Ley*, núm. 6826, 2007; Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 379, aunque se refiere únicamente a los motivos del artículo 556 de la LEC; VIDAL CARRASCO, J., «La oposición a la ejecución provisional de sentencias», en *La Toga*, núm. 147, 2004, pp. 29-30; ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional, op. cit.*, p. 109; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares, op. cit.*, p. 156; y CABALLEROL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 224.

⁷⁸¹ En el trabajo de MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, pp. 192-203, puede consultarse una completa muestra de resoluciones en apoyo de esta postura.

a los motivos y cauces de oposición que prevén los arts. 556, 559, 562, 563, y 564 y al mismo tiempo en tanto que ejecución forzosa con especialidades se rige por lo dispuesto en el art. 524 y ss.»⁷⁸².

De este modo, admitida la naturaleza de nuestra institución, resulta perfectamente razonable que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución provisional por las mismas vías que el legislador permite oponerse a la ejecución definitiva. De lo contrario, se pondría al ejecutado provisional en peor condición –en términos de su derecho de defensa– que el ejecutado ordinario, en circunstancias que la sentencia que se ejecuta provisionalmente puede ser revocada en caso de estimarse el recurso en su contra.

En relación a esta última idea, no debe perderse de vista que si el recurso se estima, la sentencia que se ejecuta provisionalmente devendrá firme, por lo que la ejecución continuará como ordinaria. Así las cosas, si las actividades ejecutivas no han concluido al tiempo de resolverse el recurso, el momento para oponerse a la ejecución –ahora definitiva– habrá precluído, lo que implicaría negarle o restringirle injustificadamente al ejecutado su derecho de defensa⁷⁸³.

Resumiendo esta postura, en la oposición a la ejecución provisional, «dada la remisión del artículo 524-2 de la LEC a la ejecución ordinaria, es cierto que también deben admitirse aquellos motivos de oposición sustantivos fundados en el artículo 556 (pago, cumplimiento, caducidad de la acción y transacción) o procesales en el artículo 559 de la LEC»⁷⁸⁴.

Antes de manifestar nuestra posición, cabe señalar que algunos autores sostienen que, tras la reforma de 2009 que introdujo un nuevo apartado 4 al artículo 528 de la LEC, la discusión ha perdido trascendencia, pues se incorporaron expresamente los motivos de fondo que el artículo 556 de la LEC prevé para la ejecución ordinaria de

⁷⁸² AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

⁷⁸³ Cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

⁷⁸⁴ AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 15 de junio de 2012 (ROJ AAP B 6806/2012).

títulos judiciales que son compatibles con nuestra institución –lo que excluye, por razones obvias, a la caducidad de la acción ejecutiva⁷⁸⁵.

No obstante, no nos parece que la reforma citada haya necesariamente zanjado la discusión en torno a la posibilidad de que el ejecutado en pueda alegar como motivos de oposición a la ejecución provisional las mismas causas de oposición previstas para la ejecución ordinaria, especialmente si se tiene en cuenta que para estos autores la Ley 13/2009 vino a confirmar que las causas de oposición eran y son tasadas⁷⁸⁶, y el único efecto de la modificación fue incrementar el elenco de motivos de oposición que tiene a su disposición el ejecutado, los que seguirían circunscritos a la enumeración taxativa del artículo 528 de la LEC.

Por nuestra parte, somos partidarios de realizar una interpretación sistemática de las normas que regulan nuestra institución, respetuosa de su naturaleza de verdadero proceso de ejecución (*supra*, cap. I, apdo. II.3), tal como lo hicimos al revisar el control de oficio que realiza el tribunal sobre la demanda de ejecución provisional (*supra*, cap. V, apdo. II.1) y como lo haremos al pronunciarnos sobre las costas del proceso de ejecución provisional (*infra*, cap. VIII). De este modo, de acuerdo con la remisión en bloque a las normas de la ejecución provisional contenida en el artículo 524.2 de la LEC, así como a la clara previsión del apartado 3 del mismo precepto, según el cual las partes tienen los mismo derecho y facultades que en la ejecución definitiva, entendemos que nada impide que el ejecutado pueda valerse de los mismos medios de defensa e impugnación que contempla la ley en sede de ejecución ordinaria.

Haciéndonos cargo de los argumentos expresados por quienes realizan una interpretación literal del artículo 528 de la LEC, podemos decir que, a nuestro juicio, la citada norma regula de forma especial el trámite de la oposición a la ejecución provisional, y en ese contexto, las únicas causas en las que puede basar el ejecutado su oposición son las consideradas expresamente por la ley, lo que excluye otros criterios descartados por el legislador, como sería por ejemplo la capacidad económica o

⁷⁸⁵ En este sentido, *vid.* GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 215; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 128.

⁷⁸⁶ MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 27-28.

solvencia del ejecutante. Pero fuera del ámbito específico de la ejecución provisional, nada impide al ejecutado valerse de los motivos de oposición que la ley contempla en la ejecución ordinaria.

Por lo demás, afirmar lo contrario atenta contra el principio de igualdad ante la ley, pues si se entiende que en la ejecución provisional sólo cabe la oposición fundada en los motivos que la ley contempla, en términos bastante más limitados que los previstos para la ejecución ordinaria, el ejecutado provisional tendría menos posibilidades defensivas que el ejecutado definitivo, sin que exista justificación alguna para este trato diferente.

Por otra parte, la supuesta incompatibilidad de permitir la oposición por motivos de fondo con la pendencia de un recurso, no puede ser aceptada, ya que el recurso podrá fundarse en una cuestión de fondo ocurrida con anterioridad a la interposición de la demanda que da inicio al procedimiento declarativo del que trae causa la ejecución provisional, pero el motivo de fondo por el que se permite fundar la oposición a la ejecución –ordinaria o provisional– debe basarse en un hecho –pago o cumplimiento, caducidad de la acción ejecutiva o transacción– ocurrido con posterioridad a la dictación de la sentencia que se ejecuta⁷⁸⁷.

Y respecto del argumento que atiende a la discusión parlamentaria, bien podría pensarse que la enmienda por la que se intentaba incorporar expresamente las causas de oposición de la ejecución ordinaria a la ejecución provisional fue rechazada por considerarse innecesaria, atendida la remisión del tantas veces citado artículo 524.2 de la LEC⁷⁸⁸.

A nuestro juicio, los limitados y restrictivos términos con que la ley regula la oposición a la ejecución provisional deben entenderse en su justa medida. El modelo de ejecución provisional de la legislación española busca facilitar la efectividad de las resoluciones judiciales que no son firmes, en aras de tutelar de forma efectiva el derecho

⁷⁸⁷ En similares términos, cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

⁷⁸⁸ En igual sentido, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, p. 201.

de crédito, pero ello no puede hacerse a expensas del deudor. Por esta razón se configura el despacho de la ejecución provisional de forma casi automática, pero como contrapartida, se preocupa el legislador de conferir al ejecutado un elenco de medios de defensa específicos frente a la ejecución provisional ya despachada, que atienden a los defectos formales propios de su regulación y a cuestiones de fondo también propias de la posibilidad de revocación de la sentencia de condena, riesgo que no existe en la ejecución ordinaria. Pero estas causas de oposición no son las únicas con las que cuenta el ejecutado, sino que se suma a las líneas de defensa que la ley contempla para la ejecución ordinaria, lo que es perfectamente razonable y coherente con la naturaleza ejecutiva de nuestra institución.

Conforme con lo expresado, a diferencia de lo que suele decirse sobre las limitadas posibilidades de defensa del ejecutado en la ejecución provisional, especialmente en tratándose de condenas dinerarias, entendemos que el ejecutado cuenta con mayores líneas de defensa que el ejecutado en la ejecución ordinaria, pues no solamente puede pretender poner término a la ejecución por razones procesales o sustanciales o impugnar actuaciones ejecutivas ilegales o que no respetan el título en que se basa la ejecución –como sucede en la ejecución ordinaria–, sino que también cuenta con especiales mecanismos de defensa diseñados atendiendo al carácter provisional del proceso que se inicia con base en una sentencia que no es firme y que, por tanto, puede ser revocada.

En otras palabras, el régimen de oposición a la ejecución provisional, como ya destacamos, es un verdadero contrapeso frente al despacho de la ejecución sin necesidad de prestar caución, y como tal, entrega herramientas al ejecutado para evitar que continúe la ejecución despacha en su contra o que se realicen actos ejecutivos concretos del procedimiento de apremio, que podrían ocasionar, en términos generales, un perjuicio irreparable en caso de revocación. Pero fuera de estas defensas específicas, el ejecutado provisional cuenta con iguales posibilidades de oposición e impugnación con las que cuenta el ejecutado definitivo en cualquier proceso de ejecución ordinaria o definitiva.

Admitida entonces la compatibilidad de las causas de oposición del artículo 528 de la LEC con las causas de oposición a la ejecución y a actuaciones ejecutivas

concretas reguladas en los artículo 556 y siguientes del código procesal, realizaremos un breve repaso de éstas últimas para precisar la forma en que se articulan las distintas vías defensivas del ejecutado en la ejecución provisional.

Como se sabe, para la ejecución de títulos judiciales el artículo 556 de la LEC contempla como motivos de oposición de fondo el pago o cumplimiento de lo ordenado, la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución. Tras la citada reforma de 2009, estas causas de oposición, salvo la caducidad de la acción ejecutiva, están expresamente previstas para la ejecución provisional (art. 528.4 LEC), por lo que nos remitimos a lo que diremos sobre ellas más adelante [*infra*, apdo. I.2.b)].

Las causas de oposición del artículo 557 de la LEC están previstas para la ejecución de títulos extrajudiciales, por lo que quedan fuera del ámbito de la ejecución provisional. Con todo, algún debate se ha producido en torno a la posibilidad de fundar la oposición a la ejecución provisional en el motivo de pluspetición, existiendo resoluciones que admiten esta posibilidad⁷⁸⁹ y otras que la rechazan⁷⁹⁰.

Al respecto, entendemos que no cabe alegar la pluspetición como motivo de oposición en la ejecución –ordinaria o provisional– de títulos judiciales, pues la ley contempla este motivo exclusivamente para los título extrajudiciales (art. 557 LEC). Por lo demás, en los casos en que exista una disconformidad entre la cantidad a la que ha sido condenado el ejecutado y el auto que despacha la ejecución provisional, no es necesario acudir a la pluspetición, pues si esa disconformidad se debe a la existencia de un pago parcial por parte del ejecutado, se podrá basar la oposición en ese hecho extintivo (art. 528.4 LEC); y si se debe únicamente a un error de cálculo o de otra naturaleza, se estará en presencia de un acto de ejecución contradictorio con el título, que podrá reclamarse por la vía del artículo 563 de la LEC⁷⁹¹.

⁷⁸⁹ Por ejemplo, AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 24 de abril de 2008 (JUR\2008\318001), aunque confirma el auto del tribunal *a quo* que desestimó la oposición basada en pluspetición.

⁷⁹⁰ En esta línea, el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 28 de octubre de 2002 (JUR\2002\275042) confirmó el auto recurrido que no da lugar a la pluspetición, por no ser admisible su oposición en ejecución provisional de naturaleza dineraria.

⁷⁹¹ En igual sentido, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op.*

En cuanto a la oposición por motivos procesales, atendido que la LEC también autoriza la oposición a la ejecución provisional basada en defectos cometidos al despacharse la misma, veremos la forma de articular los artículos 528.2.1º y 559 de la LEC al ocuparnos específicamente de esta cuestión [*infra*, apdo. I.2.a)].

Junto con las causas de oposición a la ejecución por motivos de fondo y procesales, la LEC regula en sede de ejecución ordinaria la impugnaciones de actuaciones ejecutivas concretas.

Al efecto, el artículo 562 de la LEC permite impugnar las infracciones legales en el curso de oposición por medio del recurso de reposición, si la infracción constara o se cometiera en una resolución judicial o procesal; y por medio del recurso de apelación en los casos en que la ley prevé este recurso expresamente. A su vez, el artículo 563 de la LEC contempla la posibilidad de impugnar actos ejecutivos contradictorios con el título ejecutivo judicial.

A nuestro juicio, estas causas de oposición también son aplicables a la ejecución provisional, sin que a ello obste que el artículo 528.3 de la LEC limite la oposición a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio a la ejecución de pronunciamientos que contengan condenas dinerarias, pues dicha causa de oposición es específica para la ejecución provisional⁷⁹².

Del mismo modo, no nos parece que la irrecurribilidad que los artículos 527.4 y 530.4 de la LEC establecen respecto de la resolución que despacha la ejecución provisional y de la resolución que decide la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas, respectivamente, tengan la virtualidad de impedir la impugnación de actos ejecutivos ilegales o contradictorios con el título ejecutivo, sobre

cit., p. 230; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 96.

⁷⁹² En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 375; ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*; y FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 159.

todo si se tiene en cuenta que el proceso de ejecución –como toda la actividad jurisdiccional– se rige por el principio de legalidad (arts. 1º LEC y 117.3 CE)⁷⁹³.

En todo caso, con esta conclusión no se quiere decir que las resoluciones que la ley declara irrecurribles no tengan ese carácter. Lo que estamos planteando es que del específico régimen de recursos previstos para la resolución que se pronuncia sobre el despacho de la ejecución provisional y para la resolución que decide la oposición al conjunto de la ejecución o a actuaciones ejecutivas concretas, contra las que no cabe recurso alguno, no puede deducirse que ninguna resolución dictada durante el proceso de ejecución provisional sea susceptible de ser impugnada, como parecen entenderlo algunos tribunales⁷⁹⁴.

Por lo tanto, el ejecutado puede impugnar actuaciones ejecutivas concretas durante la substanciación de la ejecución provisional de acuerdo con las reglas de la ejecución ordinaria (arts. 562 y 563 LEC), con independencia de la naturaleza de la prestación que se ejecuta, todo ello sin perjuicio del motivo especial de oposición a actuaciones ejecutivas concretas que la ley prescribe en caso de ejecución provisional de condenas dinerarias (art. 528.3 LEC).

⁷⁹³ Cfr. MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, p. 237.

⁷⁹⁴ En esta línea, el AAP Valladolid (Secc. 3ª), de 26 de noviembre de 2001 (JUR\2002\22389), tiene resuelto «si el legislador no permite el recurso contra la resolución judicial que decide la oposición del ejecutado en la ejecución provisional es porque quiere que la misma se desenvuelva exclusivamente en el ámbito de decisión del Juez de la primera instancia, y que no salga del mismo. Por ello prohíbe los recursos contra sus decisiones una vez que acepta la procedencia de la ejecución provisional, y como ya hemos dicho antes, también contra el auto que la despacha porque de admitir la posibilidad que plantea el recurrente en queja se produciría una excepción al régimen de la competencia exclusiva que, para todo lo relativo a la ejecución provisional una vez iniciada mediante el auto de su despacho, la Ley asigna al Juez de la primera instancia. Con idéntica perspectiva podemos razonar que esto es lo querido por el legislador cuando atribuye también al Juez de la primera Instancia la ejecución provisional de las sentencias dictadas en apelación que sean objeto de recurso de casación o extraordinario por infracción procesal, conforme prescribe el art. 535.2. párrafo segundo. Y finalmente hemos de resaltar que en la Exposición de Motivos de la Ley, en su apartado XVI, se justifica la institución de la ejecución provisional en la confianza que al legislador le inspira el buen hacer y las decisiones de los Jueces de primera instancia. La misma Exposición de Motivos indica que ante una solicitud de ejecución provisional el Juez la despachará, permitiéndole rechazarla de oficio sólo en el caso de que no concurren los presupuestos legales. Al ejecutado no le permite recurrir la decisión judicial de despacho y sí sólo oponerse. Ni siquiera permite el legislador el recurso cuando la sentencia a ejecutar provisionalmente sea una de las inejecutables de las comprendidas en el art. 525. En esos casos el ejecutado sólo puede oponerse por el cauce del art. 528.2 regla 1ª». En igual sentido, *vid.* AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

Finalmente, la articulación de las distintas causas de oposición a la ejecución provisional merece ciertas precisiones de tipo procedimental, aspecto que abordaremos más adelante (*infra*, apdo. I.3).

2. Estudio particular de los motivos de oposición

a) Oposición por motivos procesales

En toda ejecución provisional, el ejecutado podrá defenderse fundando su oposición en haberse despachado la ejecución provisional «con infracción del artículo anterior» (art. 528.1.1º LEC). Se trata, de acuerdo con las pautas que hemos indicado, de una causa de oposición común –procede con independencia de la naturaleza de la prestación– que afecta al conjunto de la ejecución provisional.

La regla que contiene este motivo de oposición se remite al artículo 527 de la LEC, norma que regula, como vimos oportunamente, el momento para instar el despacho de la ejecución provisional, los testimonios que deben acompañarse junto a la solicitud, y las causas por las que el tribunal puede denegar de oficio el despacho de la misma –resolución no ejecutable provisionalmente o que no contiene un pronunciamiento de condena a favor del solicitante–.

Interpretado literalmente el artículo 528.1.1º de la LEC, la oposición del ejecutado podría fundarse únicamente en la inobservancia de los requisitos indicados en el artículo 527 de la LEC. Sin embargo, si se considera que los requisitos a que se refiere esta última disposición no son todos los necesarios para que pueda acordarse la ejecución provisional, entendemos que el ejecutado se puede oponer a ella por la omisión de cualquiera de los presupuestos y requisitos necesarios para que preceda la ejecución provisional⁷⁹⁵, incluidos los motivos procesales del artículo 559 de la LEC⁷⁹⁶.

⁷⁹⁵ En el mismo sentido, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 374.

⁷⁹⁶ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 375.

En otros términos, el ejecutado puede oponerse a la ejecución provisional alegando la infracción de cualquiera de los requisitos y presupuestos que el tribunal debió controlar de oficio⁷⁹⁷ (*supra*, cap. V, apdo. II.1), sea que estén contemplados en el artículo 527 o en el artículo 559 de la LEC, siempre que, en este último caso, se trate que causas compatibles con la ejecución provisional⁷⁹⁸.

Por lo tanto, en la oposición por motivos procesales se podrán alegar como defectos procesales la incompetencia del tribunal⁷⁹⁹ (art. 524.2 LEC), la falta de presupuestos procesales relativos a las partes (art. 559.1.1º y 2º LEC), falta de legitimación del ejecutante (art. 526 LEC) y del ejecutado, falta de aportación de documentos junto con la demanda (arts. 527.2 y 535.2.II LEC), extemporaneidad de la solicitud de ejecución provisional (arts. 527.1 y 535.2.I LEC), la no ejecutabilidad provisional de la sentencia de condena recurrida (art. 527.3 LEC), la falta de pronunciamiento de condena a favor del solicitante (art. 527.3 *in fine* LEC).

En cualquier caso, debe tratarse de defectos procesales relativos al título ejecutivo –sentencia de condena recurrida– o al despacho de la ejecución, y no a vicios formales que se produjeron con anterioridad a la formación del título a que se acordara la ejecución provisional, pues tales cuestiones deben hacerse valer en el procedimiento declarativo respectivo⁸⁰⁰. Por esta razón, se ha resuelto, por ejemplo, que en el incidente de oposición a la ejecución provisional no es posible discutir cuestiones de fondo que afectan al procedimiento principal, como la falta de legitimación activa para demandar⁸⁰¹.

⁷⁹⁷ Por todos, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, pp. 107-108; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 122.

⁷⁹⁸ Tal como precisa, con acierto, CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 225, razón por la cual se excluye, por ejemplo, la infracción del plazo de espera del artículo 548 de la LEC, presupuesto que no es aplicable a la ejecución provisional.

⁷⁹⁹ En la ejecución ordinaria, la falta de competencia del tribunal de la ejecución debe hacerse valer mediante declinatoria. Sin embargo, en la ejecución provisional, el plazo para formular la declinatoria coincide con el plazo para presentar la oposición, por la que será en el escrito de oposición en que se denuncie este defecto procesal. Cfr. MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, pp. 209-210.

⁸⁰⁰ MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, p. 209.

⁸⁰¹ En este sentido, *vid.* AAP Málaga (Secc. 6ª), de 15 de mayo de 2003 (AC\2003\992) y AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 15 de junio de 2012 (ROJ AAP B 6806/2012).

b) Oposición por motivos de fondo

Como adelantamos, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, modificó el apartado 2 del artículo 528 de la LEC y añadió un nuevo apartado 4, por el que se introdujeron como motivos de oposición a la ejecución provisional el pago o cumplimiento de lo ordenado, que deberá justificarse documentalmente, y la existencia de pactos o transacciones que se hubieren convenido y documentado para evitar la ejecución provisional. Se trata de argumentos o razones de oposición comunes a toda ejecución provisional, cuya estimación tiene la virtualidad de poner término a la misma, de manera que constituye una oposición al conjunto de la ejecución provisional.

La reforma de 2009 modificó el artículo 556 de la LEC con la finalidad de restringir la oposición por motivos de fondo tratándose de títulos ejecutivos judiciales, suprimiendo el párrafo segundo de su apartado 1⁸⁰², eliminando así la posibilidad de invocar como causa de oposición la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución⁸⁰³. Al mismo tiempo, la reforma incorporó expresamente como motivos de oposición a la ejecución provisional las causas del citado precepto en su redacción original, incluidos los pactos y transacciones, pero sin considerar la caducidad de la acción ejecutiva, pues ciertamente se trata de una razón para oponerse que no es compatible con la ejecución provisional⁸⁰⁴ –la acción ejecutiva caduca si no se interpone la demanda respectiva dentro del plazo de cinco años contados desde que la resolución ha ganado firmeza (art. 518 LEC)–.

⁸⁰² El alcance de esta reforma fue breve, pues el contenido del suprimido párrafo segundo fue reintroducido al apartado 1 del artículo 556 de la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

⁸⁰³ Como explica ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 758, la única causa que en realidad se eliminó fue la relativa a los pactos y transacciones, porque la caducidad debe fundar una oposición por razones procesales.

⁸⁰⁴ Para MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 376, la caducidad de la acción ejecutiva, por su propia esencia, no puede darse en la ejecución provisional. En igual sentido, *vid.* MARTÍN PASTOR, J., «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», *op. cit.*, p. 226.

En definitiva, el ejecutado puede fundar su oposición a la ejecución provisional en motivos de fondo, en los mismos términos que los previstos para la ejecución ordinaria, salvo por la exclusión de la caducidad de la acción ejecutiva por las razones ya anotadas.

De acuerdo con lo señalado, con la incorporación de nuevos motivos de oposición a la ejecución provisional las posibilidades de defensa del ejecutado se ven fortalecidas. Sin embargo, este robustecimiento del sujeto pasivo de la ejecución es más aparente que real, pues se ha destacado por la doctrina la dificultad de que operen efectivamente en la práctica estas líneas de oposición, toda vez que no parece posible que el mismo sujeto que recurre una resolución, al mismo tiempo la cumpla o alcance un pacto o una transacción con el ejecutante para evitar la ejecución provisional⁸⁰⁵.

Abona a esta idea la circunstancia de que, al menos para las condenas dinerarias, la ley entrega al ejecutado la facultad de realizar un pago «provisional» con la finalidad de suspender la ejecución (art. 531 LEC). De este modo, de la regulación de la suspensión de la ejecución provisional por cumplimiento se desprende, a *contrario sensu*, que para el legislador el pago «definitivo» es incompatible con la pendencia del recurso y, por tanto, con la ejecución provisional –aun cuando es una alternativa que se admite en la práctica, según veremos oportunamente (*infra*, apdo. II.2)–⁸⁰⁶.

⁸⁰⁵ En este sentido, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 95; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 377.

⁸⁰⁶ El AAP Murcia (Secc. 5ª), de 14 de febrero de 2012 (JUR\2012\113971) explicita la diferencia entre la consignación y el pago, aunque lo hace en un contexto bien especial. Se trata de un caso en que el ejecutado puso a disposición del tribunal dinero para cubrir las cantidades indicadas en el artículo 531 de la LEC antes de que se despachara la ejecución provisional. Sin embargo, el tribunal se negó a entregar dicho dinero al actor, quien se vio obligado a instar la ejecución provisional de la sentencia ya cumplida. Ante esa situación, el ejecutado provisional se opuso a la misma, alegando el pago de la cantidad a la que fue condenado. Con estos antecedentes, la AP de Murcia declara que «no ofrece duda alguna que la aseguradora podía legítimamente oponer el pago al amparo del artículo 528.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues el importe del principal ya estaba consignado desde junio de 2006; pero tampoco puede dudarse de que la actora se vio obligada a presentar la demanda ejecutiva ante la falta de un pronunciamiento expreso por parte del juzgado sobre su expresa petición de entrega del principal consignado en dos ocasiones anteriores a la interposición de la ejecución provisional, que viene forzada por la propia pasividad del juzgado a quo».

Admitida la reducida aplicación de estas causas en la práctica⁸⁰⁷, cabe plantearse algunos problemas que podrían surgir en torno a estos motivos. En esta línea, siguiendo a MUERZA ESPARZA, es posible que tenga viabilidad este motivo en supuestos en que existió un pago parcial del ejecutado. Así, si el condenado cumple parte de la condena, pero recurre por el resto, el litigante favorecido por dicho pronunciamiento podrá instar la ejecución provisional del mismo. En ese caso, según este autor, si el pago parcial se realizó después del despacho de la ejecución provisional –por el total de la condena, claro está–, el ejecutado podrá oponerse fundándose para ello en el cumplimiento de la sentencia. Pero si el pago parcial fue realizado antes del despacho, y de todos modos la ejecución se acuerda por la cantidad total de la condena, lo que cabe es oponerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528.2.1º de la LEC, pues existiría una infracción en la cantidad por la que se despacha la ejecución provisional⁸⁰⁸.

Por su parte, para el caso del pacto o transacción para evitar la ejecución provisional, aunque su procedencia es tanto o más difícil que la del pago, debe precisarse la oportunidad que debe realizarse el acuerdo entre las partes, atendida la expresión utilizada por la LEC («documentado en el proceso»). En este sentido, a fin de evitar riesgos como su inclusión en contratos de adhesión en que la parte más fuerte imponga a la más débil una cláusula de esta naturaleza⁸⁰⁹, lo lógico será que el mismo se realice después de dictada la sentencia y antes de despacharse la ejecución provisional⁸¹⁰.

Finalmente, nótese que estas causas de oposición se tramitarán según las reglas de la ejecución ordinaria, esto es, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 560 y

⁸⁰⁷ Prueba de ello, el AAP Madrid (Secc. 21ª), de 28 de septiembre de 2010 (JUR\2011\24809) estima un recurso de apelación contra el auto que, a su vez, estimó la oposición a la ejecución provisional fundada en el pago de la deuda, sólo en la parte que condenó en costas al ejecutante, atendida la excepcional circunstancia de que el ejecutante no tuvo conocimiento de la consignación realizada por el ejecutado.

⁸⁰⁸ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 96. Según el autor, la dificultad para que exista un cumplimiento parcial de una condena no dineraria determina que lo indicado rija sólo para las condenas dinerarias, y para aquellos casos excepcionales de condenas de dar, hacer o no hacer en que cabe un cumplimiento parcelado.

⁸⁰⁹ Como previene GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 129.

⁸¹⁰ En igual sentido, vid. MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 97.

siguientes de la LEC, y no por el procedimiento regulado en los artículos 529 y 530 de la ley rituarial para la oposición de la ejecución provisional (art. 528.4 *in fine* LEC).

c) Oposición a la ejecución provisional de sentencias de condena no dinerarias

En la ejecución provisional de sentencias de condena no dinerarias, esto es, de resoluciones que imponen al condenado una obligación de hacer, de no hacer o de entregar una cosa distinta a una cantidad de dinero (art. 699 LEC), el ejecutado puede oponerse al conjunto de la ejecución provisional en caso de resultar imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia fuese revocada (art. 528.2.2º LEC).

En el diseño de la oposición a la ejecución provisional, el legislador parte de la premisa de que la ejecución de esta clase de prestaciones contenidas en resoluciones recurridas puede producir, en caso de revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada, un perjuicio irreparable para el ejecutado –ora porque no es posible o resulta muy difícil la *restitutio in integrum*, ora porque existe igual imposibilidad o dificultad para la reparación por equivalencia–, a diferencia de lo que sucede tratándose de condenas dinerarias⁸¹¹, en que su carácter fungible admite siempre la restitución⁸¹². Por esta razón, a fin de evitar la irreversibilidad de los resultados alcanzados en el proceso de ejecución provisional de condenas no dinerarias⁸¹³, la LEC prevé una modalidad de oposición más amplia o flexible⁸¹⁴, pues la misma se dirige a la suspensión del proceso

⁸¹¹ Lo que ha sido criticado por FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 157, para quien la ejecución provisional de prestaciones de condena pecuniarias es más lesiva para el ejecutado que la de ejecución de condenas no dinerarias.

⁸¹² Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 217.

⁸¹³ Como recuerda CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», op. cit., p. 226, «la ejecución provisional tiene su fundamento y sus límites en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Con ella se intenta que la duración al recurso no retrase o frustre la efectividad del derecho reconocido en la sentencia. Pero, a su vez, *la ejecución forzosa de un pronunciamiento recurrido no puede ser la causa de la ineficacia de lo que se resuelva finalmente en el proceso*» (énfasis añadido).

⁸¹⁴ Como expresa GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 123.

de ejecución provisional globalmente considerado, y no solamente a actuaciones ejecutivas concretas⁸¹⁵.

Teniendo presente lo anterior, en la ejecución provisional de condenas no dinerarias el ejecutado podrá oponerse alegando que será imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior o compensarle económicamente en caso de revocación. Por tanto, corresponde al sujeto pasivo de la ejecución la carga de alegar este motivo –no puede el tribunal apreciarla de oficio al momento de pronunciarse sobre el despacho de la ejecución provisional (*supra*, cap. V, apdo. II.2)– y sobre él también pesa la carga de acreditar la concurrencia de esta causa⁸¹⁶.

En efecto, se tiene resuelto este sentido que «al deudor que intente la suspensión de la ejecución, corresponde al menos, justificar, aquel perjuicio irreparable, por cualquiera de los dos motivos apuntados»⁸¹⁷. Ahora bien, la actividad probatoria del ejecutado debe estar dirigida a acreditar el motivo de oposición, y no a probar cuestiones de fondo que son objeto de debate en el recurso interpuesto contra la resolución que se ejecuta provisionalmente, tal como ha tenido oportunidad de aclararlo el Tribunal Constitucional⁸¹⁸.

⁸¹⁵ En sentido contrario, MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», en *Diario La Ley*, núm. 8249, 2014, afirma que la oposición a la ejecución provisional de condenas no dinerarias no se formula «ante cualquier actuación de la ejecución sino precisamente ante aquella que supone cumplir con la condena no dineraria concreta que se contiene en la sentencia cuya ejecución se ha solicitado». De este modo, según este autor, el ejecutado se opone a una actuación ejecutiva concreta, y no al conjunto de la ejecución provisional.

⁸¹⁶ Por todos, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 913.

⁸¹⁷ AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de mayo de 2005 (JUR\2005\170490).

⁸¹⁸ Conociendo de un recurso de amparo intentado contra una resolución que estimó innecesaria la actividad probatoria en el acto de la vista, la STC 22/2008, de 31 de enero (f.j. 4º), declara que «atendiendo a la causa de oposición alegada por la recurrente en amparo, la actividad probatoria en el proceso de ejecución provisional debía estar orientada a acreditar dicha causa, esto es, la imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior de seguir adelante la ejecución provisional en caso que fuese revocada la Sentencia de apelación, es decir, la imposibilidad o extrema dificultad de que la menor volviera con su madre en el supuesto de que fuese revocada la Sentencia cuya ejecución provisional implicaba la entrega de la menor a su padre. Sobre tal extremo, y únicamente sobre él, debía versar la actividad probatoria en el seno del proceso de ejecución provisional, no sobre la conveniencia de conferir la custodia y guarda de la menor a la madre o al padre o sobre los beneficios o perjuicios para la menor de la atribución a uno u a otro de la guarda y custodia, cuestiones éstas ya resueltas en la Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial, pendiente de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, pero ajenas al objeto litigioso del proceso de ejecución provisional».

Sentado lo anterior, el mayor problema relacionado con esta causa de oposición consiste en determinar qué se entiende por imposibilidad o extrema dificultad de restaurar la situación anterior o de compensar económicamente en caso de revocación de la sentencia⁸¹⁹, pues las expresiones utilizadas por el legislador constituyen conceptos jurídicos indeterminados⁸²⁰, y la LEC no entrega pautas claras para su concreción. En consecuencia, corresponderá al tribunal determinar la concurrencia de este motivo de oposición de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto⁸²¹.

En cualquier caso, para la apreciación de este motivo, se debe considerar que la imposibilidad o extrema dificultad deben valorarse en términos objetivos —«atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas»—, atendiendo a los elementos materiales y personales del caso, con exclusión de toda consideración a cuestiones subjetivas no previstas en la ley⁸²², tales como la solvencia económica del ejecutante, la probabilidad de estimación del recurso o la complejidad del asunto⁸²³.

Así, la *imposibilidad o extrema dificultad de restaurar* la situación anterior está referida a la pérdida definitiva de la posición ocupada por el ejecutado como consecuencia de la ejecución provisional⁸²⁴, como sucedería, por ejemplo, si no se puede devolver la cosa entregada al ejecutante por su carácter consumible o porque se ha destruido y es irrepetible⁸²⁵.

⁸¹⁹ Como afirman MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 379, se trata de «la causa de oposición de más importancia y de mayor dificultad para determinar su concurrencia».

⁸²⁰ ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencio (I)», *op. cit.*

⁸²¹ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 374.

⁸²² En igual sentido, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 379; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 124-125; y ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», *op. cit.*, p. 749.

⁸²³ Criterios todos descartados por DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 375.

⁸²⁴ CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 228.

⁸²⁵ MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

A su vez, la *imposibilidad o extrema dificultad de compensar* económicamente al ejecutado debe entenderse respecto de aquellos supuestos en que la ejecución provisional causará al ejecutado un perjuicio no querido y distinto de la mera realización de la prestación debida⁸²⁶. En otros términos, la imposibilidad o extrema dificultad para compensar económicamente como motivo de oposición se refiere a aquellas situaciones en que el cumplimiento por equivalente no satisface en absoluto al ejecutado en caso de revocación⁸²⁷, desde un punto de vista objetivo⁸²⁸.

Ahora bien, la redacción de la causa segunda del apartado 2 del artículo 528 de la LEC, ha llevado a algunos autores a entender que este motivo de oposición se reduce a apreciar la imposibilidad de indemnizar los perjuicios causados al ejecutado, toda vez que si la restitución *in natura* no pueda llevarse a cabo en caso de revocación de la sentencia, siempre será posible la restitución por el equivalente económico de la prestación⁸²⁹, de ahí que esta última sea la única circunstancia que debería valorar el tribunal para estimar o no la oposición.

No obstante, entendemos que en la regla del artículo 528.2.2º de la LEC, la imposibilidad o extrema dificultad está referida a dos cosas bien distintas⁸³⁰: restaurar la

⁸²⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 913. En similares términos, *vid.* SANTOS VIJANDE, J., «Sobre la ejecución provisional de condenas de no hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», en *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 3, 2011.

⁸²⁷ MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 43.

⁸²⁸ En sentido diverso, CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 228, sostiene que la imposibilidad de compensar debe ser apreciada desde dos puntos de vista: en primer lugar, se debe valorar la idoneidad de la indemnización para llevar a cabo a través de ella la revocación de lo ejecutado provisionalmente; y en segundo término, se debe valorar si tal compensación podrá hacerse efectiva, lo que equivale a analizar la capacidad económica del ejecutante para hacer frente a la indemnización. Comparte esta conclusión, GISERMAN LIPONETSKY, L., «La oposición a la ejecución provisional», en *Sepín NET Revista*, núm. 66, 2006, p. 25.

⁸²⁹ En este sentido, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (I)», *op. cit.*, para quien «el legislador incurre en la falacia de asimilar restitución *in natura* con una indemnización pecuniaria que se pretende equivalente». En la misma línea, *cfr.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 379, para quien «la verdadera causa se resuelve así en que sea imposible o de extrema dificultad compensar económicamente al ejecutado, es decir, no en que no pueda obtenerse el dinero para esa compensación, sino en que la compensación no exista realmente, pues el dinero no es el medio útil para efectuarla».

⁸³⁰ En este sentido, el AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de mayo de 2005 (JUR\2005\170490) tiene declarado que los motivos de oposición a la ejecución provisional de condenas no dinerarias «se centran en que dicha ejecución puede producir un perjuicio irreparable porque: a) o bien resulta imposible o de extrema dificultad –atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas– restaurar la situación

situación anterior y compensar económicamente al ejecutado. Así las cosas, si se entiende —como hacemos en este trabajo— que la imposibilidad o extrema dificultad está referida a los supuestos en que la ejecución provisional supondrá para el ejecutado, además del desplazamiento patrimonial, otro tipo de consecuencias en su patrimonio o en su esfera jurídica⁸³¹, no es posible sostener que siempre que sea posible la restitución por equivalencia, en términos abstractos, la oposición deberá ser estimada.

En definitiva, la LEC regula un solo motivo de oposición a la ejecución provisional en caso de sentencias de condena no dineraria, compuesto por dos exigencias⁸³². En efecto, el tribunal deberá valorar si es posible restaurar la situación anterior a la ejecución provisional en caso de revocarse la sentencia, apreciación que se plasma, en esencia, en un razonamiento sobre la reversibilidad o irreversibilidad de la medida que se pretende adoptar⁸³³. Pero no bastará para estimar la oposición que se acredite que la restitución *in natura* será imposible o de extrema dificultad, pues será necesario además valorar si es viable la compensación económica del ejecutado⁸³⁴.

Por lo tanto, si el tribunal aprecia en el caso concreto que no será posible —o extremadamente difícil— la restitución específica ni tampoco la restitución por el equivalente económico —en los términos antes expuestos—, deberá estimar la oposición.

Hechas estas consideraciones, se clarifica la operatividad de esta causa de oposición si se revisa la forma en que los tribunales han concretado su contenido en la práctica, especialmente en casos de ejecución provisional de sentencias de desahucio, atendido el incremento de estos procesos y el impacto social que generan los mismos en un contexto de crisis económica como la sufrida en España en los últimos años.

anterior a la ejecución provisional. b) o bien resulte difícil o imposible compensar económicamente al ejecutado, mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren en caso de revocación de la sentencia».

⁸³¹ Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 375.

⁸³² Con este enfoque, MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

⁸³³ GISERMAN LIPONETSKY, L., «La oposición a la ejecución provisional», *op. cit.*, p. 25.

⁸³⁴ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 379; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 123.

Precisamente, a propósito de la oposición a la ejecución provisional de una sentencia de desahucio, tras analizar la posición del ejecutado –vivienda única, avanzada edad, estado de salud y capacidad económica– Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cantabria declaró que «la imposibilidad de restaurar la situación originaria si la sentencia ejecutada provisionalmente fuera revocada se evidencia sin especiales previsiones hipotéticas»⁸³⁵.

⁸³⁵ Por resultar de interés, transcribimos el fundamento tercero del AJPI Cantabria (núm. 1), de 13 de julio de 2001 (AC\2001\1291): «El debate, por tanto, gravita sobre la imposibilidad de restaurar la situación previa a la ejecución o compensar económicamente al ejecutado provisional si la sentencia de primera instancia es posteriormente revocada, pues bien es conocido –artículo 534 LECiv– que si la sentencia de apelación dejara sin efecto la primera debería restituirse al ejecutado en la misma posición que tenía originariamente, salvo que fuera imposible de hecho o de derecho. Pero lógicamente debe cuidarse de que la situación de imposibilidad fáctica o jurídica posterior no concurra, o, mejor dicho, que se adopten las cautelas o garantías precisas para evitar la insatisfacción del ejecutado provisional que vio sus expectativas acogidas, en todo o en parte, por el Tribunal de la segunda instancia. Cuando la Ley en su artículo 528.2.2ª establece la causa de oposición objeto de estudio no sólo contempla la imposibilidad de restaurar, ciertamente, sino que también permite la continuación de la ejecución si la precitada imposibilidad de restablecer la situación original pudiera compensarse mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios generados. Siendo todo ello cierto, que en suma supone regular con más certeza lo que el artículo 385.2 LECiv/1881 expresaba al decir que no era dable la ejecución provisional «únicamente si el Juez estima que el perjuicio que pudiera irrogarse con su ejecución no sería irreparable», en las ejecuciones de dar es donde la tensión sobre la imposibilidad de restaurar o compensar económicamente al ejecutado adquiere su máxima expresión.

Situados en este punto, conviene razonar sobre las posiciones en que ambas partes se encuentran. La actora, ahora apelada, tiene interés en que la sentencia de instancia se ejecute ya, dado que ha vencido en dicho trámite y ha conseguido inicialmente la desposesión. La demandada, apelante, quiere mantenerse en la posesión de la vivienda, única con la que cuenta, como ocupante que lo ha sido durante años, destaca su edad longeva, su estado de salud y la ausencia de una capacidad económica que le permita adquirir o ocupar un vivienda de similares características. Con semejantes premisas, atendiendo al objeto de la ejecución, considera este Juzgador que la imposibilidad de restaurar la situación originaria si la sentencia ejecutada provisionalmente fuera revocada se evidencia sin especiales previsiones hipotéticas. Piénsese así que la ejecutante provisional –a pesar de manifestar que si la sentencia fuese revocada garantizaría la inmediata vuelta de los ejecutados a su situación originaria, propuesta voluntarista, y a demás ofrece caución para garantizar los daños y perjuicios que se le pueden generar–, una vez que contara con la posesión de la vivienda, podría realizar actos jurídicos no prohibidos que pudieran ir desde contraer un nuevo arrendamiento o derecho asimilado a transmitir la vivienda a un tercero con acceso registral que pudiera ganar la condición de tercero hipotecario (art. 34 LH) o constituir una garantía de carácter real, que a buen seguro impedirían o dejarían en la mera incertidumbre la expectativa de los ejecutados para recuperar por entero y pacíficamente la posesión originaria. La posibilidad, por tanto, de que el ejecutante provisional efectúe actos de enajenación, gravamen o de administración que ocasionen en la inejecutabilidad de la sentencia posterior que revoque la de primera instancia, nos sitúa en el plano de las hipótesis concretas ante la certidumbre de la imposibilidad de restaurar. Y estimando que ello es suficiente para acoger la oposición, tampoco la alternativa legal por la compensación económica de los perjuicios y daños que a la parte ejecutada se le pudiera generar con la ejecución provisional merece una precisa garantía. No puede olvidarse que es difícil que un tercero razone sobre los daños y perjuicios que la desposesión puede generar en quien guarda su expectativa a ver reconocida su pretensión ante el órgano superior, como también lo es que vislumbre la realidad concreta y personal del disgusto, la incomodidad, la contrariedad, la preocupación o desasosiego generado por una desposesión pendiente de quien debe decidir sobre su firmeza. Considerar en suma que bienes que por rebote pertenecen al acervo extrapatrimonial o de la personalidad, al haber espiritual de la persona, o a bienes materiales como la salud u otros análogos, que pueden quedar afectados por el lanzamiento de la vivienda que desde tiempo se ocupa, sin olvidar el apego al barrio, a su forma de vida o costumbres, pueden ser perfectamente equilibrados por una hipotética indemnización de daños y perjuicios supondría admitir el riesgo de «patrimonialización» de todas las relaciones y situaciones jurídicas, y obligaría a la cuantificación de una

En la misma línea, se ha estimado la oposición por concurrir el motivo del artículo 528.2.º de la LEC tratándose de la ejecución provisional de sentencias que llevan aparejado el lanzamiento⁸³⁶ o la demolición⁸³⁷ de la vivienda habitual del ejecutado, así como de sentencias que condenan al desalojo de un local comercial como consecuencia de haberse acogido la demanda de resolución de contrato de arrendamiento de negocio⁸³⁸. Nótese que estas resoluciones confirman que las sentencias de desahucio son provisionalmente ejecutables, tal como lo indicamos oportunamente (*supra*, cap. III, apdo. II.3).

Fuera del ámbito de los procesos de desahucio, también se ha estimado la oposición del ejecutado en procesos sobre tutela colectiva de consumidores y usuarios. Por ejemplo, se ha resuelto que «es evidente que de obligar a la entidad ejecutada a suscribir contratos de préstamo hipotecario a interés variable, sin incluir la condición general de contratación cuya nulidad se ha declarado, resultaría imposible restaurar la

indemnización sobre bases sumamente discutibles. Los problemas serían mayores y sitúan la posición futura de las partes en franca desproporción, lo que, a juicio de este Juzgador, constituyen causas más que justificadas para que la ejecución provisional del caso concreto continúe».

⁸³⁶ Al efecto, el AAP Madrid (Secc. 9ª), de 5 de octubre de 2006 (JUR\2006\268031) declaró que debe entenderse que la ejecución provisional de la sentencia dictada en un juicio de desahucio, como regla general supone un perjuicio difícil o de imposible reparación, toda vez que implica el lanzamiento del inquilino de la vivienda, por lo que hace sumamente difícil restituir la situación anterior a la ejecución dada la disponibilidad y disposición de la vivienda que puede hacer el propietario, que frustraría la devolución de dicha posesión al inquilino si la sentencia fuera revocada».

En el mismo sentido, el AJPI Santander (núm. 3), de 18 de octubre de 2003 (AC\2003\1740) tiene resuelto que «los perjuicios derivados de la ejecución provisional de la sentencia de desahucio, en cuantos derivados de la desposesión, búsqueda de nueva residencia apta para su uso por el esposo y con un coste similar al de la arrendada, la mudanza, la alteración de costumbres, el desarraigo vecinal y de atención médica del esposo, la intranquilidad y preocupación derivado del desalojo, resultan de extrema dificultad reparatoria, no resultando indemnizables y cuantificables en cuanto íntimamente unidos a los derechos de la personalidad».

⁸³⁷ Así lo expresa el AJPI Santa Cruz de Tenerife (núm. 3), de 11 de julio de 2001 (AC\2001\1390), al entender que «si se tiene en consideración que, con independencia de lo que se decidiera en la sentencia cuya ejecución se pretende, el ejecutado afirma que el inmueble constituye su vivienda habitual, resulta evidente, se proceda o no a su demolición, que en el común sentir de las personas el hecho de abandonar la propia vivienda supone graves inconvenientes no sólo morales o afectivos sino puramente materiales, pues una mudanza evidentemente comporta una serie de gastos y quehaceres varios, siendo la suma de dichos inconvenientes prácticamente imposible de cuantificar económicamente».

⁸³⁸ En este sentido, el AAP Vizcaya (Secc. 5ª), de 10 de octubre de 2002 (JUR\2003\23447) concluye que «existe el riesgo de que una eventual estimación del recurso de casación interpuesto por uno de los codemandados, habiéndose producido el desalojo ya del local en fase de ejecución provisional, ocasione la imposibilidad de restaurar el perjuicio real causado a los arrendatarios como consecuencia del desalojo del local, especialmente teniendo en cuenta que nos encontramos ante la existencia de un negocio en marcha, sin que en la actual regulación de la ejecución provisional esté prevista la prestación de fianza por parte de la ejecutante».

situación anterior a la ejecución provisional, si la sentencia fuese revocada, ya que para ello sería preciso obligar a los sujetos que hayan suscrito dichos contratos de préstamo, a emitir su consentimiento contractual para la inclusión en los mismos y con carácter retroactivo, a la fecha de celebración del contrato, de la condición general de contratación no aplicada; siendo igualmente de extrema dificultad compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, dado el volumen de contratación de préstamos hipotecarios, con las diversas estipulaciones pactadas al respecto, de los que podría derivar la indemnización a satisfacerse por la ejecutante, en caso de revocación de la Sentencia»⁸³⁹.

Antes de concluir el examen de este motivo de oposición, cabe hacer notar que la LEC entrega al ejecutante la facultad de impedir la suspensión de la ejecución provisional, mediante el ofrecimiento de caución para garantizar la restitución o el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al ejecutado en caso de revocarse la sentencia (art. 529.3 LEC), como veremos más adelante [*infra*, apdo. I.3.d)].

d) Oposición a actuaciones ejecutivas concretas en la ejecución provisional de sentencias de condena dinerarias

En la ejecución provisional de condenas dinerarias, es decir, cuando la sentencia que se ejecuta impone el deber de entregar una cantidad de dinero líquida (art. 571 LEC), el ejecutado no puede oponerse al conjunto de la ejecución provisional –salvo la oposición por motivos comunes, procesales o de fondo⁸⁴⁰–, sino que sólo a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, por entender que tales actuaciones causarían una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios (art. 528.3 LEC).

Atendida la finalidad que persigue la defensa del ejecutado en estos casos, más que una oposición, se trata de una impugnación de una actuación ejecutiva. De ahí que

⁸³⁹ AJPI Madrid (núm. 50), de 20 de diciembre de 2001 (AC\2002\109). En igual sentido, *vid.* BACHMAIER WINTER, L., «La tutela de los derechos e intereses colectivos de consumidores y usuarios en el proceso civil español», *op. cit.*, pp. 83-84.

⁸⁴⁰ Esta falta de precisión de la LEC ha sido denunciada por ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

la LEC regula esta alternativa en un apartado distinto del dedicado a la oposición *stricto sensu*. Con todo, el fundamento de la impugnación en caso de condenas dinerarias —que seguiremos denominando oposición—, tal como se precisa en la propia Exposición de Motivos de la propia ley rituarial, es el mismo de la oposición para el caso de condenas no dinerarias: «la probable irreversibilidad de las situaciones provocadas por la ejecución provisional y la imposibilidad de una equitativa compensación económica, si la sentencia es revocada»⁸⁴¹.

Ahora bien, la LEC realiza tratamiento diferenciado en cuanto al alcance de la oposición en atención a la naturaleza de la prestación que se ejecuta provisionalmente, limitando las posibilidades de defensa del ejecutado en la ejecución de condenas pecuniarias —que son la gran mayoría de los procesos de ejecución provisional que se tramitan en los tribunales— con respecto al régimen de oposición en previsto para las condenas no dinerarias, pues en este caso no cabe la oposición a la ejecución provisional globalmente considerada.

En todo caso, la imposibilidad de oponerse al conjunto de la ejecución provisional tratándose de condenas dinerarias no es arbitraria, sino que se justifica, precisamente, en la naturaleza de la prestación a ejecutar⁸⁴². En efecto, en estos casos —a diferencia de lo que sucede en la ejecución de condenas no dinerarias— lo que puede causar un perjuicio imposible de reparar o de compensar económicamente no es la ejecución provisional en sí misma —atendido su carácter fungible—, sino que la ejecución tenga por objeto determinados bienes del ejecutado⁸⁴³. En otros términos, no es el objeto mismo de la ejecución lo que puede provocar una situación imposible de revertir o indemnizar, sino las medidas que se adoptan para obtener del patrimonio del ejecutado las cantidades de dinero debidas⁸⁴⁴.

⁸⁴¹ Apartado XVI, párrafo 4º.

⁸⁴² MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 61.

⁸⁴³ Como precisa DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 376, lo que el legislador pretende evitar son las consecuencias mediatas o inmediatas del desplazamiento patrimonial propio de toda ejecución forzosa respecto de determinados bienes y no de otros.

⁸⁴⁴ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 217.

La oposición en caso de condenas dinerarias tiene todavía más limitaciones, pues no sólo se restringe a actuaciones ejecutivas concretas, sino que, además, el motivo de oposición consiste en que tales actuaciones ocasionarán al ejecutado una situación *absolutamente imposible* de restaurar o de compensar económicamente⁸⁴⁵. Sin embargo, creemos que la nota de intensidad que imprimió el legislador en este motivo resulta algo excesiva⁸⁴⁶, además de difícil de diferenciar de la mera *imposibilidad* del artículo 528.2.2º de la LEC. Por otro lado, si se interpretara estrictamente este concepto jurídico indeterminado, se transformaría en letra muerta el motivo de oposición, pues prácticamente todo es convertible en dinero, de manera que siempre sería posible al menos la compensación económica⁸⁴⁷.

De este modo, entendemos que lo que debe acreditar el ejecutado al oponerse a una medida ejecutiva concreta es que de llevarse a cabo la misma se producirá una situación imposible de restaurar o compensar, en términos objetivos⁸⁴⁸ –al igual que el motivo de oposición anterior–, por lo que no cabe tomar en consideración elementos

⁸⁴⁵ Por todos, cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 377, para quienes «los términos utilizados en este precepto (“absolutamente imposible”) dan idea del limitadísimo ámbito de este motivo de oposición».

⁸⁴⁶ Cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 228.

⁸⁴⁷ ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

⁸⁴⁸ En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 377; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit.*, p. 126.

A modo ejemplar, el AJPI Madrid (núm. 73), de 30 de octubre de 2012 (JUR\2013\234296) tiene declarado que «cuando se trata de condena dineraria, el legislador lo que pretende es la rápida satisfacción económica de quien obtuvo sentencia condenatoria a su favor, relevándole de prestar fianza, puesto que para eso consiguió vencer en el pleito. En el caso que nos ocupa, el Juzgador de instancia dictó sentencia apreciando en conciencia las pruebas propuestas y practicadas y por los fundamentos que figuran en la resolución y la actora que ha instado la ejecución provisional tiene derecho a que la sentencia se ejecute de esa manera provisional. Si la resolución fuese después revocada, la ley prevé las actuaciones a seguir. Pero en la presente litis vemos que, si bien hay una condena de hacer, también hay una condena dineraria respecto de la que no nos encontramos ante una actuación ejecutiva que después hiciese imposible de restaurar la situación o de compensar al ejecutado, ya que, para el caso de revocación, la ejecutante debería reintegrar la cantidad percibida». En consecuencia –continúan más adelante el auto–, «una vez que se han analizado y valorado detenidamente los documentos obrantes en la presente ejecución provisional, en especial la sentencia dictada por éste Juzgado y la de la Audiencia Provincial, y después del estudio de las alegaciones efectuadas por ambas partes, llegamos a la conclusión de que no se observa ninguna causa objetiva para dejar sin efecto la ejecución provisional dineraria que se está llevado a cabo, ni tampoco ninguna de las actuaciones ejecutivas concretas acordadas».

subjetivos, especialmente la capacidad económica del ejecutante, tal como lo tiene resuelto el Tribunal Supremo⁸⁴⁹.

Con todo, esta apreciación objetiva no impide que se tomen en consideración circunstancias concretas y personales del ejecutado⁸⁵⁰, como el valor afectivo que puede tener el bien embargado, o la circunstancia de residir en el inmueble que se pretende vender en pública subasta.

No obstante lo señalado, debemos advertir que esta interpretación del motivo de oposición que comentamos no es aceptada unánimemente en la doctrina, pues son varios los autores que se muestran partidarios de una valoración subjetiva de la irreversibilidad de la situación que se pretende evitar, lo implica tener en cuenta la capacidad económica del ejecutante a la hora de estimar o no la oposición a la ejecución provisional de condenas dinerarias⁸⁵¹, tesis que se ve respaldada por algunas resoluciones⁸⁵², especialmente en supuestos de insolvencia actual del ejecutante, donde

⁸⁴⁹ En este sentido, el ATS (Sala 1ª, de lo Civil), de 5 de diciembre de 2008 (RJ\2008\8004), conociendo de una demanda de error judicial «que se dice cometido por el Juzgado de Primera Instancia 59 de Madrid, en los autos de ejecución 72/2002, por haber dado lugar a la ejecución provisional de una condena dineraria, habiendo advertido los ejecutados, hoy demandantes, de la posibilidad de que se incurriera en tal error con el argumento de que si era revocada la sentencia, luego los que ejercitaban la ejecución provisional podían ser insolventes», afirmó que «este problema, como informa el Ministerio Fiscal, ya se discutió en las Cortes Generales cuando se elaboró la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y el legislador optó por esa solución, es decir por facilitar la ejecución provisional, sin simultánea prestación de caución, según el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y es más si la sentencia es de condena dineraria, el ejecutado no podrá oponerse a la ejecución provisional, sino únicamente a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, según el artículo 528 nº 2 apartado 3, pero aquí los ejecutados consignaron para que no fuera adelante el procedimiento de apremio, por lo que no se aprecia error judicial en la actuación el Juzgado, sino cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, por lo que la demanda de error judicial debe ser inadmitida a trámite».

⁸⁵⁰ Tal como precisa MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

⁸⁵¹ A favor de esta postura, sin ánimo exhaustivo, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 228; y MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

⁸⁵² De forma ilustrativa, el AJPI Murcia (núm. 8), de 26 de octubre de 2010 (AC\2011\639) tiene resuelto que «para estimar la oposición debe determinarse, en primer lugar, si las medidas alternativas ofrecidas son posibles y de eficacia similar a las adoptadas o, en su caso, si la caución es suficiente para responder de la demora de la ejecución cuando concurra en el caso una absoluta imposibilidad de restaurar la situación anterior a la ejecución o de compensar económicamente al ejecutado provisionalmente mediante ulterior resarcimiento de daños y perjuicios. Tales exigencias parecen cumplidas en este caso, y ello porque como ya exponíamos con anterioridad, la empresa "Canteras de Jun, S.A." se encuentra en una situación de inactividad que ella misma propició, y que es, -según sus palabras- "lo que le ha salvado de sufrir las consecuencias de una crisis que afecta de modo importante al sector". Ahora bien, dado que está claro que la empresa no realiza en la actualidad actividad industrial alguna, lo que no se ha acreditado es que la misma goce de una economía saneada o que los despidos efectuados y la

es posible identificar una evolución en esta línea jurisprudencial⁸⁵³, que comenzó por considerar que concurre el motivo de oposición del artículo 528.3 de la LEC en los casos de insolvencia actual del ejecutante –sujetos o empresas en situación de concurso o insuficiencia de patrimonio objetiva–, para extenderse a otras hipótesis análogas, como la inactividad de la empresa ejecutante o su falta de arraigo⁸⁵⁴.

En resumidas palabras, esta posición doctrinal y jurisprudencial no pretende contradecir el texto y el espíritu de la LEC en cuanto traslada el riesgo de insolvencia del ejecutante al ejecutado, pero sí matizar o precisar esta opción legislativa, pues una cosa es que el ejecutado tenga que asumir, en términos generales, el riesgo de insolvencia del ejecutante, y otra muy distinta es que tenga que soportar la acreditada –no potencial– imposibilidad actual del ejecutante de devolver las cantidades que revisa a través de la ejecución provisional⁸⁵⁵.

Ciertamente, asumir esta postura implica que el pronunciamiento de condena dineraria no llegará a realizarse, con lo que se pierde el propósito de nuestra institución, pero no es menos cierto que permitir la ejecución provisional de una sentencia en las situaciones excepcionales descritas, esto es, ejecutante en situación de concurso o de manifiesta insolvencia actual, falta de arraigo del ejecutante o inactividad del mismo (empresas de papel), supone exponer al ejecutado a una situación prácticamente segura de indefensión en caso de revocación de la sentencia, lo que permite entender la opción de algunos tribunales por una alternativa menos drástica que la solución legal.

paralización de actividades le hayan supuesto beneficio alguno. Por tanto, es evidente el riesgo de que la misma se encuentre en una situación de insolvencia, que, recordemos, no ha sido desmentida más que con alegaciones genéricas, pero sin prueba alguna que las acredite. Por ello, si "Pramac Ibérica, S.A." obtuviera en última instancia la revocación de la sentencia dictada en su contra podría resultar imposible que "Canteras de Jun, S.A." restaurase la situación anterior devolviendo las mencionadas cantidades o compensase económicamente los daños y perjuicios causados».

⁸⁵³ Para una importante selección de resoluciones que respaldan esta postura, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 74-79.

⁸⁵⁴ Al respecto, con numerosas referencias jurisprudenciales, cfr. HUERTA GONZÁLEZ, J., «Oposición y suspensión de la ejecución provisional dineraria: luz al final del túnel», en *Diario La Ley*, núm. 8401, 2014. En igual sentido, *vid.* TEMPRANO VÁZQUEZ, C., «La oposición a la ejecución provisional de condena dineraria. Análisis de la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación de los artículos 528.3 y 530.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, núm. 8759, 2016; y HUERTA PÉREZ, L., «Ejecución provisional por ejecutante insolvente», en *Diario La Ley*, núm. 8816, 2016.

⁸⁵⁵ Tal como lo expone MUÑOZ ARANGUREN, A., «Las posibilidades de oposición ante una ejecución provisional de condena dineraria instada por un litigante insolvente», en *Diario La Ley*, núm. 8041, 2013.

En todo caso, acreditada la situación de insolvencia del ejecutante, ello permitirá –si se sigue esta tesis– estimar la oposición, pero no exime al ejecutado del cumplimiento de la caución a que se refiere el artículo 528.3 de la LEC, a la que nos referiremos al final de este epígrafe.

Ahora bien, la imposibilidad de restaurar o compensar debe ser provocada por *actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio*, esto es, aquellas medidas destinadas a la realización de los bienes embargados (arts. 634 ss. LEC)⁸⁵⁶, y son esas medidas las que serán objeto de oposición por el ejecutado. De este modo, como ya se ha indicado, la oposición no plantea respecto de la ejecución provisionalmente globalmente considerada, sino que únicamente respecto de actuaciones ejecutivas concretas⁸⁵⁷. Pero además, dichas actuaciones deben tener lugar durante el procedimiento de apremio, por lo que el ejecutado no podrá oponerse –con base en el artículo 528.3 de la LEC– a la traba del embargo ni a las medidas de garantía de la traba⁸⁵⁸. Ciertamente, si estas últimas medidas se acuerdan en contradicción con el título o de forma ilegal –por ejemplo, si traba el embargo sobre bienes inembargables *ex* artículos 695 y siguientes de la LEC–, caben los medios de impugnación generales de la ejecución ordinaria, como ya hemos indicado [*supra*, apdo. I.1.b)].

No obstante, si se tiene en cuenta que el fundamento de la oposición a la ejecución provisional de condenas pecuniarias es evitar la irreversibilidad que puede ocasionar una medida ejecutiva en relación con bienes determinados, entendemos que el ejecutado puede oponerse directamente al embargo de ciertos bienes⁸⁵⁹, por entender

⁸⁵⁶ Junto a las obras generales sobre el proceso de ejecución forzosa, para una ordenada exposición sobre la realización de los bienes embargados, *vid.* FLORES PRADA, I., *El procedimiento de apremio en la ejecución civil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005.

⁸⁵⁷ Reiterando esta idea, el AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380) tiene resuelto que en la ejecución provisional de condenas dinerarias «no existen causas específicas por las que el ejecutado pueda oponerse a la ejecución provisional como conjunto - aunque sí puede hacerlo por falta de los presupuestos procesales-, sino que su oposición ha de limitarse a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio, por entender que dichas actuaciones causarían una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios (art. 528.2 LEC)».

⁸⁵⁸ En este sentido, *vid.* MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

⁸⁵⁹ En la misma línea, FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 157, sostiene que, atendido el carácter pecuniario de la prestación que se ejecuta provisionalmente, «no puede haber más actuación ejecutiva que el embargo de bienes, y por eso

que la posterior realización de los mismos –independientemente del procedimiento previsto por la ley para dicha realización en función de la naturaleza del bien embargado– le provocará un perjuicio imposible de restaurar o de compensar⁸⁶⁰, siempre que, claro está, cumpla con los requisitos adicionales que exige el apartado 3 del artículo 528 de la LEC para formular la oposición –indicar otras medidas y ofrecer caución–, a los que nos referiremos más abajo.

En todo caso, dado que el objeto de la oposición en la ejecución provisional de condenas pecuniarias es una actuación ejecutiva concreta, el ejecutado puede promover tantos incidentes de oposición cuantas sean las medidas del procedimiento de apremio que se acuerden y que puedan causarle una situación imposible de restaurar o de compensar económicamente en caso de revocación, de ahí que el plazo para formular esta oposición se cuente desde la notificación de la respectiva actuación ejecutiva, y no desde la notificación del auto que despacha la ejecución provisional (art. 529.1 LEC)⁸⁶¹. Por lo demás, tales actuaciones del procedimiento de apremio difícilmente se podrán acordar en el auto que despacha la ejecución provisional, por lo que no podría ser de otra forma.

Ya hemos indicado que la oposición a la ejecución de sentencias de condena dineraria se encuentra limitada por su alcance y por el motivo mismo de oposición. Pero además, una tercera limitación a las posibilidades de defensa del ejecutado está

las “otras actuaciones ejecutivas que sean posibles y que no provoquen situaciones similares”, sólo puede ser el embargo de otros bienes distintos del deudor».

Por su parte, MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 73, afirma que una interpretación razonable del artículo 528.3 de la LEC «lleva a entender que la oposición que en él se prevé pueda realizar el ejecutado no está en relación directa con los sistemas de realización forzosa previstos por el legislador –el procedimiento de apremio– sino que se concreta, en la petición de que se alce el embargo trabado sobre alguno o algunos de los bienes indicando a la vez otro u otros de eficacia similar que los sustituya».

⁸⁶⁰ Sobre esta idea, sirve de apoyo lo resuelto por el AJPI Bilbao (núm. 10), de 30 de abril de 2004 (JUR\2004\129504), en cuanto sostuvo que «el embargo acordado aún no se ha concretado en bienes específicos, pues ni el ejecutado los había señalado al despacharse ejecución ni el ejecutante ha reclamado que se concrete en bienes individualizados. Y si no se ha concretado la acción ejecutiva específica, no puede haber oposición a la misma». A *contrario sensu*, concretado el embargo sobre bienes específicos procederá la oposición a dicha actuación, aunque la misma no forma parte propiamente tal del procedimiento de apremio.

⁸⁶¹ En igual sentido, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», op. cit.

configurada por ciertas exigencias adicionales a la alegación y prueba de la imposibilidad de restauración o de compensación que pesa sobre el ejecutado⁸⁶².

En efecto, el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 528 de la LEC establece que el ejecutado, al formular su oposición a actuaciones ejecutivas concretas, debe indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y que no provoquen situaciones similares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida que se opone –y, al mismo tiempo, debe ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y la sentencia de condena que se ejecuta provisionalmente resulta finalmente confirmada.

La misma LEC agrega que si el ejecutado no indica medidas alternativas ni ofrece prestar caución, no procederá la oposición (art. 528.3.III LEC).

Del tenor literal de los preceptos citados se extrae que se trata de dos exigencias que el ejecutado debe cumplir copulativamente al momento de oponerse a una actuación ejecutiva concreta, de manera que si no cumple con una de ellas, la oposición será desestimada. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 530.3 de la LEC, al regular la decisión sobre el incidente de oposición a actuaciones ejecutivas concretas, parece desprenderse que el cumplimiento de estas exigencias no debe ser simultaneo, si no que se trata de una requisitos alternativos para el ejecutado.

Esta aparente contradicción entre lo dispuesto en los artículos 528.3 y 530.3 de la LEC ha dado origen a posturas discrepantes tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial⁸⁶³.

⁸⁶² Como expresa GISERMAN LIPONETSKY, L., «La oposición a la ejecución provisional», *op. cit.*, p. 27, existe una triple limitación a la oposición del ejecutado en materia de sentencias de condena dineraria.

En el mismo sentido, el AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878), afirma respecto de la ejecución provisional de condenas pecuniarias «que en este caso existe una triple limitación: la oposición solamente es posible respecto a actuaciones ejecutivas concretas, las del procedimiento de apremio, y por tanto se actúa sobre la base de la imposibilidad de restauración o de indemnización que ocasione la actividad ejecutiva concreta y por tanto el opositor asume la carga de acreditar el perjuicio que pueda verificarse así como su absoluta irreparabilidad tanto de restauración a la situación anterior como de la compensación. Además para que la oposición sea admisible, el ejecutado debe indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas, así como ofrecer caución suficiente para responder de la demora. La admisión de la oposición requiere por tanto, el cumplimiento simultaneo de ambos requisitos art. 528/3 LECiv».

En efecto, parte de la doctrina entiende que la estimación de la oposición a actuaciones ejecutivas concretas depende del cumplimiento de los dos requisitos establecidos en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 528 de la LEC –indicar medidas alternativa y, además, ofrecer caución⁸⁶⁴. Para otros autores, en cambio, el cumplimiento de estas exigencias no es cumulativo sino alternativo, por lo que basta que se indiquen medidas alternativas o que se ofrezca caución suficiente para que el tribunal pueda estimar la oposición⁸⁶⁵.

A su vez, las soluciones jurisprudenciales tampoco son uniformes, existiendo en un extremo resoluciones que exigen el cumplimiento de ambos requisitos en forma simultánea a la formulación de la oposición⁸⁶⁶, y en el otro, resoluciones que estiman la oposición por estimar suficiente la caución, aunque no se indiquen medidas ejecutivas alternativas⁸⁶⁷.

⁸⁶³ Para una completa revisión de esta problemática, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 80-91.

⁸⁶⁴ Así lo sostienen, entre otros, GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 217-218; DAMIÁN MORENO, J., «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», *op. cit.*, p. 123; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 91; MORMENEO CORTES, M., «La ejecución provisional en las sentencias de condena en primera instancia», en *Revista Española de Seguros*, núm. 122, 2005, pp. 225-226; MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*; MORENO CATENA, V., «Ejecución forzosa de sentencias y ejecución provisional», en VV.AA., *El proceso en el siglo XXI y soluciones alternativas*, Centro de Estudios Jurídicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 45; DURÁN SILVA, C., «La caución en la fase de ejecución del proceso civil», en *Práctica de Tribunales*, núm. 95, 2012; y PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», *op. cit.*

⁸⁶⁵ En este sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 378, afirma que si solo se ofrece prestar caución, sin indicar medidas alternativas, la oposición no debería inadmitirse de plano. En igual sentido, *cfr.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 915-916; GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 126-127; ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*; y GISERMAN LIPONETSKY, L., «La oposición a la ejecución provisional», *op. cit.*, p. 27.

⁸⁶⁶ Por ejemplo, el AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380) establece que «al formular esta oposición, de un lado, el ejecutado habrá de indicar otras medidas o actuaciones ejecutivas que sean posibles y que no provoquen situaciones simulares a las que causaría, a su juicio, la actuación o medida a la que se opone, y por otro lado, deberá ofrecer caución suficiente para responder de la demora en la ejecución, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria posteriormente confirmado».

En el mismo sentido, el AJPI Santander (núm. 1), de 16 de mayo de 2001 (AC\2001\1152) afirma que «el opositor está obligado –artículo 528.2 y 3– a indicar otras medidas de ejecución alternativas y ofrecer caución para responder de la demora, y ni una ni otra cosa hace, por lo que de conformidad expresa con el contenido del artículo 528.3, párrafo 3º, realmente tajante, no es dable acceder a la oposición».

⁸⁶⁷ En este sentido se pronuncia el AAP La Rioja, de 11 de octubre de 2002 (AC\2002\2338), al

La solución a esta contradicción normativa no es sencilla, como lo demuestra la disparidad de criterios enunciados. Sin embargo, nos inclinamos por entender que en la oposición a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio en caso de condenas pecuniarias, el ejecutado debe cumplir con al menos una de las exigencias establecidas en el artículo 528.3 de la LEC, de forma tal que la oposición deberá ser desestimada, aun cuando el tribunal considere que de llevarse a cabo la actuación que ha sido objeto de oposición se producirá una situación irreversible, sólo en aquellos casos en el ejecutado no indique medidas ejecutivas alternativas, ni ofrezca caución suficiente para responder de la demora. Pero si junto con su oposición señala medidas ejecutivas distintas de las acordadas, o se limita a ofrecer caución suficiente, el tribunal deberá valorar la concurrencia del motivo de oposición, y si estima que se producirá una situación imposible de restaurar o compensar, tendrá que pronunciarse sobre las medidas o sobre la caución, según el caso.

Por lo anterior, no es necesario que se constituya la caución al momento de formularse la oposición, toda vez que el tribunal deberá valorar si se produce la situación de irreversibilidad descrita en la norma, y sólo para el caso de concurra el motivo de oposición se pronunciará sobre las medidas alternativas y/o la caución, según se haya cumplido con ambas o con una sola de estas exigencias. Así, en el primer caso – cumplimiento simultáneo de las exigencias –, si el tribunal estima que la actuación alternativa indicada por el ejecutado satisface las exigencias legales –ser posible y no producir una situación irreversible–, la aceptará sin necesidad de pronunciarse sobre la caución, la que no llegará a prestarse. En cambio, si únicamente se ofreció caución y el tribunal estimó que concurre el motivo de oposición, fijará la forma en que deberá prestarse la caución.

señalar que «no indica la ejecutada otras medidas o actuaciones ejecutivas posibles que no provoquen situación similar a la que, según expresa, ocasionaría el embargo a que se opone, pero ofrece aval Bancario para garantizar el pago de la condena, y aún cuando el párrafo segundo del artículo 528-3 de la LECiv, parece exigir conjuntamente ambas cosas («así como»), el tenor del artículo 530-3 de la misma Ley Procesal, la alternativa («o si...») que establece, excluye el rechazo de plano que pretende la ejecutante».

Asimismo, el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 19 de diciembre de 2002 (JUR\2003\34617) declara que la «oposición no es genérica sino en relación a actuaciones concretas, como es el embargo decretado, y por otro lado, se ha ofrecido la caución suficiente, que no ha de ser subsidiaria respecto de aquellas medidas como la redacción del precepto podría dar a entender, sino que puede tener carácter principal e independiente respecto de aquellas, como claramente se desprende del posterior artículo 530,3».

De seguirse la tesis de la contraria –exigencia cumulativa de los requisitos del artículo 528.3 de la LEC–, se corre el riesgo de privar al ejecutado de la posibilidad de oponerse a la ejecución, pues no es difícil imaginar supuestos en que el ejecutado no esté en condiciones de indicar otros bienes distintos de los embargados, pero sí puede ofrecer caución. Por ello, una interpretación más garantista del derecho de defensa del ejecutado nos lleva a optar para lo solución indicada.

Establecida nuestra posición en este punto, no podemos sino hacer patente nuestra crítica a la inadecuada regulación legal de un tema central de nuestra institución, como es el incidente de oposición a la ejecución en caso de condenas dinerarias, por lo que coincidimos con quienes ya han manifestado la necesidad de una reforma legislativa que zanje de una vez esta dificultad⁸⁶⁸.

Para concluir nuestra revisión de la oposición a la ejecución provisional de condenas dinerarias, es necesario hacer una referencia al requisito de la caución que debe ofrecer el ejecutado *ex* artículo 528.3.II de la LEC.

Como hemos indicado en distintos lugares de este trabajo, la ejecución provisional de despachará sin necesidad simultánea prestación de caución (art. 526 LEC), exigencia cuya eliminación ha sido considerada, con acierto, como una de las novedades más importantes del modelo de ejecución provisional de la LEC. Sin embargo, ello no ha significado que la caución haya desaparecido por completo de nuestra institución, pues la prestación de caución puede tener lugar en el trámite de la oposición a la ejecución provisional⁸⁶⁹.

En efecto, la caución reaparece en la LEC como presupuesto de la oposición⁸⁷⁰ en el caso de la ejecución provisional de condenas dinerarias –según hemos estado

⁸⁶⁸ Así lo reclaman, entre otros, ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 91.

⁸⁶⁹ Al respecto, ORTEGO PÉREZ, F., «La caución procesal y su exigencia en supuestos concretos de la ejecución forzosa», en *Práctica de Tribunales*, núm. 95, 2012, sostiene en términos muy expresivo que «en materia de ejecución provisional la caución salió por la puerta pero entró por la ventana, o cuando menos, no se marchó definitivamente».

⁸⁷⁰ Como explica ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 116, con la LEC se invierte la finalidad de la caución, que pasó de presupuesto de la ejecución provisional a presupuesto de la oposición.

analizando—, pero también en la ejecución provisional de condenas no dinerarias, en cuyo caso la caución puede ser ofrecida por el ejecutante para garantizar la restauración de la situación anterior o la compensación económica en caso de revocación de la sentencia, como veremos más adelante [*infra*, apdo. I.3.d)].

En esta línea, el ofrecimiento de caución por parte del ejecutado en la ejecución provisional de condenas pecuniarias es un requisito —alternativo a la indicación de medidas ejecutivas distintas de las acordadas— para que la estimación de la misma. En consecuencia, de cara a la decisión que adoptará el tribunal sobre el incidente de oposición, es necesario determinar la suficiencia y la calidad de caución que satisfacen la exigencia del legislador.

Así, en cuanto a la suficiencia de la caución, el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 528 de la LEC señala que el ejecutado deberá ofrecer caución suficiente para responder de la demora de la caución, por lo que podría pensarse que la misma debe abarcar una cantidad suficiente para hacer frente a los perjuicios que podría ocasionar al ejecutante provisional la suspensión de la medida ejecutiva⁸⁷¹. Esta era, precisamente, la finalidad de la caución en el Borrador de Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que se establecía que el ejecutado debía ofrecer la constitución de caución dineraria por importe del veinte por ciento de la cantidad dineraria líquida a la que había sido condenado⁸⁷².

Sin embargo, creemos que no debe ser ese el sentido de la norma en el texto definitivo de la LEC, pues la caución debe estar al servicio de la efectividad del pronunciamiento de condena objeto de ejecución provisional. Por lo tanto, el ejecutado debe ofrecer una caución que abarque el total de la cantidad por la que se ha despachado la ejecución provisional —o aquella parte del total que no podrá cubrirse por las medidas que previamente acordadas han sido dejadas en suspenso por la estimación de la

⁸⁷¹ En este sentido, MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*, sostiene que la caución debe ser suficiente para cubrir los intereses desde el despacho de la ejecución hasta que la sentencia devenga firme.

⁸⁷² Cfr. Díez-Picazo Giménez, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, pp. 914-915.

oposición— más los intereses previsibles por la demora⁸⁷³. Con otras palabras, no nos parece que sea suficiente la caución que pretende garantizar únicamente la demora en la ejecución provisional, sin que alcance a cubrir la totalidad de la cantidad líquida de dinero a la que ha sido condenado el ejecutado, más los intereses y las costas de la ejecución⁸⁷⁴.

Por otra parte, en cuanto al tipo de caución que debe ofrecer el ejecutado, nada dice la LEC, a diferencia de lo que ocurre con la caución que puede ofrecer el ejecutante tratándose de la oposición a la ejecución provisional de condenas no dinerarias, supuesto en el cual la caución debe constituirse por alguna de las modalidades previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de la LEC.

Según algunos autores, la caución que estamos estudiando debe prestarse en los mismos términos del artículo 529.3.II de la LEC⁸⁷⁵. Otros autores, en cambio, entienden que tal disposición no resulta aplicable a la caución que ofrece prestar el ejecutado en la oposición a la ejecución provisional de condenas dinerarias, de modo que la caución puede constituirse según las formas indicadas en tal disposición o por cualquier otra que responda a la finalidad perseguida por el artículo 528.3 de la LEC⁸⁷⁶.

En este último sentido, se ha resuelto que «poco ha de importar que el aval presentado no reúna los requisitos que fueron exigidos en la resolución dictada por el Juzgado de 29 de junio, que motivó su rechazo en providencia de 26 de julio siguiente — de duración indefinida o pagadero a primer requerimiento—, que es condición exigida por el artículo 529 pero respecto de la ejecución provisional de Sentencia de condena no dineraria, adecuada por tanto a aquella cualidad, pero no a la de condena dineraria, respecto de la que la Ley nada establece al respecto, y ningún argumento parece pueda

⁸⁷³ En igual sentido, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 915; y MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 91.

⁸⁷⁴ Así también lo entienden los tribunales, especialmente es los casos de insolvencia del ejecutante, como da cuenta HUERTA GONZÁLEZ, J., «Oposición y suspensión de la ejecución provisional dineraria: luz al final del túnel», *op. cit.*

⁸⁷⁵ Así lo expresan, entre otros, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 915.

⁸⁷⁶ En este sentido, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 91-92.

desvirtuar se presente aval sólo pagadero a primer requerimiento lo sea cuando la Sala 1ª del Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre la admisión o desestimación del recurso de casación, al cumplirse de tal modo la previsión contemplada en la Ley de establecer "Caución suficiente para responder de la demora en la ejecución", siendo por lo demás de cuantía suficiente para cubrir aquella exigencia»⁸⁷⁷.

Sobre este aspecto, nos parece que lo relevante es que la caución tenga la virtualidad de asegurar el cumplimiento de la condena dineraria y de garantizar la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate, con independencia de la forme que adopte la caución. En otros términos, la caución ofrecida por el ejecutado debe cumplir con el principio básico que persigue esta medida: su efectividad y su disponibilidad⁸⁷⁸. Por lo demás, el mismo artículo 529.3.II de la LEC es lo suficientemente flexible al señala que la caución podrá constituirse por cualquier medio idóneo a juicio del tribunal, quedando entonces a criterio del órgano jurisdiccional la valoración de la calidad de la cuantía.

3. Tramitación de la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas

Para la tramitación de la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas la LEC destina un cauce específico, regulado en su artículo 529. Sin embargo, ya hemos expresado que los motivos de oposición a la ejecución provisional previstos en el artículo 528 de la LEC conviven con los motivos de oposición a la ejecución ordinaria o definitiva contenidos en los artículos 556 y siguientes de la ley de ritos, los que tienen su propia dinámica procedimental.

Esta dualidad de cauces para la sustanciación de la oposición a la ejecución provisional nos obliga a fijar con precisión las reglas a las que se somete este incidente en función de la causa en que se funda el mismo.

⁸⁷⁷ AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 19 de diciembre de 2002 (JUR\2003\34617).

⁸⁷⁸ CARRERAS MARAÑA, J., «Casuística sobre la caución en la ejecución forzosa y provisional», en *Práctica de Tribunales*, núm. 30, 2006, p. 9.

De este modo, si la oposición se basa en motivos procesales (art. 528.2.1º LEC), o en alguno de los motivos de fondo específicos de la ejecución provisional de condenas no dinerarias o de condenas pecuniarias (arts. 528.2.2º y 528.3 LEC), la oposición se sustanciará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 del código procesal, en los términos que veremos en los epígrafes siguientes.

En cambio, si la oposición se funda en un motivo de fondo común, esto es, en el pago o cumplimiento de la sentencia o en la existencia de un pacto o transacción para evitar la ejecución provisional, la misma se sustanciará conforme a lo dispuesto para la ejecución ordinaria *ex* artículo 528.4 de la LEC. En consecuencia, la oposición deberá formularse dentro del plazo de diez días contado desde la notificación del auto que despacha la ejecución provisional, sin que la oposición suspenda el curso de la ejecución (art. 556.1 y 2 LEC)⁸⁷⁹. A su vez, el ejecutante podrá impugnar la oposición en el plazo de cinco días contados desde la notificación de la resolución que resuelve la oposición por motivos procesales, o desde el traslado del escrito de oposición, según el caso (art. 560.I LEC). La oposición será resuelta por medio de auto, oídas las partes y, en su caso, celebrada la vista que hubiera sido acordada a petición de parte, resolución que podrá estimar o desestimar total o parcialmente la oposición. Contra la resolución que resuelve la oposición cabrá el recurso de apelación (art. 561 LEC).

Asimismo, la impugnación de actos ejecutivos ilegales o contradictorios con el título ejecutivo –sentencia o auto de condena no firme–, se hará por los cauces previstos en sede de ejecución ordinaria (arts. 562 y 563 LEC), siempre después de despachada la ejecución provisional.

a) Oportunidad para formular oposición

La ejecución provisional se despacha sin audiencia del ejecutado, de manera que la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas sólo puede formularse una vez acordada la ejecución provisional.

⁸⁷⁹ Por esta circunstancia, como señala DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 379, podría darse el caso de que la oposición por motivos de fondo y la oposición específica de la ejecución provisional se tramiten en paralelo.

En concreto, la oposición puede presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que acuerde el despacho de la ejecución o las actuaciones concretas a que se oponga el ejecutado (art. 529.1 LEC). Se trata, ciertamente, de un plazo preclusivo, lo que implica que la oposición formulada una vez vencido el plazo deberá ser rechazada por esta causa⁸⁸⁰.

Tampoco puede el ejecutado oponerse a la ejecución provisional antes de que la misma haya sido acordada, pues «sólo cuando se despacha la ejecución es factible expresar la oposición por el condenado provisional; no antes»⁸⁸¹. Si de hecho así ocurriera, el tribunal no debe pronunciarse sobre ella, toda vez que, como vimos oportunamente (*supra*, cap. V, apdo. II.2), la denegación del despacho de la ejecución provisional por estimar un motivo de oposición formulado extemporáneamente por el ejecutado lesiona el principio de contradicción y las garantías procesales de defensa del ejecutante.

Por otra parte, nótese que tratándose de la oposición a actuaciones ejecutivas concretas en el caso de condenas dinerarias, el plazo para formular la oposición se cuenta desde la notificación de la medida. Pero el ejecutado en la ejecución provisional de condenas pecuniarias también puede oponerse alegando un motivo común –defectos procesales (art. 528.2.1º LEC) o motivos de fondo (art. 528.4 LEC)–, en cuyo caso la oposición deberá formularse dentro de los cinco días siguientes contados desde la notificación de la resolución que acuerda el despacho de la ejecución provisional, y no desde la notificación que acuerda una actuación ejecutiva concreta.

De este modo, en la ejecución provisional de condenas dinerarias el ejecutado puede formular oposición al conjunto de la ejecución provisional fundada en motivos comunes, y si la misma es desestimada por el tribunal, podrá formular con posterioridad oposición a actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio. Pero no sólo eso, pues tratándose de la oposición específica a medidas ejecutivas concretas, es

⁸⁸⁰ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 218.

⁸⁸¹ AAP Burgos (Secc. 2ª), de 13 de noviembre de 2001 (AC\2002\114). En igual sentido, *vid.* AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 16 de febrero de 2006 (JUR\2006\227714).

perfectamente posible que se promuevan tantos incidentes de oposición como medidas ejecutivas sean acordadas durante el desarrollo de la ejecución provisional⁸⁸².

b) Forma de la oposición

De acuerdo con el artículo 529.1 de la LEC, la oposición a la ejecución provisional se debe formular por escrito, pero nada dice la ley sobre su contenido. Sin embargo, atendida la finalidad del mismo, y en tanto supone la promoción de un incidente, el escrito seguirá el orden expositivo propio de toda demanda⁸⁸³, y deberá ir firmado por abogado y procurador⁸⁸⁴, en los casos en que la intervención de estos profesionales sea preceptiva, en términos análogos a los analizados al pronunciarnos sobre la demanda de ejecución provisional (*supra*, cap. V, apdo. I.1).

Por lo anterior, el escrito de oposición debe ir acompañado de los documentos que acrediten el poder del procurador. Asimismo, dado que el ejecutado tiene la carga de acreditar la concurrencia del motivo en que funda su oposición, será al momento de formular este incidente la oportunidad para acompañar los documentos necesarios para tal fin.

Además, tratándose de la oposición a actuaciones ejecutivas concretas en caso de condenas dinerarias, el ejecutado deberá cumplir en el escrito de oposición con el requisito de indicar medidas ejecutivas alternativas u ofrecer caución, en los términos que ya expusimos [*supra*, apdo. I.2.d)].

⁸⁸² En igual sentido, por todos, *vid.* SERRA DOMÍNGUEZ, M., «La oposición a medidas ejecutivas concretas», *op. cit.*, p. 781.

⁸⁸³ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 385. En contra, cfr. FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», *op. cit.*, p. 330, para quien no hay base legal para exigir que el escrito de oposición adopte la forma de demanda.

⁸⁸⁴ GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 130.

c) Efecto no suspensivo de la oposición

La LEC guarda silencio en cuanto a los efectos que produce la formulación de oposición por parte del ejecutado respecto del curso de la ejecución provisional o de las actuaciones ejecutivas concretas, según corresponda, por lo que acudiendo a las normas de la ejecución ordinaria, en virtud de la remisión contenida en el artículo 524.2 de la LEC, se puede concluir que el incidente de oposición no suspende el desarrollo de la ejecución provisional, pues la ejecución sólo se suspende en los casos en que la ley lo ordene expresamente, tal como indica el artículo 565.1 de la LEC⁸⁸⁵.

La misma conclusión puede desprenderse de lo dispuesto en el artículo 530.2 de la LEC, según el cual en caso de estimarse la oposición a la ejecución provisional de condena no dineraria, se dejará en suspenso la misma, lo que supone que la formulación de la oposición no dio lugar a la suspensión del procedimiento. Del mismo modo, según artículo 530.3 de la LEC, tratándose de condenas dinerarias, el efecto que se sigue de la estimación de la oposición a una actuación ejecutiva concreta consiste únicamente en que se denegará la medida concreta objeto de la oposición, prosiguiendo el procedimiento de apremio, de forma tal que la oposición ni siquiera suspende el procedimiento de apremio⁸⁸⁶.

En definitiva, la oposición a la ejecución provisional no suspende el curso de la misma, cualquiera que sea el motivo en que se base el incidente de oposición, o la naturaleza de la prestación que se ejecuta, solución legal que no parece del todo acertada, especialmente en los supuestos de condenas dinerarias, pues si no se suspende el procedimiento para realizar el bien que ha sido embargado, se puede producir la situación de irreversibilidad que la oposición busca evitar⁸⁸⁷.

⁸⁸⁵ En el mismo sentido, sin rigor exhaustivo, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 377; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 104-105; y ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

⁸⁸⁶ En los mismo términos, *cfr.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 121.

⁸⁸⁷ *Cfr.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «Suspensión del proceso de ejecución civil: problemática a la luz de las últimas reformas procesales», en *Diario La Ley*, núm. 7379, 2010; y de la misma autora, «Cuestiones prácticas sobre la ejecución ordinaria o provisional de sentencias de condena no dineraria», *op. cit.*, p. 1194.

Desde esta perspectiva, compartimos la opinión expresada por alguna autora quien sostiene que la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas debería paralizar el procedimiento de apremio, alternativa que no representa ningún riesgo para el ejecutante, pues se mantendrían las medidas de garantía previamente adoptadas (embargo) durante la tramitación de la oposición⁸⁸⁸.

d) Traslado al ejecutante. Posibilidad de ofrecer caución en caso de condenas no dinerarias

Del escrito de oposición y de los documentos aportados por el ejecutado se dará traslado al ejecutante y a quienes estuvieren personados en la ejecución provisional para que, en el plazo de cinco días, manifiesten y acrediten lo que estimen pertinente (art. 529.2 LEC).

La LEC otorga al ejecutante la posibilidad de impugnar la oposición del ejecutado, de manera que su escrito contendrá la argumentación relativa a la improcedencia o a la desestimación del motivo o motivos alegados por el ejecutado, cuyo contenido variará dependiendo de la causa de oposición invocada⁸⁸⁹.

No sólo el ejecutante puede impugnar la oposición, sino que también aquellos sujetos que estuvieren personados en la ejecución provisional, lo que debe ser interpretado como una referencia a los sujetos frente a quienes no se despachó la ejecución, pero resultan afectados por la misma, según las reglas generales sobre legitimación pasiva en sede de ejecución ordinaria (arts. 538 y siguientes LEC)⁸⁹⁰.

⁸⁸⁸ En este sentido, entre otros, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 121. En la misma línea, CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», op. cit., pp. 233-234, sostiene que «si resulta inminente la realización de una actuación que pueda considerarse irreversible a efectos de apreciar los motivos de oposición alegados, el juzgador deberá suspender la ejecución quedando a la espera de la resolución del incidente».

⁸⁸⁹ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 387.

⁸⁹⁰ En este sentido, vid. MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 105. En contra, cfr. DAMIÁN MORENO, J., «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», op. cit., p. 124.

Dentro del mismo plazo de cinco días, cuando se trate de la *ejecución provisional de condenas no dinerarias* en que el ejecutado se ha opuesto de conformidad con el artículo 528.2.2º de la LEC, el ejecutante podrá, junto con impugnar la oposición, ofrecer caución suficiente para garantizar que en caso de revocación de la sentencia, se restituirá la situación anterior, o de no ser ello posible, se resarcirán los daños y perjuicios causados al ejecutado (art. 529.3.I LEC). De esta forma, así como el ejecutado debe indicar medidas ejecutivas u ofrecer caución para responder de la demora como presupuesto para la oposición a actuaciones ejecutivas concretas en supuestos de ejecución provisional de condenas pecuniarias, la LEC otorga al ejecutante en los casos de ejecución de sentencias que contengan una condena de entregar una cosa distinta de dinero, de hacer o de no hacer, la posibilidad de ofrecer caución para evitar la suspensión de la ejecución provisional, garantizando que, en caso de revocación, no se producirá el riesgo que la oposición busca evitar, cual es la imposibilidad o extrema dificultad para reparar o compensar económicamente al ejecutado en caso de revocación de la sentencia que se ejecuta provisionalmente.

Ciertamente, el ofrecimiento de caución es potestativo para el ejecutante⁸⁹¹, y a diferencia de la caución para el caso de condenas dinerarias, la LEC regula expresamente la calidad de la misma, al establecer que la caución podrá constituirse en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, todos instrumentos de gran eficacia y predicamento en el tráfico jurídico⁸⁹².

Como ha expresado algún autor, constituye toda una novedad en el proceso de ejecución la consagración normativa del aval como medio de garantía procesal, cuya idoneidad y suficiencia se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: que sea solidario; que la forma de dirigirse contra el garante sea directa, sin

⁸⁹¹ Por todos, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 377. Con todo, si la oposición es fundada y el ejecutante insiste en el cumplimiento anticipado de la sentencia, el ofrecimiento de caución es inexorable a fin de que se puede continuar con la ejecución provisional, tal como precisa ORTEGO PÉREZ, F., «La caución procesal y su exigencia en supuestos concretos de la ejecución forzosa», *op. cit.*

⁸⁹² ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 120.

necesidad de requerimiento previo al obligado principal; y que se haya emitido de manera regular desde el punto de vista de su forma externa⁸⁹³.

En todo caso, la caución no queda limitada a las modalidades indicadas, pues la propia ley procesal permite al ejecutante constituir la caución por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate, en su caso (art. 529.3.II LEC).

e) Posibilidad de subsanar defectos procesales

El artículo 529 de la LEC no contempla la posibilidad de subsanar defectos procesales, sin embargo, la concurrencia de tales vicios puede ser precisamente el fundamento de la oposición del ejecutado (art. 528.2.1º LEC). De este modo, si se tiene en cuenta que en la ejecución provisional las partes tienen los mismos derechos y facultades previstos en la ejecución ordinaria *ex* artículo 524.3 de la LEC, y en sede de ejecución definitiva la ley arbitra la posibilidad de subsanación dentro de tramitación de la oposición por defectos procesales, el ejecutante provisional debe tener esta misma posibilidad⁸⁹⁴.

Ciertamente, de lo que se trata es de concederle al ejecutante la oportunidad para subsanar la falta de acreditación de un presupuesto o requisito procesal necesario para el despacho de la ejecución provisional, sobre los cuales nos remitimos a lo indicado al revisar la forma y contenido de la demanda de ejecución provisional (*supra*, cap. V, apdo. I.1), porque la falta de un presupuesto o requisito procesal en sí mismo es insubsanable, de manera que si el tribunal despachó la ejecución provisional inadvirtiéndolo la omisión de alguna de estas exigencias, el ejecutado podrá oponerse a la ejecución globalmente considerada y la misma tendrá que ser estimada.

Dado que la ley procesal no indica el procedimiento para la subsanación de defectos procesales en sede de ejecución provisional, entendemos que por la remisión

⁸⁹³ Cfr. CARRERAS MARAÑA, J., «Casuística sobre la caución en la ejecución forzosa y provisional», en *Práctica de Tribunales*, núm. 30, 2006, pp. 9-11.

⁸⁹⁴ En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, pp. 387-388.

en bloque a las normas de la ejecución ordinaria contenida en el artículo 524.2 de la LEC será aplicable el cauce previsto en el artículo 559.2 de la LEC, según el cual es tribunal concederá al ejecutante un plazo de 10 días para corregir los defectos que sean subsanables⁸⁹⁵.

4. Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional

Terminadas las alegaciones de las partes, el tribunal decidirá el incidente de oposición estimando o desestimando la misma por medio de una resolución que adopta la forma de auto⁸⁹⁶. No se contempla —como en la ejecución ordinaria *ex* artículo 560 de la LEC—, la posibilidad de celebrar una vista para que las partes puedan acreditar sus alegaciones⁸⁹⁷, de manera que la prueba será eminentemente documental⁸⁹⁸.

Como la oposición puede fundarse en diversas causas, lo más razonable es que el tribunal comience por analizar la oposición por defectos procesales, y desestimada la misma, continuar con la valoración de las otras causas de fondo, tanto las comunes a toda ejecución provisional como las específicas según la naturaleza de la prestación que se ejecuta⁸⁹⁹.

De acuerdo con lo anterior, si tras analizar los motivos de oposición alegados por el ejecutado el tribunal los desestima en su totalidad, la ejecución provisional

⁸⁹⁵ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 389.

⁸⁹⁶ Y no por providencia, como lo recuerda el AAP Teruel (Secc. 1ª), de 7 de junio de 2005 (JUR/2005/154876), según el cual la oposición «se ha tramitado y se ha resuelto indebidamente por providencia, cuando, como ya se ha dicho, debió dictarse un auto, pues, como afirma el recurrente en queja, por "su contenido estaba resolviendo una cuestión incidental"».

⁸⁹⁷ Según DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, pp. 377-378, atendido el carácter incidental de la oposición, es perfectamente posible la realización de una comparecencia para que las partes puedan acreditar sus alegaciones por los medios de prueba distintos de la prueba documental, de acuerdo con el artículo 393 de la LEC. Por su parte, ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*, sostiene que sería conveniente una modificación legal que permita la celebración de vista cuando los documentos aportados por las partes no son suficientes para acreditar o desacreditar la concurrencia del motivo de oposición alegado.

⁸⁹⁸ MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», *op. cit.*

⁸⁹⁹ En similares términos, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 234.

seguirá adelante hasta la completa satisfacción del ejecutante, sin perjuicio de lo que resulte del recurso interpuesto contra la resolución ejecutada provisionalmente⁹⁰⁰. En cualquier caso, la desestimación del incidente de oposición promovido por el ejecutado conlleva que se le impongan las costas del mismo, tal como veremos más adelante (*infra*, cap. VIII, apdo. II).

En cambio, si la oposición es estimada, el contenido y los efectos del auto que decide la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas son distintos según cuál haya sido el motivo en que el ejecutado fundó la defensa del ejecutado (art. 530 LEC), en los términos que a continuación exponaremos.

Si la oposición basada en *defectos procesales* es estimada, ora porque los mismos eran insubsanables –falta de presupuestos o requisitos procesales–, ora porque no siéndoles, el ejecutante no los subsanó dentro del plazo concedido a tal efecto, el tribunal declarará el término de la ejecución provisional –la ley señala que se declarará no haber lugar a que prosiga la misma–, alzándose los embargos, trabas y medidas de garantía que se hubieran adoptado (art. 530.1 LEC). De esta forma, aunque la LEC no lo diga expresamente, la estimación de la oposición por motivos procesales conlleva las consecuencias propias de la declaración de nulidad de las actuaciones, debiendo volver las mismas al estado anterior al despacho de la ejecución provisional⁹⁰¹.

No se refiere el artículo 530 de la LEC a la decisión de la oposición basada en *motivos de fondo comunes a toda ejecución provisional*, lo que resulta coherente con lo dispuesto en el artículo 528.4 de la LEC, según el cual esta oposición se tramitará conforme a lo prescrito en la ejecución ordinaria. Por consiguiente, si la oposición fundada en el pago o cumplimiento de lo ordenado o en la existencia de pactos o transacciones para evitar la ejecución provisional es desestimada, la ejecución seguirá su curso; en cambio, si la oposición es estimada, el tribunal declarará que no procede la

⁹⁰⁰ Con todo, no debe olvidarse que la oposición específica en caso de condenas dinerarias se puede promover con aun cuando haya sido previamente desestimada la oposición por motivos comunes, pues en este caso el plazo para formular el incidente se cuenta desde la notificación de la resolución que acuerda la medida ejecutiva concreta objeto de oposición.

⁹⁰¹ GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 132.

ejecución, dejándola sin efecto y mandando a alzar los embargos y las medidas de garantía que se hubieran adoptado (art. 561 LEC).

En caso de oposición a la ejecución provisional de *condenas no dinerarias* por el motivo específico del artículo 528.2.2º de la LEC, si el tribunal estima que concurre el motivo alegado por el ejecutado, esto es, que de revocarse la sentencia que se ejecuta provisionalmente resultará imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior a la ejecución o compensar económicamente al ejecutado, el contenido del auto será distinto según si el ejecutante ofreció caución de garantizar la restauración o el resarcimiento de daños y perjuicios, o si no lo hizo.

En efecto, si el ejecutante ofreció caución en los términos del artículo 529.3 de la LEC, el tribunal deberá valorar si la misma es suficiente para garantizar la restauración o la compensación económica en caso de revocación de la sentencia. Al efecto, afirma ORTELLS RAMOS que la idoneidad de la caución depende de la naturaleza del derecho o interés legítimo que pueda resultar irreversiblemente afectado por la ejecución provisional en caso de revocarse la sentencia, y de la suficiencia de la caución para garantizar, al menos, la satisfacción por el equivalente para el caso que la irreversibilidad del estado de cosas generado por la ejecución provisional efectivamente se produce al revocarse la sentencia ejecutada provisionalmente⁹⁰².

Analizada la caución, si el tribunal considera que la misma es suficiente de acuerdo con los parámetros indicados, aceptará la caución ofrecida por el ejecutante, y fijará la cuantía y calidad de la misma. Como consecuencia de esta decisión, la ejecución provisional seguirá adelante⁹⁰³.

En caso contrario, si el tribunal entiende que la caución no garantiza el eventual resarcimiento del ejecutado, la estimación de la oposición supondrá la suspensión de la ejecución provisional, pero se mantendrán los embargos y medidas de garantía que se hubieran acordado y se adoptarán las que procedan, según lo dispuesto en el artículo

⁹⁰² ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., pp. 96-98

⁹⁰³ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 378.

700 de la ley rituarial (art. 530.2 LEC), esto es, las medidas cautelares que pueden adoptarse para garantizar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias de la ejecución específica de obligaciones de hacer, no hacer y entregar cosa distinta de dinero⁹⁰⁴.

Si el ejecutante, en cambio, no hizo uso de la facultad que el apartado 3 del artículo 529 de la LEC le confiere de ofrecer caución, la estimación de la oposición conlleva las mismas consecuencias indicadas para el caso de que el tribunal no considere suficiente la caución ofrecida por el ejecutante: suspensión de la ejecución provisional y mantención de las medidas de garantía (art. 530.2 LEC).

En estos últimos supuestos, la estimación de la oposición no implica el término del proceso de ejecución provisional, sino que sólo su suspensión⁹⁰⁵, de manera que si con posterioridad se confirma la sentencia ejecutada, no será necesario adoptar nuevamente las medidas de garantía necesarias para la posterior realización de bienes, pues tales medidas se mantendrán, continuando la ejecución como definitiva⁹⁰⁶.

Finalmente, en los casos de *condenas pecuniarias*, el tribunal deberá valorar si se producirá o no una situación imposible de reparar o de compensar económicamente en caso de revocarse la sentencia provisionalmente ejecutada, y sólo una vez estimada la concurrencia del motivo de oposición a una actuación ejecutiva concreta, deberá entrar a apreciar si las medidas ejecutivas alternativas indicadas por el ejecutado son posibles y de eficacia similar a las ya acordadas, o si la caución ofrecida por el ejecutado es suficiente para responder de la demora en la ejecución, en los términos señalados oportunamente [*supra*, apdo. I.2.d)] (art. 530.3.I LEC)⁹⁰⁷.

⁹⁰⁴ MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, pp. 389-390.

⁹⁰⁵ Así lo precisa el AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de mayo de 2005 (JUR\2005\170490), al declarar que la oposición regulada en el artículo 528.2.º de la LEC puede «suponer un freno a la ejecución provisional de conllevar el lanzamiento, pues, de revocarse la sentencia, concurrirían aquellos motivos, y pueden llevar a la suspensión de la ejecución (art. 530.2 LEC) de estimarse alguno de ellos (aunque se mantienen embargos y medidas de garantía adoptadas [sic]); pero en este caso, de formularse oposición (posterior al despacho de ejecución), el acreedor puede ofrecer caución para que continúe (art. 529.3)».

⁹⁰⁶ Con similares términos, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 108.

⁹⁰⁷ Tal como sostiene DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p.

De este modo, si las medidas alternativas indicadas por el ejecutado cumplen con las exigencias señaladas, el tribunal dispondrá que se adopten tales medidas, prosiguiendo el procedimiento de apremio (art. 530.3.II LEC). Obviamente, si el auto que decide la oposición a actuaciones ejecutivas concretas no dejó sin efecto las medidas ejecutivas previamente decretadas, ni accedió a ninguna de las medidas alternativas propuestas por el ejecutado, ha de entenderse que el tribunal desestimó la oposición⁹⁰⁸.

Excepcionalmente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 591 de la LEC en sede de ejecución ordinaria, norma que resulta aplicable de acuerdo con la remisión genérica contenida en el artículo 524.2 de la LEC, si los bienes ofrecidos por el ejecutado son de más fácil realización que los inicialmente trabados, el tribunal ni siquiera deberá pronunciarse sobre la imposibilidad de restaurar o compensar al ejecutado en caso de revocación, y acordará directamente la medida propuesta por el ejecutado⁹⁰⁹.

Por otro lado, si el ejecutado no indicó medidas alternativas, o las mismas no son posibles, el tribunal deberá valorar la caución ofrecida por el ejecutado, y si dicha caución es suficiente para garantizar la efectividad del pronunciamiento condenatorio, el tribunal acordará que se preste la caución. De acuerdo con lo anterior, la estimación de la oposición supondrá que no se lleve a cabo la medida ejecutiva inicialmente acordada ni ninguna otra medida, pues nada ha indicado el ejecutado en ese sentido, precisamente, porque ha optado por ofrecer caución o porque las medidas que propuso fueron rechazadas.

Revisadas las distintas posibilidades que se pueden producir con la estimación del incidente de oposición, es importante adelantar que cualquiera que sea la causa en que se fundó la misma, la estimación de este incidente implica que se impondrán las

378, la estimación de la oposición a actuaciones ejecutivas concretas tratándose de condenas dinerarias pasa en todo caso por que el tribunal aprecie que concurre la irreversibilidad establecida en el artículo 528.3 de la LEC.

⁹⁰⁸ AAP Madrid (Secc. 14ª), de 27 de junio de 2007 (JUR\2007\258050).

⁹⁰⁹ En igual sentido, cfr. CABALLO ANGELATS, L., «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», *op. cit.*, p. 231; y ACHÓN BRUÑÉN, M., «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», *op. cit.*

costas del mismo al ejecutante, tal como veremos más adelante (*infra*, cap. VIII, apdo. II).

Contra el auto que decide la oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas no procede recurso alguno (art. 530.4 LEC), con independencia del contenido estimatorio o desestimatorio del mismo. Sobre la irrecurribilidad de este auto existe jurisprudencia absolutamente consolidada⁹¹⁰, aún cuando es posible encontrar alguna decisión aislada –que no compartimos– que admite el recurso de apelación contra esta resolución⁹¹¹.

II. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el procedimiento de ejecución provisional se lleva a cabo de acuerdo con las normas previstas para la ejecución ordinaria, salvo respecto de aquellas cuestiones en que el legislador ha dispuesto una regla especial para nuestra institución (art. 524.2 LEC).

⁹¹⁰ A modo de ejemplo, el AAP Madrid (Secc. 8ª), de 29 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16610/2012) tiene declarado que «según dispone el artículo 530.4 de la Ley Procesal Civil "Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional o a medidas ejecutivas concretas no cabrá recurso alguno". Es evidente, por tanto, que el Juzgado de instancia debió haber denegado, en su momento, la preparación del recurso, al no ser la resolución impugnada susceptible de recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 de la Ley Procesal Civil, por lo que procede declarar que fue indebidamente admitido a trámite. En este sentido se pronuncian, entre otros, los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid Provincial Madrid, Sección 25ª, de 16 de octubre de 2007, de la Sección 11ª de fecha 29 de junio de 2006; de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, de 3 de noviembre de 2006 y de la Audiencia provincial de Asturias, Sección 4ª de 24 de diciembre de 2002».

En la misma línea, entre muchos otros, cfr. AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª), de 14 de abril de 2010 (JUR\2011\11406); AAP Murcia (Secc. 5ª), de 6 de octubre de 2009 (JUR\2009\459680); AAP Madrid (Secc. 13ª), de 4 de julio de 2008 (JUR\2008\321305); AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 24 de abril de 2008 (JUR\2008\318001); AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 20 de marzo de 2007 (JUR\2007\148773); AAP Madrid (Secc. 13ª), de 25 de enero de 2006 (JUR\2006\150279); AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 11 de mayo de 2005 (JUR\2005\170208); AAP Teruel (Secc. 1ª), de 7 de junio de 2005 (JUR\2005\154876); AAP Madrid (Secc. 11ª), de 5 de mayo de 2005 (JUR\2005\159843); AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 3 de febrero de 2005 (JUR\2005\97897); AAP Valencia (Secc. 11ª), de 29 de julio de 2004 (JUR\2005\1279); AAP Madrid (Secc. 14ª), de 14 de julio de 2003 (JUR\2003\249623); AAP Málaga (Secc. 6ª), de 15 de mayo de 2003 (AC\2003\992); AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 28 de octubre de 2002 (JUR\2002\275042); y AAP Madrid (Secc. 18ª), de 3 de abril de 2002 (JUR\2003\46407).

⁹¹¹ En este sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 12ª), de 27 de abril de 2004 (JUR\2005\11589); AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 18 de septiembre de 2003 (JUR\2003\230027).

Pues bien, la ley procesal se ocupa de forma más o menos sistemática de diversos supuestos de crisis o desarrollo anormal del proceso de ejecución⁹¹², destacando el aspecto externo de este fenómeno, cual es su eficacia suspensiva de la ejecución⁹¹³, partiendo de la regla básica de que el proceso ejecutivo se suspenderá sólo en los casos en que la ley lo ordene expresamente, o las partes así lo acuerden (art. 565.1 LEC).

Junto a estas causas generales de suspensión del proceso ejecutivo⁹¹⁴, el artículo 531 de la LEC contempla un supuesto especial para la ejecución provisional de condenas dinerarias. A todas ellas nos referiremos a continuación.

1. Suspensión por causas generales

Como adelantamos, la suspensión de la ejecución –provisional o definitiva– sólo puede acordarse por causas legales o por acuerdo de las partes. Fuera de las causas previstas por la ley, no cabe la suspensión de un proceso de ejecución⁹¹⁵. Sin embargo, de las diversas hipótesis generales de suspensión del proceso de ejecución previstas para la ejecución ordinaria, principalmente entre los artículos 566 a 569 de la LEC, sólo resultan aplicables a la ejecución provisional algunas de ellas.

En efecto, no resulta compatible con la ejecución provisional el supuesto regulado en el artículo 566 de la LEC, relativo a la suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en casos de *rescisión* y *de revisión de sentencia firme*, toda

⁹¹² La suspensión de la ejecución ha sido un tema particularmente polémico en la ejecución hipotecaria, especialmente con ocasión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha impulsado una serie de reformas legislativas sobre la materia. Ciertamente, la cuestión excede el ámbito de estudio, por lo que no nos ocuparemos de ella.

⁹¹³ Cfr. ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, p. 770.

⁹¹⁴ Sobre estas causas, de forma general, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «Suspensión del proceso de ejecución civil: problemática a la luz de las últimas reformas procesales», *op. cit.*

⁹¹⁵ De todos modos, hay autores que justifican la suspensión del proceso de ejecución provisional por razones de justicia material. En este sentido, POUL DE AVILÉS SANS, J., «Suspensión de una ejecución provisional mediante la adopción de una medida cautelar», en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 4, 2005, pp. 225-226, comentando el auto de 27 de noviembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que suspendió una ejecución provisional ya despachada a fin de garantizar la efectividad de la hipotética sentencia estimatoria del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que se ejecuta, entiende que la solución es justa, aunque jurídicamente cuestionable, que termina por aceptar. Ciertamente, no podemos compartir esta opinión, pues carece de base legal y desnaturaliza todo el sistema de ejecución provisional implementado por la LEC.

vez que el objeto de nuestra institución es precisamente una sentencia que no es firme, por haberse interpuesto un recurso ordinario o extraordinario en su contra, el cual se encuentra pendiente.

Por otro lado, como vimos en el apartado anterior, el incidente de *oposición* que promueva el ejecutado no suspende la ejecución provisional (art. 556.2 en relación con el art. 524.2 LEC)⁹¹⁶. Algo distinto son los efectos que se sigan para el caso de estimarse la oposición, respecto de los cuales nos remitimos a lo analizado oportunamente (*supra*, apdo. I.4).

Entrando a las posibles causas de suspensión de la ejecución provisional, la primera de ellas es el *acuerdo de las partes* personadas en la ejecución (art. 565.1 *in fine* LEC). Se trata de una manifestación del poder de disposición de las partes sobre el proceso de ejecución (art. 19 LEC), que podrán ejercitar en cualquier momento durante la pendencia del recurso interpuesto contra la sentencia que se ejecuta provisionalmente.

Pasando a otro motivo, la ejecución provisional se suspenderá en caso de *situaciones concursales o preconcursales*. Al efecto, prescribe el apartado 1 del artículo 568 de la LEC que no se despachará la ejecución –ordinaria o provisional– cuando al tribunal le conste que el demandado se encuentra en situación de concurso o que se la comunicado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de conformidad con la legislación concursal.

Con el objeto de facilitar la aplicación de esta disposición, la Ley 19/2015, de 13 de julio, introdujo un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 551 de la LEC, según el cual el secretario judicial, antes de que el tribunal dicte el auto despachando la ejecución y la orden general de ejecución, debe verificar en el Registro Concursal si el demandado ha presentado la comunicación regulada en artículo 5 *bis* de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

⁹¹⁶ En la ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales, la oposición del ejecutado sí suspende el proceso de ejecución (art. 557.2 LEC), de ahí que quepa considerarla como un motivo general de suspensión.

En estos casos, como se observa, más que la suspensión de la ejecución provisional, estamos ante un óbice para acceder a la ejecución, pues la misma no se llega a despachar, lo que permite garantizar que todos los acreedores –salvo las excepciones legales– hagan valer sus derechos dentro del respectivo proceso concursal para la satisfacción de sus créditos.

Ahora bien, si la ejecución provisional ya fue despachada y el ejecutado es declarado en concurso con posterioridad al inicio de dicha ejecución –o dicha circunstancia no era conocida por el tribunal de la ejecución–, el secretario judicial decretará la suspensión de la misma en el estado en que se encuentre (art. 568.2 LEC).

Los efectos generales de la suspensión de la ejecución son unos mismos para cualquier supuesto que la origine, y consisten en la paralización del procedimiento y de las actividades ejecutivas que se estén desarrollando. Con todo, podrán adoptarse o mantenerse las medidas de garantía de los embargos acordados, y practicarse las que ya se hubieran decretado (art. 565.2 LEC).

Sin embargo, en los casos en que exista pluralidad de demandados o ejecutados, según el caso, la suspensión de la ejecución provisional sólo afectará a aquellos que se encuentren situación concursal o preconcursal, por lo que será despachada o continuará respecto de los otros demandados o ejecutados, respectivamente (art. 568.3 LEC)⁹¹⁷.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 569 de la LEC la ejecución provisional se suspenderá por *prejudicialidad penal*, esto es, por la existencia de un proceso penal que tenga por objeto hechos que son determinantes de la procedencia de la ejecución⁹¹⁸.

⁹¹⁷ En relación con esta última situación, a propósito de un proceso de ejecución provisional, el AAP Cantabria (Secc. 1ª), de 24 de abril de 2001 (JUR\2002\184819) declaró que «si la sentencia que provisionalmente se pretende ejecutar –y que el auto recurrido deniega– manda seguir adelante la ejecución respecto a las personas físicas demandadas, no cabe que el mismo Juzgado deniegue la ejecución provisional pedida; pues hemos de partir de que la ejecución, lógicamente, se produce sobre derechos de esas personas físicas y no de la persona jurídica, que, por hallarse en suspensión de pagos, se ha ordenado la paralización de la ejecución de la sentencia. Pero, insistimos, no cabe confundir personalidades jurídicas nítidamente diferentes: el hecho de que no se deba ejecutar frente a una no conlleva la inejecución frente a los que, en virtud de la sentencia, no se ha establecido impedimento judicial alguno en la sentencia».

⁹¹⁸ Como precisa ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, *op. cit.*, pp. 771-772, la LEC no incluye dentro de este supuesto la existencia de procesos penales que se refieran a otros hechos o actos de la ejecución o que tengan incidencia en la misma.

Para que opere esta causa de suspensión no es suficiente la sola presentación de una denuncia o la interposición de una querella en la que expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con la formación del título ejecutivo o con el despacho de la ejecución –en nuestro caso, provisional–, sino que se precisa de la iniciación de un proceso penal por tales hechos, y que la suspensión sea decretada por el tribunal de la ejecución, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal (art. 569.1 LEC)⁹¹⁹.

Con todo, el ejecutante podrá solicitar que se continúe con la ejecución –ordinaria o provisional–, si presta caución suficiente, a juicio del tribunal, para responder de lo que perciba y de los daños y perjuicios que se pudieran provocar al ejecutado (art. 569.3 LEC). En estos casos, la caución puede adoptar cualquiera de las formas previstas el artículo 529.3.II de la LEC.

Decretada la suspensión del proceso de ejecución por prejudicialidad penal, si el proceso penal termina por sentencia que declara la inexistencia de los hechos investigados o porque los mismos no son constitutivos de delito, la ejecución podrá seguir adelante y el ejecutante, además, podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la suspensión (art. 569.3 LEC).

2. Suspensión por cumplimiento de la condena dineraria

Dentro de las normas que regulan la ejecución provisional, se contempla un supuesto específico de suspensión del procedimiento que opera instancia del ejecutado. En efecto, según el artículo 531 de la LEC⁹²⁰, el ejecutado puede solicitar la suspensión de la ejecución provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades

⁹¹⁹ De forma ilustrativa, el AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 25 de junio de 2007 (JUR\2007\299970), confirmó la resolución del tribunal *a quo* que decretó la suspensión de un proceso de ejecución provisional por prejudicialidad penal, teniendo en consideración que «en el presente caso, se ha admitido a trámite una querella en la que se sostiene que todo el proceso civil seguido implica una estafa procesal en que los querellados se valieron de una deliberadamente deficiente prueba parcial dada por un perito contra el que también se dirige la querella, elementos que de ser ciertos, justificarían incluso la revisión de la sentencia, por lo que esta Sala no encuentra motivos para variar el criterio sostenido por la juzgadora de primer grado».

⁹²⁰ Este precepto fue modificado por la Ley 13/2009, de 3 noviembre, con el objeto de ajustar su texto a las nuevas funciones del secretario judicial, sin alterar en lo sustancial su contenido. Para una completa revisión de los antecedentes legislativos del artículo 531 de la LEC, así como de su tramitación parlamentaria, *vid.* MURZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 139-141.

líquidas, con tal que ponga a disposición del tribunal, para su entrega al ejecutante, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas de la ejecución provisional⁹²¹. Se trata, ciertamente, de la suspensión de la ejecución provisional por cumplir el ejecutado con lo ordenado por la sentencia.

En cuanto al ámbito de aplicación de esta facultad, la ubicación sistemática de la misma –dentro del capítulo relativo a la ejecución provisional de sentencias de primera instancia– sugiere que sólo procede tratándose de la ejecución provisional de sentencias recurridas en apelación⁹²². Sin embargo, en la regulación de la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia el artículo 535 de la LEC realiza una remisión general a las reglas de la ejecución provisional de sentencias de primera instancia, por lo que no hay ninguna duda de que el ejecutado tiene esta facultad en todo proceso de ejecución provisional⁹²³.

Precisando esta idea, la suspensión de la ejecución provisional está prevista exclusivamente para las sentencias –de primera o de segunda instancia– que contengan pronunciamientos de condena dineraria líquidos. Se excluyen, por tanto, los pronunciamientos de condena ilíquidos y los pronunciamientos de condena no dineraria.

Respecto de los primeros, se ha indicado que en estos casos esta facultad sólo podrá ejercitarse una vez que se haya procedido a la liquidación de la condena, de conformidad con los artículos 712 y siguientes de la LEC⁹²⁴. No obstante, según

⁹²¹ La consignación realizada por el ejecutado para alcanzar la suspensión de la ejecución provisional no debe confundirse con el depósito como requisito para la interposición de recursos en casos especiales (art. 449 LEC). Tal depósito se mantiene en la cuenta del tribunal durante la tramitación del recurso, y no procede su entrega al ejecutante, como en el caso de las cantidades consignadas en el marco del artículo 531 de la LEC.

En sentido contrario, cfr. RIVES SEVA, J., «Ejecución provisional de resoluciones referidas a indemnización de daños ocasionados en accidentes de tráfico», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 30, 2006, pp. 60-62.

⁹²² La situación de esta regla fuera de las disposiciones generales de la institución ha sido, sin falta de razón, criticada. Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 130.

⁹²³ A igual conclusión llega GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 134, pero lo hace por razones de conveniencia, sin aludir al artículo 535.1 de la LEC.

⁹²⁴ En este sentido, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 380, aunque reconoce que constituye un supuesto excepcional. En los mismos términos, vid. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 141.

mantenemos en este trabajo, las sentencias de condena a cantidades ilíquidas no son susceptibles de ejecución provisional [*supra*, cap. II, apdo. II.2.b)], por lo que la referencia a ellas en este precepto constituye, a nuestro juicio, un error del legislador.

En otro orden de cosas, la ley no señala plazo para que el ejecutado haga uso de esta facultad, por lo que podrá solicitar la suspensión en cualquier momento durante el desarrollo de la ejecución⁹²⁵, con independencia de la facultad de formular oposición a actividades ejecutivas concretas⁹²⁶. Por lo tanto, el artículo 531 de la LEC permite tanto al ejecutado que no se opuso a la ejecución provisional —pero que de todos modos quiere evitar la realización efectiva de las actuaciones ejecutivas que se hubieran acordado—, como al ejecutado que se opuso a tales actuaciones *ex* artículo 528.2.3º de la LEC —habiendo sido desestimada su oposición—, provocar la suspensión de la ejecución provisional⁹²⁷, poniendo a disposición del tribunal la cantidad por la que se hubiere despacho la ejecución en su contra, más los intereses y las costas respectivas.

Nótese que el ejecutado puede consignar la cantidad a la que ha sido condenado por la sentencia de condena no firme antes de que se despache la ejecución provisional. En este caso, no obstante, no cabe hablar de suspensión de la ejecución provisional, pues derechamente la misma no debe ser acordada. Precisamente, se ha resuelto en este sentido que «antes de que por el Juzgado se acordara lo procedente sobre la solicitud instada, el demandado consignó la cantidad a cuyo pago fue condenado, sin que en ese momento se hubieran devengado intereses ni costas de la ejecución, por la sencilla razón de que ésta aún no había sido despachada; quiere ello decir que el demandado, antes de tener conocimiento de que se había instado la ejecución provisional, procedió a satisfacer el importe del principal a que se contraía la sentencia condenatoria, por lo que en esta situación carecía de sentido acordar que se despachara aquella por unos intereses

⁹²⁵ CÁMARA RUIZ, J., *Derecho Procesal Civil* —con ORTELLS RAMOS, M., *et al.*—, *op. cit.*, p. 932.

⁹²⁶ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 379.

⁹²⁷ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 220.

y unas costas, como son los de la ejecución, que ni tan siquiera se habían devengado por el motivo ut supra mencionado»⁹²⁸.

Por consiguiente, si el ejecutado consigna la cantidad a la que fue condenado antes de que el tribunal se haya pronunciado sobre el despacho de la solicitud de ejecución provisional, y las sumas entregas son suficientes para cubrir la deuda principal, no procede que el tribunal acuerde tal ejecución. La gran ventaja para el ejecutado de optar por esta alternativa es que no sufrirá las consecuencias de un proceso ejecutivo en su contra, en las que cabe mencionar el pago de los intereses procesales (en los términos del art. 576 LEC) y las costas del proceso, precisamente, porque no se alcanza a iniciar proceso de ejecución alguno.

Salvo en el supuesto anterior –consignación anterior al despacho de la ejecución provisional–, para que proceda la suspensión que estamos analizando es necesario que el ejecutado consigne judicialmente la cantidad a la que fue condenado y por la que se ha despacho la ejecución provisional⁹²⁹, más los intereses correspondientes y las costas de la ejecución. Con todo, como adelantamos al revisar el *dies a quo* para instar el despacho de la ejecución provisional [*supra*, cap. V, apdo. I.2.a)], se ha discutido si el ejecutado siempre debe hacerse cargo de las costas de la ejecución provisional, o si es posible exonerarse del pago de las mismas en caso de un cumplimiento temprano de la prestación a la que ha sido condenado, como sería el caso de la consignación al amparo del artículo 531 de la LEC. Para no romper la exposición ordenada de esta figura,

⁹²⁸ AAP Granada (Secc. 3ª), de 27 de febrero de 2008 (JUR\2008\332894). En similares términos, la SAP Madrid (Secc. 18ª), de 2 de noviembre de 2010 (ROJ SAP M 16984/2010) declaró que no procede imponer las costas de la ejecución provisional al ejecutado que consignó antes del despacho de la ejecución, porque en tal situación no llegó a acordarse dicha ejecución.

⁹²⁹ Sobre la consignación del principal en un caso de condena solidaria, la SAP Lleida (Secc. 2ª), de 20 de diciembre de 2010 (ROJ SAP L 700/2010) afirma que «los recurrentes parten de la errónea premisa de que efectuaron el pago voluntario de la suma por la que se despacho ejecución provisional dentro del plazo de veinte días, pero prescinden del verdadero argumento por el que se ha considerado que las costas son debidas toda vez que estamos ante un supuesto de condena solidaria y lo que realmente efectuaron cada uno de los ejecutados fueron pagos parciales, de lo que a cada correspondería teniendo en cuenta que son tres los condenados solidariamente, lo que determinó que se procediera al embargo de bienes. El art. 542-3 de la LEC establece que cuando en el título ejecutivo aparezcan varios deudores solidarios, podrá pedirse que se despache ejecución por el importe total de la deuda, mas interese y costas y costas, frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos. Esta previsión deriva precisamente de la teoría general de las obligaciones mancomunadas y solidarias (arts.1137 y siguientes del C.C.). En el título que sirve de base a la ejecución se declaró el carácter solidario de la condena, y en los mismos términos se acordó el despacho de la ejecución provisional, por lo que ha de concluirse que la decisión adoptada en primera instancia es correcta y el recurso ha de ser desestimado».

volveremos sobre esta cuestión al analizar en su conjunto el tema de las costas en la ejecución provisional (*infra*, cap. VIII, apdo. III).

Volviendo sobre las cantidades que debe entregar el ejecutado, las partidas relativas a los intereses y a las costas se consignarán según la estimación que realice el propio ejecutado. Por esta razón, el artículo 531 de la LEC dispone que el secretario judicial, antes de decidir sobre la suficiencia o insuficiencia de las cantidades entregadas por el ejecutado, procederá a la liquidación de los intereses y a la tasación de las costas. En este sentido, se tiene declarado que «procede, conforme a lo solicitado por la parte apelante-ejecutante, liquidar los intereses y tasar las costas, y posteriormente, ya podrá decidirse sobre la continuación de la ejecución en razón de ser o no suficiente la consignación»⁹³⁰.

En consecuencia, si practicadas la liquidación de los intereses y la tasación de las costas de la ejecución provisional, el secretario judicial determina que las cantidades consignadas son suficientes para cubrir los conceptos establecidos en el artículo 531 de la LEC, se entregará al ejecutante la cantidad debida –y al ejecutado el sobrante, en su caso⁹³¹–, y se archivará⁹³² la ejecución provisional. Como se observa, las cantidades indicadas no quedan en poder del tribunal para garantizar el cumplimiento en caso de confirmación de la sentencia recurrida⁹³³, sino que el dinero se pone a disposición del órgano jurisdiccional para su entrega al ejecutante⁹³⁴. Se trata, por tanto, de una consignación con fines liberatorios.

⁹³⁰ AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 3 de noviembre de 2003 (JUR\2004\4393). En igual sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 9ª), de 27 de mayo de 2005 (JUR\2005\155238).

⁹³¹ Según apunta, con precisión, Díez-Picazo Giménez, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 380.

⁹³² Como expresa Garberí Llobregat, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 221, la ley debiera hablar de suspensión, no de archivo.

⁹³³ En esta línea, el AAP Cádiz (Secc. 2ª), de 23 de marzo de 2007 (JUR\2007\253301) tiene resuelto que «la consignación de la cantidad adeudada, sin ofrecimiento de pago al acreedor, no impide que éste pueda solicitar la ejecución provisional del fallo favorable obtenido, en los casos de recurso».

⁹³⁴ En este sentido, González Navarro, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, pp. 135-135, sostiene que la puesta a disposición del tribunal es más que una mera consignación.

En caso contrario, es decir, si las cantidades consignadas no son suficientes para cubrir el principal, los intereses y las costas, el secretario judicial decretará la continuación de la ejecución por la cantidad faltante. Con todo, atendido que la suspensión de la ejecución provisional puede pedirse en cualquier momento, el ejecutado puede volver a pedir la suspensión en un momento posterior del procedimiento⁹³⁵, consignando al efecto las cantidades que le hubieran faltado.

En cualquier caso, el decreto del secretario judicial por el que decide la suspensión o continuación del procedimiento es susceptible de recurso directo de revisión ante el tribunal de la ejecución provisional (art. 531 *in fine* LEC).

Los efectos que se siguen de la decisión que adopta el secretario judicial ante la consignación realizada por el ejecutado revelan la finalidad de esta figura. Mediante la entrega de las cantidades señaladas en el artículo 531 de la LEC, el ejecutado persigue poner término –la ley habla de archivo– a la ejecución provisional ya despachada, con el objeto de evitar las gravosas consecuencias que se derivan de ella, entre las que ciertamente se incluyen los intereses de la mora procesal (art. 576 LEC), pues «la consignación efectuada interrumpe el devengo de intereses respecto de la suma objeto de la misma»⁹³⁶. De este modo, los intereses de la sentencia respecto de la cual se ha despachado la ejecución provisional se devengan hasta el momento en que se realiza la consignación por el ejecutado, siempre que la misma tenga fines liberatorios⁹³⁷.

Ahora bien, cabe precisar que las cantidades que entregue el ejecutado deben entenderse como un pago provisional, pendiente de la confirmación o revocación de la

⁹³⁵ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 141.

⁹³⁶ Así se afirma en el AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 2 de mayo de 2006 (JUR\2006\272296), al considerar que, «por una parte, que la finalidad de la ejecución provisional es la efectividad de las sentencias de condena que no han adquirido firmeza que se despachará y llevará a cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria disponiendo las partes de los mismos derechos y facultades que en ésta (art. 524.2 y 3 LEC), de manera que sólo el abono a la actora de las cantidades a cuyo pago se ha condenado en primera instancia a las codemandadas puede excluir la posibilidad de que ésta sea instada y que únicamente la consignación liberatoria realizada con ánimo solutorio interrumpe el devengo de intereses, de otra, no puede sino entenderse que la voluntad de la aseguradora no era la de efectuar un mero depósito sino la de realizar una verdadera consignación, ofreciendo el pago a la parte actora de las cantidades a las que había sido condenada».

⁹³⁷ En igual sentido, cfr. MARTÍNEZ DE SANTOS, A., «La fecha final del devengo de intereses en la ejecución provisional», en *Practica de Tribunales*, núm. 90, 2012.

sentencia recurrida⁹³⁸. Por esta razón, si la sentencia ejecutada provisionalmente es revocada, el ejecutante deberá devolver al ejecutado, entre otras, las cantidades que hubiere percibido y las costas de la ejecución que éste último hubiese satisfecho, *ex* artículo 533.1 de la LEC.

Por lo tanto, el cumplimiento de la condena dineraria por parte del ejecutado en el marco del artículo 531 de la LEC no persigue satisfacer el crédito del ejecutante, sino que tiene por finalidad paralizar o suspender la ejecución provisional, sin que ello implique renunciar al recurso intentado contra la sentencia objeto de la ejecución. Por lo demás, el ejecutado siempre puede pagar al ejecutante directamente, cumplimiento que una vez acreditado ante el tribunal supondrá el término tanto de la ejecución provisional como del recurso que estuviera pendiente⁹³⁹. Pero el cumplimiento voluntario puro y simple del ejecutado no debe confundirse con la facultad que la ley confiere al ejecutado para cumplir o pago con fines suspensivos las condenas dinerarias (art. 531 LEC), pues se trata de figuras claramente diferentes.

⁹³⁸ Por todos, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 395.

⁹³⁹ En contra, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 45, sostiene que «no es incompatible mantener una impugnación contra la resolución que se ejecuta provisionalmente y cumplirla voluntariamente».

CAPÍTULO VII

LOS EFECTOS DE LA CONFIRMACIÓN O REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Las actuaciones ejecutivas que se originan dentro del proceso de ejecución provisional se llevan a cabo –al igual que en la ejecución ordinaria–, hasta la completa satisfacción del ejecutante, salvo que opere alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento ya estudiados (*supra*, cap. VI, apdo. II). Sin embargo, la ejecución provisional sólo procede respecto de resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos de condena que hayan sido recurridos [*supra*, cap. II, apdo. II.2.c)], por lo que la suerte final de la ejecución provisional dependerá del contenido de la resolución de dicho recurso. Precisamente, la diferencia fundamental entre la ejecución provisional y la ejecución definitiva consiste en que el objeto de la primera es una resolución que no es firme⁹⁴⁰, por lo que toda la actividad ejecutiva está sujeta al resultado del recurso principal interpuesto contra la resolución ejecutada provisionalmente.

De esta forma, si se confirma la resolución provisionalmente ejecutada, en términos generales, se consolidan las actuaciones ejecutivas realizadas; en cambio, si se revoca la resolución, se paraliza el proceso de ejecución provisional –si aún no ha concluido– y se debe proceder a restituir al ejecutado a la situación anterior al inicio de la ejecución provisional y compensarle económicamente los perjuicios que haya sufrido

⁹⁴⁰ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 921.

como consecuencia de alcanzarse la efectividad de una resolución judicial carente de firmeza.

De acuerdo con lo anterior, tal como expresa algún autor, son características esenciales de esta institución su sujeción a la cláusula *rebus sic stantibus* y su provisionalidad⁹⁴¹, particularidades que exigen que el legislador procesal civil realice una regulación clara de las consecuencias que se siguen en caso de confirmación y, especialmente, en caso de revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada, normativa que, ciertamente, debe corresponderse con las previsiones legales relativas al régimen de oposición a la ejecución provisional⁹⁴².

Para satisfacer esta exigencia, la LEC se ocupa expresamente de los efectos de la confirmación (art. 532 LEC) y de la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, distinguiendo en este último caso entre revocación de condenas dinerarias (art. 533 LEC) y revocación de condenas no dinerarias (art. 534 LEC), respondiendo así a una de las cuestiones más reclamadas por la doctrina y la jurisprudencia en relación con la normativa anterior⁹⁴³, que no regulaba este aspecto de la institución. Se trata de preceptos que constituyen toda una novedad, pues por primera vez en el ordenamiento procesal civil español se disciplina esta materia⁹⁴⁴.

Si bien estas normas están contenidas en la Sección 2ª del Capítulo relativo a la ejecución provisional de resoluciones de primera instancia, se trata de reglas de aplicación general, toda vez que los artículos 536 y 537 de la LEC en sede de ejecución provisional de sentencias de segunda instancia se remiten a las normas ya citadas⁹⁴⁵ –lo que confirma que la LEC hace un tratamiento unitario de la ejecución provisional [*supra*, cap. I, apdo. IV.2.b)]–. De este modo, si se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de primera instancia ejecutada provisionalmente, o el

⁹⁴¹ GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 221.

⁹⁴² En similares términos, vid. MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 119.

⁹⁴³ Cfr. ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, op. cit., p. 130.

⁹⁴⁴ Como destaca CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 54.

⁹⁴⁵ En igual sentido, vid. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 135.

recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, en su caso, a través del cual se impugnó una sentencia de segunda instancia, los efectos serán unos mismos, con la única salvedad de que en el primero de los supuestos indicados todavía es posible interponer un recurso extraordinario, por lo que la confirmación o la revocación no serán definitivas, y estarán supeditadas al resultado de este último recurso, como veremos a continuación.

Según lo expuesto, la LEC trata por separado los efectos de la confirmación y de la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, por lo que seguiremos el mismo orden en nuestra revisión de esta materia.

II. CONFIRMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA

La confirmación de la resolución provisionalmente ejecutada –lo que supone la desestimación del recurso presentado frente a ella⁹⁴⁶–, no genera ninguna cuestión problemática⁹⁴⁷, como sí sucede con la revocación de la resolución, según veremos en el epígrafe siguiente. Al contrario, en este escenario la ejecución provisional refuerza su razón de ser, puesto que alcanza su finalidad –la efectividad de la tutela judicial desde la primera instancia– sin que se llegue a producir el riesgo de revocación, disipándose toda aprensión que esta institución pudiera suscitar⁹⁴⁸.

La LEC regula esta alternativa en su artículo 532, para lo cual distingue según se trate de una sentencia confirmatoria firme o de una sentencia confirmatoria que no reviste tal carácter. En ambos supuestos, la ley parte de la base de que la ejecución provisional no ha concluido, de forma tal que si la sentencia confirmatoria no es firme, la ejecución provisional continuará; en cambio, si la sentencia confirmatoria es firme, la

⁹⁴⁶ A nuestro juicio, los efectos de la confirmación de la resolución provisionalmente ejecutada se producen también en los supuestos en que el recurso de apelación no termina por sentencia, sino que lo hace por alguna de los medios anormales que contempla el ordenamiento procesal –como el desistimiento del recurso–, pues en tales hipótesis la resolución de primera instancia deviene firme sin sufrir modificación alguna, lo que equivale, a estos efectos, a su confirmación por el tribunal *ad quem*.

⁹⁴⁷ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, *op. cit.*, p. 395.

⁹⁴⁸ En igual sentido, *vid.* CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 54; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 136.

ejecución también seguirá adelante, pero no como provisional sino como ejecución definitiva. Agrega el legislador que, en ambos casos, lo único que frenará la ejecución será el desistimiento expreso del ejecutante⁹⁴⁹.

Como se observa, si la ejecución provisional no ha terminado al tiempo de dictarse la resolución que confirma la sentencia (o el auto) ejecutado provisionalmente, la LEC ordena que continúe la ejecución, ora como provisional, ora como definitiva. Ello implica —a falta de mayor precisión por parte del legislador—, que si la ejecución sigue adelante como provisional, la misma continuará sin necesidad de que el ejecutante lo pida⁹⁵⁰, y sus efectos estarán supeditados al resultado confirmatorio o revocatorio del recurso extraordinario interpuesto contra la resolución que se ejecuta provisionalmente.

En cambio, si la ejecución continúa como definitiva —obsérvese que no se transforma en ejecución definitiva⁹⁵¹, sino que continúa como tal—, cesa el estado de incertidumbre que pesa sobre la ejecución provisional, pues ya no será posible la revocación de la resolución. La ejecución continuará sin necesidad de que el ejecutante lo solicite —y sin que haya que esperar el transcurso del plazo de 20 días del artículo 548 de la LEC—, y se alzarán las medidas que se hubieran acordado para asegurar la efectividad de la revocación⁹⁵². Por consiguiente, tratándose de la ejecución provisional de condenas no dinerarias, se procederá a la devolución de la caución constituida por el ejecutante *ex* artículo 529.3 de la LEC, pues ha perdido su razón de ser. Asimismo, tratándose de la ejecución provisional de condenas dinerarias, si se hubiera acordado la prestación de caución por el ejecutado, el ejecutante podrá hacer efectiva dicha

⁹⁴⁹ Según MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 120, el legislador realiza un tratamiento diferenciado del desistimiento en atención a si la sentencia confirmatoria es firme o no, pues sólo en este último supuesto se exige que el desistimiento sea expreso. No obstante, nos parece que el desistimiento debe ser siempre expreso, puesto que así lo exige el principio dispositivo, aplicable no sólo en el proceso declarativo, sino que también en el proceso de ejecución forzosa.

⁹⁵⁰ CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 54.

⁹⁵¹ Así lo afirmaba DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 921. No obstante, con posterioridad el autor sostiene que en los supuestos en que la sentencia confirmatoria devenga firme la ejecución «seguirá adelante como definitiva». Cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 381.

⁹⁵² CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 55.

caución⁹⁵³. Finalmente, si el procedimiento se suspendió por haberse estimado el motivo de oposición previsto en el artículo 528.2.2º de la LEC, se levantará la suspensión, pues ya no existe el riesgo de resultar imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior o compensar económicamente al ejecutado en caso de revocación. Desde un punto de vista procedimental, tanto la reanudación de la ejecución en caso de suspensión, como la devolución o entrega de la caución, según corresponda, no opera automáticamente por la sola emisión de la sentencia confirmatoria, sino que procederá a petición de la parte interesada, esto es, del ejecutante.

En cualquier caso, las actuaciones ejecutivas que falte por realizar se desarrollarán hasta la completa satisfacción del ejecutante, por aplicación directa del artículo 570 de la LEC, en caso de que la ejecución continúe como definitiva, o en virtud de la remisión contenida en el artículo 524.2 de la ley rituarial, si la ejecución continúa como provisional.

Desde esta perspectiva, nos parece que se confirma nuestra postura en torno a la admisibilidad de fundar la oposición a la ejecución provisional por los mismos motivos de oposición que la ley dispone para la ejecución ordinaria [*supra*, cap. VI, apdo. I.1.b)], toda vez que, como acabamos de apuntar, si el recurso intentado frente a la resolución que se ejecuta provisionalmente es desestimado, la ejecución seguirá adelante como provisional o como definitiva, en función de la firmeza o falta de firmeza de la resolución confirmatoria, sin que en ningún caso se contemple una nueva oportunidad para que el ejecutado formule oposición. De ahí la necesidad de permitir que el ejecutado formule todas sus alegaciones defensivas una vez notificada la resolución que despacha la ejecución provisional o que acuerda una medida ejecutiva concreta, según corresponda.

Por otra parte, nada dice el legislador para el caso que las actuaciones ejecutivas ya hayan concluido al tiempo de pronunciarse la resolución confirmatoria, sea porque el ejecutante ha percibido aquello a lo que tiene derecho, o porque se ha realizado por el ejecutado aquello a lo que estaba obligado, o no ha realizado por aquel la conducta que tiene prohibida. Pues bien, en estos supuestos debe entenderse que la confirmación de la

⁹⁵³ En el mismo sentido, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 921; y ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 132.

resolución provisionalmente importa la consolidación de las actuaciones ejecutivas ya realizadas, de forma tal que lo provisionalmente ejecutado quedará como definitivamente ejecutado⁹⁵⁴. Con otros términos, si ya hubiese terminado la ejecución al momento de emitirse la sentencia confirmatoria, la obligación del ejecutado quedará definitivamente extinguida, con independencia de que se haya conseguido su realización en especie o por equivalente⁹⁵⁵.

En esta misma línea, algún autor afirma que «si la sentencia que deviene firme confirma en su totalidad el pronunciamiento que se ejecutó, desaparece (porque no se cumple) la condición resolutoria a que estaba sometida la ejecución provisional. Si la ejecución despachada como provisional no hubiera terminado continuará hasta que el ejecutante esté completamente resarcido (art. 570). Si la ejecución hubiera terminado ya —que será la hipótesis más frecuente— queda, de derecho “consolidada” la ejecución que se despachó (sin necesidad de declaración alguna ni acto formal de confirmación de lo provisionalmente ejecutado)»⁹⁵⁶.

Nótese que esta resolución, al igual que muchas otras, se refiere a nuestra institución como ejecución condicionada o ejecución sujeta a condición resolutoria⁹⁵⁷,

⁹⁵⁴ En igual sentido, *vid.* y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1149.

⁹⁵⁵ Así lo expresa CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 55.

⁹⁵⁶ Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 160, quien agrega, en nota 41, «porque en realidad nada dice, esto es lo que debe deducirse del art. 532.1 LEC. Vigente la LEC de 1881 existía una corriente de opinión que entendía que los actos realizados en ejecución provisional (especialmente la enajenación de inmuebles) necesitaba de confirmación expresa anotada en el Registro. Así lo sería si la venta de la finca estuviera vendida con condición resolutoria (que tiene acceso al Registro por la vía del art. 23 LH). Pero no es éste el caso. La ejecución provisional se hace como la ordinaria y los bienes se enajenan como en la ordinaria. Ni la adquisición de un inmueble se encuentra sometida a mención específica en el folio registral correspondiente, ni la confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada debe anotarse en el Registro. La adquisición del inmueble, como consecuencia de la ejecución condicionada, no tiene ni presenta ninguna especialidad frente a las demás ejecuciones de sentencias firmes. Y lo afirmado en este supuesto vale para las demás modalidades de ejecución». En igual sentido, con transcripción literal de esta cita y de la nota a pie de página, se pronuncia el AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292).

⁹⁵⁷ A mayor abundamiento, el citado AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292) expresa sobre esta cuestión que «conviene, ante todo, efectuar algunas precisiones terminológicas, atendido lo argumentado en la primera de las alegaciones y lo que en sentido semejante se razona en la resolución recurrida. Importa, no obstante, subrayar que en Derecho, a criterio de esta Sala conviene, siguiendo la clásica admonición “*non curare de nominibus*”, esto es, no reparar excesivamente en las denominaciones, las cuales, en numerosas ocasiones, se acuñan y generalizan para designar convencionalmente figuras o instituciones que, en rigor, tienen un carácter o una naturaleza diferentes de la que el calificativo empleado parece sugerir.

denominación que también es compartida por un sector de la doctrina (*supra*, cap. I, apdo. II.1). Sin embargo, no nos parece acertada esta calificación, precisamente porque los efectos de la ejecución provisional son plenamente eficaces desde que se realizan, sin necesidad de ningún acto posterior de confirmación, convalidación o ratificación, y una vez confirmada la resolución que ha sido objeto de la misma, estos efectos se consolidan, tornándose inalterables⁹⁵⁸.

Aunque el legislador no se refiera a la posibilidad de confirmación parcial de la resolución provisionalmente ejecutada, no hay dudas de que en esta alternativa se aplicará todo lo que hemos expuesto respecto de los pronunciamientos que se confirman, y respecto de los pronunciamientos revocados resultarán aplicables las previsiones que veremos a continuación⁹⁵⁹, según la naturaleza pecuniaria o no dineraria del pronunciamiento revocado.

Finalmente, y aunque resulte algo obvio, en cualquiera de los escenarios de confirmación de la resolución ejecutada provisionalmente –total o parcial; por

Esto es lo que acontece con la llamada “ejecución provisional”, que si no puede dudarse que sea ejecución tampoco cabe albergar duda alguna que de “provisional” nada tiene. En nuestro concepto, conviniendo así con un acreditado sector de la dogmática procesalista, se trata de una “ejecución condicionada”, en tanto se sustancia y decide el recurso ordinario o extraordinario que constituye su razón de ser y último fundamento: si la sentencia es finalmente confirmada, la ejecución que aún no hubiera finalizado continúa –obsérvese, no es que se “transforme” o se “convierta”– como ordinaria (o “definitiva”, si se prefiere); y si ya se hubiera consumado, vale como ordinaria (o “definitiva”, si se quiere). En otro caso, esto es, cuando la sentencia sea revocada, en todo o en parte, genera en el sujeto frente a quien se dirigió la ejecución el derecho al restablecimiento de la situación “*ex ante*”, a la “*restitutio*”, que en puridad debería ser “*in integrum*”, situándole en el nivel de la indiferencia económica y patrimonial, pero que en cada ordenamiento puede experimentar ciertas modulaciones.

Sin embargo no vemos obstáculo alguno al empleo de la extendida denominación “ejecución provisional” siempre que se tenga presente que ni es “temporal” ni es tampoco “interina”, en la medida en que muchas de las consecuencias que aparejan ciertas actuaciones precisas para la efectividad del pronunciamiento concernido son, de suyo, intrínsecamente irreformables, irreparables e irrestaurables, y únicamente permiten un resarcimiento “del equivalente pecuniario” que, como es bien sabido, nunca iguala ni se equipara a la reparación ideal que debería proporcionar.

Desde la perspectiva expuesta, y como quiera que no es propiamente “provisional” la ejecución que la LEC 1/2000 permite solicitar al litigante que ha obtenido un pronunciamiento de condena a su favor, tampoco lo es, la “reversión” que prevé la misma Ley procesal cuando la resolución ejecutada –o en ejecución– es posteriormente revocada, en tanto no alcance firmeza.

Otra cosa es cómo lo denomine la Ley y el modo preciso en que se regule una y otra actividad».

⁹⁵⁸ Cfr. CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1150.

⁹⁵⁹ En este sentido, sin ánimo exhaustivo, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 921; CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 55; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 120; y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1150.

resolución firme o susceptible de ser recurrida—, interesa al ejecutante la constancia de la sentencia confirmatoria en el expediente de ejecución provisional, por lo que éste podrá acompañar el testimonio correspondiente en el momento oportuno, sin perjuicio de que al final del o de los recursos las actuaciones serán devueltas al tribunal de primera instancia⁹⁶⁰.

III. REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROVISIONALMENTE EJECUTADA

A diferencia de los casos en que se confirma la resolución provisionalmente ejecutada, los supuestos de revocación pueden resultar problemáticos⁹⁶¹, pues al quedar sin efecto el título ejecutivo —sentencia o auto condenatorio— que habilitó el despacho de la ejecución provisional toda la actividad ejecutiva llevada a cabo pierde su justificación. Desde esta perspectiva, la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada constituye la espada de Damocles que pende sobre toda nuestra institución⁹⁶², al extremo que el éxito de la misma no se mide por la frecuencia con que los justiciables acudan a este instituto, sino que por la claridad y rigurosidad de las normas que regulan los efectos de la revocación de la sentencia no firme⁹⁶³.

La revocación de la resolución que se ha ejecutado provisionalmente generará una serie de consecuencias que van desde la paralización de dicho proceso —si aún no hubiera terminado— hasta la restauración de la situación anterior al inicio de la ejecución provisional y la reparación de lo perjuicios sufridos por el ejecutado. En efecto, la LEC

⁹⁶⁰ Cfr. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, op. cit., p. 395.

⁹⁶¹ En este sentido, entre otros, cfr. CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 55; GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 222; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, op. cit., p. 395.

⁹⁶² DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, op. cit., p. 381.

⁹⁶³ Así lo expresa GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 8-9, 2002, p. 1499, quien además afirma que «de la bondad de las previsiones legales sobre la restitución al demandado tras la revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente, así como de su correcta aplicación, depende que pueda llegarse finalmente a la conclusión de que la arriesgada apuesta legislativa por la ejecución provisional sin simultánea prestación de caución ha sido un acierto».

realiza una minuciosa descripción de los distintos supuestos de revocación⁹⁶⁴ en sus artículos 533 y 534, distinguiendo según se trate de la revocación de condenas dinerarias y de la revocación de condenas no dinerarias, siendo el criterio inspirador de toda esta regulación facilitar la reparación o compensación del ejecutado, permitiendo que obtenga esta satisfacción por la vía ejecutiva, sin que tenga que acudir a un nuevo proceso declarativo para ello⁹⁶⁵.

En relación con esta idea, la Audiencia Provincial de Madrid tiene declarado que «es esencia de la revocación de la ejecución provisional, que se restaure la situación anterior a la ejecución provisional y, en su caso, se compense económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia ejecutada provisoriamente fuere revocada»⁹⁶⁶; y que «cuando la sentencia sea revocada, en todo o en parte, genera en el sujeto frente a quien se dirigió la ejecución el derecho al restablecimiento de la situación “*ex ante*”, a la “*restitutio*”, que en puridad debería ser “*in integrum*”, situándole en el nivel de la indiferencia económica y patrimonial, pero que en cada ordenamiento puede experimentar ciertas modulaciones»⁹⁶⁷.

No obstante, la regulación que hace la LEC de los efectos de la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada ha sido calificada por algunos autores de deficiente y fragmentaria⁹⁶⁸ pues, de una parte, se llega a resultados diversos para supuestos análogos –como sucede con la restitución de la costas, que sí procede en la revocación total de condenas dinerarias, pero no en la revocación parcial de las mismas ni en la revocación en caso de condenas no dinerarias–, y de otra, no se ocupa de todas las hipótesis de revocación. En esta misma línea, se ha declarado que, en términos

⁹⁶⁴ MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 120.

⁹⁶⁵ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 922.

⁹⁶⁶ AAP Madrid (Secc. 20ª), de 18 de febrero de 2004 (ROJ AAP M 1280/2004). En el mismo sentido, vid. AAP Madrid (Secc. 20ª), de 7 de febrero de 2008 (ROJ AAP M 1836/2008) y AAP Madrid (Secc. 25ª), de 8 de mayo de 2009 (JUR\2010\279303).

⁹⁶⁷ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292).

⁹⁶⁸ Critican la regulación de la LEC desde esta perspectiva, sin rigor exhaustivo, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 138; ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», en *Actualidad Civil*, núm. 6, 2008; y CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 55.

generales, «la LEC es mucho más considerada con el ejecutante que solicitó la ejecución provisional cuando la sentencia sea después revocada, que con el ejecutado que sufrió –por ahora “indebidamente”– la ejecución provisional. O lo que es igual: la LEC 1/2000 está mucho más atenta en facilitar la ejecución provisional de cualquier resolución que en establecer mecanismos que permitan la plena satisfacción económica de quien sufrió indebidamente una ejecución provisional»⁹⁶⁹.

Sobre el particular, no se puede negar que la concreta regulación de los efectos la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada contenida en los artículos 533 y 534 de la LEC no ofrece respuesta a todos los posibles escenarios que plantea esta eventualidad –la revocación–, y que en algunos extremos la solución legal, si se aplican literalmente las citadas normas, puede resultar algo injusta, lo que supondría un quiebre en el necesario equilibrio que debe guardar el legislador en la tutela del interés del ejecutante y del ejecutado. Con todo, somos de la opinión de que las omisiones en la regulación legal de esta materia no tienen la entidad suficiente para considerar que el legislador ha desatendido por completo el interés del ejecutado en la ejecución provisional, puesto que, por una parte, es posible llenar las lagunas normativas acudiendo a la analogía, de manera que incluso en aquellas hipótesis no reguladas por la LEC el ejecutado estará en condiciones de ser resarcido de los perjuicios que le haya ocasionado la efectividad de una resolución que no era firme; y, por otra, porque el tenor literal no es el único elemento del que dispone el intérprete para encontrar el sentido de la ley, pues también se puede acudir al criterio sistemático como instrumento hermenéutico, de manera que se podrán alcanzar soluciones que se ajusten mejor al conjunto de la normativa que regula la ejecución provisional y que, además, supongan conclusiones más equitativas.

Antes de revisar los efectos de la revocación de la resolución objeto de ejecución provisional conviene precisar qué se entiende por «revocación», pues se trata de un término propio del recurso de apelación, pero que en sede de ejecución provisional también se utiliza respecto de otros recursos *ex* artículo 537 de la LEC. En efecto, de acuerdo con el artículo 456 de la LEC, a través del recurso de apelación la parte recurrente podrá perseguir la revocación de un auto o de una sentencia y que, en su

⁹⁶⁹ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292).

lugar, se dicte otro u otra que le sea favorable. Por consiguiente, cuando se habla de la «revocación» de una resolución, se está haciendo referencia a la estimación del recurso de apelación interpuesto frente a la misma.

Sin embargo, tal y como adelantamos, al regular la revocación de las resoluciones ejecutadas provisionalmente la LEC no sólo se refiere a las sentencias de primera instancia –lo que resulta plenamente coherente con lo que se acaba de exponer–, sino que también se refiere a la «revocación» de las sentencias dictadas en segunda instancia (art. 537 LEC), expresión que no se cohonestaba con el contenido de la resolución que decide el recurso extraordinario por medio del cual se impugnó la sentencia de segunda instancia objeto de nuestra institución. Efectivamente, es sabido que, por una parte, la resolución que decide el recurso extraordinario por infracción procesal, en caso de estimar el recurso, casará o anulará la resolución impugnada en función de cuál sea el motivo estimado *ex* artículo 476 de la LEC; y por otra, la resolución que decide el recurso de casación, en caso de estimación, casará la resolución frente a la que se interpuso el recurso y resolverá sobre el fondo del litigio en los términos que correspondan (art. 487 LEC).

Como se observara, cuando se estiman los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal el tribunal *ad quem* no revoca propiamente la resolución impugnada, sino que la anula o la casa. No obstante, en ambos supuestos la sentencia de segunda instancia que ha sido objeto de alguno de estos recursos es invalidada por una resolución de un tribunal superior, de modo que dicha resolución deja de producir efectos jurídicos. Desde esta perspectiva, la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal o del recurso de casación es funcionalmente equivalente a la estimación del recurso de apelación, pues en todas estas hipótesis la resolución impugnada pierde su eficacia, máxime cuando existe un supuesto de estimación del recurso de apelación en que no se produce propiamente la revocación de la resolución apelada sino que su anulación, lo que sucede en los casos en que en el citado recurso se alegare una infracción procesal que origina la nulidad radical de actuaciones *ex* artículo 465.4 de la LEC.

Por lo anterior, podemos concluir que para los efectos propios de la institución objeto de nuestro estudio, la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada

equivale a la estimación el recurso interpuesto frente a ella, aunque no se trate propiamente de «revocación» en los términos del artículo 456 de la LEC, pues con independencia del tipo de recurso de que se trate (apelación, extraordinario por infracción procesal o casación), su estimación supone que queda sin efecto toda consecuencia jurídica de la resolución que ha sido objeto del mismo, ya sea porque se revoca y se dicta otra en su lugar, porque se declara la nulidad de actuaciones⁹⁷⁰, porque se anula o porque se casa.

Nótese, no obstante, que no toda anulación de la resolución que ha sido objeto de ejecución provisional cabe dentro del concepto amplio de revocación que defendemos, sino que sólo los supuestos de anulación que son una consecuencia directa de la estimación del recurso —ordinario o extraordinario— presentado frente a dicha resolución, recurso cuya interposición impidió que la referida resolución adquiriera firmeza, situación que habilitó que se presentara la solicitud de ejecución provisional. Pero si la resolución ejecutada provisionalmente es dejada sin efecto por razones distintas de las expresadas, no corresponde hablar de revocación en los términos de los artículos 533 y siguientes de la LEC, por lo que no resultarán aplicables estas disposiciones⁹⁷¹.

⁹⁷⁰ Por esta razón, no compartimos lo resuelto por el AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 4 de noviembre de 2010 (ROJ AAP B 5564/2010), según el cual «no puede argumentarse que la declaración de nulidad (como consecuencia de la estimación de un recurso de apelación) sea lo mismo que la revocación de la sentencia, toda vez que la nulidad provoca la inexistencia de la sentencia y el dictado de otra nueva, que podrá ser coincidente o no con la declarada nula. Por otra parte y si bien es cierto que ante la declaración de nulidad deberá procederse al sobreseimiento de la ejecución, se estima que en cuanto a los daños y perjuicios los efectos no pueden ser los mismos que en el caso que la sentencia provisionalmente ejecutada fuera totalmente revocada. La ejecución provisional es una facultad que se concede al vencedor y por ello, en caso de revocación total de la misma, se imponen a su cargo los daños y perjuicios que dicha ejecución hubiera ocasionado a un deudor que en realidad no lo era. Esto no ocurre cuando se declara la nulidad y debe procederse al dictado de una nueva sentencia, cuyo contenido se desconoce».

⁹⁷¹ En este sentido, el AAP Madrid (Secc. 20), de 29 de marzo de 2010 (ROJ AAP M 4290/2010) niega el acceso a la reversión de la ejecución provisional tras afirmar que «no existe identidad de razón para poder acudir a la revocación de condena dineraria contemplada en el artículo 533.1 de la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil, pues la sentencia de la que trae causa es de condena a dar cosa mueble y de carácter firme, no se trata de una revocación que deje sin efecto toda consecuencia jurídica derivada de la sentencia. Por otro lado, lo que se declara es la nulidad de actuaciones en el procedimiento principal, que además se vio afectado por las Disposiciones transitorias de la expresada Ley. Por tanto, no se dispone de un título que dé lugar a una nueva ejecución provisional de signo contrario en base a la revocación de una sentencia que deja sin efecto lo provisionalmente acordado, sino que se trata de una resolución judicial que provoca la nulidad de lo actuado a partir de un determinado momento procesal que provoca los efectos inherentes a la misma. Es decir, todo lo hecho desde entonces es nulo de pleno derecho y no produce efecto alguno; pero la consecuencia jurídica es retrotraer las actuaciones a dicho momento procesal. Lo que implica, en definitiva, que la parte allí ejecutada deba hacer valer sus derechos en la pieza separada de ejecución, en la que constan todas y cada una de las actuaciones declaradas nulas

Hecha esta aclaración, analizaremos a continuación los efectos que produce la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada, para lo cual seguiremos el siguiente orden⁹⁷²: en primer lugar, nos vamos a referir a la *terminación del procedimiento de ejecución provisional* como consecuencia de la revocación en aquellos casos en que la resolución del recurso se produce antes de que terminen las actividades ejecutivas necesarias para la completa satisfacción del ejecutante provisional; en segundo término, revisaremos la forma en que el legislador pretende conseguir la *reparación del ejecutado* que ha sufrido la ejecución provisional, normativa que nos obligará a distinguir según se trate de la revocación de condenas dinerarias o de la revocación de condenas no dinerarias; y, finalmente, analizaremos el procedimiento a través del cual el hasta ahora ejecutado provisional puede reclamar la reintegración de los conceptos a que tiene derecho como consecuencia de la revocación de la resolución ejecutada provisionalmente, comúnmente denominado *procedimiento de reversión*.

1. La terminación del procedimiento de ejecución provisional

El primer efecto de la revocación de la resolución que ha sido objeto de ejecución provisional es la terminación del proceso de ejecución provisional en caso de que todavía no haya finalizado, pues resulta perfectamente posible que la decisión del recurso presentado frente a tal resolución se produzca antes de que la ejecución provisional haya concluido⁹⁷³.

La LEC sólo se refiere a esta consecuencia en su artículo 533.1 al regular la revocación total de condenas dinerarias —utilizando la expresión «sobreseimiento»—, pero no cabe duda de que este efecto se produce siempre que se revoque la resolución

en virtud del mismo, sin necesidad, como se ha dicho, de proceder a una nueva ejecución de signo contrario».

⁹⁷² En este punto nos basamos en el trabajo de GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, en el que la autora, con una visión de conjunto, analiza las diversas consecuencias de la revocación de una resolución que ha sido provisionalmente ejecutada, apartándose de la tradicional exposición de esta materia que sigue el mismo orden de la regulación hecha por la LEC.

⁹⁷³ Aunque al regular los efectos de la revocación la LEC parte implícitamente de que la ejecución ya ha concluido, tal como afirman MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I, op. cit.*, p. 396; y MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil, op. cit.*, p. 122.

que ha sido objeto de ejecución provisional, con independencia de la naturaleza pecuniaria o no pecuniaria del pronunciamiento de condena revocado, y sea que la sentencia revocatoria haya adquirido firmeza o no⁹⁷⁴.

Por lo demás, el cese de las actuaciones ejecutivas pendientes constituye una consecuencia del todo lógica si se tiene en cuenta que –como veremos en el epígrafe siguiente–, la revocación otorgará al ejecutado el derecho a la restauración de la situación anterior a la ejecución provisional, por lo que ningún sentido tendría que se continúe con la ejecución provisional para, inmediatamente, dejar todo sin efecto⁹⁷⁵, tal como lo tiene resuelto la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria que, tras afirmar que el efecto inmediato de la revocación de la resolución que ha sido ejecutada provisionalmente es el sobreseimiento de tal ejecución provisional, declaró que «pese a tratarse de una sentencia que no ha ganado firmeza, al no haberse entregado cantidad alguna al ejecutante provisional difícilmente podría obligarse a la parte ejecutada a iniciar un proceso de apremio frente a tal ejecutante pues nada ha recibido en su patrimonio y nada ha de devolver, sin que, pese a lo pretendido por el recurrente, pueda seguirse la ejecución provisional para, una vez agotada, obligar al ejecutado a iniciar la inversa ejecución mediante apremio con posibilidad de oposición de actuaciones ejecutivas concretas pues carecería de sentido realizar ambos actos en sí contradictorios»⁹⁷⁶.

Formalmente, el sobreseimiento de la ejecución provisional es acordado por el secretario judicial del tribunal que conoce del proceso de ejecución provisional por medio de decreto⁹⁷⁷, resolución procesal que deberá dictarse de oficio una vez recibidos los autos remitidos por el tribunal *ad quem*⁹⁷⁸, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para solicitar el cese de los actos ejecutivos que se encuentren pendientes.

⁹⁷⁴ En igual sentido, cfr. GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1499.

⁹⁷⁵ Con similares términos, *vid.* CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1152.

⁹⁷⁶ AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª), de 18 de octubre de 2004 (JUR\2004\303143).

⁹⁷⁷ Antes de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, la paralización de la ejecución provisional se acordaba por medio de auto.

⁹⁷⁸ En el mismo sentido, *vid.* GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1499; y TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», *op. cit.*, p. 2207.

Una vez decretado el sobreseimiento –no el archivo, entendido como resolución que pone término al proceso⁹⁷⁹–, se archivan los autos correspondientes al proceso de ejecución provisional.

Antes de concluir el estudio de este efecto general de la revocación, se debe tener presente que en los supuestos de revocación parcial de la resolución ejecutada provisionalmente el alcance de la paralización de las actividades ejecutivas pendientes dependerá, como acertadamente puntualiza alguna autora, del tipo de condena que se ha ejecutado, del concreto contenido de la sentencia revocatoria y del grado de desarrollo en que se encuentra la ejecución provisional, de manera que no es posible sentar reglas aplicables a todas las hipótesis que puedan surgir de la combinación de estos tres factores sin entrar en un casuismo exacerbado⁹⁸⁰.

2. La reparación del ejecutado provisional

El efecto más importante de la revocación de la resolución que ha sido objeto de ejecución provisional es la restauración de la situación anterior a la iniciación de proceso de ejecución provisional en aras de reparar al ejecutado que soportó la realización de actuaciones ejecutivas que se inmiscuyeron en su patrimonio y que tenían como fundamento un título ejecutivo –sentencia o auto de condena– que fue dejado sin efecto.

Como ya adelantamos, lo que pretende la LEC con las normas que regulan esta materia es alcanzar la reparación integral del ejecutado, pues, como se tiene dicho, «en caso de revocación de la sentencia que se esté ejecutando provisionalmente, el ejecutado debe quedar indemne de todos los daños y perjuicios causados, como consecuencia de la misma y tanto si se revoca totalmente, como si es parcialmente en todo lo derivado de la parte revocada, siendo éste uno de los riesgos de la ejecución provisional»⁹⁸¹.

⁹⁷⁹ Como tiene resuelto el AAP Girona (Secc. 2ª), de 7 de abril de 2003 (AC\2003\1430), «la consecuencia de la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada no es el archivo del proceso, sino el sobreseimiento de la ejecución provisional iniciada». En el mismo sentido, cfr. AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª), de 18 de febrero de 2010 (ROJ AAP GC 1555/2010).

⁹⁸⁰ Cfr. GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1499.

⁹⁸¹ AAP Madrid (Secc. 12ª), de 31 de octubre de 2006 (ROJ AAP M 14806/2006).

Por lo anterior, en línea de principio, tras la revocación de la resolución que ha sido ejecutada provisionalmente, el ejecutante provisional debería restituir al ejecutado provisional la totalidad –o la parte que corresponda, en caso de revocación parcial– de lo que hubiera percibido, más los intereses, frutos o rentas que los bienes que le han sido entregados hayan podido generar; resarcirle los daños y perjuicios que la ejecución provisional le hayan causado y reintegrarle las costas del respectivo proceso de ejecución provisional.

No obstante, la LEC no realiza una regulación unitaria de esta materia, sino que para concretar el alcance de este efecto y, en definitiva, determinar los conceptos que debe restituir o compensar el ejecutante provisional, distingue según se trate de la revocación de condenas pecuniarias (art. 533 LEC) o de la revocación de condenas no dinerarias (art. 534 LEC)⁹⁸². Por esta razón, y con el objeto de facilitar nuestra exposición, vamos a seguir el mismo orden establecido en la regulación legal de este efecto.

a) Revocación de sentencias de condena dineraria

El artículo 533 de la LEC regula la revocación de condenas dinerarias, y lo hace distinguiendo según se trate de la revocación total –apartado 1– o parcial –apartado 2– de la resolución ejecutada provisionalmente. Asimismo, el apartado 3 de esta disposición se ocupa especialmente de los supuestos en que la sentencia revocatoria no es firme, sea porque se ha interpuesto contra la misma recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación. No obstante, esta última situación sólo interesa para efectos del procedimiento a través del cual el ejecutado podrá reclamar la restitución de aquello a lo que tiene derecho en caso de revocación total o parcial de la resolución provisionalmente ejecutada –tema que abordaremos más adelante (*infra*, apdo. III.3)–, pero que no incide en el alcance de la reparación⁹⁸³. Por ello, centraremos

⁹⁸² Recuérdese que estas reglas también se aplican a la revocación de resoluciones de segunda instancia *ex* artículo 537 de la LEC, que se remite a los preceptos citados en el texto principal.

⁹⁸³ El AAP Madrid (Secc. 10ª), de 11 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11627/2012), parece entender que de lo dispuesto en el artículo 533.1 de la LEC se desprende que los efectos de la revocación son distintos en función de la firmeza o la falta de firmeza de la resolución revocatoria, pues «aunque la ley no lo diga de modo explícito, la hipótesis de este apartado primero hace referencia a la sentencia firme que revoca la recurrida. Ello es así por varias razones. En primer lugar, por la propia estructura del precepto, que en el apartado tercero regula los supuestos de restitución cuando la sentencia no es firme.

nuestro análisis de la revocación de condenas dinerarias atendiendo al carácter total o parcial de la revocación.

En los casos de *revocación total* de condenas dinerarias, el artículo 533.1 de la LEC ordena que el ejecutante provisional no sólo deberá devolver al ejecutado la cantidad que hubiese percibido, sino que también deberá reintegrarle las costas de la ejecución provisional y resarcirle los daños y perjuicios que la ejecución provisional le hubiese ocasionado. De este modo, «el resarcimiento del ejecutado es, en principio, pleno si la indebida ejecución provisional lo fue de una condena pecuniaria y, además, la sentencia provisionalmente ejecutada se revoca en su totalidad»⁹⁸⁴. Con todo, es necesaria alguna precisión en torno a los conceptos que se incluyen dentro de esta reparación para que la misma pueda ser calificada de efectivamente plena.

Así, en cuanto a la cantidad percibida, el ejecutante provisional debe devolver lo que efectivamente haya percibido, con independencia del valor que hayan tenido los bienes embargados y que hayan sido sacados a pública subasta, o descontados gastos de la realización en caso de enajenación por persona o entidad especializada⁹⁸⁵.

Por otro lado, aunque la LEC no indica que esta partida deba ser incrementada de acuerdo con el interés legal –lo que sí hace al regular la revocación parcial (art. 533.2 LEC)–, entendemos que en los supuestos de revocación total de condenas dinerarias el principal recibido por el ejecutante debe ser restituido con los intereses

En segundo lugar, porque se esta regulando la restitución definitiva y sin paliativo alguno, lo que resulta incompatible con la naturaleza condicional de la ejecución provisional. En tercer lugar porque la revocación pura y simple no da cumplimiento a la condición resolutoria de confirmación, que solo opera con la firmeza. Mientras tanto, el ejecutante mantiene un título a su favor, aunque sea de carácter acentuadamente claudicante. En cuarto lugar, porque para restituir provisionalmente, el ejecutado tendría que pedir, a su vez, la ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia ex art. 535, cuestión no prevista en el apartado que nos ocupa, y si en el ultimo párrafo del apartado tercero». No obstante, como mantenemos en el texto principal, las diferencias que pueden existir entre la revocación por sentencia firme y la revocación por sentencia recurrida dicen relación con el cauce procesal para instar la reversión de lo ejecutado provisionalmente, pero en ambos el ejecutado tiene derecho a la restitución de iguales conceptos, aunque, ciertamente, si la resolución revocatoria fue impugnada, la permanencia de los efectos de la retroacción dependerá del resultado del recurso interpuesto frente a ella.

⁹⁸⁴ Así lo afirma FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 161. Y así también lo declara el AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292), con transcripción literal de esta cita.

⁹⁸⁵ Cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», op. cit.

correspondientes⁹⁸⁶. En efecto, «se ha de entender que los intereses legales, como fruto civil del dinero -que se percibe por días- también deben ser reintegrados junto con el principal ya que en otro caso el reintegro no sería completo ni cabal y exacto»⁹⁸⁷.

Por último, si el ejecutante no percibió cantidad alguna, no tiene nada que restituir al ejecutado a este título, sin perjuicio del deber de reintegrar la costas y de compensar los daños y perjuicios. Precisamente, si el ejecutante provisional «no cobró cantidad alguna, es meritorio que no viene obligado a su devolución, sino que será únicamente el Juzgado el que deberá expedir mandamiento de devolución a favor del ejecutado provisional [sic] para devolverle lo ingresado en la cuenta del Juzgado»⁹⁸⁸.

En cuanto a la restitución de las costas⁹⁸⁹, el ejecutante sólo debe reintegrar aquellas que hayan sido satisfechas por el ejecutado y que correspondan al proceso de ejecución provisional, sin que comprenda esta obligación la devolución de las costas del proceso declarativo del que trae causa (*infra*, cap. VIII, apdo. I).

Entre tales costas, se incluyen aquellas que hayan sido impuestas al ejecutado como consecuencia de haberse desestimado su oposición a la ejecución provisional⁹⁹⁰, y

⁹⁸⁶ En igual sentido, *vid.* Díez-Picazo Giménez, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 922; Armenta Deu, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, pp. 132-133; Montero Aroca, J. y Flors Matíes, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 397; y Muerza Esparza, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 122.

Según otros autores, la restitución en caso de revocación de condenas dinerarias comprende los intereses del dinero, pero este concepto se incluye dentro de la indemnización de los daños y perjuicios que debe reparar el ejecutante. Cfr. Fernández-Ballesteros López, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, *op. cit.*, p. 161; Caballol Angelats, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 57; y Cubillo López, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1153.

⁹⁸⁷ AAP Madrid (Secc. 10ª), de 11 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11627/2012).

⁹⁸⁸ Así lo resuelve el AAP Madrid (Secc. 9ª), de 14 de julio de 2011 (ROJ AAP M 10099/2011), que a continuación declara que «al no existir ningún principal que devolver, resulta imposible que esta inexistente cantidad devengue interés alguno».

⁹⁸⁹ En forma aislada, Caballol Angelats, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, pp. 56-57, sostiene que la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada no debería dar lugar nunca a la restitución de las costas, pues –en su opinión– el único responsable de la imposición de las costas en un proceso de ejecución, en cualquiera de sus modalidades, es el ejecutado, quien tiene en sus manos la posibilidad de evitar la actividad ejecutiva despachada en su contra por medio del cumplimiento voluntario de la prestación.

⁹⁹⁰ Al efecto, el AAP Cáceres (Secc. 1ª), de 21 de julio de 2011 (ROJ AAP CC 388/2011) tiene declarado que «no cabe duda de que la expresión "costas de la ejecución provisional" integra, envuelve y comprende todas las costas que se hubieran podido ocasionar en el Proceso de Ejecución Provisional,

los honorarios de Letrado y Procurador que hayan intervenido en el proceso de ejecución provisional, siendo un «requisito necesario para la liquidación de su importe que se proceda previamente a su tasación»⁹⁹¹.

Finalmente, el ejecutante provisional deberá indemnizar al ejecutado por todos los daños y perjuicios que la ejecución provisional le haya ocasionado. La LEC no señala cuál es el alcance de esta regla, por lo que debe entenderse que la indemnización incluye todos aquellos que el ejecutado haya tenido como consecuencia de la ejecución provisional y que puede probar⁹⁹², como el coste actual de reposición, si se embargaron bienes fungibles; el coste actual de adquisición, si se enajenaron divisas; el coste de reposición, si se subastó un inmueble, entre otros⁹⁹³.

Al efecto –aunque somos de la opinión de que la restitución de los intereses de la cantidad percibida por el ejecutante se debe incluir dentro del primer concepto comprendido en el artículo 533.1 de la LEC–, se ha resuelto que «cuando en virtud de esa ejecución provisional se percibe una cantidad líquida, el ejecutado al dejar de

incluidas las que hubieran podido imponerse en incidentes de oposición a la ejecución o en cualquier Recurso que hubiera podido deducirse». Y agrega que «no es posible separar este Incidente del propio ámbito (incluso del propio Proceso) de Ejecución Provisional, del que forma parte integrante, y por tanto, las costas que pudieran generarse en este Incidente son, con el máximo rigor, "costas de la ejecución provisional" sometidas, pues, a la prescripción, categórica y tajante, del artículo 533.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde no se efectúa distinción de ningún tipo, de modo que, como es de todos conocido, donde no distingue la Ley, no deben distinguir los Tribunales».

En contra, la SAP Santiago de Compostela (Secc. 6ª), de 27 de enero de 2011 (ROJ SAP C 183/2011) sostiene que «nos encontramos ante procedimientos judiciales diferentes, y precisamente aquél respecto del cual se reclaman las costas se ha debido de iniciar por la conducta procesal del ejecutado, y no hubiera tenido lugar de no ser por dicha oposición al pago, lo cual integra precisamente el fundamento jurídico de la obligación de satisfacer las cantidades devengadas en consecuencia, que son las que se reclaman ahora. Por lo tanto permanece vigente la obligación de satisfacer el coste de la oposición a la ejecución, independientemente de que se haya revocado la condena, y ordenado la devolución de lo percibido provisionalmente, pues unas pueden haber sido las razones para oponerse a la ejecución provisional y otras distintas las tenidas en cuenta para la revocación de la sentencia en el juicio ordinario. En consecuencia, la previsión del art. 533.1 LEC no alcanza a esta condena en costas, que en todo caso no hubiera tenido lugar si no se hubiera planteado una oposición que fue totalmente desestimada en dos ocasiones, en las que expresamente se impusieron las costas de dichos procedimientos.

⁹⁹¹ AAP Castellón (Secc. 3ª), de 13 de noviembre de 2006 (JUR\2007\228491).

⁹⁹² En este sentido, el AAP Madrid (Secc. 25ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2005\107709) afirma que el artículo 533.1 de la LEC «no contiene una fórmula para determinar cuáles son esos perjuicios ni hasta dónde se extienden, quedando la determinación abierta a cuanto el perjudicado pueda probar». En la misma línea,

⁹⁹³ Cfr. FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 161. Así también lo declara el AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292).

poseerla deja también de percibir sus frutos, que no son otros que los intereses de la misma, obteniéndolos al contrario quien recibe la suma, de lo que se sigue que la entrega de la cantidad causa un perjuicio al ejecutado valorable en esos intereses que dejó de percibir»⁹⁹⁴. En la misma línea, de tiene declarado que de «lo que se trata es de indemnizar a una parte de las consecuencias derivadas de una ejecución provisional que luego se deja sin efecto y en base a un hecho incuestionado, la privación que sufrió el ejecutado y por ende, amparado en el art. 533/1 de la LEC, cuyo interés por demás, no puede estimarse arbitrario ni excesivo. No es cuestión de asumir buena o mala fe, o por mejor decir de basar en tales consideraciones la obligación o la determinación de los intereses sino en definitiva de asumir las consecuencias de una elección»⁹⁹⁵.

Siguiendo con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución provisional, no existe unanimidad respecto a las comisiones bancarias que tuvo que satisfacer la parte ejecutada para obtener el aval bancario con que garantizó el pago de la cantidad a que había sido inicialmente condenada. Así, alguna resolución ha declarado que «no cabe duda que esas comisiones han supuesto un perjuicio económico que ha tenido que soportar para afrontar la garantía del pago de unas cantidades que ahora han quedado eliminadas. Si lo que se pretende es conseguir retornar a la situación patrimonial previa a la ejecución provisional que libremente decidieron instar los hoy apelantes y los demás actores, cobra pleno sentido que se les abone tal cantidad»⁹⁹⁶.

⁹⁹⁴ Así lo declara el AAP Jaén (Secc. 1ª), de 22 de noviembre de 2001 (JUR\2002\21863), que a continuación agrega que «el fundamento de la acción resarcitoria se encuentra en el propio precepto, y en la aplicación de la doctrina de la culpa o responsabilidad por riesgo que tiene su basamento en la necesidad de indemnizar las consecuencias de aquellos hechos que sin ser ilícitos no tienen debida justificación incluso cuando se ajustan a la ley y son realizados por el agente en apoyo de esa norma. El ejecutante asume el riesgo que supone la ejecución anticipada de una resolución que no es firme, y que puede ser revocada posteriormente; utiliza un derecho que concede la ley, pero a sabiendas de que, si percibe la cantidad que la resolución fija, priva de ella al ejecutado, con la consecuencia antes dicha, de que el ejecutado deja de poder percibir sus frutos, que puede hacer suyos el ejecutante. La única forma, pues, de restablecer las cosas a su estado anterior, sin perjudicar al ejecutado, es la devolución de esos frutos consistentes en el interés legal del dinero, al tratarse de cantidad líquida, y que en definitiva le resarcen del perjuicio».

⁹⁹⁵ AAP Bilbao (Secc. 3ª), de 23 de febrero de 2012 (ROJ AAP BI 407/2012). Asimismo, el AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 21 de marzo de 2011 (ROJ AAP B 2601/2011) tiene resuelto que «la revocación tanto total como parcial de la sentencia de primera instancia lleva consigo la devolución de la cantidad que, en su caso, el ejecutante provisional hubiera percibido, el reintegro de las costas de la ejecución provisional que el ejecutado hubiere satisfecho, y "la obligación de resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado", entre los que, sin duda, se encuentra, los intereses de la cantidad consignada, como se deriva de lo dispuesto en el artículo 1.108 del Código Civil».

⁹⁹⁶ AAP Palma de Mallorca (Secc. 5ª), de 25 de febrero de 2011 (ROJ AAP IB 132/2011).

En sentido contrario, se tiene resuelto que «el ejecutante debe considerarse como un deudor de buena fe y por ello, de conformidad con el artículo 1107 del Código Civil solo debe responder de los daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación. El recurrente reclama los gastos de constitución y mantenimiento del aval, que constituyó para evitar que el importe de la condena fuera entregado al ejecutante, pero ésta era una consecuencia que el ejecutante no pudo prever al instar la ejecución provisional, toda vez que fue una medida que se adoptó a instancias del ejecutado. Es cierto, como indica el apelante, que los intereses, de haberse entregado el principal consignado, superarían su actual petición, pero también lo es que dicha situación no se ha producido y la constitución del aval, como ya se dijo, no era previsible para la contraria»⁹⁹⁷.

Por su parte, en los supuestos de *revocación parcial* de condenas pecuniarias el ejecutante provisional sólo debe devolver la diferencia entre la cantidad percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial, incrementada con lo que resulte de aplicar a esa diferencia, anualmente y desde el momento de la percepción, el tipo de interés legal (art. 533.2 LEC). Lógicamente, si el ejecutante provisional no percibió cantidad alguna, nada debe restituir⁹⁹⁸.

Sobre el alcance de este precepto, se tiene resuelto que «la revocación parcial de la Sentencia sólo obliga a devolver lo que se dice en el citado artículo 533.2, que no alude en ningún momento a las costas de la ejecución provisional que se hubieren satisfecho, a diferencia de lo que ocurre con el apartado 1 del mismo precepto, que sí prevé, en caso de revocación total de la Sentencia, la devolución, entre otras cosas, de tales costas, por lo que, en consecuencia, dado que en éste caso no se ha producido una revocación total, no tendría derecho la ejecutada a solicitar la devolución de las costas, ni, como pretende, a oponerse incluso a que se incluyan en la tasación»⁹⁹⁹.

⁹⁹⁷ AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 4 de noviembre de 2010 (ROJ AAP B 5564/2010).

⁹⁹⁸ AAP Madrid (Secc. 20ª), de 16 de enero de 2012 (ROJ AAP M 687/2012).

⁹⁹⁹ Así lo resuelve la SAP Zamora (Secc. 1ª), de 21 de diciembre de 2009 (ROJ SAP ZA 491/2009), y agrega que «la postura de esta Sala tiene una doble razón de ser, de un lado que la misma tiene su base en la propia literalidad del precepto ya que al ser la revocación de la sentencia efectuada de manera parcial conduce a la aplicación del apartado segundo de dicho precepto 533.2 que no establece que el ejecutante provisional tenga que reintegrar las costas, por lo que si la ley no distingue nosotros tampoco debemos hacerlo; es más, dicho apartado establece que sólo se devolverá la diferencia entre lo cobrado del principal y lo confirmado por la segunda instancia (más sus intereses) y por tanto si se cobraron las costas de tal ejecución provisional no se devolverán y por otro en la doctrina que ha

Como se observa, a diferencia de lo que sucede en los supuestos de revocación total, la LEC no se refiere en los casos de revocación parcial ni a las costas de la ejecución provisional ni a los daños y perjuicios que pueda haber sufrido el ejecutado, por lo que el resarcimiento en estos casos no es pleno¹⁰⁰⁰. Este tratamiento diferenciado de la revocación en estos supuestos obedece a que, precisamente, la resolución que ha sido ejecutada provisionalmente no se ha revocado en su integridad, de manera que la actividad ejecutiva llevada a cabo no ha sido indebida ni injustificada. Por consiguiente, haciendo una interpretación literal del apartado 2 del artículo 533 de la LEC, el ejecutado provisional no podrá reclamar la restitución de conceptos no considerados por la norma¹⁰⁰¹, aunque esto pueda llevar a un resultado desequilibrado entre las partes¹⁰⁰². No obstante, lo lógico sería que el ejecutante respondiera por tales conceptos –costas y daños y perjuicios– en proporción a la cantidad revocada¹⁰⁰³, por lo que entendemos que

explicado tal norma en base a entender que al producirse la estimación parcial del recurso evidenció que la solicitud de ejecución provisional estaba parcialmente justificada, generándose una comunidad de pérdidas ante la resolución recaída en el recurso. Por tanto, este Tribunal entiende que la dicción del precepto es clara al establecer respecto de los supuestos en que haya recaído una sentencia parcialmente revocatoria en la apelación en su párrafo segundo que "solo se devolverá", mientras que en el párrafo primero para el supuesto de la revocación de la sentencia la extiende a reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiera satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado, que aparecen excluidas en el supuesto de las costas y concretados, en cuanto a daños y perjuicios, al incremento que resulte de aplicar a la diferencia entre lo percibido y lo acordado en la sentencia recaída en el recurso, anualmente, desde el momento de la percepción, el tipo del interés legal del dinero». Con todo, la propia sentencia reconoce que no se trata de un criterio pacífico, y a reglón seguido declara que «frente a lo expuesto, no podemos desconocer que existe un sector doctrinal que entiende que la dicción literal y la omisión de toda referencia a costas y daños y perjuicios no impide al Tribunal que aprecie cual es el grado de revocación de la sentencia para llegar a poder justificar el resarcimiento de las costas pagadas en la ejecución provisional, criterio extensivo que ha sido recogido en resoluciones de otros Tribunales Provinciales como las citadas por la parte recurrente».

¹⁰⁰⁰ Así lo expresa FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, op. cit., p. 161. En igual sentido, vid. AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292); AAP Castellón (Secc. 2ª), de 20 de marzo de 2005 (JUR\2005\131033); AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de febrero de 2007 (JUR\2007\121136); AAP Madrid (Secc. 28ª), de 2 de octubre de 2009 (ROJ AAP M 12183/2009); SAP Oviedo (Secc. 5ª), de 15 de diciembre de 2009 (ROJ SAP O 3167/2009); y AAP Castellón (Secc. 1ª), de 15 de octubre de 2010 (JUR\2011\23190).

¹⁰⁰¹ Según GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 223, en los casos de revocación parcial, «las costas devengadas por la ejecución provisional habrá de ser satisfechas respectivamente por las partes que las hayan devengado», opinión que comparte GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 140.

¹⁰⁰² En este sentido, cfr. CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», op. cit., pp. 1155-1156.

¹⁰⁰³ Cfr. Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», op. cit., p. 923. Comparte esta interpretación, al menos respecto de las costas, el AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 28 de abril de 2010 (ROJ AAP B 3675/2010), al establecer que el artículo 533 de la LEC «en el caso de revocación parcial ni se refiere a devolución de costas ni a daños y perjuicios, por lo que, en dicción de ambos apartados, resulta que en caso de ejecución parcial de haberse satisfecho costas de la ejecución provisional no se obliga a su devolución a diferencia de la revocación total. En todo caso, al haberse calculado dichas costas de la ejecución provisional sobre la base de una cantidad que ha sido reducida por

corresponde al tribunal apreciar el grado de la revocación para decidir, en definitiva, la imposición de las costas y el resarcimiento¹⁰⁰⁴.

Precisando el alcance del artículo 533.2 de la LEC, específicamente en relación con el momento para iniciar el cálculo del interés, los tribunales tienen reiteradamente resuelto que el devengo de los mismos se produce desde la percepción del dinero por el ejecutante¹⁰⁰⁵, aunque alguna resolución aislada ha declarado que el devengo se produce desde la reclamación judicial de la restitución¹⁰⁰⁶.

En suma, siguiendo a GARBERÍ LLOBREGAT, en la revocación de condenas dinerarias no se trata de deshacer los actos de ejecución que hayan podido realizarse, atendido el carácter intrínsecamente fungible del dinero, sino de aplicar los resultados económicos obtenidos del mismos por el ejecutante al patrimonio del ejecutado, devolviendo las cantidades percibidas y compensándole por haber tenido que padecer las consecuencias de un proceso de ejecución¹⁰⁰⁷.

b) Revocación de sentencias de condena no dineraria

La revocación de las sentencias de condena no dineraria se encuentra regulada en el artículo 534 de la LEC, precepto que realiza un tratamiento diferenciado según el tipo de condena no dineraria, aunque los supuestos incluidos en dicha norma no comprende todas las clases ejecución no dineraria reguladas en los artículos 699 y

la estimación parcial del recurso, al igual que sucede con la cantidad principal en que por lógica se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida por la ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial, pues en otro caso, existiría un enriquecimiento injusto, igualmente existiría éste de mantener una condena en costas por la cantidad que fue revocada, lo que da lugar a un recálculo de las costas, como igualmente de los intereses. Pero no a una exoneración de las costas dado que la ley no lo dice, por lo que de haberse ocasionado costas, la estimación en parte del recurso solo incide en las costas en su importe, pero no en su existencia, al igual que sucede con los intereses».

¹⁰⁰⁴ En igual sentido, *vid.* MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 124.

¹⁰⁰⁵ En esta línea, entre muchas otras, *vid.* AAP Jaén (Secc. 1ª), de 22 de noviembre de 2001 (JUR\2002\21863); AAP Castellón (Secc. 1ª), de 15 de octubre de 2010 (JUR\2011\23190); AAP Barcelona (Secc. 11ª), de 11 de enero de 2011 (ROJ AAP B 187/2011); AAP Castellón (Secc. 3ª), de 20 de julio de 2011 (ROJ AAP CS 662/2011); y AAP Madrid (Secc. 21ª), de 12 de julio de 2012 (ROJ AAP M 9479/2012).

¹⁰⁰⁶ AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de febrero de 2007 (JUR\2007\121136).

¹⁰⁰⁷ Cfr. GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 223.

siguientes de la LEC¹⁰⁰⁸. En cualquier caso, esta regla se aplica en los casos en que la ejecución provisional se hubiere llevado a cabo *in natura*, ya que si la condena no dineraria se cumplió por equivalente, regirán las reglas previstas para la revocación de condenas dinerarias¹⁰⁰⁹.

En los casos en que se revoque una sentencia que hubiere condenado a *entregar un bien determinado*, ordena la ley que el ejecutante provisional deberá restituir el bien al ejecutado en el concepto que lo hubiere tendido, más las rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien¹⁰¹⁰ (art. 534.1.I LEC), siempre, claro está, que se haya producido la entrega de dicho bien al ejecutante¹⁰¹¹, puesto que si la entrega no se verificó, nada habrá que restituir. Ahora bien, si la restitución fuere imposible¹⁰¹², de hecho o de derecho¹⁰¹³, el ejecutado podrá pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios que la pérdida del bien le hubiere ocasionado (art. 534.1.II LEC).

¹⁰⁰⁸ Omisión que en ningún caso puede conducir a la conclusión de que las hipótesis no regulas están excluidas de la ejecución provisional, como afirman, con razón, SANTOS VIJANDE, J., «Sobre la ejecución provisional de condenas de no hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», *op. cit.* y VALLESPÍN PÉREZ, D., «La reversión de las condenas no dinerarias: especial referencia a las condenas de no hacer», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 336.

¹⁰⁰⁹ Tal como expresa ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

¹⁰¹⁰ En relación con el valor pecuniario de la utilización del bien, el AAP Madrid (Secc. 25ª), de 28 de abril de 2006 (ROJ AAP M 5380/2006) tiene resuelto que «este último concepto supone la equivalencia por desposesión del mismo pues ante su carencia, la utilidad es evaluable por sustitución similar de manera que se produzca el equilibrio patrimonial, razón a que tiende dicho concepto para evitar el quebranto económico que con esa previsión normativa debe restituirse».

¹⁰¹¹ Como acertadamente aclaran MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 402.

¹⁰¹² A fin de evitar la imposibilidad de la restitución, GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 141, afirma que «habría sido acertado mantener la previsión —contenida en el Borrador de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, pero que, desafortunadamente, desapareció de aquel texto con ocasión de la tramitación parlamentaria— según la cual se prohibía al ejecutante disponer de los bienes que hubiera percibido con base en la ejecución provisional».

¹⁰¹³ Según GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1500, la imposibilidad fáctica engloba la pérdida o destrucción de la cosa; por su parte, la imposibilidad jurídica contempla el evento de adquisiciones de bienes muebles por terceros de buena fe para los que no existe un régimen de publicidad registral, pues respecto de la adquisición de bienes inmuebles o bienes muebles inscribibles, el tercero no se encuentra de buena fe, ya que conoce la existencia del litigio como consecuencia de la anotación preventiva de la sentencia en el registro respectivo *ex* artículo 524.4 de la LEC. En igual sentido, cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

En definitiva, los efectos de la revocación de una condena a entregar un bien determinado «son distintos si es posible la restitución del bien o no al ejecutado, en el primer caso se procederá a la restitución del bien al ejecutado, teniendo derecho a las rentas, frutos o productos o el valor pecuario de la utilización del bien; en el segundo caso, cuando no sea posible la restitución del bien al ejecutado, se reconoce al ejecutado el derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios causados»¹⁰¹⁴.

Como se observa, del tenor literal del precepto comentado se desprende que en los casos en se la restitución del bien es posible, el ejecutado sólo tendrá derecho a la devolución del bien mismo y de la rentabilidad derivada de su disfrute, sin que pueda reclamar que se le indemnicen los perjuicios que la ejecución provisional le haya podido causar. De otra parte, cuando la restitución del bien no es posible, establece el legislador que el ejecutado sólo tiene derecho a la indemnización de daños y perjuicios, sin hacer referencia al valor económico del bien, concepto que, en todo caso, podría considerarse incluido dentro de los daños ocasionados por la ejecución provisional¹⁰¹⁵.

No obstante, entendemos que en los supuestos de revocación de sentencias que condenan a la entrega de un bien determinado el ejecutado provisional tiene derecho tanto a la restitución del bien y sus frutos o productos como a la indemnización los daños y perjuicios que la privación temporal del bien le hubiere causado, y que si la restitución *in natura* no fuera posible, tiene derecho al valor económico del bien y a que se le indemnicen los daños y perjuicios derivados de su privación, puesto que sólo de esta forma se logra efectivamente su *restitutio in integrum*¹⁰¹⁶. Creemos que esta interpretación es más coherente con el régimen de oposición previsto para la ejecución

¹⁰¹⁴ AAP Madrid (Secc. 9ª), de 10 de noviembre de 2011 (ROJ AAP M 14221/2011).

¹⁰¹⁵ Así lo entiende, por ejemplo, CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1160, quien afirma que tales daños incluyen, junto al valor del bien no devuelto, la ganancia que se ha dejado de obtener por no disponer de él, y el perjuicio ocasionado por la pérdida del bien.

¹⁰¹⁶ En el mismo sentido, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «De la ejecución provisional de resoluciones», *op. cit.*, p. 924; y MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 122. Por su parte, GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1501, es de la opinión de que en los supuestos en que la LEC no reconoce expresamente el derecho del ejecutado provisional a ser indemnizado de los daños y perjuicios –como en el caso de la revocación de la sentencia que condena a la entrega de un bien determinado–, el ejecutado tiene derecho a tal indemnización, pero no podrá reclamarla dentro del proceso de ejecución provisional, sino que, fundándose en el artículo 1902 del Código Civil, tendrá que exigirla a través del proceso declarativo que corresponda, en atención a la cuantía de los daños y perjuicios.

provisional de condenas no dinerarias, puesto que si el artículo 528.2.2º de la LEC autoriza la oposición al conjunto de la ejecución provisional por resultar imposible o de extrema dificultad la restauración o compensación económica del ejecutado en caso de revocación, no resulta lógico que, producida esta eventualidad, la misma ley limite arbitrariamente el alcance de la reparación, excluyendo conceptos que sí considera al regular la revocación de condenas dinerarias.

En otro orden de cosas, nada dice la ley sobre la revocación de sentencias que condenan a *entregar una cosa genérica o indeterminada*. Sin embargo, como lo normal es que la ejecución de estas condenas, de acuerdo con el artículo 702 de la LEC, se salde con la adquisición de las cosas debidas con cargo al ejecutado —en este caso, provisional—, la revocación consistirá en la devolución del valor económico de dichos bienes¹⁰¹⁷. Siendo ello así, para la revocación de estas condenas se aplican las reglas sobre revocación de las condenas dinerarias¹⁰¹⁸.

A la misma conclusión llega MUERZA ESPARZA, pero con un razonamiento diferente. Según este autor, el artículo 534.1 de la LEC se refiere a la revocación de sentencias que condenan a la entrega de un bien determinado, expresión que califica de ambigua por cuanto no se corresponde con ninguno de los supuestos regulados en los artículos 701 y siguientes de la LEC, de forma tal que, en su opinión, «bajo tal expresión tienen que comprenderse todas las modalidades de ejecución por deberes de entregar cosas allí previstos: entrega de una cosa mueble determinada (art. 701); entrega de una cosa genérica o indeterminada (art. 702) y entrega de un bien inmueble (arts. 703

¹⁰¹⁷ Ciertamente, no es la única modalidad para obtener el cumplimiento de una obligación que consiste en la entrega de una cosa indeterminada o genérica, pero es la más usual. Por ello, en opinión de ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, si la ejecución provisional de estas obligaciones no se llevó a cabo por el equivalente económico, «se deberá conceder al ejecutante (ahora ejecutado) un plazo razonable para la devolución del mismo género, si aun estuviese en su poder, o de otro de la misma calidad, y de incumplir dicho requerimiento el ejecutado (ahora ejecutante) podrá instar que se le ponga en posesión de las cosas debidas o que se le faculte para que las adquiera a costa del ejecutado, ordenando al mismo tiempo el embargo de sus bienes para pagar la adquisición, a menos que manifieste que la adquisición tardía de dichas cosas ya no satisface su interés legítimo en cuyo caso el Juzgado determinará su equivalente pecuniario con los daños y perjuicios que hubieren podido causarse».

¹⁰¹⁸ A la misma conclusión llegan, entre otros, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 383; MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, pp. 402-403; y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1162; ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

y 704)». Por lo tanto –continúa–, la restitución se tendrá que hacer teniendo en cuanto lo dispuesto en los citados artículos, siendo ahora el ejecutante quien tiene el deber de entregar¹⁰¹⁹.

Si se revoca una sentencia que impone una *condena de hacer* –lo que comprende tanto las condenas de hacer no personalísimo o fungible como las condenas de hacer personalísimo o infungible–, y la prestación se hubiese realizado, el apartado 2 del artículo 534 de la LEC establece que el ejecutado puede pedir que se deshaga lo hecho y que se le indemnicen los daños y perjuicios causados. Ahora bien, aunque la ley no lo diga, la restauración del ejecutado provisional en estos casos no implica necesariamente el deshacer lo realizado, de forma que el ejecutado puede pedir directamente que se le indemnicen los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la ejecución provisional¹⁰²⁰.

Olvida el legislador pronunciarse sobre la revocación de una *sentencia que ordena la publicación o difusión de su contenido*, en los términos del artículo 707 de la LEC. Si bien se trata de una específica condena de hacer, creemos que en este caso no procede que se deshaga la publicación, sino que la revocación consistirá en la publicación de la sentencia revocatoria, más la restitución del importe de lo que hubiera supuesto la publicación, incrementado con el interés legal, y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos¹⁰²¹.

La LEC tampoco regula la revocación de sentencias que imponen una *condena de no hacer*. En estos casos, la revocación consistirá en la indemnización de los daños y perjuicios causados al ejecutado provisional, pues si éste cumplió la prestación, no se puede deshacer lo no realizado, y no será posible –o resultará muy complejo– evaluar

¹⁰¹⁹ Cfr. MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 128.

¹⁰²⁰ Con similares términos, vid. MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, op. cit., p. 403; y CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», op. cit., p. 58. En igual sentido, MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 129, sostiene que «si al ejecutado no le interesa que se deshaga lo hecho no parece que haya inconveniente en que solicite al ejecutante que le reponga el equivalente económico por la prestación de hacer».

¹⁰²¹ Así también lo entiende ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», op. cit.

económicamente el no hacer cumplido¹⁰²², salvo que la ejecución provisional se hubiese realizado por sustitución, en cuyo caso la restauración del ejecutado se ajustará a las reglas de la revocación de condenas pecuniarias¹⁰²³. Por su parte, si el ejecutado no hubiese cumplido la prestación, esto es, realizó la conducta que tenía prohibida, habrá que determinar en cada caso en qué consiste la revocación teniendo presente los distintos supuestos que contempla el artículo 710 de la LEC¹⁰²⁴.

Si la resolución por la que se revoca el pronunciamiento que contiene una condena no pecuniaria no es firme, el ejecutado provisional no tiene que esperar hasta que el mismo adquiera firmeza para instar la restauración, como lo reconoce expresamente el artículo 534.3 de la LEC, sino que podrá hacerlo desde la notificación de la resolución que resuelve el recurso de apelación. Tal precepto se remite a la vía de ejecución para obtener la restitución de la cosa, la destrucción de lo mal hecho o la exacción de daños y perjuicios, aspecto procedimental sobre el que volveremos más adelante (*infra*, apdo. III.3).

Nótese que la LEC no se refiere a la *revocación parcial* de una sentencia de condena no dineraria, supuesto en el que debe entenderse que se aplican las mismas reglas que hemos analizado a la parte de la condena que haya sido objeto de revocación¹⁰²⁵.

Finalmente, es importante destacar que para los tribunales «cuando se trata de un supuesto de revocación de una sentencia de condena no dineraria, de acuerdo a lo dispuesto en el art 534 LEC sólo cabe reclamar las indemnizaciones reconocidas en

¹⁰²² En igual sentido, por todos, cfr. CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, p. 1163.

¹⁰²³ DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 383. Según el mismo autor, si la ejecución provisional dio lugar a la imposición de multas o apremios pecuniarios, tras la revocación de la sentencia, el ejecutado tiene derecho a que el ejecutante le abone el importe de los mismos.

En contra, CABALLOL ANGELATS, L., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», *op. cit.*, p. 59, afirma que la revocación no da lugar a la restitución de tales cantidades.

¹⁰²⁴ Así lo explica MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, p. 130.

¹⁰²⁵ Por todos, *vid.* DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 383.

dicho precepto según el contenido de la resolución»¹⁰²⁶. Por consiguiente, de acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, quedan fuera del ámbito de la restauración del ejecutado provisional aquellos conceptos no considerados expresamente por la ley, como sucede, por ejemplo, con la indemnización de daños y perjuicios en caso de revocación de sentencias que condenan a entregar un bien determinado (art. 534.1 LEC), o con las costas del proceso de ejecución provisional¹⁰²⁷. Aunque se trata de una interpretación respetuosa de la literalidad de las reglas que rigen esta materia, nos parece que la misma no contribuye a que se alcance el objeto principal de este efecto de la revocación, cual es la reparación integral del ejecutado, de manera que, mientras no se apruebe una reforma legal que homologue el alcance de la reparación cualquiera que sea la naturaleza de la condena revocada, somos de la opinión de que debe primar una interpretación teleológica de la regla contenida en el artículo 534 de la LEC. En consecuencia, la restitución en los supuestos de revocación de condenas no dinerarias debe incluir, aunque la ley procesal no se refiera expresamente a estos conceptos: la indemnización de los daños y perjuicios y el valor económico del bien –en los términos expuestos al desarrollar cada una de las hipótesis de revocación–, y las costas de la ejecución provisional¹⁰²⁸.

3. El procedimiento de reversión

La LEC se ocupa del procedimiento para que el ejecutado pueda solicitar la restitución de aquellas partidas a las que tiene derecho como consecuencia de la revocación de la resolución provisionalmente ejecutada en el apartado 3 de su artículo 533, para los supuestos de revocación de condenas dinerarias, y en los apartados 3 y 4 de su artículo 534, para los casos de revocación de condenas no dinerarias. Si bien la literalidad de las normas no coincide exactamente, en esencia, se trata de un mismo cauce procedimental, con independencia de la naturaleza de la prestación revocada, por

¹⁰²⁶ AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 2 de marzo de 2006 (JUR\2006\232103).

¹⁰²⁷ Al respecto, el AAP Pontevedra (Secc. 3ª), de 6 de octubre de 2006 (ROJ AAP PO 433/2006) tiene resuelto que no procede que se supriman las costas que se hayan impuesto al ejecutado por haberse desestimado su oposición la ejecución provisional, aunque se revoque la sentencia. En la misma línea, el AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 2 de marzo de 2006 (JUR\2006\232103) ha declarado que no puede pedir el ejecutado la restitución de los honorarios que haya podido abonar a un letrado y a un procurador por haberse opuesto a la ejecución provisional.

¹⁰²⁸ También entienden que procede la restitución de las costas ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

lo que no existen inconvenientes para que realicemos un tratamiento conjunto de esta materia.

Dicho esto, lo primero que debe quedar claro es que el criterio que inspira al legislador es el de permitir al ejecutado provisional que se reviertan los efectos de la ejecución provisional llevada a cabo en su contra dentro del mismo proceso de ejecución, sin tener que iniciar un proceso declarativo nuevo para reclamar al ejecutante la reparación y la compensación a la que tiene derecho. En efecto, la Exposición de Motivos de la LEC establece que «la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensación económica en caso de revocación de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo órgano que ha tramitado o está tramitando la ejecución forzosa provisional»¹⁰²⁹.

Por esta razón, el artículo 533.3.I de la LEC señala que el ejecutado podrá pretender la restitución de las cantidades e incrementos a que da lugar la revocación de condenas dinerarias por *vía de apremio*. A su vez, el artículo 534.3 de la LEC prescribe que la reclamación de los conceptos a los que tiene derecho el ejecutado en caso de revocación de condenas no dinerarias procederá la *vía de ejecución*. Mediante estas expresiones, la ley procesal establece –no con toda la claridad que se quisiera¹⁰³⁰– que la reversión de la ejecución provisional se puede conseguir a través del proceso de ejecución, de forma tal que, revocada la resolución que se ha ejecutado provisionalmente, el sujeto frente a quien se dirigió la actividad ejecutiva pasará a ocupar la posición de ejecutante en esta nueva ejecución, y el otrora ejecutante ocupará el lugar de ejecutado.

En este punto, cobra importancia la distinción entre revocación por resolución firme y revocación por resolución que no reviste dicho carácter. En efecto, cuando la revocación se produce por una resolución que no deviene firme –únicos supuestos a los

¹⁰²⁹ Apdo. XVI, párrafo 7º.

¹⁰³⁰ Por una parte, las reglas están referidas sólo a los supuestos de revocación por resolución que no es firme, aunque lo misma solución procede cuando la sentencia revocatoria es firme. Por otro lado, la expresión *vía de apremio* empleada en el artículo 533 de la LEC corresponde, técnicamente, al procedimiento de realización de bienes dentro de un proceso ejecutivo, en circunstancias que no sólo se aplican dichas normas para la reversión, sino que todas los preceptos que regulan el proceso de ejecución forzosa, de ahí que sea más precisa la expresión *vía de ejecución* utilizada en el artículo 534 de la LEC.

que se refieren los artículos 533.3 y 534.3 y 4 de la LEC¹⁰³¹—, la ejecución que se dirija contra el anterior ejecutante tendrá el carácter de provisional, pues sus efectos dependerán del resultado del recurso extraordinario por infracción procesal o de casación que hayan sido interpuestos contra la resolución que revocó la sentencia de primera instancia¹⁰³². En otros términos, la reversión de lo provisionalmente ejecutado se podrá reclamar en todo caso —con independencia de la naturaleza de la prestación y del carácter total o parcial de la revocación— a través de un proceso de ejecución, sea que la sentencia revocatoria haya alcanzado firmeza o no: si la sentencia revocatoria es firme, la reversión se llevará a cabo según las reglas de la ejecución ordinaria; pero si dicha resolución no es firme por haberse presentado un recurso frente a ella, la ejecución que se inicie se desarrollará de acuerdo con las normas de la ejecución provisional¹⁰³³.

Confirma esta conclusión lo dispuesto en los artículos 533.3.II y 534.4 de la LEC, preceptos que establecen que el ejecutante original, ahora ejecutado, podrá oponerse a la ejecución iniciada en su contra con arreglo a lo previsto en el artículo 528 de la LEC, regla que, como sabemos, regula la oposición a la ejecución provisional¹⁰³⁴. Recuérdese, no obstante, que según defendemos en este trabajo, el ejecutado no sólo puede oponerse de acuerdo con los motivos que prevé el artículo 528 de la LEC, sino que también puede valerse de los motivos de oposición establecidos en los artículos 556 y siguientes para la

¹⁰³¹ Aunque la LEC regule este aspecto procedimental sólo respecto de las hipótesis de revocación por sentencia no firme, el proceso de ejecución que surge tras la revocación también se aplica a los supuestos de revocación por sentencia firme. Cfr. GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1503. En esta línea, el AAP Madrid (Secc. 20ª), de 18 de febrero de 2004 (ROJ AAP M 1280/2004) tiene resuelto que «aunque los artículos 533 y 534 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no contemplan específicamente el supuesto de sentencias ejecutadas provisionalmente revocadas por sentencias firmes, es evidente que el ejecutado provisionalmente no puede verse obligado, si a la postre la sentencia ejecutada es revocada, a promover un nuevo juicio declarativo para que se restaure la situación anterior a la ejecución provisional o para se le compense económicamente de los perjuicios sufridos». En igual sentido, *vid.* AAP Madrid (Secc. 25ª), de 8 de mayo de 2009 (JUR\2010\279303).

¹⁰³² Razón por la cual DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales* —con DE LA OLIVA SANTOS, A. y VEGAS TORRES, J.—, *op. cit.*, p. 382 se refiere a esta reversión como *revocación provisional*.

¹⁰³³ En igual sentido, por todos, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, *op. cit.*, pp. 399-400; y CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 1157-1158.

¹⁰³⁴ Por aplicarse las reglas de la oposición a la ejecución provisional, la resolución que decide el incidente de oposición no es susceptible de recurso alguno *ex* artículo 530.4 de la LEC. En este sentido, cfr. AAP Madrid (Secc. 20ª), de 10 de octubre de 2011 (JUR\2011\433840), para la reversión de condenas dinerarias; y AAP Madrid (Secc. 21ª), de 17 de noviembre de 2004 (JUR\2005\36158), en caso de reversión de condenas no dinerarias.

ejecución ordinaria [*supra*, cap. VI, apdo. I.1.b)]. Evidentemente, si la reversión se sigue por los cauces de la ejecución ordinaria o definitiva, el ejecutado sólo podrá oponerse a la misma de acuerdo con los motivos de oposición de tal ejecución, sin que pueda fundar su defensa en los motivos específicos de oposición de la ejecución provisional¹⁰³⁵.

En los casos en que el ejecutado provisional tenga derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la ejecución provisional, la liquidación de los mismos se hará según lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de la LEC (arts. 533.3.I *in fine* y 534.1.II LEC). Recuérdese que corresponde al ejecutante –antes ejecutado provisional– acreditar los daños y perjuicios que reclama, y si el ejecutado –antes ejecutante provisional– se opone a la liquidación, deberá aportar los criterios y elementos que permitan fijar y tener por acreditadas las cantidades reclamadas¹⁰³⁶.

Si el procedimiento de reversión es un proceso de ejecución, el mismo se rige por el principio dispositivo, de manera que sólo puede iniciarse a instancia de la parte interesada, sin que proceda el despacho de la ejecución –ordinaria o provisional– de oficio por el tribunal en caso de revocación¹⁰³⁷. En cuanto a la forma en que puede solicitarse la iniciación de este proceso de ejecución, el ejecutado podrá hacerlo por medio de una demanda ejecutiva o por simple solicitud (arts. 524.1 y 549 LEC). Y el título ejecutivo que sirve de fundamento a la reversión no es propiamente la sentencia revocatoria –pues la misma se limita a dejar sin efecto la resolución ejecutada provisionalmente y, en rigor, no contiene pronunciamiento de condena alguno¹⁰³⁸–, sino

¹⁰³⁵ Con similares términos, cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

¹⁰³⁶ Así lo recuerda el AAP Madrid (Secc. 9ª), de 10 de noviembre de 2011 (ROJ AAP M 14221/2011).

¹⁰³⁷ Así también lo entiende GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*, p. 1503.

¹⁰³⁸ Al respecto, el AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 2 de diciembre de 2011 (ROJ AAP B 8060/2011), afirma que «es lo cierto que la sentencia revocatoria, total o parcial, de una sentencia de condena a pago de dinero dictada en primera instancia no constituye título ejecutivo en los términos que contempla el artículo 517.1 y 527.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil pues aquella no es un título que tenga aparejada ejecución ya que no se trata de una sentencia de condena firme, sino de una sentencia que en caso de revocación total desestima la demanda de reclamación de cantidad y absuelve la parte demandada sin, por ello, condenar al actor a devolver la cantidad percibida en ejecución provisional que, lógicamente, no puede constituir, esto último, objeto de apelación, y en caso de revocación parcial lo que hace es concretar, disminuyéndola, la cantidad objeto de condena pero igualmente, y por lo mismo dicho,

que el decreto del secretario judicial por el que se pone término al procedimiento y de ejecución y que, al mismo tiempo, reconoce el derecho del ejecutado provisional a la reparación y compensación en los términos de los artículos 533 y 534 de la LEC, según se trate de la revocación de una condena pecuniaria o de una condena no dineraria¹⁰³⁹. Para solicitar la reversión la LEC no establece plazo¹⁰⁴⁰. Por tanto, no se aplica el plazo de espera del artículo 548 de la LEC para presentar la solicitud de iniciación del procedimiento de reversión, con independencia de que la sentencia revocatoria sea firme o no¹⁰⁴¹. Con todo, la petición debe presentarse antes de que se produzca la caducidad de la acción ejecutiva¹⁰⁴².

En cuanto al ámbito de aplicación de este procedimiento de reversión, hay que tener presente que el mismo sólo se aplica para obtener la restitución o compensación que surge como consecuencia de haberse revocado total o parcialmente una resolución que fue objeto de un proceso de ejecución provisional, sin que pueda acudir a este procedimiento en supuestos distintos del indicado¹⁰⁴³, y ni aún en caso de revocación de

sin condena a devolución de cantidad alguna percibida en ejecución provisional». En igual sentido, cfr. AAP Madrid (Secc. 20ª), de 10 de octubre de 2011 (JUR\2011\433840).

¹⁰³⁹ Con similares términos, *vid.* GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 141.

¹⁰⁴⁰ SAP Barcelona (Secc. 17ª), de 4 de diciembre de 2013 (ROJ SAP B 16365/2013).

¹⁰⁴¹ En igual sentido, *vid.* ACHÓN BRUÑÉN, M., «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», *op. cit.*

¹⁰⁴² Así, se ha resuelto que «desde el momento en que la parte ahora recurrente pudo solicitar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 533.2 de la Ley Procesal Civil, que le fuera devuelta la diferencia entre la cantidad percibida por la ejecutante y la que resultó de la revocación parcial de la sentencia, con los intereses legales correspondientes y el momento en que efectivamente realizó la petición, transcurrió más de seis años (la sentencia dictada en apelación data de noviembre de 2003 y el escrito en el que solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 533.2 de la Ley Procesal Civil es de 19 de enero de 2010); además, la petición se realiza cuando el Juzgado ya ha acordado el archivo de los autos, por cuanto, como ya se ha dicho y consta en autos, la parte no instó la devolución de lo pagado en exceso sino que se conformó con el sobrante existente en la cuenta del Juzgado». Cfr. AAP Madrid (Secc. 8ª), de 23 de diciembre de 2011 (ROJ AAP M 17851/2011). En contra, el AAP Albacete (Secc. 1ª), de 3 de mayo de 2011 (ROJ AAP AB 54/2011) declaró que «en el presente caso el apelado no ha ejercitado una acción ejecutiva de la sentencia firme recaída en el juicio ordinario, puesto que aún no se ha dictado Auto alguno de ejecución inversa, sino que, en virtud de lo dispuesto en el art. 533.2 LEC, se ha instado la reclamación de una cantidad basada en una acción que, aunque incardinada en los trámites procesales del proceso de ejecución seguido ante el Juzgado, es en realidad nueva y distinta de la que fue objeto del pleito principal basada en el derecho a la devolución del cobro de lo indebido por parte de la ejecutante, ahora recurrente, y sometida al plazo de prescripción de quince años regulado en el Código Civil».

¹⁰⁴³ En este sentido, el AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 4 de julio de 2007 (JUR\2007\308527), teniendo en cuenta que «en el auto apelado se dice que no concurren los presupuestos necesarios para que resulte de aplicación el artículo 533 LEC, por cuanto los perjuicios reclamados no derivan de la ejecución provisional en la que se ha presentado la liquidación controvertida sino que, en su caso, serían consecuencia de la consignación que efectuó la ahora recurrente para evitar el embargo de bienes que es preceptivo en el procedimiento cambiario (artículo 821 LEC)», declara que «es obvio que el incidente

una resolución, en caso de que la sentencia revocatoria estime otra acción interpuesta por el demandante¹⁰⁴⁴.

Cabe tener presente que en este procedimiento tiene legitimación activa para solicitar la restitución o compensación el ejecutado del proceso de ejecución provisional inicial, y tiene legitimación pasiva el ejecutante provisional, que ahora pasa a ser el ejecutado del deber de reparación¹⁰⁴⁵.

Finalmente, el procedimiento de reversión concluirá cuando el ejecutado provisional quede totalmente restituido o compensado en los términos de los artículos 533 y 534 de la LEC, o hasta que la sentencia que decida el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación presentados frente a la sentencia de segunda instancia revoque la resolución que sirve de base a la ejecución inversa, en cuyo caso el ejecutante provisional inicial podrá revertir nuevamente lo ejecutado, ahora de forma irrevocable y definitiva.

que nos ocupa ha de limitarse exclusivamente a la finalidad prevista en el artículo 533 LEC, esto es, a resarcir al ejecutado los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado la ejecución provisional de un pronunciamiento de condena posteriormente revocado; de lo que se infiere que no es posible atender pretensiones como la deducida, la cual nada tiene que ver con la ejecución provisional sino con una hipotética responsabilidad objetiva o por riesgo que excede del estrecho marco procesal en que nos movemos».

¹⁰⁴⁴ Sobre el particular, el AAP Madrid (Secc. 9ª), de 4 de abril de 2005 (JUR\2005\106843) tiene resuelto que de la comparación de ambos "fallos" se desprende que no cabe entender que el primero es totalmente revocado por el segundo, pues aunque por distinta acción –extremo sobre el que luego se volverá– se sigue estimando la demanda, y las indemnizaciones concedidas en uno y otro, especialmente las principales relativas respectivamente a restitución del precio inicial de la compraventa y de la diferencia resultante de restarlo de su valor actual (fallo primero) y al valor de la finca al tiempo de la evicción (segundo fallo) son sustancialmente idénticas».

¹⁰⁴⁵ Como establece el AAP Girona (Secc. 2ª), de 7 de abril de 2003 (AC\2003\1430), «los únicos que ostentan legitimación pasiva para que la vía de apremio se siga contra ellos para la restitución de las sumas entregadas provisionalmente, son los ejecutantes, que ahora pasan a ser ejecutados en razón de dicha obligación de restitución. En este mismo sentido, el último párrafo del artículo 533.3, prevé que el “obligado a devolver” sea quien pueda hacer oposición a esta pretensión. Es decir, de los mencionados preceptos queda claro que el único obligado a la devolución y el único que puede ser ejecutado, caso de no devolver lo recibido, es el ejecutante».

CAPÍTULO VIII

LAS COSTAS EN LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

I. LAS COSTAS DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Al revisar los supuestos excluidos del ámbito objetivo de nuestra institución abordamos la posibilidad de ejecutar provisionalmente el pronunciamiento sobre las costas de un proceso declarativo, llegando a la conclusión de que tal pronunciamiento no es susceptible de ejecución provisional (cap. II, apdo. VI.1).

El objeto de este Capítulo no es volver a tratar dicho tema, sino que analizar, a falta de previsión expresa en el título que regula la ejecución provisional, si es aplicable a nuestra institución la regla general sobre el pago de las costas contenida en sede de ejecución definitiva, y revisar luego algunos supuestos especiales relaciones con este tema¹⁰⁴⁶. Se trata de un tema que ha generado gran cantidad de jurisprudencia, no siempre uniforme, que merece ser estudiado con detalle¹⁰⁴⁷.

Como se sabe, el sistema de imposición de las costas causadas durante un proceso de ejecución se encuentra regulado en el artículo 539.2 de la LEC, sin perjuicio

¹⁰⁴⁶ Ante la ausencia de reglas en la LEC sobre las costas en la ejecución provisional, MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, op. cit., p. 137, recuerda que bajo la vigencia de la LEC/1881 tampoco existió una regulación sobre la materia, mostrándose la jurisprudencia contraria a su admisión.

¹⁰⁴⁷ Sobre la importancia de este tema, ASECIO MELLADO, J., «Ejecución provisional. Las costas», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014, p. 325, sostiene que «si se analiza la jurisprudencia menor, es el problema de las costas el que en mayor medida ha generado corrientes diversas e incluso contradictorias. Y no es un asunto baladí por cuanto en la ejecución es preceptiva la dirección por medio de abogado y la representación por procurador (art. 539,2) y ambas son profesiones liberales».

de la norma especial establecida en el artículo 575. 1 bis de la LEC para los casos en que la ejecución recaiga sobre la vivienda habitual del ejecutado.

De acuerdo con el primero de los preceptos citados, por regla general no existirá expresa imposición de costas en estos procesos, pues las mismas serán de cargo del ejecutado (art. 539.2.II LEC). Por lo tanto, según esta regla de imposición legal de las costas¹⁰⁴⁸, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se produzcan durante el desarrollo del proceso de ejecución –salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos–, pero podrá obtener el reembolso de los gastos y costas que haya anticipado con cargo a lo que se obtenga con la realización de los bienes embargados¹⁰⁴⁹.

Excepcionalmente, respecto de las actuaciones del proceso de ejecución en que la ley prevea expresamente que existirá un pronunciamiento sobre las costas –fundamentalmente, para el incidente de oposición a la ejecución–, corresponderá al tribunal o, en su caso, al secretario judicial, decidir si se imponen las costas al ejecutante o al ejecutado, con arreglo al criterio del vencimiento (art. 561 LEC).

Nada dice la LEC dentro del título dedicado a la ejecución provisional sobre la imposición de las costas del proceso, laguna que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia mayoritarias, es colmada aplicando a nuestra institución el sistema general sobre imposición de costas que la ley prevé para la ejecución ordinaria antes descrito. De este modo, a falta de previsión normativa dentro de las normas que regulan la ejecución provisional, el devengo y pago de las costas de la ejecución provisional se rige por lo dispuesto en el artículo 539.2 de la LEC, por aplicación de la remisión general que efectúa el artículo 524.2 de la LEC a las reglas de la ejecución ordinaria o definitiva, por lo que las costas del proceso de ejecución provisional son de cargo del ejecutado, sin necesidad de imposición expresa por parte del tribunal¹⁰⁵⁰.

¹⁰⁴⁸ Como la califica JUAN SÁNCHEZ, R., *Derecho Procesal Civil* —con ORTELLS RAMOS, M., *et al.*—, *op. cit.*, p. 674.

¹⁰⁴⁹ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, *op. cit.*, p. 35.

¹⁰⁵⁰ Siguen esta tesis, entre otros, *vid.* ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, *op. cit.*, p. 91; y MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, pp. 351-352.

Y es que existen todavía otros argumentos que avalan esta postura. Como apunta CACHÓN CADENAS¹⁰⁵¹, a quien seguimos en esta parte, no puede olvidarse que el artículo 524.3 de la LEC confiere a las partes de la ejecución provisional los mismos derechos y facultades que tienen en la ejecución ordinaria. Pues bien, si se pone en relación dicha norma con el artículo 539.2 LEC, aplicable por la remisión del artículo 524.2 de la ley rituarial, no cabe duda de que el ejecutante tiene derecho a obtener el reembolso de las costas que le haya ocasionado la ejecución provisional. Fuera de lo anterior –continúa el autor–, de la propia normativa de la ejecución provisional se desprende que el legislador para de la base de que al ejecutado corresponde soportar las costas de la misma. Así se colige del artículo 531 de la LEC, relativo a la suspensión de la ejecución provisional de condenas dinerarias, en tanto exige que el ejecutado consigne el principal, los intereses y las costas de la ejecución provisional, y del artículo 533.1 de la LEC, que al regular las cantidades que debe devolver el ejecutante en caso de revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada, incluye expresamente las costas de la ejecución provisional.

Según la jurisprudencia mayoritaria, en la ejecución provisional rigen las reglas sobre imposición de las costas de la ejecución definitiva por aplicación de la remisión genérica contenida en el artículo 524.2 de la LEC¹⁰⁵², coincidiendo con la postura doctrinal antes analizada.

Precisamente, y a fin de graficar esta doctrina jurisprudencial, se tiene resuelto que «en la ejecución provisional se devengan costas procesales, y que es procedente practicar su tasación. Así resulta del principio general del art. 242 LEC aplicable a procedimientos de toda clase, sobre la práctica de la tasación de costas a instancia de una de las partes, en relación con el art. 539.2 del mismo texto, en cuya virtud "las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior (es decir, todas las causadas por actuaciones en las que la Ley no prevea expresamente pronunciamiento

¹⁰⁵¹ Cfr. CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 119-120.

¹⁰⁵² Participan de esta tesis, entre muchas otras –incluidas las que citaremos en los epígrafes siguientes, que explícita o implícitamente hacen aplicación de las normas sobre pago de las costas de la ejecución ordinaria en la ejecución provisional–, SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª), de 30 de enero de 2014 (ROJ SAP GC 913/2014); SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 24 de junio de 2011 (ROJ SAP C 2043/2011); SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010); y AAP Tarragona (Secc. 4ª), de 23 de diciembre de 2004 (JUR\2005\104822).

sobre costas) serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición"; precepto éste propio de la ejecución definitiva, pero aplicable igualmente a la ejecución provisional de conformidad con el art. 524, apartados segundo y tercero, que establece que la ejecución provisional de sentencias de condena, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria; y que en la ejecución provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria. Además de todo ello, la previsión sobre pago de costas en la ejecución provisional se contempla de modo expreso en el art. 533.1 de la ley procesal, a propósito de los supuestos de revocación de sentencias condenatorias al pago de una cantidad de dinero, que provoca el sobreseimiento de la ejecución provisional, y devolución por el ejecutante de la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, con obligación de "reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho"»¹⁰⁵³.

Se debe advertir, no obstante, que la posición jurisprudencial que comentamos no es unánime, pues existen resoluciones en que se afirma que el artículo 539.2 de la LEC no es aplicable a la ejecución provisional, por lo que el ejecutado no debe soportar las costas que se produzcan con ocasión del proceso de ejecución provisional¹⁰⁵⁴.

¹⁰⁵³ AAP Madrid (Secc. 14ª), de 27 de junio de 2007 (JUR\2007\258050).

¹⁰⁵⁴ Precisamente, sobre el contenido del artículo 539.2 de la LEC y su posible aplicación a la ejecución provisional, en el AAP Madrid (Secc. 19ª), de 27 de abril de 2005 (JUR\2005\159944) se estableció que «del tenor del citado precepto cabe extraer en qué fase de ejecución no se precisa resolución que haga expresa imposición de costas, lo que en encuentra su justificación en que se hace merecedor de la mismas el ejecutado que no cumpla voluntariamente la condena establecida en resolución firme, obligando con ello al favorecido por el pronunciamiento a recabar el auxilio judicial para la obtención del cumplimiento, reiteramos, no realizado voluntariamente por el condenado, mas en el caso de la ejecución provisional dicho fundamento carece de valor, dado que no nos encontramos en un incumplimiento voluntario, pues ese incumplimiento no se ha de considerar voluntario pues ello pugnaría con la existencia misma del recurso interpuesto por él en la instancia condenado, no siendo argumento baladí la consideración de que si cumple voluntariamente la sentencia que viene recurrida podría considerarse satisfacción de la pretensión con las consecuencias que prevé el art. 22 de la propia Ley, de modo tal que recurrida la sentencia, su contenido no vincula al en ella condenado, pues el recurso de apelación como regla general, salvo disposición legal en contrario, goza del efecto suspensivo, y la ejecución provisional no deviene de la pasividad del condenado, sino de la regulación procesal, que concede la facultad de instarla al beneficiado por el pronunciamiento definitivo pero no firme, lo que obedece a razones de oportunidad, de modo tal que la ejecución provisional no nace, en esencia, del derecho a la ejecución de sentencia que proclama el art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el art. 118 de la CE. No es de olvidar que el art. 583.2 de la LEC en cuanto señala que aunque el deudor pague en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no lea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución, y esa causa no imputable la entramos en la existencia misma del recurso, como más arriba indicábamos, sin que quepa extraer conclusiones intermedias como las que sostienen diferenciación entre si el en la instancia condenado cumple o no dentro del plazo de 20 días posteriores a aquél en que la resolución de condena le haya sido notificada, pues, como decíamos, no se está ante el

En palabras que sintetizan de forma muy clara esta corriente jurisprudencial – tesis que comparte algún autor¹⁰⁵⁵ –, se ha declarado que «en la normativa sobre ejecución provisional no hay ni un solo precepto que prevea, ni directa, ni indirectamente que haya que hacerse un pronunciamiento sobre costas causadas a la parte ejecutante en ejecución provisional, sin duda, al no causarse a la misma costa alguna, ya que la parte que acude a un trámite no preceptivo legalmente debe hacerse cargo de sus propios gastos. Sólo así cabe dar sentido a la omisión del legislador: quien acude al trámite voluntario que le permite ejercitar el privilegio de anticipar los efectos de su sentencia no firme, debe hacerse cargo de sus propias costas y abonará las del contrario (y daños y perjuicios) si la sentencia es revocada (art. 533 LEC). Entender la presente cuestión litigiosa de otra manera, implicaría que todo condenado en la instancia a una condena dineraria y que haya apelado la sentencia, tendría que abonar su condena (como sí se exige legalmente para determinados procesos como el verbal del automóvil) aunque la sentencia no sea ejecutoria por la apelación, para evitar la condena en costas que le puede venir de la ejecución provisional instada por la apelada, sin tener causa

caso de un incumplimiento voluntario, pues no hay obligación de cumplir la sentencia que ha sido es objeto de recurso, en tanto éste penda, por lo que no cabe aplicar un precepto a supuestos distintos de los en él contemplados; razones todas las precedentes que nos llevan a la desestimación del recurso con confirmación de la resolución a la que se contrae, teniendo en cuenta, además, que la LEC no hace expresa previsión en orden a las costas de la ejecución provisional, que se insta para una obtención condicional del cumplimiento de la sentencia, y decimos condicional por cuanto su íntegra virtualidad pende del contenido del recurso, haciendo, pues, el beneficiado uso de una facultad o privilegio que la LEC por razones de oportunidad le concede».

En el mismo sentido, aparte de las resoluciones citadas en el texto principal, *vid.* SAP Barcelona (Secc. 14ª), de 14 de marzo de 2005 (JUR\2005\115956); SAP Málaga (Secc. 4ª), de 14 de octubre de 2008 (ROJ SAP MA 1621/2008); SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 2 de junio de 2009 (ROJ SAP C 1743/2009); SAP Vitoria (Secc. 1ª), de 9 de junio de 2009 (ROJ SAP VI 439/2009); SAP Madrid (Secc. 20ª), de 11 de noviembre de 2009 (JUR\2010\37771); SAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 4 de diciembre de 2009 (ROJ SAP Z 3257/2009); SAP Oviedo (Secc. 5ª), de 15 de diciembre de 2009 (ROJ SAP O 3167/2009); AAP Madrid (Secc. 21ª), de 13 de abril de 2010 (ROJ AAP M 5780/2010); SAP Madrid (Secc. 14ª), de 22 de junio de 2010 (ROJ SAP M 9679/2010); SAP Madrid (Secc. 11ª), de 8 de octubre de 2010 (ROJ SAP M 14424/2010); SAP Palma de Mallorca (Secc. 3ª), de 4 de noviembre de 2010 (ROJ SAP IB 2189/2010); SAP Lleida (Secc. 2ª), de 20 de diciembre de 2010 (ROJ SAP L 700/2010); AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 30 de diciembre de 2010 (ROJ AAP B 7355/2010); SAP Murcia (Secc. 5ª), de 22 de marzo de 2011 (ROJ SAP MU 697/2011); AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 16 de junio de 2011 (ROJ AAP TF 921/2011); SAP Málaga (Secc. 5ª), de 20 de octubre de 2011 (ROJ SAP MA 3384/2011); AAP Madrid (Secc. 19ª), de 31 de enero de 2012 (ROJ AAP M 3887/2012); y SAP Madrid (Secc. 19ª), de 22 de mayo de 2012 (ROJ SAP M 11737/2012).

¹⁰⁵⁵ Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 148, para quien «la solución contraria supone gravar en exceso la interposición del recurso previsto legalmente por la parte a quien ha perjudicado el pronunciamiento condenatorio cuya ejecución provisional se solicita». Por su parte, MARTÍNEZ DE SANTOS, A., «Un proceso de ejecución civil necesitado de reforma», *op. cit.*, sostiene que «uno de los puntos críticos de la ejecución provisional es el pago de las costas, que no pueden imponerse de forma automática al ejecutado como parece indicar el art. 531 LEC», pero no propone ninguna solución sobre la cuestión.

legal alguna para hacer tal pago. Precisamente para evitar este efecto carente de toda cobertura legal, la LEC no usa ni una sola vez la expresión "costas de la ejecución provisional" como referidas a la ejecutante y sólo la usa para favorecer a la ejecutada en el art. 533 LEC. El hecho de que la LEC se preocupe exclusivamente de las costas de la ejecución provisional que el ejecutante pueda causar al ejecutado en caso de revocación de la resolución apelada y no al contrario, resulta especialmente revelador pues lo que con ello nos dice la ley es que, los gastos y costas que el ejecutante le causa al ejecutado por este trámite no preceptivo, deben correr de cuenta del ejecutante, pero no a la inversa; lo contrario es gravar el derecho fundamental a recurrir en apelación»¹⁰⁵⁶.

En nuestra opinión, esta última interpretación de las normas relativas a las costas de la ejecución provisional que realizan las resoluciones citadas parte de un supuesto que no podemos compartir: las sentencias judiciales no firmes sólo son obligatorias desde que se despacha la ejecución provisional. Si bien es cierto que el artículo 118 de la CE establece el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que el legislador ordinario, basado en criterios de política legislativa, puede disponer la exigibilidad de una resolución judicial antes de que se produzca su firmeza, sin que ello infrinja al texto constitucional. En efecto, todo el modelo de ejecución provisional de las resoluciones judiciales se construye sobre la base de la diferencia entre firmeza y exigibilidad de las resoluciones judiciales¹⁰⁵⁷, separación conceptual que ha sido elaborada fundamentalmente gracias al aporte de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional Español, máximo interprete de la Carta fundamental (*supra*, cap. I, apdo. V.1).

De este modo, si la sentencia vincula desde que se dicta y notifica, el sujeto condenado por ella sabe de antemano que si la recurre, el beneficiado por la sentencia

¹⁰⁵⁶ SAP Madrid (Secc. 18ª), de 30 de mayo de 2007 (JUR\2007\260015). En igual sentido, cfr. SAP Madrid (Secc. 12ª), de 6 de abril de 2011 (ROJ SAP M 6377/2011).

¹⁰⁵⁷ En este sentido, CABALLO ANGELATS, L., «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», *op. cit.*, pp. 585-586, señala que «en toda ejecución provisional cabe distinguir dos momentos: el de la exigibilidad de los pronunciamientos y el de la ejecución forzosa de los mismo. [sic] Cuando la exigibilidad es concedida *ex lege* ambos estados se aprecian más fácilmente: los pronunciamientos son exigibles desde el momento en que se dictan y el despacho de la ejecución sólo tiene lugar si la parte interesada lo insta. Declarado exigible lo dispuesto en una sentencia recurrida el sujeto pasivo, recurrente o no, está obligado a darle efectividad. Es por ello que en caso de no hacerlo cabe dirigir en su contra el proceso de ejecución. La realización voluntaria de lo dispuesto en la sentencia impugnada no es obstáculo para discutir en sede del recurso principal la procedencia del pronunciamiento realizado provisionalmente».

puede solicitar su ejecución provisional, y que esa actividad ejecutiva supondrá unos gastos para el acreedor que él no tiene por qué soportar, ya que tal proceso de ejecución obedece al incumplimiento de la sentencia por parte del condenado. Ciertamente, el condenado tiene el derecho de impugnar, y para ejercer dicho derecho no tiene por regla general la carga de satisfacer al favorecido por la sentencia –como sucede en casos de excepción *ex* artículo 449 de la LEC–. Lo anterior, sin embargo, no puede significar que la parte condenada por la sentencia no tenga el deber de cumplir lo dispuesto en ella. Al contrario, notificada la sentencia que impone una condena a alguna de las partes –de aquellos susceptibles de ejecución provisional–, el sujeto condenado puede optar por aquietarse a la sentencia y cumplirla, renunciando a su derecho a recurrirla, en cuyo caso no habrá actividad de ejecución alguna, evitando que se generen costas; por no impugnarla ni cumplirla, supuesto en el cual la resolución ganará firmeza y el acreedor por instar el despacho de la ejecución ordinaria, en cuyo caso las costas de tal proceso serán de cargo del ejecutado (art. 539.2 LEC); puede optar también por recurrir la sentencia, y consignar lo adeudado, en cuyo caso se mantiene el recurso pero no es posible despachar la ejecución provisional, por lo que no se generarán costas; y, finalmente, puede decidir impugnar la resolución sin cumplir la condena. Sólo en este último evento el favorecido por la misma podrá instar la ejecución provisional, por lo que ninguna duda cabe de que, en la base de esta situación, existe un incumplimiento por parte del condenado por una resolución judicial, de manera tal que se encuentra plenamente justificado que pese sobre la parte que provocó con su conducta el inicio y desarrollo de un proceso de ejecución –aunque tenga carácter de provisional– deber de pagar las costas que se produzcan con ocasión de esa actividad ejecutiva. Pero, dada la existencia de un recurso pendiente, tal pago está sujeto, al igual que toda actividad que se realice en el seno de un proceso de ejecución provisional, al resultado del recurso interpuesto contra la resolución que se ejecuta¹⁰⁵⁸.

¹⁰⁵⁸ En apoyo de nuestra postura, el AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 30 de diciembre de 2010 (ROJ AAP B 7355/2010) tiene declarado que «sobre la posibilidad de ejecutar las costas de la ejecución provisional existen dos posiciones discrepantes:

A) La que sostiene que cabe proceder en ejecución provisional a la tasación de las costas, que se funda en los siguientes argumentos:

a) El artículo 531 de la LEC establece "se suspenderá la ejecución provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección siguiente, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas que se hubieren producido hasta ese momento. Liquidados aquéllos y tasadas éstas se decidirá sobre la continuación o el archivo de la ejecución". La expresión costas de este artículo debe entenderse referidas

Descartada por nuestra parte la tesis contraria a la aplicación de las normas de la ejecución ordinaria sobre imposición y pago de las costas en la ejecución provisional, somos de la opinión de que la remisión que realiza el artículo 524.2 de la LEC a las normas de la ejecución ordinaria resulta del todo suficiente para entender que es aplicable a la ejecución provisional lo dispuesto en el artículo 539.2 de la LEC, tal como lo sostienen la doctrina y jurisprudencia mayoritarias. Por lo demás, existen disposiciones contenidas dentro del propio título dedicado a la ejecución provisional que suponen que el ejecutado debe hacer cargo de las costas causadas en la misma, por lo que no se puede sino concluir que para el legislador la regla de imposición legal de las costas del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 539 de la es plenamente a nuestra institución.

a las generadas durante la ejecución provisional porque, por un lado, la norma está sita en sede de ejecución, y, por el otro, no puede referirse a las costas producidas en el previo declarativo pues éstas no pueden todavía tasarse hasta la firmeza de la sentencia (artículo 242 de la LEC).

b) El artículo 533.1 de la LEC exige, en caso de revocación de la sentencia, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho.

B) La segunda posición sostiene que no cabe tasar las costas en ejecución provisional porque:

a) El artículo 242.1 de la LEC exige la firmeza de la sentencia para proceder a la tasación de las costas.

b) El artículo 583.2 de la LEC señala "(a)unque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución".

Para quienes sostienen esta opinión, la ejecución provisional es una facultad potencial del que venció y no un derecho consolidado, por lo que el condenado en primera instancia no está obligado a cumplir hasta la firmeza de la sentencia. De ahí se derivaría que el vencido se encuentra en una situación de justa causa no imputable al mismo, tal y como señala el artículo 583.2 de la LEC, por lo que es la parte vencedora la que, si decide acudir a la ejecución provisional, debe soportar las costas que se produzcan.

Sin embargo, esta tesis no la podemos compartir porque: (i) el artículo 242.1 de la LEC sólo se aplica al proceso declarativo y (ii) no puede considerarse como justa causa no imputable al deudor el hecho de que no haya un pronunciamiento firme, al establecer la propia LEC la ejecución provisional con la consiguiente obligación de cumplimiento de la sentencia. En suma, no cuestionado que la ejecución provisional es verdadera ejecución, no puede considerarse justa causa para resistirse a ella que no exista un pronunciamiento firme, porque eso supone tanto como negarle su propia naturaleza».

En la misma línea, la SAP Oviedo (Secc. 5ª), de 15 de diciembre de 2009 (ROJ SAP O 3167/2009) declara que «no hay razón para calificar de privilegio y no de simple derecho el del vencedor en la primera instancia a la ejecución provisional. De simple derecho prestacional de configuración legal lo ha calificado de siempre el TC (STC 113/89, 80/90, 87/96 o 105/97) mientras, por su parte, el nº 2 del art. 17 LOPJ, in fine, se remite a las leyes para la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales y no sólo de las firmes». Por lo tanto –concluye esta resolución–, «la respuesta positiva de que es aplicable a la ejecución provisional el régimen del art. 539 de la LEC pasa por la consideración de la ejecución provisional como verdadera ejecución».

Sentado lo anterior, esto es, la obligación que pesa sobre el ejecutado de pagar al ejecutante las costas de la ejecución provisional, cabe determinar el momento en que han de tasarse tales costas.

Sobre este punto, según algunas resoluciones «la tasación de costas no debe practicarse hasta que la sentencia o resolución que se ejecuta provisionalmente sea firme»¹⁰⁵⁹. En esta línea, se tiene resuelto que «el artículo 242 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cuando hubiere condena en costas, luego que sea firme, se procederá a la exacción de las mismas. La exigencia de la firmeza es predicable también de las costas de una ejecución provisional, que no es firme por el despacho consentido de la ejecución provisional, pues es claro que la sentencia en que se funda la ejecución puede ser revocada y han de retrotraerse las actuaciones de ejecución al estado previo a su despacho, de conformidad con lo previsto en el artículo 533 de la Ley procesal civil [sic]. Resulta una flagrante contradicción con lo dispuesto en el precitado precepto que las costas del procedimiento principal no puedan tasarse hasta que alcance firmeza la resolución definitiva que contiene la condena a su pago y, sin embargo, sin esperar a aquélla, puedan tasarse y exigirse el pago de las costas generadas por la ejecución de tal resolución no firme y, por ello, provisional. Debiendo tenerse en cuenta, además, la grave dificultad que puede surgir en la práctica en el cálculo de los derechos del procurador y los honorarios del letrado que en ella intervienen, por depender, en gran medida, cuando, como aquí se trata de una condena dineraria, de la definitiva cuantificación o reconocimiento del derecho debatido, aún en trance de decisión»¹⁰⁶⁰.

Pese al criterio adoptado por la resolución transcrita y otras que fallan análogamente, entendemos que no existe inconveniente alguno para que las costas de la ejecución provisional se tasan durante la pendencia del recurso interpuesto contra la resolución que se ejecuta provisionalmente, sin necesidad de que dicha resolución alcance firmeza, como exige el artículo 242 de la LEC. En efecto, de conformidad con la citada disposición, la tasación de las costas se realizará luego de que la sentencia que

¹⁰⁵⁹ SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010). En igual sentido, *vid.* SAP Madrid (Secc. 13ª), de 13 de abril de 2007 (ROJ SAP M 4419/2007); y AAP Madrid (Secc. 13ª), de 16 de marzo de 2007 (ROJ AAP M 4937/2007).

¹⁰⁶⁰ SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010).

condene al pago de las mismas sea firme. Sin embargo, acabamos de señalar que la regla general en el proceso de ejecución –provisional y ordinario–, es que no se precise de un pronunciamiento expreso sobre imposición de costas, pues ellas vienen impuestas legalmente al ejecutado (art. 539.2.II LEC). De este modo, no resulta aplicable, o al menos no automáticamente, el artículo 242 de la LEC respecto de las costas que se producen durante el desarrollo de un proceso de ejecución –salvo, claro está, respecto de aquellas actuaciones en que la ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas (art. 539.2.I LEC)–.

Abona a esta conclusión lo dispuesto en el artículo 531 de la LEC, que en sede de ejecución provisional, señala expresamente que las costas de tal ejecución serán tasadas por el secretario judicial antes de decidir sobre la suficiencia de las cantidades consignadas por el ejecutado que ejerce la facultad de solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución provisional. De este modo, el propio legislador parte de la base, primero, de la obligación del ejecutado de hacerse cargo de las costas de la ejecución provisional y, segundo, de que tales costas se pueden liquidar dentro del propio proceso de ejecución provisional, con independencia de que la sentencia que se ejecuta haya sea firme o no.

Por otra parte, el artículo 533 de la LEC incluye dentro de las sumas que debe reembolsar el ejecutante al ejecutado en caso de revocación de la sentencia de condena dineraria, entre otras, «las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho». Pues bien, si tales costas no se han tasado, porque la resolución que se ejecutaba provisionalmente no era firme, difícilmente el ejecutado podrá haberlas pagado, por lo que no tendría sentido que el legislador hubiese incluido un concepto imposible de materializarse en la práctica.

De acuerdo con lo dicho, entendemos que las costas generales de la ejecución provisional, es decir, aquellas respecto de las que no se exige imposición, pueden tasarse sin necesidad de esperar a que la resolución que es objeto de ejecución haya adquirido firmeza. Y para el caso de las que sí se imponen, como sucede con la resolución que decide sobre el incidente de oposición a la ejecución provisional –como veremos en el epígrafe siguiente–, bastaría con que sea firme esa resolución, la que

condena en costas al ejecutado o al ejecutante, para que pueda pedirse la tasación de las mismas por la parte a quien le favorece dicho pronunciamiento.

II. LAS COSTAS DEL INCIDENTE DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN PROVISIONAL

Establecida la vigencia en el proceso de ejecución provisional de las reglas sobre imposición de las costas previstas para la ejecución ordinaria, en virtud de la remisión genérica a tales normas prevista en el artículo 524.2 de la LEC, cabe preguntarse si es posible llegar a la misma solución respecto de las costas del incidente de oposición a la ejecución provisional, atendido que tampoco encontramos norma alguna en el título dedicado a nuestra institución que resuelva este punto.

Ante tal interrogante, creemos que la respuesta debe ser afirmativa¹⁰⁶¹, usando para ello los mismos argumentos antes expuestos, de forma tal que se colma este vacío legal acudiendo a las reglas previstas para la ejecución ordinaria o definitiva¹⁰⁶². Pero la aplicación de tales reglas al incidente de oposición exigen alguna precisión.

En efecto, al describir el sistema de imposición de costas establecido para la ejecución ordinaria, señalamos que se deben distinguir dos reglas: una general, conforme a la cual las costas vienen impuestas por ley al ejecutado, sin necesidad de imposición expresa (art. 539.2.II LEC); y una especial, según la cual respecto de aquellas actuaciones ejecutivas en que la ley prevé expresamente un pronunciamiento sobre costas, será el tribunal o, en su caso, el secretario judicial, el que decida sobre esta materia (art. 539.2.I LEC).

¹⁰⁶¹ En igual sentido, *vid.* MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil*, Tomo I, *op. cit.*, p. 352; y MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 143-144.

¹⁰⁶² En contra de esta idea, *cfr.* CACHÓN CADENAS, M., «Resoluciones provisionalmente ejecutables y despacho de la ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 124-128, para quien la remisión del artículo 524.2 de la LEC a las reglas de la ejecución ordinaria sobre el pago de las costas no es suficiente para aplicar en la ejecución provisional el principio del vencimiento objetivo para decidir a quién se le imponen las costas en caso de oposición, toda vez que los motivos de oposición de la ejecución ordinaria son distintos de los motivos de oposición de la ejecución provisional. De todos modos, el autor reconoce que la tesis por la que nos decantamos es la que goza de más favor en la práctica.

Teniendo presente lo anterior, para el caso del incidente de oposición en la ejecución ordinaria rige la segunda de las reglas indicadas, toda vez que la ley contempla expresamente que debe existir un pronunciamiento sobre las costas del mismo (arts. 559 y 561 LEC).

De este modo, la primera consecuencia de aplicar en sede de ejecución provisional las normas sobre imposición de las costas de la ejecución ordinaria es que la resolución que decide sobre la oposición a la ejecución –o sobre la oposición a actuaciones ejecutivas concretas, en caso de condenas dinerarias– debe hacer un pronunciamiento expreso sobre las costas, tal como lo exige el artículo 539.2.I de la LEC. De este modo, la falta de pronunciamiento expreso sobre las costas de la oposición a la ejecución provisional impide que se pueda solicitar su tasación, tal como se viene resolviendo por los tribunales¹⁰⁶³.

En segundo lugar, como las costas no vienen impuestas por la ley sino que se exige un pronunciamiento judicial al respeto, se debe precisar el criterio que rige tal decisión. Como se sabe, la resolución que se pronuncia sobre las costas se adoptará según el principio del vencimiento objetivo, de forma tal que, en caso de desestimación total de la oposición, se impondrán las costas al ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la misma ley para la condena en costas en primera instancia (art.

¹⁰⁶³ En esta línea, la SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª), de 30 de enero de 2014 (ROJ SAP GC 913/2014) afirma que «para poder tasar unas costas de oposición a una ejecución provisional era necesario que el auto de fecha 30 de octubre del 2002 hiciera expresa condena en costas del incidente de oposición a la parte ejecutante y es que el artículo 524.2 de la LEC señala que la ejecución provisional se llevará a cabo del mismo modo que en la ejecución ordinaria, y el artículo 539.2 de la misma ley dispone que "En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán satisfacer los gastos y costas, que le correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241 de esta Ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la decisión del Tribunal sobre costas. Las costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición", así pues, solo para el caso de las costas generadas como consecuencia de la tramitación de un procedimiento de ejecución, prevé el artículo 539.2 de la LEC la posibilidad de que el ejecutado, resulte genéricamente condenado sin necesidad de hacer mención expresa en la correspondiente resolución, supuesto en el que no nos encontramos pues es el propio ejecutado el que pide costas frente al ejecutante y habida cuenta que en caso de oposición a la ejecución, la Ley expresamente prevee un pronunciamiento para costas en caso de estimación de la oposición al despacho de la ejecución en el artículo 561.2 de la LEC por la remisión genérica del artículo 524.2 de la LEC, era necesario para poder tasar costas de la oposición a la ejecución provisional que el auto de fecha 30 de octubre del 2002 a la hora de estimar la oposición a la ejecución provisional impusiera las costas de la oposición, aquíetándose a dicha resolución la parte hoy apelante, pues no pidió complemento alguno». En igual sentido, *vid.* SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010).

561.1.1ª.II LEC); y en caso de estimación de la oposición, se impondrán las costas al ejecutante (art. 561.2 *in fine* LEC).

Igual criterio debe aplicarse en la decisión sobre las costas del incidente de oposición a la ejecución provisional. En este sentido, en términos sumamente claros e ilustrativos, la Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado que «cierto es que el art. 530 regulador de la decisión o resolución sobre la oposición a la ejecución provisional y medidas efectivas concretas tan solo establece que frente al auto que decida sobre la oposición a la ejecución provisional o a medidas efectivas concretas no cabrá recurso alguno sin hacer referencia explícita a la cuestión procesal de las costas procesales. Más no podemos olvidar ni ignorar el contenido del propio art. 524 LEC en cuanto al proceso de ejecución provisional es un verdadero proceso de ejecución y por ello se despachará y llevará a cabo del mismo modo que los procesos de ejecución ordinaria. Esto nos conduce a entender de aplicación el precepto regulador de las costas de ejecución en los supuestos de oposición a la ejecución, esto es el art. 561, y por lo que aquí interesa su número primero, en cuanto establece que el auto que desestime totalmente la oposición condenará en costas al ejecutado con arreglo a lo dispuesto en el art. 394 para la condena en costas en primera instancia. Es decir, *en todos los supuestos de desestimación de la oposición a la ejecución provisional las costas de la oposición a la ejecución provisional se impondrán al ejecutado provisionalmente con arreglo al principio general del recurrente objetivo del art. 394 de la LEC*, al que se remite el art. 561 1º LEC, en sede de ejecución, resolución de la oposición por motivos de fondo¹⁰⁶⁴» (la cursiva es nuestra).

Por otro lado, y de forma excepcional, tras afirmar que por regla general cabe imponer las costas al ejecutante que en caso de estimación de la oposición, se declaró que «concurren en el presente caso unas circunstancias más que excepcionales para que no se impongan las costas al ejecutante a pesar de acogerse la oposición. Pues el ejecutante, desconocedor por completo de la consignación que se había hecho en la cuenta del Juzgado, una vez que se le notifica la providencia de 26 de noviembre de 2007 en que se tiene por preparado el recurso de apelación, solicita, en base al apartado 1 del artículo 527 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, la ejecución

¹⁰⁶⁴ AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 28 de enero de 2004 (JUR\2004\63037).

provisional. Y tan sólo al darle traslado del escrito de oposición viene en conocimiento de la existencia de la consignación»¹⁰⁶⁵.

Finalmente, debe tenerse presente, como ha tenido ocasión de establecerlo el Tribunal Constitucional, que la resolución por la que se decide la imposición de las costas en el incidente de oposición a la ejecución provisional debe ser motivada, so pena de lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte condenada¹⁰⁶⁶. Por lo tanto, no debe aplicarse automáticamente el criterio del vencimiento objetivo, sino que habrá que justificar en el caso concreto las razones por las que se impone el deber de hacerse cargo de las costas a una de las partes. Y en esta tarea de deliberación, bien podrían considerarse las excepciones a tal criterio –del vencimiento objetivo– establecidas en el artículo 394 de la LEC, norma a la que se remite el ya citado artículo 561 de la LEC, que regula el auto resolutorio del incidente de oposición a la ejecución ordinaria o definitiva¹⁰⁶⁷.

¹⁰⁶⁵ AAP Madrid (Secc. 21ª), de 28 de septiembre de 2010 (JUR\2011\24809).

¹⁰⁶⁶ La STC 120/2007, de 21 de mayo (f.j. 3º), por la que se otorga el amparo solicitado por la parte ejecutada y condenada al pago de las costas en un proceso de ejecución provisional, establece que «en el presente caso, como ha quedado acreditado en las actuaciones y ha sido expuesto con más detalle en los antecedentes, se constata que la resolución impugnada ha condenado en costas a la parte ejecutada, quien había visto parcialmente estimada su oposición a la ejecución provisional pretendida, sin haber hecho consideración alguna sobre el particular en la fundamentación jurídica. Del mismo modo, también debe descartarse que resulte inequívoco el posible fundamento normativo de la decisión adoptada, toda vez que, no existiendo norma específica sobre la condena en costas en el trámite de oposición a la ejecución provisional, en las normas generales sobre la condena en costas se prevé para los casos de estimación parcial, como es el presente, que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad (art. 394.2 de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC), siendo también este criterio el que parece presidir el régimen de imposición de costas en la oposición a la ejecución definitiva (arts. 559.2, párrafo segundo, y 561.1 y 2 LEC respecto a la oposición por motivos procesales o de fondo, respectivamente)». A reglón seguido, agrega el fallo que «en atención a lo expuesto, y tal como también ha manifestado el Ministerio Fiscal, debe concluirse que el órgano judicial al imponer las costas a los recurrentes en el incidente de oposición a la ejecución provisional, cuando habían visto en parte estimada su oposición, ha dictado una resolución sobre este concreto aspecto incurriendo en un defecto de motivación con relevancia constitucional que debe implicar el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En efecto, el órgano judicial ni ha motivado su decisión de imposición de costas, ni ha señalado los fundamentos legales de la misma, sin que tampoco quepa deducir o evidenciar de manera clara de la fundamentación y contexto de la resolución judicial impugnada cuál ha sido la normativa aplicable y la eventual concurrencia de los requisitos legales necesarios para adoptar dicha decisión. Todo ello, en última instancia, ha impedido conocer a los recurrentes las razones de fondo de la decisión judicial adoptada sobre este particular, en contradicción con las exigencias constitucionales de motivación impuestas por el art. 24.1 CE». Para un análisis de esta sentencia, *vid.* MAGRO SERVET, V., «Imposición de costas procesales en el trámite de oposición a la ejecución provisional de un fallo civil sin motivación. STC 120/2007, de 21 de mayo de 2007», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 42, 2007, pp. 47-54.

¹⁰⁶⁷ En este sentido, *vid.* CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, p. 126-127; y GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *op. cit.*, p. 149.

III. LAS COSTAS EN CASO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS DINERARIAS

La aplicación de las reglas que se vienen comentando ha dado origen a diversidad de criterios en los casos en que el ejecutado cumple la condena impuesta en la sentencia que se pretende ejecutar provisionalmente, tal como adelantamos al exponer la polémica en torno a la aplicación del plazo de espera del artículo 548 de la LEC a la ejecución provisional [*supra*, cap. V, apdo. I.2.a)] y al revisar el supuesto especial de suspensión del proceso de ejecución provisional regulado en el artículo 531 de la LEC (*supra*, cap. VI, apdo. II.2).

Según hemos revisado en este apartado, la LEC no contiene norma alguna que regule la imposición de las costas en la ejecución provisional, laguna que ha sido colmado aplicando las normas de la ejecución ordinaria, según las cuales, por regla general, las costas son de cargo del ejecutado sin necesidad de mención expresa. En su oportunidad, dijimos que para llegar a esa conclusión se acude a la remisión en bloque que hace el artículo 524.2 de la LEC al proceso de ejecución definitiva, y que refuerza esa idea el contenido del artículo 531 de la LEC, que al regular la facultad del ejecutado para suspender la ejecución provisional de condenas dinerarias, señala expresamente que deberá consignar, entre otras cantidades, las costas de la ejecución provisional.

Pues bien, precisamente en torno a la interpretación de esta última disposición se ha polemizado acerca de la justicia de hacer pesar sobre el ejecutado el pago de las costas de una ejecución que se basa en sentencia que no es firme, incluso en los casos en que cumple lo ordenado por tal sentencia, como se desprende de la aplicación literal del citado artículo 531 de la LEC, existiendo respuestas doctrinales y jurisprudenciales discrepantes, aunque una de las alternativas propuestas es ampliamente mayoritaria, como enseguida diremos.

En efecto, en muchos casos en que el ejecutado cumplía la condena dineraria en el marco del artículo 531 de la LEC, con el objeto de lograr la suspensión del proceso de ejecución provisional iniciado en su contra, los tribunales buscaron la forma de morigerar los efectos de la regulación contenida en tal disposición, pues no hay dudas de que según el espíritu y la letra de la norma, el ejecutado debe hacerse cargo de las

costas, por reducidas que sean en caso de un cumplimiento en una etapa temprana de la tramitación del procedimiento¹⁰⁶⁸.

Precisamente, en torno a esta situación se fue desarrollando una tendencia jurisprudencial según la cual, ante la falta de norma expresa sobre la imposición de las costas en la ejecución provisional, no cabe aplicar el artículo 539.2 de la LEC, por lo que, en definitiva, si el ejecutado cumple voluntariamente la condena no se le pueden imponer unas costas que no debe –y de paso, según esta tesis se libera al ejecutado del pago de las costas en cualquier supuesto durante el proceso de ejecución–¹⁰⁶⁹. Así, se tiene resuelto en relación con este tema que «no es de olvidar que el art. 583.2 de la LEC en cuanto señala que aunque el deudor pague en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo que justifique que, por causa que no le era imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor promoviera la ejecución, y esa causa no imputable la entramos en la existencia misma del recurso, como más arriba indicábamos, *sin que quepa extraer conclusiones intermedias como las que sostienen diferenciación entre si él en la instancia condenado cumple o no dentro del plazo de 20 días posteriores a aquél en que la resolución de condena le haya sido notificada*, pues, como decíamos, no se está ante el caso de un incumplimiento voluntario, pues no hay obligación de cumplir la sentencia que ha sido es objeto de recurso, en tanto éste penda, por lo que no cabe aplicar un precepto a supuestos distintos de los en él contemplados»¹⁰⁷⁰ (destacado añadido).

Según otras resoluciones, la mayoría¹⁰⁷¹, tal como se señala en la resolución arriba transcrita, se hace una aplicación analógica del artículo 548 de la LEC, norma que

¹⁰⁶⁸ Para una resumida pero actualizada exposición de las diversas soluciones alcanzadas a nivel jurisprudencial, *vid.* CABELLO CONTRERAS, J., «Las costas en la ejecución provisional: estado de la cuestión», en *Diario La Ley*, núm. 8828, 2016.

¹⁰⁶⁹ A esta corriente ya nos referimos al inicio de este apartado, por lo que nos remitimos a las resoluciones allí citadas.

¹⁰⁷⁰ SAP Madrid (Secc. 19ª), de 22 de mayo de 2012 (ROJ SAP M 11737/2012).

¹⁰⁷¹ Participan de esta corriente, entre muchas otras, SAP Barcelona (Secc. 14ª), de 31 de mayo de 2012 (ROJ SAP B 5066/2012); AAP Madrid (Secc. 14ª), de 15 de marzo de 2012 (ROJ AAP M 5607/2012); SAP Jaén (Secc. 2ª), de 19 de septiembre de 2011 (JUR\2011\430623); SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 24 de junio de 2011 (ROJ SAP C 2043/2011); SAP Castellón (Secc. 1ª), de 7 de junio de 2011 (ROJ SAP CS 797/2011); SAP Murcia (Secc. 4ª), de 2 de junio de 2011 (JUR\2011\237380); SAP Barcelona (Secc. 16ª), de 8 de marzo de 2011 (ROJ SAP B 2154/2011); AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 14 de diciembre de 2010 (ROJ AAP B 6068/2010); SAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 22 de octubre de 2010 (ROJ SAP Z 2628/2010); AAP Madrid (Secc. 8ª), de 22 de abril de 2010 (ROJ AAP M 6304/2010); SAP

confiere al condenado por una sentencia firme un plazo de gracia para cumplirla voluntariamente. Para justificar la aplicación de dicha norma que nada tiene que ver con la ejecución provisional, esta doctrina jurisprudencial comienza por recordar que las partes tienen en el proceso de ejecución provisional los mismos derechos y facultades que en la ejecución ordinaria (art. 524.3 LEC), de manera que si en esta última el ejecutado tiene una oportunidad para cumplir una sentencia firme, y con ello, liberarse de las costas de la ejecución, el ejecutado en la ejecución provisional también debe tener la posibilidad de cumplir voluntariamente, sin que se le condene en costas, tal como lo señala el artículo 531 de la LEC en sede de ejecución provisional. De esta forma, y a riesgo de forzar el sentido de las normas, concluyen estas resoluciones que si el ejecutado cumple la sentencia de condena dentro del plazo de 20 días, no contados desde que se notifica dicha sentencia, sino desde la notificación que tiene por despachada la ejecución provisional, no se le impondrán las costas de la ejecución provisional.

De acuerdo con esta postura jurisprudencial¹⁰⁷², «en la ejecución provisional y en cuanto en la materia relativa a las costas procesales que pudiera generar, caben distinguir tres situaciones distintas:

Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010); SAP Oviedo (Secc. 5ª), de 15 de diciembre de 2009 (ROJ SAP O 3167/2009); SAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 4 de diciembre de 2009 (ROJ SAP Z 3257/2009); SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 2 de junio de 2009 (ROJ SAP C 1743/2009); SAP Madrid (Secc. 12ª), de 19 de diciembre de 2007 (JUR\2008\126624); SAP Murcia (Secc. 1ª), de 15 de mayo de 2007 (JUR\2007\304283); SAP Albacete (Secc. 1ª), de 2 de noviembre de 2004 (JUR\2005\7470); y SAP Murcia (Secc. 1ª), de 30 de abril de 2003 (JUR\2003\239323).

¹⁰⁷² El AAP Granada (Secc. 3ª), de 27 de febrero de 2008 (JUR\2008\332894) la resume así: «la cuestión aquí planteada ha de resolverse bajo el prisma de lo que dispone el art 524.3 LEC, pues de acuerdo con su redacción en la ejecución provisional no se prevé la necesidad de observar el plazo de espera que el art 548 establece para la ejecución definitiva, dado que el art 527.1, en sede de ejecución provisional, prevé que se pueda solicitar "en cualquier momento, desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado recurso de apelación o, en su caso, desde el traslado al apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso", sin necesidad, por tanto, de plazo de espera alguno, plazo de espera que el art 548 impone solo en sede de ejecución definitiva. Pero esta regulación lleva a la paradoja de situar en mejor situación al condenado por sentencia firme (que en los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia la puede cumplir voluntariamente, sin que contra él se pueda despachar ejecución en base a esa sentencia) que el condenado por sentencia recurrida, contra el que puede despacharse ejecución provisional sin darle oportunidad de cumplimiento voluntario, lo que infringe abiertamente la previsión del art 524.3 LEC cuando prevé que las partes dispongan en la ejecución provisional de los mismos derechos y facultades procesales que tienen en la ejecución ordinaria. Por ello, la solución para evitar efectos contrarios al citado art 524.3 solo puede ser la de que, habiéndose despachado ejecución provisional sin plazo de espera, no se condene en costas al ejecutado provisional que de cumplimiento a la condena en el plazo de veinte días desde que tiene conocimiento de que el litigante vencedor quiere que se ejecute provisionalmente la sentencia. Por lo que, en resumidas cuentas, siendo cierto que, como dice el apelante, la ejecución provisional implica la obligación del pago de las costas de la misma por parte del ejecutado (pues pese a no existir en la regulación de la ejecución provisional un precepto equivalente al

a) Que el ejecutado no consigne ni se oponga o que oponiéndose por alguna de las causas que enumera el artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Civil esta fuese rechazada, tras sustanciarse contradictoriamente, en cuyo caso se estará, a falta de previsión expresa, a lo preceptuado en el artículo 539 – siendo a cargo del ejecutado las costas causadas.

b) Que el ejecutado, después de transcurrir veinte día desde que le fue notificado el despacho de la ejecución, pusiera a disposición del juzgado para su entrega al ejecutante, la cantidad a la que hubiese sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas que se hubiere producido hasta ese momento. En este caso se suspenderá la ejecución provisional y se tasarán las costas tal y como señala el artículo 531, decidiendo sobre el archivo o la continuación de la ejecución.

c) Que el ejecutado, antes de serle notificado el auto despachando la ejecución provisional o dentro de los veinte días siguientes a que aquella tuviere lugar, consignare o pusiere a disposición del Juzgado la cantidad por la que se hubiere despachado aquella. Este es el supuesto que aquí se da y el que carece de una regulación expresa en la Ley de Enjuiciamiento Civil»¹⁰⁷³.

Es en este último supuesto que, de acuerdo con esta corriente interpretativa, procede aplicar el tantas veces citado plazo de espera del artículo 548 de la LEC a fin de que el ejecutado tenga la misma oportunidad que el ejecutado en el proceso de ejecución ordinaria para cumplir voluntariamente, sin que sean de su cargo las costas de la ejecución¹⁰⁷⁴.

art 539-2º, párrafo 2º, LEC, se desprende de preceptos como los artículos 531 y 533 en cuanto que las costas de la ejecución provisional serán de cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición) la previsión legal del art 524.3 hace que tales costas no se devenguen cuando el vencido en una sentencia recurrida le de cumplimiento voluntario dentro de los veinte días siguientes a conocer que el vencedor insta la ejecución provisional».

¹⁰⁷³ AAP Madrid (Secc. 13ª), de 7 de junio de 2006 (JUR\2006\270576). En el mismo sentido, cfr. SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010).

¹⁰⁷⁴ Crítico de esta solución se muestra GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 212, quien afirma que «para integrar el plazo del art. 548 LECiv en el ámbito de la ejecución provisional sería preciso inventarse un trámite que hoy por hoy se encuentra absolutamente ausente en la Ley, a saber: un trámite mediante el cual el futuro ejecutante provisional anunciase al futuro ejecutado su intención de instar dicha ejecución, esperarse pacientemente el transcurso de los veinte días desde el traslado a aquél de dicho anuncio y, a continuación, si la condena no ha sido cumplida voluntariamente, formular entonces la correspondiente demanda ejecutiva al amparo del art. 524.1 LECiv».

Esta tesis jurisprudencial –que ha sido objeto de un acuerdo de unificación de criterios por parte de alguna Audiencia Provincial¹⁰⁷⁵ y que es compartida por un importante sector de la doctrina¹⁰⁷⁶–, parte de la base de que la sentencia no firme que se pretende ejecutar provisionalmente no es obligatoria sino hasta que se solicita y acuerda dicha la ejecución, por eso el plazo de gracia se cuenta desde la notificación de la resolución que despacha la ejecución provisional. Sólo a partir de ese momento, según esta línea de pensamiento, la parte condenada por la sentencia tiene el deber de cumplirla, de modo que si no lo hace después de transcurrido los sindicados 20 días, serán de su cargo las costas¹⁰⁷⁷. Pero no antes, pues ninguna obligación tenía de cumplir¹⁰⁷⁸.

¹⁰⁷⁵ Como se consigna en VV.AA., «Conclusiones de las jornadas de los jueces de la AP de Madrid sobre unificación de criterios de aplicación de la LEC y especialmente sobre ejecución provisional», *op. cit.*, ante la pregunta «¿Debe respetarse en ejecución provisional el plazo de espera de los 20 días a que se refiere el art. 548 LEC, frente al mandato taxativo del art. 527 LEC, que permite que la ejecución provisional se pida en cualquier tiempo?» la respuesta fue: «No. La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la providencia en que se tenga por preparado el recurso de apelación, al ser la norma del art. 527 ley especial frente al art. 548». Adoptándose el acuerdo en tal sentido por unanimidad. Y a renglón seguido, se expresa que «en la ejecución provisional, si el ejecutado paga o consigna voluntariamente el importe de la condena –dentro de los 20 días siguientes a la notificación del auto despachando ejecución–, sin formular oposición, no procede imponerle el pago de las costas de la ejecución», adoptándose el acuerdo en tal sentido, por mayoría (14 votos a favor, 8 en contra).

¹⁰⁷⁶ Entre otros, *vid.* ASENSIO MELLADO, J., «Ejecución provisional. Las costas», *op. cit.*, pp. 325-327; CACHÓN CADENAS, M., «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», *op. cit.*, pp. 120-124; CABELLO CONTRERAS, J., «Las costas en la ejecución provisional: estado de la cuestión», *op. cit.*; MUERZA ESPARZA, J., *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, *op. cit.*, pp. 142-143; y PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», *op. cit.*

¹⁰⁷⁷ En este sentido, por citar alguna, el AAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 19 de enero de 2007 (JUR\2007\236136) tiene declarado que la «ejecución provisional es una facultad que tiene el ejecutante y que el ejecutado desconoce si se va a ejercitar o no. En la ejecución provisional solo se puede cumplir la sentencia si se formula la solicitud, a diferencia de la definitiva en la que la obligación de cumplimiento nace de la sentencia y no de la petición. En la ejecución definitiva el ejecutado tiene la posibilidad de cumplir voluntariamente la sentencia en el plazo de 20 días, de modo que en la de ejecución provisional también ha de tener esta posibilidad, pues en caso contrario el ejecutado provisional se encontraría en peor condición que el ejecutado definitivo. En definitiva, según indican esas resoluciones, no se pueden aplicar de forma automática las normas de la ejecución definitiva, pues hay que interpretarlas de una forma correctora».

¹⁰⁷⁸ En la misma línea, se ha declarado que «en caso de existir requerimiento extrajudicial o cuando de otra manera el deudor conociese la voluntad del ejecutante de instar la ejecución, cabría plantearse la posibilidad de imponer costas al ejecutado, cabe hacer una rectificación, en el sentido de entender que el requerimiento extrajudicial o la simple noticia por parte del deudor de la voluntad del ejecutante de proceder a la ejecución provisional, no determinará el que el deudor deba de realizar el pago de 20 días a contar desde dicho requerimiento o noticia de la voluntad de solicitar la ejecución provisional, ya que realmente, entiende la Sala, a la vista de lo razonado en esta resolución, lo que confiere ejecutividad a la resolución que se ejecuta provisionalmente es precisamente el auto despachando ejecución provisional y no la mera voluntad del ejecutante de solicitarlo». Cfr. SAP Madrid (Secc. 12ª), de 19 de diciembre de 2007 (JUR\2008\126624).

Como adelantamos, no podemos compartir este razonamiento, pues somos de la opinión de que la sentencia es exigible desde su dictación y notificación a las partes, con independencia del derecho a recurrirla¹⁰⁷⁹. Por eso no nos parece que la sentencia no firme que se ejecuta provisionalmente sólo sea exigible al ejecutado desde que se despacha la ejecución. Por otro lado, la ejecución provisional no es una mera opción o un capricho de la parte favorecida por una sentencia de condena recurrida, es un verdadero derecho que la ley le concede en aras de dotar de una eficaz protección al derecho de crédito, y da origen a un verdadero proceso de ejecución, aunque su resultado esté condicionado a la confirmación o revocación de la sentencia provisionalmente realizada.

Por esta razón, aunque reconocemos que se trata de una opinión contraria a una abrumadora mayoría de resoluciones, entendemos que respecto del cumplimiento de la condena por parte del ejecutado, en relación con las costas de la ejecución provisional, hay que distinguir dos situaciones distintas:

a) Si ya se despachó la ejecución provisional, el ejecutado sólo puede dar cumplimiento a la sentencia en el marco del artículo 531 de la LEC, lo que supone poner a disposición del tribunal, para su entrega al ejecutante, una cantidad suficiente para cubrir el principal, los intereses y las costas. El ejercicio de esta facultad tiene por finalidad suspender la actividad ejecutiva iniciada en su contra, y evitar que se devenguen más intereses y costas que los que ya le corresponde satisfacer, pues la ley es clara en cuanto a los conceptos que debe cubrir el ejecutado con su consignación. Ciertamente, en esta hipótesis las costas de la ejecución son de cargo del ejecutado¹⁰⁸⁰.

b) Mientras no se haya despachado la ejecución, e incluso antes de que se inste su despacho por el ejecutante, la ley no concede al ejecutado la facultad de consignar

¹⁰⁷⁹ En igual sentido, *vid.* CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», *op. cit.*, pp. 1117-1122.

¹⁰⁸⁰ En esta línea, el AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 22 de julio de 2010 (JUR\2011\6906) tiene resuelto que «la ejecución provisional debe ajustarse en cuanto a los actos ejecutivos y a la vía de apremio a las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución ordinaria, sin perjuicio de las disposiciones específicas para el caso de revocación del pronunciamiento ejecutado provisionalmente. En consecuencia, la ejecución no termina sino hasta la completa satisfacción del acreedor ejecutante, de acuerdo con el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que no se produce sino hasta que se cumple en su totalidad el fallo de la sentencia objeto de ejecución, esto es, el pago del principal, la liquidación y pago de los intereses objeto de condena, así como la tasación y pago de las costas que también fueron objeto de condena».

para suspender¹⁰⁸¹, y ello obedece a que ninguna actividad ejecutiva se ha iniciado aún, por lo que nada haya que suspender. Con todo, entendemos que en esta eventualidad el ejecutado puede cumplir la condena, no para que se suspenda la ejecución, sino para que no se llegue a despachar. En cuanto a la oportunidad para cumplir lo ordenado por la sentencia, no debe concederse plazo de gracia alguno al ejecutado, sin que ello suponga ponerlo en una situación de desventaja respecto del ejecutado en la ejecución ordinaria, pues el condenado por un sentencia de condena tendrá todo el transcurso del plazo para la interposición del recurso –que dicho sea de paso, en el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación, es de 20 días contados desde la notificación de la resolución que se impugna (arts. 458.1, 470.1 y 479.1 LEC), coincidiendo con el plazo de espera del artículo 548 de la LEC–, más todo lo que demore el favorecido por la sentencia para instar el despacho de la ejecución provisional tras notificarse la resolución que tiene por interpuesto el recurso y hasta la emisión del mismo.

No obstante, si de todas formas se entiende que resulta aplicable el plazo espera del artículo 548 de la LEC –alternativa que sabemos es la predominante–, dicho plazo debería contarse, al igual que en la ejecución ordinaria, desde la notificación de la sentencia que se ejecuta provisionalmente¹⁰⁸². Esta interpretación, además de respetuosa con la literalidad de la norma, se ajusta más a lo que, en nuestro concepto, significa e implica la ejecución provisional, institución que en el sistema español se caracteriza por conferir eficacia ejecutiva a las resoluciones judiciales no firmes susceptibles de ejecución provisional sin necesidad de que se dicte una resolución judicial que transforme la sentencia recurrida en un título ejecutivo¹⁰⁸³. Por lo tanto, siendo exigible

¹⁰⁸¹ Aspecto de la normativa sobre ejecución provisional que destaca GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, op. cit., p. 151.

¹⁰⁸² Así lo reconoce el SAP Vitoria (Secc. 1ª), de 9 de junio de 2009 (ROJ SAP VI 439/2009), al establecer que «en este caso se dictó sentencia el 4 de febrero de 2.008, cuando la ejecutante solicita ejecución provisional en fecha 2 de abril ya había transcurrido el término de veinte días desde la notificación de la resolución al ejecutado, lo que significa todos los gastos generados por la ejecución provisional son de cargo del ejecutado que no satisfizo voluntariamente el pago dentro de este plazo de gracia que le concede la Ley precisamente para evitar las costas. El hecho de que la ejecución provisional no imponga expresamente las costas al ejecutado no significa que no tenga que abonar las derivadas de este incidente, mas cuando ya ha recaído sentencia firme que ratifica la anterior, estando prevista la devolución de estas costas solo en el caso contrario, cuando la sentencia sea revocatoria (art. 533.2 LEC), por todo ello deben declararse debidas las costas judiciales».

¹⁰⁸³ En este sentido, GUERRA PÉREZ, M., «Ejecución provisional: no procede la imposición de costas si se consigna en el plazo de 20 días desde la notificación del despacho de ejecución», en *Septin NET Revista*, núm. 74, 2007, pp. 32-36, señala que el plazo de espera debería computarse, al igual que en

la resolución que se pretende ejecutar provisionalmente desde su notificación y con independencia de la interposición de un recurso en su contra, la posibilidad del condenado para cumplir lo ordenado por ella a fin de liberarse del pago de las costas, se contaría desde la citada notificación, *ex* artículo 548 de la LEC, por remisión del artículo 524.2 de la misma ley rituaría¹⁰⁸⁴.

la ejecución forzosa, desde la notificación de la resolución, no desde la notificación del despacho, por las siguientes razones: el derecho a la ejecución (ordinaria o provisional), nace desde que se dicta la resolución, y como consecuencia de ésta, no como consecuencia de la actividad de las partes; las partes en la ejecución provisional tienen los mismos derechos que en la ejecución ordinaria (art. 524.3 LEC), por lo que el ejecutante tiene derecho al reembolso de las costas; sostener lo contrario resta efectividad a la resolución, pues sólo debería ser cumplida tras reclamarse el cumplimiento judicialmente, lo que desincentivaría el cumplimiento temprano.

¹⁰⁸⁴ Con similares términos, MARTÍ MARTÍ, J., «Condena en costas en la ejecución provisional de sentencias», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 5, 2005, pp. 984-986, sostiene que el plazo de espera del artículo 548 de la LEC debe aplicarse en toda ejecución –provisional o definitiva– y siempre contado desde la notificación de la sentencia que se ejecuta. Por lo anterior, concluye el autor, no debería despacharse la ejecución provisional antes del transcurso de dicho plazo, lo que evitaría, atendida la jurisprudencia dominante, que el ejecutante se haga cargo de sus propias costas.

CONCLUSIONES

I

El cumplimiento de una resolución judicial no se encuentra supeditado a la firmeza de la misma, toda vez que los términos firmeza y ejecución no son sinónimos ni equivalentes. El ordenamiento jurídico puede permitir por razones de política legislativa la ejecución forzosa de resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza, lo que supone autorizar su *ejecución provisional*.

II

La ejecución provisional es una modalidad de la ejecución ordinaria o definitiva por medio de la cual se confiere efectividad a una resolución judicial que no es firme, cuyos efectos están supeditados al resultado del recurso interpuesto frente a la resolución objeto de ella. Se trata, por tanto, de una *actividad jurisdiccional de naturaleza ejecutiva* –lo que la aleja de las medidas cautelares–, que se rige por las reglas que la LEC dedica especialmente a su regulación, complementadas por las normas de la ejecución ordinaria o definitiva, que le resultan aplicables subsidiariamente.

III

El *modelo de ejecución provisional* español constituyó una de las principales novedades de la LEC y representa la última etapa del desarrollo normativo de esta institución, pasando de ser admitida tímida y restrictivamente en el ordenamiento jurídico español del siglo XIX, hasta convertirse en el sistema general de efectividad de las resoluciones judiciales no firmes a principios del siglo XXI. Este sistema, regulado dentro del Libro dedicado a la ejecución forzosa, presenta las siguientes notas distintivas: *a)* se admite de forma generalizada la ejecución provisional de resoluciones de condena no firme, siendo excepcional la exclusión de determinadas resoluciones judiciales de su ámbito de

aplicación; *b*) contiene una regulación unitaria –se aplican las mismas reglas para la ejecución provisional de resoluciones de primera instancia y para las de segunda instancia– y completa –objeto, inicio y desarrollo, oposición y efectos de la confirmación o revocación– de la institución; *c*) eximen al ejecutante provisional de la necesidad de prestar caución para solicitar su despacho, lo que supone una apertura sin precedentes a esta institución; y *d*) la propia ley confiere eficacia ejecutiva a la resolución provisionalmente ejecutada, de manera que las resoluciones susceptibles de ejecución provisional constituyen títulos ejecutivos aunque no sean firmes.

IV

Esta particular apuesta del legislador por la efectividad de las resoluciones no firmes y por la confianza en la Administración de Justicia de primera instancia no obedece a un imperativo constitucional, sino a una decisión de política legislativa, pues el derecho a la ejecución provisional de las resoluciones judiciales no forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. Se trata, por tanto, de un *derecho de configuración legal*. Los postulados de política jurídica en los que se basa el modelo español de ejecución provisional han quedado perfectamente expresados en la Exposición de Motivos de la LEC, y ostentan el doble carácter de justificación y metas del sistema.

V

La *finalidad* principal que persigue esta institución es la efectividad de la tutela judicial desde la primera instancia, lo que supone tanto apostar por la confianza en la justicia impartida en ese grado jurisdiccional como favorecer la posición de la parte acreedora, aspiraciones que forman parte de los criterios inspiradores de toda la legislación procesal del año 2000, de los cuales la ejecución provisional es un fiel reflejo. Con todo, existen otras finalidades secundarias o reflejas que se pueden alcanzar con el favorecimiento de esta institución, como el cambio de mentalidad en los pleitos y en los juicios, o la reducción de recursos con ánimo puramente dilatorio. No obstante, no encontramos evidencia categórica que demuestre que se hayan conseguido estos últimos fines.

VI

El *objeto* de la ejecución provisional está configurado por las resoluciones judiciales que son susceptibles de alcanzar eficacia ejecutiva pese al hecho de no haber alcanzado firmeza. Si bien una primera lectura de las normas que regulan esta materia puede hacer creer que nos enfrentamos a una tarea sencilla, el análisis práctico de la institución revela que se trata de uno de los aspectos más complejos y que –junto al tema de las costas del proceso de ejecución provisional– ha originado la mayor cantidad de jurisprudencia. Dada esta complejidad, la determinación precisa del objeto de esta institución se alcanza con una revisión de la materia desde una doble perspectiva: analizando la forma y el contenido que adopta una resolución judicial. Sólo un examen conjunto de ambos extremos permite fijar con certeza si un determinado pronunciamiento es o no susceptible de ser ejecutado provisionalmente.

VII

En cuanto a la *forma* que debe adoptar la resolución judicial, el debate doctrinal y jurisprudencial se ha centrado sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la ejecución provisional de los autos, bajo el entendido de que ninguna duda cabe sobre la posibilidad de ejecutar provisionalmente una resolución que adopta la forma de sentencia, y sobre la exclusión de la ejecución provisional de las resoluciones que adoptan la forma de providencia. Al respecto, existen argumentos suficientes para entender que ciertas decisiones contenidas en autos no pueden excluirse automáticamente del ámbito de la ejecución provisional únicamente en atención a su clase, de manera que es perfectamente posible admitir la eficacia ejecutiva de los autos definitivos.

VIII

En cuanto a su *contenido*, sólo son susceptibles de ejecutarse provisionalmente las resoluciones –sentencias o autos– que contengan pronunciamientos condenatorios; que tratándose de condenas dinerarias, la prestación sea líquida o liquidable; y que haya sido recurrida, pues no basta con que no haya adquirido firmeza. En consecuencia, quedan excluidas del ámbito objetivo de la ejecución provisional las sentencias absolutorias o desestimatorias, y las sentencias estimatorias que contengan exclusivamente pronunciamientos mero declarativos o constitutivos.

IX

En efecto, las sentencias constitutivas no contienen pronunciamientos de condena, por lo que no pueden ser ejecutadas provisionalmente. Tampoco es posible la *ejecución provisional impropia*, pues la inscripción o cancelación de asientos en registros públicos sólo puede practicarse en virtud de sentencias que tengan la calidad de firmes. No obstante, se permite la anotación preventiva de los pronunciamientos que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en registros públicos, mientras las sentencias que los contienen no sean firmes. En los casos en que una sentencia contenga, junto a un pronunciamiento mero declarativo o constitutivo, un pronunciamiento de condena, es posible ejecutar provisionalmente el pronunciamiento de condena, sin que sea motivo para inadmitir a trámite una demanda de ejecución provisional la circunstancia de encontrarse intrínsecamente vinculados los pronunciamientos condenatorios a los pronunciamientos constitutivos o mero declarativos de la sentencia.

X

Tratándose de las sentencias condenatorias que *tutelan derechos fundamentales*, la LEC prescribe que su ejecución provisional tendrá carácter preferente, aunque la aplicación práctica de esta nota característica se vio reducida por la modificación introducida en la LEC que excluyó del ámbito de la ejecución provisional los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. La reforma operada el año 2003 carece de justificación, resulta contradictoria con el criterio facilitador de la institución y atenta contra el carácter preferente de la ejecución provisional de esta clase de resoluciones, por lo que nos parece absolutamente criticable.

XI

En los procesos sobre *cuestiones no dispositivas* o sobre *derechos honoríficos*, el pronunciamiento principal contenido en la sentencia no será susceptible de ejecución – ni provisional ni definitiva– atendida su propia naturaleza. Pero el pronunciamiento sobre las acciones de contenido patrimonial que se hayan acumulado a la acción principal, habida cuenta de su naturaleza condenatoria, es susceptible de ejecución provisional en caso de ser impugnada la sentencia.

XII

Dentro de las sentencias pronunciadas en procesos sobre cuestiones no dispositivas, ha resultado particularmente discutido el régimen de ejecución de las sentencias dictadas en *procesos matrimoniales* que han sido impugnadas, atendida la aparente contradicción entre las reglas establecidas en sede de ejecución provisional y las previstas en materia de procesos especiales. A fin de conciliar las reglas en juego, se debe distinguir entre el pronunciamiento principal, los pronunciamientos de tipo patrimonial y las medidas de contenido no dispositivo o personal. El pronunciamiento principal, relativo a la nulidad del matrimonio o divorcio, no es susceptible de ejecución provisional, atendida su naturaleza mero declarativa o constitutiva, respectivamente; el pronunciamiento de contenido patrimonial –pensión compensatoria, alimentos– es provisionalmente ejecutable, pues se trata de un pronunciamiento de condena; finalmente, las medidas definitivas de carácter indisponible son inmediatamente eficaces, por lo que son susceptibles de ser ejecutadas no provisional sino ordinaria o definitivamente.

XIII

La LEC excluye expresamente de la ejecución provisional otros tipos de resoluciones. Así sucede con las resoluciones que *condenan a emitir una declaración de voluntad*, exclusión que estaría justificada en el carácter personalísimo de esta prestación. No siendo pacífico esto último, la solución legal nos resulta un tanto excesiva. Por encuadrarse en esta hipótesis, no cabe la ejecución provisional de la resolución que condena a otorgar una escritura pública.

XIV

Tampoco es admisible la ejecución provisional de sentencias que declaran la *nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial*, por tratarse de pronunciamientos de naturaleza constitutiva o mero declarativa. El alcance de esta regla de exclusión se discute. En nuestra opinión, los pronunciamientos de contenido patrimonial contenidos en estas sentencias son susceptibles de ejecución provisional, interpretación que nos parece más coherente con el resto de las normas que regulan esta institución.

XV

Las *sentencias extranjeras* no son susceptibles de ejecución provisional, exclusión que resulta coherente con las reglas vigentes sobre reconocimiento y exequátur, pues estas

últimas normas exigen la firmeza de la resolución extranjera para que tengan eficacia ejecutiva en España. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales.

XVI

Fuera de los pronunciamientos expresamente excluidos del ámbito objetivo de la ejecución provisional, existen varios supuestos en que resulta controvertida la admisibilidad de esta institución, como sucede, singularmente, con la condena en *costas* o con las sentencias resultantes de los *juicios de desahucios*.

XVII

En cuanto a los *sujetos* que intervienen en el proceso de ejecución provisional, la LEC sólo se ocupa de forma expresa de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del mismo y de la legitimación activa para instar el despacho de la ejecución provisional. Para el resto de los presupuestos procesales relativos al tribunal y a las partes rigen las reglas generales previstas para la ejecución ordinaria, las que resultan aplicables atendida la remisión en bloque a dichas disposiciones contenida en sede de ejecución provisional. Lo propio puede decirse respecto de la intervención de terceros en la ejecución provisional.

XVIII

Así, la LEC atribuye *competencia* para conocer de la ejecución provisional de una resolución y de todo lo relativo a la misma, en todo caso, al tribunal que hubiera conocido del asunto en primera instancia, con independencia de cuál fue el tribunal que pronunció la resolución objeto de ejecución provisional. Se trata de una regla de competencia funcional que coincide con la regla prevista en sede de ejecución ordinaria.

XIX

Tiene *legitimación activa* para instar el despacho de la ejecución provisional de una resolución la parte que haya obtenido un pronunciamiento de condena a su favor. El contenido de esta regla se explica desde un punto de vista histórico, y pone de manifiesto que en el actual modelo de ejecución provisional no existe ninguna relación entre la legitimación y la posición procesal que ocupen las partes en el proceso principal o en el recurso interpuesto contra la resolución objeto de ejecución provisional. En

consecuencia, pueden tener legitimación tanto el actor como el demandado reconviniente.

XX

Fuera de lo anterior, son aplicables a nuestra institución algunos *supuestos especiales de legitimación* previstos en sede de ejecución ordinaria, entre los que destaca el caso de las sentencias pronunciadas en los procesos iniciados por asociaciones de consumidores o usuarios para la tutela de un interés difuso, sin determinación individual de los beneficiarios de la misma. El consumidor o usuario que resultó beneficiado por la sentencia y que no participó en el proceso declarativo previo, tiene legitimación para instar el despacho de la ejecución provisional de dicha sentencia una vez que le sea reconocida judicialmente su calidad de beneficiario, procedimiento (de reconocimiento) que no exige la firmeza de la resolución que se pretende ejecutar.

XXI

A falta de regulación expresa de la LEC en sede de ejecución provisional, y por aplicación de las normas contenidas en el Título dedicado a la ejecución definitiva, la ejecución provisional se despacha contra el que aparezca como deudor en el título – sentencia o auto de condena– o contra el que lo suceda. Por idéntica razón, rigen las reglas sobre postulación procesal previstas en sede de ejecución ordinaria, por lo que, por regla general, será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Por su parte, los terceros que puedan verse afectados por un proceso de ejecución provisional podrán intervenir en él del mismo modo y por medio de iguales mecanismos de protección que los regulados en la ejecución definitiva.

XXII

Para el *procedimiento* de ejecución provisional, rigen las especialidades reguladas expresamente en el Título dedicado a esta institución, y en todo lo demás, se aplican supletoriamente las reglas procedimentales de la ejecución ordinaria o definitiva. El procedimiento es el mismo tanto para la ejecución provisional de resoluciones de primera instancia como para la ejecución provisional de resoluciones de segunda instancia, aunque la LEC dedique un Capítulo específico a estas últimas.

XXIII

La ejecución provisional se rige por el principio dispositivo, de manera que siempre comenzará *a instancia de parte*. El sujeto que ostente legitimación activa podrá instar el despacho de la ejecución provisional mediante demanda ejecutiva o por simple solicitud, de forma análoga a la manera en que se puede pedir el despacho de la ejecución ordinaria. El título ejecutivo en que se funda este acto procesal de iniciación no es otro que la resolución –sentencia o auto de condena no firme– objeto de ejecución provisional.

XXIV

La LEC se ocupa especialmente de la oportunidad para pedir el despacho de la ejecución provisional, distinguiendo un momento inicial o *dies a quo* y un momento final o *dies ad quem*. El momento inicial está fijado por la notificación de la resolución que tiene por interpuesto el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación. Carece de sentido establecer un segundo *dies a quo* para la ejecución provisional de sentencias de primera instancia –desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso–, máxime cuando la legitimación activa no tiene ninguna relación con la posición de las partes respecto del recurso interpuesto frente a la resolución objeto de ejecución provisional. El acreedor podrá instar el despacho de la ejecución provisional en cualquier momento a partir de la referida notificación, sin que sea aplicable el plazo de espera previsto para la ejecución ordinaria. Por lo anterior, si no se tiene por interpuesto el recurso intentado frente a la resolución que se pretende ejecutar, no cabe solicitar el despacho de la ejecución provisional. El momento final o *dies ad quem* para solicitar el despacho de la ejecución provisional viene dado por la decisión del recurso interpuesto contra la resolución de primera o de segunda instancia. Atendido que los recursos pueden terminar por otras formas distintas de la sentencia que lo resuelve, el momento final coincide con la terminación del recurso.

XXV

La LEC ha configurado un sistema ejecución provisional *ope legis*, de manera que es la propia ley la que confiere eficacia ejecutiva a la resolución susceptible de ser ejecutada provisionalmente, y no la resolución judicial que la despacha. Solicitado el *despacho* de la ejecución provisional, corresponde al tribunal examinar si se reúnen todos los

requisitos y presupuestos procesales para su despacho –y no sólo aquellos regulados de forma específica en sede de ejecución provisional–; y verificado el cumplimiento de tales exigencias, el tribunal despachará la ejecución provisional, sin oír previamente al ejecutado provisional (*inaudita parte debitoris*). Contra el auto que despacha la ejecución provisional no cabe recurso alguno, regla clave para alcanzar la efectividad de las resoluciones recurridas.

XXVI

Si no concurren los presupuestos o requisitos procesales para el despacho de la ejecución provisional, o si existiendo defectos subsanables el ejecutante provisional no los subsana dentro del plazo concedido al efecto, el tribunal *denegará el despacho* de la ejecución provisional. Esta resolución es apelable, recurso que se tramitará y resolverá con carácter preferente. Las facultades discrecionales del tribunal en la fase inicial del proceso de ejecución provisional son mínimas, y se reducen a la denegación del despacho únicamente por las razones señaladas. Por consiguiente, no resulta ajustado a Derecho que se deniegue el despacho de la ejecución provisional por apreciar de oficio el tribunal la concurrencia de un motivo de oposición a la ejecución provisional o por estimar la oposición formulada extemporáneamente por el ejecutado provisional.

XXVII

Como contrapartida del despacho de la ejecución provisional *inaudita parte debitoris* y sin la necesidad de prestar caución, la LEC confiere al ejecutado la posibilidad de oponerse a la ejecución provisional ya acordada. La *oposición* a la ejecución provisional es un adecuado contrapeso a la facilidad para obtener el despacho de la misma y constituye una pieza clave del modelo de ejecución provisional español.

XXVIII

La LEC contempla un conjunto de *causas de oposición* reguladas especialmente en sede de ejecución provisional, las que pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios: según su ámbito de aplicación (motivos comunes a todas ejecución provisional o motivos para la ejecución provisional de condenas dinerarias o de condenas no dinerarias); según su finalidad (dejar sin efecto el conjunto del proceso de ejecución provisional o sólo actuaciones ejecutivas concretas); según la naturaleza del motivo (causas de oposición procesales o de fondo). Sin embargo, interpretando

sistemáticamente las normas que regulan esta materia, resulta que dichos motivos de oposición deben complementarse con las causas de oposición previstas en sede de ejecución ordinaria que resulten compatibles con la ejecución provisional, para una adecuada articulación entre ambas instituciones. En definitiva, las líneas de defensa que tiene el ejecutado provisional son las siguientes: *a)* oposición por motivos procesales; *b)* oposición por motivos de fondo; *c)* oposición a la ejecución provisional de sentencias de condena no dineraria; y *d)* oposición a actuaciones ejecutivas concretas en la ejecución provisional de condenas dinerarias.

XXIX

La *oposición por motivos procesales* es una línea de defensa común a toda ejecución provisional, que afecta al conjunto del procedimiento para el caso de ser estimada. Puede fundarse en la omisión de cualquier presupuesto o requisito procesal necesario para el despacho de la ejecución provisional de aquellos que el tribunal debió controlar de oficio.

XXX

La *oposición por motivos de fondo* tiene el mismo ámbito de aplicación y alcance de la oposición por motivos procesales, pero sólo puede fundarse en el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia o en la existencia de pactos o transacciones para evitar la ejecución provisional. Se excluye la caducidad de la acción ejecutiva como motivo de oposición, por resultar incompatible con este instituto.

XXXI

Tratándose de la ejecución provisional de *condenas no dinerarias*, la LEC autoriza al ejecutado a oponerse por resultar imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren en caso de revocación. Se trata de un motivo de oposición que afecta al conjunto de la ejecución, y tiene por fundamento evitar la irreversibilidad de los efectos de la ejecución provisional. La valoración de esta causa exige que el tribunal considere tanto la posibilidad de restauración como la posibilidad de compensación económica para el evento de ser revocada la resolución objeto de ejecución provisional, y ello de acuerdo con la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, esto es, desde un punto de vista objetivo.

XXXII

En la ejecución provisional de *condenas pecuniarias*, la LEC adopta un criterio menos flexible, pues sólo permite la oposición a actuaciones ejecutivas concretas y no al conjunto de la ejecución provisional, tratamiento diferenciado que se justifica por la naturaleza fungible de las prestaciones dinerarias. El motivo de oposición se configura si la concreta actuación ejecutiva genera una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, de forma tal que en este supuesto el fundamento de la oposición es también evitar la irreversibilidad de la ejecución provisional. La valoración de esta causa de oposición debe atender a elementos objetivos, aunque se observa una tendencia jurisprudencial –apoyada por ciertos sectores de la doctrina– a considerar la apreciación de elementos subjetivos, especialmente la capacidad económica del ejecutante. De acuerdo con el texto de la ley procesal, el ejecutado provisional que pretenda oponerse a una actuación ejecutiva concreta debe indicar otras medidas ejecutivas al momento de formular su oposición y, además, ofrecer caución suficiente para responder de la demora. No obstante, se trata de requisitos alternativos, por lo que basta con que se cumpla con uno de ellos para que la oposición pueda ser admitida. Por otra parte, en cuanto a la cuantía de la caución, no es suficiente con que cubra el importe de los perjuicios que pueda ocasionar la demora, sino que es necesario que la caución abarque el total de la cantidad por la que se ha despachado la ejecución provisional o la parte del total que no podrá cubrirse por las medidas ejecutivas previamente acordadas que han quedado en suspenso como consecuencia de la estimación de esta oposición.

XXXIII

Desde un punto de vista procedimental, la LEC realiza una regulación común para el *incidente de oposición*, cualquiera que sea el motivo en que se funde, el que en todo caso podrá formularse únicamente una vez despachada la ejecución provisional –no antes–; en concreto, ha de hacerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución que acuerde el despacho de la ejecución o las actuaciones ejecutivas concretas. En este último caso, podrán plantearse tantos incidentes de oposición cuantas medidas ejecutivas se decreten durante el desarrollo del proceso de ejecución provisional. La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas se formula por escrito, y su presentación no suspende el procedimiento de apremio, lo que nos parece censurable. El ejecutante podrá impugnar la oposición, y en el caso de la

oposición a condenas no dinerarias por el motivo específico previsto en sede de ejecución provisional, podrá ofrecer caución para garantizar la restauración o la compensación económica en caso de revocación. El incidente de oposición se decide por el tribunal mediante, contra el cual no cabe recurso alguno. La LEC regula minuciosamente los efectos de la estimación de la oposición según los distintos motivos en que puede fundarse.

XXXIV

La ejecución provisional puede *suspenderse* por aplicación de las causas de suspensión que la ley procesal prevé en sede de ejecución ordinaria, siempre que sean compatibles con esta institución. Pero, además, la LEC regula un supuesto específico de suspensión de la ejecución provisional de condenas dinerarias, que se produce como consecuencia de que el ejecutado provisional ponga a disposición del tribunal, para su entrega al ejecutado, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas de la ejecución provisional. Se trata de una alternativa que se confiere al ejecutado provisional —plenamente compatible con la posibilidad de oponerse a la misma por motivos procesales o de fondo, o a actuaciones ejecutivas concretas—, a fin de evitar las gravosas consecuencias de un proceso de ejecución forzosa en su modalidad provisional.

XXXV

Toda la actividad ejecutiva desarrollada durante el proceso de ejecución provisional está sujeta al resultado del recurso interpuesto frente a la resolución objeto de esta institución. La LEC regula por vez primera en el ordenamiento jurídico español los efectos de la *confirmación* o *revocación* de la resolución provisionalmente ejecutada, estableciendo un mismo régimen legal para la confirmación o revocación de sentencias de primera o de segunda instancia.

XXXVI

En caso de resultar *confirmada* la resolución provisionalmente ejecutada, esto es, en caso de terminar el recurso presentado frente a ella por sentencia desestimatoria o por cualquier otro medio de terminación anormal del recurso, la institución de la ejecución provisional refuerza su razón de ser y evidencia su utilidad y justificación como instrumento de tutela del crédito. La regulación legal de la confirmación parte del

supuesto de que la ejecución provisional no ha terminado en el momento de pronunciarse la resolución confirmatoria, aunque es perfectamente posible que no existan actuaciones ejecutivas pendientes por haberse satisfecho completamente al ejecutante provisional. Por otra parte, la LEC sólo se ocupa de distinguir entre confirmación por resolución firme y confirmación por resolución susceptible de ser recurrida, pero olvida pronunciarse sobre la posibilidad de confirmación parcial. Confirmada en su *totalidad* la resolución objeto de ejecución provisional, si aún quedan actuaciones ejecutivas pendientes, el proceso de ejecución provisional seguirá su curso normal, siempre que la resolución confirmatoria haya sido impugnada mediante la interposición de un recurso extraordinario por infracción procesal o por un recurso de casación. Si la resolución confirmatoria devino firme, la ejecución continúa –no se transforma– como ordinaria o definitiva, sin que se confiera el ejecutado una nueva oportunidad para oponerse a la ejecución –toda vez que ya pudo hacer uso de este derecho tras despacharse la ejecución provisional en su contra–. En ambos supuestos, la ejecución continúa –como ordinaria o como provisional, según corresponda– sin necesidad de que el ejecutante lo solicite. Pero si el procedimiento se encuentra suspendido, para su reanudación se exige un acto de parte interesada. Si las actuaciones ejecutivas ya han concluido al tiempo de producirse la confirmación total, y la resolución confirmatoria alcanza firmeza, los actos de ejecución se consolidan, de manera que lo provisionalmente ejecutado quedará como definitivamente ejecutado. Pero si la resolución confirmatoria es impugnada, habrá que esperar el resultado del recurso respectivo para saber si las actuaciones se mantendrán o si será necesario proceder a la restauración del ejecutado en caso de revocación. En caso de confirmación *parcial*, aunque la LEC no lo diga expresamente, se aplican las mismas reglas arriba descritas respecto de la parte confirmada, y las reglas siguientes para la parte de la resolución provisionalmente ejecutada que ha sido revocada.

XXXVII

La *revocación* de la resolución objeto de ejecución provisional representa el mayor riesgo de esta institución, especialmente en aquellos casos en que el ejecutante provisional no puede hacer frente a la reparación o compensación económica del ejecutado provisional. Consciente de esta situación, el legislador procesal se ocupa especialmente de los efectos de la revocación, aunque lo hace centrándose en uno de ellos: la reparación del ejecutado, distinguiendo según se trate de la revocación de una

sentencia que contiene un pronunciamiento de condena dineraria o de la revocación de una sentencia que contiene un pronunciamiento de condena no dineraria. El criterio que inspira la normativa que regula esta materia es la facilitación de la reparación o compensación económica del ejecutado dentro del mismo proceso de ejecución, a fin de evitar que tenga que acudir a un proceso declarativo para la reclamación de las partidas a que tiene derecho como consecuencia de la revocación. No obstante, el tratamiento diferenciado que hace la LEC según la naturaleza de la prestación revocada adolece de importantes defectos, puesto que no se regulan todos los supuestos de revocación, a la vez que se adoptan soluciones diferentes para hipótesis análogas, lo que obliga a desechar una interpretación literal de los preceptos que regulan esta cuestión a fin de garantizar que se alcance la *restitutio in integrum* del ejecutado provisional. La revocación de la resolución provisionalmente ejecutada se produce siempre que se deje sin efecto como consecuencia de haberse estimado el recurso interpuesto frente a ella, aunque la resolución que decida el recurso anule o case tal resolución y, en términos estrictos, no la revoque.

XXXVIII

El primer efecto de la revocación –del que la LEC se ocupa parcialmente, pues sólo se refiere al mismo para el caso de la revocación de condenas pecuniarias–, es la terminación del proceso de ejecución provisional, lo que supone la paralización de las actuaciones ejecutivas que se encuentren pendientes. Para la materialización de este efecto, la ley rituaría ordena al secretario judicial del tribunal que está conociendo del proceso de ejecución provisional que decreta el sobreseimiento de las actuaciones, resolución procesal que deberá adoptar de oficio, sin perjuicio del derecho de la parte interesada de solicitar que se acuerde este sobreseimiento. El segundo y más importante de los efectos de la revocación es la reparación del ejecutado provisional, restauración que, en línea de principio, debería ser plena si lo que se quiere alcanzar es la *restitutio in integrum* del ejecutado provisional. Sin embargo, para concretar el alcance de este efecto la LEC distingue según la naturaleza pecuniaria o no dineraria de la prestación que ha sido dejada sin efecto y, a su vez, establece un tratamiento diferenciado para la revocación total y para la revocación parcial –al menos respecto de la revocación de condenas dinerarias–.

XXXIX

Tratándose de la *revocación de condenas dinerarias*, la LEC distingue entre revocación total y revocación parcial a fin de concretar el alcance de la reparación del ejecutado. En cualquier caso, el efecto de la revocación no se traduce en deshacer los actos de ejecución que se hayan podido realizar, sino en reparar al ejecutado mediante la restitución de las cantidades que haya entregado al ejecutante y en compensarle el detrimento patrimonial que le haya ocasionado el proceso de ejecución provisional. En los casos de *revocación total* de sentencias de condena dineraria, la LEC asegura la reparación plena del ejecutado provisional, pues el ejecutante deberá restituir la cantidad que hubiera percibido –en nuestra opinión, incrementada con el interés legal–, reintegrar las costas del proceso de ejecución provisional y resarcir los daños y perjuicios que la efectividad de la resolución no firme le hubiese ocasionado al ejecutado. En cambio, en los supuestos de *revocación parcial*, la LEC sólo establece que el ejecutante provisional deberá restituir la diferencia entre la cantidad percibida y la que resulte de la confirmación parcial, incrementada de acuerdo con el interés legal. No es, por tanto, plena la reparación del ejecutado provisional. No obstante, realizando una interpretación teleológica de las normas que regulan la revocación, se puede concluir que la reparación también incluye las costas del proceso de ejecución provisional y el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por el ejecutado, en proporción a la cantidad que ha sido revocada. Como quiera que se trata de una solución discutible, nos parece que este aspecto de la regulación de la revocación exige de una reforma legislativa que equipare la reparación en caso de revocación parcial de una condena dineraria al alcance de la reparación en las hipótesis de revocación total, fundada en razones de equidad y de igualdad ante la ley.

XL

Tratándose de la *revocación de condenas no dineraria*, la LEC se ocupa de la revocación de la condenas a entregar un bien determinado y de la revocación de la condena a realizar una determinada prestación, olvidando regular el resto de las hipótesis de condenas no dinerarias y la posibilidad de revocación parcial, omisiones que resultan censurables. En todo caso, estas reglas sólo son de aplicación en los supuestos en que la condena no dineraria se haya ejecutado provisionalmente *in natura*, puesto que si la prestación se cumplió por equivalente, resultan aplicables las reglas previstas para la revocación de condenas dinerarias. Con independencia de la específica

naturaleza de la prestación, la revocación de condenas no dinerarias comporta que el ejecutante provisional debe retrotraer las actuaciones ejecutivas realizadas, lo que se traducirá en el deber de restituir al ejecutado provisional los bienes que le hubiera entregado –con sus rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de la utilización del bien–, y, de no ser posible la restitución, el valor económico de dichos bienes; así como tendrá que deshacer lo hecho e indemnizar los daños y perjuicios que la ejecución provisional le hubiera ocasionado al ejecutado.

XLI

Para la *reclamación de las cantidades* a que tiene derecho el ejecutado provisional como consecuencia de la revocación –tanto de condenas dinerarias como de condenas no dinerarias–, la LEC señala que procederá la vía de apremio o la vía de ejecución. Ello quiere decir que el ejecutado podrá solicitar la restitución dentro del mismo proceso de ejecución, sin necesidad de acudir a un proceso declarativo, incluso en los supuestos en que la sentencia revocatoria no sea firme, en cuyo caso la reversión será provisional y la permanencia de sus efectos dependerá del resultado del recurso presentado frente a la sentencia revocatoria. Si lo que se reclama es el resarcimiento de daños y perjuicios, procede su liquidación según las reglas generales. En este proceso de ejecución –ordinario o provisional– el ejecutado provisional pasa a ocupar la posición de ejecutante y el ejecutante provisional la de ejecutado. Este último podrá oponerse a la ejecución de acuerdo con los motivos de oposición previstos para la ejecución ordinaria, pero si la resolución revocatoria fue impugnada, podrá oponerse también a través de las causas de oposición propias de la ejecución provisional.

XLII

En definitiva, el procedimiento de reversión constituye una clara manifestación de la preocupación del legislador por el interés del sujeto pasivo de la ejecución provisional, y representa una *respuesta equilibrada* a los intereses en juego. Por una parte, se facilita el acceso a la ejecución provisional al no exigir caución para su despacho; por la otra, se regula un mecanismo específico de oposición a la ejecución provisional ya despachada, y se autoriza la reversión de las actuaciones ejecutivas realizadas en caso de revocación dentro del mismo proceso de ejecución, sin necesidad de esperar que la sentencia revocatoria adquiera firmeza.

XLIII

El proceso de ejecución provisional, como toda actividad jurisdiccional, genera unos gastos que deben ser cubiertos por las partes durante el desarrollo del mismo, sin perjuicio del deber de pagar las *costas* que se puede imponer a una de las partes al finalizar el procedimiento. La LEC no regula directamente esta materia en sede de ejecución provisional, pero al remitirse en bloque a las normas que regulan la ejecución ordinaria, se deben aplicar las reglas allí contenidas sobre el pago de las costas. Como consecuencia de ello, las costas del proceso de ejecución provisional son de cargo del ejecutado provisional, sin necesidad de imposición expresa por el tribunal. Vigente este sistema de imposición legal de las costas de la ejecución, el ejecutante podrá reclamar el pago de las mismas y, consecuentemente, pedir su tasación, una vez concluido el proceso de ejecución provisional, con independencia de que la resolución que se ha ejecutado provisionalmente sea firme o no, pues el deber del ejecutado provisional de pagar las costas arranca de la ley y no de dicha resolución. Respecto de las *costas generadas en el incidente de oposición* a la ejecución, no rige el sistema de imposición legal, toda vez que se requiere de un pronunciamiento expreso sobre el pago de las costas. Este pronunciamiento –que debe ser motivado– se acordará de acuerdo con el criterio del vencimiento: desestimada la oposición a la ejecución provisional en su totalidad, se impondrán las costas al ejecutado; estimada la oposición a la ejecución provisional en su conjunto o a actuaciones ejecutivas concretas, se impondrán las costas al ejecutante. La falta de pronunciamiento expreso sobre las costas impide que las partes puedan reclamar su pago y solicitar su tasación.

XLIV

En los casos de ejecución provisional de condenas dinerarias en que el ejecutado provisional pone a disposición del tribunal para su entrega al ejecutante la cantidad a que hubiere sido condenado, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias atienden al momento en que se realiza esta consignación para determinar si corresponde o no la imposición de las costas de la ejecución provisional al ejecutado, concluyendo que no procede corresponde hacer cargo al ejecutado de las costas de este proceso si la consignación se produce antes del despacho de la ejecución provisional o dentro del plazo de 20 días contados desde la notificación de la resolución que acuerda la ejecución provisional. Esta tesis interpretativa parte de supuestos que no compartimos: que las sentencias judiciales no firmes sólo son obligatorias desde que se despacha la

ejecución provisional, y que resulta aplicable a la ejecución provisional el plazo de espera o de gracia previsto para la ejecución ordinaria. En nuestra opinión, las resoluciones definitivas que no son firmes tienen eficacia desde su promulgación y notificación, por lo que su contenido es tan obligatorio para las partes como lo es el de una sentencia firme. En consecuencia, despachada la ejecución provisional de una resolución, la consignación que puede realizar el ejecutado provisional con el objeto de suspender el citado procedimiento iniciado en su contra debe incluir las costas –por reducidas que sean– que se hayan generado en este proceso. La única alternativa que tiene el condenado por una resolución susceptible de ser ejecutada provisionalmente para evitar el pago de las costas que en dicho proceso se generen –como consecuencia de la vigencia del sistema de imposición legal de las costas al ejecutado–, es consignar la cantidad a la que ha sido condenado antes de que se despache la ejecución provisional en su contra, lo que equivale a cumplir voluntariamente la resolución que va a impugnar, actitud que en ningún caso resulta incompatible con el ejercicio del derecho a recurrir una resolución judicial que le causa agravio.

XLV

En conclusión final y de acuerdo con todo lo expuesto, el modelo de ejecución provisional de la LEC constituye una sistematización razonable y, en general, adecuada –salvo algunas deficiencias u omisiones–, para hacer frente a los riesgos vinculados con el transcurso del tiempo que precisa todo proceso para una tutela judicial de calidad, y representa una respuesta equilibrada a los diversos intereses en juego en el debate entre privilegiar el derecho a la ejecución o el derecho al recurso.

JURISPRUDENCIA

Juzgados de Primera Instancia

AJPI Bilbao (núm. 10), de 30 de abril de 2004 (JUR\2004\129504).
AJPI Cantabria (núm. 1), de 13 de julio de 2001 (AC\2001\1291).
AJPI Madrid (núm. 50), de 20 de diciembre de 2001 (AC\2002\109).
AJPI Madrid (núm. 73), de 30 de octubre de 2012 (JUR\2013\234296).
AJPI Murcia (núm. 8), de 26 de octubre de 2010 (AC\2011\639).
AJPI Santa Cruz de Tenerife (núm. 3), de 11 de julio de 2001 (AC\2001\1390).
AJPI Santander (núm. 1), de 16 de mayo de 2001 (AC\2001\1152).
AJPI Santander (núm. 3), de 18 de octubre de 2003 (AC\2003\1740).
AJPI Valencia (núm. 5), de 4 de octubre de 2000 (JUR\2001\273375).

Audiencias Provinciales

AAP Albacete (Secc. 1ª), de 17 de octubre de 2002 (JUR\2002\284400).
AAP Albacete (Secc. 1ª), de 3 de mayo de 2011 (ROJ AAP AB 54/2011).
AAP Alicante (Secc. 5ª), de 6 de junio de 2007 (JUR\2007\259509).
AAP Almería (Secc. 2ª), de 29 de marzo de 2012 (vLex-381639146).
AAP Asturias (Secc. 6ª), de 26 de julio de 2002 (AC\2002\2306).
AAP Asturias (Secc. 7ª), de 16 de octubre de 2003 (JUR\2004\48807).
AAP Asturias (Secc. 1ª), de 20 de abril de 2006 (JUR\2006\139930).
AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 24 de abril de 2002 (JUR\2002\156278).
AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 27 de enero de 2003 (JUR\2003\109630).
AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 3 de noviembre de 2003 (JUR\2004\4393).
AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 28 de enero de 2004 (JUR\2004\63037).
AAP Barcelona (Secc. 12ª), de 13 de septiembre de 2004 (JUR\2004\292967).

AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 17 de noviembre de 2004 (JUR\2005\25843).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de mayo de 2005 (JUR\2005\170490).

AAP Barcelona (Secc. 19ª), de 13 de junio de 2005 (JUR\2005\176536).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 23 de junio de 2005 (JUR\2006\233021).

AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 28 de julio de 2005 (JUR\2006\38128).

AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 16 de febrero de 2006 (JUR\2006\227714).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 2 de mayo de 2006 (JUR\2006\272296).

AAP Barcelona (Secc. 12ª), de 12 de junio de 2006 (JUR\2007\10953).

AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 19 de octubre de 2006 (JUR\2007\195906).

AAP Barcelona (Secc. 18ª), de 24 de enero de 2007 (JUR\2007\219961).

AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 28 de junio de 2007 (JUR\2007\276944).

AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 8 de febrero de 2007 (JUR\2007\121136).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 9 de octubre de 2007 (JUR\2008\13162).

AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 24 de abril de 2008 (JUR\2008\318001).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 25 de abril de 2008 (ROJ AAP B 2418/2008).

AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 28 de abril de 2010 (ROJ AAP B 3675/2010).

AAP Barcelona (Secc. 14ª), de 4 de noviembre de 2010 (ROJ AAP B 5564/2010).

AAP Barcelona (Secc. 13ª), de 14 de diciembre de 2010 (ROJ AAP B 6068/2010).

AAP Barcelona (Secc. 15ª), de 30 de diciembre de 2010 (ROJ AAP B 7355/2010).

AAP Barcelona (Secc. 11ª), de 11 de enero de 2011 (ROJ AAP B 187/2011).

AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 21 de marzo de 2011 (ROJ AAP B 2601/2011).

AAP Barcelona (Secc. 17ª), de 2 de diciembre de 2011 (ROJ AAP B 8060/2011).

AAP Barcelona (Secc. 4ª), de 15 de junio de 2012 (ROJ AAP B 6806/2012).

AAP Bilbao (Secc. 3ª), de 23 de febrero de 2012 (ROJ AAP BI 407/2012).

AAP Burgos (Secc. 2ª), de 13 de noviembre de 2001 (AC\2002\114).

AAP Burgos (Secc. 2ª), de 26 de abril de 2002 (ROJ AAP BU 171/2002).

AAP Burgos (Secc. 3ª), de 30 de julio de 2002 (JUR\2002\233803).

AAP Cáceres (Secc. 1ª), de 21 de julio de 2011 (ROJ AAP CC 388/2011).

AAP Cádiz (Secc. 7ª), de 21 de mayo de 2002 (JUR\2002\222934).

AAP Cádiz (Secc. 2ª), de 23 de marzo de 2007 (JUR\2007\253301).

AAP Cádiz (Secc. 5ª), de 9 de mayo de 2007 (AC\2007\2185).

AAP Cantabria (Secc. 1ª), de 24 de abril de 2001 (JUR\2002\184819).

AAP Castellón (Secc. 2ª), de 3 de junio de 2002 (JUR\2002\209536).

AAP Castellón (Secc. 2ª), de 20 de marzo de 2005 (JUR\2005\131033).

AAP Castellón (Secc. 1ª), de 17 de octubre de 2005 (JUR\2005\273523).

AAP Castellón (Secc. 3ª), de 13 de noviembre de 2006 (JUR\2007\228491).

AAP Castellón (Secc. 1ª), de 2 de febrero de 2007 (JUR\2007\239380).

AAP Castellón (Secc. 1ª), de 15 de octubre de 2010 (JUR\2011\23190).

AAP Castellón (Secc. 3ª), de 20 de julio de 2011 (ROJ AAP CS 662/2011).

AAP Castellón (Secc. 1ª), de 15 de octubre de 2012 (vLex-374102010).

AAP Castellón (Secc. 3ª), de 17 de abril de 2015 (vLex-578463214).

AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 10 de diciembre de 2003 (JUR\2004\51326).

AAP Ciudad Real (Secc. 1ª), de 23 de junio de 2004 (JUR\2004\279058).

AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 30 de noviembre de 2004 (JUR\2005\5739).

AAP Ciudad Real (Secc. 2ª), de 19 de junio de 2006 (JUR\2006\230058).

AAP Girona (Secc. 2ª), de 7 de abril de 2003 (AC\2003\1430).

AAP Girona (Secc. 2ª), de 27 de septiembre de 2006 (JUR\2007\184310).

AAP Granada (Secc. 4ª), de 6 de mayo de 2003 (JUR\2003\222619).

AAP Granada (Secc. 3ª), de 31 de mayo de 2005 (JUR\2005\155086).

AAP Granada (Secc. 5ª), de 7 de julio de 2006 (AC\2006\2074).

AAP Granada (Secc. 3ª), de 27 de febrero de 2008 (JUR\2008\332894).

AAP Granada (Secc. 3ª), de 28 de octubre de 2011 (ROJ AAP GR 552/2011).

AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 1 de diciembre de 2004 (JUR\2005\5696).

AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 24 de febrero de 2005 (JUR\2005\91058).

AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2006\12881).

AAP Guadalajara (Secc. 1ª), de 4 de julio de 2007 (JUR\2007\308527).

AAP Huelva (Secc. 2ª), de 2 de abril de 2002 (AC\2002\759).

AAP Huelva (Secc. 3ª), de 5 de febrero de 2008 (JUR\2008\227825).

AAP Jaén (Secc. 1ª), de 22 de noviembre de 2001 (JUR\2002\21863).

AAP Madrid (Secc. 10ª), de 26 de enero de 2002 (JUR\2003\40542).

AAP Madrid (Secc. 18ª), de 3 de abril de 2002 (JUR\2003\46407).

AAP Madrid (Secc. 22ª), de 26 de abril de 2002 (JUR\2002\221824).

AAP Madrid (Secc. 9ª), de 17 de mayo de 2002 (JUR\2003\47084).

AAP Madrid (Secc. 22ª), de 5 de julio de 2002 (JUR\2002\260809).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48978).

AAP Madrid (Secc. 10ª), de 14 de septiembre de 2002 (JUR\2003\48999).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 24 de diciembre de 2002 (AC\2003\393).

AAP Madrid (Secc. 22ª), de 10 de junio de 2003 (JUR\2003\190071).

AAP Madrid (Secc. 14ª), de 14 de julio de 2003 (JUR\2003\249623).

AAP Madrid (Secc. 20ª), de 18 de febrero de 2004 (ROJ AAP M 1280/2004).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 11 de marzo de 2004 (AC\2004\531).

AAP Madrid (Secc. 12ª), de 27 de abril de 2004 (JUR\2005\11589).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 20 de julio de 2004 (JUR\2004\243676).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 27 de julio de 2004 (JUR\2005\19849).

AAP Madrid (Secc. 21ª), de 17 de noviembre de 2004 (JUR\2005\36158).

AAP Madrid (Secc. 10ª), de 25 de enero de 2005 (JUR\2005\110292).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 17 de marzo de 2005 (JUR\2005\107709).

AAP Madrid (Secc. 9ª), de 4 de abril de 2005 (JUR\2005\106843).

AAP Madrid (Secc. 12ª), de 1 de junio de 2005 (AC\2005\1242).

AAP Madrid (Secc. 19ª), de 27 de abril de 2005 (JUR\2005\159944).

AAP Madrid (Secc. 9ª), de 28 de abril de 2005 (JUR\2005\157476).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 5 de mayo de 2005 (JUR\2005\159843).

AAP Madrid (Secc. 9ª), de 27 de mayo de 2005 (JUR\2005\155238).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 6 de junio de 2005 (JUR\2005\168767).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 16 de junio de 2005 (JUR\2005\173138).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 27 de septiembre de 2005 (JUR\2005\239804).

AAP Madrid (Secc. 14ª), de 29 de septiembre de 2005 (AC\2005\1849).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de enero de 2006 (JUR\2006\61264).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 12 de enero de 2006 (AC\2006\187).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 25 de enero de 2006 (JUR\2006\150279).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 23 de febrero de 2006 (JUR\2006\127507).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 28 de abril de 2006 (ROJ AAP M 5380/2006).

AAP Madrid (Secc. 12ª), de 17 de mayo de 2006 (JUR\2006\187882).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 7 de junio de 2006 (JUR\2006\270576).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 8 de septiembre de 2006 (JUR\2007\167484).

AAP Madrid (Secc. 9ª), de 5 de octubre de 2006 (JUR\2006\268031).

AAP Madrid (Secc. 12ª), de 31 de octubre de 2006 (ROJ AAP M 14806/2006).

AAP Madrid (Secc. 11ª), de 18 de diciembre de 2006 (AC\2007\876).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 16 de marzo de 2007 (ROJ AAP M 4937/2007).

AAP Madrid (Secc. 14ª), de 11 de mayo de 2007 (JUR\2007\210588).

AAP Madrid (Secc. 14ª), de 27 de junio de 2007 (JUR\2007\258050).

AAP Madrid (Secc. 20ª), de 7 de febrero de 2008 (ROJ AAP M 1836/2008).

AAP Madrid (Secc. 13ª), de 4 de julio de 2008 (JUR\2008\321305).

AAP Madrid (Secc. 25ª), de 8 de mayo de 2009 (JUR\2010\279303).

AAP Madrid (Secc. 28ª), de 2 de octubre de 2009 (ROJ AAP M 12183/2009).

AAP Madrid (Secc. 20), de 29 de marzo de 2010 (ROJ AAP M 4290/2010).
 AAP Madrid (Secc. 21ª), de 13 de abril de 2010 (ROJ AAP M 5780/2010).
 AAP Madrid (Secc. 8ª), de 22 de abril de 2010 (ROJ AAP M 6304/2010).
 AAP Madrid (Secc. 21ª), de 28 de septiembre de 2010 (JUR\2011\24809).
 AAP Madrid (Secc. 25ª), de 2 de noviembre de 2010 (JUR\2011\37140).
 AAP Madrid (Secc. 21ª), de 14 de marzo de 2011 (ROJ AAP M 3432/2011).
 AAP Madrid (Secc. 9ª), de 14 de julio de 2011 (ROJ AAP M 10099/2011).
 AAP Madrid (Secc. 10ª), de 28 de septiembre de 2011 (ROJ AAP M 13512/2011).
 AAP Madrid (Secc. 20ª), de 10 de octubre de 2011 (JUR\2011\433840).
 AAP Madrid (Secc. 9ª), de 10 de noviembre de 2011 (ROJ AAP M 14221/2011).
 AAP Madrid (Secc. 8ª), de 23 de diciembre de 2011 (ROJ AAP M 17851/2011).
 AAP Madrid (Secc. 20ª), de 16 de enero de 2012 (ROJ AAP M 687/2012).
 AAP Madrid (Secc. 19ª), de 31 de enero de 2012 (ROJ AAP M 3887/2012).
 AAP Madrid (Secc. 14ª), de 15 de marzo de 2012 (ROJ AAP M 5607/2012).
 AAP Madrid (Secc. 28ª), de 11 de mayo de 2012 (vLex-400884602).
 AAP Madrid (Secc. 10ª), de 11 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11627/2012).
 AAP Madrid (Secc. 21ª), de 12 de julio de 2012 (ROJ AAP M 9479/2012).
 AAP Madrid (Secc. 22ª), de 17 de julio de 2012 (ROJ AAP M 11506/2012).
 AAP Madrid (Secc. 25ª), de 16 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16980/2012).
 AAP Madrid (Secc. 8ª), de 29 de octubre de 2012 (ROJ AAP M 16610/2012).
 AAP Madrid (Secc. 22ª), de 18 de enero de 2013 (ROJ AAP M 1316/2013).
 AAP Málaga (Secc. 6ª), de 9 de octubre de 2002 (JUR\2002\283638).
 AAP Málaga (Secc. 6ª), de 31 de diciembre de 2002 (AC\2003\1293).
 AAP Málaga (Secc. 5ª), de 5 de mayo de 2003 (JUR\2003\232120).
 AAP Málaga (Secc. 6ª), de 15 de mayo de 2003 (AC\2003\992).
 AAP Murcia (Secc. 3ª), de 8 de noviembre de 2007 (JUR\2008\77653).
 AAP Murcia (Secc. 5ª), de 6 de octubre de 2009 (JUR\2009\459680).
 AAP Murcia (Secc. 5ª), de 14 de febrero de 2012 (JUR\2012\113971).
 AAP La Rioja, de 31 de julio de 2002 (JUR\2002\254117).
 AAP La Rioja, de 11 de octubre de 2002 (AC\2002\2338).
 AAP La Rioja (Secc. 1ª), de 6 de mayo de 2011 (JUR\2011\281312).
 AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 1 de noviembre de 2002 (JUR\2003\81048).
 AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 17 de noviembre de 2003 (JUR\2004\27498).

AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª), de 18 de octubre de 2004 (JUR\2004\303143).

AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 3ª), de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\132336).

AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 4ª), de 3 de mayo de 2006 (AC\2006\1236).

AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 11 de marzo de 2008 (JUR\2008\164631).

AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 5ª), de 18 de febrero de 2010 (ROJ AAP GC 1555/2010).

AAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 4ª), de 14 de abril de 2010 (JUR\2011\11406).

AAP Las Palmas de Gran Canarias (Secc. 5ª), de 22 de julio de 2010 (JUR\2011\6906).

AAP León (Secc. 1ª), de 4 de marzo de 2010 (JUR\2010\165696).

AAP Lleida (Secc. 2ª), de 2 de febrero de 2006 (JUR\2006\138068).

AAP Orense (Secc. 1ª), de 12 de febrero de 2015 (vLex-583698678).

AAP Palma de Mallorca (Secc. 3ª), de 30 de octubre de 2002 (JUR\2003\71055).

AAP Palma de Mallorca (Secc. 5ª), de 20 de enero de 2003 (AC\2003\2305).

AAP Palma de Mallorca (Secc.3ª), de 17 de febrero de 2009 (vLex-57277433).

AAP Palma de Mallorca (Secc. 5ª), de 25 de febrero de 2011 (ROJ AAP IB 132/2011).

AAP Pontevedra (Secc. 3ª), de 6 de octubre de 2006 (ROJ AAP PO 433/2006).

AAP Pontevedra (Secc. 1ª), de 10 de febrero de 2012 (AC\2012\1762).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 10 de junio de 2004 (JUR\2004\198071).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 20 de marzo de 2007 (JUR\2007\148773).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 15 de abril de 2008 (JUR\2008\188381).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª), de 14 de junio de 2011 (ROJ AAP TF 635/2011).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 16 de junio de 2011 (ROJ AAP TF 921/2011).

AAP Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª), de 11 de abril de 2016 (vLex-651489257).

AAP Sevilla (Secc. 2ª), de 16 de octubre de 2009 (vLex-234174730).

AAP Tarragona (no Barcelona, como señala la base de datos utilizada) (Secc. 2ª), de 9 de enero de 2002 (JUR\2002\70708).

AAP Tarragona (Secc. 2ª), de 4 de diciembre de 2002 (JUR\66826).

AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 16 de mayo de 2003 (JUR\2003\240154).

AAP Tarragona (Secc. 1ª), de 12 de junio de 2003 (JUR\2004\40422).

AAP Tarragona (Secc. 4ª), de 23 de diciembre de 2004 (JUR\2005\104822).

AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 11 de mayo de 2005 (JUR\2005\170208).

AAP Tarragona (Secc. 3ª), de 2 de marzo de 2006 (JUR\2006\232103).

AAP Teruel (Secc. 1ª), de 7 de junio de 2005 (JUR\2005\154876).

AAP Valencia (Secc. 6ª), de 16 de octubre de 2001 (AC\2002\506).

AAP Valencia (Secc. 6ª), de 17 de mayo de 2003 (JUR\2003\172050).

AAP Valencia (Secc. 11ª), de 29 de julio de 2004 (JUR\2005\1279).

AAP Valencia (Secc. 7ª), de 4 de abril de 2007 (AC\2007\1188).

AAP Valencia (Secc. 11ª), de 28 de mayo de 2007 (JUR\2007\260279).

AAP Valencia (Secc. 7ª), de 11 de septiembre de 2009 (JUR\2009\498772).

AAP Valencia (Secc. 6ª), de 20 de mayo de 2014 (ROJ AAP V 138/2014).

AAP Valladolid (Secc. 3ª), de 26 de noviembre de 2001 (JUR\2002\22389).

AAP Valladolid (Secc. 1ª), de 22 de abril de 2002 (JUR\2002\155898).

AAP Vitoria (Secc. 1ª), de 30 de mayo de 2013 (ROJ AAP VI 1/2013).

AAP Vizcaya (Secc. 5ª), de 10 de octubre de 2002 (JUR\2003\23447).

AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 3 de febrero de 2005 (JUR\2005\97897).

AAP Vizcaya (Secc. 3ª), de 27 de julio de 2006 (JUR\2007\70878).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 28 de octubre de 2002 (JUR\2002\275042).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 20 de noviembre de 2002 (AC\2002\2357).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 19 de diciembre de 2002 (JUR\2003\34617).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 24 de febrero de 2003 (AC\2003\524).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 18 de septiembre de 2003 (JUR\2003\230027).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 18 de noviembre de 2003 (JUR\2003\277696).

AAP Zaragoza (Secc. 2ª), de 14 de junio de 2005 (JUR\2005\176417).

AAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 19 de enero de 2007 (JUR\2007\236136).

AAP Zaragoza (Secc. 5ª), de 25 de junio de 2007 (JUR\2007\299970).

SAP Albacete (Secc. 1ª), de 2 de noviembre de 2004 (JUR\2005\7470).

SAP Asturias (Secc. 6ª), de 13 de octubre de 2015 (vLex-587291198).

SAP Barcelona (Secc. 14ª), de 14 de marzo de 2005 (JUR\2005\115956).

SAP Barcelona (Secc. 16ª), de 8 de marzo de 2011 (ROJ SAP B 2154/2011).

SAP Barcelona (Secc. 14ª), de 31 de mayo de 2012 (ROJ SAP B 5066/2012).

SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 3 de julio de 2013 (JUR\2013\341482).

SAP Barcelona (Secc. 15ª), de 18 de septiembre de 2013 (JUR\2013\341653).

SAP Barcelona (Secc. 17ª), de 4 de diciembre de 2013 (ROJ SAP B 16365/2013).

SAP Castellón (Secc. 1ª), de 7 de junio de 2011 (ROJ SAP CS 797/2011).

SAP Córdoba (Secc. 2ª), de 12 de junio de 2001 (JUR\2001\237543).

SAP Girona (Secc. 1ª), de 14 de diciembre de 2005 (JUR\2006\56488).

SAP Jaén (Secc. 2ª), de 19 de septiembre de 2011 (JUR\2011\430623).

SAP La Coruña (Secc. 4ª), de 5 de noviembre de 2007 (JUR\2008\67765).

SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 2 de junio de 2009 (ROJ SAP C 1743/2009).

SAP La Coruña (Secc. 5ª), de 24 de junio de 2011 (ROJ SAP C 2043/2011).

SAP Las Palmas de Gran Canaria (Secc. 3ª), de 30 de enero de 2014 (ROJ SAP GC 913/2014).

SAP Lleida (Secc. 2ª), de 20 de diciembre de 2010 (ROJ SAP L 700/2010).

SAP Lleida (Secc. 2ª), de 13 de febrero de 2015 (vLex-568455482).

SAP Madrid (Secc. 10ª), de 16 de noviembre de 2004 (JUR\2005\46525).

SAP Madrid (Secc. 13ª), de 13 de abril de 2007 (ROJ SAP M 4419/2007).

SAP Madrid (Secc. 18ª), de 30 de mayo de 2007 (JUR\2007\260015).

SAP Madrid (Secc. 12ª), de 19 de diciembre de 2007 (JUR\2008\126624).

SAP Madrid (Secc. 20ª), de 11 de noviembre de 2009 (JUR\2010\37771).

SAP Madrid (Secc. 13ª), de 5 de febrero de 2010 (ROJ SAP M 3750/2010).

SAP Madrid (Secc. 14ª), de 22 de junio de 2010 (ROJ SAP M 9679/2010).

SAP Madrid (Secc. 11ª), de 8 de octubre de 2010 (ROJ SAP M 14424/2010).

SAP Madrid (Secc. 18ª), de 2 de noviembre de 2010 (ROJ SAP M 16984/2010).

SAP Madrid (Secc. 12ª), de 6 de abril de 2011 (ROJ SAP M 6377/2011).

SAP Madrid (Secc. 19ª), de 22 de mayo de 2012 (ROJ SAP M 11737/2012).

SAP Málaga (Secc. 5ª), de 2 de diciembre de 2004 (JUR\2005\147482).

SAP Málaga (Secc. 4ª), de 14 de octubre de 2008 (ROJ SAP MA 1621/2008).

SAP Málaga (Secc. 5ª), de 20 de octubre de 2011 (ROJ SAP MA 3384/2011).

SAP Murcia (Secc. 2ª), de 22 de diciembre de 2001 (JUR\2002\46981).

SAP Murcia (Secc. 1ª), de 30 de abril de 2003 (JUR\2003\239323).

SAP Murcia (Secc. 1ª), de 15 de mayo de 2007 (JUR\2007\304283).

SAP Murcia (Secc. 5ª), de 22 de marzo de 2011 (ROJ SAP MU 697/2011).

SAP Murcia (Secc. 4ª), de 2 de junio de 2011 (JUR\2011\237380).

SAP Oviedo (Secc. 5ª), de 15 de diciembre de 2009 (ROJ SAP O 3167/2009).

SAP Palma de Mallorca (Secc. 3ª), de 4 de noviembre de 2010 (ROJ SAP IB 2189/2010).

SAP Santiago de Compostela (Secc. 6ª), de 27 de enero de 2011 (ROJ SAP C 183/2011).

SAP Vitoria (Secc. 1ª), de 9 de junio de 2009 (ROJ SAP VI 439/2009).

SAP Zamora (Secc. Única), de 22 de enero de 2003 (JUR\2003\67268).

SAP Zamora (Secc. 1ª), de 21 de diciembre de 2009 (ROJ SAP ZA 491/2009).

SAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 4 de diciembre de 2009 (ROJ SAP Z 3257/2009).

SAP Zaragoza (Secc. 4ª), de 22 de octubre de 2010 (ROJ SAP Z 2628/2010).

Tribunal Supremo

ATS (Sala 1ª, de lo Civil), de 5 de diciembre de 2008 (RJ\2008\8004).

ATS (Sala 1ª, de lo Civil), de 15 de abril de 2015 (vLex-594181746).

STS (Sala de lo Civil), de 14 de noviembre de 2002 (RJ\2002\9923).

STS (Sala Especial Art. 61 LOPJ), de 28 de septiembre de 2011 (vLex-327822635).

STS (Sala de lo Civil), de 24 de octubre de 2013 (ROJ STS 5068/2013).

Tribunal Constitucional

ATC 767/1986, de 8 de octubre (f.j. 2º).

ATC 418/1987, de 1 de abril (f.j. 2º).

STC 80/1990, de 26 de abril (f.j. 2º).

STC 171/1991, de 16 de septiembre (f.j. 3º).

STC 198/1994, de 4 de julio (f.j. 3º).

STC 69/1996, de 18 de abril (f.j. 6º).

STC 87/1996, de 21 de mayo (f.j. 3º).

STC 105/1997, de 2 de junio (f.j. 2º).

STC 191/2000, de 13 de julio (f.j. 8º).

STC 197/2000, de 24 de julio (f.j. 2º).

STC 266/2000, de 13 de noviembre (f.j. 4º).

STC 83/2001, de 26 de marzo (f.j. 4º).

STC 5/2003, de 20 de enero (f.j. 5º).

STC 312/2006, de 8 de noviembre (f.j. 4º).

STC 120/2007, de 21 de mayo (f.j. 3º).

STC 22/2008, de 31 de enero (f.j. 4º).

STC 38/2016, de 3 de marzo (f.j. 7º).

BIBLIOGRAFÍA

- ACHÓN BRUÑÉN, M., «La impugnación de la tasación de costas: soluciones a problemas que la Ley silencia», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 2007, pp. 1924-1941.
- «Despacho de ejecución a favor o contra quien no figura en el título ejecutivo», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 3-4, 2004, pp. 183-226.
- «Problemas que plantea la aplicación del plazo de espera para despachar ejecución: interpretación práctica del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, núm. 7223, 2009.
- «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (I)», en *Diario La Ley*, núm. 6825, 2007.
- «La oposición a la ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas: soluciones a problemas que la ley silencia (y II)», en *Diario La Ley*, núm. 6826, 2007.
- «Cuestiones prácticas sobre la ejecución ordinaria o provisional de sentencias de condena no dineraria», en *Boletín del Colegio de Registradores de España*, núm. 115, 2005, pp. 1189-1211.
- «Comentario crítico de las modificaciones introducidas en el procedimiento de ejecución hipotecaria por la Ley 19/2015, de 13 de julio», en *Diario La Ley*, núm. 8619, 2015.
- «La reforma de las subastas judiciales por las Leyes 19/2015, de 13 de julio y 42/2015, de 5 de octubre: problemas que se solventa y nuevos que se generan», en *Diario La Ley*, núm. 8644, 2015.
- «Suspensión del proceso de ejecución civil: problemática a la luz de las últimas reformas procesales», en *Diario La Ley*, núm. 7379, 2010.
- «El arduo problema de la revocación de las sentencias ejecutadas provisionalmente», en *Actualidad Civil*, núm. 6, 2008.
- AGUILERA MORALES, M., «Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 7, 2000, pp. 789-826.
- AIKIN ARALUCE, S., *El recurso de apelación en el derecho castellano*, Reus, Madrid, 1982.

- ALEGRET BURGUÉS, M., «La ejecución provisional en la nueva LEC 1/2000», en LÓPEZ LÓPEZ, E. y ALEGRET BURGUÉS, M. (Directores), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia*, Estudios de Derecho Judicial, 44 – 2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.
- «La ejecución provisional en la LEC 1/2000 desde el punto de vista de su ámbito objetivo y de la oposición», en *Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana*, núm. 9, 2004, pp. 15-32.
- ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO, F., «Tasas judiciales: entre principio de proporcionalidad y política de derechos fundamentales», en *Revista española de derecho constitucional*, núm. 100, 2014, pp. 221-242.
- ARANGÜEÑA FANEGO, C., «Ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.
- ARÉVALO NIETO, P., «La ejecución provisional de la condena en costas», en *Actualidad Civil*, núm. 14, 2006, pp. 1653-1669.
- ARMENTA DEU, T., *La ejecución provisional*, La Ley, Madrid, 2000.
- *Lecciones de Derecho Procesal Civil. Proceso de Declaración, Proceso de Ejecución y Procesos Especiales*, Marcial Pons, 7ª edición, Madrid, 2013.
- *Acciones colectivas: Reconocimiento, cosa juzgada y ejecución*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- ARTACHO MARTÍN-LAGOS, M., «La controvertida firmeza del laudo», en *Diario La Ley*, núm. 6673, 2007.
- ASENCIO MELLADO, J., *Derecho Procesal Civil*, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2012.
- (Coordinador), *Ley de Enjuiciamiento Civil comentada y con jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2013.
- «Ejecución provisional. Las costas», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- BACHMAIER WINTER, L., «La tutela de los derechos e intereses colectivos de consumidores y usuarios en el proceso civil español», en AVILA ORDÓÑEZ, M. y CORREDORES LEDESMA, M. (Editoras), *Los derechos colectivos. Hacia su efectiva comprensión y protección*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2009.
- «Ejecución provisional de sentencia que anula y ordena eliminar una condición general de la contratación», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 2, 2003, pp. 79-84.
- BACHMAIER WINTER, L. y BANACLOCHE PALAO, J., «Reconocimiento y ejecución (I). Cuestiones generales. Procedimiento para la obtención del reconocimiento y el *exequatur*», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

- BANACLOCHE PALAO, J. y CUBILLO LÓPEZ, I., *Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil*, La Ley, Madrid, 2012.
- BECEÑA GONZÁLEZ, F., «La ejecución procesal civil. Notas para una sistematización en la materia en el Derecho procesal civil español (1920)», en *Justicia*, núm. 1, 2012, pp. 513-560.
- BELLIDO PENADÉS, R., «La protección de los consumidores en el proceso civil», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 23, 2011.
- BENTHAM, J., *Una protesta contra las tasas judiciales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013.
- BERMEJO REALEZ, L., «La eficacia de las decisiones arbitrales: la impugnación y ejecución de laudos», en *Revista Jurídica de Castilla y León*, núm. 29, 2013, pp. 1-16.
- BERNARDO SAN JOSÉ, A., *El juicio verbal de desahucio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2010.
- BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B., «Reformas del Libro III sobre proceso de ejecución y medidas cautelares», en BANACLOCHE PALAO, J. (Coordinador), *Guía práctica de la nueva oficina judicial*, La Ley, Madrid, 2010.
- BESSER VALENZUELA, G., *El proceso de desahucio por falta de pago*, Marcial Pons, Madrid, 2014.
- BONET NAVARRO, J., *Los juicios de desahucio. Especialidades procesales para la recuperación de la posesión de finca arrendada o en situación de precario*, Aranzadi, 4ª edición, Cizur Menor, 2013.
- BOTICARIO GALAVÍS, M., *Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, La Ley, Madrid, 2010.
- «La ejecución provisional civil tras la reforma operada por la Ley 13/2009», en *Práctica de Tribunales*, núm. 81, 2011.
- BUJOSA VADELL, L., «Ejecución procesal y derechos difusos y colectivos: Problemas actuales», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- CAAMIÑA DOMÍNGEZ, C., «La “supresión” del exequátur en el R 2201/2003», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2001, pp. 63-83.
- CABALLOL ANGELATS, L., *La ejecución provisional en el proceso civil*, José María Bosch, Barcelona, 1993.
- «La ejecución provisional en el Anteproyecto de LEC», en PICÓ I JUNOY, J. (Coordinador), *Presente y futuro del proceso civil*, José María Bosch, Barcelona, 1998.
- «La ejecución provisional», en MARTÍN ESPINO, J. (Coordinador), *El proceso civil y su reforma*, Colex, Madrid, 1998.
- «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en la LEC 1/2000», en *Revista Xurídica Galega*, núm. 26, 2000, pp. 295-325.
- «La ejecución provisional de resoluciones judiciales», en ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, J. (Coordinador), *Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, Volumen III*, Difusión Jurídica, Barcelona, 2000.

- «La oposición a la ejecución provisional en la LEC 2000», en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 4, 2001, pp. 221-235.
- CABELLO CONTRERAS, J., «Las costas en la ejecución provisional: estado de la cuestión», en *Diario La Ley*, núm. 8828, 2016.
- CABRERO LÓPEZ, J., «La ejecución del laudo arbitral», en *Práctica de Tribunales*, núm. 107, 2014.
- CACHÓN CADENAS, M., *La ejecución procesal civil*, Atelier, Barcelona, 2014.
- «Un estudio pionero sobre la ejecución procesal civil», en *Justicia*, núm. 1, 2012, pp. 507-512.
- «La ejecución provisional: análisis de algunas cuestiones problemáticas», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, Atelier, Barcelona, 2008.
- «Resoluciones provisionalmente ejecutables y despacho de la ejecución provisional», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- CADARSO PALAU, J., «Notas sobre la ejecución provisional de sentencias en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil», en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 3, 2002, pp. 25-38.
- CALAZA LÓPEZ, S., «Delimitación de la protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen», en *Revista de Derecho UNED*, núm. 9, 2011, pp. 43-59.
- CALVO SAN JOSÉ, M., «La reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de junio y Ley 26/2015, de 28 de julio)», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 4, 2016, pp. 29-39.
- CANO FERNÁNDEZ, S., *Los terceros en el proceso de ejecución*, Marcial Pons, Madrid, 2014.
- CARRASCO DURÁN, M., «La tutela de los derechos fundamentales a través del incidente de nulidad de actuaciones», en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 95, 2012, pp. 65-93.
- CARRERAS MARAÑA, J., «El régimen transitorio en materia de ejecución: el primer problema práctico de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *LEC Forum*, núm. 4, 2001, pp. 30-46.
- «Casuística sobre la caución en la ejecución forzosa y provisional», en *Práctica de Tribunales*, núm. 30, 2006, pp. 5-17.
- CAVANI BRAIN, R., «Ejecución inmediata de la sentencia. Algunas precisiones conceptuales», en *Diálogo con la Jurisprudencia*, núm. 184, 2014, pp. 123-125.
- CEDEÑO HERNÁN, M., «Consultas: Ejecución provisional de autos», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 3, 2002, pp. 53-54.
- CENIZO GARDUÑO, S., «La ejecución provisional», en SOSPEDRA NAVAS, F. (Coordinador), *Práctica del proceso civil. Tomo I. Volumen tercero. La ejecución forzosa. Procesos especiales*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005.
- CERVANTES BRAVO, I., «Comentarios a la Ley de Arbitraje española (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)», en *Vniversitas*, núm. 115, 2008, pp. 17-47.

- CHASE, O., *Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de controversias en un contexto intercultural*, Marcial Pons, Madrid, 2011.
- CHOZAS ALONSO, J., «La ejecución provisional de sentencias de primera instancia en el proceso civil español», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007.
- «La ejecución provisional de sentencias y la libertad de expresión», en *Revista del Poder Judicial*, núm. 73, 2004, pp. 101-138.
- CORDÓN MORENO, F., *El proceso de ejecución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.
- CORRAL TALCIANI, H., «La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial», en *Revista chilena de derecho*, vol. 34, núm. 1, 2007, pp. 23-40.
- CORTÉS BENDICHO, A. y AMORÓS MARTÍNEZ, A., «La ejecución provisional de las costas», en *El Legajo: Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia*, s/núm., 2004, pp. 14-15.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. y MORENO CATENA, V., *Derecho Procesal Civil. Parte General*, Tirant Lo Blanch, 6ª edición, Valencia, 2012.
- CORVO LÓPEZ, F., «Subastas electrónicas y tramitación electrónica de las inscripciones de nacimiento y defunción», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 4, pp. 237-241.
- CUBILLO LÓPEZ, I., «La ejecución provisional», en GUTIÉRREZ BERLINCHES, A. (Coordinador), *El proceso de ejecución forzosa. Problemas actuales y soluciones jurisprudenciales*, La Ley, Madrid, 2015.
- DAMIÁN MORENO, J., «Aspectos procesales de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ», en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 13, 2005, pp. 27-46.
- «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», en *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 19, 2009, pp. 113-128.
- «La ejecución provisional de sentencias en el proceso civil», en *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 1, 2009.
- DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, R., *Ejecución forzosa en el proceso civil*, Comares, Granada, 2008.
- DE CASTRO ARAGONÉS, J. y FÁBREGAS SABATÉ, X., «Nueva Ley de patentes», en *Diario La Ley*, núm. 8675, 2016.
- DE LA OLIVA SANTOS, A., *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2005.
- *El papel del juez en el proceso civil. Frente a ideología, prudentia iuris*, Aranzadi, Cizur Menor, 2012.
- «El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 26 de diciembre de 1997, y la protección del crédito», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 8-9, 1998, pp. 823-830.
- «El Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, de 30 de octubre de 1998, y la protección del crédito: ejecución provisional y proceso monitorio», en *La Ley*:

- Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 1999, pp. 1641-1648.
- «La ley española 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Orientación para una justicia más eficaz», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007.
 - (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.
- DE LA OLIVA SANTOS, A., DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., y VEGAS TORRES, J., *Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa. Procesos Especiales*, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2005.
- *Curso de Derecho Procesal Civil I. Parte General*, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2016.
 - *Curso de Derecho Procesal Civil II. Parte Especial*, Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª edición, Madrid, 2016.
- DELGADO CASTRO, J., «La historia de la casación civil española: una experiencia que aconseja no avanzar en el modelo de unificación de la doctrina», en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile*, núm. 33, 2009, pp. 345-367.
- DELGADO CRUCES, J., «La ejecución provisional», en SUÁREZ ROBLEDANO, J. (Director), *La ejecución provisional, la ejecución de títulos extrajudiciales y la ejecución de sentencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Cuadernos de Derecho Judicial, XIV – 2001, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003.
- «El despacho de la ejecución provisional: su ámbito según la doctrina de los tribunales», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- DE MIGUEL ASENSIO, P., «Espacio europeo de justicia: evolución y perspectivas en el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones», en *Anuario Español de Derecho internacional privado*, núm. 6, 2006, pp. 441-446.
- DE PRADA RODRÍGUEZ, M. y MARTÍN MARTÍN, R., «El Secretario Judicial en el proceso de ejecución», en *Actualidad Jurídica*, núm. 1, 2014.
- DE ROMÁN PÉREZ, S., «La nueva Ley de Patentes o la actualización de regulación española de las invenciones: en busca de la internacionalización y de la garantía de la seguridad jurídica», en *Diario La Ley*, núm. 8687, 2016.
- DÍAZ MARTÍN, F., «La ejecución provisional de resoluciones judiciales en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 3, 1999, pp. 1980-1988.
- DÍAZ MARTÍNEZ, M., «Ejecución provisional de la sentencia de calificación culpable del concurso», en CACHÓN CADENAS, M. y PICÓ I JUNOY, J. (Coordinadores), *La ejecución civil: problemas actuales*, Atelier, Barcelona, 2008.
- «Ejecución provisional de la sentencia de calificación culpable del concurso», en *Anuario de derecho concursal*, núm. 15, 2008, pp. 187-201.

- DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., «Contribución a la interpretación del régimen general de ejecución provisional de sentencias contenido en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. (Director), *Estudios sobre Derecho Procesal*, Sopec, Madrid, 1996, pp. 1083-1109.
- «De la ejecución provisional de resoluciones», en DE LA OLIVA SANTOS, A., *et al.*, *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Civitas, Madrid, 2001.
- DURÁN SILVA, C., «La caución en la fase de ejecución del proceso civil», en *Práctica de Tribunales*, núm. 95, 2012.
- ESCALER BASCOMPTE, R., *Medidas cautelares y ejecución. ¿Cómo aplicar con eficacia soluciones homogéneas?*, Atelier, Barcelona, 2013.
- *El desahucio por falta de pago*, Atelier, Barcelona, 2006.
- FERNÁNDEZ-BALLESTEROS LÓPEZ, M., *La ejecución forzosa y las medidas cautelares*, Iurgium, Madrid, 2001.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. (Coordinador), *La jurisdicción voluntaria. Una apuesta por la eficacia*, Dykinson, Madrid, 2016.
- FERNÁNDEZ SEIJO, J., «La ejecución de títulos judiciales que llevan aparejado lanzamiento», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- FERREIRO BAAMONDE, X., «El procedimiento de ejecución provisional de resoluciones judiciales en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 2-4, 2001, pp. 289-342.
- FLORES PRADA, I., *El procedimiento de apremio en la ejecución civil*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005.
- FONTESTAD PORTALÉS, L., «La ejecución provisional», en ROBLES GARZÓN, J. (Director-Coordinador), *Conceptos básicos de derecho procesal civil*, Tecnos, 5ª edición, Madrid, 2013.
- FRANCO ARIAS, J., «La ejecución del laudo y particularmente la ejecución provisional, según la nueva Ley de Arbitraje del 2003», en *Anuario de justicia alternativa*, núm. 5, 2004, pp. 175-199.
- GASCÓN INCHAUSTI, F., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 2, 2015, pp. 158-187.
- GARBERÍ LLOBREGAT, J., *El proceso de ejecución forzosa en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Aranzadi, 5ª edición, Cizur Menor, 2013.
- GARCÍA CASAS, J., «La ejecución provisional y la seriedad de la Justicia», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 2-4, 2001, pp. 33-56.
- GARCÍA-MIGUEL GARCÍA-ROSADO, M., «La ejecución provisional de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 451-478.
- GARCÍA PÉREZ, J., «Problemas prácticos derivados de la ejecución provisional de autos y sentencias objeto de recurso de apelación», en *Cuadernos abulenses*, núm. 20, 1993, pp. 57-80.

- GARCÍA-ROSTÁN CALVIN, G., «La revocación de sentencias de primera instancia ejecutadas provisionalmente», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 8-9, 2002, pp. 1498-1505.
- GARCÍA SOLER, E., «La notificación de la subasta judicial al ejecutado no personado», en *Diario La Ley*, núm. 8774, 2016.
- GÁZQUEZ SERRANO, L., «Comentario a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria», en *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, núm. 12, 2016.
- GIDI, A., *Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2004.
- GIBERT FERRAGUT, J., «La ejecución provisional», en *Conclusiones de Seminarios*, núm. 5, 2008, pp. 1-18.
- GIMÉNEZ OLAVARRIAGA, R., «La suspensión de la ejecución del laudo; el artículo 45 de la Ley de Arbitraje (LA)», en *Newsletter Pérez-Llorca*, núm. 1, 2010, pp. 9-11.
- GIMENO SENDRA, V., «Oficina Judicial, tribunales de instancia y agilización procesal (1)», en *Diario La Ley*, núm. 7665, 2011.
- GISBERT GISBERT, A., «La ejecución provisional de la sentencia penal», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2006, pp. 1386-1393.
- GISERMAN LIPONETSKY, L., «La oposición a la ejecución provisional», en *Sepín NET Revista*, núm. 66, 2006, pp. 22-34.
- GÓMEZ MEGÍAS, A., «Aspectos básicos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia», en *Diario La Ley*, núm. 8593, 2015.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, J., *La ejecución civil. Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Dykinson, Madrid, 2002.
- GONZÁLEZ ALONSO, A., «Las tasas judiciales (o sobre la aflicción) desde la perspectiva constitucional», en *RJUAM. Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 27, 2013, pp. 157-182.
- GONZÁLEZ NAVARRO, A., *La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2014.
- GONZÁLEZ PILLADO, E., «Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Arts. 6 a 11», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2004, disponible en http://www.indret.com/pdf/232_es.pdf.
- GONZÁLEZ VELASCO, J., «La ejecución provisional en la LEC de 7 de enero de 2000», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 479-504.
- GUTIÉRREZ BARRENENGOA, A. y LARENA BELDARRAIN, J. (Directores), *El proceso civil. Recursos, ejecución y procesos especiales*, Dykinson, 3ª edición, Madrid, 2010.

- GUASCH FERNÁNDEZ, S., «La ejecución provisional de las costas de primera instancia», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 3-4, 2007, pp. 191-193.
- GUASP DELGADO, J. y ARAGONESES ALONSO, P., *Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte especial. Procesos declarativos y de ejecución*, Aranzadi, 6ª edición, Cizur Menor, 2005.
- GUERRA PÉREZ, M., «Ejecución provisional: no procede la imposición de costas si se consigna en el plazo de 20 días desde la notificación del despacho de ejecución», en *Sepín NET Revista*, núm. 74, 2007, pp. 32-36.
- GUERRERO PALOMARES, S., «La ejecución provisional del pronunciamiento relativo a la guarda y custodia de menores contenido en sentencia definitiva», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 5, 2002, pp. 1478-1480.
- HENRÍQUEZ LARRAZÁBAL, R., «Jurisdicción y ejecución», en *Justicia*, núm. 1, 2014, pp. 369-427.
- HERNÁNDEZ VERGARA, A., «La ejecución provisional en la LEC 1/2000», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 6, 2000, pp. 405-450.
- «Comentarios al Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», en XIOL RÍOS, J. (Coordinador), *Enjuiciamiento Civil: comentarios y jurisprudencia. Tomo III*, Sepin, Madrid, 2008.
- HERRANZ GONZÁLEZ, A., «La ejecución provisional», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2002, pp. 1949-1955.
- HINOJOSA SEGOVIA, R. y CUBILLO LÓPEZ, I., «El arbitraje», en HINOJOSA SEGOVIA, R. (Coordinador), *Sistemas de solución extrajudicial de conflictos*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2006.
- HINOJOSA SEGOVIA, R. y PALOMO VÉLEZ, D., «La apuesta de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española por la revalorización de la importancia del enjuiciamiento de primer grado: la nueva regulación de la ejecución provisional de las sentencias», en *Revista Ius et Praxis*, núm. 2, 2006, pp. 123-162.
- HUERTA GONZÁLEZ, J., «Oposición y suspensión de la ejecución provisional dineraria: luz al final del túnel», en *Diario La Ley*, núm. 8401, 2014.
- HUERTA PÉREZ, L., «Ejecución provisional por ejecutante insolvente», en *Diario La Ley*, núm. 8816, 2016.
- JIMENO BULNES, M., «¿Cabe incorporar como causas de oposición a la ejecución provisional las contempladas de forma general para la ejecución ordinaria (arts. 556 y ss LEC) además de las previstas de forma expresa en el art. 528 LEC?», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 3-4, 2007, pp. 194-196.
- LADRÓN TABUENCA, M., «La sentencia y sus efectos en los procesos sobre consumidores y usuarios (y condiciones generales de la contratación)», en *Estudios sobre consumo*, núm. 71, 2004, pp. 9-20.
- LARENA BELDARRAIN, J., «Consideraciones generales sobre la ejecución provisional en la LEC», en *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 99-100, 2014, pp. 1835-1855.
- LOIS ESTÉVEZ, J., «Sobre el concepto de “naturaleza jurídica”», en *Anuario de filosofía del derecho*, núm. 4, 1956, pp. 159-182.

- LÓPEZ CHOCARRO, I., y DAVÍ NAVARRO, R., «La nueva subasta electrónica: crónica de un vía crucis inexplicable», en *Diario La Ley*, núm. 8711, 2016.
- LORCA NAVARRETE, A., «La ejecución del laudo arbitral en los supuestos en que se ha ejercitado acción de anulación ¿es definitiva o provisional?», en *Diario La Ley*, núm. 6220, 2005.
- MAESTRE CASAS, P., «Reforma del sistema de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 1, 2013, pp. 193-196.
- MAGRO SERVET, V., «Casuística práctica de la acción de anulación del laudo arbitral en la Ley 60/2003», en *Diario La Ley*, núm. 6576, 2006.
- «¿Es posible la ejecución provisional de la condena en costas?», en *LEC Forum*, núm. 33, 2003, pp. 25-35.
 - «Imposición de costas procesales en el trámite de oposición a la ejecución provisional de un fallo civil sin motivación. STC 120/2007, de 21 de mayo de 2007», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 42, 2007, pp. 47-54.
 - «El plazo de espera en la ejecución de resoluciones judiciales (art. 548 LEC)», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 57, 2009, pp. 53-56.
- MAJANO CAÑO, M., «La tutela de los derechos fundamentales en la jurisdicción civil: el procedimiento preferente y sumario», en *Beresit: Revista Interdisciplinar científico-humanista*, núm. 5, 2003, pp. 291-298.
- MANZANARES JIMÉNEZ, D., «Los motivos de oposición a actuaciones ejecutivas de la ejecución provisional», en *Diario La Ley*, núm. 8249, 2014.
- MARCOS FRANCISCO, D., «Las nuevas reformas proyectadas en materia de anulación y ejecución del laudo arbitral», en *Diario La Ley*, núm. 7546, 2011.
- «Nuevas medidas de defensa de los consumidores en materia de acciones colectivas, asistencia jurídica gratuita, costas y tasas judiciales», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2015, disponible en http://www.indret.com/pdf/1181_es.pdf.
- MARÍN LÓPEZ, J., «Las acciones de clase en el derecho español», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2001, disponible en http://www.indret.com/pdf/057_es.pdf.
- MARTÍ MARTÍ, J., «Ejecución de sentencia recurrida por uno solo de los codemandados. ¿Provisional o definitiva?», en *Diario La Ley*, núm. 7308, 2009.
- «Condena en costas en la ejecución provisional de sentencias», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 5, 2005, pp. 984-986.
 - «La ejecución provisional de sentencias en los juicios de desahucio», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 4, 2002, pp. 1939-1941.
- MARTÍN PASTOR, J., «La ejecución provisional y las condenas a emitir una declaración de voluntad», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 49, 2008.

- «Oposición a la ejecución provisional e impugnación de actos ejecutivos de la misma según las normas de la ejecución ordinaria o definitiva», en *Revista del Poder Judicial*, núm. 88, 2009, pp. 177-240.
- MARTÍNEZ DE SANTOS, A., «Un proceso de ejecución civil necesitado de reforma», en *Diario La Ley*, núm. 7149, 2009.
- «Formas de terminación del proceso de ejecución civil», en *Diario La Ley*, núm. 6405, 2006.
- «La fecha final del devengo de intereses en la ejecución provisional», en *Practica de Tribunales*, núm. 90, 2012.
- «El sobreseimiento “automático” de la ejecución provisional», en *Práctica de Tribunales*, núm. 87, 2011.
- MARTÍNEZ PÉREZ, M., «Principales novedades legislativas introducidas con motivo de la promulgación de la nueva Ley de Patentes española», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 2, 2015, pp. 19-32.
- MITIDIERO, D., *Anticipación de tutela. De la tutela cautelar a la técnica anticipatoria*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- MONTERO AROCA, J., «Problemas generales de la ejecución forzosa», en MORENO CATENA, V. (Director), *La ejecución civil*, Estudios de Derecho Judicial, 53 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- MONTERO AROCA, J. y FLORS MATÍES, J., *Tratado de proceso de ejecución civil, Tomo I*, Tirant Lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2013.
- MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J., y BARONA VILAR, S., *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, Tirant Lo Blanch, 20ª edición, Valencia, 2012.
- MONTERO AROCA, J., *et al.*, *Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil*, Tirant Lo Blanch, 20ª edición, Valencia, 2012.
- MORAL MORO, M., «Intervención de los terceros en el proceso de ejecución», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 41, 2017.
- MORALES MORENO, A., *Ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos de familia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
- «Guía sobre la ejecución en los procesos de familia», en *Iuris: Actualidad y práctica del derecho*, núm. 168, 2012, pp. 34-42.
- MORENO CATENA, V., *Tomo IV. La ejecución forzosa*, de CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., y MORENO CATENA, V. (Coordinadores), *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tecnos, Madrid, 2000.
- «Algunos problemas de la ejecución forzosa», en *AFDUAM*, núm. 5, 2001, pp. 187-200.
- «Ejecución forzosa de sentencias y ejecución provisional», en VV.AA., *El proceso en el siglo XXI y soluciones alternativas*, Centro de Estudios Jurídicos, Aranzadi, Cizur Menor, 2006.
- MORENO VELASCO, V., «La ejecución de las sentencias de nulidad, separación, divorcio y modificaciones de medidas. Una interpretación de los artículos 525.1.1, 774.5 y 777.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, núm. 7483, 2010.

- MORMENEO CORTES, M., «La ejecución provisional en las sentencias de condena en primera instancia», en *Revista Española de Seguros*, núm. 122, 2005, pp. 215-242.
- MUERZA ESPARZA, J., «Algunas consideraciones sobre la ejecución provisional y las medidas cautelares en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil de 1998», en *Anuario jurídico de La Rioja*, N° 5, 1999, pp. 141-172.
- «Algunas consideraciones sobre la ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Aranzadi civil: revista doctrinal*, núm. 3, 2000.
- «Comentario al Libro III: Título II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales», en CORDÓN MORENO, F., *et al.* (Coordinadores), *Comentarios a la Ley de enjuiciamiento civil. Volumen II*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.
- *La oposición a la ejecución provisional en el proceso civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013.
- MUÑOZ ARANGUREN, A., «Las posibilidades de oposición ante una ejecución provisional de condena dineraria instada por un litigante insolvente», en *Diario La Ley*, núm. 8041, 2013.
- NIEVA FENOLL, J., «La simplificación de la ejecución», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- «Ampliación de las posibilidades de anulación del laudo arbitral», en *Actualidad civil*, núm. 16, 2008.
- OCHOA MONZÓ, V., «La ejecución de las medidas dictadas en las sentencias de separación matrimonial, nulidad y divorcio al amparo del 774.5 LEC cuando se interpone recurso de apelación. ¿Ejecución provisional o ejecución forzosa?», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 12, 2005, pp. 19-27.
- ORRIOLS GARCIA, S., «La ejecución de la sentencia durante la pendencia del recurso de queja interpuesto contra la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 3-4, 2010, pp. 241-255.
- ORTEGO PÉREZ, F., «La caución procesal y su exigencia en supuestos concretos de la ejecución forzosa», en *Práctica de Tribunales*, núm. 95, 2012.
- ORTELLS RAMOS, M., *et al.*, *Derecho Procesal Civil*, Aranzadi, 10ª edición, Cizur Menor, 2010.
- ORTELLS RAMOS, M., *La ejecución de condenas no dinerarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, La Ley, Madrid, 2005.
- ORTUÑO NAVALÓN, M., «¿Existe una política judicial? Reflexiones sobre la nueva función jurisdiccional compartida: la reforma de la Oficina Judicial», en *Revista Internauta de Práctica Jurídica*, núm. 26, 2011, pp. 37-59.
- PARDO IRANZO, V., «¿Ejecución provisional del laudo?», en VV.AA., *Derecho, Historia y Universidades. Estudios dedicados a Mariano Peset. Volumen II*, Universitat de València, Valencia, 2007.
- «Valoración crítica de la reforma del proceso de ejecución del laudo arbitral», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 26, 2012, pp. 1-30.

- PÉREZ DAUDÍ, V., «La revisión de los Decretos del Secretario Judicial por el Tribunal», en *Diario La Ley*, núm. 7511, 2010.
- PÉREZ DE LA CRUZ OÑA, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil a debate», en *Diario La Ley*, núm. 6215, 2005.
- PÉREZ GORDO, A., *La ejecución provisional en el proceso civil*, Bosch, Barcelona, 1973.
- PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. y SEOANE SPIGELBERG, J., *Derecho Procesal Civil. Tomo II*, Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, 2006.
- PEÑALOZA FIGUEROA, J. y VÁRGAS PÉREZ, C., «¿Qué costes económicos y sociales comporta la ejecución de sentencias judiciales?», en *Cuadernos de Estudios Empresariales*, núm. 14, 2004, pp. 261-269.
- PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, 2ª edición, Barcelona, 2012.
- «Los derechos del ejecutante y del ejecutado en la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia: ¿por cuál optamos?», en *Justicia*, núm. 2, 2014, pp. 143-168.
 - «La ejecución provisional de sentencias de primera instancia. Estudio del conflicto entre los derechos al recurso y a la ejecución», en *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*, núm. 39, 2013, pp. 63-78.
 - «Conflicto entre garantías constitucionales del proceso. La tensión de los derechos al recurso y a la ejecución en el caso de la ejecución provisional de las sentencias de primera instancia», en PICÓ I JUNOY, J. (Director), *Principios y garantías procesales. Liber Amicorum en homenaje a la profesora Ma. Victoria Berzosa Francos*, Bosch, Barcelona, 2013.
 - «La ejecución procesal civil: ¿existe todavía alguna medida posible que permita mejorar su eficacia?», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- POU DE AVILÉS SANS, J., «Suspensión de una ejecución provisional mediante la adopción de una medida cautelar», en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 4, 2005, pp. 225-226.
- POZO FERNÁNDEZ, F., *La tutela jurisdiccional anticipada en el proceso civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2013.
- PUGA GÓMEZ, S., «La ejecución provisional de las costas», en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, núm. 16, 2006, pp. 207-209.
- PUIGCERVER ASOR, C., «1654. Sentencia de 14 de noviembre de 2002: Ejecución provisional de la condena a emitir una declaración de voluntad», en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, núm. 61, 2003, pp. 271-282.
- QUECEDO ARACIL, P., «Ejecución provisional. Comentarios a los artículos 524 a 537», en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. et al. (Coordinadores), *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Tomo II: Artículo 281 al 555*, Iurgium, Barcelona, 2000.
- QUIÑONEZ ESCAMES, A., «Nuevas normas comunitarias en materia de responsabilidad parental (Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de

- 27.11.2003), en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2004, disponible en http://www.indret.com/pdf/250_es.pdf.
- RAMOS ROMEU, F., «¿Reduce realmente la ejecución provisional la interposición de recursos injustificados?», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2006, disponible en www.indret.com/pdf/385_es.pdf.
- «¿Es deseable favorecer la ejecución provisional?», en *Justicia. Revista de Derecho Procesal*, núm. 1-2, 2008, pp. 213-261.
- REMÓN PEÑALVER, J., «Sobre la anulación del laudo: el marco general y algunos problemas», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 3, 2007, disponible en www.indret.com/pdf/444_es.pdf.
- REVERÓN PALENZUELA, B., «La ejecución provisional de sentencias recurridas en casación civil», en BONET NAVARRO, J. (Director) y MARTÍN PASTOR, J. (Coordinador), *El recurso de casación civil*, Aranzadi, Cizur Menor, 2010.
- REVILLA, F., «Sobre la devolución de la fianza prestada para la ejecución provisional de sentencia», en *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, núm. 3, 2001, pp. 2165-2167.
- RIFÁ SOLER, J., «Disposiciones generales de la ejecución. La ejecución provisional», en *Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales*, núm. 2, 2002, pp. 11-62.
- *Proceso de ejecución y registro de la propiedad*, La Ley, Madrid, 2013.
- RIPOL CARULLA, I., «La suspensión de la ejecución del laudo: Estudio del art. 45 LA», en *Justicia*, núm. 1, 2013, pp. 373-406.
- *La ejecución del laudo y su anulación. Estudio del artículo 45 LA*, Bosch, Barcelona, 2013.
- RIVES SEVA, J., «Ejecución provisional de laudos arbitrales», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 21, 2005, pp. 46-47.
- «Ejecución provisional de resoluciones referidas a indemnización de daños ocasionados en accidentes de tráfico», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 30, 2006, pp. 60-62.
- «Legitimación en la ejecución provisional de la sentencia penal en orden a la responsabilidad civil», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 30, 2006, p. 57.
- «¿Cuál es el momento inicial y final para la solicitud de ejecución provisional de una sentencia?», en *Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, núm. 66, 2009, pp. 59-60.
- RODRÍGUEZ BENOT, A., «La Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2016, pp. 234-259.
- «Caracteres generales de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil», en *Ars Iuris Salmanticensis*, núm. 4, 2016, pp. 289-292.
- RODRÍGUEZ, VÁZQUEZ, M., «Una nueva fórmula para la supresión del exequátur en la reforma del Reglamento Bruselas I», en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, núm. 1, 2014, pp. 330-347.

- ROVIRA SUEIRO, M., «La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva LEC», en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 6, 2002, pp. 643-661.
- RUIZ MORENO, J., «Reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de alimentos», en DE LA OLIVA SANTOS, A. (Director), *Derecho Procesal Civil Europeo. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea. Volumen I*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011.
- SALVADOR CODERCH, P., RAMOS GONZALEZ, S. y LUNA YERGA, A., «Poder de la prensa y derecho al honor. Comentario a la reforma del artículo 525 LEC», en *INDRET, Revista para el análisis del Derecho*, núm. 2, 2004, disponible en www.indret.com/pdf/214_es.pdf.
- SÁNCHEZ GIMENO, S., «La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal», en *Actualidad jurídica Uría Méndez*, núm. 31, 2012, pp. 39-52.
- SAN CRISTOBAL REALES, S., «La ejecución provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Anuario jurídico y económico escurialense*, núm. 33, 2000, pp. 79-111.
- «La protección jurisdiccional de los consumidores y usuarios en la ley de enjuiciamiento civil tras las modificaciones introducidas por la ley 39/2002», en *Anuario jurídico y económico escurialense*, núm. 38, 2005, pp. 41-92.
- SANTOS MARTÍNEZ, A., «La ejecución de las medidas acordadas en los procesos matrimoniales. Algunas propuestas de mejora», en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 33, 2014.
- SANTOS VIJANDE, J., «Sobre la ejecución provisional de condenas de no hacer: especial consideración de la oposición por motivos de fondo», en *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 3, 2011.
- SENÉS MOTILLA, C., *Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa*, La Ley, Madrid, 2000.
- SERRA DOMÍNGUEZ, M., *La Ley 1/2000 sobre Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2000.
- «La oposición a medidas ejecutivas concretas», en LÓPEZ LÓPEZ, E., y ALEGRET BURGÚÉS, M. (Directores), *La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia*, Estudios de Derecho Judicial, 44 – 2003, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.
- SILVOSA TALLÓN, J., «La ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero», en *Revista internauta de práctica jurídica*, núm. 20, 2007.
- TALÉNS VISCONTI, E., «El papel del secretario judicial con la nueva oficina judicial», en *Diario La Ley*, núm. 7886, 2012.
- TAPIA FERNÁNDEZ, I., *La cosa juzgada (Estudio de jurisprudencia civil)*, Dykinson, Madrid, 2010.
- TEMPRANO VÁZQUEZ, C., «La oposición a la ejecución provisional de condena dineraria. Análisis de la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación de los

- artículos 528.3 y 530.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Diario La Ley*, núm. 8759, 2016.
- TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., «Ejecución provisional (arts. 535 a 537)», en GARBÉRÍ LLOBREGAT, J. (Director), *Los procesos civiles: Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con formularios y jurisprudencia, Tomo III*, Bosch, 2ª edición, Barcelona, 2010.
- TRIGO SIERRA, E. y PÉREZ-PUJAZÓN MILLÁN, M., «Las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2015», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, núm. 42, 2016, pp. 31-44.
- UREÑA GUTIÉRREZ, P., «Cuestiones controvertidas en el proceso de ejecución (Análisis crítico y propuestas de reforma)», en UREÑA GUTIÉRREZ, P. (Director), *Análisis crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil: propuestas de mejora*, Manuales de Formación Continuada, 29 – 2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
- VALLESPÍN PÉREZ, D., «Ejecución provisional: costas en caso de revocación parcial (artículo 533 LEC)», en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 3-4, 2007, pp. 210-211.
- «La reversión de las condenas no dinerarias: especial referencia a las condenas de no hacer», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- VALLINES GARCÍA, E., «Ejecución provisional de condena en costas», en *Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal*, núm. 1, 1999, pp. 49-51.
- VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., *Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Difusión Jurídica, Madrid, 2009.
- VÁZQUEZ SOTELO, J., «Ejecución provisional y medidas cautelares», en MARTÍN ESPINO, J. (Coordinador), *El proceso civil y su reforma*, Colex, Madrid, 1998.
- «De la “*iurisdictio in sola notione consistit*” a la prevalencia de la ejecución», en RAMOS MÉNDEZ, F. (Director), *Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal*, Atelier, Barcelona, 2014.
- VEGAS TORRES, J., «La reforma procesal civil española. Criterios inspiradores y principales innovaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000», en DE LA OLIVA SANTOS, A. y PALOMO VÉLEZ, D. (Coordinadores), *Proceso civil. Hacia una nueva justicia civil*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007.
- VELÁZQUEZ MARTÍN, M., *La ejecución provisional en el proceso civil: en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, Dykinson, Madrid, 2003.
- VIDAL CARRASCO, J., «La oposición a la ejecución provisional de sentencias», en *La Toga*, núm. 147, 2004, pp. 29-30.
- VV.AA., «Conclusiones de las jornadas de los jueces de la AP de Madrid sobre unificación de criterios de aplicación de la LEC y especialmente sobre ejecución provisional», en *Diario La Ley*, núm. 6417, 2006.
- ZARAGOZÁ CAMPOS, J., «La ejecución en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en *Boletín del Ministerio de Justicia*, núm. 1895, 2001, pp. 2019-2050.

